RECURSO DE REPOSICIÓN EN SUBSIDIO APELACIÓN CONTRA AUTO DE TRASLADO MEDIDAS CAUTELARES-DEMANDANTE LUIS ILVAR PULIDO PINILLA- 20211031479532-20211031609811

juridica.ant <juridica.ant@ant.gov.co>

Lun 29/11/2021 3:42 PM

Para: Secretaria General Tribunal Administrativo - Seccional Villavicencio <sgtadmvcio@cendoj.ramajudicial.gov.co>

CC: carlos.vargas.bacci@gmail.com <carlos.vargas.bacci@gmail.com>; luchopulido20@gmail.com <luchopulido20@gmail.com>; luispulido3542@hotmail.com <luispulido3542@hotmail.com>; Proc. II Judicial Administrativa 49 <procjudadm49@procuraduria.gov.co>



La información contenida en este mensaje, y sus anexos, tiene caracter confidencial y esta dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podra ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinion oficial de ANT.
The information contained in this message and in any electronic files annexed thereto is confidential, and is intended for the use of the individual or entity to which it is addressed. If the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that retention, dissemination, distribution or copying of this e-mail is strictly prohibited. If you received this e-mail in error, please notify the sender immediately and destroy the original. Any opinions contained in this message are exclusive of its author and not necessarily represent the official position of ANT.

Bogotá D.C., 2021-11-29 14:56

Al responder cite este Nro.
20211031609811

H. Magistrada
NOHRA EUGENIA GALEANO PARRA
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META
sgtadmvcio@cendoj.ramajudicial.gov.co
Villavicencio - Meta

MEDIO DE CONTROL	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE	LUIS ILVAR PULIDO PINILLA
DEMANDADO	AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT
RADICACIÓN	50001-23-33-000-2021-00128-00
ASUNTO	RECURSO DE REPOSICIÓN EN SUBSIDIO APELACION AUTO DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 TRASLADO MEDIDA CAUTELAR

CARLOS HERNANDO VIVAS PEREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 76.328.360 de Popayán, abogado titulado con Tarjeta Profesional No. 194.129 del C.S.J, actuando en ejercicio del poder otorgado por el Jefe de la Oficina Jurídica de la Agencia Nacional de Tierras; por medio del presente escrito, en forma respetuosa y clara, me permito presentar recurso de reposición en subsidio apelación contra el auto de fecha 12 de noviembre de 2021 que ordeno correr traslado a la solicitud de medida cautelar del proceso de la referencia, el cual sustento de la siguiente manera:

1. El día 24 de noviembre de 2021, la Agencia Nacional de Tierras fue notificada mediante correo electrónico del Auto Admisorio de la demanda, emanado por el Tribunal Administrativo del Meta de fecha 12 de noviembre de 2021 en ejercicio de medio de control Nulidad y Restablecimiento del Derecho del Derecho en contra de la Agencia Nacional de Tierras – ANT, incoada mediante apoderado judicial por el señor Luis Ilvar Pulido Pinilla, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.523.930, con No. de Radicación del proceso 50001-23-33-000-2021-00128-00 al igual que el Auto que corre traslado de medida cautelar dentro del mismo medio de control emanado por el Tribunal Administrativo del Meta de fecha 12 de noviembre de 2021.

2. El objeto de la demanda tiene como fin que se declare la nulidad de la Resolución No. 6925 del 13 de agosto de 2020, a través de la cual se niega la solicitud de adjudicación del señor LUIS ILVAR PULIDO PINILLA, sobre el predio denominado *"San Felipe"*, ubicado en la vereda El Porvenir, municipio de Puerto Gaitán; Que se declare la Nulidad del acto ficto o presunto que se consolidó producto del silencio administrativo negativo de la parte demandada al no responder dentro de los términos legales el recurso de apelación interpuesto contra la resolución 6925 del 2020 y con el cual se agotó la vía gubernativa, además, solicita se declare que cumple con los requisitos legales para que se le adjudique el inmueble en mención.

Como consecuencia de lo anterior, solicita se le adjudique el predio denominado *"San Felipe"*, que hace parte de los predios *"El Pedregal"* y *"Mi Llanura"*, identificados con folios de matrícula inmobiliaria No. 234–8015 y 234–8007, de la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Puerto López. Así mismo, se ordene la inscripción de la sentencia que acceda a las pretensiones de la demanda en los folios de matrícula inmobiliaria mencionados.

3. Ahora bien, el día 25 de noviembre de 2021, la Agencia Nacional de Tierras fue notificada de la providencia del 18 de noviembre del 2021, emanada por el Tribunal Administrativo del Meta Sala de Decisión Oral No. 1, en relación con la demanda presentada en ejercicio de medio de control Nulidad y Restablecimiento del Derecho del Derecho mediante apoderado judicial por el señor Luis Ilvar Pulido Pinilla, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.523.930, con No. de Radicación del proceso 50001-23-33-000-2021-00241-00 en contra de la Agencia Nacional de Tierras, donde se resolvió:

> ***PRIMERO: RECHAZAR*** *la demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho presentada por LUIS ILVAR PULIDO PINILLA contra la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS, por caducidad, según las razones expuestas en la parte considerativa de este proveído.*
>
> ***SEGUNDO****: Una vez ejecutoriada esta providencia, como ha sido tramitado de manera netamente digital, archívese el expediente en la misma forma, dejando las constancias del caso y con las seguridades que ello exija*

Como argumentos la sala de decisión oral del Tribunal Administrativo del Meta tuvo los siguientes:

> *"En el caso concreto, tenemos que las pretensiones de la demanda están dirigidas a obtener la nulidad de la Resolución No. 6925 del 13 de agosto de 20202, a través de la cual se ordenó no iniciar la segunda fase de la parte administrativa del Procedimiento Único de Ordenamiento Social de la Propiedad para el reconocimiento de derechos de propiedad rural y, en consecuencia, negar la solicitud de adjudicación presentada por el señor LUIS ILVAR PULIDO PINILLA.*

Contra la anterior decisión, el 27 de agosto de 20203 se formuló recurso de apelación, ante lo cual, a través de Resolución No. 20204000291776 del 21 de diciembre de 20204, se confirmó el anterior acto administrativo; decisión que fue notificada el ***22 de diciembre de 2020****, según lo indicó el apoderado de la parte actora en su escrito de subsanación.*

Visto lo anterior, el demandante tenía como plazo máximo para impetrar la demanda el ***23 de abril de 2021****, sin embargo, el plazo se suspendió en virtud de la presentación de la solicitud de conciliación prejudicial, radicada el* ***27 de enero de 2021****, es decir, cuando faltaba* ***02 meses, 27 días****, y cuya constancia de haberse agotado el requisito de procedibilidad se expidió el* ***18 de marzo de 2021****, por tanto, el término se reanudó desde el día siguiente, con lo que se infiere que la demanda debió presentarse a más tardar el* ***15 de junio de 2021****, y como fue presentada el* ***01 de julio de 2021****, según la trazabilidad del correo remitido para reparto6, debe concluirse que se hizo por fuera del término que consagra el ordenamiento jurídico para el ejercicio oportuno de las pretensiones de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por lo cual se debe rechazar la misma de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 169 del CPACA.*

Ahora bien, se observa que el apoderado de parte actora informó en la subsanación de la demanda que, el 27 de octubre de 2020 se cumplieron los 2 meses para que la Dirección de Acceso a Tierras resolviera el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución No. 6925 del 2020, sin que la entidad demandada hubiera emitido pronunciamiento alguno en este lapso, por lo que operó el fenómeno jurídico del silencio administrativo negativo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 86 del CPACA".(…)

(…) "Si bien se hace mención a la normatividad del Código Contencioso Administrativo, ha de tenerse en cuenta que la modificación del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, únicamente se produjo frente a la notificación del auto admisorio de la demanda cuando el interesado haya acudido ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, como lapso con el que cuenta la administración para emitir el acto administrativo correspondiente, lo cual no varía las conclusiones efectuadas por el Consejo de Estado para el caso concreto.

De lo anterior, advierte la Sala que como en el presente asunto mediante Resolución No. 20204000291776 del 21 de diciembre de 2020, se confirmó lo decidido a través de la Resolución No. 6925 del 13 de agosto de 2020, y, si bien la primera de las mencionadas fue proferida por fuera del término legalmente conferido a la entidad demandada para su emisión, aquella corresponde al acto expreso de la administración que no posibilita la configuración del silencio administrativo negativo, y desde cuya notificación ha de realizarse el conteo del fenómeno jurídico de la caducidad, como atrás se describió.

De tal manera que, en el sub judice para cuando se acudió a la jurisdicción - presentación de la demanda- ya se había proferido y notificado el acto expreso, dentro de la oportunidad que el legislador le dio a la administración para cumplir su deber aunque ya hubiese transcurrido el término de dos (2) meses para que operara el silencio administrativo negativo procesal, por ende la tesis expuesta por el apoderado de la parte actora sobre el acto ficto para impedir que opere la caducidad en el asunto, queda sin sustento".

Es importante hacerle ver al despacho que esa demanda donde se rechaza por caducidad, presentada por el señor Luis Ilvar Pulido en contra de la Agencia Nacional de Tierras con radicado No. 50001-23-33-000-2021-00241-00 a través del mismo apoderado judicial tiene idéntica similitud en relación con el objeto, igual causa e identidad jurídica de las partes con esta objeto del recurso, por lo que se deberán aplicar los mismos argumentos jurídicos que tuvo el Tribunal Administrativo del Meta en sala de decisión de 18 de noviembre de 2021 al rechazarla por caducidad, al presente proceso, más aun cuando su señoría hizo parte de la sala de decisión enunciada.

Solicitud

Teniendo en cuenta lo anterior le solicito al despacho, negar la medida cautelar solicitada por la parte actora ya que como se indicó existe otro proceso fundado en el mismo objeto, con igual causa e identidad jurídica de las partes en ambos asuntos que fue rechazado por caducidad por el Tribunal Administrativo del Meta.

Pruebas

En ejercicio del derecho de defensa y contradicción frente a la medida cautelar solicitada se allegan los siguientes documentos que sustentan lo expuesto en los acápites precedentes:

1. Demanda presentada por el apoderado judicial del señor Luis Ilvar Pulido Pinilla dentro del proceso con radicado No 50001-23-33-000-2021-00241-00 que se encuentra en el aplicativo TYBA.

2. Providencia de 18 de noviembre de 2021, donde el Tribunal Administrativo del Meta resolvió rechazar la demanda del Nulidad y Restablecimiento del Derecho con radicado No 50001-23-33-000-2021-00241-00, presentada por el apoderado judicial del señor Luis Ilvar Pulido Pinilla en contra de las Agencia Nacional de Tierras.

Anexos

Comedidamente me permito allegar:

1. Copia de la demanda presentada por el apoderado judicial del señor Luis Ilvar Pulido Pinilla dentro del proceso con radicado No 50001-23-33-000-2021-00241-00 que se encuentra en el aplicativo TYBA.

2. Copia de la providencia de 18 de noviembre de 2021, donde el Tribunal Administrativo del Meta resolvió rechazar la demanda del Nulidad y Restablecimiento del Derecho presentada por el apoderado judicial del

señor Luis Ilvar Pulido Pinilla en contra de las Agencia Nacional de Tierras.

3. El respectivo poder conferido por el Jefe de la Oficina Jurídica de la Agencia Nacional de Tierras - ANT

Notificaciones

El ente accionado Agencia Nacional de Tierras - ANT, recibirá notificaciones y comunicaciones en el correo electrónico: jurídica.ant@ant.gov.co

El suscrito recibirá comunicaciones en los correos electrónicos: carlosvivasp@gmail.com y/o carlos.vivas@ant.gov.co

Atentamente,



CARLOS HERNANDO VIVAS PEREZ
C.C. 76.328.360 de Popayán
T.P. No. 194.129 del CSJ

Bogotá D.C., 2021-11-25 21:25

Al responder cite este Nro.
20211031596511

Documento Firmado Digitalmente
El presente documento contiene una firma digital válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la ley 527 de 1999.
Agencia Nacional de Tierras

RCgMtS-vhXE1S-hHkb-C4Ek-oSWm

H. Magistrada
NOHRA EUGENIA GALEANO PARRA
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META
sgtadmvcio@cendoj.ramajudicial.gov.co
Villavicencio - Meta

Referencia:

ASUNTO	OTORGAMIENTO DE PODER
MEDIO DE CONTROL	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE	LUIS ILVAR PULIDO PINILLA
DEMANDADO	AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS
RADICACIÓN	50 001 23 33 000 2021 00128 00

JOSÉ RAFAEL ORDOSGOITÍA OJEDA, identificado con la cédula de ciudadanía No 1.032.405.689, con Tarjeta Profesional No 217.212 del Consejo Superior de la Judicatura, nombrado mediante Resolución No. 19386 del 27 de octubre de 2020 y Acta de posesión No. 065 del 3 de noviembre de 2020, actuando en calidad de Jefe de la Oficina Jurídica de la Agencia Nacional de Tierras – ANT, agencia estatal de naturaleza especial, creada mediante el Decreto 2363 de 2015 y de conformidad con la delegación de funciones señalada en la Resolución 292 de 13 de marzo de 2017; confiero poder amplio y suficiente al abogado titulado y en ejercicio **CARLOS HERNANDO VIVAS PEREZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 76.328.360 de Popayán, portador de la Tarjeta Profesional No. 194.129 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, para que represente a la Agencia Nacional de Tierras - ANT dentro del proceso de la referencia.

Para el buen uso de su gestión, el apoderado tendrá todas las facultades propias del mandato, así como las demás consagradas en los artículos 75 y 77 del Código General del Proceso.

El presente poder no requiere presentación personal de conformidad a lo preceptuado en el artículo 5 del decreto 806 del 4 de junio de 2020.

Adicionalmente y de conformidad con los artículos 56 y 67 de la Ley 1437 de 2011, manifiesto el interés de la Agencia Nacional de Tierras de ser notificada al correo electrónico jurídica.ant@agenciadetierras.gov.co.

El campo es de todos

Documento Firmado Digitalmente
El presente documento contiene una firma digital válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la ley 527 de 1999.

Atentamente,

José R. Ordosgoitia O.

JOSÉ RAFAEL ORDOSGOITÍA OJEDA
Jefe Oficina Jurídica

Acepto,



CARLOS HERNANDO VIVAS PEREZ
C.C. 76.328.360 de Popayán
T.P. No. 194.129 del CSJ
carlosvivasp@gmail.com
carlos.vivas@ant.gov.co

RCgMtS-vhXE1S-hHkb-C4Ek-oSWm

Libertad y Orden

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT

RESOLUCIÓN No. 19386 **DE 2020**

(27 OCT 2020)

"Por el cual se hace un nombramiento ordinario"

LA DIRECTORA GENERAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS

En uso de las facultades legales y en especial las que le confiere la Ley 909 de 2004, el numeral 23 del artículo 11° del Decreto Ley No. 2363 de 2015, el Decreto No. 419 de 2016 y demás normas concordantes, y

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 909 de 2004, los empleos de libre nombramiento y remoción serán provistos por nombramiento ordinario, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del empleo y el procedimiento allí establecido.

Que mediante Decreto No. 419 del 07 de marzo de 2016, el Gobierno Nacional estableció la planta de personal de la Agencia Nacional de Tierras – ANT.

Que en cumplimiento del Decreto No.1083 de 2015, para verificar las capacidades y competencias laborales de la persona aspirante al cargo, el Departamento Administrativo de la Función Pública como Entidad experta en la selección de personal las avaló y expidió resultado satisfactorio para su nombramiento; igualmente en aplicación del principio de transparencia la hoja de vida del aspirante fue publicada durante tres (3) días en la página web de la Presidencia de la República y la página web de la Agencia Nacional de Tierras.

Que el señor **JOSE RAFAEL ORDOSGOITIA OJEDA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.032.405.689, cumple los requisitos exigidos en el Manual de Funciones y Competencias Laborales para ocupar el cargo de libre nombramiento y remoción denominado Jefe de Oficina de Agencia, Código G1, Grado 06, perteneciente a la Oficina Jurídica de la Agencia Nacional de Tierras.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Nombrar con carácter ordinario a **JOSE RAFAEL ORDOSGOITIA OJEDA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.032.405.689, en el empleo de libre nombramiento y remoción denominado Jefe de Oficina de Agencia, Código G1, Grado 06, perteneciente a la Oficina Jurídica de la Agencia Nacional de Tierras.

ARTÍCULO SEGUNDO. El nombramiento realizado en el artículo primero de la presente Resolución surtirá efectos fiscales a partir de la fecha de posesión de la servidora.

"Por el cual se hace un nombramiento ordinario"

ARTÍCULO TERCERO. Las funciones que cumplirá el servidor serán las establecidas en la Resolución No. 1999 del 07 de febrero de 2019 y sus adiciones y/o modificaciones, según corresponda para el empleo.

ARTÍCULO CUARTO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D. C. a los 27 días de octubre del 2020.

MYRIAM CAROLINA MARTÍNEZ CÁRDENAS
Directora General

Aprobó: Carlos Alberto Salinas Sastre – Secretario General
VoBo.: Martha Amador / Carolina Merchán – Abogadas Secretaria General
Revisó: Marina Segura Saenz - Subdirectora de Talento Humano
VoBo.: Annie Carolina Araujo Gallo – Abogada Despacho Dirección General.
Proyectó: Paula Miranda Bohórquez Botero - STH

ACTA DE POSESIÓN NÚMERO 065

FECHA: 03 DE NOVIEMBRE DE 2020

En virtud de lo dispuesto en la Resolución No. 19386 del veintisiete (27) de octubre de 2020, por medio de la cual se hace un nombramiento ordinario en la Agencia Nacional de Tierras – ANT, se presentó el señor **JOSE RAFAEL ORDOSGOITIA OJEDA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.032.405.689, en el empleo Libre Nombramiento y Remoción, denominado Jefe de Oficina de Agencia Código G1 Grado 6 de la Oficina Jurídica de la Agencia Nacional de Tierras, ubicado en la ciudad de Bogotá D.C., cuya asignación básica mensual es de NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($9.683.481.oo), en el cual fue nombrado con efectos fiscales a partir de la fecha de la firma de la presente acta.

Prestó el juramento ordenado por el articulo 122 de la Constitución Política de Colombia.

Manifestó bajo la gravedad de juramento no estar incurso en causal alguna de inhabilidad general o especial, de incompatibilidad o prohibición alguna establecida en la Ley 4 de 1992 y demás disposiciones vigentes para el desempeño de empleos públicos.

José R. Ordosgoitia O.

EL(A) POSESIONADO(A)

CARLOS ALBERTO SALINAS SASTRE
Secretario General

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.032.405.689
ORDOSGOITIA OJEDA

APELLIDOS
JOSE RAFAEL

NOMBRES

FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA

NOTARIA DE CHINU
ESTA DILIGENCIA SE
HACE A RUEGO E
INSISTENCIA DEL USUARIO

COMO NOTARIA UNICA DEL CIRCULO
DE CHINU - CORDOBA
HAGO CONSTAR QUE ESTA FOTOCOPIA COINCIDE
CON SU ORIGINAL QUE HE TENIDO A LA VISTA
19 DIC. 2014
NOTARIA UNICA DEL CIRCULO
DE CHINU - CORDOBA
Leslie Mercado de Bula

REPUBLICA DE COLOMBIA
Leslie Mercado de Bula
NOTARIA UNICA DE CHINU - CORDOBA



FECHA DE NACIMIENTO 30-NOV-1987
CHINU
(CORDOBA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 ESTATURA
A+ G.S. RH
M SEXO

20-FEB-2006 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1301600-00302235-M-1032405689-20110520 0027017304A 1 35968302

Libertad y Orden

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS

RESOLUCIÓN No. 292

(13 MAR 2017)

"Por la cual se compilan unas resoluciones de asignación y delegación de funciones y se dictan otras disposiciones"

LA DIRECTORA GENERAL (E) DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT

En ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial la que le confieren los artículos 209 y 211 de la Constitución Política, los artículos 9º y 11 de la Ley 489 de 1998, la Ley 80 de 1993, la Ley 160 de 1994, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1753 de 2015, el Decreto 111 de 1996, el Decreto Ley 2363 de 2015; y,

C O N S I D E R A N D O

Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.

Que el artículo 211 ídem prescribe que la delegación exime de responsabilidad al delegante, la cual corresponderá exclusivamente al delegatario, cuyos actos o resoluciones podrá siempre reformar o revocar aquel, reasumiendo la responsabilidad consiguiente.

Que el artículo 9 de la Ley 489 de 1998 dispone que las autoridades administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y de conformidad con la presente ley, podrán mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o complementarias.

Que el artículo antes citado señala que sin perjuicio de las delegaciones previstas en leyes orgánicas, en todo caso, los ministros, podrán delegar la atención y decisión de los asuntos a ellos confiados por la ley y los actos orgánicos respectivos, en los empleados públicos de los niveles directivo y asesor vinculados al organismo correspondiente, con el propósito de dar desarrollo a los principios de la función administrativa enunciados en el artículo 209 de la Constitución Política y en la presente ley.

Que el Director de la Agencia Nacional de Tierras es el Representante Legal de la Agencia, al tenor de lo previsto en el artículo 10º del Decreto Ley 2363 de 2015.

"Por la cual se compilan unas resoluciones de asignación y delegación de funciones y se dictan otras disposiciones"

Que el artículo 12 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 21 de la Ley 1150 de 2007 establece que: *"Los jefes y los representantes legales de las entidades estatales podrán delegar total o parcialmente la competencia para celebrar contratos y desconcentrar la realización de licitaciones en los servidores públicos que desempeñen cargos del nivel directivo o ejecutivo o en sus equivalentes"*

Que conforme a lo previsto en el artículo 110 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, la Agencia Nacional de Tierras, tiene la autonomía presupuestal a que se refieren la Constitución Política y la ley para contratar, comprometer y ordenar el gasto de los recursos aprobados en la Ley de Presupuesto y además prevé que: "Estas facultades estarán en cabeza del jefe de cada órgano quien podrá delegarse en funcionarios del nivel directivo o quien haga sus veces, y serán ejercidas teniendo en cuenta las normas consagradas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y en las disposiciones legales vigentes"

Que el artículo 38 del Decreto 2363 de 2015 dispuso que, a partir de su entrada en vigencia, todas las referencias normativas hechas al INCODER en relación con el ordenamiento social de la propiedad rural debían entenderse referidas a la Agencia Nacional de Tierras - ANT-.

Que, en ejercicio de las facultades antes mencionadas, la Agencia Nacional de Tierras expidió las Resoluciones 029 de 2016, 045 de 2016, 081 de 2016, 135 de 2016, 136 de 2016 las cuales se compilan en la presente Resolución con el fin de facilitar su consulta y el cumplimiento de los principios de eficacia, economía y celeridad en la gestión de la Entidad.

Que, por otra parte, por ministerio de los artículos 26 de la Ley 1151 y 56 de la Ley 1152 de 2007, modificatorios del artículo 20 de la Ley 160 de 1994, se asignó al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER la competencia para administrar un subsidio integral de tierras diseñado para impulsar de manera conjunta los programas de acceso a la propiedad rural y las políticas de desarrollo agropecuario, permitiendo mediante su otorgamiento la cobertura de hasta el 100% del valor de la propiedad rural y de los requerimientos financieros necesarios para la implementación de los proyectos productivos presentados por los campesinos que resultaran seleccionados en las convocatorias abiertas por la administración para estos efectos.

Que los Decretos 4984 de 2007; 4800 de 2008 y 2000 de 2009, así como los Acuerdos 138 de 2008 y 209 de 2010 expedidos en su momento por el Consejo Directivo del INCODER se ocuparon de señalar los criterios de elegibilidad y selección, las modalidades del subsidio, el procedimiento para su materialización y los mecanismos de pago.

Que en consonancia con la doble finalidad perseguida por el Subsidio Integral de Tierras, se consagraron los referidos reglamentos y procedimientos para la materialización de los componentes de acceso a tierra y desarrollo rural, previendo respecto del primero el giro a favor de los propietarios de los predios adquiridos a través de la asignación estatal e instituyendo, en cuanto al segundo, la creación de cuentas bancarias de manejo compartido entre los respectivos beneficiarios y los Directores Territoriales del INCODER.

Que en ejercicio de las atribuciones descritas, el INCODER realizó entre los años 2008 y 2013, a través de sus Direcciones Territoriales, convocatorias para el otorgamiento de Subsidios Integrales de Tierra (SIT) que a la fecha se encuentran en proceso de

"Por la cual se compilan unas resoluciones de asignación y delegación de funciones y se dictan otras disposiciones"

materialización, ora respecto del componente de acceso a tierras, ora en lo tocante al proyecto productivo financiado mediante la asignación estatal.

Que el Decreto No. 2363 de 2015, expedido por el Gobierno Nacional en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 1753 de 2015, creó la Agencia Nacional de Tierras y fijó su objeto y estructura, estableciéndose en el artículo 4° numerales 8 y 12 *ejusdem* las funciones de *"Otorgar el Subsidio Integral de Reforma Agraria, conforme a las políticas y lineamientos fijados por el Gobierno Nacional" y "Hacer el seguimiento a los procesos de acceso tierras adelantados por la Agencia, en cualquiera de sus modalidades y aquellos que fueron ejecutados por el Incoder o por el Incora, en los casos en los que haya lugar".*

Que conforme al artículo 6 del Decreto No. 2363 de 2015 dentro la estructura organizacional de la Dirección de Acceso a Tierras se encuentran comprendidas la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas, la Subdirección de Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión y la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación.

Que el numeral 1 del artículo 24 del Decreto No. 2363 del 2015 establece como función de la Subdirección de Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión la de "*Adelantar y decidir los procedimientos y actuaciones administrativas de acceso a tierras, adjudicación de subsidio integral de reforma agraria, titulación baldíos, adjudicación de bienes fiscales patrimoniales y adjudicación bienes en cumplimiento de los programas especiales de dotación tierras fijados por el Gobierno Nacional, que a la fecha de entrada en operación la Agencia Nacional de Tierras se encuentren en trámite y no hayan sido resueltos por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural.*"

Que el numeral 2 del artículo 24 del Decreto No. 2363 del 2015 establece como función de la Subdirección de Acceso a por Demanda y Descongestión la de *"Adelantar y decidir los procedimientos y actuaciones administrativas de acceso a tierras en materia de adjudicación de subsidio integral de reforma agraria, adjudicación de baldíos, bienes fiscales patrimoniales y programas especiales de dotación de tierras fijados por Gobierno Nacional, que se inicien por demanda fuera de las zonas focalizadas por Ministerio Agricultura y Desarrollo Rural.*

Que las funciones relacionadas con la culminación de los procedimientos administrativos de acceso a tierras por vía del otorgamiento del Subsidio Integral de Tierras (SIT) adelantadas por el extinto INCODER en el marco de las convocatorias 2008-2011, no fueron asignadas expresamente a ninguna de las direcciones o dependencias que conforman la Agencia Nacional de Tierras, resultando oportuno, conveniente y necesario que el Director General, en ejercicio de la facultad que le confiere el ya citado artículo 11 numeral 18 del Decreto 2363 de 2015, las asigne mediante el presente acto administrativo.

Que es necesario compilar y racionalizar las Resoluciones mediante las cuales se han asignado o delegado funciones para contar con un documento único de consulta de esas y las otras disposiciones que se dictan por esta Resolución.

En mérito de lo expuesto,

R E S U E L V E

"Por la cual se compilan unas resoluciones de asignación y delegación de funciones y se dictan otras disposiciones"

Artículo Primero. - Delegar en el Jefe de la Oficina Jurídica de la Agencia Nacional de Tierras, las siguientes funciones:

1. La de representar legalmente a la Agencia Nacional de Tierras o la de designar mandatarios que representen a la Agencia Nacional de Tierras en asuntos judiciales, extrajudiciales y procesos administrativos a nivel nacional en los que sea parte o tercero interesado, para la defensa de sus intereses. La función de representación legal o de designación de mandatarios, incluirá las siguientes facultades:

a) Otorgar poderes para la atención de los asuntos antes señalados.
b) Constituir apoderados generales o especiales con las facultades de Ley para conocer de los procesos o revocarlos.
c) Actuar e interponer recursos
d) Notificarse de las demandas
e) Transigir, conciliar judicial o extrajudicialmente o desistir conforme a los lineamientos y decisiones adoptadas por el Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Agencia Nacional de Tierras.
f) Participar en la práctica de los medios de prueba o contradicción que se estimen pertinentes.
g) Atender, en nombre de la Agencia Nacional de Tierras, los requerimientos judiciales o de autoridad administrativa relacionado con los asuntos derivados de la función delegada.
h) Constituir representantes legales especiales, entre otras cuestiones para que estos, con facultades para conciliar, asistan a las audiencias de conciliación, especialmente las que se realicen en los procesos laborales, conforme a los lineamientos y decisiones adoptadas por el Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Agencia Nacional de Tierras, de las cuales se rendirán informes por escrito.
i) Iniciar los medios de control y las acciones judiciales que fueren procedentes para la defensa judicial de la Agencia Nacional de Tierras.
j) Iniciar, adelantar y llevar hasta su culminación las acciones de lesividad.
k) Tramitar ante la dependencia correspondiente el cumplimiento de los fallos judiciales, conciliaciones y laudos arbitrales proferidos con anterioridad o posterioridad a la vigencia del presente acto administrativo, en los cuales hubiere resultado condenado directamente la Agencia Nacional de Tierras.
l) Hacerse parte en los procesos de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional o de Nulidad ante el Consejo de Estado que promuevan contra normas del Sector Administrativo Agricultura y contra los actos administrativos de carácter general proferidos por la Agencia Nacional de Tierras.
m) Notificarse de los autos admisorios de demandas o de inicio de acciones judiciales contra la Agencia Nacional de Tierras.

2. La Ordenación del Gasto, sin límite de cuantía, para el cumplimiento de Sentencias y Conciliaciones.

Artículo Segundo. - Delegar en el Director de Acceso a Tierras de la Agencia Nacional de Tierras, las siguientes funciones:

1. Suscribir a nombre de la Agencia Nacional de Tierras, las ofertas de compra, los contratos de promesa de compra venta y los contratos de compraventa de aquellos predios que reúnan las condiciones técnicas y jurídicas para ser adquiridos mediante negociación directa en los casos establecidos en los

"Por la cual se compilan unas resoluciones de asignación y delegación de funciones y se dictan otras disposiciones"

literales b y c del artículo 31 de la Ley 160 de 1994, modificado por el artículo 27 de la Ley 1151 de 2007.
2. Solicitar la inscripción de las escrituras públicas protocolizadas en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos de los círculos registrales correspondientes.
3. Reconocer y ordenar el gasto de los impuestos prediales de los bienes inmuebles del Fondo Nacional Agrario.
4. Las demás facultades, trámites y gestiones inherentes para ejercer cabalmente la delegación, incluyendo la ordenación del gasto hasta 5000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

PARÁGRAFO: Para adelantar los correspondientes procedimientos de compra directa, el Director de la Dirección de Acceso a Tierras previamente deberá consultar los recursos financieros de los que disponga la Agencia Nacional de Tierras a fin de contar con el respaldo presupuestal para tal fin, así como el procedimiento señalado en la Resolución 291 de 2017, artículo Cuarto, y las que la modifiquen, aclaren o sustituyan.

Artículo Tercero. - Asignar al Subdirector de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas:

1. Las competencias, funciones y atribuciones necesarias para adelantar, decidir y culminar los procedimientos administrativos de acceso a tierras por vía del ordenamiento del Subsidio Integral Directo de Reforma Agraria – SIDRA – a las familias focalizadas y priorizadas en el marco del Acuerdo 310 de 2013, proferido por el Consejo Directivo del INCODER EN LIQUIDACIÓN.

2. Las competencias, funciones y atribuciones necesarias para adjudicar el Subsidio Integral de Reforma Agraria – SIRA -

3. Las competencias, funciones y atribuciones necesarias para asegurar la materialización de los Subsidios Integrales de Tierras (SIT), en favor de los beneficiarios de las convocatorias adelantadas por el liquidado INCODER bajo el marco de los artículos 26 la Ley 1151 y 56 de la Ley 1152 de 2007, los Decretos 4984 de 2007; 4800 de 2008 y 2000 de 2009, los Acuerdos 138 de 2008 y 209 de 2010, así como de cualquier otra que se hubiere efectuado durante las vigencias correspondientes a los años 2008 a 2013.

PARÁGRAFO: La asignación de funciones en materia de Subsidio integral de Tierras SIT – Subsidio Integral Directo de Reforma Agraria SIDRA y Subsidio Integral de Reforma Agraria SIRA, conllevan la delegación de la ordenación del gasto.

Artículo Cuarto. - Delegar en el Director de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras, las siguientes funciones:

1. Suscribir a nombre de la Agencia Nacional de Tierras, las ofertas de compra, los contratos de promesa de compra venta y los contratos de compraventa de aquellos predios que reúnan las condiciones técnicas y jurídicas para ser adquiridos mediante negociación directa en beneficio de comunidades indígenas y afrocolombianas de conformidad con la legislación vigente.
2. Solicitar la inscripción de las escrituras públicas protocolizadas en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos de los círculos registrales correspondientes.
3. Reconocer y ordenar el gasto de los impuestos prediales de los bienes inmuebles adquiridos en beneficio de comunidades indígenas y afrocolombianas de conformidad con la legislación vigente.

"Por la cual se compilan unas resoluciones de asignación y delegación de funciones y se dictan otras disposiciones"

4. Los demás facultades, trámites y gestiones inherentes para ejercer cabalmente la delegación, incluyendo la ordenación del gasto hasta por 5000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

PARÁGRAFO: Para adelantar los correspondientes procedimientos de compra directa, el Director de Asuntos Étnicos previamente deberá consultar los recursos financieros de los que disponga la Agencia Nacional de Tierras a fin de contar con el respaldo presupuestal para tal fin, así como el procedimiento señalado en la Resolución 291 de 2017, artículo Cuarto, y las que la modifiquen, aclaren o sustituyan.

Artículo Quinto. - Delegar en el Secretario General de la Agencia Nacional de Tierras, las siguientes funciones:

1. Ordenar la apertura y dirigir la realización de procesos contractuales, celebrar todo tipo de contrato o convenio, realizar todas las actividades vinculadas a la etapa precontractual y contractual y comprometer recursos y ordenar el gasto a nombre de la Agencia Nacional de Tierras, sin límite de cuantía, en todos los casos en que no haya una delegación para un tema específico.
2. Posesionar a los funcionarios de la planta permanente y temporal de la Agencia Nacional de Tierras.
3. Conferir comisión de servicios y de estudios a los funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras, al interior y exterior del país de conformidad con la normatividad vigente sobre la materia, así como reconocer y ordenar el pago de los viáticos, gastos de viaje y el suministro de tiquetes si a ello hubiere lugar.
4. Autorizar el viaje de contratistas, cuando con los mismos se busque el cumplimiento de una obligación contractual dentro del territorio colombiano o fuera de este; se haya previsto en el respectivo contrato; y se cuente con la previa autorización del supervisor, así como reconocer y ordenar el pago de los gastos de desplazamiento, gastos de viaje y el suministro de tiquetes a que haya lugar.
5. Adelantar y suscribir todos los actos que se requieran para el manejo de los bienes de propiedad de la Agencia Nacional de Tierras, tales como baja de bienes del inventario, transferencia, traspaso y enajenación, entre otros.
6. Suscribir los contratos de apertura de las cuentas de ahorro y corriente de la Agencia Nacional de Tierras ante las entidades bancarias, así como las demás actuaciones que se requieran para su administración.
7. Expedir los actos administrativos internos de modificación presupuestal.
8. Representar legalmente a la Agencia Nacional de Tierras, para todo efecto, ante las Cajas de Compensación Familiar, Empresas Promotoras de Salud, Administradoras de Fondo de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales y Fondo Nacional de Ahorro.
9. Conceder permisos sindicales mediante acto administrativo.
10. Suscribir lo actos administrativos que se requieran para el normal funcionamiento de la Secretaría General, sus Subdirecciones y de los grupos de trabajo que se creen en la Agencia de conformidad con la normatividad vigente sobre la materia.

Artículo Sexto. - Delegar en el Subdirector de Talento Humano de la Agencia Nacional de Tierras, las siguientes funciones:

1. Expedir los actos administrativos que autoricen las situaciones administrativas del personal de planta de la Agencia Nacional de Tierras – ANT – tales como:

"Por la cual se compilan unas resoluciones de asignación y delegación de funciones y se dictan otras disposiciones"

a) Permisos remunerados hasta por tres (3) días, previo visto bueno del superior inmediato.
b) Permisos de estudio o de ejercicio de docencia, previo visto bueno del superior inmediato.
c) Licencias de maternidad o paternidad.
d) Licencias por luto.
e) Licencias no remuneradas.
f) Vacaciones, aplazamientos, interrupciones y el reanude de las mismas.
g) Autorización de Horas Extras, dominicales y festivos.

2. Reconocer y ordenar el gasto de los conceptos asociados a las funciones de la Subdirección de Talento Humano, tales como:

a) Servicios personales asociados a nómina y aportes parafiscales.
b) Contribuciones inherentes a la nómina Sector privado y público.
c) Transferencias de previsión y seguridad social
d) Auxilios educativos e incentivos.
e) Certificación mensual de cesantías.
f) Liquidación de prestaciones sociales definitivas de ex servidores públicos.

3. Representar a la Agencia Nacional de Tierras – ANT en la suscripción de los formularios de afiliación al Sistema de Seguridad Social, Caja de Compensación Familiar y Fondo Nacional de Ahorro, de los funcionarios de la Agencia, de conformidad con la normatividad vigente sobre la materia.

4. Expedir las certificaciones de verificación del cumplimiento de requisitos mínimos para el desempeño de empleos públicos de la Entidad.

5. Expedir las certificaciones laborales y de tiempo de servicio de servidores y ex servidores, así como las confirmaciones de información de historia laboral que sean requeridas.

6. Expedir las certificaciones de información laboral con destino a la expedición de certificados de bono pensional o cuotas partes pensionales a favor de servidores y ex servidores de la entidad.

7. Expedir las certificaciones de insuficiencia de personal de conformidad con la normatividad vigente sobre la materia.

Artículo Séptimo. - Delegar en el Subdirector Administrativo y Financiero de la Agencia Nacional de Tierras, las siguientes funciones:

1. Fungir como Administrador SIIF en tanto no se delegue en otro funcionario.

2. Autorizar el pago, sin límite de cuantía, de los gastos que previamente hayan sido ordenados o solicitados con el cumplimiento de los procedimientos, trámites y requisitos legales y contractuales vigentes.

3. Diligenciar los formatos y documentación para trámites financieros registros de usuarios botón PSE, formatos de trámites de apertura, terminación y sustitución de cuentas ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

"Por la cual se compilan unas resoluciones de asignación y delegación de funciones y se dictan otras disposiciones"

4. Suscribir los formatos para asignación de Tókens, asignación de claves para acceder al SIIF nación.

5. Elaborar, administrar y actualizar el Plan Anual de Adquisiciones.

6. Fungir como Usuario Administrador de los portales Bancarios.

7. Ordenar la apertura, reembolso y legalización de las cajas menores.

8. Reconocer y ordenar el gasto, sin límite de cuantía, de servicios públicos domiciliarios, telefonía móvil, suscripciones e impuestos, tasas y contribuciones de los bienes inmuebles que hagan parte del patrimonio de la Agencia Nacional de Tierras, exceptuando los del Fondo Nacional Agrario.

11. Ordenar el gasto, sin límite de cuantía, para las órdenes de compra en las operaciones secundarias de los Acuerdos Marco de Precios.

12. Suscribir las declaraciones de cambio, para compra de divisas, los oficios de Instrucciones para Bancos para la formalización de Inversiones forzosas, y los oficios a remitirse al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, reportando las operaciones y estado de las inversiones tanto mensuales como trimestrales, dando cumplimiento al Decreto 1525 de 2008 o la norma que lo modifique sustituya o derogue.

Artículo Octavo. - Corresponde a los asignatarios y delegatarios ejercer las atribuciones asignadas o delegadas conforme a las disposiciones legales vigentes que regulan la materia y responder en los términos de la Constitución Política y de la Ley.

Artículo Noveno. - Por motivos de conveniencia y necesidad del servicio, el Director General podrá en cualquier tiempo reasignar la competencia asignada o reasumir lo delegado, así como revisar los actos expedidos con sujeción a las disposiciones del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley 734 de 2002.

Artículo Décimo. - La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y subroga las resoluciones 029 de 2016, 045 de 2016, 081 de 2016, 135 de 2016 y 136 de 2016.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá, D.C. a los

13 MAR 2017

ELIZABETH GOMEZ SANCHEZ
Directora General (E)

Aprobó: Elizabeth Gómez Sánchez Secretaria General
Revisó: Natalia Hincapié – Jefe Ofician Jurídica
Preparó: Tatiana Oñate/ Daissy Patiño – Asesoras Secretaría General

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 76.328.360

VIVAS PEREZ

APELLIDOS

CARLOS HERNANDO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 25-FEB-1978

POPAYAN
(CAUCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

18-ABR-1996 POPAYAN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-1108800-36159968-M-0076328360-20071122

02279 07326P 02 237797092

306670

REPUBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

TARJETA PROFESIONAL DE ABOGADO



194129
Tarjeta No.

30/08/2010
Fecha de Expedicion

11/06/2010
Fecha de Grado

CARLOS HERNANDO
VIVAS PEREZ

76328360
Cedula

CAUCA
Consejo Seccional

DEL CAUCA
Universidad

Francisco Escobar Henriquez
Presidente Consejo Superior de la Judicatura

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META

Villavicencio, dieciocho (18) de noviembre de dos mil veintiuno (2021)

SALA DE DECISIÓN ORAL No. 1

MAGISTRADA PONENTE: CLAUDIA PATRICIA ALONSO PÉREZ

RADICACIÓN:	**50 001 23 33 000 2021 00241 00**
M. DE CONTROL:	**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**
DEMANDANTE:	**LUIS ILVAR PULIDO PINILLA**
DEMANDADO:	**AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS**

Vistos los anteriores diligenciamientos, procede la sala a ocuparse de la demanda que en ejercicio del medio de control con pretensiones de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, fue presentada a través de apoderado judicial, por LUIS ILVAR PULIDO PINILLA contra la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS.

ANTECEDENTES

La parte demandante presentó demanda en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho con el objeto de que se declare[1] la nulidad de la Resolución No. 6925 del 13 de agosto de 2020, a través de la cual se niega la solicitud de adjudicación del señor LUIS ILVAR PULIDO PINILLA, sobre el predio denominado *"San Felipe"*, ubicado en la vereda El Porvenir, municipio de Puerto Gaitán; así como del acto ficto que negó el recurso de apelación interpuesto contra el anterior acto administrativo, que se consumó el 27 de octubre del 2020 y/o la Resolución No. 20204000291776 del 12 de diciembre de 2020, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación contra la Resolución No. 6925 de 2020. Además, solicita se declare que cumple con los requisitos legales para que se le adjudique el inmueble en mención.

Como consecuencia de lo anterior, solicita se le adjudique el predio denominado *"San Felipe"*, que hace parte de los predios *"El Pedregal"* y *"Mi Llanura"*, identificados con folios de matrícula inmobiliaria No. 234–8015 y 234–8007, de la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Puerto López. Asimismo, se ordene la inscripción de la sentencia que acceda a las pretensiones de la demanda en los folios de matrícula inmobiliaria mencionados.

CONSIDERACIONES

En principio, se tiene que el rechazo de la demanda procede por las causas señaladas en el artículo 169 del C.P.A.C.A, descritas de la siguiente manera:

> *"ARTÍCULO 169. RECHAZO DE LA DEMANDA. Se rechazará la demanda y se ordenará la devolución de los anexos en los siguientes casos:*

[1] Pág. 24-25. Ver documento "07AGREGARMEMORIAL.PDF", registrado en la fecha y hora 23/09/2021 10:07:46 P. M., consultable en la plataforma Tyba. Documento 06 SharePoint.

*1. **Cuando hubiere operado la caducidad**.*
2. Cuando habiendo sido inadmitida no se hubiere corregido la demanda dentro de la oportunidad legalmente establecida.
3. Cuando el asunto no sea susceptible de control judicial." (Negrilla intencional)

De tal manera que, si en el estudio de admisibilidad de la demanda el administrador de justicia advierte el cumplimiento de uno o varios de los casos relacionados, deberá disponer el rechazo de esta, y, en tratándose de los numerales 1 y 3, tal decisión procederá de plano.

En relación con la caducidad, previamente debe decirse que este fenómeno se configura cuando el plazo establecido en la Ley para ejercer el derecho de acción, ha vencido, por ende, puede decirse que esta es la sanción que consagra la Ley por el no ejercicio oportuno de ese derecho, en tanto al exceder los plazos preclusivos para acudir a la jurisdicción, se ve limitado el derecho que le asiste a toda persona de solicitar que sea definido un conflicto por el aparato jurisdiccional del poder público.

El Consejo de Estado, ha insistido en toda su jurisprudencia sobre este tema, precisando que la caducidad ha sido instituida en el ordenamiento jurídico para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, puesto que se erige como una sanción cuando el titular de la acción judicial no lo hace oportunamente, y es por esto que la parte actora tiene la carga procesal de promover el litigio dentro del plazo fijado por la ley, de lo contrario, pierde la posibilidad de accionar ante la jurisdicción.

Pues bien, con relación al medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, como el que hoy nos ocupa, el numeral 2, literal d), del artículo 164 del C.P.A.C.A establece que *"…cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las excepciones establecidas en otras disposiciones legales".* (subraya fuera del texto)

En el caso concreto, tenemos que las pretensiones de la demanda están dirigidas a obtener la nulidad de la Resolución No. 6925 del 13 de agosto de 2020[2], a través de la cual se ordenó no iniciar la segunda fase de la parte administrativa del Procedimiento Único de Ordenamiento Social de la Propiedad para el reconocimiento de derechos de propiedad rural y, en consecuencia, negar la solicitud de adjudicación presentada por el señor LUIS ILVAR PULIDO PINILLA.

Contra la anterior decisión, el 27 de agosto de 2020[3] se formuló recurso de apelación, ante lo cual, a través de Resolución No. 20204000291776 del 21 de diciembre de 2020[4], se confirmó el anterior acto administrativo; decisión que fue notificada el **22**

[2] Pág. 291-322. Ver documento "04OFICINADEAPOYOAGREGAANEXOS.PDF", registrado en la fecha y hora 6/07/2021 5:48:43 P. M., consultable en la plataforma Tyba. Documento 01 SharePoint.
[3] Pág. 260-262 y 265-290. Ibidem.
[4] Pág. 332-367. Ibidem.

de diciembre de 2020, según lo indicó el apoderado de la parte actora en su escrito de subsanación.

Visto lo anterior, el demandante tenía como plazo máximo para impetrar la demanda el **23 de abril de 2021**, sin embargo, el plazo se suspendió en virtud de la presentación de la solicitud de conciliación prejudicial, radicada el **27 de enero de 2021**, es decir, cuando faltaba **02 meses, 27 días**, y cuya constancia de haberse agotado el requisito de procedibilidad se expidió el **18 de marzo de 2021**[5], por tanto, el término se reanudó desde el día siguiente, con lo que se infiere que la demanda debió presentarse a más tardar el **15 de junio de 2021**, y como fue presentada el **01 de julio de 2021**, según la trazabilidad del correo remitido para reparto[6], debe concluirse que se hizo por fuera del término que consagra el ordenamiento jurídico para el ejercicio oportuno de las pretensiones de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por lo cual se debe rechazar la misma de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 169 del CPACA.

Ahora bien, se observa que el apoderado de parte actora informó en la subsanación de la demanda que, el 27 de octubre de 2020 se cumplieron los 2 meses para que la Dirección de Acceso a Tierras resolviera el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución No. 6925 del 2020, sin que la entidad demandada hubiera emitido pronunciamiento alguno en este lapso, por lo que operó el fenómeno jurídico del silencio administrativo negativo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 86 del CPACA.

En efecto, el artículo 86 del CPACA, señala lo siguiente:

> ***"ARTÍCULO 86. SILENCIO ADMINISTRATIVO EN RECURSOS.*** *Salvo lo dispuesto en el artículo 52 de este Código, transcurrido un plazo de dos (2) meses, contados a partir de la interposición de los recursos de reposición o apelación sin que se haya notificado decisión expresa sobre ellos, se entenderá que la decisión es negativa.*
>
> *El plazo mencionado se suspenderá mientras dure la práctica de pruebas.*
>
> *La ocurrencia del silencio negativo previsto en este artículo no exime a la autoridad de responsabilidad,* ***ni le impide resolver siempre que no se hubiere notificado auto admisorio de la demanda cuando el interesado haya acudido ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo****.*
>
> *La no resolución oportuna de los recursos constituye falta disciplinaria". (Subraya y negrilla intencional)*

Al respecto, frente a la figura del silencio administrativo, el Consejo de Estado ha señalado lo siguiente[7]:

> *"El silencio administrativo es un fenómeno en virtud del cual la ley contempla que, en determinados casos, a la falta de decisión de la Administración frente a peticiones o recursos elevados por los administrados, se le da un efecto que puede*

[5] Pág. 327-329. Ibidem.
[6] Ver documento "03OFICINADEAPOYOAGREGAANEXOS.PDF", ibidem. Documento 02 SharePoint.
[7] Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Providencia del 4 de junio de 2020. Rad: 05001-23-33-000-2015-00995-01 (22910). CP: Stella Jeannette Carvajal Basto.

ser negativo o positivo. Ese efecto se conoce como acto ficto o presunto pues, aunque en tales eventos no existe una decisión expresa que contenga la voluntad de la Administración frente al asunto que ha sido sometido a su consideración, la Ley le da al silencio de la Administración unos efectos similares a los del acto administrativo expreso. La razón de ser del fenómeno del silencio administrativo es la de evitar que los asuntos que la Administración debe resolver queden sin decidir de manera indefinida.

En el caso del silencio negativo, le abre al interesado la posibilidad de demandar el acto ficto negativo, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, para que le sea resuelta la situación, sin que deba esperar de manera indefinida una solución al respecto, y de esta manera poderle garantizar la efectividad de sus derechos.

/…/

El silencio administrativo negativo configura una ficción legal denominada acto ficto o presunto, que no es más que la presunción de una negativa de la administración por el hecho de no haber resuelto la petición. Ese acto no configura una respuesta, por lo que la Administración no queda eximida de responder, excepto cuando el afectado ha interpuesto los recursos contra dicho acto o cuando habiendo acudido ante la jurisdicción contencioso administrativa, se haya notificado auto admisorio de la demanda". (Subraya intencional)

Y, específicamente cuando se ha emitido un pronunciamiento por parte de la administración luego de transcurrido el término legal para resolver la correspondiente petición o recurso, el Consejo de Estado ha señalado lo siguiente[8]:

"A este respecto, es pertinente precisar que, independientemente de la responsabilidad disciplinaria que pudiere deducírsele a las autoridades o a los servidores públicos que inobservaren el deber de dar oportuna respuesta a las peticiones y recursos , habrá lugar a la configuración del silencio administrativo y, por tanto, del correspondiente acto administrativo ficto o presunto en todos aquellos eventos en que la administración no resuelva o no decida el fondo de la petición que le ha sido elevada, lo cual incluye los casos en los cuales la respuesta que se brinde a la petición correspondiente resulte puramente formal o de trámite, pero sin adoptar decisión, así como los casos en que expedida la decisión, esta no se notifica en la forma y con el lleno de las exigencias legales (artículos 44 y 45 C.C.A.), puesto que la falta de notificación o su irregularidad le impide al acto respectivo la generación de sus efectos.

En ese orden, destáquese que el acto ficto o presunto opera tanto en relación con la petición inicial, cuestión que da lugar a la configuración del denominado silencio administrativo sustancial o inicial, como en relación con los recursos que se interponen en debida forma en la vía gubernativa contra actos administrativos previos -expresos o presuntos-, caso éste en el cual se denomina silencio administrativo procesal o adjetivo. Último que corresponde a los hechos de la demanda sub lite.

Ahora bien, en lo tratante al silencio administrativo negativo, tanto sustancial como procesal, conforme al marco jurídico, debe ponerse de presente que (i) opera por ministerio de la Ley, pues no requiere declaración judicial que lo reconozca, lo que significa a su vez que (ii) el sólo vencimiento del plazo consagrado en la ley como requisito para que opere no libera a la administración de la obligación constitucional de resolver la solicitud, cuestión que, a la vez, sirve para poner de presente que ello no significa que el silencio administrativo negativo obre de manera automática, por la sola expiración del plazo consagrado como requisito para que opere, comoquiera que se trata de una garantía consagrada a favor del peticionario, de donde quedará a voluntad de éste determinar su efectiva configuración a partir de la conducta que decida emprender, ***puesto que queda a su elección la opción***

[8] Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección B. Providencia del 7 de septiembre de 2018. Rad: 08001-23-31-000-1998-00658-01(37570). CP: Stella Conto Díaz del Castillo.

de esperar un pronunciamiento expreso de la administración, que puede realizarse en cualquier momento mientras la administración conserve la competencia para ello y que, de darse, excluye per se la opción de que se llegue a configurar un acto administrativo ficto o presunto *o; por el contrario, dejar de esperar y dar por configurado el respectivo silencio, bien porque hubiere procedido a interponer, en debida forma, los recursos pertinentes en la vía gubernativa contra el correspondiente acto ficto o presunto o bien porque hubiere procedido a demandar la declaratoria de nulidad de dicho acto administrativo presunto ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.*

Ahora bien, para la configuración del silencio administrativo negativo de carácter procesal o adjetivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 del C.C.A., se requiere el vencimiento de un plazo de dos meses que iniciará a computarse a partir de la interposición en debida forma, en vía gubernativa, de los recursos correspondientes contra un acto administrativo previo, sin que durante ese término la administración hubiere proferido y notificado decisión expresa que los decida.

Cabe destacar también que el vencimiento del término legalmente establecido para la decisión de los recursos interpuestos en vía gubernativa, no exime a la autoridad administrativa de la obligación constitucional y legal de resolverlos, mientras el particular no haya acudido ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Señala la norma:

> *"ARTÍCULO 60. Modificado por el art. 7, Decreto Nacional 2304 de 1989 Transcurrido un plazo de dos (2) meses contado a partir de la interposición de los recursos de reposición o apelación sin que se haya notificado decisión expresa sobre ellos, se entenderá que la decisión es negativa.*
>
> *El plazo mencionado se interrumpirá mientras dure la práctica de pruebas.*
>
> *La ocurrencia del silencio administrativo negativo previsto en el inciso 1º no exime a la autoridad de responsabilidad; ni le impide resolver mientras no se haya acudido ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo" – se destaca-*

Es por ello que ***esta Sección ha considerado que si después de transcurridos los dos meses siguientes a la interposición de los recursos administrativos el recurrente continúa esperando a que la administración le de contestación, la notificación de dicho pronunciamiento expreso de la administración excluye la posibilidad de que se llegue a configurar un acto administrativo ficto o presunto****. Pero, si por el contrario, el interesado opta por dejar de esperar la respuesta que no ha recibido e interpone los recursos de la vía gubernativa "(…) en contra del acto ficto o instaura la demanda contencioso administrativa encaminada a obtener la declaratoria de nulidad del acto administrativo presunto, entonces habrá preferido dar por configurado el silencio administrativo".* (Negrilla y subraya intencional)

Si bien se hace mención a la normatividad del Código Contencioso Administrativo, ha de tenerse en cuenta que la modificación del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, únicamente se produjo frente a la notificación del auto admisorio de la demanda cuando el interesado haya acudido ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, como lapso con el que cuenta la administración para emitir el acto administrativo correspondiente, lo cual no varía las conclusiones efectuadas por el Consejo de Estado para el caso concreto.

De lo anterior, advierte la Sala que como en el presente asunto mediante Resolución No. 20204000291776 del 21 de diciembre de 2020, se confirmó lo decidido a través de la Resolución No. 6925 del 13 de agosto de 2020, y, si bien la primera de las mencionadas fue proferida por fuera del término legalmente conferido a la entidad demandada para su emisión, aquella corresponde al acto expreso de la administración

que no posibilita la configuración del silencio administrativo negativo, y desde cuya notificación ha de realizarse el conteo del fenómeno jurídico de la caducidad, como atrás se describió.

De tal manera que, en el *sub judice* para cuando se acudió a la jurisdicción -presentación de la demanda- ya se había proferido y notificado el acto expreso, dentro de la oportunidad que el legislador le dio a la administración para cumplir su deber aunque ya hubiese transcurrido el término de dos (2) meses para que operara el silencio administrativo negativo procesal, por ende la tesis expuesta por el apoderado de la parte actora sobre el acto ficto para impedir que opere la caducidad en el asunto, queda sin sustento.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo del Meta, en Sala de Decisión,

RESUELVE:

PRIMERO: **RECHAZAR** la demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho presentada por LUIS ILVAR PULIDO PINILLA contra la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS, por caducidad, según las razones expuestas en la parte considerativa de este proveído.

SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, como ha sido tramitado de manera netamente digital, archívese el expediente en la misma forma, dejando las constancias del caso y con las seguridades que ello exija

Esta providencia fue discutida y aprobada en Sala de Decisión Oral No. 1 celebrada el 18 de noviembre de 2021, según Acta No. 079, y se firma de forma electrónica.

Firmado Por:

Claudia Patricia Alonso Perez
Magistrado
Mixto 005
Tribunal Administrativo De Villavicencio - Meta

Carlos Enrique Ardila Obando
Magistrado
Mixto 002

Tribunal Administrativo De Villavicencio - Meta

Nohra Eugenia Galeano Parra
Magistrada
Mixto
Tribunal Administrativo De Villavicencio - Meta

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
f2909fc8fbd81220065d71da7c82d6c12368a807def19b463f18e9085b015f0a
Documento generado en 24/11/2021 02:54:54 PM

Valide este documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

Señores Honorables Magistrados
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META (REPARTO)
Villavicencio.

REF: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Y/O - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS SOBRE ADJUDICACIÓN DE BALDÍOS.
DTE: LUIS ILVAR PULIDO PINILLA.
DDO: AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - LA DIRECCIÓN DE ACCESO A TIERRAS DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - LA SUBDIRECCIÓN DE ACCESO A TIERRAS EN ZONAS FOCALIZADAS DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS.

LUIS ILVAR PULIDO PINILLA, mayor de edad, vecino del municipio de Puerto Gaitán, actuando en nombre propio, en mi condición de ocupante del predio baldío denominado Corocoras, ubicado en la Vereda El Porvenir del Municipio de Puerto Gaitán, identificada civilmente como aparece al pie de mí firma; con correo electrónico luchopulido20@gmail.com y luispulido3542@hotmail.com por medio del presente escrito confiero poder especial amplio y suficiente al **Dr. CARLOS DANIEL VARGAS BACCI**, persona mayor de edad, vecina de la ciudad de Villavicencio, abogado inscrito y en ejercicio, identificado civil y profesionalmente como aparece al pie de su correspondiente firma, con correo electrónico carlos.vargas.bacci@hotmail.com, para que en mi nombre y representación inicie y lleve hasta su culminación proceso administrativo en ejercicio del medio de control de la **NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Y/O -RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS SOBRE ADJUDICACIÓN DE BALDÍOS,** contra la **AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS** representada por la Directora Dra. MYRIAM MARTÍNEZ CÁRDENAS, o por quien la reemplace o haga sus veces - **LA DIRECCIÓN DE ACCESO A TIERRAS DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS** representada por su Director Dr. JUAN MANUEL NOGUERA MARTÍNEZ, o por quien lo remplace o haga sus veces - **LA SUBDIRECCIÓN DE ACCESO A TIERRAS EN ZONAS FOCALIZADAS DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS** representada por la Dra. JULIA ELENA VENEGAS GOMEZ, o por quien la remplace o haga sus veces; entidades de derecho público, del orden nacional, con correo electrónico para notificaciones

jurídica.ant@agenciadetierras.gov.co, para que; previos los trámites legales; se declare la **NULIDAD de la resolución número 6925 del 13 de agosto del 2020, "CON LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE ADJUDICACIÓN DE BALDÍOS DENTRO DEL PREDIO DE MAYOR EXTENSIÓN DENOMINADO EL PORVENIR, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META Y SE ORDENAN OTRAS ACTUACIONES";** y como consecuencia de esa declaratoria, se reconozcan los derechos como ocupante legitima del predio baldío denominado SAN FELIPE ubicado en la vereda El Porvenir del Municipio de Puerto Gaitán, cuyos linderos aparecen en la referida resolución; se reconozca que cumplo con los requisitos legales para que se me adjudique dicho predio de acuerdo con la ley 160 de 1994 y se me adjudique el derecho de propiedad en la sentencia que en derecho se ha de proferir; o en su defecto; se ordene a la demandada realizar la adjudicación del predio baldío a mi nombre y además para represente y defienda todos mis derechos e intereses jurídicos, económicos y sociales en el ejercicio de este mandato y del proceso que se deberá tramitar.

Otorgo a mi representante judicial la facultad de recibir, conciliar, transigir, desistir, sustituir, reasumir y todas las demás facultades inherentes al mandato legal consagradas en el artículo 77 del C. G. P.; sírvase reconocerle personería para actuar.

Atentamente;



LUIS ILVAR PULIDO PINILLA
C. C. No. 79.523.930

Acepto;



CARLOS DANIEL VARGAS BACCI
C. C. No. 17.321.780 de V/cio.
T. P. No. 84.436 del C S J.

Señores Honorables Magistrados
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META (REPARTO)
Villavicencio.

REF: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Y/O -RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS SOBRE ADJUDICACIÓN DE BALDÍOS.
DTE: LUIS ILVAR PULIDO PINILLA.
DDO: AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - LA DIRECCIÓN DE ACCESO A TIERRAS DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - LA SUBDIRECCIÓN DE ACCESO A TIERRAS EN ZONAS FOCALIZADAS DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS.

CARLOS DANIEL VARGAS BACCI, persona mayor de edad, vecina de la ciudad de Villavicencio, abogado inscrito y en ejercicio, identificado civil y profesionalmente como aparece al pie de mi correspondiente firma, actuando en nombre y representación del señor **LUIS ILVAR PULIDO PINILLA**, persona también mayor de edad, vecina del municipio de Puerto Gaitán, quien actúa en nombre propio, de acuerdo con el poder que adjunto, donde se identifica civilmente; acudo ante este Tribunal para presentar demanda administrativa en el ejercicio del medio de control de la Nulidad y Restablecimiento del Derecho - y/o - Resolución de Controversias sobre Adjudicación de Baldíos contra la **AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS** representada por la Directora Dra. MYRIAM MARTÍNEZ CÁRDENAS, también mayor de edad, vecina de la ciudad de Bogotá D. C. o por quien la reemplace o haga sus veces - **LA DIRECCIÓN DE ACCESO A TIERRAS DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS** representada por su Director Dr. JUAN MANUEL NOGUERA MARTÍNEZ, también mayor de edad, vecino de la ciudad de Bogotá D. C. o por quien lo remplace o haga sus veces - **LA SUBDIRECCIÓN DE ACCESO A TIERRAS EN ZONAS FOCALIZADAS DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS** representada por la Dra. JULIA ELENA VENEGAS GOMEZ, también mayor de edad, vecina de la ciudad de Bogotá D. C. o por quien la remplace o haga sus veces; entidades de derecho público, del orden nacional, en forma comedida y respetuosa comparezco ante esta Honorable Corporación, para exponer los siguientes

HECHOS

1. El señor **LUIS ILVAR PULIDO PINILLA** radicó ante el extinto INCODER, el 17 de marzo del 2016, una solicitud de adjudicación de un predio baldío de la Nación.

2. El predio solicitado en adjudicación por el señor **LUIS ILVAR PULIDO PINILLA,** fue denominado SAN FELIPE y está ubicado en la vereda de El Porvenir del Municipio de Puerto Gaitán – Departamento del Meta, con una cabida de 828 Hectáreas + 6901 m 2.

3. La ocupación que el señor **LUIS ILVAR PULIDO PINILLA** realiza en el predio SAN FELIPE comenzó desde el 13 de julio del 2.010.

4. Para el año 2.010, fecha en que comenzó la ocupación, como para el año 2.016, fecha en que se radicó la solicitud de adjudicación ante el INCODER, la Unidad Agrícola Familiar (UAF) vigente para el municipio de Puerto Gaitán, es de hasta 920 hectáreas, según la resolución número 041 de 1996 expedida por **LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA "INCODER"** y que corresponde a la **Zona Relativamente Homogénea No. 7 -Sabanas 2**.

5. La resolución 041 de 1996; en lo que corresponde a la Unidad Agrícola Familiar UAF; para el municipio de Puerto Gaitán, vereda el Porvenir, **NO HA SIDO MODIFICADA**.

6. El INCODER a través de unos convenios administrativos suscritos con el Departamento del Meta y que ejecutaba en el departamento del Meta la Corporación para el Fomento Social de Colombia **"COFESCO",** cuyo objeto era la legalización de la propiedad rural del Departamento del Meta, hizo el levantamiento topográfico del terreno que ocupaba el señor LUIS ILVAR PULIDO PINILLA denominado SAN FELIPE, para que fuera anexado a la solicitud de adjudicación que se radicó.

7. El 26 de mayo del 2015 se expidió el decreto 1075 que reglamentó la ley 160 de 1.994 y en sus capítulos cuarto y quinto se reglamentaron los requisitos para la adjudicación de los predios baldíos y el procedimiento administrativo a aplicar, respectivamente.

8. La Agencia Nacional de Tierras tiene publicado en su página web los requisitos para la adjudicación de predios baldíos, de acuerdo con el decreto 1071 del 2015. Se anexa copia de la publicación.

9. Para el 7 de diciembre del año 2015 el Gobierno Nacional mediante el decreto 2365 suprimió el INCODER y ordeno su liquidación.

10. El mismo 7 de diciembre del año 2015 el Gobierno Nacional creo la Agencia Nacional de Tierras mediante el decreto 2366.

11. Según la información suministrada por el Director del Proyecto de Titulación de COFESCO; **DR. CARLOS EMILIO ROMERO GOMEZ**, para esa época, las solicitudes de adjudicación, luego de la revisión documental que ya se había tramitado habían sido enviadas al INCODER – BOGOTÁ para que se revisaran los levantamientos topográficos y se expidieran su correspondiente viabilidad y aprobación, para proceder a programar la inspección ocular.

12. La Agencia Nacional de Tierras, para el año 2016, ordenó recoger todas los tramites de adjudicación que se adelantaban en todas la seccionales del territorio nacional para concentrar el trámite administrativo de manera directa desde la ANT nivel central.

13. Efectivamente la ANT recogió, físicamente, todas las solicitudes de adjudicación que se encontraban en trámite en las oficinas de la Regional Meta.

14. Inexplicablemente todas las solicitudes de trámite de adjudicación de baldíos que se encontraban en trámite administrativo en virtud de los convenios suscritos entre el INCODER y el Departamento del Meta, no fueron recogidas, a pesar que se encontraban en el mismo edificio donde funcionaba el Incoder, en la oficina donde operaba el convenio.

15. Para el día 20 de febrero del 2018 la ANT envió al municipio de Villavicencio, el trasporte para recoger todas las solicitudes que habían quedado pendientes, entre ellas la carpeta o expediente del señor **LUIS ILVAR PULIDO PINILLA** con un memorando para estos efectos dirigido a la Gobernación del Meta.

16. La ANT después de haber recogido la solicitud de adjudicación del poderdante **LUIS ILVAR PULIDO PINILLA** de la seccional Meta, no dio ninguna continuidad a ese trámite administrativo de adjudicación

sobre el predio SAN FELIPE que fuera legalmente radicada ante el INCODER.

17. Para el año 2014 el **INCODER** mediante la resolución número 6423, y a través de una revocatoria directa, deja sin ningún valor ni efecto las resoluciones de adjudicación que durante el año 1992 había realizado a 27 ciudadanos, declarando todos estos terrenos como **"BALDÍOS DE LA NACIÓN".**

18. Las razones expuestas en la referida resolución se concretan en que las adjudicaciones realizadas no cumplieron con los requisitos legales que para la época estaban vigentes, tanto de la calidad de los beneficiarios, en la verdadera y legitima ocupación sobre los predios y en la explotación económica.

19. Dentro de las adjudicaciones revocadas se encuentra la resolución número 030 del 15 de Enero de 1.992, que corresponde a los predios EL PEDREGAL, adjudicado al señor EDUARDO VILLARRAGA, que se identifica con el número de matrícula inmobiliaria No. 234 – 8015 y MI LLANURA, adjudicado al señor HUGO ARMANDO BUSTOS BERNAL, mediante la resolución número 022 del 15 de Enero de 1.992, que se identifica con el número de matrícula inmobiliaria No. 234 – 8007.

20. La resolución 6423 del 2014 fue inscrita en los folios de matrícula inmobiliaria 234 – 8015 y 234 - 8007, que corresponden al predio denominado EL PEDREGAL y MI LLANURA; donde se reporta; para todos los efectos legales; que son predios baldíos de la Nación, sin ninguna restricción o reserva y que volvieron al patrimonio del estado en virtud de la revocatoria directa contenida en dicha resolución (6423 del 2014).

21. La ocupación y explotación económica que el señor **LUIS ILVAR PULIDO PINILLA** desarrolla en el predio denominado SAN FELIPE; solicitado en adjudicación; afecta o se desarrolla sobre en los predios baldíos denominados EL PEDREGAL y MI LLANURA, con números de matrícula inmobiliaria 234 – 8015 y 234 - 8007.

22. Para el año 2016 la Honorable Corte Constitucional emite la sentencia SU 426 del 2016 donde se ordena:

a. La constitución de una nueva mesa de trabajo interinstitucional para solucionar la situación del derecho a la tierra y el territorio de la comunidad campesina de El Porvenir, e incorporar los siguientes parámetros para lograr ese cometido.

i. Establecer si en los predios baldíos de que trata la resolución No. 6423 del 2014 continúa haciendo presencia la empresa ganadera "La Cristalina", ya sea en forma directa o a través de terceros.

ii. ***Censar a la población ocupante de los terrenos baldíos consignados en la resolución 6423 del 2014 y definir quienes serias sujetos de reforma agraria, de acuerdo con lo dispuesto en la ley 160 de 1.994.*** (Lo subrayado es de quien escribe)

iii. Realizar un intercambio de información entre el INCODER y la Unidad de Tierras, de manera que sea posible establecer que parte de El Porvenir se encuentra en el trámite de restitución, cual debe ingresar a ese proceso, y cual seguirá el cauce del trámite administrativo de adjudicación.

iv. Advertir al INCODER o a quien haga sus veces acerca de su obligación de evaluar los requisitos de reforma agraria, de manera que no se imponga a los peticionarios una carga que no pueden cumplir por negligencia y corrupción estatal. Es decir, debido a la permisión del Estado a la apropiación de El Porvenir por parte de un actor privado poderoso, en perjuicio de un amplio número de familias campesinas, según los hechos descritos en esta providencia. ***Bajo esta perspectiva, el Instituto deberá adelantar e impulsar hasta su culminación el proceso de adjudicación de bienes baldíos, de que trata la ley 160 de 1994 y sus respectivas normas reglamentarias.*** (Lo resaltado es de quien escribe).

23. La referida sentencia SU 426 del 206 no reconoció en su parte resolutiva derechos sobre los "Ocupantes Históricos" ni tampoco lo hizo dentro de los considerandos de la comentada sentencia.

24. El Señor **LUIS ILVAR PULIDO PINILLA** teniendo en cuanta que no había respuesta de fondo que resolviera la solicitud de adjudicación

radicada el 24 de marzo del 2016, con 15 personas más, interpusieron una acción de tutela, de la cual conoció el Juzgado de Familia de Puerto López, radicada con el número 505733184001 2018 00024 00.

25. El fallo de primera instancia proferida por el Juzgado de Familia de Puerto López; en la acción de tutela interpuesta; de fecha 24 de abril del 2018 amparó los derechos fundamentales invocados y le ordenó a la ANT que en un término perentorio de dos (2) meses, se resolviera de fondo la solicitud radicada por todos los tutelantes, entre ellas el ciudadano **LUIS ILVAR PULIDO PINILLA**, reconociéndolos como ocupantes legítimos de cada uno de los predios que ocupan y además ordenando resolver de fondo las solicitudes de adjudicación radicadas ante el INCODER, de acuerdo con la ley 160 de 1994 y demás normas complementarias, por ser la norma vigente y aplicable.

26. El fallo de primera instancia fue apelado por la ANT y fue confirmado por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior de Villavicencio.

27. En el trámite ante la Corte Constitucional el fallo de tutela remitido no fue escogido por esa Corporación para su revisión, quedado en firme.

28. Pasados **DOS (2) años** sin que se cumplieran las ordenes contenidas en el fallo de tutela, los amparados por las ordenes emitidas; entre ellas el señor **LUIS ILVAR PULIDO PINILLA** iniciaron el incidente de desacato correspondiente.

29. El día 11 de Agosto del 2020, el Juzgado de Familia de Puerto López, emitió el fallo dentro del incidente de desacato sancionando al Director de Acceso a Tierras y al Subdirectora de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas de la ANT; declarando el desacato y sancionándolos con diez (10) días de arresto y tres (3) meses del salario que devengan en sus cargos.

30. El fallo del incidente de desacato fue notificado a los sancionados el día 12 de agosto del 2020.

31. El día 13 de Agosto del presente año 2020, la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas emitió las 16 resoluciones de los tutelantes, entre ellas la del señor **LUIS ILVAR PULIDO PINILLA** que le correspondió la Numero 6925 del 2020.

32. La resolución 6925 del 2020 le fue notificada al señor **LUIS ILVAR PULIDO PINILLA** vía correo electrónico el día 14 de Agosto del 2020.

33. La referida resolución 6925 resolvió de fondo la petición de adjudicación radicada por el señor **LUIS ILVAR PULIDO PINILLA** sobre predio baldío **SAN FELIPE NEGANDO LA ADJUDICACIÓN.**

34. La Resolución 6925 del 13 de Agosto del presente año; fundamentó su negativa a la adjudicación con los siguientes criterios de fondo:

34.1 Se dice respecto de la **"Competencia"**, que ella le corresponde; de acuerdo con el artículo 40 del decreto Ley 902 del 2017; a la subdirección de acceso a tierras en zonas focalizadas y se expone igualmente que mediante un memorando se ordenó entregar a esa dependencia el predio denominado "El Porvenir"

34.2 Da por cierto la existencia de un predio solo denominado "El Porvenir" con una cabida de más de 25.000 hectáreas, que resulto producto de las revocatorias directas contenidas en la resolución 6423 del 2014 emitida por el INCODER.

34.3 Califica el predio denominado "El Porvenir" como un "Bien Baldío reservado de la Nación" y para ello expone varias situaciones jurídicas.

34.4 Además, afirma que el referido predio El Porvenir es un predio que fue focalizado por la Agencia Nacional de Tierras para los efectos de su adjudicación y por ello asume la competencia para el trámite de resolver de fondo sobre la adjudicación del señor **LUIS ILVAR PULIDO PINILLA** la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas.

34.5 Así mismo se afirma que el predio "SAN FELIPE" que fue solicitado en adjudicación ante el INCODER por el señor **LUIS ILVAR PULIDO PINILLA** hace parte integral o está incorporado dentro del predio El Porvenir y que corresponde a una Zona Focalizada.

34.6 Para decidir de fondo la solicitud de adjudicación radicada el día 17 de marzo del 2016 ante el extinto INCODER por el señor **LUIS ILVAR PULIDO PINILLA,** sobre el predio "SAN FELIPE" se dio aplicación integral al decreto 902 de 2017 y no a la ley 160 de 1.994.

34.7 Se afirma que la sentencia SU 426 del 2016, proferida por la Honorable Corte Constitucional **NO** aplica o beneficia al señor **LUIS ILVAR PULIDO PINILLA.**

34.8 Se cita igualmente como antecedente jurídico el fallo de tutela número T – 00024 de 2018 proferido por el Juzgado Circuito de Familia de Puerto López.

34.9 Se afirma que la UAF para efectos de adjudicación del predio El Porvenir no supera las 100 hectáreas de acuerdo con un estudio agrologico que se realizó por parte de la ANT para esos efectos particulares del predio El Porvenir.

34.10 Se dice: ***"Que mediante Resolución No. 6423 del 30 de Julio de 2014, el Subgerente de Tierras Rurales del extinto Incoder, dispuso la revocatoria en todas sus partes de los actos de adjudicación de los fundos relacionados, y los retiró del ordenamiento jurídico, de suerte que "(…) dejan de tener vigencia y no producen, ni han producido, por tanto, efecto alguno. Que el artículo 6 de la resolución en mención, indica que, revocados los actos administrativos de adjudicación de los inmuebles descritos, estos pasan al dominio de la Nación en calidad de baldíos."***

34.11 Sobre el tema de **"BALDÍOS RESERVADOS"** se dice que están sustraídos del régimen general de la ocupación como medio idóneo de adjudicación y expone que son reservados por mandato de la ley los predios de propiedad privada que revierten al dominio de la Nación en virtud de la declaratoria de la extinción administrativa del dominio y deben ser destinados a procesos de adjudicación especial; según lo previsto en el artículo 56 de la ley 160 de 1.994. Así mismo se mencionan como baldíos reservados, de acuerdo con el artículo 48, numeral 3 de la misma ley los predios que se obtengan de la aplicación de los procedimientos de recuperación de baldíos indebidamente ocupados.

34.12 Sobre el marco jurídico aplicable a las solicitudes de adjudicación radicadas ante el Incoder se reconoce y acepta que la solicitud fue presentada antes de la vigencia del decreto 902 del 2017, por lo que según la ANT, en principio debían resolverse bajo las prerrogativas de la ley 160 de 1994. Pero luego dice: ***"Ahora bien, como se***

mostró, el efecto inmediato de la resolución que declaro la revocatoria de las adjudicaciones implico que las áreas hoy ocupadas tengan la condición de terrenos baldíos, no obstante, tales terrenos no podían ser objeto de ocupaciones por particulares, y por ende, las hoy ejercidas no son, por sí mismas, suficientes para alegar el derecho de adjudicación. Esta conclusión se extrae del análisis de las disposiciones normativas contenidas en la ley 160 de 1994. Es decir, el resultado de la aplicación del régimen de la ley 160 de 1.994 por efecto de la ultraactividad prevista en el decreto Ley 902 de 2107, permite afirmar que en principio no resultan procedente las titulaciones."

34.13 Se dice sobre el tema de **"Reserva de Baldíos"** que las áreas que superen la UAF tienen esta calidad con fundamento en el artículo 67 de la ley 160 de 1994 y que el predio El Porvenir tiene una cabida de más de 25 mil hectáreas, situación que conlleva a que todas las ocupaciones ejercidas en ese predio no otorgan derecho a la adjudicación y se tornan indebidas debiéndose recuperar.

34.14 Sobre los efectos de la revocatoria directa se afirma que surge una reserva especial y textualmente expone: ***"En tal consecuencia, otro efecto de la resolución 6423 de 2014 consistió en otorgar el carácter de baldíos a los predios objeto de solicitud. Dicha condición tiene como particularidad que sustrae los predios de aquéllos que pueden ser ocupados libremente con el objetivo de obtener su titulación, en tanto, su aprovechamiento y titulación deber ser siempre direccionados por el respectivo administrador, para este caso, la ANT"***

34.15 Afirma que no puede invocarse la adjudicación de un terreno baldío cuando el peticionario deriva su ocupación del fraccionamiento de terrenos baldíos que se hayan tenido de manera indebida. Plantea dos hipótesis del siguiente tenor literal. ***"Como se señaló el peticionario afirma que su ocupación inicio antes del 29 de mayo de 2017, bajo el régimen de la ley 160 de 1994, lo que pudo ocurrir solo en dos hipótesis: (i) las ocupaciones iniciaron con posterioridad a la expedición de las Resolución No. 6423 de 2014 y son indebidas, en tanto, su objeto era un baldío reservado que se encuentra fuera del régimen de ocupación y adjudicación ordinario, (ii) lo hicieron con anterioridad, es decir, cuando se***

encontraban concentrados por efecto de la titulación indebida, y posterior englobe, lo cual devino en la revocación de dichas adjudicaciones."

34.16 Describe el predio SAN FELIPE, solicitado en adjudicación por la demandante, con un área de 828 ha + 6901 metros cuadrados y se le identifica vectorialmente y presentan las imágenes correspondientes, así mismo se redactan los linderos y se concluye del análisis geográfico: ***"… que es encuentra ubicado en un predio de mayor extensión denominado "El Porvenir" jurisdicción del municipio de Puerto Gaitán, meta, específicamente, el predio "SAN FELIPE" se encuentra inmerso en unos predios denominados "EL PEDREGAL" y "MI LLANURA" los cuales hacen parte de un total de cinco (5) grandes extensiones que se generaron en el año 2007, a partir del englobe de veintisiete (27) predios que inicialmente fueron adjudicados en la década del 1990 y posteriormente, mediante Resolución 6423 de Julio 30 de 2014, fueron revocados y cancelados junto con los folios de matrícula inmobiliaria de los cinco (5) predios." (Lo subrayado es de quien escribe).***

34.17 Se reseña el certificado de la junta de Acción Comunal de la Inspección del Porvenir, así como una declaración extraprocesal donde se ratifica que la ocupación de la demandante data del 01 de febrero del 2010.

34.18 Dentro de las conclusiones del análisis del caso concreto se dice: ***"….. se observa claramente que no existe congruencia en la información aportada por la señora LUIS ILVAR PULIDO PINILLA relacionada con el área del predio objeto de solicitud."***

34.19 Al analizar la resolución 6423 del 2014 la ANT afirma: ***"… a través de la resolución 6423 de 2014 el predio ocupado el cual hace parte del predio de mayor extensión conocido hoy como El Porvenir, ubicado en el Municipio de Puerto Gaitán, departamento del Meta, volvió al dominio de la Nación, es decir, que ostenta la condición de baldío para ser Administrado por la máxima autoridad de tierras, hoy en día, la Agencia Nacional de Tierras" (Lo subrayado es de quien escribe).***

34.20 Se relaciona un Informe Técnico Jurídico que tiene tres conclusiones, a saber: 1.) Que la ocupación de los predios comenzó desde cuando los predios se encontraban bajo el dominio privado. 2.) Que la ocupación alegada se ejerce sin autorización de la ANT sobre predios que se encuentran por fuera del régimen de ocupación y adjudicación ordinario, a partir de la revocatoria de que trata la resolución 6423 del 2014 y 3.) Que el área ocupada por la aquí demandante excede por mucho la UAF definida por la autoridad de tierras para el Predio El Porvenir.

34.21 Se indica que existe un informe agronómico que determino las cabidas máximas de la UAF para el predio El Porvenir, sin que ninguna supere las 100 hectáreas.

34.22 Bajo un capítulo que titulan **"Análisis de la situación particular"** se hacen las siguientes consideraciones y conclusiones:

- Que las ocupaciones iniciadas con anterioridad a la resolución 6423 de 2014 resultan inexistente a efectos de acreditar requisitos para una eventual adjudicación, toda vez que esas ocupaciones recaían sobre predios privados y no sobre baldíos lo que jurídicamente seria posesión.
- Que estas ocupaciones se gestaron con el patrocinio de la familia Carranza dueña de la empresa ganadera La Cristalina y esto se concluye de las afirmaciones que la ocupación en el predio comenzó desde el año 2010.
- Se afirma que esta situación se enmarca en lo previsto en el parágrafo 2 del artículo 74 de la ley 160 de 994.
- Se dice que los titulares de los 27 predios que fueron revocados ejercían una tenencia indebida de la tierra, aunado a las maniobras de acumulación indebida de la tierra.
- Se concluye que: ***"Así las cosas, dado que la solicitud de adjudicación bajo estudio se fundamenta en una posesión que se deriva a su vez de la tenencia de estas áreas bajo las circunstancias indicadas, no está llamada a prosperar."***

34.23 En lo que corresponde a las ocupaciones iniciadas a partir de la resolución 6423 de 2014 se expone:

- Que después de la resolución 6423 del 2014, las ocupaciones ejercidas tampoco dan lugar a una eventual adjudicación, por ser baldíos reservados.
- Por tanto, tampoco da lugar a la adjudicación por ser consideradas ocupaciones indebidas.
- Finalmente se expresa que de acuerdo con el artículo 25 del decreto ley 902 del 2017, se estableció la reserva especial de todos los baldíos de la Nación a partir del 29 de mayo de 2017.

34.24 Como conclusiones de la resolución objeto de demanda; en lo que corresponde a la solicitud de adjudicación de la demandante se puntualiza:

- Que la ocupación ejercida NO es de aquellas que permitan el reconocimiento de derechos de propiedad rural, es decir, de una posible titulación.
- Se afirma que si se concibe de otra manera a como se ha planteado y argumentado es abrir la puerta para que se entregue el dominio de la tierra a personas que derivan su pretensión agraria de situaciones irregulares como la tenencia indebida de las áreas reclamadas, lo cual atentaría contra los postulados esenciales de un Estado Social de Derecho.
- Se insiste que la ocupación se ejerce sobre predios reservados y no se cuenta con el consentimiento de la autoridad de tierras.
- Se expresa que se deben recuperar las tierras para destinarlas con destino a los programas de acceso a tierras dispuesto por el Gobierno Nacional en concordancia con las consideraciones establecidas en la sentencia SU – 426 de 2016 proferida por la Corte Constitucional.
- Finalmente se desestima la solicitud de adjudicación y por consiguiente se abstiene de continuar con el procedimiento único de ordenamiento social de la propiedad.

34.25 Sobre el procedimiento aplicable se analiza el artículo 27 del Decreto Ley 902 de 2017 concluyendo que no es aplicable el régimen de transición por ser indebidas las ocupaciones en el marco de la ley 160 de 1.964 y por consiguiente debe aplicarse el decreto 902 del 2017.

34.26 Sobre "LA BUENA FE EL RECONOCIMIENTO DE MEJORAS" se expone:

- Que se trata de una ocupación indebida y corresponde determinar si procede el reconocimiento de las mejoras coladas en el predio y con fundamento en una sentencia de la Corte Constitucional que citan, se plantea que la buena fe se presume en el ocupante y que la mala fe se deberá "probar plenamente".
- Se dice que a partir de la revocatoria directa de las veintisiete titulaciones realizadas por el INCORA (sic) cuando la Nación retomo el dominio de esos predios, con la calidad de baldíos, toda ocupación ejercida sin autorización de la autoridad de tierras se torna indebida.
- Se expone que los efectos de la publicidad a través de la inscripción en el registro de instrumentos públicos de la resolución 6423 del 2014 que revoco los títulos inicialmente otorgados califican los terrenos como baldíos reservados de la Nación.
- Se concluye que la aquí accionante tenía pleno conocimiento de la condición que adquirieron los predios a partir de la revocatoria directa y no cuenta con autorización expresa por parte de la autoridad de tierras para ocupar el predio, ni mucho menos para ejecutar mejoras, lo que lo constituye en un ocupante de mala fe que no tiene derecho alguno para el reconocimiento de las mejoras construidas en el territorio.

35. El día 27 de Agosto del año 2020 el aquí demandante **LUIS ILVAR PULIDO PINILLA** interpuso recurso de apelación contra la referida resolución 6925 ante el director de Acceso a Tierras de la ANT, solicitando que fuera revocada por todos los vicios que se puntualizaron en el recurso de alzada y como medio legal idóneo de agotamiento de la vía gubernativa.

36. El recurso de apelación presentado por el señor **LUIS ILVAR PULIDO PINILLA** se fundamentó en los siguiente hechos y fundamentos legales y jurídicos:

36.1 Demostrar que fáctica y jurídicamente el predio denominado "El Porvenir" NO EXISTE.

36.2 Que producto de la Revocatoria Directa que contiene la resolución 6423 de 2014 expedida por el INCODER quedaron vigentes 27

predios baldíos de la Nación, con números de matrícula inmobiliaria independientes, individuales tal y como se reseña en la página 7 de la resolución número 6925 del 13 de Agosto del 2020.

36.3 Que el predio SAN FELIPE, solicitado en adjudicación por el señor **LUIS ILVAR PULIDO PINILLA** afectaba con su ocupación los predios denominados **EL PEDREGAL y MI LLANURA,** con números de matrícula inmobiliaria **234 – 8015 y 234 - 8007.**

36.4 Que el predio El Pedregal y Mi Llanura, con matrícula inmobiliaria número 234 – 8015 y 234 - 8007 NO corresponde a ninguna zona focalizada, por no aparecer esta inscripción en el folio de matrícula, tal y como lo ordena el artículo 40 del Decreto 902 de 2017.

36.5 Que como consecuencia de lo dicho anteriormente la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas no tenía competencia para proferir la resolución 6925 del 2020.

36.6 Que el predio EL PEDREGAL y MI LLANURA, NO son Baldíos Reservados de la Nación, por no ajustarse a ninguna de las causales que expuso la ANT y no aparecer tal condición jurídica inscrita en el folio de matrícula inmobiliaria.

36.7 Se demostró que era improcedente la aplicación del trámite administrativo previsto en el decreto 902 del 2017 para definir de fondo la solitud de adjudicación radicada por el señor **LUIS ILVAR PULIDO PINILLA** ante el extinto INCODER, de acuerdo con lo previsto en el mismo artículo 27 y 81 del referido decreto 902 del 2017.

36.8 Se mostró que NO ERA CIERTO que la sentencia SU 406 del 2016 no pudiera aplicarse y además excluía al señor **LUIS ILVAR PULIDO PINILLA** como legitimo ocupante del predio SAN FELIPE, solicitado en adjudicación.

36.9 Se demostró que tanto la sentencia SU 426 del 2016 de la Corte Constitucional, como la proferida dentro de la Tutela que tramitó y falló el Juzgado de Familia de Puerto López, con radicado No. 2018 00024 00; amparó los derechos fundamentales del señor **LUIS ILVAR PULIDO PINILLA** como ocupante legítimo y además, ambas providencias ordenaron tramitar la solicitud de adjudicación aplicando la ley 160 de 1.994.

36.10 Se demostró que la UAF para la zona del municipio de Puerto Gaitán esta reglamentada debidamente en la resolución 041 de 1996 expedida por la Junta Directiva del INCODER y era la que estaba vigente al momento de la ocupación, al momento de la radicación de la solicitud de adjudicación y al momento en que la ANT profirió la resolución 6925 del 2020.

37. El día 21 de Diciembre la Dirección de Acceso a Tierras resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución número 6916 del 2020, confirmando la decisión que fue objeto de apelación

38. Con el acto administrativo que resolvió la apelación de que trata el hecho anterior, quedó agotada la vía gubernativa.

39. Con el acto presunto de negación de la apelación de que trata el hecho anterior, quedó agotada la vía gubernativa.

40. El señor **LUIS ILVAR PULIDO PINILLA,** reúne los requisitos legales para que la ANT adjudique mediante resolución administrativa el derecho de propiedad sobre el predio que ocupa denominado SAN FELIPE, que está plenamente identificado.

41. La norma aplicable para resolver la solicitud de adjudicación radicada por el señor **LUIS ILVAR PULIDO PINILLA** sobre el predio denominado SAN FELIPE, ante el INCODER, el día 17 de marzo del 2016 es la ley 160 de 1.994 y demás normas complementarias y que la adicionan.

42. Que los requisitos que debe cumplir el señor **LUIS ILVAR PULIDO PINILLA** para la adjudicación del predio, de acuerdo con la ley 160 de 1.994 y que la misma ANT tiene publicados en la página institucional son:

- Ser mayor de 18 años
- Ocupar el predio por mínimo 5 años.
- Estar explotando al menos las 2/3 parte de la superficie del predio.
- No tener un patrimonio neto superior a 1000 salarios mínimos legales vigentes.
- No ser propietario poseedor a cualquier título de otros predios ruarles.

- No podrá adjudicarse a quien, siendo adjudicatario de tierras, las hubiere enajenado y no hayan trascurrido 15 años desde la primera adjudicación.
- Estar afectado por alguna prohibición, limitación o inhabilidad legal para ser sujeto de reforma agraria.
- Dentro de los 5 años anteriores a la fecha de la solicitud, no haber tenido la condición de funcionarios, contratistas o miembros de las juntas o Consejos Directivos de las entidades públicas que integran los diferentes subsistemas del sistema nacional de reforma agraria y desarrollo rural campesino.
- UAF calculada mediante metodología de Zonas Relativamente Homogéneas. Res. 041 de 1996.

43. Cuando el señor LUIS ILVAR PULIDO PINILLA entró a ocupar el predio que denomino SAN FELIPE lo hizo de buena fe buscando que el estado le legalizara su ocupación y todas las mejoras realizadas en el predio se hicieron con miras a demostrar la explotación económica, las cuales deben ser valoradas dentro del presente proceso.

44. El señor LUIS ILVAR PULIDO PINILLA siempre acudió a las vías legales para el reconocimiento de su ocupación y de los derechos que de ella emanan, de acuerdo con lo previsto en la ley 160 de 1994.

45. Que el señor **LUIS ILVAR PULIDO PINILLA** me ha conferido poder especial, amplio y suficiente para el ejercicio de la presente **ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Y/O DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS SOBRE ADJUDICACIÓN DE BALDÍOS,** prevista en el artículo 38 del decreto 902 de 2017.

Con fundamento en los hechos expuestos y previos los trámites previstos en el Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo para el trámite de la **ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Y/O -RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS SOBRE ADJUDICACIÓN DE BALDÍOS** me permito solicitar se hagan las siguientes o similares

DECLARACIONES Y CONDENAS:

PRINCIPALES:

1. Que se declare la Nulidad de la Resolución número **6925 del 13 de Agosto del año 2020**, expedida por la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas de la Agencia Nacional de Tierras; suscrita por la **Dra. JULIANA ELENA VENEGAS GOMEZ**, "Por la cual se resolvió una solicitud de adjudicación de baldíos dentro del predio de mayor extensión denominado El Porvenir, ubicado en el Municipio de Puerto Gaitán – Meta y se ordenan otras actuaciones" y concretamente **SE NIEGA** la solicitud de adjudicación del señor **LUIS ILVAR PULIDO PINILLA**, quien se identifica con la cedula de ciudadanía número 79.523.930, sobre el predio denominado SAN FELIPE, ubicado en la vereda El Porvenir, municipio de Puerto Gaitán.

2. Que se declare que el Señor **LUIS ILVAR PULIDO PINILLA**, cumple con todos los requisitos legales para que se le adjudique el predio denominado SAN FELIPE, ubicado en la vereda del El Porvenir, del municipio de Puerto Gaitán, departamento del Meta.

3. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones se **ADJUDIQUE** el predio baldío denominado **"SAN FELIPE"** al señor **LUIS ILVAR PULIDO PINILLA,** quien se identifica con la cedula de ciudadanía número 79.523.930, cuyos linderos específicos están determinados en la referida resolución **6925 del 13 de Agosto del año 2020** en los siguientes términos: "*Se toma como punto de partida el punto 01 de coordenadas planas E: 982588,260 m y N: 1018985,880 m, ubicado en la esquina noroeste de la ocupación, sitio donde concurren las colindancias de los posibles ocupantes CAMILO ANDRES PRIETO ROCHA ocupación "LA BENDICIÓN" (según reconstrucción vectorial) y JULIO HUMBERTO PRIETO BRIÑEZ ocupación "LA CALAVERA" (según reconstrucción vectorial). NORTE: Del punto de partida 01 se continúa en dirección noreste en línea quebrada en una distancia de 2758,02 m, hasta encontrar el punto 02 de coordenadas planas E: 985051,410 m y N: 1019615,840 m colindando con el posible ocupante JULIO HUMBERTO PRIETO BRIÑEZ ocupación "LA CALAVERA" (según reconstrucción vectorial). ESTE: Del punto 02 se continúa en dirección sureste en línea quebrada, en una distancia de 1467,56 m, hasta encontrar el punto 03 de coordenadas E: 986350,99 m y N: 1019019,18 m el posible ocupante MIGUEL OVANDO RICO ocupación "EL TESORO" (según reconstrucción vectorial). Se continúa en dirección suroeste en línea quebrada, en una distancia de 4495,01 m, hasta encontrar el punto*

04 de coordenadas planas E: 984475,380 m y N: 1015641,680 m colindando con el posible ocupante WILLIAM ORTIZ ocupación "SIN NOMBRE" (según plano topográfico). SUR: Del punto 04 se continúa en dirección noroeste en línea quebrada, en una distancia de 1462,72 m, hasta encontrar el punto 05 de coordenadas planas E: 983050,600 m y N: 1015972,090 m colindando con ZONA PROTECTORA DE MORICHAL. OESTE: Del Punto 05 se continúa en dirección noroeste en línea quebrada, en una distancia de 1609,56 m, hasta encontrar el punto 06 de coordenadas planas E: 982136,440 m y N: 1017245,520 m colindando con la ZONA PROTECTORA DE MORICHAL. Se continua en dirección noreste en línea quebrada en una distancia de 1998,23 m, hasta encontrar el punto 01, colindando con el posible ocupante CAMILO ANDRES PRIETO ROCHA ocupación "LA BENDICIÓN" (según reconstrucción vectorial), y cierra." Que hace parte del predio denominado EL PEDREGAL Y MI LLANURA con números de matrícula inmobiliaria Nos. 234 – 8015 y 234 – 8007.

4. Que se ordene la inscripción de la sentencia que acceda a las pretensiones de la demanda en el folio de matrícula inmobiliaria No. 234 – 8015 y 234 – 8007 de la oficina de Registro de Instrumentos públicos de Puerto López.

SUBSIDIARIAS:

1. Que se declare la Nulidad de la Resolución número **6925 del 13 de Agosto del año 2020**, expedida por la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas de la Agencia Nacional de Tierras; suscrita por la **Dra. JULIANA ELENA VENEGAS GOMEZ**, "Por la cual se resolvió una solicitud de adjudicación de baldíos dentro del predio de mayor extensión denominado El Porvenir, ubicado en el Municipio de Puerto Gaitán – Meta y se ordenan otras actuaciones" y concretamente **SE NIEGA** la solicitud de adjudicación del señor **LUIS ILVAR PULIDO PINILLA**, quien se identifica con la cedula de ciudadanía número 79.523.930 sobre el predio denominado SAN FELIPE, ubicado en la vereda El Porvenir, municipio de Puerto Gaitán.

2. Que se declare que el Señor **LUIS ILVAR PULIDO PINILLA**, cumple con todos los requisitos legales para que se le adjudique el predio

denominado SAN FELIPE, ubicado en la vereda del El Porvenir, del municipio de Puerto Gaitán, departamento del Meta.

3. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones se **ORDENE** a la **AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS – DIRECCIÓN DE ACCESO DE TIERRAS**, que en el término perentorio de DIEZ (10) DÍAS, contados a partir de la ejecutoria de la sentencia, **ADJUDIQUE** el predio baldío denominado **"SAN FELIPE"** al señor **LUIS ILVAR PULIDO PINILLA,** quien se identifica con la cedula de ciudadanía número 79.523.930, cuyos linderos específicos están determinados en la referida resolución **6925 del 13 de Agosto del año 2020** en los siguientes términos: "*Se toma como punto de partida el punto 01 de coordenadas planas E: 982588,260 m y N: 1018985,880 m, ubicado en la esquina noroeste de la ocupación, sitio donde concurren las colindancias de los posibles ocupantes CAMILO ANDRES PRIETO ROCHA ocupación "LA BENDICIÓN" (según reconstrucción vectorial) y JULIO HUMBERTO PRIETO BRIÑEZ ocupación "LA CALAVERA" (según reconstrucción vectorial). NORTE: Del punto de partida 01 se continúa en dirección noreste en línea quebrada en una distancia de 2758,02 m, hasta encontrar el punto 02 de coordenadas planas E: 985051,410 m y N: 1019615,840 m colindando con el posible ocupante JULIO HUMBERTO PRIETO BRIÑEZ ocupación "LA CALAVERA" (según reconstrucción vectorial). ESTE: Del punto 02 se continúa en dirección sureste en línea quebrada, en una distancia de 1467,56 m, hasta encontrar el punto 03 de coordenadas E: 986350,99 m y N: 1019019,18 m el posible ocupante MIGUEL OVANDO RICO ocupación "EL TESORO" (según reconstrucción vectorial). Se continúa en dirección suroeste en línea quebrada, en una distancia de 4495,01 m, hasta encontrar el punto 04 de coordenadas planas E: 984475,380 m y N: 1015641,680 m colindando con el posible ocupante WILLIAM ORTIZ ocupación "SIN NOMBRE" (según plano topográfico). SUR: Del punto 04 se continúa en dirección noroeste en línea quebrada, en una distancia de 1462,72 m, hasta encontrar el punto 05 de coordenadas planas E: 983050,600 m y N: 1015972,090 m colindando con ZONA PROTECTORA DE MORICHAL. OESTE: Del Punto 05 se continúa en dirección noroeste en línea quebrada, en una distancia de 1609,56 m, hasta encontrar el punto 06 de coordenadas planas E: 982136,440 m y N: 1017245,520 m colindando con la ZONA PROTECTORA DE MORICHAL. Se continua en dirección noreste en línea quebrada en una distancia de 1998,23 m, hasta encontrar el*

punto 01, colindando con el posible ocupante CAMILO ANDRES PRIETO ROCHA ocupación "LA BENDICIÓN" (según reconstrucción vectorial), y cierra" Que hace parte de los predios denominados EL PEDREGAL y MI LLANURA con números de matrícula inmobiliaria No. 234 – 8015 y 234 – 8007.

5. Que, como consecuencia de la adjudicación, una vez ejecutoriada la resolución, se ordene a la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS – DIRECCIÓN DE ACCESO A TIERRAS la inscripción en los folios de matrícula inmobiliaria No. 234 – 8015 y 234 - 8007 de la oficina de Registro de Instrumentos públicos de Puerto López.

LAS PERSONAS EN EL PROCESO Y SUS REPRESENTANTES

PARTE DEMANDANTE:

El Señor **LUIS ILVAR PULIDO PINILLA** quien lo hace debidamente representada por su apoderado, **Dr. CARLOS DANIEL VARGAS BACCI,** conjugándose capacidad jurídica, procesal y de postulación.

PARTE DEMANDADA:

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS representada por la Directora Dra. MYRIAM MARTÍNEZ CÁRDENAS, o por quien lo reemplace o haga sus veces.

LA DIRECCIÓN DE ACCESO A TIERRAS DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS representada por su Director Dr. JUAN MANUEL NOGUERA MARTÍNEZ, o por quien lo remplace o haga sus veces.

LA SUBDIRECCIÓN DE ACCESO A TIERRAS EN ZONAS FOCALIZADAS DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS representada por la Dra. JULIA ELENA VENEGAS GOMEZ, o por quien lo remplace o haga sus veces.

INTERVINIENTE:

El señor agente del ministerio público, con quien ha de surtirse la tramitación del proceso.

DISPOSICIONES QUEBRANTAS

Con la expedición de la resolución número **6925 del 13 de Agosto del año 2020** acusada en esta demanda, se infringieron los siguientes preceptos legales:

CONSTITUCIONALES: Artículo 12; 25; 44; 58 y 64

LEGALES: Ley 160 de 1.994; decreto ley 902 del 2017 y demás normas concordantes y complementarias

CONCEPTO DE VIOLACIÓN

La motivación de los actos administrativos proviene del cumplimiento de preceptos constitucionales que garantizan que los particulares tengan la posibilidad de contradecir las decisiones de los entes públicos ante las vías gubernativa y judicial, evitando de esta forma la configuración de actos de abuso de poder. De esta forma, le corresponde a la administración motivar sus actos y a los entes judiciales decidir si tal argumentación se ajusta o no al ordenamiento jurídico. **(Sentencia T – 204 del 2012, expediente T-3275969, MP: JORGE IVÁN PALACIO PALACIO.**

Considero igualmente que el principio de congruencia también tiene validez y aplicación en el presente asunto, principio consagrado en el artículo 55 de la Ley 270 de 1.996, “Estatuto de la Administración de Justicia” y en lo desarrollado en los artículos 280 y 281 del C G P.

Las normas citadas en el capítulo que antecede han sido vulneradas de manera flagrante y clara, en circunstancias o situaciones que se puntualizan y resumen así:

1. Se cita, habla y se sustenta la resolución que es objeto de revisión jurisdiccional de la existencia de UN (1) predio baldío denominado “EL PROVENIR”, con una cabida de mas de 25.000 hectáreas, **ESTE PREDIO NO EXISTE JURÍDICAMENTE**, es una ficción jurídica, y con esta cabida y sobre este imaginario se hacen elucubraciones jurídicas con sus correspondientes efectos que necesariamente también resultan inexistentes, inconducentes y contrarias a derecho.

2. Existen NO UNO, sino 27 predios baldíos, independientes que nacieron como producto de la revocatoria directa emitida por el INCODER, contenida en la resolución 6423 del 2014, cada uno de esos tiene su número de matrícula inmobiliaria independiente.

3. En el tema de competencia; para hacerla radicar en cabeza de la Subdirección de Acceso a Tierras Focalizadas; que es quien produce la resolución **6925 del 13 de Agosto del año 2020;** se invoca el artículo 40 del decreto Ley 902 del 2017, **VULNERÁNDOLO EN SU CONTENIDO LEGAL E INTERPRETACIÓN**, pues la A N T no ha cumplido con la exigencia que le impone el parágrafo del citado artículo 40, es decir, que no se ha identificado el predio como ubicado en una zona focalizada, no se ha señalado el número de la matrícula, y menos se ha inscrito esta medida en la oficina de registro de instrumentos públicos correspondiente (Puerto López – Meta), condición o calidad o requisito para que sea oponible a terceros lo que concluye que los predios denominados EL PEDREGAL Y MI LLANURA con matrículas inmobiliarias No. 234 – 8015 y 234 - 8007 no hace parte de ninguna zona focalizada para efectos de competencia y adjudicación.

4. **NO ES CIERTO** que en la sentencia SU 426 del 2016 se hayan amparado derechos fundamentales a favor de la ***"población histórica"*** que cumpla con los requisitos para ser sujetos de reforma agraria; lo que allí dijo la Corte Constitucional fue que se debe **"censar a la población ocupante de los terrenos baldíos …".**

5. El fallo de tutela **No. T – 00024 del 2016**; citado como antecedente en la resolución objeto de demanda; se reconoció como ocupante legítima a la aquí demandante y ordenó en un término perentorio de dos meses que se resolviera de fondo su solicitud de adjudicación, de acuerdo con lo previsto en la ley 160 de 1994 y demás normas concordantes, situación que no se cumplió pues como se evidencia aplicó el decreto ley 902 de 2.017.

6. **NO ES CIERTO** que los veintisiete (27) predios que volvieron al patrimonio de la Nación, en virtud de la **REVOCATORIA DIRECTA** contenida en la resolución 6423 de 2014, **SEAN BALDÍOS RESERVADOS.**

El artículo 56 de la ley 160 de 1994 **NO** tiene aplicación como lo pretende hacer ver la ANT, pues los predios que vuelven al patrimonio del Estado no lo hacen en virtud de una declaratoria de extinción de dominio por tratarse de tierras incultas y además dentro de la resolución citada nunca se dice que se trata de este tema ni menos que vuelven al patrimonio del Estado como baldíos reservados.

7. Tampoco tiene aplicación el articulo 48 numeral 3 de la ley 160 de 1994, pues nada dice sobre el tema; pues trata de la "CLARIFICACIÓN DE LA PROPIEDAD, DESLINDE Y RECUPERACIÓN DE BALDÍOS"; **NO ES CIERTO** que el numeral 3 establezca que son baldíos reservados de la Nación los bienes que se obtengan producto de la aplicación de los procedimientos de recuperación de baldíos indebidamente ocupados.

8. Otro error que constituye grave vulneración de los derechos de la demandante es el desconocimiento del artículo 27 del decreto 902 del 2017 y no aplicar para el trámite de la solicitud de adjudicación la ley 160 de 1994, como incluso esta ordenado en fallos de tutela, por la fecha en que se radicó la solicitud y la época de la ocupación del predio solicitado en adjudicación.

9. No es cierto que el predio solicitado en adjudicación supera la UAF vigente para la época en que se hizo la ocupación y se radicó la solicitud de adjudicación ante el INCODER, al amparo y vigencia de la Ley 160 de 1.994 y así lo certifica la misma ANT y menos aún tomar como referencia para los efectos legales que el predio solicitado en adjudicación hace parte de un predio inexistente jurídicamente denominado EL PORVENIR de más de 25.000 hectáreas.

10. El predio que afecta la ocupación se denomina EL PEDREGAL, con una cabida que nunca superó la UAF prevista en la resolución número 041 de 1996 expedida por el INCODER y que corresponde a la **Zona Relativamente Homogénea No. 7 -Sabanas 2,** modificado por el acuerdo 140 del 2008.

11. Otra de las contradicciones y desaciertos que tiene la resolución demandada es que la ANT expone que con la resolución 6423 del

2014 los predios adquirieron nuevamente la calidad de baldíos de la Nación, **ESO ES CIERTO** y que por ese solo hecho de haber vuelto al patrimonio de la Nación, por vía de la revocatoria directa, se sustraen de los predios que pueden ser ocupados libremente con el objetivo de obtener su titulación **ESO NO ES CIERTO.**

12. **NO ES CIERTO** que la demandante haya participado del fraccionamiento de las tierras que solicita en adjudicación, de manera directa o indirecta; bajo la óptica de una INDEBIDA INTERPRETACIÓN DE LA NORMA por parte de la ANT para justificar su negativa en la adjudicación, pues se podrá tener ningún soporte probatorio de este hecho, pues nunca tuve un nexo ni con los titulares de los 27 predios revocados ni menos aun con los titulares de los 5 predios englobados que también fueron revocados.

Es oportuno y valido aquí afirmar que las competencias del Estado después de surtida la Revocatoria Directa, nunca se perdieron, y deben desarrollarse dentro del marco legal que las rige y que circunscribe toda actividad pública, y para este caso concreto la ley 160 de 1.994 ha determinado una serie de requisitos subjetivos y objetivos para hacer viable las adjudicaciones, las cuales necesariamente dentro de la competencia de ese mismo Estado, a través de la A N T, debe verificarlas, corroborarlas y este ejercicio lo hace a través de los trámites administrativos previstos para las adjudicaciones, teniendo siempre el marco de referencia y de acción las normas jurídicas que los regulan, debiendo necesaria y obligatoriamente interprétalas como corresponde y no de manera equivocada y amañada como aquí se evidencia.

Aquí debemos decir que no puede llegarse a conclusiones coherentes y jurídicas cuando los supuestos y fundamentos tanto facticos como jurídicos son equivocados y errados como es el caso de la presente resolución número 6925 del 2020 que es objeto de demanda.

Lo primero; es que se parte de un supuesto legal improcedente y que no corresponde a la normatividad sobre la cual se debe desarrollar el proceso administrativo de adjudicación y es el decreto ley 902 del 2017 cuando corresponde legal y jurídicamente a la ley 160 de 1994 tal y como quedó analizado y demostrado atrás.

De otro lado, **NO ES CIERTO** que el predio "SAN FELIPE"; solicitado en adjudicación; haga parte de uno de mayor extensión denominado "El Porvenir", pues como se dijo atrás este **NO EXISTE**. El predio solicitado en adjudicación denominado SAN FELIPE hace parte y corresponde a los predios EL PEDREGAL Y MI LLANURA, que se identifican con los números de matrícula inmobiliaria 234 – 8015 y 234 - 8007.

La solicitud de adjudicación fue radicada el 17 de marzo de 2016 ante el INCODER, y la ocupación del predio, que tiene una cabida de 828 Hc. data del 13 de junio del 2010, y los linderos y planos fueron levantados por el mismo INCODER para efectos del trámite de adjudicación y se deja claro que el predio "SAN FELIPE" está inmerso en los predios denominados "EL PEDREGAL" y "MI LLANURA" que están legalmente identificados con los números de matrícula inmobiliaria 234 – 8015 y 234 - 8007, destacando nuevamente que **NO EXISTE** el predio **EL PORVENIR**

Con la resolución 6423 de 1994 la posesión que ejercían los propietarios a quienes se les revocó su derecho de dominio, se trasformó en ocupación; ***por los efectos retroactivos que allí se prevén;*** en el sentido que se ordena, además de retirar del ordenamiento jurídico las resoluciones revocadas, quitar todos los efectos jurídicos derivadas de ellas en el tiempo y que los predios regresen al patrimonio del estado como si nunca hubieran existido dichas adjudicaciones, ni reconocer efecto jurídico alguno en el tiempo que estuvieron vigentes, situación que permite predicar la calidad de BALDÍOS COMUNES Y ORDINARIOS de la Nación desde el momento en que se aperturó el folio de matrícula inmobiliaria pues nunca salieron del patrimonio del Estado, es decir, en este orden de ideas, que siempre se ha ejercido jurídicamente ocupación sobre el predio EL PEDREGAL y MI LLANURA y NO como lo pretende hacer ver la ANT de ser una posesión.

La UAF desde cuando se inició la ocupación que luego fuera avalada por el INCODER, es de hasta 920 hectáreas, según la resolución número 041 de 1996 expedida por el INCODER y que corresponde a la **Zona Relativamente Homogénea No. 7 -Sabanas 2** y el acuerdo 140 del 2008.

La modificación a la UAF que pretende la ANT en la resolución objeto de demanda no tiene aplicación ni procedencia en este asunto pues los predios EL PEDREGAL y MI LLANURA no son predios baldíos

reservados y eventualmente solo aplicaría a las solicitudes radicadas después de la expedición del decreto 902 del 2017, pues las radicadas antes de la vigencia del decreto 902 del 2017 se deben tramitar de acuerdo con la ley 160 de 1.995, el decreto 041 de 1,966 y el acuerdo 140 del 2008.

Sobre la afirmación que se hace que las ocupaciones se gestaron con el patrocinio de la familia Carranza, para pretender dar aplicación al parágrafo 2 del Artículo 64 de la ley 164 de 1994, es una afirmación además de grave, tendenciosa, contraria a la cronología de los hechos que la misma ANT expone y que están acreditados fácticamente.

En otra indebida interpretación que constituye otra flagrante violación al marco jurídico, se interpreta el artículo 25 del Decreto Ley 902 del 2017, el cual transcribo; en la parte que corresponde; para mayor claridad y mejor percepción de los errores que se ponen de presente:

> ***"ARTICULO 25: ADJUDICACIÓN DIRECTA: … …***
>
> ***Los bienes baldíos adjudicables que a la fecha de la expedición del presente decreto no se encuentren ocupados debidamente en los términos de la Ley 160 de 1994, y los que se identificarán a partir de la aplicación de los procedimientos administrativos y judiciales en este Decreto señalados como fuentes del Fondo, se declaran reservados, y su destinación a los programas de acceso acá establecidos se realizará conforme a las reglas de adjudicación del RESO, según la competencia establecida por el artículo 76 de la Ley 160 de 1994, modificado por el artículo 102 de la Ley 1753 de 2015."***

El predio Baldío sobre el cual se ejerce ocupación está siendo ocupado conforme a las normas vigentes y a las que corresponden para el caso en particular, es decir, de acuerdo con los parámetros que fija la ley 160 de 1994, por lo que NO ES PROCEDENTE NI JURÍDICO decir, que están ocupados indebidamente como lo ha expuesto y sustentado la A N T.

Finalmente, y en lo que corresponde al eventual reconocimiento de las mejoras en el predio, solo se hacen las siguientes precisiones sobre el tema puntual, dejando claro que todas las mejoras plantadas en el predio constituyen la prueba idónea de la explotación económica del predio durante los últimos diez (10) años, las cuales siempre se

ejecutaron con la convicción plena de poder reclamar el derecho de dominio sobre el predio legal y legitimante ocupado.

NO EXISTE NI EXISTIÓ NUNCA MALA FE EN LA OCUPACIÓN; que legalmente no requería de ninguna autorización por parte del INCODER para ocupar el predio teniendo en cuenta la calidad de predios baldíos comunes de la Nación, tal y como lo dice y expone la misma resolución 6423 del 2014 y no como lo afirma y lo pretende hacer ver la ANT.

REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD

Se allega copia de la audiencia surtida ante la procuraduría y la correspondiente constancia de haberse declarado fracasada la conciliación.

ANEXOS DE LA DEMANDA

Me permito acompañar los siguientes:

1. Poder legalmente conferido por la accionante para su representación y la actuación procesal.

2. Fotocopia auténtica de la resolución Número 6925 del 13 de Agosto de 2020 expedida por la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas de la Agencia Nacional de Tierras.

3. Constancia de notificación de la citada resolución número 6925 del 13 de Agosto del 2020.

4. Recurso de apelación interpuesto contra la resolución número 6925 del 13 de Agosto del 2020 con la constancia de envío por correo electrónico.

5. Constancia de envio del recurso de apelacion a la ANT.

6. Respuesta de la Agencia Nacional de Tierras a un derecho de petición solicitando información y soporte sobre el tema de la UAF en la verada El Porvenir del Municipio de Puerto Gaitán.

7. Copia del decreto 1071 del 2015 publicado en la página web de la A N T donde se determinan los requisitos y tramite de adjudicación para predios baldíos.

8. Copia del Acta de Entrega que hiciera la Gobernación del Meta a la A N T a través del Director Logístico de Almarchivos S A de todos los expedientes que se iniciaron y dieron tramite en desarrollo de los convenios suscritos entre el INCODER y el departamento del Meta.

9. Copia de la resolución 6423 de 1994 expedida por el INCODER.

10. Sentencia SU 426 del 2016 proferida por la Honorable Corte Constitucional.

11. Copia de los fallos de primera y segunda instancia proferidos por el Juzgado Familia del Circuito de Puerto López y la Sala Civil – Familia – Laboral del Tribunal Superior de Villavicencio, respectivamente, dentro del trámite de tutela radicado con el numero 2018 - 00024 - 00.

12. Copia del fallo del Juzgado Circuito de Familia de Puerto Lopez sobre el desacato que se tramito en el proceso de tutela radicado con el numero 2018 - 00024 - 00.

13. Copia de los folios de matrícula inmobiliaria Nos 234 – 8015 Y 234 - 8007.

14. Copia de la solicitud de información radicada ante la Secretaria de Agricultura del Departamento del Meta; de la cual no se ha obtenido respuesta.

15. Copia de la audiencia de conciliación surtida ante la procuraduría 48 judicial II para asuntos disciplinarios y la constancia correspondiente

PRUEBAS

Además de los documentos relacionados en el capítulo de Anexos, solicito se decreten, practiquen y tengan como tales, las siguientes:

TESTIMONIOS:

Se fije fecha y hora para recibir los testimonios de:

- **CARLOS EMILIO ROMERO GOMEZ**, mayor de edad, vecino de la ciudad de Villavicencio, identificado con la cedula de ciudadanía

numero 17.327.742, con correo electrónico carloseromerog@hotmail.com; testigo que relatara lo que le conste con el manejo que dio el INCODER a las solicitudes de adjudicación de los ocupantes de la vereda El Porvenir del Municipio de Puerto Gaitán, entre ellas la solicitud de la demandante **LUIS ILVAR PULIDO PINILLA,** y de los demás hechos que le conste relacionados en la demanda, y que interesen al Tribunal.

- ALBERTO ZORNOSA LOZANO, quien se identifica con la cedula de ciudadanía número 17.316.335 con correo electrónico zalberto95@hotmail.com; LUIS GABRIEL MONTES ARAUJO quien se identifica con la cedula de ciudadanía número 1.067.094.807 con correo electrónico gabrielmontesarau@gmail.com; MAURICIO OCAMPO GOMEZ quien se identifica con la cedula de ciudadanía número 86.068.416 con correo electrónico mocampo386.mo@gmail.com; JAVIER CRISTIAN TRUJILLO ACEVEDO quien se identifica con la cedula de ciudadanía número 1.121.899.291 con correo electrónico zalberto95@hotmail.com; quienes declararan sobre la ocupación y explotación económica que ha desarrollado la demandante en el predio que ocupa en la verdea El Porvenir, municipio de Puerto Gaitán y de los demás hechos que le conste relacionados en la demanda, y que interesen al Tribunal.

- ALBA GEORGINA SALGADO ROJAS quien se identifica con la cedula de ciudadanía número 1.120.866.882 con correo electrónico ginna26111@gmail.com; LIBIA BARAHONA RIVEROS quien se identifica con la cedula de ciudadanía número 40.398.267 con correo electrónico libia-2184@hotmail.com; MARTHA YANETH HERNANDEZ MEDINA quien se identifica con la cedula de ciudadanía número 40.417.851 con correo electrónico maiahernandez488@gmmail.com; todos ellos ocupantes de predios en la vereda del Porvenir quienes declararan sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se hicieron las ocupaciones y se ha desarrollado la explotación económica.

PRUEBA PERICIAL

Se pretende hacer valer dentro del proceso dictamen pericial, para acreditar el cumplimiento de los requisitos legales que hacen

procedente la adjudicación del pedio baldío, tal y como se solicita en las pretensiones de la demanda por lo que desde este momento se anuncia y se requiere del despacho se designen peritos idóneos para que previa identificación del predio denominado Villa Alexandra, ubicado en la vereda El Porvenir, municipio de Puerto Gaitán, alinderado como se encuentra en las pretensiones de la demanda y en la resolución número 6925 del 13 de agosto del 2020, se determine: la explotación económica que se desarrolla es este predio, la cantidad de hectáreas que son objeto de explotación y/o la proporción de explotación en el predio, se valoren todas las mejoras que se han realizado en el predio, se determine su antigüedad, se indique la persona que ejerce ocupación en dicho predio y su situación o calidad jurídica. Desde ahora manifiesto que me reservo el derecho de ampliar el cuestionario a los peritos.

En el evento que se considere que es procedente y jurídico aportar el referido dictamen, desde ahora se solicita se autorice por el despacho en el admisorio de la demanda, concediendo el termino prudencial para su elaboración y presentación.

OFICIOS

Se libren oficios a la Gobernación del Meta - Secretaria de Agricultura para que certifiquen la suscripción y ejecución de los convenios suscritos con el INCODER para la legalización de predios rurales en el Meta, quien fue el operador y que dentro de la documentación se haga llegar la relación de solicitudes radicadas y tramitas en ejercicio de dichos convenios.

COMPETENCIA

Es competencia de ese Tribunal Administrativo del Meta, en primera instancia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 152 numeral 12 del CPACA, por la naturaleza de la acción, por razón del territorio donde se encuentra el bien baldío y domicilio de la demandante.

ESTIMACIÓN RAZONADA DE LA CUANTÍA

En lo que corresponde a la estimación razonada de la cuantía, esta se determina en la suma de OCHOCIENTOS VEINTE OCHO MILLONES

DE PESOS ($828.000.000.oo) de acuerdo con los precios del mercado de la zona y del costo por hectárea, que está en razón de UN MILLÓN DE PESOS ($1.000.000.oo) por hectárea sin tener en cuenta las mejoras que serán objeto de peritaje dentro del proceso; teniendo como marco de referencia para estimación razonada la extensión del predio que se solicita en adjudicación que es de 828 hectáreas

FUNDAMENTOS LEGALES

Esta demanda se fundamenta en el artículo 138 del CEPACA y en el artículo 38 del decreto Ley 902 del 2017; artículos 162 y siguientes del CPACA y demás normas concordantes y complementarias y en las disposiciones citadas en el acápite del quebrantamiento normativo.

NOTIFICACIONES

El suscrito apoderado, recibirá en la carrera 33 numero 36 – 29 oficina 201 de Villavicencio, y correo electrónico cadavabacci@hotmail.com .

La demandante, en el predio rural denominado Las Doscientas, ubicado en la vereda El Porvenir del Municipio de Puerto Gaita y en correo electrónico luchopulido20@gmail.com y luispulido3542@hotmail.com

Las entidades demandadas en la calle 43 Número 57 – 41 de la ciudad de Bogotá y en el correo electrónico jurídica.ant@agenciadetierras.gov.co.

A la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado se surtió la correspondiente notificación, en cumplimiento de las normas procesales vigentes; se anexa certificación de envió y recibido. **7-41 Bogotá, Colombia.**

Atentamente;



CARLOS DANIEL VARGAS BACCI
C. C. No. 17.321.780 de V/cio.
T. P. No. 84.436 del C S J.

Señores Honorables Magistrados
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META (REPARTO)
Villavicencio.

REF: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Y/O -RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS SOBRE ADJUDICACIÓN DE BALDÍOS.
DTE: LUIS ILVAR PULIDO PINILLA.
DDO: AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - LA DIRECCIÓN DE ACCESO A TIERRAS DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - LA SUBDIRECCIÓN DE ACCESO A TIERRAS EN ZONAS FOCALIZADAS DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS.

CARLOS DANIEL VARGAS BACCI, persona mayor de edad, vecina de la ciudad de Villavicencio, abogado inscrito y en ejercicio, identificado civil y profesionalmente como aparece al pie de mi correspondiente firma, actuando en nombre y representación del señor **LUIS ILVAR PULIDO PINILLA**, persona también mayor de edad, vecina del municipio de Puerto Gaitán, quien actúa en nombre propio, de acuerdo con el poder que adjunto, donde se identifica civilmente; acudo ante este Tribunal para **SOLICITAR SE DECRETEN LAS SIGUIENTES MEDIDAS CAUTELARES** dentro del proceso descrito en la referencia; de acuerdo con lo previsto en el artículo 229 y siguientes del CPACA, que tienen como fin prevenir la ejecución y materialización de los actos contenidos

en la parte resolutiva de la resolución 6925 del 13 de Agosto del 2020 y que es objeto de nulidad de acuerdo con lo expresado y solicitado en la demanda principal y prevenir que se cause y consume un perjuicio irremediable al demandante LUIS ILVAR PULIDO PINILLA y que se concretan en las siguientes medidas:

1. Suspender provisionalmente los efectos de la resolución número 6925 del 13 de Agosto del 2020 emitida por la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas de la Agencia Nacional de Tierras, hasta tanto se resuelva de fondo el presente proceso administrativo.

2. Ordenar a la Agencia Nacional de Tierras que se mantenga la situación fáctica de ocupación y explotación económica que viene desarrollando el demandante **LUIS ILVAR PULIDO PINILLA** sobre el predio "San Felipe" ubicado en la Vereda El Porvenir del municipio de Puerto Gaitán, hasta tanto se resuelva de fondo el presente proceso administrativo.

SUSTENTACIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR

El acto administrativo objeto de nulidad; la Resolución número **6925 del 13 de Agosto del año 2020;** expedida por la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas de la Agencia Nacional de Tierras; además de negar ilegalmente la solicitud de adjudicación; ordena la recuperación de los predios baldíos ocupados por la demandante e invita a la entrega voluntaria del predio, con la advertencia de que si no se logra la recuperación por este medio se procederá a recuperar el predio haciendo uso de la fuerza pública.

De no decretarse las medidas cautelares solicitadas se estaría habilitando la posibilidad material y jurídica a la ANT para la recuperación del predio que ocupada la demandante, situación esta que causaría un perjuicio irremediable pues se pierde o interrumpe la ocupación que ha venido ejerciendo, de la cual derivan unos derechos que legalmente se están reclamando al amparo de la legalidad vigente; que sea dicho de paso; ha sido reconocida por fallos de tutela; siendo este; la ocupación y explotación económica; un requisito sustancial para hacer procedente y viable la adjudicación.

Como se ha expuesto y analizado atrás, es un hecho cierto y reconocido por la ANT, que la solicitud de adjudicación presentada por el demandante **LUIS ILVAR PULIDO PINILLA** sobre el predio "SAN FELIPE" fue radicada el 17 de marzo de 2016 ante el INCODER, situación fáctica que de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 y el parágrafo del artículo 81 del decreto 902 del 2017 obligaba a la ANT a dar continuidad al trámite y resolver de fondo la solicitud de adjudicación bajo los parámetros y condiciones previstas en la ley 160 de 1.994, situación que ha sido desconocida por la Subdirección de Acceso a Tierras Focalizadas de la ANT, como puede comprobarse con la revisión rápida y somera de la resolución número **6925 del 13 de Agosto del año 2020;** de la cual se pide la nulidad; en donde se dio aplicación integral al decreto 902 del 2017.

Las medidas cautelares solicitadas necesariamente tienen incidencia económica por cuanto se busca prevenir que la parte demanda ejecute los actos de desalojo que se ordenan en la resolución objeto de nulidad en la demanda, la cual tiene como pretensión principal y como consecuencia de la declaratoria de nulidad, la adjudicación de un predio baldío de la nación, que necesariamente tiene y representa un valor económico, tanto de la tierra como de las mejoras que el ocupante ha ejecutado en ella, en el ejercicio legítimo de la ocupación con miras a cumplir con los requisitos legales para la adjudicación.

De otro lado la ANT en cumplimiento de las ordenes emanadas de la Sentencia SU 426 del 2016 viene ejecutando acciones en el territorio con miras a legalizar la tenencia y/o ocupación de los predios baldíos ubicados en la Vereda de El Provenir del Municipio de Puerto Gaitán, dentro de los cuales se encuentra el predio SAN FELIPE, ocupado y explotado legal y legítimamente por la demandante, con el inminente riesgo de resultar afectada y vulnerada por las acciones que ejecute la Agencia Nacional de Tierras, por lo que se hace necesaria, conveniente, procedente, justa y viable jurídicamente acceder a las medidas cautelares solicitadas de ORDENAR a la entidad aquí demandada, para que se abstenga de ejecutar cualquier acto en contra de la demandante y en el predio denominado SAN FELIPE, que ocupa y explota, salvaguardando sus derechos fundamentales que han sido amparados tanto por la sentencia SU 426 del 2016 como por la sentencia T 00024 de 2018 proferida por el Juzgado del Circuito de Familia de Puerto López, hasta tanto se defina jurídicamente el presente proceso.

Sírvase Honorable Magistrado, una vez surtido el trámite legal, decretar las cautelas solicitadas, por ser conducentes y procedentes.

Cordialmente;



CARLOS DANIEL VARGAS BACCI
C. C. No. 17.321.780 de V/cio.
T. P. No. 84.436 del C S J.

Bogotá D.C., 2020-10-01 10:36

07 de Octubre de 2020

Al responder cite este Nro.
20204100987781

Documento Firmado Digitalmente
El presente documento contiene una firma digital válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la ley 527 de 1999.

PNnts8-bUWtjX-J5lfdN-9D83-Qb3ZC

Señores
ALEXANDRO RIOBUENO ROMERO
Presidente - Asociación de Pequeños Agricultores de la Región del Rio Meta "ASOYOPOS"
Carlos Emilio Romero
Asesor Jurídico - Asociación de Pequeños Agricultores de la Región del Rio Meta "ASOYOPOS"
Villavicencio - Meta
Email: carloseromerog@hotmail.com

Asunto: Respuesta a su derecho de petición radicado ANT No. 20206200600172 de fecha 9 de septiembre de 2020.

Respetados señores.

En atención al derecho de petición relacionado en el asunto, mediante el cual solicitan una serie de peticiones, de la manera más atenta me permito dar respuesta de fondo a sus solicitudes en los siguientes términos:

Con relación al numeral 1 de la petición mediante el cual solicitan:

> *«… Se nos remita copia del informe de visita ocular que la A N T, practico a los predios ubicados en la vereda el Porvenir, Municipio de Puerto Gaitán, departamento del Meta, durante las dos últimas semanas del mes de agosto del año que cursa …»* [1]

Conforme información remitida por la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación[2], respetuosamente me permito manifestar lo siguiente:

La Subdirección de Administración de Tierras de la Nación, en aras de dar cumplimento a las funciones que le asisten como administrador del predio denominado "El Porvenir", ubicado en el municipio de Puerto Gaitán (Meta), ha venido generando una serie de actuaciones de administración que, en términos generales, consisten en la realización de actividades de caracterización socioeconómica de los ocupantes e identificación del uso actual de los predios, instalación de vallas como actos de señor y dueño y realización de visitas periódicas a campo con el fin de individualizar las ocupaciones, hacer seguimiento y verificación de las mismas.

[1] *Cursiva fuera del texto original.*

[2] *Información remitida a traves del Memorando No. 20204300200943 del 25 de septiembre de 2020.*

Documento Firmado Digitalmente
El presente documento contiene una firma digital válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la ley 527 de 1999.

PNnts8-bUWtjX-J5lfdN-9D83-Qb3ZC

Ahora bien, teniendo en cuenta las excepciones de acceso a la información de que trata la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la información Pública Nacional, me permito indicar que la copia del informe de visita técnica que la ANT práctico en el predio El Porvenir, no es posible aportarla, dado que en el mismo se relacionan datos específicos tanto de las personas que ejercen ocupación como de los bienes ocupados; esto, con sustento en los artículos 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014; considerando la importancia de no vulnerar los derechos de las personas naturales que se encuentra inmersas dentro del proceso. Es preciso indicar que la información recaudada por esta Agencia, atiende a una orden constitucional en la cual se ven involucradas familias que han sido víctimas del conflicto armado y por lo tanto es menester de esta entidad salvaguardar su integridad.

Con relación al numeral 2 de la petición mediante el cual solicitan:

> *«…se me informe si la UNIDAD AGRICOLA FAMILIAR, para el municipio de Puerto Gaitán, departamento del Meta, ha sido modificada, en los últimos 10 años, **EN CASO CIERTO**, se me expida con cargo a mi costa, copia de los actos administrativos que contienen dicha modificación…».*[3]

Me permito informar que, la Unidad Agrícola Familiar - UAF para el municipio de Puerto Gaitán, departamento del Meta, no ha sido modificada en los últimos 10 años, esto es, los tres rangos de UAF para este municipio se mantienen de conformidad con la Resolución No. 041 de 1996 así:

a. Zona Relativamente Homogénea No. 5 - De Serranía: Comprendida en el rango de 1360 a 1840 hectáreas.

Comprende la región situada al sur del siguiente lindero: de la desembocadura del Caño Canalete en el río Manacacías, línea recta imaginaria en dirección este, hasta las cabeceras o nacimientos del Caño Catanaribo aguas abajo hasta su desembocadura en el río Planas, por éste aguas abajo hasta la unión con el río Tillavá, en donde toma el nombre de río Vichada, se sigue por éste aguas abajo hasta la intersección con la división político administrativa de los Departamentos Meta y Vichada. Se exceptúan los vagones del río Tillavá zonas que originalmente corresponden o correspondieron a bosque primario.

b. Zona Relativamente Homogénea No. 6 – Sabanas 1: Comprendida en el rango de 102 a 138 hectáreas.

Comprende los vegones del río Tillavá, zonas que originalmente corresponden o correspondieron a bosque primario.

c. Zona Relativamente Homogénea No. 7 – Sabanas 2: Comprendida en el rango de 680 a 920 hectáreas.

Comprende la región situada al norte del siguiente lindero: de la desembocadura del Caño Canalete en el río Manacacías, línea recta imaginaria en dirección este, hasta las cabeceras del Caño Catanaribo, se sigue por este Caño hasta su desembocadura en el río Planas, se sigue por éste aguas abajo hasta la unión con el río Tillavá, en donde toma el nombre de río

[3] *Cursiva fuera del texto original.*

Documento Firmado Digitalmente
El presente documento contiene una firma digital válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la ley 527 de 1999.

PNnts8-bUWtjX-J5lfdN-9D83-Qb3ZC

Vichada, se sigue por el Vichada aguas abajo hasta la intersección de éste con la división político administrativa de los departamentos del Meta y Vichada.

No obstante, resulta importante informar que la Agencia Nacional de Tierras continúa haciendo uso de la Unidad Agrícola Familiar por Zona Relativamente Homogénea definida para el municipio de Puerto Gaitán - Meta, únicamente en relación con los procedimientos de adjudicación entregados por el extinto Incoder que iniciaron y continúan su estudio bajo en imperio de la Ley 160 de 1994, y con ocasión al régimen de transición previsto en el Decreto Ley 902 de 2017, cuando se reúnan las condiciones necesarias para tal fin.

Así las cosas, con la entrada en vigor del Decreto Ley 902 de 2017, norma que introdujo al ordenamiento jurídico el Procedimiento Único de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural, para adelantar, entre otros, el procedimiento de adjudicación de baldíos en favor de personas naturales, la determinación de la UAF se realiza por medio del cálculo de UAF por unidad predial, cuya metodología se encuentra establecida en la Resolución ANT No. 2533 del 2018.

Al respecto se debe señalar que la Resolución ANT No. 740 de 2017 (Plan Operativo del Procedimiento Único de Ordenamiento Social de la Propiedad), adicionada por el artículo 10 de la Resolución ANT No. 108 de 2018, en lo relacionado con el cálculo de la Unidad Agrícola Familiar, dispuso que cuando en desarrollo del Procedimiento Único de Ordenamiento Social de la Propiedad de qué trata el Decreto Ley 902 de 2017, quien opte por la adjudicación de un predio baldío conforme a lo señalado en el Decreto Ley 902 de 2017, la Unidad Agrícola Familiar – UAF- será calculada para cada caso individual bajo la metodología de UAF predial.

En este sentido, las solicitudes de adjudicación de baldíos presentadas ante el entonces Incoder, y que, de acuerdo con sus particularidades deban continuar su estudio bajo las reglas del mencionado Procedimiento Único de que trata el Decreto Ley 902 de 2017, le es aplicable el cálculo de las UAF predial tipo haciendo uso de la metodología adoptada a través de la Resolución ANT No. 2533 de 2018.[4] Igual tratamiento reciben las solicitudes de adjudicación de baldíos presentadas ante la ANT a partir de la entrada en vigencia del Decreto Ley 902 de 2017.

Cabe indicar que resultado del cálculo de UAF será definido de manera particular por la ANT a través del correspondiente informe técnico para el predio o territorio correspondiente.

Con relación al numeral 3 de la petición mediante el cual solicitan:

> *«… se nos informe si la UNIDAD AGRICOLA FAMILIAR, para la VEREDA DEL PORVENIR del municipio de Puerto Gaitán, departamento del Meta, ha sido modificada, en los últimos 10 años, EN CASO CIERTO, se me expida con cargo a mi costa, copia del acto administrativo que contienen* [sic] *dicha modificación y la correspondiente constancia de su publicación…».*[5]

[4] *Por la cual se adopta la Guía Operativa de cálculo de UAF Predial y se desarrollan las excepciones contempladas en el artículo 26 del Decreto Ley 902 de 2017, que permite la adjudicación de extensiones inferiores a la UAF Predial.*
[5] *Cursiva fuera del texto original.*

Documento Firmado Digitalmente
El presente documento contiene una firma digital válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la ley 527 de 1999.

PNnts8-bUWtjX-J5lfdN-9D83-Qb3ZC

Me permito reiterar que, la Unidad Agrícola Familiar – UAF por Zona Relativamente Homogénea para el municipio de Puerto Gaitán, Meta, donde se encuentra ubicada la vereda El Porvenir, no ha sido modificada en los últimos 10 años. Por tanto, como se mencionó en el numeral 2 del presente oficio, los tres rangos de UAF para este municipio se mantienen de conformidad con la Resolución No. 041 de 1996.

No obstante, resulta importante recordar que para llevar a cabo el Ordenamiento Social de la Propiedad (Procedimiento Único) en cumplimiento a la sentencia **SU- 426 de 2016**, dentro del territorio que comprende los predios baldíos del territorio conocido actualmente como el "El Porvenir", conforme a su naturaleza jurídica y condiciones particulares de los aspirantes, la Unidad Agrícola Familiar - UAF no se establece por medio de la Resolución 041 de 1996, sino que se realiza a nivel predial de acuerdo al procedimiento establecido en la Guía Operativa de Cálculo de UAF Predial de la Resolución No. 2533 de 2018[6]. Esto se debe, entre otras cosas, a que es necesario garantizar una distribución equitativa de la tierra que logre beneficiar a todos los *Ocupantes Históricos* del territorio definidos así por la H Corte Constitucional, así como a los demás ocupantes que reúnan las condiciones para ser beneficiarios.

Así las cosas, la determinación de UAF predial se realizó una vez se recolectó y analizó información de campo, en donde se verificaron las unidades cartográficas de suelos, capacidad de uso de suelos, costos de sistemas de producción de la zona, usos actuales de suelos, usos de suelo permitidos; asimismo, se recopilaron datos de la tradición productiva y cultura de los habitantes del predio. Igualmente, se tomó como referencia la información reportada por la UPRA y las recomendaciones de uso reportados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y demás autoridades competentes.

Conforme lo anterior, me permito informar que se realizaron 4 cálculos de UAF predial tipo, los cuales se detallan en el informe agronómico sobre "Determinación Unidad Agrícola Familiar Predial, Predio El Porvenir, Puerto Gaitán, Meta" - el cual se anexa -, y que comprenden: cincuenta y cinco hectáreas más cinco mil novecientos ochenta y cuatro metros cuadrados (55 ha + 5984 m^2) para el uso de suelo Agropecuario y Unidad Cartográfica AVD; ochenta y siete hectáreas más siete mil quinientos setenta y siete metros cuadrados (87 ha + 7577 m^2) para el uso de suelo Agropecuario y Unidad Cartográfica RVK y VVC; cincuenta y cinco hectáreas más dos mil quinientos ochenta y ocho metros cuadrados (55 ha + 2588 m^2) para el uso de suelo Forestal Protector-Productor y; cuarenta y cuatro hectáreas más dos mil setecientos veintidós metros cuadrados (44 ha + 2722 m^2) para el uso de suelo Forestal Protector.

Con relación al numeral 4 de la petición mediante el cual solicitan:

> *«… Se nos informe si la resolución No. 041 del 1996 expedida por la Junta Directiva del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria INCORA ha sido modificada o adicionada, EN CASO CIERTO, se me expida con cargo a mi costa copia de las modificaciones y adiciones…».*[7]

[6] *"Por la cual se adopta la Guía Operativa de UAF Predial y se desarrollan las excepciones contempladas en el artículo 26 del Decreto 902 de 2017, que permite la adjudicación de extensiones inferiores a la UAF predial".*

[7] *Cursiva fuera del texto original.*

Me permito informar que la Resolución No. 020 de 1998[8] expedida por la Junta Directiva del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria INCORA, modificó y adicionó la Resolución No. 041 del 24 de septiembre de 1996 *"Por la cual se determinan las extensiones de las unidades agrícolas familiares, por zonas relativamente homogéneas, en los municipios situados en las áreas de influencia de las respectivas gerencias regionales"*, expedida por la también extinta Junta Directiva del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria INCORA.

Igualmente, para su conocimiento, me permito informar que mediante Acuerdo No. 08 del 19 de octubre de 2016, expedido por el Consejo Directivo de la ANT, se adoptaron las disposiciones establecidas en la Resolución No. 041 de 1996 y el Acuerdo No. 014 de 1995, expedidas por la junta directiva del extinto INCORA, haciéndolo extensivo a sus modificaciones y adiciones dentro de las cuales se incluye la Resolución 020 de 1998, la cual, como se manifestó, modificó y adicionó la Resolución No. 041 de 1996.

No obstante, lo anterior, resulta importante señalar que la Resolución No. 020 de 1998 no modificó ni adicionó la Unidad Agrícola Familiar – UAF correspondiente al municipio de Puerto Gaitán, Meta; sin embargo, con el propósito de atender su solicitud, de manera atenta me permito adjuntar copia simple de la citada resolución.

En los anteriores términos, se remite respuesta de fondo a su petición.

Cordialmente,

JULIA ELENA VENÉGAS GÓMEZ
Subdirectora de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas

Anexo: Informe agronómico - "Determinación Unidad Agrícola Familiar Predial, Predio El Porvenir, Puerto Gaitán, Meta"
Resolución 020 de 1998.

Preparó: Angie Natalia Moreno – Abogada Contratista SATN-ANT
Preparó: Liliana Moreno – Ingeniera Agrónoma Convenio FAO-ANT
Preparó: Marcela Cuervo - Abogada Contratista Convenio FAO-ANT
Revisó: Jhonattan Acevedo F. – Abogado Contratista Subdirección-ANT

[8] *"Por la cual semodifica y adiciona la Resolución No. 041 expedida por la Junta Directiva el 24 de septiembre de 1996".*

Documento Firmado Digitalmente
El presente documento contiene una firma digital válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la ley 527 de 1999.
PNnts8-bUWtjX-J5lfdN-9D83-Qb3ZC

CARLOS DANIEL VARGAS BACCI
ABOGADO ESPECIALIZADO

Modificaciones Decreto 1071 de 2015

DECRETO	EPÍGRAFE
1298 de 2015	Por el cual se adiciona un título a la Parte 7 del Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, relacionado con el Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural
1449 de 2015	Por medio del cual se modifica el Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural en lo relacionado con la reglamentación parcial de la Ley 1731 de 2014 y se dictan otras disposiciones"
1648 de 2015	Por el cual se modifica el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural en lo relacionado con el Fondo Nacional de la Porcicultura
1780 de 2015	Por el cual se adiciona el Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, en lo relacionado con la adopción de medidas para administrar, fomentar y controlar la actividad de la acuicultura.
1934 de 2015	Por medio del cual se modifica el Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, en lo relacionado con la reglamentación y valor del Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Rural - VISR
2020 de 2015	Por el cual se adiciona un título a la Parte 14 del Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural relacionado con el Fondo Nacional Agrario
2179 de 2015	Por medio del cual se modifica el Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, en lo relacionado con la definición de Pequeño Productor para los fines de la Ley 16 de 1990
2537 de 2015	Por medio del cual se adiciona el Título 5 a la Parte 10 del Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, relacionado con la asunción temporal de la administración de las contribuciones parafiscales
13 de 2016	Por el cual se adiciona y modifica el Decreto Único del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, reglamentado el parágrafo tercero del artículo 106 de la Ley 1753 de 2015
440 de 2016	Por el cual se modifica el Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, en lo relacionado con la Parte 15, Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas
947 de 2016	Por el cual se adicionan unas disposiciones a la Parte 10 del Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural

Carrera 33 Numero 36 – 29 Oficina 201 Edificio Pasadena Plaza
Telefax: 0986 633768 Cel: 350 – 2713973 Email: cadavabacci@hotmail.com
Villavicencio – Meta.

1273 de 2016	Por el cual se adiciona una Parte al Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural relacionado con las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres)
1524 de 2016	Por el cual se modifica parcialmente el artículo 2.1.3.5 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo, Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural
1766 de 2016	Por el cual se modifican unos artículos de los Capítulos 1 y 2 del Título 5 de la Parte 13 del Libro 2 del Decreto Único del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural 1071 de 2015
2051 de 2016	Por el cual se adiciona un Capítulo al Título 1 de la Parte 15 del Decreto 1071 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, en lo relacionado con el Registro Único de Predios y Territorios Abandonados - RUPTA
1800 de 2017	Por el cual se adiciona un artículo al Título 21 de la Parte 14 del Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural relacionado con el Fondo Nacional Agrario.
2113 de 2017	Por el cual se adiciona un Capítulo al Título 3 de la Parte 13 del Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural
2193 de 2017	Por el cual se modifica el artículo 2.10.5.3 del Título 5 de la Parte 10 del Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, y se adiciona el artículo 2.10.6.5. al Título 6 de la Parte 10 del mismo decreto
2208 de 2017	Por el cual se reglamentan los artículos 20 y 21 de la Ley 1731 de 2014, y se adiciona el Título 3 a la Parte 17 del Libro 2 del Decreto 1071 de 2015
209 de 2018	Por el cual se adiciona el Capítulo 11 al Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, relacionado con la administración y ejecución de los subsidios de vivienda de interés social rural y prioritario rural
691 de 2018	Por el cual se modifica el artículo 2.1.2.2.8 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, en lo relacionado con la definición y calificación de pequeño productor para los fines de la Ley 16 de 1990 y se deroga el artículo 2.1.2.2.9 del mismo
756 de 2018	Por el cual se adiciona un parágrafo al artículo 2.14.16.1 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural en lo relacionado a los programas especiales de dotación de tierras
758 de 2018	Por medio del cual se adicionan los artículos 2.5.5.4.4, 2.5.5.4.5 y 2.5.5.4.6 al Capítulo 4 del Título 5 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1068 y se adiciona un parágrafo al artículo 2.14.17.10 del Título 17 de la Parte 14 del Libro 2 del Decreto 1071 de 2015

Carrera 33 Numero 36 – 29 Oficina 201 Edificio Pasadena Plaza
Telefax: 0986 633768 Cel: 350 – 2713973 Email: cadavabacci@hotmail.com
Villavicencio – Meta.

931 de 2018	Por el cual se crea el Sistema de Trazabilidad Vegetal y se incluye como Título 11 de la Parte 13 del Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural
1081 de 2018	Por el cual se modifica el numeral 3 del artículo 2.10.4.5. y se adiciona un parágrafo al artículo 2.10.4.12 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrtivo Agropecario, Pesquero y de Desarrollo Rural
1167 de 2018	Por el cual se modifica el artículo 2.15.1.1.16 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo AGropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, relacionado con las zonas microfocalizadas
2458 de 2018	Por medio del cual se adiciona el Título 7 a la Parte 12 del Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, en lo relacionado con el Seguro Agropecuario
109 de 2019	Por el cual se modifica el artículo 2.11.4.2 del Título 4 de la Parte 11 del Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y Desarrollo Rural
1052 de 2019	Por medio del cual se modifica el artículo 2.2.1.2.2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamnntario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, relacionado con la modalidad de Mejoramiento de Vivienda y Saneamiento Básico del Subsidio Familiar de Vivienda da Interés Social y Prioritario Rural
2228 de 2019	Por medio del cual se adiciona el Título 6 de la Parte 11 del Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, relacionado con el Fondo de Estabilización de Precios del Café
2257 de 2019	Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.1.3.5 y 2.2.1.3.6 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, relacionados con la distribución de recursos de la Bolsa Nacional y la Bolsa para Atención a Población Víctima del Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social y Prioritario Rural
2317 de 2019	Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.1.2.3, 2.2.1.5.5.2 Y 2.2.1.10.11 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, relacionados con el Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Rural
2398 de 2019	Por el cual se sustituye el Título 3 de la Parte 3 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural 1071 de 2015, relacionado con el certificado de movilización de plantaciones forestales comerciales
130 de 2020	Por el cual se sustituye el Título 1 de la Parte 3 del Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, relacionado con el Certificado de Incentivo Forestal-CIF"
211 de 2020	"Por medio del cual se modifica el Título 7 a la Parte 12 del Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector

	Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, en lo relacionado con el Seguro Agropecuario"
471 de 2020	"Por el cual se deroga el Título 9 de la parte 13 del Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural , en lo relacionado con la política de precios de insumos agropecuarios".
640 de 2020	"Por el cual se adiciona el Título 6 a la Parte 15 del Decreto 1071 de 2015, en lo relacionado con el Registro Único de Predios y Territorios Abandonados Rupta"
822 de 2020	"Por medio del cual se modifica el artículo 2.2.1.2.2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, relacionado con la modalidad de mejoramiento de vivienda y saneamiento básico del Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social y Prioritario Rural"
902 de 2020	"Por medio del cual se modifica el parágrafo del artículo 2.2.1.5.5.2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, relacionado con la asignación condicionada del Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social y Prioritario Rural"

CAPÍTULO 4. Requisitos para la Adjudicación Baldíos Inadjudicables. Prohibiciones

Artículo 2.14.10.4.1. *Requisitos.* Las personas naturales, las empresas comunitarias y las cooperativas campesinas que soliciten la adjudicación de un terreno baldío, deberán demostrar que tienen bajo explotación económica las dos terceras partes de la superficie cuya adjudicación solicitan y que la explotación adelantada corresponde a la aptitud del suelo establecida por el INCODER en la inspección ocular. Los peticionarios deberán acreditar una ocupación y explotación previa no inferior a cinco (5) años y que su patrimonio neto no sea superior a mil (1000) salarios mínimos mensuales legales. Cuando se trate de empresas comunitarias y de cooperativas campesinas, para efectos de la prohibición anterior deberá tenerse en cuenta, además, la suma de los patrimonios netos de los socios cuando estos superen el patrimonio neto de la sociedad.

El tiempo de ocupación de persona distinta del peticionario, no es transferible a terceros en ningún caso.

En la solicitud de adjudicación, el peticionario deberá manifestar, bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado al formular su pretensión, si

CAPÍTULO 4. Requisitos para la Adjudicación Baldíos Inadjudicables. Prohibiciones

Articulo 2.14.10.4.1. ***Requisitos.*** Las personas naturales, las empresas comunitarias y las cooperativas campesinas que soliciten la adjudicación de un terreno baldío, deberán demostrar que tienen bajo explotación económica las dos terceras partes de la superficie cuya adjudicación solicitan y que la explotación adelantada corresponde a la aptitud del suelo establecida por el INCODER en la inspección ocular. Los peticionarios deberán acreditar una ocupación y explotación previa no inferior a cinco (5) años y que su patrimonio neto no sea superior a mil (1000) salarios mínimos mensuales legales. Cuando se trate de empresas comunitarias y de cooperativas campesinas, para efectos de la prohibición anterior deberá tenerse en cuenta, además, la suma de los patrimonios netos de los socios cuando estos superen el patrimonio neto de la sociedad.

El tiempo de ocupación de persona distinta del peticionario, no es transferible a terceros en ningún caso.

En la solicitud de adjudicación, el peticionario deberá manifestar, bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado al formular su pretensión, si es o no propietario o poseedor a cualquier título de otros inmuebles rurales en el territorio nacional, y además, si se halla o no obligado legalmente a presentar declaración de renta y patrimonio.

(Decreto 2664 de 1994, art.8. Concordancia con la Ley 1728 de 2014)

Articulo 2.14.10.4.2. ***Baldíos Inadjudicables.*** No serán adjudicables los terrenos baldíos que se hallen en las siguientes circunstancias:

1. Los aledaños a los Parques Nacionales Naturales. Dentro de la noción de aledaño, quedan comprendidas las zonas amortiguadoras que se hayan determinado o determinen en la periferia del respectivo Parque Nacional Natural.

2. Los que hubieren sido seleccionados por entidades públicas para adelantar planes viales u otros de igual significación para el desarrollo económico y social del país o de la región, cuya construcción pueda incrementar el precio de las tierras por factores distintos a su explotación económica.

3. Los que tuvieren la calidad de inadjudicables, conforme a la ley, o que constituyan reserva territorial del Estado.

Parágrafo. No podrán hacerse adjudicaciones de baldíos donde estén establecidas comunidades indígenas o que constituyan su hábitat, sino únicamente y con destino a la constitución de resguardos indígenas.

Igual prohibición regirá respecto de los territorios tradicionalmente utilizados por pueblos indígenas nómadas, seminómadas o agricultores itinerantes para la caza, recolección y horticultura que se hallaren situados en zonas de reserva forestal a la fecha de vigencia de la Ley 160 de 1994, los cuales sólo podrán destinarse a la constitución de resguardos indígenas, y además, cuando se tratare de terrenos baldíos determinados por el Instituto con el carácter de reservas indígenas.

(Decreto 2664 de 1994, art.9)

Articulo 2.14.10.4.3. ***Prohibiciones.*** Además de las previstas en la ley y en otras disposiciones vigentes, no podrán adjudicarse tierras baldías:

1. A quienes habiendo sido adjudicatarios de terrenos baldíos, los hubieren enajenado antes de cumplirse quince (15) años desde la fecha de la titulación anterior.

2. A las personas naturales y jurídicas que sean propietarias, o poseedoras a cualquier título, de otros predios rurales en el territorio nacional.

3. A quienes no reúnan los requisitos o se hallen afectados por las limitaciones señaladas en la Ley 160 de 1994.

(Decreto 2664 de 1994, art. 10)

Carrera 33 Numero 36 – 29 Oficina 201 Edificio Pasadena Plaza
Telefax: 0986 633768 Cel: 350 – 2713973 Email: cadavabacci@hotmail.com
Villavicencio – Meta.

CAPÍTULO 5. Procedimiento para la Adjudicación

2.14.10.5.1. ***Solicitud de Adjudicación.*** Las personas naturales o jurídicas que requieran la adjudicación de un terreno baldío, deberán presentar la solicitud ante el INCODER, indicando los siguientes datos:

1. **Personales:**

a. Nombre y apellidos, edad, domicilio, documento de identidad y estado civil del peticionario. Cuando se trate de empresas comunitarias y cooperativas campesinas se exigirán estos mismos datos respecto de todos sus socios.

b. Nombre y apellido del cónyuge, compañero o compañera permanente, con su documento de identidad si el peticionario lo conoce, así como el nombre y apellido completos de sus hijos menores.

c. Manifestar, bajo la gravedad del juramento, si ha sido él o su cónyuge o compañero o compañera permanente e hijos menores, adjudicatarios de baldíos, o han adquirido el dominio o la posesión, a cualquier título, de otros predios rurales en el territorio nacional, indicando la fecha correspondiente. Con base en lo manifestado por el peticionario, y cuando sea necesario para decidir la solicitud de adjudicación, el INCODER solicitará la información que considere pertinente sobre escrituras y resoluciones de adjudicación de tierras baldías y demás documentos que le permitan establecer si dichas personas conservan aún el dominio o la posesión de tales bienes o si los enajenaron antes de cumplirse el término previsto por la Ley 160 de 1994.

d. Manifestar, bajo la gravedad del juramento, si se halla o no obligado legalmente a presentar declaración de renta y patrimonio, con arreglo a las normas vigentes.

e. Si ha sido adjudicatario de terrenos baldíos y los ha enajenado, aportando a la solicitud el folio de matrícula inmobiliaria en donde conste dicha venta.

f. Manifestar si, dentro de los cinco (5) años anteriores a la fecha de la solicitud, ha tenido la condición de funcionario, contratista o miembro de las Juntas o Consejos Directivos de las entidades públicas que integran los diferentes subsistemas del Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino. Si el peticionario es persona jurídica, deberá expresar si uno o varios de sus socios han tenido las vinculaciones o calidades mencionadas con los referidos organismos públicos.

2. Con relación al predio:

a. Nombre y ubicación del terreno, indicando el departamento, municipio, corregimiento o vereda.

b. La afirmación de ser baldío.

c. Área aproximada.

d. Los colindantes del predio, con referencia a los puntos cardinales.

e. Extensión de los predios baldíos colindantes que se hallen poseídos por el peticionario, su cónyuge o compañera o compañero permanente o sus hijos menores.

f. Clase de explotación adelantada en el inmueble, con la determinación del porcentaje de la zona cultivada y de la inculta.

Parágrafo 1. A la solicitud de adjudicación podrán acompañarse planos elaborados por personas particulares, por las oficinas de catastro u otras entidades públicas, si los solicitantes disponen de éstos.

Parágrafo 2. Cuando la solicitud verse sobre predios a los que hace referencia el artículo 5 del Decreto Ley 1415 de 1940, se tendrá en cuenta que el peticionario sea colombiano de nacimiento.

(Decreto 2664 de 1994, art.11, modificado por el Decreto 982 de 1996, art. 1)

Artículo 2.14.10.5.2. *Documentos*. Quien solicite la adjudicación de un baldío debe presentar, con la solicitud respectiva, los siguientes documentos:

1. La cédula de ciudadanía. El funcionario que reciba la solicitud verificará si los datos contenidos en la misma corresponden a los del respectivo documento de identidad, de lo cual dejará constancia en la petición. En ningún caso podrá retenerse el documento de identidad del peticionario o solicitar copia del mismo.

2. Declaraciones de renta y patrimonio correspondientes a los tres (3) años anteriores a la fecha de la solicitud, en caso de hallarse obligado legalmente a presentar tales declaraciones, con sus respectivos anexos o soportes, con el objeto de que sirvan como prueba de la explotación económica.

3. Certificación sobre la vigencia y representación legal de la persona jurídica expedida por autoridad competente, donde conste el domicilio, la duración y el objeto social. La fecha de expedición de este documento no podrá ser superior a dos (2) meses.

(Decreto 2664 de 1994, art.12, modificado por el Decreto 982 de 1996, art. 2)

Artículo 2.14.10.5.3. *Estudio de la solicitud*. Antes de aceptar la solicitud, el INCODER verificará si el peticionario, su cónyuge o compañera o compañero permanente e hijos menores son propietarios o poseedores a cualquier título de predios rurales en el territorio nacional; si son adjudicatarios de terrenos baldíos, o si lo fueron en alguna época, los han enajenado y no han transcurrido quince (15) años desde la fecha de la titulación anterior, si han sido beneficiarios con la adjudicación de terrenos baldíos efectuados a sociedades de las que los interesados formen parte, y además, verificar las que figuren en cabeza de su cónyuge, compañera o compañero permanente e hijos menores.

Se tendrá en cuenta también, en el proceso de estudio de la solicitud, si el peticionario se halla incurso en alguna de las prohibiciones o limitaciones señaladas en la ley para la titulación de las tierras baldías.

Verificado que el peticionario reúne los requisitos legales, se procederá a aceptar la solicitud.

Parágrafo 1. En aplicación de la presunción de buena fe, para adelantar el trámite de la solicitud y verificar la información correspondiente, el servidor público tendrá en cuenta la información que suministre el peticionario y la que exista en los archivos del INCODER.

Parágrafo 2. De conformidad con el artículo 69 de la Ley 160 de 1994 y en concordancia con los artículos 2.14.10.4.2. y 2 2.14.10.5.3. del presente decreto, previo al estudio de la solicitud de adjudicación de baldíos, la Dirección Técnica de Baldíos y/o las Direcciones Territoriales respectivas del INCODER solicitarán a la Dirección de Asuntos Étnicos de esta entidad certificación sobre la existencia o no, en el área pretendida, de solicitudes de constitución, saneamiento o ampliación de resguardos indígenas, o reestructuración de resguardos de origen colonial o republicano, así como medidas de protección de la posesión de territorios ancestrales y/o tradicionales. De no encontrarse información registrada sobre dichos procesos, deberá solicitarse información adicional al Ministerio del Interior, a las entidades territoriales pertinentes y/o a las organizaciones indígenas, para que se pronuncien sobre la existencia o no de comunidades indígenas en el área pretendida, la cual será remitida al Ministerio del Interior para su respectiva validación.

(Decreto 2664 de 1994, art.13, modificado por el Decreto 982 de 1996, art. 3; parágrafo 2 adicionado por el Decreto 2333 de 2014, art. 11)

Artículo 2.14.10.5.4. ***Iniciación del trámite.*** Realizado el estudio de la solicitud, si ésta cumple con los requisitos correspondientes, se expedirá una providencia por la cual se acepta la solicitud, se disponga iniciar el trámite de adjudicación y se ordene realizar las siguientes diligencias:

1. La comunicación de esta providencia al interesado, al Procurador Agrario o a su comisionado, a los colindantes señalados por el peticionario y al funcionario de mayor categoría de la Entidad del Sistema Nacional Ambiental, con jurisdicción en el municipio en donde estuviere ubicado el predio objeto de la solicitud;

2. La publicidad de la solicitud de adjudicación; y,

La realización de la diligencia de inspección ocular correspondiente, la cual comprenderá la identificación predial. Esta identificación predial se realizará cuando el peticionario no haya acompañado a la solicitud el plano o, habiéndolo adjuntado, éste no se haya elaborado de conformidad con las normas técnicas establecidas por el INCODER.

En la misma providencia se podrá señalar la fecha para practicar la diligencia de inspección ocular. En todo caso dicha diligencia no se podrá practicar antes de transcurridos diez (10) días hábiles contados a partir de la última publicación de los avisos en la emisora radial o en el periódico correspondiente, de que trata el artículo 2.14.10.5.6. del presente decreto.

Parágrafo 1. La providencia que ordena iniciar el procedimiento de adjudicación se comunicará a las personas determinadas en el numeral 1° del presente artículo, de la siguiente manera:

La comunicación a los colindantes y al interesado se efectuará mediante oficio que se entregará personalmente o se remitirá a los respectivos predios y a la dirección que éste haya indicado, de todo lo cual se dejará constancia.

Cuando en el predio no se encuentre ninguna persona que reciba el oficio, éste se fijará en la edificación que allí se encuentre o, en su defecto, en un lugar de acceso a dicho predio, de lo cual se dejará constancia.

La comunicación a los funcionarios públicos se realizará mediante oficio que se enviará a sus respectivos despachos, acompañado de una copia de la solicitud de adjudicación.

El oficio mediante el cual se realiza la comunicación de la providencia, deberá contener el nombre del peticionario, el nombre del predio pretendido en adjudicación y su ubicación geográfica y linderos, de acuerdo con la información suministrada por el peticionario. Igualmente, si en dicha providencia se hubiere fijado, se indicará la fecha en que se practicará la diligencia de inspección ocular. Dicho oficio podrá enviarse a sus destinatarios por correo certificado, cuando esta clase de servicio exista en el municipio de ubicación del predio.

Parágrafo 2. Si la solicitud no se ajusta a los requisitos exigidos, se requerirá al peticionario para que efectúe los ajustes y complementos que fueren pertinentes, advirtiéndole que si no se da respuesta en el término de dos (2) meses se procederá a ordenar el archivo de la solicitud, de acuerdo con lo previsto en las disposiciones estatutarias que regulen el derecho de petición. Si la solicitud fuere negada, la providencia que así lo determine se notificará personalmente al peticionario.

(Decreto 2664 de 1994, art.14, modificado por el Decreto 982 de 1996, art. 4)

Artículo 2.14.10.5.5. ***Planos del terreno objeto de la solicitud de adjudicación.*** El INCODER realizará por medio de sus funcionarios o con personas naturales o jurídicas vinculadas por contrato, la identificación predial de los terrenos baldíos.

El INCODER podrá aceptar los planos aportados, elaborados por particulares o por otros organismos públicos, siempre que se ajusten a las normas técnicas expedidas por el Consejo Directivo.

De conformidad con lo establecido en el artículo 78 de la Ley 160 de 1994, por los servicios de titulación se cobrará a los adjudicatarios las tarifas máximas que señale el Consejo Directivo del INCODER, las cuales podrán incluir el costo de las diversas actividades de titulación, considerando dentro de éstas la publicación de los avisos correspondientes.

(Decreto 2664 de 1994, art. 15, modificado por el Decreto 982 de 1996, art. 5)

Artículo 2.14.10.5.6. ***Publicidad de la solicitud de la adjudicación.*** Para efectos de la publicidad de la solicitud de adjudicación, se deberán realizar las siguientes diligencias:

1. Publicar el aviso de solicitud de adjudicación en el boletín que para el efecto produzca el INCODER

2. Publicar el mismo aviso, por dos veces, con un intervalo no menor de cinco (5) días calendario, en una emisora radial con cubrimiento en el lugar de ubicación del predio, entre las 7 de la mañana y las 10 de la noche, o en su defecto, en un periódico de amplia circulación en la región donde se encuentre ubicado el predio.

3. Fijar el aviso de la solicitud por el término de cinco (5) días hábiles, en un lugar visible y público de la alcaldía municipal y en las oficinas del INCODER, en donde se adelanta el trámite.

El aviso a que hace referencia el presente artículo se elaborará con base en la información que suministre el peticionario y contendrá los siguientes datos:

a. El nombre del peticionario y su identificación;

b. El nombre del predio solicitado en adjudicación y su ubicación

c. La extensión superficiaria del predio;

d. Los linderos del predio y el nombre de las personas colindantes; y,

e. La fecha en la que se realizará la diligencia de inspección ocular, cuando la misma se haya fijado.

Parágrafo 1. En el expediente se dejará constancia de las diligencias anteriores, debiendo agregarse a éste los ejemplares de los avisos de la solicitud, la certificación expedida por el administrador de la emisora o el representante local o regional del diario, según sea el caso.

Parágrafo 2. En el evento de que no se haya fijado la fecha de la diligencia de inspección ocular en la providencia por la cual se acepta la solicitud y se inicia el trámite de adjudicación, dicha fecha se señalará por auto cuyo contenido se comunicará a través de un aviso que será publicado en una emisora radial con cubrimiento en el lugar de ubicación del predio, entre las 7 de la mañana y las 10 de la noche, o en su defecto, en un periódico de amplia circulación en la región en donde se encuentra el predio. De igual manera, se procederá cuando sea necesario modificar la fecha que haya sido inicialmente señalada.

Parágrafo 3. En el evento de que se haya certificado existencia de procesos de los que trata el parágrafo 2 del artículo 2.14.10.5.3. del presente decreto, o se haya recibido información acerca de la existencia de comunidades indígenas sobre el predio pretendido o colindante, se notificará a la Autoridad Indígena y/o las organizaciones indígenas de carácter nacional sobre la realización de la inspección ocular dentro del procedimiento de adjudicación en tierras baldías. La Autoridad Indígena y/o las organizaciones indígenas de carácter nacional podrán acompañar dichas inspecciones.

(Decreto 2664 de 1994, art. 16, modificado por el Decreto 982 de 1996, art. 6, adicionado por el Decreto 2333 de 2014, art. 12)

Artículo 2.14.10.5.7. ***Inspección ocular.*** Publicada la solicitud, se procederá a realizar, por un funcionario del INCODER, la diligencia de inspección ocular, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 2.14.10.5.8. del presente decreto.

Si en desarrollo de la diligencia de inspección ocular el funcionario del INCODER establece la existencia de otros colindantes, distintos de aquellos que señaló el peticionario en su solicitud y que no tienen el carácter de sucesores o causahabientes de estos últimos, se procederá a hacerles entrega del aviso de que trata el artículo 2.14.10.5.6.del presente decreto, con el fin de que se integren a la actuación. En caso de que éstos no estuvieren presentes se les remitirá dicho aviso, una vez concluida la diligencia.

Practicada la inspección ocular, se continuará con el trámite previsto en el artículo 2.14.10.5.9. y siguientes del presente decreto.

(Decreto 2664 de 1994, art. 17, modificado por el Decreto 982 de 1996, art. 7)

Artículo 2.14.10.5.8. *Práctica de la diligencia de Inspección Ocular*. En la diligencia de inspección ocular que se practique se observarán las siguientes reglas:

1. En la fecha y hora señaladas, con base en el plano aceptable para el INCODER, si el mismo existe, y el expediente que se hubiere conformado, el funcionario que presida la diligencia, en asocio del peticionario, los colindantes, el Agente del Ministerio Público Agrario o su comisionado, y el funcionario que represente la entidad perteneciente al Sistema Nacional Ambiental en el nivel regional, si concurrieren, procederá al examen y reconocimiento del predio para verificar, entre otros, los siguientes hechos:

a. Nombre y localización del inmueble, con indicación del departamento municipio, inspección de policía y vereda o fracción donde se encuentre;

b. Los linderos del predio, con sujeción a los puntos cardinales, y el nombre e identificación de los colindantes suministrados por el peticionario, confrontándolos con el plano que para el efecto se haya elaborado o aportado y, en todo caso, verificándolos directamente en el curso de la diligencia.

c. La clase de explotación del predio, señalando si ésta es adelantada directamente por el peticionario a sus expensa con indicación de la porción ocupada o cultivada y la inculta, su grado de conservación, naturaleza de los cultivos, edificaciones, número y clase de ganados, extensión y estado de los crecimientos y demás mejoras instaladas en el fundo;

d. La explotación adelantada en el inmueble, para determinar si corresponde a la aptitud agropecuaria de los suelos que se establezca en la diligencia.

e. El tiempo de ocupación y aprovechamiento económico del predio se determinará teniendo en cuenta las evidencias de intervención sobre suelos, por el periodo vegetativo de los cultivos permanentes y semipernamente, la composición del hato ganadero, el registro de marcas, las adecuaciones para ganadería, la existencia de pastos mejorados, y otros medios de orden técnico que sean pertinentes.

f. La clase de bosques, señalando si pertenecen a especies maderables de valor comercial; si las fuentes de corrientes de agua son objeto de la protección vegetal exigida por la ley; si es necesario repoblar o conservar los bosques existentes, o si éstos pueden aprovecharse de conformidad con las disposiciones vigentes;

g. Las áreas dedicadas a la conservación de la vegetación protectora, así como las destinadas al uso forestal racional, situadas fuera de las zonas decretadas como reservas forestales o de bosques nacionales; determinar, además, si en el predio hay bosques de páramo, de galería, morichales, humedales, ciénagas, marismas y otros espacios bióticos;

h. Si el predio tiene márgenes o laderas con pendientes superiores a cuarenta y cinco grados (45°);

i. Si el predio está comprendido o no en una zona reservada por el instituto u otra entidad pública, o por la ley; o se hallan establecidas comunidades indígenas, o se hayan destinadas a la titulación colectiva en beneficio de las comunidades negras, según las prescripciones de la Ley 70 de 1993 y sus reglamentos.

Carrera 33 Numero 36 – 29 Oficina 201 Edificio Casaaena Plaza
Telefax: 0986 633768 Cel: 350 – 2713973 Email: cadavabacci@hotmail.com
Villavicencio – Meta.

j. Determinar si el predio hace parte de playones y sabanas comunales, o playones nacionales, o madreviejas desecadas naturalmente de los ríos, lagos, lagunas y ciénagas de propiedad nacional, así como también si se halla dentro de las reservas territoriales del Estado, o comprende bienes de uso público,

k. Indicar si el predio se halla situado dentro de un radio de cinco (5) kilómetros alrededor de las zonas donde se adelanten explotaciones de recursos naturales no renovables,

l. Establecer si el predio es aledaño a Parques Nacionales Naturales constituidos;

m. Determinar si el predio se encuentra dentro de las zonas seleccionadas o reservadas por entidades públicas, para adelantar planes viales u otros de igual significación económica y social para la región o el país;

n. Si se hallan establecidas en el fundo personas diferentes al peticionario, indicando a qué título y la extensión aproximada que ocupan. Para tal efecto, podrá recibir los testimonios o documentos que sean pertinentes;

o. Los demás datos o hechos que el INCODER considere necesario hacer constar en el acta respectiva.

p. Si existe presencia de comunidades indígenas en el área pretendida que ejerzan posesión ancestral y/o tradicional sobre el territorio.

2. Dentro de las diligencias se recibirán los testimonios de los colindantes, los documentos que se presenten y cualquier otra prueba conducente, teniendo en cuenta que todas ellas deben referirse a los hechos objeto de la inspección ocular.

3. En el curso de la diligencia de inspección ocular cualquier tercero podrá formular oposición a la adjudicación, en forma verbal o escrita, de todo lo cual se dejará constancia en el acta. El funcionario que presida la diligencia procederá a instruir al opositor para que, durante el término correspondiente, presente por escrito los fundamentos y las pruebas que acrediten su pretensión.

4. De la diligencia se dejará constancia en un acta, en la cual se indicarán las personas que intervinieron, los hechos y casos examinados y se incorporarán los testimonios, documentos, constancias y oposiciones que se formulen. El acta será firmada por quienes tomaron parte en la diligencia, dejando anotación de quienes no asistieron habiéndole sido comunicada la actuación.

5. Simultáneamente se realizará la identificación predial, cuando no se haya aportado a la actuación el plano a que hace referencia el inciso 2 del artículo 2.14.10.5.5. del presente decreto. En el evento en que no sea posible terminar las actividades de identificación predial durante la diligencia de inspección ocular, podrá culminarse esta diligencia sin perjuicio de que se continúe con la identificación predial. Una vez se encuentre elaborado el plano correspondiente, el mismo se incorporará al expediente.

Parágrafo 1. Para verificar si el predio se explota de acuerdo con las normas sobre protección y utilización racional de los recursos naturales renovables, y si corresponde a la aptitud del suelo establecido en la inspección ocular, se deberá diligenciar el formulario que para el efecto adopte el INCODER en coordinación

con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Igualmente, para verificar el uso del suelo, se diligenciará el formulario que señale el INCODER. Con base en la información contenida en los formularios mencionados, se adoptará la decisión correspondiente.

Cuando la explotación económica adelantada sobre el terreno baldío no corresponda a la aptitud agropecuaria de los suelos que se establezca en la inspección ocular, se dejará constancia de ello en el expediente y se ordenará suspender el procedimiento, hasta cuando el peticionario adopte un plan gradual de reconversión.

Si existiere controversia o duda por parte del INCODER, relacionada con el cumplimiento de las normas sobre protección y utilización racional de los recursos naturales, se solicitará el concepto respectivo a la entidad perteneciente al Sistema Nacional Ambiental en el nivel regional. Si el concepto de la entidad correspondiente del Sistema Nacional Ambiental fuere desfavorable, se archivará el expediente.

Parágrafo 2. En los casos en que el Consejo Directivo del INCODER autorice la titulación de un área distinta a la Unidad Agrícola Familiar (UAF), en la diligencia de inspección ocular se verificará que el predio objeto de adjudicación, cumpla con las condiciones determinadas por dicho Consejo Directivo.

(Decreto 2664 de 1994, art. 19, modificado por el Decreto 982 de 1996, art. 8, adicionado por el Decreto 2333 de 2014, art. 13)

Artículo 2.14.10.5.9. *Aclaración de la Inspección Ocular y Fijación del Negocio en lista*. Practicada la diligencia de inspección ocular, se dispondrá publicar un aviso por una vez en una emisora radial con cubrimiento en el lugar de ubicación del predio, entre las 7 de la mañana y las diez de la noche, o en su defecto, en un periódico de amplia circulación en la región en donde se encuentre situado el terreno. En este aviso se señalará:

1. El nombre del peticionario y su identificación;
2. El nombre del predio solicitado en adjudicación;
3. La extensión superficiaria;
4. Su ubicación;
5. Los linderos y nombres de los colindantes; y,
6. La circunstancia de que se pueden solicitar aclaraciones a la inspección ocular y que el negocio se fijará en lista.

Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la publicación del aviso, los interesados podrán solicitar por escrito la aclaración de la inspección ocular. Igualmente, los terceros a los cuales se haya enviado el aviso al que se refiere el artículo 2.14.10.5.6. del presente decreto, podrán pedir aclaraciones dentro del mismo término o dentro de los tres (3) días siguientes al envío del aviso respectivo.

Vencido el término anterior se fijará el negocio en lista por cinco (5) días hábiles, en la Oficina del INCODER que adelanta el procedimiento.

(Decreto 2664 de 1994, art. 20, modificado por el Decreto 982 de 1996, art. 9)

Artículo 2.14.10.5.10. ***Oposición a la Adjudicación.*** A partir del auto que acepta la solicitud de adjudicación y hasta el vencimiento del término que fija el negocio en lista, quienes se crean con derecho, conforme a la ley, podrán formular oposición a la adjudicación, acompañando al escrito respectivo la prueba en que funden su pretensión. Vencido dicho término, precluye la oportunidad para oponerse a la solicitud de titulación.

(Decreto 2664 de 1994, art. 21)

Articulo 2.14.10.5.11.***Trámite de la oposición.*** Con base en el memorial de oposición y las pruebas que presente el opositor, el Instituto ordenará dar traslado al peticionario y al Agente del Ministerio Público Agrario por tres (3) días, para que formulen las alegaciones correspondientes, soliciten la práctica de las pruebas que pretendan hacer valer y adjunten los documentos pertinentes.

Vencido el término del traslado, se decretarán Las pruebas que fueren admisibles o las que el Instituto de oficio considere necesarias, para lo cual se señalará un término de diez (10) días hábiles.

Vencido el término probatorio y practicadas las pruebas en que se funde la oposición, se proceden a desatar la oposición formulada.

(Decreto 2664 de 1994, art. 22)

Articulo 2.14.10.5.12. ***Resolución de la oposición.*** Cuando el opositor alegare que el inmueble objeto de la solicitud de adjudicación es de propiedad privada, o reclame dominio sobre el mismo, total o parcialmente, deberá aportar las pruebas que para el efecto exige el inciso 2° del ordinal 1°. del artículo 48 de la Ley 160 de 1994, y en la inspección ocular que se practique en el trámite de oposición se procederá a verificar si el predio pedido en adjudicación se halla incluido dentro de los linderos de aquel cuya propiedad demanda el opositor, así como a establecer otros hechos o circunstancias de las que pueda deducirse su dominio.

Si de los documentos aportados por el opositor y demás pruebas practicadas no llegare a acreditarse propiedad privada, conforme a lo exigido en la norma citada en el inciso anterior, se rechazará la oposición y se continuará el procedimiento.

Cuando la oposición se formule por haberse iniciado contra el peticionario acciones penales, de policía o civiles dirigidas a protegen la ocupación del opositor, previa comprobación de la vigencia de los procesos respectivos, el Instituto ordenará suspender el procedimiento administrativo de titulación, hasta cuando se encuentre ejecutoriada la providencia que decida el proceso que motivó la suspensión y a requerimiento del interesado. En caso contrario, se dispondrá el archivo del expediente.

(Decreto 2664 de 1994, art. 23)

Articulo 2.14.10.5.13. ***Revisión previa a la adjudicación.*** Antes de decidir sobre la solicitud de adjudicación, el Instituto verificará la procedencia Legal de la petición, con el fin de evitar que la titulación se haga a favor de personas que no cumplan con los requisitos o exigencias que prescribe la ley, o recaiga sobre

terrenos que no reúnen las calidades de baldíos adjudicables; se hallen reservados o destinados a un servicio o uso público; o excedan las áreas permitidas; o que se encuentren ocupados contra expresa prohibición legal; o se trate de tierras de las comunidades negras u ocupadas por las comunidades indígenas, y en los demás casos previstos en la ley.

(Decreto 2664 de 1994, art. 24)

Artículo **2.14.10.5.14.** ***Resolución de Adjudicación.*** Si no se hubiere presentado oposición, o esta fuere extemporánea, o hubiere sido resuelta desfavorablemente, y habiéndose satisfecho los requisitos contemplados en las leyes vigentes y en este título, el INCODER procederá a expedir la resolución de adjudicación del terreno baldío correspondiente, providencia que conforme a la ley agraria constituye título traslaticio del dominio y prueba de la propiedad, la que será notificada en forma personal al Agente del Ministerio Público Agrario, al peticionario y al opositor, si lo hubiere, en la forma prevista en los artículos 65 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Contra esta providencia procede únicamente y por la vía gubernativa, el recurso de reposición, que deberá interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación.

Surtida en legal forma la notificación y debidamente ejecutoriada la resolución, se procederá a su inscripción en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Círculo competente. El Registrador devolverá al INCODER el original y una copia de la resolución, con la correspondiente anotación de su registro.

(Decreto 2664 de 1994, art. 25)

Artículo **2.14.10.5.15.** ***Reversión al dominio del Estado de los predios adjudicados y caducidad.*** En toda resolución de adjudicación, o contrato de explotación de baldíos que celebre el INCODER, se establecerá expresamente la obligación del adjudicatario de cumplirlas normas sobre conservación y aprovechamiento racional de los recursos naturales renovables y del medio ambiente; las que establezcan obligaciones y condiciones bajo las cuales se produce la titulación o se celebra el contrato, conforme a la Ley 160 de 1994 y demás disposiciones vigentes, y la prohibición de dedicarlo a cultivos ilícitos. La infracción de lo dispuesto en este artículo dará lugar a la iniciación del procedimiento de reversión del baldío adjudicado, o a la declaratoria de caducidad del contrato, según el caso, conforme a lo establecido en este título.

(Decreto 2664 de 1994, art. 26)

DEPARTAMENTO DEL META
NIT. 892.000.148-8

ACTA DE ENTREGA

Villavicencio 20 de febrero de 2018

El suscrito secretario de Desarrollo Agroeconómico de la Gobernación del Meta, Alberto Castro Sandoval, identificado con cedula de Ciudadanía No. 17.306.793 hace entrega formal y material a Fredy Alexander Forero, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.594.293, Director Logistico de Almarchivos S A, de los siguientes documento:

CONVENIO 1134

6 CAJAS DE ARCHIVO REF: X200, ROTULADAS DESDE LA 42 A LA 47, CON CONTENIDO DE 201 EXPEDIENTES.

CONVENIO 902

27 CAJAS DE ARCHIVO REF: X200, ROTULADAS DESDE LA 15 A LA 41, CON CONTENIDO DE 1340 EXPEDIENTES.

CONVENIO 869

14 CAJAS DE ARCHIVO REF: X200, ROTULADAS DESDE LA 1 A LA 14, CON CONTENIDO DE 527 EXPEDIENTES.

Se entrega igualmente un disco duro que contiene todo el trabajo de levantamientos topográficos que acompaña los expedientes que tienen planos topográficos.

Un cd con la relación detallada de los expedientes entregados y el contenido de cada uno de ellos.

En constancia se firma por los intervinientes.

ALBERTO CASTRO SANDOVAL

FREDY ALEXANDER FORERO

REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER

RESOLUCIÓN No. 6423 DE 2014
(30 JUL 2014)

Por la cual se deciden unos procedimientos de revocatoria directa

EL SUBGERENTE DE TIERRAS RURALES DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL – INCODER

En uso de sus facultades legales y reglamentarias, en especial de las previstas en el Decreto 3759 de 2009, y las delegadas por la Gerencia General en la Resolución No. 2282 del 9 de noviembre de 2012, y lo dispuesto en el Decreto Reglamentario No. 1465 de 2013, y

C O N S I D E R A N D O:

I. COMPETENCIA

El Decreto 1300 del 2 de mayo de 2003 y el Decreto 3759 del 30 de septiembre de 2009 crearon el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - INCODER-, como un establecimiento público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, encargado de ejecutar la política agropecuaria y de desarrollo rural, con el fin de mejorar la calidad de vida de los pobladores rurales y el desarrollo socioeconómico del país. Una vez creado dicho Instituto, asumió las funciones que venía ejecutando el entonces INCORA, entre otras, la de conocer los procesos de revocatoria directa de adjudicación de terrenos baldíos.

La Ley 160 de 1994 en los incisos 6 y 7 del artículo 72 establece que *"(...) Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, el INCORA podrá revocar directamente, en cualquier tiempo, las resoluciones de adjudicación de tierras baldías proferidas con violación a lo establecido en las normas legales o reglamentarias vigentes sobre baldíos..."*

En este caso no se exigirá el consentimiento expreso y escrito del respectivo titular. En lo demás el procedimiento de revocatoria se surtirá con arreglo a las prescripciones del Código de lo Contencioso Administrativo (...)"

La Corte Constitucional en sentencia C-255 de 2012, con ponencia del magistrado Jorge Iván Palacio Palacio, declaró la exequibilidad del artículo 72 de la Ley 160

de 1994, concretamente sobre la facultad del INCODER de iniciar procesos de revocatoria directa sin el consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo titular.

Teniendo en cuenta el Decreto 3759 del treinta (30) de septiembre de 2009, la Gerente General del Instituto, a través de la Resolución No. 2282 del nueve (9) de noviembre de 2012, delegó en la Subgerencia de Tierras Rurales, la competencia para *"conocer y culminar algunos procedimientos de revocatoria directa de veintisiete (27) resoluciones de adjudicación de predios baldíos en la Inspección de Policía del Porvenir en jurisdicción del municipio de Puerto Gaitán en el departamento del Meta"*.

En este contexto, el Subgerente de Tierras Rurales del INCODER es competente para decidir sobre el procedimiento de revocatoria directa que a petición de parte se hizo, frente a la adjudicación de los predios denominados "LA LAGUNA", "LA HONDA", "EL PEDREGAL", "EL ESTERO" y "LA PERLA" -englobados en un predio resultante denominado EL PEDREGAL, con matrícula inmobiliaria 234-15745-; "MI LLANURA", "PAJONAL", "SAN JOSÉ", "CASUARITO" y "LA CHICHARRA" -englobados en un predio resultante denominado MI LLANURA, con matrícula inmobiliaria 234-15741-; "EL ESPEJO", "EL MORICHAL", "CUMARE", "CAMPO HERMOSO", "TAFURITO" y "EL CARACOLÍ" -englobados en un predio resultante denominado CAMPO HERMOSO, con matrícula inmobiliaria 234-15744-; "EL RINCÓN", "CASCABELES", "MATEJEY", "LA GRAN LAGUNA", y "PALO ALTO", -englobados en un predio resultante denominado EL RINCON, con matrícula inmobiliaria 234-15742-; "LA SABANA", "LAS COROCORAS", "LA PALMITA", "EL CAMINITO", "MATA DE MONTE" y "LAGUNAZO", -englobados en un predio resultante denominado LAS COROCORAS, con matrícula inmobiliaria 234-15743-; Predios ubicados en la Inspección de Policía del Porvenir el municipio de Puerto Gaitán en el departamento del Meta, inscritos en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Puerto López.

II - SOLICITUD DE REVOCATORIA.

2.1. Identificación de los actos administrativos objeto del trámite de revocatoria.

Mediante comunicación fechada del cinco (5) de junio de 2012, radicada bajo el número 201211183331, los señores MIGUEL BRICEÑO, BLANCA IRENE LOPEZ GARZÓN, miembro de la Fundación YIRA CASTRO, e IVAN CEPEDA CASTRO, Representante a la Cámara por Bogotá, solicitaron la revocatoria directa de veintisiete (27) resoluciones de adjudicación de baldíos expedidas por el INCORA, las cuales relacionan así:

1. Resolución No. 21 del quince (15) de enero de 1992, mediante el cual se adjudicó el predio denominado "LA LAGUNA" a favor de JUAN AGUSTIN HERRERA, ubicado en la vereda El Porvenir del Municipio de Puerto Gaitán en el departamento del Meta, distinguido con el folio de Matrícula Inmobiliaria No. 234-8006, cerrado, de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Puerto López Meta.

2. Resolución No. 28 del quince (15) de enero de 1992, mediante el cual se adjudicó el predio denominado "LA HONDA" a favor de JAIME RAMÓN LOZANO NEIRA, ubicado en la vereda El Porvenir del Municipio de Puerto Gaitán en el departamento del Meta, distinguido con el folio de Matrícula Inmobiliaria No. 234-8013, cerrado, de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Puerto López Meta.

3. Resolución No. 30 del quince (15) de enero de 1992, mediante el cual se adjudicó el predio denominado "EL PEDREGAL" a favor de EDUARDO VILLARRAGA, ubicado en la vereda El Porvenir del Municipio de Puerto Gaitán en el departamento del Meta, distinguido con el folio de Matrícula Inmobiliaria No. 234-8015, cerrado, de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Puerto López Meta.

4. Resolución No. 45 del dieciséis (16) de enero de 1992, mediante el cual se adjudicó el predio denominado "EL ESTERO" a favor de EDILSON HORACIO FAJARDO VEGA, ubicado en la vereda El Porvenir del Municipio de Puerto Gaitán en el departamento del Meta, distinguido con el folio de Matrícula Inmobiliaria No. 234-8021, cerrado, de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Puerto López Meta.

5. Resolución No. 50 del dieciséis (16) de enero de 1992, mediante el cual se adjudicó el predio denominado "LA PERLA" a favor de ROBERTO ALVARADO, ubicado en la vereda El Porvenir del Municipio de Puerto Gaitán en el departamento del Meta, distinguido con el folio de Matrícula Inmobiliaria No. 234-13197, cerrado, de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Puerto López Meta.

Las anteriores Matrículas Inmobiliarias de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Puerto López, fueron cerradas, en virtud del englobe efectuado por los mencionados adjudicatarios mediante Escritura Pública No. 2922 del 20 de diciembre de 2007, otorgada en la Notaría 4ª de Villavicencio, dando origen al predio denominado **"EL PEDREGAL"** que posteriormente fue transferido al señor **DANIEL GÓMEZ CAÑÓN**, y al cual se le asignó la Matrícula Inmobiliaria No. **234-15745**. No obstante, la anotación No. 10, del F.M.I. **234-15745**, según la cual los adjudicatarios, propietarios en común y proindiviso del predio englobado **EL PEDREGAL**, a través de la Escritura Pública No. 2983 del 28 de diciembre de 2007, de la Notaría 4ª de Villavicencio, vendieron a DANIEL GÓMEZ CAÑÓN, fue dejada sin validez por el competente Registrador de Instrumentos Públicos a través de la Resolución No. 61 del 17 de junio de 2013, según consta en la información de la Superintendencia de Notariado y Registro que obra en el expediente. La Matrícula Inmobiliaria No. **234-15745** actualmente se encuentra activa y los propietarios en común y proindiviso del predio EL PEDREGAL al que corresponde ésta matrícula son los adjudicatarios, señalados en la anotación No. 5 de la misma.

6. Resolución No. 22 del quince (15) de enero de 1992, mediante el cual se adjudicó el predio denominado "MI LLANURA" a favor de HUGO ARMANDO BUSTOS BERNAL, ubicado en la vereda El Porvenir del Municipio de Puerto Gaitán en el departamento del Meta, distinguido con el folio de Matrícula Inmobiliaria No. 234-8007, cerrado, de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Puerto López Meta.

7. Resolución No. 23 del quince (15) de enero de 1992, mediante el cual se adjudicó el predio denominado "PAJONAL" a favor de JOSE DEL CARMEN LEON GAITÁN, ubicado en la vereda El Porvenir del Municipio de Puerto Gaitán en el departamento del Meta, distinguido con el folio de Matrícula Inmobiliaria No. 234-8008, cerrado, de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Puerto López Meta.

8. Resolución No. 24 del quince (15) de enero de 1992, mediante el cual se adjudicó el predio denominado "SAN JOSÉ" a favor de ARMANDO BERNAL, ubicado en la vereda El Porvenir del Municipio de Puerto Gaitán en el departamento del Meta, distinguido con el folio de Matrícula Inmobiliaria No. 234-8009, cerrado, de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Puerto López Meta.

9. Resolución No. 44 del dieciséis (16) de enero de 1992, mediante el cual se adjudicó el predio denominado "CASUARITO" a favor de HUGO EFRAÍN BUSTOS SILVA, ubicado en la vereda El Porvenir del Municipio de Puerto Gaitán en el departamento del Meta, distinguido con el folio de Matrícula Inmobiliaria No. 234-8020, cerrado, de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Puerto López Meta.

10. Resolución No. 973 del veinticinco (25) de septiembre de 1996, mediante el cual se adjudicó el predio denominado "LA CHICHARRA" a favor de JULIO ENRIQUE ALVAREZ SARMIENTO, ubicado en la vereda El Porvenir del Municipio de Puerto Gaitán en el departamento del Meta, distinguido con el folio de Matrícula Inmobiliaria No. 234-13203, cerrado, de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Puerto López Meta.

Las anteriores Matrículas Inmobiliarias de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Puerto López, fueron cerradas, en virtud del englobe efectuado por los mencionados adjudicatarios, mediante Escritura Pública No. 2918 del 20 de diciembre de 2007, otorgada en la Notaría 4ª de Villavicencio, dando origen al predio denominado **"MI LLANURA"** que posteriormente fue transferido al señor **PEDRO LIBARDO ORTEGÓN ORTEGÓN**, y al cual se le asignó el folio de Matrícula Inmobiliaria No. **234-15741**. No obstante, la anotación No. 10, del F.M.I. 234-15741, según la cual los adjudicatarios, propietarios en común y proindiviso del predio englobado **MI LLANURA**, a través de la Escritura Pública No. 2979 del 28 de diciembre de 2007, de la Notaría 4ª de Villavicencio, vendieron a PEDRO LIBARDO ORTEGÓN ORTEGÓN, fue dejada sin validez por el competente Registrador de Instrumentos Públicos a través de la Resolución No. 57 del 17 de junio de 2013, según consta en la información de la Superintendencia de Notariado y Registro que obra en el expediente. En consecuencia, la Matrícula Inmobiliaria No. **234-15741** actualmente se encuentra activa y los propietarios en común y proindiviso del predio **MI LLANURA** al que corresponde ésta matrícula son los adjudicatarios, señalados en la anotación No. 5 de la misma.

11. Resolución No. 25 del quince (15) de enero de 1992, mediante el cual se adjudicó el predio denominado "EL ESPEJO" a favor de JORGE MONSAIDE VERGARA, ubicado en la vereda El Porvenir del Municipio de Puerto Gaitán en el departamento del Meta, distinguido con el folio de Matrícula

Inmobiliaria No. 234-8010, cerrado, de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Puerto López Meta.

12. Resolución No. 27 del quince (15) de enero de 1992, mediante el cual se adjudicó el predio denominado "EL MORICHAL" a favor de JESUS ANTONIO BUSTOS, ubicado en la vereda El Porvenir del Municipio de Puerto Gaitán en el departamento del Meta, distinguido con el folio de Matrícula Inmobiliaria No. 234-8012, cerrado, de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Puerto López Meta.

13. Resolución No. 29 del quince (15) de enero de 1992, mediante el cual se adjudicó el predio denominado "CUMARE" a favor de CARLOS CASTILLO LAVERDE, ubicado en la vereda El Porvenir del Municipio de Puerto Gaitán en el departamento del Meta, distinguido con el folio de Matrícula Inmobiliaria No. 234-8014, cerrado, de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Puerto López Meta.

14. Resolución No. 31 del dieciséis (15) de enero de 1992, mediante el cual se adjudicó el predio denominado "CAMPO HERMOSO" a favor de JOAQUIN SILVA, ubicado en la vereda El Porvenir del Municipio de Puerto Gaitán en el departamento del Meta, distinguido con el folio de Matrícula Inmobiliaria No. 234-8016, cerrado, de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Puerto López Meta.

15. Resolución No. 46 del dieciséis (16) de enero de 1992, mediante el cual se adjudicó el predio denominado "TAFURITO" a favor de JAIRO RODRIGUEZ NIÑO, ubicado en la vereda El Porvenir del Municipio de Puerto Gaitán en el departamento del Meta, distinguido con el folio de Matrícula Inmobiliaria No. 234-13194, cerrado, de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Puerto López Meta.

16. Resolución No. 51 del dieciséis (16) de enero de 1992, mediante el cual se adjudicó el predio denominado "EL CARACOLÍ" a favor de ALBERTO VEGA, ubicado en la vereda El Porvenir del Municipio de Puerto Gaitán en el departamento del Meta, distinguido con el folio de Matrícula Inmobiliaria No. 234-8023, cerrado, de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Puerto López Meta.

Las anteriores Matriculas Inmobiliarias de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Puerto López, fueron cerradas, en virtud del englobe efectuado por los mencionados adjudicatarios, mediante Escritura Pública No. 2921 del 20 de diciembre de 2007, otorgada en la Notaría 4ª de Villavicencio, dando origen al predio denominado **"CAMPO HERMOSO"**, que posteriormente fue transferido al señor **CRISTOBAL RAMOS SACRISTAN**, y al cual se le asignó el folio de Matricula Inmobiliaria No. **234-15744**. No obstante, la anotación No. 14, del F.M.I. 234-15744, según la cual los adjudicatarios, propietarios en común y proindiviso del predio englobado **CAMPO HERMOSO**, a través de la Escritura Pública No. 2982 del 28 de diciembre de 2007, de la Notaría 4ª de Villavicencio, vendieron a CRISTOBAL RAMOS SACRISTAN, fue dejada sin validez por el competente Registrador de Instrumentos Públicos a través de la Resolución No. 60 del 17 de junio de 2013, según consta en la información de la Superintendencia de Notariado y Registro que

obra en el expediente. En consecuencia, la Matrícula Inmobiliaria No. **234-15744** actualmente se encuentra activa y los propietarios en común y proindiviso del predio **CAMPO HERMOSO**, al que corresponde ésta matrícula, son los adjudicatarios, señalados en la anotación No. 7 de la misma.

17. Resolución No. 26 del quince (15) de enero de 1992, mediante el cual se adjudicó el predio denominado "EL RINCÓN" a favor de GUILLERMO CADENA, ubicado en la vereda El Porvenir del Municipio de Puerto Gaitán en el departamento del Meta, distinguido con el folio de Matrícula Inmobiliaria No. 234-8011, cerrado, de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Puerto López Meta.

18. Resolución No. 42 del dieciséis (16) de enero de 1992, mediante el cual se adjudicó el predio denominado "PALO ALTO" a favor de JUAN MANUEL SARMIENTO, ubicado en la vereda El Porvenir del Municipio de Puerto Gaitán en el departamento del Meta, distinguido con el folio de Matrícula Inmobiliaria No. 234-8019, cerrado, de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Puerto López Meta.

19. Resolución No. 43 del dieciséis (16) de enero de 1992, mediante el cual se adjudicó el predio denominado "CASCABELES" a favor de JUAN MOYA, ubicado en la vereda El Porvenir del Municipio de Puerto Gaitán en el departamento del Meta, distinguido con el folio de Matrícula Inmobiliaria No. 234-13193, cerrado, de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Puerto López Meta.

20. Resolución No. 49 del dieciséis (16) de enero de 1992, mediante el cual se adjudicó el predio denominado "MATEJEY" a favor de JOSE VICENTE SALINA, ubicado en la vereda El Porvenir del Municipio de Puerto Gaitán en el departamento del Meta, distinguido con el folio de Matrícula Inmobiliaria No. 234-8022, cerrado, de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Puerto López Meta.

21. Resolución No. 53 del dieciséis (16) de enero de 1992, mediante el cual se adjudicó el predio denominado "LA GRAN LAGUNA" a favor de ANA PAULINA SANCHEZ, ubicado en la vereda El Porvenir del Municipio de Puerto Gaitán en el departamento del Meta, distinguido con el folio de Matrícula Inmobiliaria No. 234-8025, cerrado, de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Puerto López Meta.

Las anteriores Matrículas Inmobiliarias de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Puerto López, fueron cerradas, en virtud del englobe efectuado por los mencionados adjudicatarios, mediante Escritura Pública No. 2919 del 20 de diciembre de 2007, otorgada en la Notaría 4ª de Villavicencio, dando origen al predio denominado **"EL RINCON"**, que posteriormente fue transferido al señor **HUGO ARMANDO BUSTOS BERNAL**, y al cual se le asignó el folio de Matrícula Inmobiliaria No. **234-15742**. No obstante, la anotación No. 12, del F.M.I. 234-15742, según la cual los adjudicatarios, propietarios en común y proindiviso del predio englobado **EL RINCÓN**, a través de la Escritura Pública No. 2980 del 28 de diciembre de 2007, de la Notaría 4ª de Villavicencio, vendieron a HUGO ARMANDO BUSTOS BERNAL, fue dejada sin validez por el competente Registrador de Instrumentos Públicos a través de la Resolución No. 58 del 17 de junio de 2013 ,

según consta en la información de la Superintendencia de Notariado y Registro que obra en el expediente. En consecuencia, la Matrícula Inmobiliaria No. **234-15742** actualmente se encuentra activa y los propietarios en común y proindiviso del predio **EL RINCÓN**, al que corresponde ésta matrícula, son los adjudicatarios, señalados en la anotación No. 6 de la misma.

22. Resolución No. 40 del dieciséis (16) de enero de 1992, mediante el cual se adjudicó el predio denominado "LA SABANA" a favor de JOSÉ ANUNDO ARANDA SILVA, ubicado en la vereda El Porvenir del Municipio de Puerto Gaitán en el departamento del Meta, distinguido con el folio de Matrícula Inmobiliaria No. 234-8017, cerrado, de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Puerto López Meta.

23. Resolución No. 41 del dieciséis (16) de enero de 1992, mediante el cual se adjudicó el predio denominado "LAS COROCORAS" a favor de ESTEBAN VÁSQUEZ, ubicado en la vereda El Porvenir del Municipio de Puerto Gaitán en el departamento del Meta, distinguido con el folio de Matrícula Inmobiliaria No. 234-8018, cerrado, de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Puerto López Meta.

24. Resolución No. 47 del dieciséis (16) de enero de 1992, mediante el cual se adjudicó el predio denominado "LA PALMITA" a favor de EDGAR HERNANDO PRIETO, ubicado en la vereda El Porvenir del Municipio de Puerto Gaitán en el departamento del Meta, distinguido con el folio de Matrícula Inmobiliaria No. 234-13195, cerrado, de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Puerto López Meta.

25. Resolución No. 48 del dieciséis (16) de enero de 1992, mediante el cual se adjudicó el predio denominado "EL CAMINITO" a favor de GRACIELA RAMIREZ, ubicado en la vereda El Porvenir del Municipio de Puerto Gaitán en el departamento del Meta, distinguido con el folio de Matrícula Inmobiliaria No. 234-13196, cerrado, de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Puerto López Meta.

26. Resolución No. 52 del dieciséis (16) de enero de 1992, mediante el cual se adjudicó el predio denominado "MATA DE MONTE" a favor de DANIEL VASQUEZ, ubicado en la vereda El Porvenir del Municipio de Puerto Gaitán en el departamento del Meta, distinguido con el folio de Matrícula Inmobiliaria No. 234-8024, cerrado, de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Puerto López Meta.

27. Resolución No. 891 del veintitrés (23) de septiembre de 1996, mediante el cual se adjudicó el predio denominado "LAGUNAZO" a favor de WILLIAM VELASCO, ubicado en la vereda El Porvenir del Municipio de Puerto Gaitán en el departamento del Meta, distinguido con el folio de Matrícula Inmobiliaria No. 234-13202, cerrado, de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Puerto López Meta.

Las anteriores Matrículas Inmobiliarias de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Puerto López, fueron cerradas, en virtud del englobe efectuado por los mencionados adjudicatarios, mediante Escritura Pública No. 2920 del 20 de diciembre de 2007, otorgada en la Notaría 4ª de Villavicencio, dando origen al

predio denominado **"LAS COROCORAS"**, que posteriormente fue transferido al señor **JAIME ROJAS GARCÍA**, y al cual se le asignó el folio de Matrícula Inmobiliaria No. **234-15743.** No obstante, la anotación No. 12, del F.M.I. 234-15743, según la cual los adjudicatarios, propietarios en común y proindiviso del predio englobado **LAS COROCORAS**, a través de la Escritura Pública No. 2981 del 28 de diciembre de 2007, de la Notaría 4ª de Villavicencio, vendieron a JAIME ROJAS GARCÍA, fue dejada sin validez por el competente Registrador de Instrumentos Públicos a través de la Resolución No. 59 del 17 de junio de 2013 según consta en la información de la Superintendencia de Notariado y Registro que obra en el expediente. En consecuencia, la Matrícula Inmobiliaria No. **234-15743** actualmente se encuentra activa y los propietarios en común y proindiviso del predio **LAS COROCORAS**, al que corresponde ésta matrícula, son los adjudicatarios, señalados en la anotación No. 6 de la misma.

Así mismo los peticionarios solicitaron la Revocatoria Directa de la Resolución No. 1667 del 10 de junio de 2010 por la cual se dio por terminado un proceso agrario de clarificación de la propiedad. Sin embargo, de entrada, el despacho debe manifestar que la competencia delegada por la Gerencia del Instituto a la Subgerencia de Tierras para decidir el presente asunto por medio de la Resolución No. 2282 del nueve (9) de noviembre de 2012 sólo se contrae al análisis y decisión del procedimiento de revocatoria directa sobre las referidas veintisiete (27) Resoluciones de Adjudicación.

2.2. Fundamentos Fácticos.

Como sustento de la petición de revocatoria, los hechos expuestos por los solicitantes se resumen así:

- Las resoluciones no fueron emitidas con fundamento en las disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre titulación de baldíos, pues se desconocieron los protocolos establecidos para comprobar con certeza que los adjudicatarios ocupaban y explotaban los predios, esto en cuanto no se demostró el uso, arraigo en la zona, tiempo de ocupación, prescindiendo de entrevistar a los colindantes o vecinos para validar tal situación, e incluso, verificar si los mismos eran sujetos de reforma agraria.

- Señalaron inconsistencias en el trámite de adjudicación, tales como la ausencia de notificación a los colindantes reales de los predios, indicando que los adjudicatarios nunca han sido oriundos de la región, mucho menos ocupantes de los fundos, al punto que los colonos de la vereda EL PORVENIR no los conocen.

- Afirman que al practicarse las inspecciones oculares en cada uno de los predios, y de acuerdo a las actas de dichas diligencias, en ningún caso los solicitantes se encontraban presentes, sino personas *"encargadas del predio"*, las cuales eran ajenas al trámite de titulación.

- Agregan que en varias de las actas de inspección ocular se menciona que varios de los predios estudiados se explotaban para la fecha conjuntamente, sin que tal situación levantara algún tipo de sospecha frente a posibles

irregularidades en el trámite de adjudicación, en donde es requisito fundamental probar la ocupación de los peticionarios de las adjudicaciones.

- Manifiestan que las adjudicaciones de los predios realizadas por el INCORA desconocieron la ocupación que durante más de cuarenta y cinco (45) años venían efectuando más de 100 familias que residen en la vereda EL PORVENIR, dedicadas a la pequeña ganadería y a la pesca, de manera ininterrumpida, pacífica y pública, concretamente desde que el señor Victor Ramón Machado Oliveros (q.e.p.d.), en el año 1965, los autorizó para que su ganados pastaran dentro del predio sobre el cual él se presentaba como dueño de mejoras. Esta actividad ha sido desarrollada por la comunidad de EL PORVENIR por largo tiempo, incluso después de la muerte del señor Machado en el año 1979, fecha desde la que ejercieron total el uso, goce y disfrute de los terrenos, como dueños y señores de los mismos, sin oposición alguna por parte de alguna entidad o persona particular.

- Señalan que los adjudicatarios de los predios "LA LAGUNA", "LA HONDA", "EL PEDREGAL", "EL ESTERO" y "LA PERLA" suscribieron escritura pública No. 2922 del veinte (20) de diciembre de 2007 de la Notaría Cuarta (4) de Villavicencio, mediante el cual se englobaron los inmuebles, dando origen al predio denominado EL PEDREGAL.

- Posteriormente, aducen los peticionarios que luego de englobados los inmuebles, y fusionados en el predio denominado EL PEDREGAL, los adjudicatarios mediante escritura pública No. 2983 del veintiocho (28) de diciembre de 2007 de la Notaria Cuarta (4) de Villavicencio, transfirieron a título de compra venta el predio EL PEDREGAL a favor del señor DANIEL GÓMEZ CAÑON, con una extensión de 4918 Has con 3000m^2, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 234-15745 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Puerto López-Meta.

- Señalan que los adjudicatarios de los predios "MI LLANURA, PAJONAL, SAN JOSÉ, CASUARITO y LA CHICHARRA", suscribieron escritura pública No. 2918 del veinte (20) de diciembre de 2007 de la Notaría Cuarta (4) de Villavicencio, mediante el cual se englobaron los inmuebles, dando origen al predio denominado "MI LLANURA".

- Posteriormente, aducen los peticionarios que luego de englobados los inmuebles, y fusionados en el predio denominado "MI LLANURA", los adjudicatarios mediante escritura pública No. 2979 del veintiocho (28) de diciembre de 2007 de la Notaria Cuarta (4) de Villavicencio, transfirieron a título de compra venta el predio MI LLANURA a favor del señor PEDRO LIBARDO ORTEGÓN, con una extensión de 4.641 Has con 500 m^2, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 234-15741 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Puerto López-Meta.

- Señalan que los adjudicatarios de los predios "EL ESPEJO", "EL MORICHAL", "CUMARE", "CAMPO HERMOSO", "TAFURITO" y "EL CARACOLÍ", suscribieron escritura pública No. 2921 del veinte (20) de diciembre de 2007 de la Notaría Cuarta (4) de Villavicencio, mediante el cual se englobaron los inmuebles, dando origen al predio denominado "CAMPO HERMOSO".

- Posteriormente, aducen los peticionarios que luego de englobados los inmuebles, y fusionados en el predio denominado CAMPO HERMOSO, los adjudicatarios mediante escritura pública No. 2982 del veintiocho (28) de diciembre de 2007 de la Notaria Cuarta (4) de Villavicencio, transfirieron a título de compra venta el predio CAMPO HERMOSO a favor del señor CRISTOBAL RAMOS SACRISTÁN, con una extensión de 5969 Has con 5000m², identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 234-15744 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Puerto López-Meta.

- Señalan que los adjudicatarios de los predios "EL RINCÓN", "CASCABELES", "MATEJEY", "LA GRAN LAGUNA", y "PALO ALTO", suscribieron escritura pública No. 2919 del veinte (20) de diciembre de 2007 de la Notaría Cuarta (4) de Villavicencio, mediante el cual se englobaron los inmuebles, dando origen al predio denominado "EL RINCÓN".

- Posteriormente, aducen los peticionarios que luego de englobados los inmuebles, y fusionados en el predio denominado "EL RINCÓN", los adjudicatarios mediante escritura pública No. 2980 del veintiocho (28) de diciembre de 2007 de la Notaria Cuarta (4) de Villavicencio, transfirieron a título de compra venta el predio EL RINCÓN a favor del señor HUGO ARMANDO BUSTOS BERNAL, con una extensión de 4.730 Has con 3.000m², identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 234-15742 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Puerto López-Meta.

- Señalan que los adjudicatarios de los predios "LA SABANA, LAS COROCORAS, LA PALMITA, EL CAMINITO, MATA DE MONTE y LAGUNAZO", suscribieron escritura pública No. 2920 del veinte (20) de diciembre de 2007 de la Notaría Cuarta (4) de Villavicencio, mediante el cual se englobaron los inmuebles, dando origen al predio denominado "LAS COROCORAS".

- Posteriormente, aducen los peticionarios que luego de englobados los inmuebles, y fusionados en el predio denominado "LAS COROCORAS", los adjudicatarios mediante escritura pública No. 2981 del veintiocho (28) de diciembre de 2007 de la Notaria Cuarta (4) de Villavicencio, transfirieron a título de compra venta el predio LAS COROCORAS a favor del señor JAIME ROJAS GARCÍA, con una extensión de 5.861 Has con 2.105 m², identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 234-15743 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Puerto López-Meta.

- En lo demás, alegan los peticionarios que las resoluciones de adjudicación de los predios otrora baldíos bautizados con los nombres "LA LAGUNA", "LA HONDA", "EL PEDREGAL", "EL ESTERO" y "LA PERLA"; "MI LLANURA", "PAJONAL", "SAN JOSÉ", "CASUARITO" y "LA CHICHARRA"; "EL ESPEJO", "EL MORICHAL", "CUMARE", "CAMPO HERMOSO", "TAFURITO" y "EL CARACOLÍ"; "EL RINCÓN", "CASCABELES", "MATEJEY", "LA GRAN LAGUNA", y "PALO ALTO"; "LA SABANA", "LAS COROCORAS", "LA PALMITA", "EL CAMINITO", "MATA DE MONTE" y "LAGUNAZO" desatendieron las disposiciones contenidas en la Constitución Política de 1991, y las normas agrarias vigentes al momento en que fueron titulados, concluyendo que no existía ninguna justificación legal que permitiera al INCORA acceder a

titular dichos predios, particularmente porque los adjudicatarios no eran conocidos en la región, advirtiendo la posible existencia de conductas punibles.

2.3. **Documentos anexos a la solicitud.**

Con la presentación de la solicitud, los peticionarios allegaron los siguientes documentos:

2.3.1. Copia de la escritura pública No. 2983 del veintiocho (28) de diciembre de 2007, mediante la cual se realizó la compraventa del predio EL PEDREGAL.

2.3.2. Copia del expediente No. 21569 de titulación de baldíos que culminó con la resolución de adjudicación No. 21 del quince (15) de enero de 1992 a favor de JUAN AGUSTIN HERRERA.

2.3.3. Copia del expediente No. 21556 de titulación de baldíos que culminó con la resolución de adjudicación No. 28 del quince (15) de enero de 1992 a favor de JAIME RAMÓN LOZANO NEIRA.

2.3.4. Copia del expediente No. 21570 de titulación de baldíos que culminó con la resolución de adjudicación No. 30 del quince (15) de enero de 1992 a favor de EDUARDO VILLARRAGA.

2.3.5. Copia del expediente No. 21568 de titulación de baldíos que culminó con la resolución de adjudicación No. 45 del dieciséis (16) de enero de 1992 a favor de EDILSON HORACIO FAJARDO VEGA.

2.3.6. Copia del expediente No. 21555 de titulación de baldíos que culminó con la resolución de adjudicación No. 50 del dieciséis (16) de enero de 1992 a favor de ROBERTO ALVARADO.

2.3.7. Copia de la escritura pública No. 2918 del veinte (20) de diciembre de 2007, mediante la cual se realizó el englobe del predio MI LLANURA.

2.3.8. Copia de la escritura pública No. 2979 del veintiocho (28) de diciembre de 2007, mediante la cual se realizó la compraventa del predio MI LLANURA.

2.3.9. Copia del expediente No. 21552 de titulación de baldíos que culminó con la resolución de adjudicación No. 22 del quince (15) de enero de 1992 a favor de HUGO ARMANDO BUSTOS BERNAL.

2.3.10. Copia del expediente No. 21553 de titulación de baldíos que culminó con la resolución de adjudicación No. 23 del quince (15) de enero de 1992 a favor de JOSE DEL CARMEN LEON GAITÁN.

2.3.11. Copia del expediente No. 21554 de titulación de baldíos que culminó con la resolución de adjudicación No. 24 del quince (15) de enero de 1992 a favor de ARMANDO BERNAL.

2.3.12. Copia del expediente No. 21575 de titulación de baldíos que culminó con la resolución de adjudicación No. 44 del dieciséis (16) de enero de 1992 a favor de HUGO EFRAÍN BUSTOS SILVA.

2.3.13. Copia del expediente No. 21549 de titulación de baldíos que culminó con la resolución de adjudicación No. 973 del veinticinco (25) de septiembre de 1996 a favor de JULIO ENRIQUE ÁLVAREZ SARMIENTO.

2.3.14. Copia de la escritura pública No. 2982 del veintiocho (28) de diciembre de 2007, mediante la cual se realizó la compraventa del predio CAMPO HERMOSO.

2.3.15. Copia del expediente No. 21551 de titulación de baldíos que culminó con la resolución de adjudicación No. 25 del quince (15) de enero de 1992 a favor de JORGE MONSAIDE VERGARA.

2.3.16. Copia del expediente No. 21566 de titulación de baldíos que culminó con la resolución de adjudicación No. 27 del quince (15) de enero de 1992 a favor de JESUS ANTONIO BUSTOS.

2.3.17. Copia del expediente No. 21571 de titulación de baldíos que culminó con la resolución de adjudicación No. 29 del quince (15) de enero de 1992 a favor de CARLOS CASTILLO LAVERDE.

2.3.18. Copia del expediente No. 21572 de titulación de baldíos que culminó con la resolución de adjudicación No. 31 del quince (15) de enero de 1992 a favor de JOAQUIN SILVA.

2.3.19. Copia del expediente No. 21567 de titulación de baldíos que culminó con la resolución de adjudicación No. 46 del dieciséis (16) de enero de 1992 a favor de JAIRO RODRIGUEZ NIÑO.

2.3.20. Copia del expediente No. 21573 de titulación de baldíos que culminó con la resolución de adjudicación No. 51 del dieciséis (16) de enero de 1992 a favor de ALBERTO VEGA.

2.3.21. Copia de la escritura pública No. 2919 del veinte (20) de diciembre de 2007, mediante la cual se realizó el englobe del predio EL RINCÓN.

2.3.22. Copia de la escritura pública No. 2980 del veintiocho (28) de diciembre de 2007, mediante la cual se realizó la compraventa del predio EL RINCÓN.

2.3.23. Copia del expediente No. 21561 de titulación de baldíos que culminó con la resolución de adjudicación No. 26 del quince (15) de enero de 1992 a favor de GUILLERMO CADENA.

2.3.24. Copia del expediente No. 21559 de titulación de baldíos que culminó con la resolución de adjudicación No. 42 del dieciséis (16) de enero de 1992 a favor de JUAN MMANUEL SARMIENTO.

2.3.25. Copia del expediente No. 21560 de titulación de baldíos que culminó con la resolución de adjudicación No. 43 del dieciséis (16) de enero de 1992 a favor de JUAN MOYA.

2.3.26. Copia del expediente No. 21562 de titulación de baldíos que culminó con la resolución de adjudicación No. 49 del dieciséis (16) de enero de 1992 a favor de JOSE VICENTE SALINAS.

2.3.27. Copia del expediente No. 21563 de titulación de baldíos que culminó con la resolución de adjudicación No. 53 del dieciséis (16) de enero de 1992 a favor de ANA PAULINA SÁNCHEZ.

2.3.28. Copia de la escritura pública No. 2920 del veinte (20) de diciembre de 2007, mediante la cual se realizó el englobe del predio EL RINCÓN.

2.3.29. Copia de la escritura pública No. 2981 del veintiocho (28) de diciembre de 2007, mediante la cual se realizó la compraventa del predio LAS COROCORAS.

2.3.30. Copia del expediente No. 21557 de titulación de baldíos que culminó con la resolución de adjudicación No. 40 del dieciséis (16) de enero de 1992 a favor de JESÚS ANUNDO ARANDA SILVA.

2.3.31. Copia del expediente No. 21558 de titulación de baldíos que culminó con la resolución de adjudicación No. 41 del dieciséis (16) de enero de 1992 a favor de ESTEBAN VASQUEZ.

2.3.32. Copia del expediente No. 21574 de titulación de baldíos que culminó con la resolución de adjudicación No. 47 del dieciséis (16) de enero de 1992 a favor de EDGAR HERNANDO PRIETO.

2.3.33. Copia del expediente No. 21564 de titulación de baldíos que culminó con la resolución de adjudicación No. 48 del dieciséis (16) de enero de 1992 a favor de GRACIELA RAMIREZ.

2.3.34. Copia del expediente No. 21565 de titulación de baldíos que culminó con la resolución de adjudicación No. 52 del dieciséis (16) de enero de 1992 a favor de DANIEL VÁSQUEZ.

2.3.35. Copia del expediente No. 21550 de titulación de baldíos que culminó con la resolución de adjudicación No. 891 del veintitrés (23) de septiembre de 1996 a favor de WILLIAM VELASCO.

III. INFORMACIÓN DE LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS Y DEL INCODER.

Luego de oficiar a la Oficina de Instrumentos Públicos de Puerto López y a la Superintendencia Delegada para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras de la Superintendencia de Notariado y Registro, se anexaron al expediente los siguientes folios de matrícula inmobiliaria:

3.1. Folio de matrícula inmobiliaria No. 234-8013 correspondiente al predio LA HONDA, el cual se encuentra cerrado según anotación No. 3, mediante el cual se englobó el predio mediante escritura pública No. 2922 del veinte (20) de diciembre de 2007 de la Notaría Cuarta (4) de Villavicencio (Meta).

3.2. Folio de matrícula inmobiliaria No. 234-8021 correspondiente al predio EL ESTERO, el cual se encuentra cerrado según anotación No. 3, mediante el cual se englobó el predio mediante escritura pública No. 2922 del veinte (20) de diciembre de 2007 de la Notaría Cuarta (4) de Villavicencio (Meta).

3.3. Folio de matrícula inmobiliaria No. 234-13197 correspondiente al predio LA PERLA, el cual se encuentra cerrado según anotación No. 3, mediante el cual se englobó el predio mediante escritura pública No. 2922 del veinte (20) de diciembre de 2007 de la Notaría Cuarta (4) de Villavicencio (Meta).

3.4. Folio de matrícula inmobiliaria No. 234-8006 correspondiente al predio LA LAGUNA, el cual se encuentra cerrado según anotación No. 3, mediante el cual se englobó el predio mediante escritura pública No. 2922 del veinte (20) de diciembre de 2007 de la Notaría Cuarta (4) de Villavicencio (Meta).

3.5. Folio de matrícula inmobiliaria No 234-8015 correspondiente al predio EL PEDREGAL, el cual se encuentra cerrado según anotación No. 3, mediante el cual se englobó el predio mediante escritura pública No. 2922 del veinte (20) de diciembre de 2007 de la Notaría Cuarta (4) de Villavicencio (Meta).

3.6. Folio de matrícula inmobiliaria No. 234-15745 correspondiente al predio EL PEDREGAL, el cual se encuentra abierto según anotación No. 5, mediante el cual se englobaron las matrículas inmobiliarias No. 234-8006, 234-8013, 234-8015, 234-8021, 234-13197, según consta en la escritura pública No. 2922 del veinte (20) de diciembre de 2007 de la Notaría Cuarta (4) de Villavicencio (Meta).

3.7. Folio de matrícula inmobiliaria No. 234-8007 correspondiente al predio MI LLANURA, el cual se encuentra cerrado según anotación No. 3, mediante el cual se englobó el predio mediante escritura pública No. 2918 del veinte (20) de diciembre de 2007 de la Notaría Cuarta (4) de Villavicencio (Meta).

3.8. Folio de matrícula inmobiliaria No. 234-8020 correspondiente al predio CASUARITO, el cual se encuentra cerrado según anotación No. 3, mediante el cual se englobó el predio mediante escritura pública No. 2918 del veinte (20) de diciembre de 2007 de la Notaría Cuarta (4) de Villavicencio (Meta).

3.9. Folio de matrícula inmobiliaria No. 234-8008 correspondiente al predio PAJONAL, el cual se encuentra cerrado según anotación No. 2, mediante el cual se englobó el predio mediante escritura pública No. 2918 del veinte (20) de diciembre de 2007 de la Notaría Cuarta (4) de Villavicencio (Meta).

3.10. Folio de matrícula inmobiliaria No. 234-8009 correspondiente al predio SAN JOSE, el cual se encuentra cerrado según anotación No. 3, mediante el cual se englobó el predio mediante escritura pública No. 2918 del veinte (20) de diciembre de 2007 de la Notaría Cuarta (4) de Villavicencio (Meta).

3.11. Folio de matrícula inmobiliaria No. 234-15741 correspondiente al predio MI LLANURA, el cual se encuentra abierto según anotación No. 5, mediante el cual se englobaron las matrículas inmobiliarias No. 234-8007, 234-8008, 234-8009, 234-8020 y 234-13203, según consta en la escritura pública No. 2918 del veinte (20) de diciembre de 2007 de la Notaría Cuarta (4) de Villavicencio (Meta).

3.12. Folio de matrícula inmobiliaria No. 234-13203 correspondiente al predio LA CHICHARRA, el cual se encuentra cerrado según anotación No. 4, mediante el cual se englobó el predio mediante escritura pública No. 2918 del veinte (20) de diciembre de 2007 de la Notaría Cuarta (4) de Villavicencio (Meta)

3.13. Folio de matrícula inmobiliaria No. 234-8012 correspondiente al predio EL MORICHAL, el cual se encuentra cerrado según anotación No. 3, mediante el cual se englobó el predio mediante escritura pública No. 2921 del veinte (20) de diciembre de 2007 de la Notaría Cuarta (4) de Villavicencio (Meta)

3.14. Folio de matrícula inmobiliaria No. 234-8010 correspondiente al predio EL ESPEJO, el cual se encuentra cerrado según anotación No. 3, mediante el cual se englobó el predio mediante escritura pública No. 2921 del veinte (20) de diciembre de 2007 de la Notaría Cuarta (4) de Villavicencio (Meta).

3.15. Folio de matrícula inmobiliaria No. 234-8014 correspondiente al predio CUMARE, el cual se encuentra cerrado según anotación No. 3, mediante el cual se englobó el predio mediante escritura pública No. 2921 del veinte (20) de diciembre de 2007 de la Notaría Cuarta (4) de Villavicencio (Meta).

3.16. Folio de matrícula inmobiliaria No. 234-8016 correspondiente al predio CAMPO HERMOSO, el cual se encuentra cerrado según anotación No. 3, mediante el cual se englobó el predio mediante escritura pública No. 2921 del veinte (20) de diciembre de 2007 de la Notaría Cuarta (4) de Villavicencio (Meta).

3.17. Folio de matrícula inmobiliaria No 234-13194 correspondiente al predio TAFURITO, el cual se encuentra cerrado según anotación No. 4, mediante el cual se englobó el predio mediante escritura pública No. 2921 del veinte (20) de diciembre de 2007 de la Notaría Cuarta (4) de Villavicencio (Meta).

3.18. Folio de matrícula inmobiliaria No. 234-15744 correspondiente al predio CAMPO HERMOSO, el cual se encuentra abierto según anotación No. 7, mediante el cual se englobaron las matrículas inmobiliarias No. 234-8010, 234-8012, 234-8014, 234-8016, 234-8023 y 234-13194, según consta en la escritura pública No. 2921 del veinte (20) de diciembre de 2007 de la Notaría Cuarta (4) de Villavicencio (Meta).

3.19. Folio de matrícula inmobiliaria No 234-8023 correspondiente al predio EL CARACOLÍ, el cual se encuentra cerrado según anotación No. 3, mediante el cual se englobó el predio mediante escritura pública No. 2921 del veinte (20) de diciembre de 2007 de la Notaría Cuarta (4) de Villavicencio (Meta)

3.20. Folio de matrícula inmobiliaria No. 234-8011 correspondiente al predio EL RINCÓN, el cual se encuentra cerrado según anotación No. 3, mediante el cual se

englobó el predio mediante escritura pública No. 2919 del veinte (20) de diciembre de 2007 de la Notaría Cuarta (4) de Villavicencio (Meta).

3.21. Folio de matrícula inmobiliaria No. 234-13193 correspondiente al predio CASCABELES, el cual se encuentra cerrado según anotación No. 4, mediante el cual se englobó el predio mediante escritura pública No. 2919 del veinte (20) de diciembre de 2007 de la Notaria Cuarta (4) de Villavicencio (Meta).

3.22. Folio de matrícula inmobiliaria No. 234-8022 correspondiente al predio MATEJEY, el cual se encuentra cerrado según anotación No. 3, mediante el cual se englobó el predio mediante escritura pública No. 2919 del veinte (20) de diciembre de 2007 de la Notaría Cuarta (4) de Villavicencio (Meta).

3.23. Folio de matrícula inmobiliaria No. 234-8025 correspondiente al predio LA GRAN LAGUNA, el cual se encuentra cerrado según anotación No. 3, mediante el cual se englobó el predio mediante escritura pública No. 2919 del veinte (20) de diciembre de 2007 de la Notaría Cuarta (4) de Villavicencio (Meta).

3.24. Folio de matricula inmobiliaria No 234-8019 correspondiente al predio PALO ALTO, el cual se encuentra cerrado según anotación No. 3, mediante el cual se englobó el predio mediante escritura pública No. 2919 del veinte (20) de diciembre de 2007 de la Notaría Cuarta (4) de Villavicencio (Meta).

3.25. Folio de matrícula inmobiliaria No. 234-15742 correspondiente al predio EL RINCÓN, el cual se encuentra abierto según anotación No. 6, mediante el cual se englobaron las matrículas inmobiliarias No. 234-8011, 234-8019, 234-8025, 234-13193 y 234-8022, según consta en la escritura pública No. 2919 del veinte (20) de diciembre de 2007 de la Notaría Cuarta (4) de Villavicencio (Meta).

3.26. Folio de matrícula inmobiliaria No. 234-8018 correspondiente al predio LAS COROCORAS, el cual se encuentra cerrado según anotación No. 3, mediante el cual se englobó el predio mediante escritura pública No. 2920 del veinte (20) de diciembre de 2007 de la Notaría Cuarta (4) de Villavicencio (Meta).

3.27. Folio de matricula inmobiliaria No. 234-8024 correspondiente al predio MATA DE MONTE, el cual se encuentra cerrado según anotación No. 3, mediante el cual se englobó el predio mediante escritura pública No. 2920 del veinte (20) de diciembre de 2007 de la Notaría Cuarta (4) de Villavicencio (Meta).

3.28. Folio de matrícula inmobiliaria No. 234-8017 correspondiente al predio LA SABANA, el cual se encuentra cerrado según anotación No. 3, mediante el cual se englobó el predio mediante escritura pública No. 2920 del veinte (20) de diciembre de 2007 de la Notaría Cuarta (4) de Villavicencio (Meta).

3.29. Folio de matrícula inmobiliaria No. 234-13195 correspondiente al predio LA PALMITA, el cual se encuentra cerrado según anotación No. 3, mediante el cual se englobó el predio mediante escritura pública No. 2920 del veinte (20) de diciembre de 2007 de la Notaría Cuarta (4) de Villavicencio (Meta).

3.30. Folio de matricula inmobiliaria No 234-13196 correspondiente al predio EL CAMINITO, el cual se encuentra cerrado según anotación No. 4, mediante el cual

se englobó el predio mediante escritura pública No. 2920 del veinte (20) de diciembre de 2007 de la Notaría Cuarta (4) de Villavicencio (Meta).

3.31. Folio de matrícula inmobiliaria No. 234-15743 correspondiente al predio LAS COROCORAS, el cual se encuentra abierto según anotación No. 6, mediante el cual se englobaron las matrículas inmobiliarias No. 234-8017, 234-8018, 234-8024, 234-13195, 234-13196 y 234-13202, según consta en la escritura pública No. 2920 del veinte (20) de diciembre de 2007 de la Notaría Cuarta (4) de Villavicencio (Meta).

3.32. Folio de matrícula inmobiliaria No. 234-13202 correspondiente al predio LAGUNAZO, el cual se encuentra cerrado según anotación No. 4, mediante el cual se englobó el predio mediante escritura pública No. 2920 del veinte (20) de diciembre de 2007 de la Notaría Cuarta (4) de Villavicencio (Meta).

Así mismo, luego de oficiar a la Coordinación Logística de Gestión de Bienes y Servicios de Archivo del INCODER, se anexó copia de los expedientes No. 21559 de titulación de baldíos que culminó con la resolución de adjudicación No. 42 del dieciséis (16) de enero de 1992 a favor de JUAN MANUEL SARMIENTO y 21560 de titulación de baldíos que culminó con la resolución de adjudicación No. 43 del dieciséis (16) de enero de 1992 a favor de JUAN MOYA, la cual se adjuntó al expediente del predio englobado denominado El Rincón.

IV. INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE REVOCATORIA.

4.1. Autos de inicio.

El dia 28 de diciembre de 2012, de conformidad con lo dispuesto en el derogado capítulo IX del Decreto 2664 de 1994, se profirieron autos de inicio de los procedimientos de revocatoria directa contra las siguientes Resoluciones de adjudicación y a través de los mismos autos, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y con el fin de evitar decisiones contradictorias, se acumularon los procedimientos en cinco expedientes pues al instrumentalizarse el englobe de los predios, se originó una reciente propiedad sobre un nuevo predio, extinguiéndose los folios de matrícula originales de los predios, tratándose en la actualidad no de veintisiete (27) predios sino de cinco (5) matrículas inmobiliarias para la misma cantidad de predios.

No. RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN	FECHA	ADJUDICATARIO	NOMBRE DEL PREDIO ADJUDICADO	FOLIO	ENGLOBE	PROPIETARIO SEGÚN EL ENGLOBE
21	15 de enero de 1992	JUAN AGUSTIN HERRERA	LA LAGUNA	234-8006	EL PEDREGAL FOLIO 234-15765	Daniel Gómez Callón
28	15 de enero de 1992	JAIME RAMÓN LOZANO MERA	LA HONDA	234-8013		
30	15 de enero de 1992	EDUARDO VILLARRAGA	EL PEDREGAL	234-8015		
30	16 de enero de 1992	ROBERTO ALVARADO	LA PERLA	234-13197		
45	16 de enero de 1992	EDILSON HORACIO FAJARDO VEGA	EL ESTERO	234-8021		
22	15 de enero de 1992	HUGO ARMANDO BUSTOS BERNAL	MI LLANURA	234-8007	MI LLANURA FOLIO 234-15741	Pedro Liberio Ortegón Ortegón
23	15 de enero de 1992	JOSE DEL CARMEN LEON GAITAN	PAJONAL	234-8008		
24	15 de enero de 1992	ARMANDO BERNAL	SAN JOSE	234-8009		
44	16 de enero de 1992	HUGO EFRAIN BUSTOS SILVA	CASUARITO	234-8020		

No. RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN	FECHA	ADJUDICATARIO	NOMBRE DEL PREDIO ADJUDICADO	FOLIO	ENGLOBE	PROPIETARIO SEGÚN EL ENGLOBE
573	25 de septiembre de 1996	JULIO ENRIQUE ALVAREZ SARMIENTO	LA CHICHARRA	234-13203		
19	15 de enero de 1992	JORGE MONSALVE VERGARA	EL ESPEJO	234-8010	CAMPO HERMOSO FOLIO 234-15744	Cristóbal Ramos Secristán
27	15 de enero de 1992	JESUS ANTONIO BUSTOS	EL MORICHAL	234-8012		
29	15 de enero de 1992	CARLOS CASTILLO LAVERDE	CUMARE	234-8014		
31	15 de enero de 1992	JOAQUIN SILVA	CAMPO HERMOSO	234-8016		
46	16 de enero de 1992	JAIRO RODRIGUEZ NIÑO	TAFURITO	234-13194		
51	16 de enero de 1992	ALBERTO VEGA	EL CARACOLI	234-8023		
26	15 de enero de 1992	GUILLERMO CADENA	EL RINCÓN	234-8011	EL RINCÓN FOLIO 234-15742	Hugo Armando Bustos Bernal
42	16 de enero de 1992	JUAN MANUEL SARMIENTO	PALO ALTO	234-8019		
43	16 de enero de 1992	JUAN MOYA	CASCABELES	234-13193		
49	16 de enero de 1992	JOSE VICENTE SALINAS	MATEIEY	234-8022		
53	16 de enero de 1992	ANA PAULINA SANCHEZ	LA GRAN LAGUNA	234-8025		
40	16 de enero de 1992	JESUS ANUNDO ARANDA SILVA	LA SABANA	234-8017	LAS COROCORAS FOLIO 234-15743	Jaime Rojas Garcia
41	16 de enero de 1992	ESTEBAN VASQUEZ	LAS COROCORAS	234-8018		
47	16 de enero de 1992	EDGAR HERNANDO PRIETO	LA PALMITA	234-13195		
48	16 de enero de 1992	GRACIELA RAMIREZ	EL CAMINITO	234-13196		
52	16 de enero de 1992	DANIEL VASQUEZ	MATA DE MONTE	234-8024		
891	23 de septiembre de 1996	WILLIAM VELASCO	LAGUNAZO	234-13202		

4.2. Posibles violaciones a la Constitución, la ley o los reglamentos señaladas en los autos de inicio:

En dichos autos se adujo lo siguiente:

a. Expediente El Pedregal:

Examinadas las actas de inspección ocular de los expedientes de las resoluciones de No. 21, 28 y 30 del quince (15) de enero de 1992; y 45 y 50 del dieciséis (16) de enero de 1992, observa esta Subgerencia de Tierras que aparentemente las mismas registraron curiosamente la ausencia de los solicitantes -y posteriores adjudicatarios- JUAN AGUSTIN HERRERA, JAIME RAMÓN LOZANO NEIRA, EDUARDO VILLARRAGA, EDILSON HORACIO FAJARDO VEGA, ROBERTO ALVARADO, pues sospechosamente en ninguna de las inspecciones hicieron presencia, siendo atendidas solamente personas "encargadas del predio", las cuales, como se observa en los expedientes, no tenían ninguna conexión directa o indirecta al proceso administrativo de titulación de baldíos.

Lo anterior pone de presente la existencia de fuertes indicios que sugieren que los adjudicatarios de los predios "LA LAGUNA", "LA HONDA", "EL PEDREGAL", "EL ESTERO" y "LA PERLA" no ocupaban ni explotaban los mismos para la época en que estos fueron adjudicados, situación con la cual, presuntamente, se desconocieron los requisitos de ocupación previa y explotación por el término de cinco (5) años, previstos en la Ley 30 de 1988 y Ley 97 de 1946. Sin embargo, tal consideración deberá ser comprobada mediante los medios probatorios que al respecto se decretarán y practicarán dentro del presente trámite de revocatoria directa"

b. Expediente Mi Llanura.

Examinadas las actas de inspección ocular de los expedientes de las resoluciones de No. 22, 23 y 24 de fecha 15 de enero de 1992; 44 de fecha 16 de enero de 1992 y 973 de fecha 25 de septiembre de 1996, observa esta Subgerencia de Tierras que aparentemente las mismas registraron curiosamente la ausencia de los solicitantes -y posteriores adjudicatarios- HUGO ARMANDO BUSTOS BERNAL, JOSE DEL CARMEN LEON GAITÁN, ARMANDO BERNAL, HUGO EFRAÍN BUSTOS SILVA y JULIO ENRIQUE ALVAREZ SARMIENTO, pues sospechosamente en ninguna de las inspecciones hicieron presencia, siendo atendidas solamente personas "*encargadas del predio*"

registraron curiosamente la ausencia de los solicitantes -y posteriores adjudicatarios- GUILLERMO CADENA, JUAN MANUEL SARMIENTO, JUAN MOYA, JOSE VICENTE SALINAS y ANA PAULINA SÁNCHEZ, pues sospechosamente en ninguna de las inspecciones hicieron presencia, siendo atendidas solamente personas *"encargadas del predio"*, las cuales, como se observa en los expedientes, no tenían ninguna conexión directa o indirecta al proceso administrativo de titulación de baldíos.

Lo anterior pone de presente la existencia de fuertes indicios que sugieren que los adjudicatarios de los predios "EL RINCÓN", "CASCABELES", "MATEJEY", "LA GRAN LAGUNA", y "PALO ALTO" no ocupaban ni explotaban los mismos para la época en que estos fueron adjudicados, situación con la cual, presuntamente, se desconocieron los requisitos de ocupación previa y explotación por el término de cinco (5) años, previstos en la Ley 30 de 1988 y Ley 97 de 1946. Sin embargo, tal consideración deberá ser comprobada mediante los medios probatorios que al respecto se decretarán y practicarán dentro del presente trámite de revocatoria directa.

e) Expediente Las Corocoras.

Examinadas las actas de inspección ocular de los expedientes de las resoluciones de No. 40, 41, 47, 48 y 52 del dieciséis (16) de enero de 1992 y 891 del veintitrés (23) de septiembre de 1996, observa esta Subgerencia de Tierras que aparentemente las mismas registraron curiosamente la ausencia de los solicitantes -y posteriores adjudicatarios- JESUS ANUNDO ARANDA SILVA, ESTEBAN VASQUEZ, EDGAR HERNANDO PRIETO, GRACIELA RAMIREZ, DANIEL VASQUEZ y WILLIAM VELASCO, pues sospechosamente en ninguna de las inspecciones hicieron presencia, siendo atendidas solamente personas *"encargadas del predio"*, las cuales, como se observa en los expedientes, no tenían ninguna conexión directa o indirecta al proceso administrativo de titulación de baldíos.

Lo anterior pone de presente la existencia de fuertes indicios que sugieren que los adjudicatarios de los predios "LA SABANA, LAS COROCORAS, LA PALMITA, EL CAMINITO, MATA DE MONTE y LAGUNAZO" no ocupaban ni explotaban los mismos para la época en que estos fueron adjudicados, situación con la cual, presuntamente, se desconocieron los requisitos de ocupación previa y explotación por el término de cinco (5) años, previstos en la Ley 30 de 1988, Ley 97 de 1946 y Ley 160 de 1994. Sin embargo, tal consideración deberá ser comprobada mediante los medios probatorios que al respecto se decretarán y practicarán dentro del presente trámite de revocatoria directa.

4.3. Notificación del Auto de Inicio, Curadores Ad litem y resumen de la defensa ejercida.

De conformidad con lo dispuesto en el derogado capítulo IX del Decreto 2664 de 1994, en especial en el artículo 41, se procedió a la notificación de los autos de inicio al Procurador Agrario, al solicitante de la revocación y al titular del derecho de dominio. Así mismo, aunque el referido artículo 41 no lo establecía, el INCODER procedió a notificar a los adjudicatarios, aunque ya no fueran titulares de derechos de dominio, dada su calidad de terceros interesados.

El Agente del Ministerio Público se notificó oportunamente el día 11 de septiembre de 2013.

Dada la imposibilidad de la notificación personal, se emplazó a los adjudicatarios y a los titulares de los derechos reales de dominio, al cabo de lo cual se procedió a designar sendos Curadores Ad Litem, uno para cada uno de los veintisiete (27) adjudicatarios y uno para cada uno de los cinco (5) titulares de derecho de dominio de los predios englobados que se señalaban en los correspondientes folios de matrícula inmobiliaria, así:

CURADOR	Predio	ADJUDICATARIO/PROPIETARIO	ENGLOBE	FECHA POSESION Y NOTIFIC.
NUBIA ISABEL MONROY GARZÓN	MI LLANURA	HUGO ARMANDO BUSTOS BERNAL	MI LLANURA	03/05/2013
NYDIA MARCELA PEREZ DE CORREDOR	PAJONAL	JOSE DEL CARMEN LEON GAITAN		10/07/2013
LUIS ALEJANDRO LATORRE CHACON	SAN JOSE	ARMANDO BERNAL		31/05/2013
JULIAN MAURICIO CACERES RODRIGUEZ	CASUARITO	HUGO EFRAIN BUSTOS SILVA		03/05/2013
OSCAR JOSE CASTILLO ALARCON	LA CHICHARRA	JULIO ENRIQUE ALVAREZ SARMIENTO		10/04/2013
HENRY JAVIER CORTES JARA	MI LLANURA	PEDRO LIBARDO ORTEGÓN ORTEGÓN		04/04/2013
LUIS ENRIQUE GALVIS MEDINA	CAMPO HERMOSO	CRISTOBAL RAMOS SACRISTÁN	CAMPO HERMOSO	14/05/2013
JOSE YESID GONGORA GONGORA	EL ESPEJO	JORGE MONSAIDE VERGARA		06/05/2013
MARCO FIDEL ALFONSO ROA	EL MORICHAL	JESUS ANTONIO BUSTOS		10/04/2013
SANIN MORALES PALACIOS	CUMARE	CARLOS CASTILLO LAVERDE		10/04/2013
HENRY MAURICIO GUEVARA JOYA	CAMPO HERMOSO	JOAQUIN SILVA		18/04/2013
GERARDO RAMOS RICO	TAPURITO	JAIRO RODRIGUEZ NIÑO		06/05/2013
JORGE IVAN VELEZ ORTIZ	EL CARACOLI	ALBERTO VEGA		05/04/2013
MYRIAN ROCIO RODRIGUEZ CEDEÑO	LA LAGUNA	JUAN AGUSTIN HERRERA	EL PEDREGAL	08/04/2013
CARLOS ALBERTO GOMEZ VILA	LA HONDA	JAIME RAMÓN LOZANO NEIRA		17/04/2013
CLIMACO ACHURY MURCIA	EL PEDREGAL	EDUARDO VILLARRAGA		06/05/2013
LUZ MARINA ESPINOSA ALVAREZ	EL ESTERO	EDILSON HORACIO FAJARDO VEGA		07/06/2013
DORIS AMPARO JOYA GIL	LA PERLA	ROBERTO ALVARADO		22/04/2013
LUIS FRANCISCO CARREÑO ROMERO	EL PEDREGAL	DANIEL GOMEZ CAÑÓN		11/04/2013
AIZA MARIA BARRAGAN GORDILLO	LA SABANA	JESUS ANUNDO ARANDA SILVA	LAS COROCORAS	07/05/2013
CLARA MARIA PARRA ALBADAN	LAS COROCORAS	ESTEBAN VASQUEZ		05/04/2013
SANDRA MILENA LOTERO GIRALDO	LA PALMITA	EDGAR HERNANDO PRIETO		05/04/2013
MARLENE ACEVEDO PAEZ	EL CAMINITO	GRACIELA RAMIREZ		09/07/2013
DIANNY WILLMA BAQUERO LOZANO	MATA DE MONTE	DANIEL VASQUEZ		11/04/2013
DIANA ROCIO MOLINA CARDENAS	LAGUNAZO	WILLIAM VELASCO		03/05/2013
JULIO CESAR CHAPARRO RODRIGUEZ	LAS COROCORAS	JAIME ROJAS GARCIA		04/07/2013
DAMASO DE LA CRUZ AMARIS	EL RINCON	GUILLERMO CADENA	EL RINCÓN	20/05/2013
GLORIA ESPERANZA CAICEDO CARRILLO	CASCABELES	JUAN MOYA		10/04/2013
BLADIMIR ANTONIO SALAS RAMOS	MATEJEY	JOSE VICENTE SALINAS		08/04/2013
ARMANDO ESCANDON GARCIA	LA GRAN LAGUNA	ANA PAULINA SANCHEZ		18/04/2013
MANUEL ANTONIO PARDO MAYORDOMO	PALO ALTO	JUAN MANUEL SARMIENTO		11/04/2013
ROBERTO URIBE RICAURTE	EL RINCÓN	HUGO ARMANDO BUSTOS BERNAL		23/05/2013

Todos los Curadores Ad Litem designados tomaron posesión del cargo y a ellos se les notificó personalmente el auto de inicio con el fin de que ejercieran directamente la defensa jurídica pertinente a nombre de sus representados.

Así mismo la providencia de inicio de la actuación administrativa fue inscrita en los folios de matrícula inmobiliaria de los predios englobados, teniendo en cuenta que el englobe desactiva las matrículas inmobiliarias de los predios que se acumulan.

4.3.1. Defensa ejercida por los Curadores Ad Litem.

HENRY JAVIER CORTES JARA, Curador Ad Litem del señor PEDRO LIBARDO ORTEGÓN ORTEGÓN, quien figura como propietario del predio englobado denominado MI LLANURA, señala, en términos generales, que la revocatoria directa en el presente caso no procede porque de acuerdo con la legislación colombiana se requiere el consentimiento expreso y escrito del titular del acto administrativo objeto de revocatoria.

JULIAN MAURICIO CÁCERES RODRÍGUEZ, Curador Ad Litem del señor HUGO EFRAIN BUSTOS SILVA, quien figura como adjudicatario del predio denominado CASUARITO, señala, en términos generales, que dentro del procedimiento de revocatoria directa que se adelanta contra la adjudicación se atiene a lo que dentro del mismo se pruebe y que en derecho corresponda.

NUBIA ISABEL MONROY GARZÓN, Curadora Ad Litem del señor HUGO ARMANDO BUSTOS BERNAL, quien figura como adjudicatario del predio denominado MI LLANURA, señala, en términos generales, que la revocatoria directa en el presente caso no procede porque de acuerdo con la legislación colombiana se requiere el consentimiento expreso y escrito del titular del acto administrativo de adjudicación objeto de revocatoria, a menos que el acto haya ocurrido por medios fraudulentos e ilegales que debe probar la administración. Así las cosas, señala que se atiene a lo que dentro del mismo se pruebe y que en derecho corresponda.

LUIS ALEJANDRO LATORRE CHACÓN, Curador Ad Litem del señor ARMANDO BERNAL, quien figura como adjudicatario del predio denominado SAN JOSÉ, señala, en términos generales, que la revocatoria directa en el presente caso no procede porque de acuerdo con la legislación colombiana se requiere que el señor ARMANDO BERNAL conozca el procedimiento que se adelanta y si se tiene en cuenta que el predio SAN JOSÉ no existe dado el englobe efectuado, entonces existe una falta de identidad del demandado (sic) y del predio respectivo.

NYDIA MARCELA PÉREZ DE CORREDOR, Curadora Ad Litem del señor JOSÉ DEL CARMEN LEÓN GAITÁN, quien figura como adjudicatario del predio denominado PAJONAL, señala, en términos generales, que corresponde a la administración probar todas y cada una de las acusaciones realizadas contra la adjudicación.

OSCAR JOSÉ CASTILLO ALARCÓN, Curador Ad Litem del señor JULIO ENRIQUE ALVAREZ SARMIENTO, quien figura como adjudicatario del predio denominado LA CHICHARRA, no presentó memorial alguno.

JORGE IVÁN VÉLEZ ORTÍZ, Curador Ad Litem del señor ALBERTO VEGA, quien figura como adjudicatario del predio denominado CARACOLÍ, señala, en términos generales, que la revocatoria directa en el presente caso no procede porque i) la acción de nulidad contra las resoluciones de adjudicación de baldíos sólo puede interponerse dentro de los dos años siguientes a su ejecutoria, motivo por el que el procedimiento ha prescrito; ii) de acuerdo con la legislación colombiana se requiere el consentimiento expreso y escrito del titular del acto administrativo objeto de revocatoria y iii) el INCODER no es competente para decidir el asunto, sino que los solicitantes debieron acudir al Tribunal Administrativo competente conforme lo dispone el Artículo 72 de la Ley 160 de 1994.

MARCO FIDEL ALFONSO ROA, Curador Ad Litem del señor JESUS ANTONIO BUSTOS, quien figura como adjudicatario del predio denominado EL MORICHAL, señala, en términos generales, que dentro del procedimiento de revocatoria directa que se adelanta contra la adjudicación se atiene a lo que dentro del mismo se pruebe y que en derecho corresponda, teniendo en cuenta que corresponde a la administración probar todas y cada una de las acusaciones realizadas contra la adjudicación.

SANIN MORALES PALACIOS, Curador Ad Litem del señor CARLOS CASTILLO LAVERDE, quien figura como adjudicatario del predio denominado CUMARE, señala, en términos generales, que dentro del procedimiento de revocatoria directa que se adelanta contra la adjudicación se atiene a lo que dentro del mismo se pruebe y que en derecho corresponda, teniendo en cuenta que corresponde a la administración probar todas y cada una de las acusaciones realizadas contra la adjudicación.

HENRY MAURICIO GUEVARA JOYA, Curador Ad Litem del señor JOAQUÍN SILVA, quien figura como adjudicatario del predio denominado CAMPO HERMOSO, señala, en términos generales, que se opone a todas y cada una de las pretensiones si no tienen fundamento legal o fáctico.

JOSÉ YESID GÓNGORA GÓNGORA, Curador Ad Litem del señor JORGE MONSAIDE VERGARA, quien figura como adjudicatario del predio denominado EL ESPEJO, señala, en términos generales, que se opone a todas y cada una de las pretensiones si no tienen fundamento legal o fáctico.

GERARDO RAMOS RICO, Curador Ad Litem del señor JAIRO RODRIGUEZ NIÑO, quien figura como adjudicatario del predio denominado TAFURITO, señala, en términos generales, que dentro del procedimiento de revocatoria directa que se adelanta contra la adjudicación se atiene a lo que dentro del mismo se pruebe y que en derecho corresponda.

LUIS ENRIQUE GALVIS MEDINA, Curador Ad Litem del señor CRISTOBAL RAMOS SACRISTAN, quien figura como propietario del predio englobado denominado CAMPO HERMOSO, señala, en términos generales, que dentro del procedimiento de revocatoria directa que se adelanta contra la adjudicación se atiene a lo que dentro del mismo se pruebe y que en derecho corresponda.

MIRIAN ROCIO RODRÍGUEZ CEDEÑO, Curadora Ad Litem del señor JUAN AGUSTIN HERRERA, quien figura como adjudicatario del predio denominado LA LAGUNA,

señala, en términos generales, que señor JUAN AGUSTIN HERRERA englobó y vendió el predio transcurridos más de 15 años desde la adjudicación, y no se sabe el motivo de dichos actos; agrega que dicho predio tiene otro titular por lo que habría que determinar las mejoras que el predio tiene.

LUIS FRANCISCO CARREÑO ROMERO, Curador Ad Litem del señor DANIEL GÓMEZ CAÑÓN, quien figura como propietario del predio englobado denominado EL PEDREGAL, señala, en términos generales, que el Instituto debe tener por ciertas y reales las adjudicaciones efectuadas pues la ley fue aplicada debidamente y quienes fueron adjudicatarios actuaron conforme a lo establecido en la época.

CARLOS GÓMEZ VILA, Curador Ad Litem del señor JAIME RAMÓN LOZANO NEIRA, quien figura como adjudicatario del predio denominado LA HONDA, señala, en términos generales, que la revocatoria directa en el presente caso no procede porque está basada en conjeturas y decires carentes de sustento probatorio sólido; la solicitud de revocatoria es improcedente, ilegal y arbitraria así como violatoria de los derechos adquiridos del adjudicatario.

DORIS AMPARO JOYA GIL, Curadora Ad Litem del señor ROBERTO ALVARADO, quien figura como adjudicatario del predio denominado LA PERLA, señala, en términos generales, que la revocatoria directa de la adjudicación no procede porque han transcurrido más de veinte años, con lo cual se ha cumplido el tiempo dentro del cual el Estado puede ejercer su potestad sancionatoria, razón por la cual está impedido para emitir y notificar una decisión luego del vencimiento del plazo legal establecido para la prescripción.

CLÍMACO ACHURY MURCIA, Curador Ad Litem del señor EDUARDO VILLARRAGA, quien figura como adjudicatario del predio denominado EL PEDREGAL, señala, en términos generales, que dentro del procedimiento de revocatoria directa que se adelanta contra la adjudicación se atiene a lo que la Administración dentro del mismo pruebe y que en derecho corresponda.

LUZ MARINA ESPINOSA ALVAREZ, Curadora Ad Litem del señor EDILSON HORACIO FAJARDO VEGA, quien figura como adjudicatario del predio denominado EL ESTERO, señala, en términos generales, que dentro del procedimiento de revocatoria directa que se adelanta contra la adjudicación se atiene a lo que dentro del mismo se pruebe y que en derecho corresponda.

SANDRA MILENA LOTERO GIRALDO, Curadora Ad Litem del señor EDGAR HERNANDO PRIETO, quien figura como adjudicatario del predio denominado LA PALMITA, señala, en términos generales, que dentro del procedimiento de revocatoria directa que se adelanta contra la adjudicación se atiene a lo que dentro del mismo pruebe y que en derecho corresponda teniendo en cuenta que corresponde a la administración probar que la adjudicación se hizo con violación de las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes al momento de la expedición del acto administrativo de titulación.

CLARA MARÍA PARRA ALBADAN, Curadora Ad Litem del señor ESTEBAN VASQUEZ, quien figura como adjudicatario del predio denominado LAS COROCORAS, señala, en términos generales, que se debe mantener en firme la adjudicación del predio habida cuenta de que en el momento de la titulación no hubo oposición alguna que

dejara entrever que no se daba cumplimiento a los requisitos establecidos por la Ley 160 de 1994.

AIZA MARÍA BARRAGÁN GORDILLO, Curadora Ad Litem del señor JESUS ANUNDO ARANDA SILVA, quien figura como adjudicatario del predio denominado LA SABANA, señala, en términos generales, que dentro del procedimiento de revocatoria directa que se adelanta contra la adjudicación se atiene a lo que dentro del mismo se pruebe y que en derecho corresponda

MARLENE ACEVEDO PÁEZ, Curadora Ad Litem de la señora GRACIELA RAMÍREZ, quien figura como adjudicataria del predio denominado EL CAMINITO, señala, en términos generales, que dentro del procedimiento de revocatoria directa que se adelanta contra la adjudicación se atiene a lo que dentro del mismo se pruebe y que en derecho corresponda.

JULIO CÉSAR CHAPARRO RODRÍGUEZ, Curador Ad Litem del señor JAIME ROJAS GARCIA, quien figura como propietario del predio englobado denominado LAS COROCORAS, señala, en términos generales, que dentro del procedimiento de revocatoria directa que se adelanta contra la adjudicación se atiene a lo que dentro del mismo pruebe y que en derecho corresponda, teniendo en cuenta que el señor JAIME ROJAS GARCÍA, puede ser un comprador de buena fe pues al momento de la compraventa no debía tener conocimiento de si los vendedores cumplieron los requisitos para la adjudicación.

DIANNY WILLMA BAQUERO LOZANO, Curadora Ad Litem del señor DANIEL VASQUEZ, quien figura como adjudicatario del predio denominado MATA DE MONTE, no presentó memorial alguno.

DIANA ROCIO MOLINA CARDENAS, Curadora Ad Litem del señor WILLIAM VELASCO, quien figura como adjudicataria del predio denominado LAGUNAZO, señala, en términos generales, que dado que no conoce a fondo el expediente, ni el contenido respecto a las pruebas del mismo, se acoge a la decisión tomada por la entidad.

MIGUEL ANTONIO PARDO MAYORDOMO, Curador Ad Litem del señor JUAN MANUEL SARMIENTO, quien figura como adjudicatario del predio denominado PALO ALTO, señala, en términos generales, que ejerce la defensa del mencionado adjudicatario sólo respecto de la legalidad de la adjudicación y no sobre hechos posteriores a esta.

ARMANDO ESCANDÓN GARCÍA, Curador Ad Litem de la señora ANA PAULINA SÁNCHEZ, quien figura como adjudicataria del predio denominado LA GRAN LAGUNA, señala, en términos generales, que dentro del procedimiento de revocatoria directa que se adelanta contra la adjudicación se atiene a lo que dentro del mismo pruebe y que en derecho corresponda.

ROBERTO URIBE RICAURTE, Curador Ad Litem del señor HUGO ARMANDO BUSTOS BERNAL, quien figura como propietario del predio englobado denominado EL RINCON, señala, en términos generales, que la revocatoria directa no procede sino cuando se desvirtué la presunción de legalidad de las adjudicaciones pues los dichos y decires no son suficientes para ello; se obtenga el consentimiento escrito y expreso de los adjudicatarios; se demuestre que los adjudicatarios engañaron a

la administración mediante un actuar doloso, premeditado y de mala fe, amén de que deben respetarse los derechos adquiridos de los terceros adquirentes de buena fe.

DÁMASO DE LA CRUZ AMARIS, Curador Ad Litem del señor GUILLERMO CADENA, quien figura como adjudicatario del predio denominado EL RINCON, señala, en términos generales, que dentro del procedimiento de revocatoria directa que se adelanta contra la adjudicación se atiene a lo que dentro del mismo se pruebe y que en derecho corresponda.

GLORIA ESPERANZA CAICEDO CARRILLO, Curadora Ad Litem del señor JUAN MOYA, quien figura como adjudicatario del predio denominado CASCABELES, no presentó memorial alguno.

BLADIMIR ANTONIO SALAS RAMOS, Curador Ad Litem del señor JOSÉ VICENTE SALINAS, quien figura como adjudicatario del predio denominado MATEJEY, no presentó memorial alguno.

V. ACTUACIÓN PROBATORIA[1].

Mediante Autos del 8 de agosto de 2013, el INCODER decretó y denegó algunas pruebas de oficio y otras solicitadas por los Curadores Ad litem, dentro de los expedientes correspondientes a los predios englobados EL PEDREGAL, MI LLANURA, CAMPO HERMOSO, EL RINCÓN Y LAS COROCORAS.

El día 23 de agosto de 2013, mediante auto, debidamente comunicado, se aplazó i) la práctica de los testimonios de algunos miembros de la comunidad del Porvenir solicitados por los peticionarios de la revocatoria, ii) la ampliación de testimonio de uno de los solicitantes de la revocatoria y iii) la inspección ocular de los predios objeto del presente procedimiento.

Finalmente, las referidas diligencias se programaron para los días 12, 13, 14 y 15 de septiembre de 2013 y se efectuaron en dichas fechas con la presencia de la Abogada MARIA PATRICIA GIL CORREDOR, apoderada de los adjudicatarios HUGO ARMANDO BUSTOS BERNAL (Predio adjudicado denominado Mi Llanura, englobado en el predio Mi Llanura y a su vez, propietario del derecho de dominio del predio englobado denominado El RINCON), ESTEBAN VASQUEZ (Predio adjudicado denominado Las Corocoras, englobado en el predio Las Corocoras), DANIEL VASQUEZ (Predio adjudicado denominado Mata de Monte, englobado en el predio Corocoras), ANA PAULINA SANCHEZ (Predio adjudicado denominado La Gran Laguna, englobado en el predio El Rincón), GRACIELA RAMIREZ (Predio adjudicado denominado El Caminito, englobado en el predio Las Corocoras), JOAQUÍN SILVA (Predio adjudicado denominado Campo Hermoso, englobado en el predio Campo Hermoso); GUILLERMO CADENA (Predio adjudicado denominado El Rincón, englobado en el predio El Rincón) y EDILSON HORACIO FAJARDO VEGA (Predio adjudicado denominado El Estero, englobado en el predio El Pedregal). En consecuencia, los Curadores Ad Litem nombrados para representar a los mencionados adjudicatarios, de plano quedaron desvinculados del procedimiento.

[1] Cabe anotar que atendiendo al criterio de la pertinencia probatoria, sólo se allegaron y valoraron para efectos de esta decisión, las pruebas que guardan conexión directa con los **hechos materia de debate** definidos a partir del capítulo VI de la presente providencia.

Igualmente las mencionadas pruebas se realizaron en presencia de la abogada NATALIA ANDREA GONZALEZ ARROYAVE, como apoderada de la Corporación Jurídica Yira Castro, solicitante de las revocatorias.

La Dra. MARIA PATRICIA GIL CORREDOR, al cabo de la referida diligencia, solicitó que se allegue al expediente la certificación de la Registraduría Nacional del Estado Civil a fin de validar si uno de los testigos ha sido residente del lugar. Sin embargo, dicha prueba por no ser pertinente para probar los hechos materia de debate, esto es, determinar si las adjudicaciones realizadas cumplen las condiciones legales vigentes al momento de las mismas, se denegará. (Artículo 40, Ley 1437 de 2011)

VI. CONSIDERACIONES.

No habiendo más pruebas pertinentes que decretar y practicar dentro de la presente actuación administrativa, procede el despacho a resolver de fondo la solicitud de revocación directa de las Resoluciones de Adjudicación referidas e identificadas previamente.

6.1. Problema jurídico.

Corresponde al Despacho determinar si los adjudicatarios de los predios referidos con anterioridad cumplían las condiciones para ser sujetos de reforma agraria y si los ocupaban y explotaban para la época en que estos fueron adjudicados, conforme lo establecían la Ley 30 de 1988, la Ley 97 de 1946 y actualmente la Ley 160 de 1994, en los que la ocupación previa y la explotación por el término de cinco (5) años, son requisitos para hacerse acreedor de un título de adjudicación de un predio baldío y, si se cumplieron las demás condiciones sustantivas para la a adjudicación.

Previo a lo anterior, la Subgerencia de Tierras determinará los aspectos sustanciales y de procedimiento generales y especiales aplicables a la revocatoria directa de los actos administrativos de adjudicación de baldíos, se referirá a la derogatoria del capítulo IX, del Decreto 2664 de 1994 y a la entrada en vigencia del Decreto Reglamentario 1465 de 2013, con base en lo cual, además de responder a las defensas ejercidas por los Curadores Ad litem designados, establece el marco de referencia para: a) acumular los cinco (5) expedientes de la revocatoria directa derivados de la acumulación de las veintisiete (27) adjudicaciones según los predios englobados y b) resolver la solicitud de nulidad presentada por la apoderada MARIA PATRICIA GIL CORREDOR y por la apoderada ANA MARÍA GARCÍA QUIÑONES.

6.2. ASPECTOS SUSTANCIALES Y PROCEDIMENTALES DE LA REVOCATORIA DIRECTA

6.2.1. La revocatoria directa[2]

[2] En este aparte, se analizará la Revocatoria Directa en general, es decir, desde sus notas características establecidas en ley con independencia de su fuente general formal -Código Contencioso Administrativo o Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo- desarrolladas por la doctrina y la jurisprudencia, que en términos generales no se afectan por las disposiciones especiales que al respecto establece la Ley 160 de 1994, y que por el contrario, deben

La revocatoria directa es la prerrogativa que tiene la administración para exceptuar la intangibilidad o invariabilidad de los actos administrativos y retirar del ordenamiento jurídico aquellos con base en las causales establecidas en la ley, con el fin de satisfacer el interés general involucrado con la expedición del acto, validando su legalidad, su oportunidad o su conveniencia[3]. La potestad de revocatoria no puede ser considerada como el ejercicio de una potestad sancionadora de la administración, pues esta tiene como finalidad determinar si la conducta ciudadana o de los administrados se ajusta a la ley, y no determinar si un acto administrativo adolece de ilegalidad.

La administración puede ejercer dicha potestad de oficio, o cuando le sea solicitada; en todo caso, así no le haya sido solicitado por el peticionario, la administración tiene el deber de revocar el acto administrativo siempre que se configure cualquiera de las causales previstas para ello, es decir, cuando el acto administrativo es lesivo del ordenamiento jurídico (causal 1ª), cuando atenta contra el interés público o social (causal 2ª) o cuando causa un agravio injustificado a una persona (causal 3ª), en la medida en que corresponde a la administración restablecer el imperio de la legalidad o la reparación de un daño público o privado.

La revocatoria directa está establecida de manera general en la normatividad que establece el procedimiento administrativo[4]. Allí queda claro que no es un recurso, pues no está regulada dentro de la normatividad relativa a dichos actos procesales administrativos[5] -amén de que una parte de la doctrina y la jurisprudencia han enfatizado que su carácter no es la de ser un recurso[6]-, como tampoco constituye una continuación de la actuación administrativa, pues la revocatoria directa sólo se puede ejercer contra actos administrativos en firme, es decir, una vez ha

---

ser tenidas en cuenta por la administración agraria al desarrollar la potestad de revocar directamente los actos administrativos de adjudicación de baldíos.

[3] Consúltese, Consejo de Estado, Sala de Contencioso Administrativo, Sección 3, Sentencia del 14 de noviembre de 1991, expediente 6293; Consejo de Estado, Sala de Contencioso Administrativo, Sección 4, Sentencia del 11 de marzo de 1993, expediente 4519; Consejo de Estado, Sala de Contencioso Administrativo, Sección 4, Sentencia del 26 de marzo de 1999, expediente 9244; Consejo de Estado, Sala de Contencioso Administrativo, Sala Plena, Sentencia del 16 de julio de 2002, expediente IJ-029; Corte Constitucional, Sentencia C-742 del 6 de octubre de 1999; Corte Constitucional, Sentencia C-255 del 29 de marzo de 2012.

[4] Véanse los Artículos 69 y siguientes del Código Contencioso Administrativo (C.C.A), y los artículos 93 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (C.P.A.C.A.)

[5] La vía gubernativa, estaba regulada en el C.C.A. en los artículos 49 a 61; en el C.P.A.C.A. los recursos del procedimiento administrativo están regulados en los Artículos 74 a 82;

[6] Se ha caracterizado la naturaleza jurídica de la revocatoria directa en dos sentidos: como un mecanismo procesal similar a los recursos cuando existe solicitud de parte y como un mecanismo unilateral de la administración cuando la revocatoria se efectúa de oficio. Al respecto Cfr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, *Tratado de Derecho Administrativo*, T. II, 4ª ed., Universidad Externado de Colombia, 2003, p. 300. Aunque un sector de la doctrina le atribuye a la revocatoria directa la naturaleza jurídica de un recurso extraordinario de la vía gubernativa, ello no es acertado en la medida en que para que se trate de un recurso, este acto procesal debe provenir de la manifestación de una de las partes del proceso, situación que no ocurre exclusivamente frente a la revocatoria directa, entre otras cosa porque i) las peticiones de los administrados ante la administración no son recursos, sino simplemente solicitudes en ejercicio de su derecho de petición, y ii) la revocatoria en esencia es una potestad o prerrogativa de la administración y por ello unilateral. La revocatoria directa tampoco puede ser caracterizada como un recurso extraordinario que implica que sus causales son taxativas y quien decide tiene limitadas sus facultades a la causal alegada, lo cual no ocurre en materia de revocatoria directa porque si bien sólo existen tres causales, éstas no pueden ser consideradas taxativas a la manera del recurso extraordinario de casación o el de revisión, cuando este exige, en el primero caso, i.e., que la sentencia haya violado de manera directa la ley sustancial, y la revocatoria directa, por ejemplo, exige que el acto administrativo sea manifiestamente contrario a la Constitución o a la ley, dejando margen o discrecionalidad a la administración para apreciar la incompatibilidad normativa. Para un revisión detallada de la crítica a la doctrina de la revocatoria como recurso, Cfr. Jorge Enrique Santos Rodríguez, *Construcción doctrinaria de la revocación del acto administrativo ilegal*, Tesis de Grado No. 34, Facultad de Derecho, Universidad Externado de Colombia, 2005, p. 68-73 Por último, la calificación de recurso extraordinario, corresponde al legislador, y no a la doctrina o la jurisprudencia.

concluido la correspondiente actuación administrativa[7] que condujo a la expedición del correspondiente acto sujeto a revocatoria.

La revocatoria directa procede en defecto de la vía gubernativa o de los recursos, es decir, procede si el peticionario no ha ejercido la vía gubernativa. En este sentido, la revocatoria no puede convertirse en una tercera oportunidad del administrado para continuar debatiendo la conformidad del acto administrativo con el ordenamiento jurídico, luego de haber interpuesto los recursos que pretenden rebatir el correspondiente acto administrativo.

La revocatoria directa no procede contra actos o decisiones intermedias o de trámite[8], pues estas no resuelven el fondo del asunto.

Ahora bien, para la expedición del acto administrativo que decide la revocatoria directa, se debe desarrollar necesariamente la actuación administrativa de conformidad con el procedimiento administrativo general establecido, según el caso, en el Código Contencioso Administrativo, o en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

El acto administrativo que decide la revocatoria en sentido positivo, suprime, extingue o retira el correspondiente acto administrativo el cual deja de tener vigencia y no produce, por tanto, efecto alguno.

Si la revocatoria del acto administrativo se produce por violación de las normas constitucionales o legales en que debió fundarse el acto, la revocatoria produce efectos retroactivos (*ex tunc*), es decir, con efecto hacia el pasado habida cuenta de que la decisión tiene efectos declarativos[9]; sin embargo, si la extinción del acto se produce por motivos de inconveniencia, mérito, oportunidad o para evitar un agravio injustificado a una persona, dicha decisión que tiene efecto constitutivo, implica que la revocatoria tiene efectos hacia el futuro (*ex nunc*)[10].

La revocatoria directa puede ser total o parcial; en esa medida, dejando de lado la revocatoria total, la administración puede retirar del ordenamiento jurídico aquella parte del acto administrativo que sea discordante con la legalidad, con el interés público o social o que produzca un agravio a una persona, a la vez que debe confirmar aquellas partes del mismo que estén conformes a la juridicidad y adoptar las determinaciones que considere pertinentes a fin de que la decisión sea congruente con el derecho material[11].

---

[7] Tanto en la normatividad del C.C.A como en la vigente en el C.P.A.C.A., las normas sobre conclusión de procedimiento administrativo son distintas a la de la potestad de revocatoria directa: en el C.C.A. en los artículos 62 a 67; en el C.P.A.C.A. en los artículos 87 a 92.

[8] Jaime Orlando Santofimio Gamboa. *Tratado de Derecho Administrativo*, T. II, 4ª ed., Universidad Externado de Colombia, 2003, p. 301

[9] Corte Constitucional, Sentencia C-255 del 29 de marzo de 2012. En dicha providencia la Corte Constitucional señaló respecto del efecto de la revocatoria lo siguiente: "Por ello, cuando la adjudicación de bienes baldíos ha ocurrido con violación de lo previsto en las normas legales y reglamentarias, subyacen motivos que justifican una actuación directa de la Administración para adoptar los correctivos necesarios y **restituir las cosas a su estado originario**." (énfasis añadido)

[10] Al respecto del efecto retroactivo y del efecto hacia el futuro de la revocatoria directa conforme a la causal que se acoja, Cfr. en Libardo Rodríguez Rodríguez, *Derecho Administrativo. General y colombiano*. 13ª ed., Ed. Temis, 2002, p. 269.

[11] Consejo de Estado, Sala de Contencioso Administrativo, Sección 1ª, Sentencia del 6 de febrero de 1980, citada por Jaime Orlando Santofimio Gamboa, cit, p. 305.

Tanto en el estatuto administrativo anterior (C.C.A. -Decreto 01 de 1984-) como en el actual (C.P.A.C.A. -Ley 1437 de 2011-), se establece como regla general, que se requiere consentimiento previo, expreso y escrito del titular para revocar un acto administrativo de contenido particular y concreto. Esto en virtud del principio de inmutabilidad de los actos administrativos de contenido particular y concreto o lo que también se denomina como "fuerza o autoridad de cosa decidida".

Por su parte, debe decirse que la revocatoria directa sobre un acto administrativo que decidió una revocatoria directa no es procedente habida cuenta del principio de inmutabilidad de los actos administrativos de contenido particular y concreto; la fuerza o la autoridad de cosa decidida implica que un debate ya cerrado por la administración no puede estar sujeto a la posibilidad de intentar una nueva revocatoria directa reabriendo la controversia por la misma vía, con menoscabo del principio de inmutabilidad del acto administrativo, impidiendo el control judicial que debe intentarse dentro del término de caducidad correspondiente, además de que por esa vía la Administración puede vulnerar la buena fe, el respeto al acto propio -o prohibición de ir contra acto propio- y la confianza legítima.

Adicionalmente, tanto en uno como en otro estatuto, se establece que ni la petición de revocación de un acto, ni la decisión que sobre ella recaiga revivirán los términos legales para demandar el acto ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, ni darán lugar a la aplicación del silencio administrativo.

El C.P.A.C.A. (Ley 1437 de 2011), aclaró que contra la decisión que resuelve la solicitud de revocatoria no procede recurso alguno.

6.2.2. Revocatoria directa en la Ley 160 de 1994: Revocatoria Directa de Actos Administrativos de Adjudicación de Baldíos.

En los incisos 6° y 7°, del Artículo 72, de la Ley 160 de 1994, en materia de Revocatoria Directa se estableció lo siguiente:

> (...)
>
> Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, el INCORA podrá revocar directamente, en cualquier tiempo, las resoluciones de adjudicación de tierras baldías proferidas con violación a lo establecido en las normas legales o reglamentarias vigentes sobre baldíos.
>
> En este caso no se exigirá el consentimiento expreso y escrito del respectivo titular. En lo demás, el procedimiento de revocación se surtirá con arreglo a las prescripciones del Código de lo Contencioso Administrativo.
>
> (...)

De la anterior normatividad, especial en tanto se refiere a un tipo de acto administrativo -actos administrativos de adjudicación de baldíos-, se pueden extraer los siguientes contenidos normativos:

a) Todas las resoluciones de adjudicación de tierras baldías proferidas con violación a lo establecido en las normas legales o reglamentarias vigentes sobre baldíos se podrán revocar directamente. El análisis de la revocatoria

debe centrarse en si la adjudicación si hizo o no con violación a las normas legales o reglamentarias vigentes en la época de la adjudicación.

b) Dicha revocatoria podrá hacerse en cualquier tiempo.
c) Para revocar directamente dichos actos administrativos no se exigirá el consentimiento expreso y escrito del respectivo titular.
d) En lo demás, el procedimiento de revocación directa debe surtirse conforme lo establece el Código Contencioso Administrativo.

Lo anterior significa, respecto del régimen general establecido en los referidos estatutos administrativos -el anterior, el C.C.A. -Decreto 01 de 1984-, como en el actual -C.P.A.C.A. o Ley 1437 de 2011- lo siguiente:

Los incisos 6° y 7° del Artículo 72 de la Ley 160 de 1994, constituyen norma especial de revocatoria directa, por lo tanto prevalecen sobre las disposiciones establecidas en las normas generales del Código que tratan sobre la prerrogativa o potestad de la revocatoria directa.

Sobre el consentimiento expreso y escrito exigible para que la administración pueda revocar un acto administrativo de carácter particular y concreto, la norma especial señala que procede la revocatoria directa sobre todas las resoluciones de adjudicación, que son actos particulares y concretos, sin necesidad de exigir el consentimiento previo y escrito del respectivo titular.

Respecto de la temporalidad, la norma general de los referidos estatutos administrativos establece un límite temporal; en efecto, la revocatoria directa no puede adelantarse cuando sobre el respectivo acto haya operado la caducidad para su control judicial (Artículo 94, Ley 1437 de 2011) o cuando sin haber caducado, se hubiese acudido a la jurisdicción y notificado auto admisorio de la demanda (Artículo 71 C.C.A.; artículo 95 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

No obstante, la norma especial - Ley 160 de 1994-, señala que la revocatoria directa de actos administrativos de adjudicación de baldíos podrá cumplirse en cualquier tiempo, esto es, con independencia de la caducidad del control judicial o aún habiéndose notificado el auto admisorio de la demanda contencioso administrativa correspondiente. Es más, en tal virtud la potestad de revocatoria directa de actos administrativos de adjudicación de baldíos, no está sujeta a ningún tipo de caducidad o prescripción. Sin embargo, debe aclararse que no puede adelantarse revocatoria cuando la jurisdicción contenciosa administrativa ya haya decidido, con sentencia de mérito, sobre la legalidad o no del acto administrativo[12]. En consecuencia, dado que la oportunidad para la revocatoria directa, está regulada de manera disímil en la norma general y en la norma especial, prevalece la norma especial -en materia de revocatoria de títulos de adjudicación de baldíos- que establece que la revocatoria directa de estos actos administrativos se puede adelantar en cualquier tiempo, salvo que sobre el acto administrativo la jurisdicción ya se haya emitido sentencia de mérito, tal como lo señaló la Corte Constitucional en la Sentencia C-255 de 2012, pues la revocatoria directa *"solo procede respecto de asuntos que no hayan sido debatidos y resueltos*

[12] Corte Constitucional, Sentencia C-255 del 29 de marzo de 2012, fundamento jurídico 6.7: *"Por el contrario, una lectura integral y sistemática de la norma muestra que la revocatoria directa de los actos de adjudicación de baldíos, sin el consentimiento expreso y escrito de su titular, solo procede respecto de asuntos que no hayan sido debatidos y resueltos ante la jurisdicción, porque de lo contrario el efecto de cosa juzgada impide reabrir controversias debidamente terminadas"*

ante la jurisdicción, porque de lo contrario el efecto de cosa juzgada impide reabrir controversias debidamente terminadas"[13]

Por su parte, las solicitudes de revocatoria directa deberán ser resueltas dentro de los plazos perentorios legales: tres meses según el C.C.A. y dos meses según el C.P.A.C.A. No obstante, por tratarse de términos perentorios, y no preclusivos, aun vencido el plazo respectivo, la administración debe proveer una decisión de mérito sobre la revocatoria.

6.2.3. Constitucionalidad de la revocatoria directa establecida en los Incisos 6° y 7°, artículo 72, Ley 160 de 1994.

A través de la Sentencia C-255 de 2012, la Corte Constitucional tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre la constitucionalidad de los incisos 6° y 7°, del artículo 72 de la Ley 160 de 1994.

En la mencionada providencia la Corte Constitucional declaró que dichas normas son ajustadas a la Constitución Política, razón por la cual es constitucional que el INCODER revoque en cualquier tiempo todas las resoluciones de adjudicación de baldíos expedidas, sin exigirse consentimiento expreso y escrito del titular, cuando la adjudicación de bienes baldíos haya ocurrido con violación de lo previsto en las normas legales y reglamentarias.

Como fundamento de su decisión la Corte Constitucional señaló que aunque es *"cierto que por regla general la administración no puede revocar unilateralmente sus propios actos, sino que debe acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo a través de la llamada acción de lesividad, entre otras por razones de seguridad jurídica y confianza legítima"* también lo es que *"excepcionalmente el Legislador puede autorizar la revocatoria unilateral sin que medie la anuencia del administrado, cuando ello obedezca a razones constitucionales importantes, existan elementos de juicio acreditados de manera suficiente y se ofrezcan al ciudadano todas las garantías para ejercer sus derechos de contradicción y defensa en el marco del debido proceso"*

"Por ello, cuando la adjudicación de bienes baldíos ha ocurrido con violación de lo previsto en las normas legales y reglamentarias, subyacen motivos que justifican una actuación directa de la Administración para adoptar los correctivos necesarios y restituir las cosas a su estado originario"

En consecuencia, la potestad o prerrogativa que tiene el INCODER conforme lo disponen los incisos 6° y 7° del Artículo 72 de la Ley 160 de 1994, para revocar las resoluciones de adjudicación en cualquier tiempo y sin requerir consentimiento previo y escrito del titular del derecho, se encuentra ajustada, a la Constitución de 1991 según el pronunciamiento de la Corte Constitucional.

6.2.4. Régimen procedimental aplicable.

[13] Corte Constitucional, Sentencia C-255 del 29 de marzo de 2012, Idem.

Tal como lo dispone el inciso 7, articulo 72 de la Ley 160 de 1994, *"(...) el procedimiento de revocación se surtirá con arreglo a las prescripciones del Código de lo Contencioso Administrativo"*

Pese a que la norma determinaba claramente que el procedimiento para la revocación es el señalado en el Código Contencioso Administrativo, hoy Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se expidió el Decreto 2664 de 1994, en cuyo capitulo IX, artículos 39 a 44, se estableció un procedimiento reglamentario especial distinto al regulado en dicho código para llevar a cabo la revocatoria directa de los actos administrativos de titulación de baldíos.

No obstante, el capitulo IX -De la Revocación Directa de las Resoluciones de Adjudicación-, del Decreto 2664 de 1994 con base en el cual venia desarrollándose el presente procedimiento administrativo tuvo vigencia hasta el día 9 de julio de 2013, en virtud de la entrada en vigencia del Decreto 1465 de 2013 el día 10 de julio de 2013. El artículo 45 de este decreto, en cumplimiento de lo establecido en los incisos 6° y 7°, artículo 72 de la Ley 160 de 1994, estableció que el procedimiento administrativo de revocación directa de las resoluciones de adjudicación deberá surtirse, a partir de su vigencia, únicamente con arreglo a las prescripciones del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, esto es, conforme lo dispone la **primera parte** de dicho Código en virtud de lo establecido tanto en su Artículo 2, como en su artículo 34.

Al tratarse de normas procedimentales, el Decreto 1465 de 2013, que no estableció un régimen de transición, tiene aplicación inmediata, razón por la cual todos los procedimientos de revocatoria directa en curso a la entrada de mismo se deben adelantar, desarrollar y culminar con las normas de la primera parte del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que prevalecen para todos los efectos legales sobre las del derogado capítulo IX, del Decreto 2664 de 1994.

Lo anterior, en virtud de lo establecido en el Artículo 40 de la ley 153 de 1887, modificado por el Artículo 624 del Código General del Proceso -vigente en virtud de lo establecido el numeral 1, artículo 627 ibidem, desde el 12 de julio de 2012-

Efectivamente, el Artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el Artículo 624 del Código General del Proceso, desarrolla el principio de aplicación inmediata de la norma procesal de la siguiente manera:

> Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.
>
> Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.
>
> La competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el momento de formulación de la demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine dicha autoridad".

Así las cosas, al momento del cambio de legislación procedimental, y para todas las revocatorias directas que se adelantaban en el INCODER el día 10 de julio de 2013, se debe señalar que las notificaciones que se estuvieren surtiendo, las diligencias iniciadas, los recursos interpuestos, los nombramientos efectuados, las pruebas decretadas, los traslados efectuados, etc. se regirán por las normas vigentes cuando comenzaron a surtirse las notificaciones, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos o se promovieron los incidentes. Agotado o efectuado el respectivo acto procesal (la notificación, la diligencia, el recurso, el nombramiento y posesión, el traslado, etc.) el procedimiento de revocatoria se debe seguir conforme a la legislación nueva, esto es, según el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

6.2.5. Los vacíos normativos en los procedimientos administrativos.

Tanto en el Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984) como en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), claramente se ha establecido que el procedimiento administrativo general, común y principal es el establecido en la primera parte del mismo al que deben remitirse los procedimientos administrativos especiales en lo no previsto en estos.

Al respecto, el Código Contencioso Administrativo establecía en su Artículo 1, lo siguiente:

> ARTÍCULO 1. Campo de aplicación. Las normas de esta parte primera del código se aplicarán a los órganos, corporaciones y dependencias de las ramas del poder público en todos los órdenes, a las entidades descentralizadas, a la Procuraduría General de la Nación y Ministerio Público, a la Contraloría General de la República y contralorías regionales, a la Corte Electoral y a la Registraduría Nacional del Estado Civil, así como a las entidades privadas, cuando unos y otras cumplan funciones administrativas. Para los efectos de este código, a todos ellos se les dará el nombre genérico de "autoridades".
>
> Los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales se regirán por éstas; en lo no previsto en ellas se aplicarán las normas de esta **parte primera** que sean compatibles.
>
> Estas normas no se aplicarán en los procedimientos militares o de policía que por su naturaleza, requieren decisiones de aplicación inmediata, para evitar o remediar una perturbación de orden público en los aspectos de defensa nacional, seguridad, tranquilidad, salubridad y circulación de personas y cosas.
>
> Tampoco se aplicarán para ejercer la facultad de libre nombramiento y remoción (Énfasis añadido)

En la actualidad, el CPACA dispone lo siguiente:

En su artículo 2 se señala:

> Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Las normas de esta Parte Primera del Código se aplican a todos los organismos y entidades que conforman las ramas del poder público en sus distintos órdenes, sectores y niveles, a los órganos autónomos e independientes del Estado y a los particulares, cuando cumplan funciones administrativas. A todos ellos se les dará el nombre de autoridades.
>
> Las disposiciones de esta Parte Primera no se aplicarán en los procedimientos militares o de policía que por su naturaleza requieran decisiones de aplicación inmediata, para evitar

> o remediar perturbaciones de orden público en los aspectos de defensa nacional, seguridad, tranquilidad, salubridad, y circulación de personas y cosas. Tampoco se aplicarán para ejercer la facultad de libre nombramiento y remoción.
>
> **Las autoridades sujetarán sus actuaciones a los procedimientos que se establecen en este Código, sin perjuicio de los procedimientos regulados en leyes especiales. En lo no previsto en los mismos se aplicarán las disposiciones de este Código.**

En consecuencia, como la disposición antes referida defiere al propio Código la forma en que se deben aplicar las normas generales de la parte primera del Código respecto de los procedimientos especiales, en materia de procedimientos administrativos, el CPACA en su Artículo 34 de CPACA, establece lo siguiente:

> Las actuaciones administrativas se sujetarán al procedimiento administrativo común y principal que se establece en este Código, sin perjuicio de los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales. **En lo no previsto en dichas leyes se aplicarán las disposiciones de esta Parte Primera del Código.** (Énfasis añadido)

De acuerdo con lo anterior, en el desarrollo de un procedimiento administrativo no es posible acudir a normas distintas a las establecidas en la parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (antes Código Contencioso Administrativo), bien sea para presentar una solicitud o resolver una petición o bien sea para llenar los vacíos de los procedimientos administrativos especiales, salvo la remisión expresa que el procedimiento administrativo autoriza en materia probatoria. En este sentido, el artículo 41 del CPACA, establece que son admisibles todos los medios de pruebas señalados en el Código de Procedimiento Civil (hoy Código General del Proceso).

Lo anterior significa que en el inicio, desarrollo y conclusión de un procedimiento administrativo general o especial, tampoco es posible hacer uso de la segunda parte del Código pues en esta sólo se establece para los procesos y actuaciones de la **jurisdicción contenciosa administrativa**, los cuales no son compatibles con el procedimiento administrativo, dada la distinta naturaleza jurídica del procedimiento administrativo y del proceso judicial. Esto es lo que se desprende, de lo dispuesto en el Artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (énfasis añadido):

> Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Idéntica redacción tenía el Código Contencioso Administrativo - C.C.A. en su artículo 267 (énfasis añadido):

> ARTICULO 267. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo Contencioso Administrativo.

Por lo anterior, para aplicar y adelantar un procedimiento administrativos general o especial, tampoco es lícito, recurrir a normas de otros estatutos como el Código General del Proceso, pues esta remisión sólo está permitida para los procesos judiciales que adelanta la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

6.2.6. El Procedimiento Administrativo de Revocatoria Directa de las Resoluciones de Adjudicación de Bienes Baldíos.

Conforme a lo expuesto, el procedimiento de revocatoria directa se surtirá conforme al procedimiento administrativo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. (Inciso 7°, artículo 72, Ley 160 de 1994 y Decreto 1465 de 2013)

En efecto, dicho procedimiento es el establecido en los Artículos 34 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo:

El Artículo 34, establece que las actuaciones administrativas -como la revocatoria directa- se sujetarán al procedimiento administrativo común y principal allí señalado. Los procedimientos administrativos especiales, en lo no previsto en ellos, se regularán por las normas de la primera parte del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Los artículos 35 y 36 establecen que el procedimiento administrativo se adelantará por escrito, verbalmente o por medios electrónicos; si el procedimiento inicia de oficio, siempre será escrito y que será por medios electrónicos cuando la ley lo autorice expresamente; se podrán decretar audiencias; se debe formar un expediente y que las actuaciones se podrán acumular con el fin de evitar decisiones contradictorias; los documentos de expediente se pueden entregar, y los interesados pueden solicitar copias y certificaciones.

En el caso de la revocatoria directa, el inicio del procedimiento se hará a través de un acto administrativo de trámite, con el fin de enterar a los interesados la existencia de la actuación administrativa respectiva.

El artículo 37 establece que cuando un tercero pueda resultar afectado con la eventual decisión dentro de una actuación administrativa se le comunicará la existencia de la actuación, el objeto de la misma y el nombre del peticionario, si lo hubiere, para que puedan constituirse como parte y hacer valer sus derechos. Para tal efecto, la comunicación "se remitirá a la dirección o correo electrónico que se conozca si no hay otro medio más eficaz. De no ser posible dicha comunicación, o tratándose de terceros indeterminados, la información se divulgará a través de un medio masivo de comunicación nacional o local, según el caso, o a través de cualquier otro mecanismo eficaz, habida cuenta de las condiciones de los posibles interesados. De tales actuaciones se dejará constancia escrita en el expediente"

Así, el auto de inicio se le comunicará al adjudicatario, al titular de derechos reales, al Ministerio Público, y por un mecanismo eficaz se solicitará su inscripción en el competente registro de instrumentos públicos, y se enviará a la correspondiente Alcaldía Municipal y a la Personería Municipal con el fin de lograr, por ser un medio eficaz también, la comunicación de la actuación administrativa correspondiente.

Conforme al artículo 38, los terceros "podrán intervenir en las actuaciones administrativas con los mismos derechos, deberes y responsabilidades de quienes son parte interesada, en los siguientes casos: 1. Cuando hayan promovido la actuación administrativa sancionatoria en calidad de denunciantes, resulten

afectados con la conducta por la cual se adelanta la investigación, o estén en capacidad de aportar pruebas que contribuyan a dilucidar los hechos materia de la misma. 2. Cuando sus derechos o su situación jurídica puedan resultar afectados con la actuación administrativa adelantada en interés particular, o cuando la decisión que sobre ella recaiga pueda ocasionarles perjuicios. 3. Cuando la actuación haya sido iniciada en interés general"

En materia probatoria, el Artículo 40 establece que durante toda "la actuación administrativa y hasta antes de que se profiera la decisión de fondo se podrán aportar, pedir y practicar pruebas de oficio o a petición del interesado sin requisitos especiales", en decisión contra la que no proceden recursos, incluso si esta es negativa, habida cuenta del principio de que donde el legislador no distingue al interprete no le es permitido hacer dicha distinción para dar un alcance al precepto que no tiene. En todo caso, "el interesado contará con la oportunidad de controvertir las pruebas aportadas o practicadas dentro de la actuación, antes de que se dicte una decisión de fondo. Los gastos que ocasione la práctica de pruebas correrán por cuenta de quien las pidió. Si son varios los interesados, los gastos se distribuirán en cuotas iguales. Serán admisibles todos los medios de prueba señalados en el Código de Procedimiento Civil", hoy Código General del Proceso.

En efecto, desde el auto de inicio se podrán allegar pruebas, sin perjuicio de que, durante la actuación y hasta antes de proferirse decisión de fondo, ello también sea posible sin formalidad alguna, decisión contra la que no procede recurso alguno. En todo caso, para allegar pruebas la correspondiente autoridad debe analizar su idoneidad, pertinencia, conducencia y utilidad, solicitando aquellas que cumplan los requisitos y denegando y no realizando las que no se ajusten a tales criterios.

En virtud del principio de eficacia, establecido en el numeral 11, del Artículo 3° del CPACA, "las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa" en este sentido, conforme al Artículo 41, la "autoridad, en cualquier momento anterior a la expedición del acto, de oficio o a petición de parte, corregirá las irregularidades que se hayan presentado en la actuación administrativa para ajustarla a derecho, y adoptará las medidas necesarias para concluirla".

En este sentido, las autoridades administrativas, deberán sanear o corregir las irregularidades procedimentales para ajustar la actuación administrativa a derecho adoptando las medidas necesarias para concluirla en procura del garantizar la efectividad del derecho material objeto de la correspondiente actuación. Para el efecto, en toda actuación administrativa, mediante un auto para mejor proveer o de saneamiento, la autoridad administrativa dará cuenta del error procedimental encontrado, adoptará la medida por la cual lo sanea, dejando sin efecto el acto procesal viciado y adoptando todas aquellas medidas que en lo posible sean necesarias para no dilatar el procedimiento con el fin de garantizar la culminación de la actuación administrativa. Igualmente se puede retrotraer el procedimiento, pero sólo en aquellos casos en los que sea absolutamente necesario

para garantizar el debido proceso de los interesados. No le está permitido a la administración declarar la nulidad de actos administrativos bien sean actos de trámite o actos definitivos, ni menos acudir para tal efecto a las normas del Código General del Proceso, pues como se ha ilustrado, estas normas no son aplicables al procedimiento administrativo, sino sólo en materia probatoria, amén de la competencia constitucional atribuida a tales efectos de manera privativa a la jurisdicción contencioso administrativa.

La decisión definitiva, porque decide directa o indirectamente el fondo del asunto, o porque hace imposible continuar con la actuación, se adoptará de manera motivada una vez se ha dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, con base en las pruebas e informes disponibles. En la decisión, se resolverán "todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas dentro de la actuación por el peticionario y por los terceros reconocidos" (Articulo 42 y 43).

La providencia que decide la revocatoria directa además de exponer de manera motivada las razones de la misma, contendrá la solicitud de inscripción en la competente oficina de registro de instrumentos públicos de la resolución de revocatoria por la cual el bien inmueble retorna al dominio de la Nación bajo la administración del INCODER, o la solicitud de cancelación de la anotación de inicio de trámite en caso de que la revocatoria no se decrete; sin embargo, en virtud de lo estipulado en los Artículos 57 y 58 de la Ley 1579 de 2012, no deberá contener ningún tipo de solicitud dirigida a cancelar la matrícula inmobiliaria del bien baldío, pues conforme al mencionado artículo los bienes baldíos deben ser plenamente identificados inmobiliariamente a partir de, entre otros, su asiento registral. Además conforme lo señala el Decreto 1465 de 2013, la decisión final, según decida o no revocar el acto administrativo, debe prever la recuperación material del bien baldío correspondiente.

Si hay lugar a ello, se faculta a la administración para que "en cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte" se corrijan "los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda" (Artículo 44)

Adoptada la decisión definitiva, ésta se notificará conforme lo establecen los artículos 67 y siguientes del C.P.A.C.A.

En todo caso, sin el lleno de los requisitos de los mencionados artículos, no se tendrá por hecha la notificación, ni producirá efectos legales la decisión, **a menos que la parte interesada, con lo cual se entiende notificada por conducta concluyente, revele que conoce el acto, consiente la decisión o interpone los recursos legales.**

Adicionalmente, cuando, a juicio del INCODER, los actos administrativos de carácter particular afecten en forma directa e inmediata a terceros que no intervinieron en la actuación y de quienes se desconozca su domicilio, ordenarán publicar la parte resolutiva en la página electrónica de la entidad y en un medio

masivo de comunicación en el territorio donde sea competente quien expidió las decisiones. En caso de ser conocido su domicilio se procederá a la notificación personal.

Contra la decisión que resuelve la revocatoria directa, no procede recurso.

Así las cosas, teniendo en cuenta el anterior marco jurídico conceptual sustancial y procedimental, la Subgerencia de Tierras procede sobre:

6.3. Decisión de acumulación.

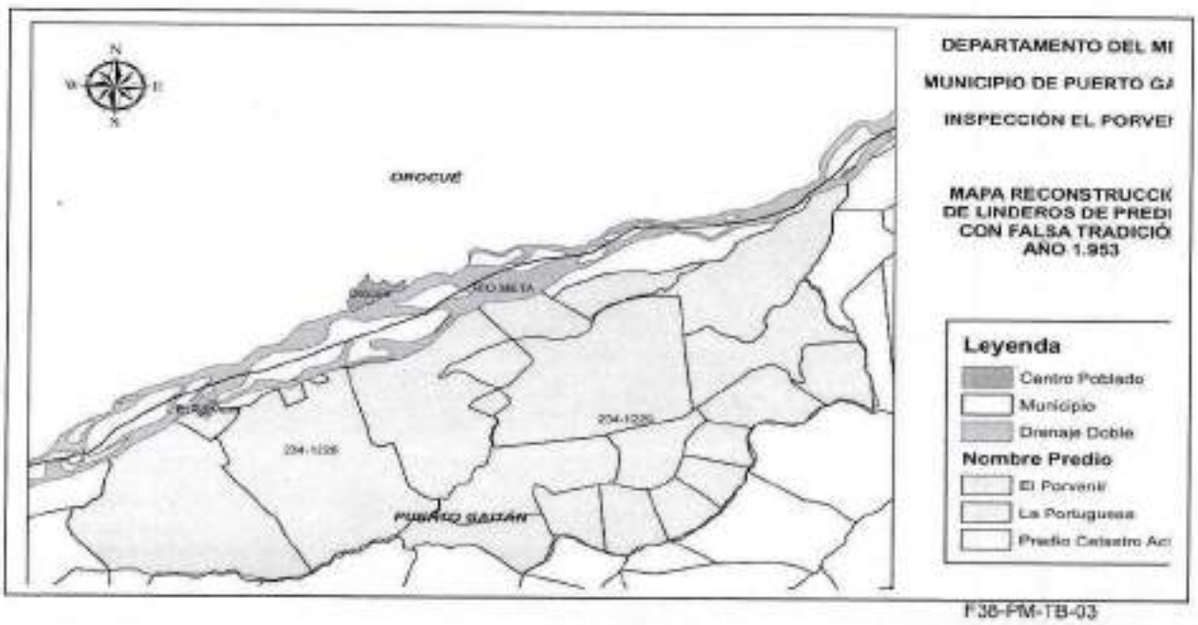
En el diagnóstico predial que hace parte del informe de la Inspección Ocular realizada a los predios durante los días 13, 14 y 15 de septiembre de 2013, se concluyó lo siguiente:

> *"Conforme al estudio de la documentación del predio objeto de Diagnóstico, se presenta a continuación el análisis predial a considerar en el proceso:*
>
> *• Se observa que sobre la misma área de terreno **existe doble folio**. Los existentes desde 1.945 (234-1228) y 1.953 (234-1229), El Porvenir y La Portuguesa respectivamente, y los folios resultado del englobe de las titulaciones del INCORA.*
>
> *• Los 27 folios de los predios cuya naturaleza jurídica fue la titulación del INCORA, se encuentran cerrados.*
>
> *• Actualmente la información jurídica y catastral corresponde con los 5 englobes de las 27 titulaciones, así:*

PREDIO	FOLIO	CÉDULA CATASTRAL	ÁREA (Ha)
Mi Llanura	234-15741	00-01-0001-0756-000	4.641 Ha 500 m2
El Rincón	234-15742	00-01-0001-0742-000	4.730 Ha 3.000 m2
Las Coracoras	234-15743	00-01-0001-0745-000	5.681 ha 2.105 m2
Campo Hermoso	234-15744	00-01-0001-0087-000	5.969 ha 5.000 m2
El Pedregal	234-15745	00-01-0001-0052-000	4.918 ha 3.000 m2

Los folios de matrícula inmobiliaria de estos últimos predios están activos y se traslapan con los folios de las matrículas inmobiliarias actualmente existentes con antecedente registral de falsa tradición desde 1.945 (234-1228) y 1.953 (234-1229), correspondientes a los denominados predios El Porvenir y La Portuguesa. Veamos:

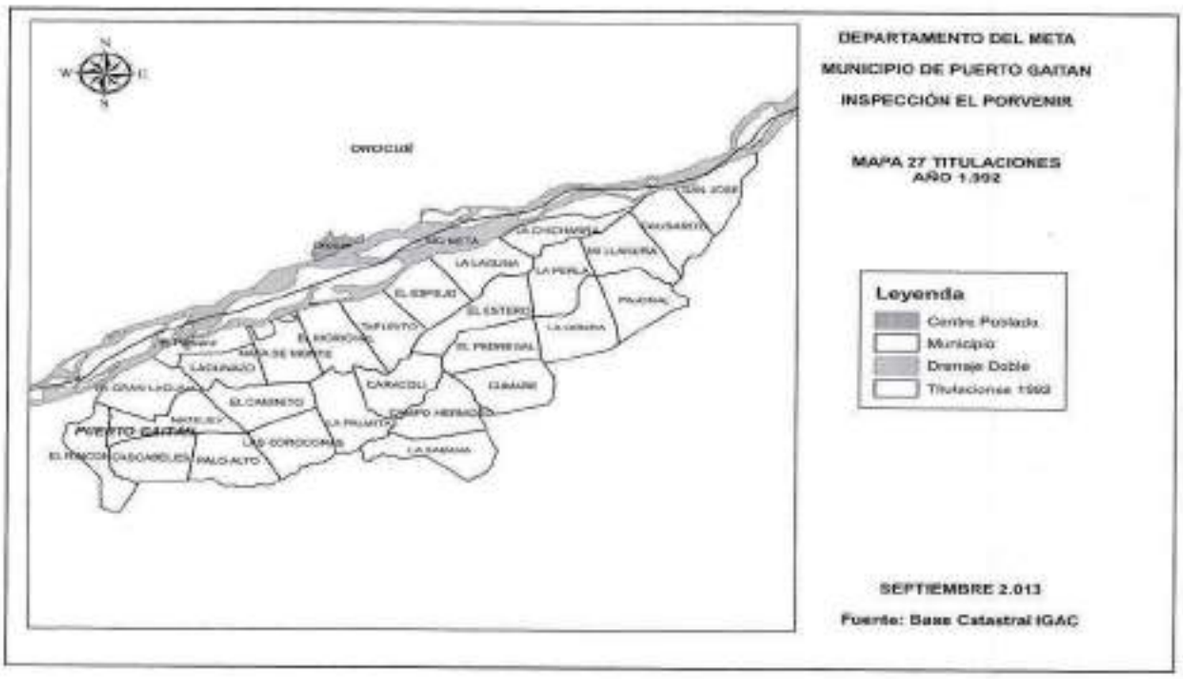
a) Plano de los Predios La Portuguesa y El Porvenir, conforme al informe técnico que obra en el expediente:



F38-PM-TB-03

expediente:

b) Plano de las 27 adjudicaciones, conforme al informe técnico que obra en el expediente:



Teniendo en cuenta que espacialmente se trata de los mismos terrenos conocidos en el registro público desde el año 1945 y el año 1953; que sobre tales predios se realizaron 27 adjudicaciones (25, los días 15 y 16 de enero de 1992- y 2 los días 23 y 25 de septiembre de 1996), cuyas matrículas inmobiliarias fueron cerradas una vez fueron englobados en cinco (5) predios; que dichos englobes se efectuaron el mismo día -20 de diciembre de 2007 en la Notaría 4° de Villavicencio- y que los cinco (5) predios englobados resultantes fueron vendidos, a través de sendas escrituras públicas, el mismo día 28 de diciembre de 2007, se puede concluir sin lugar a dudas que el presente procedimiento debe tramitarse dentro de una misma actuación a fin de evitar decisiones contradictorias.

Así las cosas, conforme lo dispone el Artículo 36 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo) los procedimientos de revocatoria directa adelantados contra las Resoluciones de Adjudicación dentro de los expedientes acumulados correspondientes a los predios englobados EL PEDREGAL, MI LLANURA, CAMPO HERMOSO, EL RINCÓN, LAS COROCORAS, se acumularán y serán decididos a través de la presente providencia.

6.4. Decisión sobre la petición de nulidad.

Con fundamento en lo dispuesto en el inciso 2, Artículo 42 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, según el cual la *"(...) decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas dentro de la actuación por el peticionario y por los terceros reconocidos"*, procede el Despacho a resolver, en esta instancia, las peticiones de nulidad, presentadas dentro del correspondiente trámite, por la abogada MARIA

PATRÍCIA GIL CORREDOR y ANA MARÍA GARCÍA QUIÑONES.

6.4.1. Nulidad presentada por la abogada MARIA PATRICIA GIL CORREDOR.

La abogada MARIA PATRICIA GIL CORREDOR, apoderada de los adjudicatarios HUGO ARMANDO BUSTOS BERNAL (Predio adjudicado denominado Mi Llanura, englobado en el predio Mi Llanura y a su vez, quien obra como propietario de derecho de dominio del predio englobado denominado El RINCON), ESTEBAN VASQUEZ (Predio adjudicado denominado Las Corocoras, englobado en el predio Las Corocoras), DANIEL VASQUEZ (Predio adjudicado denominado Mata de Monte, englobado en el predio Corocoras), ANA PAULINA SANCHEZ (Predio adjudicado denominado La Gran Laguna, englobado en el predio El Rincón), GRACIELA RAMIREZ (Predio adjudicado denominado El Caminito), englobado en el predio Las Corocoras), JOAQUÍN SILVA (Predio adjudicado denominado Campo Hermoso, englobado en el predio Campo Hermoso) y GUILLERMO CADENA (Predio adjudicado denominado El Rincón, englobado en el predio El Rincón), solicitó la nulidad de los Autos de 28 de diciembre de 2012 por los cuales se dio inicio a los procedimientos de revocatoria directa que son objeto de la presente providencia, y en consecuencia, solicitó se decrete la nulidad de todas las actuaciones posteriores y derivadas del auto de inicio y surtidas hasta el momento, por configurarse las causales establecidas en los numerales 3°, 8° y 9° del Artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo dispuesto en el Artículo 208 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y por violación del debido proceso establecido en el Artículo 29 de la Constitución Política.

Señala la apoderada que con el auto de inicio del 28 de diciembre de 2012, se revivió un proceso legalmente concluido, no se practicó en legal forma la notificación al directamente afectado o interviniente, no se practicó en debida forma la notificación a personas indeterminadas y que el trámite de las resoluciones debió efectuarse de manera separada resultando improcedente su acumulación.

Al respecto, conforme ya se manifestó, la Subgerencia de Tierras Rurales afirma que el procedimiento de revocatoria directa de resoluciones de adjudicación de baldíos, es un procedimiento administrativo, que hasta el día 9 de julio de 2013, estuvo regulado de manera especial por lo dispuesto en el capítulo IX del Decreto 2664 de 1994, y de manera supletiva, con lo dispuesto en la parte primera del Código Contencioso Administrativo; a partir del día 10 de julio de 2013, en virtud de lo dispuesto en los Artículos 44, 45, 46 y 75 del Decreto 1465 de 2013, en concordancia con lo dispuesto en el Artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el Artículo 624 del Código General del Proceso, está regulado conforme lo dispone la parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En consecuencia, es improcedente conforme lo disponía el Artículo 1 del Código Contencioso Administrativo y hoy lo establece el Artículo 34 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicitar la aplicación dentro del Procedimiento Administrativo general o especial, de normas de otros estatutos como el Código de Procedimiento Civil o incluso de normas de la parte segunda del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que sólo son aplicables a las actuaciones y procedimientos ante la

Jurisdicción Contencioso Administrativa (Artículo 306 del CPACA o Artículo 267 del C.C.A).

No obstante lo anterior, la apoderada solicitante de la nulidad no tiene razón en sus reproches de nulidad por las siguientes razones:

a) Se revivió un proceso legalmente concluido.

La apoderada manifiesta que la revocatoria directa se adelanta sobre situaciones discutidas y decidas en el proceso de clarificación de la propiedad que se adelantó sobre esos mismos predios, el cual concluyó con la Resolución No. 1667 de 2010 que fue favorable a los adjudicatarios.

Al respecto, la Subgerencia de Tierras Rurales se permite manifestarle a la apoderada GIL CORREDOR, que el objeto y finalidad del procedimiento de revocatoria directa de la resolución de adjudicación, son distintos al objeto y finalidad del procedimiento de clarificación de la propiedad establecido en el Artículo 48 de la Ley 160 de 1994.

En efecto, el procedimiento de clarificación de la propiedad está dirigido a determinar si desde el punto de vista de la propiedad un bien baldío ha salido o no del dominio de la Nación. Por su parte, en el procedimiento de revocatoria directa de un título de adjudicación, se pretende auscultar si el título se expidió con violación de las normas constitucionales, legales o reglamentarias vigentes al momento en que se expidió la resolución administrativa correspondiente. En consecuencia, por este motivo la nulidad deprecada es improcedente, por tratarse de dos procedimientos administrativos distintos con finalidades diferentes.

Además, la existencia de procedimientos realizados o en curso sobre los predios o los títulos que se examinan en la presente providencia, de ninguna manera inhiben la competencia del Instituto para adelantar la revocatoria directa, que para su procedibilidad no está sometido a algún tipo de actuación o decisión previa. Incluso, aún en el caso de que la decisión en un proceso de clarificación de la propiedad haya determinado que un bien baldío ha salido del dominio de la Nación, ello no implica que no pueda ejercerse la revocatoria directa contra el acto de adjudicación si el mismo adolece de ilegalidad. La revocatoria directa de las resoluciones de adjudicación procede siempre sobre estas, independientemente de la suerte del derecho de domino después de la adjudicación.

b) No se practicó en legal forma la notificación al directamente afectado o interviniente, ni se practicó en debida forma la notificación a personas indeterminadas.

Señala la apoderada que el INCODER debió vincular a los adjudicatarios como parte, y no como simples terceros, notificándolos debidamente, y tratar a los actuales y pasados propietarios del derecho de dominio como simples terceros. Así las cosas, argumenta que el auto de inicio tiene un vicio de nulidad pues en éste no se ordenó notificar a los directamente intervinientes y afectados con la eventual revocatoria. Al confundir las calidades con las que deben intervenir dentro del presente proceso, el INCODER no realizó las notificaciones en debida forma conforme lo disponen tanto el Código de Procedimiento Civil y el Código

Contencioso Administrativo.

A este respecto la Subgerencia de Tierras Rurales recuerda que de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 41 del Decreto 2664 de 1994, que era la norma aplicable en dicho momento, el auto de inicio, conforme ocurrió, debe ser notificado "*de manera personal al Procurador Agrario, **al titular del derecho de dominio** y al peticionario de la revocación*", a quienes, en defecto de la notificación personal, previo emplazamiento, "se les designará un Curador Ad-litem, al que se le notificará la providencia y con quien se adelantará el procedimiento". En este procedimiento de notificación, no es procedente pretender la aplicación de las normas de notificación de providencias judiciales establecidas en el Código de Procedimiento Civil, ni las relativas a dichos asuntos establecidas en la parte segunda del Código Contencioso Administrativo o en el CPACA.

Lo que si es procedente, en vigencia de las normas del capitulo IX del Decreto 2664 de 1994, cuando ya no estaba vigente el Código Contencioso Administrativo, es la aplicación de manera supletiva de las normas de la parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para regular aspectos de la notificación no regulados en el mencionado capítulo IX, del Decreto 2664 de 1994. De ahí que la notificación por aviso, haya sido la procedente.

Además debe tenerse en cuenta que en materia de procedimiento administrativo, el llamado "tercero" tiene los mismos derechos y deberes de aquel que se considera "parte", con lo cual, en este escenario procedimental no tienen ningún sentido jurídico hacer una diferencia sustancial o procesal entre dichas figuras. (Artículo 14 del C.C.A. y Artículo 38 del CPACA)

De acuerdo con el Artículo 41 del Decreto 2664 de 1994, no es obligación del INCODER notificar a los adjudicatarios como tal, sino a quien al momento de la notificación, es el titular del derecho de dominio. No obstante, el INCODER en aplicación de las garantías del debido proceso, procedió a realizar la notificación personal, previo el procedimiento de rigor y siguiendo éste, tanto de los titulares del derecho de dominio como de los adjudicatarios, a quienes en su totalidad, por no ser posible en primera instancia la notificación personal, se les emplazó y se les nombró sendos Curadores Ad Litem que se notificaron de la providencia de inicio.

En el caso de quienes obraban como titulares de los derechos de domino sobre los predios englobados denominados EL PEDREGAL, MI LLANURA, CAMPO HERMOSO, EL RINCON Y LAS COROCORAS, la citación se envió a dichos predios por ser la dirección conocida.

Además debe tenerse en cuenta que el señor HUGO ARMANDO BUSTOS BERNAL, quien obra como propietario del predio englogado denominado "El Rincón", mediante la Resolución No. 22 del quince (15) de enero de 1992, se le adjudicó el predio denominado "MI LLANURA", ubicado en la vereda El Porvenir del Municipio de Puerto Gaitán en el departamento del Meta, razón por la cual fue emplazado, al cabo de lo cual también se le nombraron sendos Curadores Ad Litem, tanto en su calidad de adjudicatario del denominado predio MI LLANURA, englobado en el predio MI LLANURA, como en su calidad de propietario del predio englobado denominado EL RINCÓN.

En consecuencia, por estos motivos la nulidad deprecada es improcedente.

c) El trámite de las resoluciones debió efectuarse de manera separada resultando improcedente su acumulación, con lo cual se viola del debido proceso establecido en el Artículo 29 de la Constitución Política.

Al respecto la Subgerencia de Tierras Rurales manifiesta que la nulidad deprecada por este motivo es improcedente.

En efecto, la apoderada señala que no debió acumularse los expedientes en cinco expedientes de revocatorias, pues cada una de las resoluciones de adjudicación es independiente y nada tienen que ver con los predios adjudicados a través de otras resoluciones. Además se debe tener en cuenta que la Superintendencia de Notariado y Registro canceló las anotaciones de los englobes efectuados.

Sobre el particular se debe puntualizar que la acumulación de las revocatorias directas se tomó teniendo en cuenta la decisión de los propios adjudicatarios, antes de que efectuaran la venta de derecho de dominio, de englobar los 27 predios adjudicados en cinco predios, razón por la que las 27 matriculas inmobiliarias de los predios adjudicados fueron cerradas, para abrir paso a cinco (5) matrículas resultantes de los englobes efectuados y que actualmente están activas.

Como quedó especificado en el acápite en el que se determina la acumulación de todas las revocatorias adelantadas en el presente caso, precisamente la acumulación, se justifica porque i) espacialmente se trata de los mismos terrenos conocidos en el registro público desde el año 1945 y el año 1953; ii) sobre dichos predios se realizaron 27 adjudicaciones cuyas matrículas inmobiliarias fueron cerradas una vez fueron englobados en cinco (5) predios, iii) dichos englobes se efectuaron el mismo día -20 de diciembre de 2007 en la Notaría 4ª de Villavicencio- y iv) los predios englobados resultantes fueron vendidos por los adjudicatarios, a través de sendas escrituras públicas otorgadas en la Notaría 4ª de Villavicencio, el día 28 de diciembre de 2007.

6.4.2. Nulidad presentada por la abogada Ana María García Quiñones.

La abogada ANA MARÍA GARCÍA QUIÑONES, en representación de BLANCA BETULIA NIQUEPA DE CASTILLO quien dice actuar en nombre propio y de sus hijos YISSETH ISLIANA, CARLOS ALEXANDER y JUAN CARLOS CASTILLO NIQUEPA; y apoderada especial de YISSETH ISLIANA CASTILLO NIQUEPA, esposa la primera e hijos los últimos, del señor CARLOS CASTILLO LAVERDE (Q.E.P.D.), adjudicatario del predio denominado CUMARE, englobado en el predio CAMPO HERMOSO, manifiesta que el señor CARLOS CASTILLO LAVERDE al momento de la Escritura No. 2921 del 20 de diciembre de 2007 otorgada en la Notaría 4 de Villavicencio, en la cual se manifiesta que él concurrió a englobar el predio Cumare, adjudicado por el INCORA a través de la Resolución No. 29 del 15 de enero de 1992, ya llevaba más de cinco años de fallecido, lo cual ocurrió el día 20 de enero de 2002.

Por lo anterior, solicita que se declare la nulidad del auto del 28 de diciembre de 2012, porque se está profiriendo un acto administrativo contra una persona ya

fallecida conforme lo dispone el Artículo 142 del Decreto 2282 de 1989 en concordancia con lo dispuesto en el Artículo 208 de la Ley 1437 de 2011, que no tiene nada que ver en los asuntos relativos al predio CUMARE, el cual fue englobado cuando el señor CARLOS CASTILLO LAVERDE había fallecido y sin que de ello se enteraran su esposa y sus hijos, a quienes no se les notificó el Auto del 28 de diciembre de 2012, con lo cual se les está vulnerando su derecho de defensa y de audiencia, aunado al hecho de que la actuación del señor CARLOS CASTILLO LAVERDE en el año 1992 hizo las transacciones de buena fe y sin perjudicar a nadie.

Al respecto la Subgerencia de Tierras se permite manifestar que al margen de que el fundamento jurídico aludido por la solicitante -Artículo 142, del Código de Procedimiento Civil, en la redacción del Decreto 2282 de 1989, hubiese sido derogado por el Código General del Proceso, es improcedente decretar la nulidad solicitada.

En efecto, conforme con lo indicado a lo largo de la presente providencia, la aplicación de normas de otros estatutos normativos, distintos a la parte primera del Código Contencioso Administrativo o a la parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), no es procedente al tenor de lo dispuesto en el inciso 2°, Artículo 1, y artículo 267 del C.C.A (derogado), o en los Artículos 2°, 34 y 306° del CPACA.

Adicionalmente, no existe violación al debido proceso y del derecho de defensa del señor CARLOS CASTILLO LAVERDE y de sus causahabientes, porque si bien el Auto de Inicio de la Revocatoria Directa se notificó al Curador Ad Litem designado para reemplazarlo, ello se hizo porque la norma vigente para dicha época - Artículo 41, del Decreto 2664 de 1994- establecía que en caso de que no se lograse la notificación personal del "titular del derecho de dominio y del solicitante de la revocatoria", debía emplazarse a los interesados por el término de cinco (5) días, al cabo de los cuales si los emplazados no comparecían se les debía designar un Curador Ad Litem, **"con quien se adelantará el procedimiento"**, como en efecto ocurrió. Adicionalmente, el derecho de defensa y audiencia, tampoco ha sido menoscabado habida cuenta de que precisamente la apoderada de la esposa y de una de las hijas del señor CARLOS CASTILLO LAVERDE, se ha hecho presente para tales efectos dentro de la presente revocatoria.

Aún más, el Artículo 41 del Decreto 2664 de 1994, establecía que el denominado inicio de la revocatoria debía ser notificado "al titular del derecho de dominio", como en efecto se realizó con el señor CRISTOBAL RAMOS SACRISTÁN, quien obra como propietario del predio englobado denominado CAMPO HERMOSO, constituido, entre otros, con el denominado predio CUMARE adjudicado al señor CARLOS CASTILLO LAVERDE. No obstante, habida cuenta de que el señor CARLOS CASTILLO LAVERDE, fue adjudicatario del denominado predio CUMARE, la Subgerencia de Tierras, realizó el procedimiento para asegurar la presencia del señor CARLOS CASTILLO LAVERDE dentro del presente procedimiento, al punto de que se le designó Curador Ad Litem, y su esposa y una de sus hijos, a través de apoderada, se hicieron presentes del dentro del presente trámite, incluso solicitando la nulidad que acá se está denegando.

Por último, el motivo por el que en este procedimiento ha sido vinculado el señor

CARLOS CASTILLO LAVERDE, a través de Curador Ad Litem, y por intermedio de la apoderada de su esposa y de una de sus hijas, radica en que precisamente a través de la Resolución No. 29 del 15 de enero de 1992, se le adjudicó el denominado predio CUMARE. Dicho acto administrativo, está siendo objeto del presente trámite de revocatoria directa, razón por la cual, él, como adjucatario, fue vinculado al presente trámite, dentro del cual concurrieron su cónyuge sobreviviente y una de sus hijas, a pesar de que de acuerdo con el Decreto 2664 de 1994, sólo debía notificarse "al titular del derecho de dominio". Esto último con el fin de garantizar el derecho de defensa y audiencia de los adjudicatarios, así ya no fueran titulares del derecho de dominio sobre los bienes adjudicados.

6.4.3. En consecuencia, no habiendo defectos procedimentales que subsanar, procede el despacho a emitir la decisión de mérito correspondiente.

6.5. Decisión de fondo sobre la solicitud de revocatoria.

6.5.1. Lo probado.

Teniendo en cuenta el acervo probatorio allegado al expediente está probado lo siguiente:

a) Los Predios denominados LA PORTUGUESA y EL PORVENIR, tienen folios de matrícula inmobiliaria activos con antecedente registral de los años 1945 y 1953, tal como se concluyó en el diagnóstico catastral que obra en el expediente:

1.945 - EL PORVENIR

FOLIO DE MATRÍCULA INMOBILIARIA 234-1228 (ACTIVO)

NOMBRE PREDIO :	EL PORVENIR
CÉDULA CATASTRAL FMI:	00-01-0001-0088-000
NATURALEZA JURIDICA:	1.945 - APORTE (MEJORAS) - MODO DE ADQUISICIÓN
PROPIETARIO INICIAL	: SOCIEDAD ARGUELLO MACHADO LTDA ESCRITURA PÚBLICA 182 DEL 1/3/1.945, NOTARÍA DE VILLAVICENCIO
PROPIETARIO ACTUAL:	BEETAR BETANCOURT SIMON, CARRANZA NIÑO VICTOR MANUEL ESCRITURA 2719 DEL 22/11/1.986, NOTARIA 20 DE BOGOTA
ANOTACIÓN ESPECIAL:	INICIACIÓN DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS CLARIFICACION PROPIEDAD RESOLUCIÓN 3.911 DEL 6/8/1.986 INCORA DE VILLAVICENCIO

LINDERO SEGÚN TÍTULO:

CABIDA NO INDICADA, OCCIDENTE, PARTIENDO DE LA DESEMBOCADURA DEL CAÑO CAMATARIGUA EN EL RÍO META, SE SIGUE UNA RECTA EN DIRECCION AL SUR, HASTA ENCONTRAR EL FARALLON QUE EN EL BANCO DE LA SABANA FORMA EL CAÑO DENOMINADO YOPALITO DE Y DE ALLI SIGUIENDO HACIA EL SUR LA CERCA DE ALAMBRE DE PUAS A CRUZAR EL CAÑO DE CAVIONA Y TERMINAR EN EL COSTA DEL CAÑO CUCURITAL, POR EL SUR, DEL PUNTO SOBRE EL CAÑO CUCURITAL ANTERIORMENTE CITADO, CAÑO AGUAS ABAJO HACIA SU CONFLUENCIA CON EL CAÑO CAVIONA, LUEGO SE SIGUE ELCURSO DEL CAÑO CAVIONA AGUAS ABAJO HASTA EL CODO O VUELTA QUE FORMA EN EL RINCON DE LOS ARIPOYOS, POR EL ORIENTE DEL CAÑO O VUELTA DEL CAÑO CAVIONA EN EL RINCON DE LOS ARIPOYOS,

SIGUE EL MISMO CURSO DEL CAÑO CAVIONA AGUAS ABAJO, HASTA SU DESEMBOCADURA EN EL RIO META, ESTE RIO AGUAS ARRIBA HASTA ENCONTRAR LA DESEMBOCADURA DEL CAÑO CAMATARIGUA, PUNTO DE PARTIDA.

1.953 - LA PORTUGUESA

FOLIO DE MATRÍCULA INMOBILIARIA 234-1229 (ACTIVO)
NOMBRE PREDIO: LA PORTUGUESA
CÉDULA CATASTRAL FMI: 00-01-0001-0052-000
NATURALEZA JURIDICA: 1.953 - COMPRAVENTA MEJORAS - FALSA TRADICION
PROPIETARIO INICIAL : MACHADO VICTOR RAMON
ESCRITURA 27 DEL 14/12/1.953, NOTARIA DE ARAUCA
PROPIETARIO ACTUAL: BEETAR BETANCOURT SIMON, CARRANZA NIÑO VICTOR MANUEL
ESCRITURA 2719 DEL 22/11/1.986, NOTARIA 20 DE BOGOTA
ANOTACION ESPECIAL: INICIACION DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS CLARIFICACION PROPIEDAD
RESOLUCION 3.912 DEL 5/8/1.986 INCORA DE VILLAVICENCIO

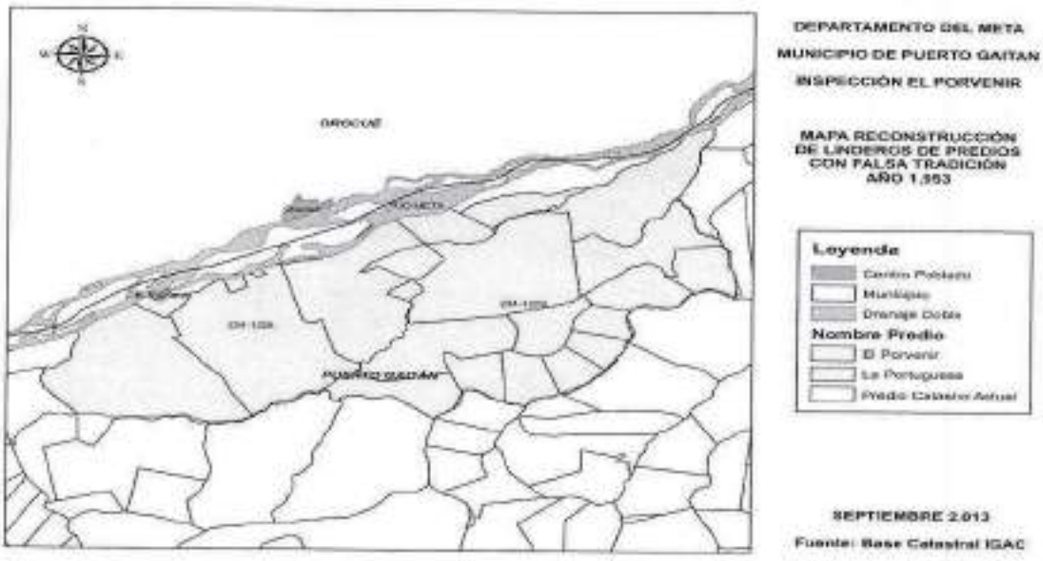
LINDERO SEGÚN TÍTULO:

POR EL NORTE, POR UNA CERCA DE ALAMBRE QUE PARTE DEL RIO TOMO AL CAÑO DE LOS ARAGUATOS, DE AQUI ESTE CAÑO AGUAS ABAJO HASTA LA DESEMBOCADURA EN EL RIO META, POR EL ORIENTE, DESDE LA CERCA DE ALAMBRE EN EL RIO TOMO ANTES CITADO DICHO RIO AGUAS ABAJO HASTA LLEGAR AL LINDERO CON TIERRAS QUE POSEE EL SEÑOR JORGE LUNA FORMANDO POR UNA CERCA DE ALAMBRE: POR EL SUR ESTA CERCA DE ALAMBRE LINDERO CON DON JORGE LUNA HASTA DAR CON EL CAÑO MATANEGRA, ESTE AGUAS ABAJO HASTA SU DESEMBOCADURA EN EL CAÑO ARAUCA ESTE AGUAS ABAJO HASTA SU DESEMBOCADURA EN EL RIO META, POR EL OCCIDENTE DESDE ESTE PUNTO RIO META AGUAS ARRIBA HASTA EL PUNTO DONDE DESEMBOCA EN CAÑO CAVIONA.

b) Conforme al informe de la Inspección Ocular practicada a los citados terrenos, los linderos de los predios LA PORTUGUESA y EL PORVENIR, pudieron ser reconstruidos con base en los datos de los folios de matrícula inmobiliaria 234-1228 y 234-1229, activos, y a las declaraciones testimoniales rendidas dentro del expediente, en especial lo señalado por el señor JOSÉ GERMÁN MOJOCA ALARCÓN, administrador de los Hatos Cabiona y La Portuguesa, propiedad de la Ganadería La Cristalina, cuyo representante legal es el señor HOLMAN CARRANZA CARRANZA, la cual realiza sus actividades ganaderas, según lo manifestó el mencionado administrador, respecto del Hato Cabiona entre los límites de río Meta, enclavado en el predio está El Porvenir y a unos quince kilómetros queda Carimagua y en la mitad está la vivienda. Que el Hato Portuguesa, queda a trescientos metros de la casa del Hato Cabiona, limitando con el Río Meta, con Carimagua, El Piñal y con Arecua. Que estos dos Hatos ocupan entre 27000 hectáreas y 28000 hectáreas.

c) Con base en la redacción de linderos jurídicos y la cartografía catastral, se realizó la reconstrucción más aproximada de los predios El Porvenir y La Portuguesa, principalmente por el Caño Cabiona, Rio Meta, entre otros drenajes que se ubican en la cartografía base del IGAC.

En consecuencia, el siguiente es el plano de la reconstrucción de los linderos de dichos predios:



d) Sobre dichos predios se hicieron las siguientes titulaciones:

TITULACION DE BALDÍOS (27 PREDIOS)

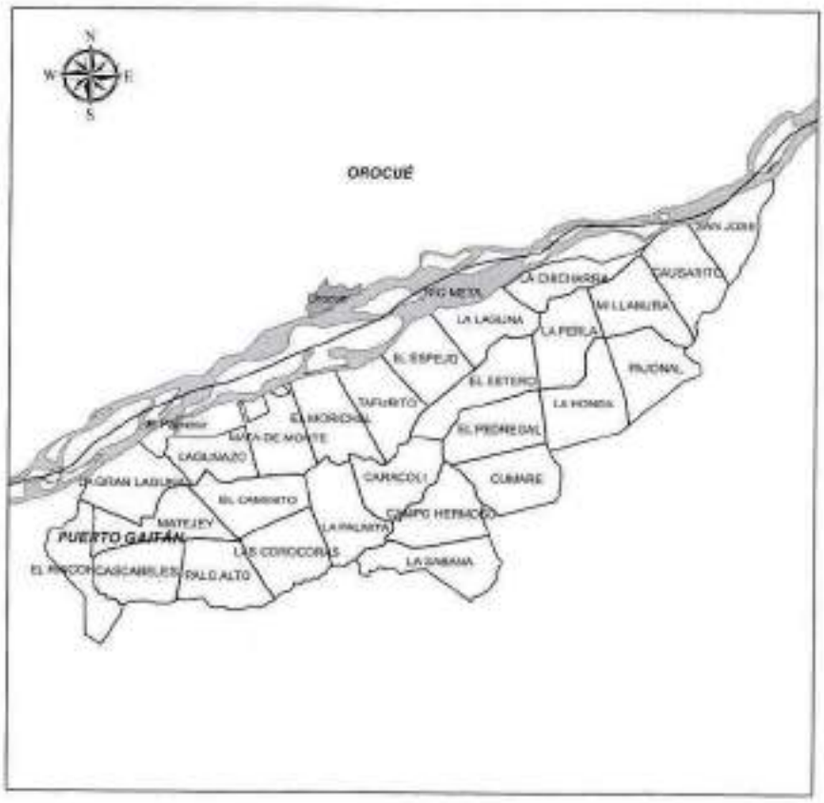
AREA TITULADA : 25.958 Ha 8.105 m²

RESOLUCION	PREDIO	FOLIO	BENEFICIARIO	AREA Ha
21 Del 15 01-1992	La Laguna	234-8006	Juan Agustín Herrera	972 ha 2.000 m2
28 Del 15 01-1992	La Honda	234-8013	Jaime Ramón Lozada Neira	985 ha 8.500 m2
30 Del 15 01-1992	El Pedregal	234-8015	Eduardo Villarraga	991 ha 1.000 m2
45 Del 16 01-1992	El Estero	234-8021	Edilson Horacio Fajardo Vega	983 ha 8.500 m2
50 Del 16 01-1992	La perla	234-13197	Roberto Alvarado	985 ha 3.000 m2
23 Del 15 01-1992	Pajonal	234-8008	José Del Carmen León Gaitán	984 ha 2.000 m2
22 Del 15 01-1992	Mi Llanura	234-8007	Hugo Armando Bustos Bernal	997 ha 5.000 m2
24 Del 15 01-1992	San José	234-8009	Armando Bernal	977 ha 4.000 m2
44 Del 16 01-1992	Casuarito	234-8020	Hugo Efrain Bustos Silva	1000 ha
973 Del 25 09-1996	La Chicharra	234-13203	Julio Enrique Álvarez Sarmiento	699 ha 9.500 m2
40 Del 16 01-1992	La Sabana	234-8017	Jesús Anundo Aranda Silva	999 ha 7.580 m2
41 Del 16 01-1992	Las Corocoras	234-8018	Esteban Vásquez	994 ha 9.000 m2
47 Del 16 01-1992	La Palmita	234-13195	Edgar Hernando Prieto	999 ha 9.768 m2
48 Del 15 01-1992	El Caminito	234-13196	Graciela Ramírez	994 ha 5.000 m2
52 Del 16 01-1992	Mata de Monte	234-8024	Daniel Vásquez	994 ha 1.000 m2
891 Del 23-09-1996	Lagunazo	234-13202	William Velasco	697 ha 9.757 m2
26 Del 15 01-1992	El Rincón	234-8011	Guillermo Cadena	883 ha 8500 m2
42 Del 16 01-1992	Palo Alto	234-8019	Juan Manuel Sarmiento	998 ha 7500 m2
49 Del 16 01-1992	Matejey	234-8022	José Vicente Salinas	868 ha 1000 m2
53 Del 16 01-1992	La Gran Laguna	234-8025	Ana Paulina Sánchez	1000 ha
43 Del 16 01-1992	Cascabeles	234-13193	Juan Moya	979 ha 6000 m2
25 Del 15 01-1992	El espejo	234-8010	Jorge Monsalde Vergara	995 ha 6000 m2
27 Del 15 01-1992	El Morichal	234-8012	Jesús Antonio Bustos	998 ha 1500 m2
29 Del 15 01-1992	Cumare	234-8014	Carlos Castillo Laverde	984 ha 1000 m2
31 Del 15 01-1992	Campo Hermoso	234-8016	Joaquín Silva	999 ha 1000 m2
46 Del 16 01-1992	Tafurito	234-13194	Jairo Rodríguez Niño	994 ha 500 m2
51 Del 16 01-1992	Caracolí	234-8023	Alberto Vega	998 ha 5000 m2

e) A partir de la anterior información, se ubicaron las resoluciones de titulación con su correspondiente plano topográfico, el cual se reconstruyó a partir de las distancias entre puntos y colindantes, hasta conformar el globo de terreno

conformado por los 27 predios, los cuales colindan entre sí. Se consideró que los planos topográficos no cuentan con coordenadas y para georreferenciar los 27 predios se utilizó la cartografía base con los principales caños que son límites entre predios.

En consecuencia, el plano de la reconstrucción de los linderos de las 27 adjudicaciones es el siguiente:



DEPARTAMENTO DEL META

MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN

INSPECCIÓN EL PORVENIR

MAPA 27 TITULACIONES AÑO 1.992

Leyenda
- Centro Poblado
- Municipio
- Drenaje Doble
- Titulaciones 1992

SEPTIEMBRE 2.013

Fuente: Base Catastral IGAC

Como se puede concluir, las veintisiete (27) adjudicaciones coinciden geoespacialmente con los denominados predios EL PORVENIR y LA PORTUGUESA, con matrículas inmobiliarias activas, 234-1228 y 234-1229, respectivamente, y cuyos titulares de mejoras -constituidas o realizadas sobre bienes baldíos de la Nación como está probado por haber sido adjudicados posteriormente, según el registro público, son los señores BEETAR BETANCOURT SIMON, CARRANZA NIÑO VICTOR MANUEL según la ESCRITURA 2719 DEL 22/11/1.986, NOTARIA 20 DE BOGOTA, para el caso de las mejoras sobre el denominado PREDIO EL PORVENIR, y BEETAR BETANCOURT SIMON, CARRANZA NIÑO VICTOR MANUEL, según la ESCRITURA 2719 DEL 22/11/1.986, NOTARIA 20 DE BOGOTA, para el caso de las mejoras sobre el denominado predio LA PORTUGUESA.

f) A la fecha, los veintisiete (27) folios de matrícula inmobiliaria relacionados se encuentran CERRADOS ya que se englobaron posteriormente por los adjudicatarios en cinco (5) predios cuyas matrículas inmobiliarias, cédulas catastrales y áreas, resultantes, son las siguientes:

PREDIO	FOLIO	CEDULA CATASTRAL	AREA (Ha)	Escritura y fecha de englobe	Notaría
Mi Llanura	234-15741	00-01-0001-0756-000	4.641 Ha 500 m2	2918 del 20-12-07	4° de Villavicencio
El Rincón	234-15742	00-01-0001-0742-000	4.730 Ha 3.000 m2	2919 del 20-12-07	4° de Villavicencio
Las Corocoras	234-15743	00-01-0001-0745-000	5.681 ha 2.105 m2	2920 del 20-12-07	4° de Villavicencio

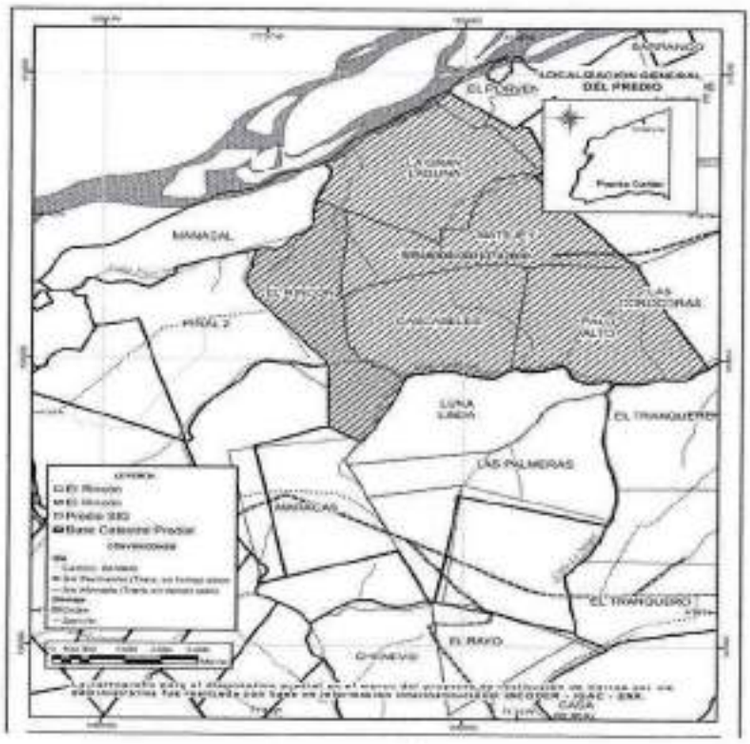
Continuación de la Resolución "Por la cual se deciden unos procedimientos de revocatoria directa"

Campo Hermoso	234-15744	00-01-0001-0087-000	5.969 ha 5.000 m2	2921 del 20-12-07	4ª de Villavicencio
Pedregal	234-15745	00-01-0001-0052-000	4.918 ha 3.000 m2	2922 del 20-12-07	4ª de Villavicencio

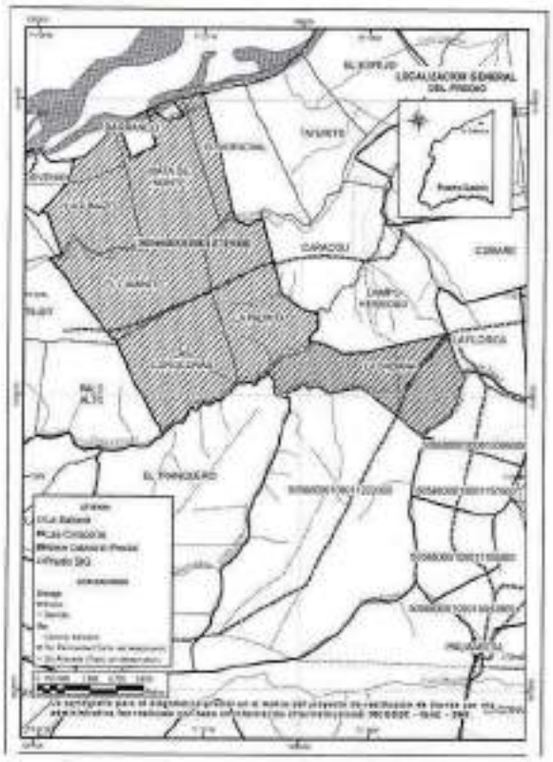
AREA ENGLOBADA : 25.940 Ha 3.605 m²

Los planos de reconstrucción de los predios englobados es el siguiente:

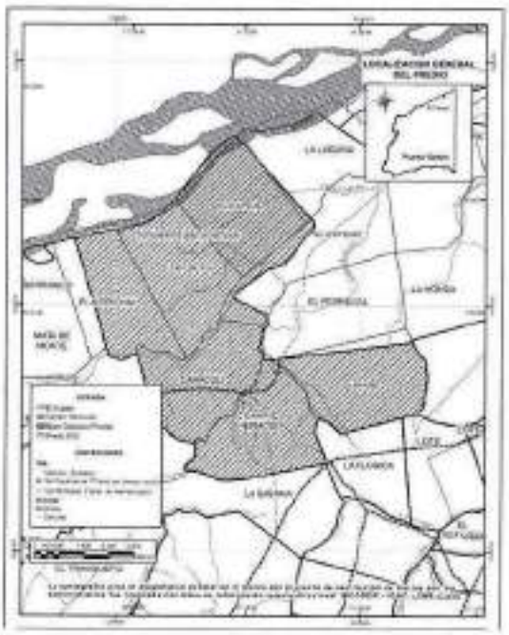
1. **Predio El Rincón:**



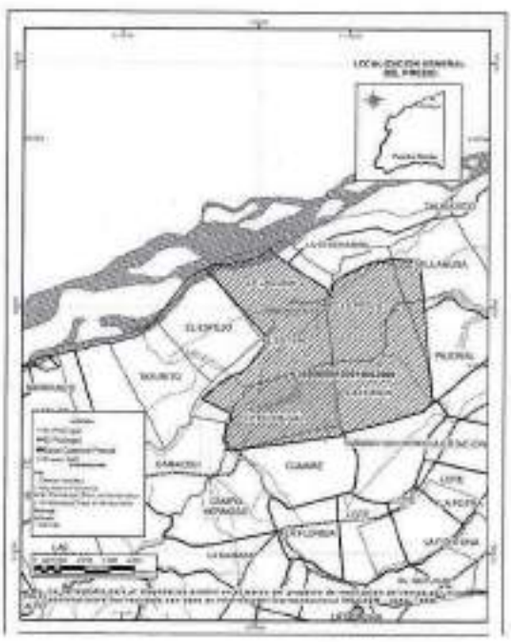
2. **Predio Las Corocoras (englobado):**



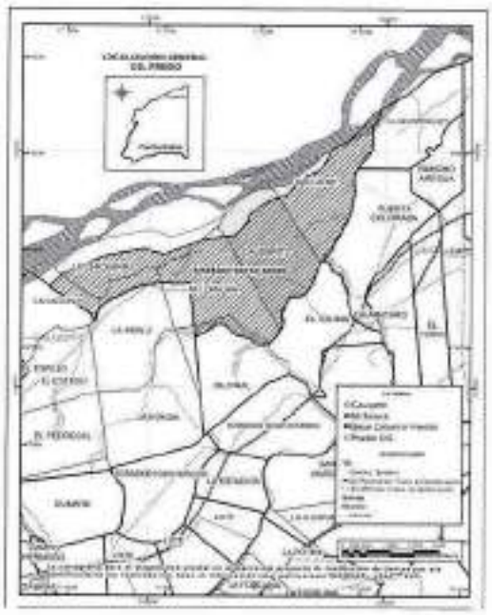
3. Predio Campo Hermoso (englobado):



4. Predio Pedregal (englobado):



5. Predio Mi Llanura (englobado):



g) Los predios englobados por los adjudicatarios, fueron objeto de venta el día 28 de diciembre de 2007, una semana después de efectuados los englobes que se realizaron en la misma Notaría 4 de Villavicencio, el día 20 de diciembre del año 2007, así:

PREDIO	FOLIO	CÉDULA CATASTRAL	AREA (Ha)	Escritura y fecha de venta	Notaría	Propietario adquiriente del predio englobado
Mi Llanura	234-15741	00-01-0001-0756-000	4.641 Ha 500 m2	2979 del 28-12-07	4ª de Villavicencio	Pedro Libardo Ortegón Ortegón
El Rincón	234-15742	00-01-0001-0742-000	4.730 Ha 3.000 m2	2980 del 28-12-07	4ª de Villavicencio	Hugo Armando Bustos Bernal
Las Corocoras	234-15743	00-01-0001-0745-000	5.681 ha 2.105 m2	2981 del 28-12-07	4ª de Villavicencio	Jaime Rojas García
Campo Hermoso	234-15744	00-01-0001-0087-000	5.969 ha 5.000 m2	2982 del 28-12-07	4ª de Villavicencio	Cristobal Ramos Sacristán
Pedregal	234-15745	00-01-0001-0052-000	4.918 ha 3.000 m2	2983 del 28-12-07	4ª de Villavicencio	Daniel Gómez Canon

h) Por su parte, del análisis de las actas de las inspecciones oculares realizadas dentro de los correspondientes procedimientos de titulación de baldíos se puede constatar que ninguno de los solicitantes de la adjudicación, atendió la diligencia directamente. Los solicitantes no se hicieron presentes en ninguna de las inspecciones efectuadas, siendo atendidas solamente por personas "encargadas del predio", las cuales, como se observa en los expedientes, no tenían ninguna conexión directa con el mismo, ni con el proceso administrativo de titulación de baldíos.

i) Conforme con la declaración testimonial rendida por el Administrador de la Ganadería La Cristalina Ltda, quien conoce la región desde hace por lo menos 20 años vinculándose a la compañía Ganadería La Cristalina, hace quince años aproximadamente, este manifestó que dicha empresa tiene sus actividades en el

Hato Cabiona y en La Portuguesa. Que el Hato Cabiona está en los límites de río Meta, enclavado en el predio está El Porvenir y a unos quince kilómetros queda Carimagua y en la mitad está la vivienda. Que el Hato Portuguesa, queda a trescientos metros de la casa del Hato Cabiona, limitando con el Río Meta, con Carimagua, El Piñal y con Arecua. Que estos dos Hatos ocupan entre 27000 hectáreas y 28000 hectáreas. Aduce que deben existir unas 3000 reses entre los Hatos, con 1500 en cada Hato y unas 400 animales equinos de cría, todos los cuales son de Ganadería La Cristalina. Que hace quince años fungió como administrador y asistente técnico. Que en ese momento, la Ganadería tenían aproximadamente 10000 y 15000 reses, sobre lo cual debe haber un registro. Aduce que estos Hatos están conformados por tres fincas: Cabiona, La Portuguesa y El Porvenir. Manifiesta que siempre ha tenido el concepto de que estos terrenos, La Portuguesa y Cabiona le pertenecen a la Ganadería La Cristalina. Que tiene conocimiento de que el representante legal de esta empresa es el señor Holman Carranza, pero desconoce quiénes son los socios propietarios. Que tiene conocimiento de que el señor Víctor Machado -propietario inicial de las mejoras hechas en estos terrenos- y posteriormente la compañía Ganadería La Cristalina, donó otro terreno para que la comunidad del poblado El Porvenir alimentara a sus animales. A la pregunta sobre cuánto hace que la compañía Ganadería La Cristalina es propietaria de los terrenos, manifiesta que no tiene conocimientos profesionales que le permitan referirse en términos jurídicos precisos, por lo que cuando se refiere a que los terrenos son de propiedad de la Ganadería La Cristalina, se refiere al uso y tenencia de la tierra, y que desde ese concepto tiene claro que Ganadería La Cristalina es la propietaria de los predios.

Por otra parte, al preguntársele sobre si la empresa Ganadería La Cristalina, conoce a la comunidad de El Porvenir, manifiesta que hace quince años que trabajó por primera vez, con Ganadería La Cristalina y que ésta empresa contrataba a las personas de la comunidad de El Porvenir para hacer el trabajo de campo en los Hatos Portuguesa y Cabiona, que en ese orden, la comunidad no puede desconocer que Ganadería la Cristalina es la propietaria de estos predios.

Al consultársele sobre el concepto de una sabana comunal, aduce que tiene conocimiento de que se trata de un terreno donde una comunidad determinada tiene su ganado y sus enceres comunales; que dicho terreno pertenece a una comunidad. Que en el caso de El Porvenir, la sabana comunal es la porción de terreno que donó Ganadería la Cristalina a la comunidad, que es distinto al que donó el señor Víctor Machado, para la construcción del pueblo. Al consultársele sobre el tiempo en el que se donaron los terrenos de la sabana, manifiesta que no lo sabe. Así mismo, reitera que no tiene exacto conocimiento desde cuándo la Ganadería La Cristalina es propietaria de esos terrenos, de manera que sólo puede dar fe de dicha circunstancia desde hace quince años aproximadamente cuando trabajó para dicha compañía en esta misma zona, a la que volvió a trabajar desde hace más o menos año y medio.

En cuanto al señor Hugo Armando Bustos, manifiesta que él es un médico veterinario que trabaja para Ganadería Brisas de Agualinda, cuyo domicilio es Puerto López. Agrega, que hasta hace un año y medio el señor Bustos era el administrador de los terrenos que él administra hoy. Que no tienen ningún tipo de relación laboral con ellos.

En lo relativo a la comunidad, aduce que conoce la problemática económica y social de la comunidad, por lo que él le propuso a la comunidad del poblado El Porvenir que hablaría con los dueños de la Ganadería La Cristalina (Holman Carranza) para que esta les arrendara un terreno en el que pudieran sembrar la comida, esto último, en El Porvenir no hay nada que hacer. En este punto, el declarante hace un paréntesis para relatar cómo hace quince años, cuando trabajó por primera vez con Ganadería La Cristalina, existía una empresa que era una asociación entre una empresa norteamericana que se llamaba SIAT y el Estado que se llamaba Carimagua, a través de la cual se hacía investigación agropecuaria, que utilizaba aproximadamente 400 o 450 empleados, de los cuales, por lo menos 200, iban de El Porvenir, pero una vez se acabó esta empresa, se acabó el trabajo y la gente se tuvo que ir, en especial la gente joven, quedando en su mayoría personas mayores que ya no pueden trabajar, cerrado este relato retoma el declarante que la comunidad, le manifestó que no sembraban porque el ganado se come las matas, debido a que ellos no tienen potreros, razón por la que el ganado de la comunidad se entra a sus propias casas en el centro poblado y se comen las plantas. De manera que, basado en su experiencia de trabajo, propuso que se le pagara al Hato a una parte. Que se conversó con el cura párroco para que se impulsara en la sabana comunal un cultivo que actualmente se está adelantando, para lo cual, el Hato les regaló unos postes para cercar.

En cuanto al ganado de la comunidad, aduce que se han tenido inconvenientes porque la comunidad ingresa su ganado al Hato Cabionas, lo que ha motivado reuniones con la comunidad. Que no han interpuesto denuncias, porque prefiere agotar el recurso de conversar amigablemente con ellos. Que producto de estas conversaciones se logró que por lo menos uno de los propietarios de ganado, un señor de apellido Cardozo, lo sacara a otro predio.

En lo relativo a las adjudicaciones, se le consulta sobre el conocimiento que tiene de la ocurrencia de las mismas. Al mencionársele cada uno de los predios y las personas adjudicatarias, manifiesta que al señor Hugo Armando Bustos, lo conoce, pero no tiene idea de que sea propietario de algún predio en la zona. Que le parece conocido el nombre de un señor Joaquín Silva, porque recuerda una persona llamada así que "andaba" con don Victor Carranza. Así mismo, conoce al señor Guillermo Cadena, quien es el contador de Ganadería Brisas de Agualinda, pero que no lo conoce como adjudicatario del predio EL Rincón, ni tampoco al predio.

En este punto, se le informa al testigo que los predios mencionados, se encuentran dentro de lo que describió como Hato Cabionas, reiterándosele la pregunta, acerca de si conoce algunos de los predios que geográficamente se ubicarían al interior de este Hato. Agrega que llegó a la zona hace 15 años y que no conoció en ese momento a ninguna de las personas que se mencionaron como adjudicatarios de los terrenos, salvo al Hugo Armando Bustos Bernal, por lo motivos explicados.

En relación con la pérdida de ganado de la comunidad, aduce que sí se produjeron comentarios sobre ganado que se ha extraviado de la comunidad. Así mismo, que se han presentado inconvenientes porque ingresan y salen cabezas de ganado de la comunidad al Hato Cabionas, cuestión que no se puede permitir. Al respecto aduce que debido a la práctica de la comunidad, el ganado de la comunidad en ocasiones se ha revuelto con el del Hato. Que en una ocasión en la que la comunidad recogió todas las reses, las del Hato y las de la comunidad, después de

recogerlas, los trabajadores del Hato se percataron de que hacian falta cuatro crías de las vacas.

Por último, se le consulta al declarante por la relación que tiene el señor Hollman Carranza, representante legal de Ganadería La Cristalina y el señor Víctor Carranza, habida cuenta de que éste último aparece como propietario de algunas mejoras de predios relacionados en el expediente de las revocatorias, ante lo cual se responde el que señor Hollman Carranza es hijo del señor Víctor Carranza.

g) En cuanto a la explotación económica de los predios adjudicados, en general, en la inspección ocular efectuada dentro del presente trámite, no se observó ningún tipo de explotación agrícola a mediana o gran escala, en producción actual o la implementación de pastos mejorados.

En el recorrido realizado en los predios se observó cobertura en pastos naturales los cuales son utilizados tradicionalmente para el establecimiento de ganadería extensiva, en estas áreas también se observan zonas con estratos arbustivos y morichales generalmente. Esta cobertura es un indicador general de los ecosistemas denominados como sabanas tropicales, muy típicas de los llanos orientales de Colombia y que son tradicionalmente utilizados para el uso de ganadería extensiva.

En el momento de la visita no se observó ganado bovino al interior de los predios; por información de la comunidad los predios son utilizados por la empresa "Ganadería La Cristalina" la cual posee un número de aproximado de 3000 semovientes que pastorean allí.

En el recorrido realizado a los predios objeto de la diligencia, se observaron unas ocupaciones prácticamente al borde la vía que conduce al centro poblado "El Porvenir" donde se establecen pequeñas parcelas con áreas muy pequeñas de cultivos como plátano y frutales esparcidos en el área de ocupación y especies menores como gallinas y cerdos, y que tienen como finalidad el consumo por parte de quienes habitan estas parcelas.

Así mismo en este sector se observó un área aproximada de 8 has., en proceso de preparación para el establecimiento de cultivo de plátano y yuca; esta zona se adecuó mediante la utilización de tractor y las labores realizadas allí han sido por parte de la comunidad del Porvenir.

h) En las declaraciones testimoniales, los miembros de la comunidad que las rindieron manifiestan que llevan viviendo más de 15 años en la zona y todos concluyen que no conocen los predios adjudicados por sus linderos u ubicación exacta, ni conocen a varias de las personas que al momento de la adjudicación dijeron ser las ocupantes de los predios, con base en lo cual se les otorgó el título.

6.5.2. Cumplimiento de presupuestos del procedimiento de revocatoria en el caso en concreto.

Se debe señalar que, en el presente caso, están reunidos los presupuestos procesales generales establecidos en los incisos 6 y 7 del artículo 72 de la Ley 160 de 1994, y por remisión de este último, en lo que es aplicable, en el Código de

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. En efecto:

6.5.2.1. Esta Subgerencia es competente para conocer de la presente revocatoria por habérsele delegado, a través de la Resolución No. 2282 del nueve (9) de noviembre de 2012, la competencia para *"conocer y culminar algunos procedimientos de revocatoria directa de veintisiete (27) resoluciones de adjudicación de predios baldíos en la Inspección de Policía del Porvenir en jurisdicción del municipio de Puerto Gaitán en el departamento del Meta"*.

6.5.2.2. No se requiere consentimiento expreso de los adjudicatarios de los siguientes predios:

RESOLUCION	PREDIO	FOLIO	BENEFICIARIO	AREA Ha
21 Del 15 01-1992	La Laguna	234-8006	Juan Agustín Herrera	972 ha 2.000 m2
28 Del 15 01-1992	La Honda	234-8013	Jaime Ramón Lozada Neira	985 ha 8.500 m2
30 Del 15 01-1992	El Pedregal	234-8015	Eduardo Villarraga	991 ha 1.000 m2
45 Del 16 01-1992	El Estero	234-8021	Edilson Horacio Fajardo Vega	983 ha 8.500 m2
50 Del 16 01-1992	La perla	234-13197	Roberto Alvarado	985 ha 3.000 m2
23 Del 15 01-1992	Pajonal	234-8008	José Del Carmen León Gaitán	984 ha 2.000 m2
22 Del 15 01-1992	Mi Llanura	234-8007	Hugo Armando Bustos Bernal	997 ha 5.000 m2
24 Del 15 01-1992	San José	234-8009	Armando Bernal	977 ha 4.000 m2
44 Del 16 01-1992	Casuarito	234-8020	Hugo Efraín Bustos Silva	1000 ha
973 Del 25 09-1996	La Chicharra	234-13203	Julio Enrique Alvarez Sarmiento	699 ha 9.500 m2
40 Del 16 01-1992	La Sabana	234-8017	Jesús Anundo Aranda Silva	999 ha 7.580 m2
41 Del 16 01-1992	Las Corocoras	234-8018	Esteban Vásquez	994 ha 9.000 m2
47 Del 16 01-1992	La Palmita	234-13195	Edgar Hernando Prieto	999 ha 9.768 m2
48 Del 15 01-1992	El Caminito	234-13196	Graciela Ramírez	994 ha 5.000 m2
52 Del 16 01-1992	Mata de Monte	234-8024	Daniel Vásquez	994 ha 1.000 m2
891 Del 23-09-1996	Lagunazo	234-13202	William Velasco	697 ha 9.757 m2
26 Del 15 01-1992	El Rincón	234-8011	Guillermo Cadena	883 ha 8500 m2
42 Del 16 01-1992	Palo Alto	234-8019	Juan Manuel Sarmiento	998 ha 7500 m2
49 Del 16 01-1992	Matejey	234-8022	José Vicente Salinas	868 ha 1000 m2
53 Del 16 01-1992	La Gran Laguna	234-8025	Ana Paulina Sánchez	1000 ha
43 Del 16 01-1992	Cascabeles	234-13193	Juan Moya	979 ha 6000 m2
25 Del 15 01-1992	El espejo	234-8010	Jorge Monsaide Vergara	995 ha 6000 m2
27 Del 15 01-1992	El Morichal	234-8012	Jesús Antonio Bustos	998 ha 1500 m2
29 Del 15 01-1992	Cumare	234-8014	Carlos Castillo Laverde	984 ha 1000 m2
31 Del 15 01-1992	Campo Hermoso	234-8016	Joaquín Silva	999 ha 1000 m2
46 Del 16 01-1992	Tafurito	234-13194	Jairo Rodríguez Niño	994 ha 500 m2
51 Del 16 01-1992	Caracolí	234-8023	Alberto Vega	998 ha 5000 m2

Lo anterior es concordante con lo dispuesto en el Artículo 13, de la Ley 30 de 1988, bajo cuya vigencia, según se puede apreciar en el anterior cuadro, se expidieron 25, de las 27 adjudicaciones objeto de la presente decisión. En efecto, dicho artículo dispuso, en lo pertinente, que *"(...) el INCORA podrá revocar directamente las resoluciones de adjudicación de tierras baldías que dicte con violación a lo establecido en la presente Ley. **En este caso no se exigirá el consentimiento expreso y escrito del respectivo titular**. En lo demás, el procedimiento de revocación se surtirá con arreglo a las prescripciones del Código de lo Contencioso Administrativo (...)"* (Énfasis añadido).

6.5.2.3. Contra las referidas resoluciones de adjudicación que son materia del presente procedimiento administrativo de revocatoria, no se interpuso recurso alguno.

6.5.2.4. Contra las mencionadas resoluciones de adjudicación, no se encuentra en curso demanda ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, y mucho

menos se ha proferido, ni notificado al INCODER, auto admisorio de la correspondiente demanda.

6.5.2.5. La revocatoria directa contra las resoluciones señaladas, conforme lo dispone el inciso 6°, Artículo 72, de la Ley 160 de 1994, puede darse en cualquier tiempo, tal como además lo confirmó la Corte Constitucional en la Sentencia C-255 de 2012, y lo establece el Artículo 44 del Decreto 1465 de 2013.

6.5.3. Requisitos materiales para la adjudicación de baldíos, de conformidad con las normas vigentes al momento de las respectivas titulaciones.

Conforme lo disponen el inciso 6°y 7°, del Artículo 72, de la Ley 160 de 1994, la revocatoria directa de actos administrativos de adjudicación de baldíos, procede para afectar la intangibilidad o inmutabilidad de dichos actos de contenido particular y concreto, sin requerir el consentimiento previo y expreso del titular del derecho, cuando quiera que estos se hayan expedido con violación de las normas legales o reglamentarias vigentes sobre baldíos.

En este punto, la Corte Constitucional en la sentencia C-255 de 2012 al reafirmar la vigencia normativa y la constitucionalidad de los señalados incisos del artículo 72, de la Ley 160 de 1994, consideró que dicha disposición no contradecía la Constitución Política de 1991, por cuanto la facultad de revocar unilateralmente los actos de adjudicación de baldíos, sin el consentimiento expreso y escrito del titular, respondía a fines constitucionalmente valiosos como *"(...) (i) la garantía en el cumplimiento de la función social de la propiedad; (ii) propender por el acceso progresivo a la tierra de los trabajadores agrarios; y (iii) la concreción del deber del Estado de promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, en su obligación de adoptar medidas de protección a favor de quienes, por su difícil condición económica, se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta en el sector agropecuario (...)"*[14] (Negrillas fuera de texto).

Es más, para la propia Corte Constitucional, la revocatoria unilateral de los actos administrativos de adjudicación de baldíos siempre tiene cabida ante actos manifiestamente ilegales o que deriven en la violación de requisitos sustantivos o materiales de la adjudicación de baldíos, vale decir, aquellos que afecten de manera sensible los fines que subyacen en estos programas o que impliquen una grave distorsión de los mismos, cuando la titulación no recaiga en sus destinatarios legítimos -los sujetos de debilidad manifiesta del sector agropecuario, merecedores de la especial protección del Estado-, sino que termine en manos de quienes por sus privilegios económicos, sociales, políticos, o de cualquier otra índole, tengan la capacidad de interferir negativamente en el cumplimiento de la función social de la propiedad y el acceso progresivo a la tierra rural[15].

6.5.3.1. Requisitos materiales o sustantivos de la adjudicación de baldíos establecidos en la Ley 135 de 1961 y en Ley 30 de 1988.

Los requisitos sustantivos para la titulación de baldíos previstos en su momento por el artículo 10 de la Ley 30 de 1988, por el cual se modificó el artículo 29 de la

[14]Corte Constitucional, sentencia C-255 de 2012.
[15]Corte Constitucional, sentencia C-255 de 2012.

Ley 135 de 1961, se establecía la ocupación previa y la explotación económica de las dos terceras partes de la superficie cuya adjudicación se solicitaba, excluyendo las zonas de vegetación protectora y bosques naturales.

La norma disponía:

> *"(...) A partir de la vigencia de la presente Ley, no podrán hacerse adjudicaciones de baldíos sino por **ocupación previa** y en favor de personas naturales o de cooperativas o empresas comunitarias campesinas y por extensiones no mayores de cuatrocientas cincuenta (450) hectáreas por persona o por socio de la empresa comunitaria o cooperativa campesina. No obstante, podrán hacerse adjudicaciones en favor de entidades de derecho público para la construcción de obras de infraestructura destinadas a la instalación o dotación de servicios públicos, bajo la condición de que si dentro del término que el Instituto señalare no se diere cumplimiento al fin previsto, los predios adjudicados revierten al dominio de la Nación, **La persona que solicite la adjudicación de un baldío por ocupación previa, deberá demostrar que tiene bajo explotación económica las dos terceras partes de la superficie cuya adjudicación solicita, excluidas las zonas de vegetación protectora y bosques naturales**, y además, que en su aprovechamiento cumple con las normas de protección de los recursos naturales. Para este efecto, las áreas dedicadas a la conservación de la vegetación protectora, lo mismo que las destinadas al uso forestal racional, situadas fuera de las zonas decretadas como reservas forestales o de bosques nacionales se tendrán como porción explotada para el cálculo de la superficie de explotación de que trata este inciso. Los que hayan puesto bajo explotación agrícola o ganadera, con anterioridad a la presente Ley, superficies que excedan a las aquí señaladas, tendrán derecho a que se les adjudique el exceso, pero sin sobrepasar en total los límites que fija el inciso primero del artículo 2º de la Ley 34 de 1936. **Salvo lo que con respecto a sabanas de pastos naturales se establece en el artículo siguiente[16], la ocupación con ganados sólo dará derecho a la adjudicación cuando la superficie respectiva se haya sembrado con pastos artificiales, de cuya existencia, extensión y especie se dejará clara constancia en la respectiva inspección ocular**. Así mismo, no podrán hacerse adjudicaciones de baldíos que estén ocupados por comunidades indígenas o que constituyan su hábitat, sino únicamente y con destino a la constitución de resguardos indígenas (...)"*
> (Subrayas fuera de texto).

En todo caso, de acuerdo con este artículo, la ocupación con ganados sólo dará derecho a la adjudicación cuando la superficie respectiva se haya sembrado con

---

[16] El artículo siguiente, es el Artículo 30, Ley 135 de 1961, el cual disponía: "Artículo 30. El Instituto Colombiano de la Reforma Agraria queda autorizado para ampliar los límites de la extensión adjudicable a una persona natural con respecto a las tierras siguientes:

a) Las ubicadas en regiones muy alejadas de los centros de actividad económica y que sean de difícil acceso, mientras esta última circunstancia subsista;

b) Las sabanas de pastos naturales donde la naturaleza de los suelos, el régimen meteorológico o las inundaciones periódicas no hacen económicamente factible la siembra de pastos artificiales.

El Instituto señalará, previos los estudios correspondientes, las zonas a que se refiere este artículo, y en ningún caso podrá, mientras no haya llevado a cabo tal señalamiento, hacer adjudicaciones que sobrepasen los límites fijados en el artículo anterior.

El límite máximo para las adjudicaciones en las zonas especiales que determine el Instituto, será de mil hectáreas (1.000 hs.), y el solicitante deberá demostrar que ha puesto bajo explotación no menos de las dos terceras partes de la superficie cuya adjudicación solicita. No obstante, para las regiones de pastos naturales de los Llanos Orientales, conforme a delimitación que hará el Instituto, y cuando estas regiones se hallen en las circunstancias previstas en el ordinal b) de este artículo, la extensión adjudicable podrá llegar a tres mil hectáreas (3.000 hs.).

No se adjudicarán sabanas de pastos naturales sino cuando el solicitante demuestre a satisfacción del Instituto:

1. Que se hallan en el caso del ordinal b) de e este artículo, y

2. Que se han hecho en ellas mejoras tales como cercas, casas de habitación, regulación de corrientes hidráulicas, obras de desecación, etc., y que se han ocupado con ganado regularmente conforme, a las circunstancias propias de tales tierras. El mantenimiento de ganados deberá probarse por medio de las declaraciones de renta y patrimonio correspondiente al período para el cual se invoca la ocupación.

pastos artificiales, de cuya existencia, extensión y especie se dejará clara constancia en la respectiva inspección ocular. Sin embargo, conforme al Artículo 30 de la Ley 135 de 1961, el Instituto podía adjudicar baldíos por encima del límite de las 450 has., fijado en el Artículo 29, modificado por el Artículo 10 de la Ley 30 de 1988, hasta mil (1000) has., en el caso de zonas muy alejadas de los centros de actividad económica y que sean de difícil acceso y mientras dicha circunstancia subsista, siempre y cuando el solicitante demuestre que ha puesto bajo explotación no menos de las dos terceras partes de la superficie cuya adjudicación solicita, o hasta tres mil (3000) has. en las zonas de pastos naturales previamente delimitadas por el INCODER donde la naturaleza de los suelos, el régimen meteorológico o las inundaciones periódicas no hacen económicamente factible la siembra de pastos artificiales. La adjudicación en zonas de sabanas naturales donde la naturaleza de los suelos, el régimen meteorológico o las inundaciones periódicas no hacen económicamente factible la siembra de pastos artificiales, sólo procedía, siempre y cuando el solicitante demostrara, a satisfacción del Instituto, que sobre dichas extensiones se han hecho mejoras tales como cercas, casas de habitación, regulación de corrientes hidráulicas, obras de desecación, etc., y que se han ocupado con ganado regularmente conforme, a las circunstancias propias de tales tierras. El mantenimiento de ganados deberá probarse por medio de las declaraciones de renta y patrimonio correspondiente al período para el cual se invoca la ocupación.

En concordancia con lo anterior, las adjudicaciones de baldíos realizadas bajo el fundamento de la Ley 30 de 1988, quedaban amparadas por la presunción contenida en el artículo 6 de la Ley 97 de 1946[17], según la cual, se presume de derecho que todo terreno adjudicado por el Estado ha sido baldío, si la adjudicación tenía como base la explotación con cultivos o el establecimiento de ganados por un período no inferior a cinco (5) años anteriores a la fecha en que se realizó la adjudicación. Al respecto, señalaba la disposición:

> *"(...) Artículo 6. Presúmese de derecho que todo terreno adjudicado por el Estado ha sido baldío, cuando la resolución de adjudicación haya tenido como base una explotación con cultivos o establecimiento de ganados* ***por un período no menor de cinco años con anterioridad a la fecha de la adjudicación*** *(...)".*

Es decir, de acuerdo con la anterior norma, amén de presumir de derecho que el bien adjudicado ha sido baldío cuando se hubiera titulado con base en una explotación económica, dicha norma exigía, en todo caso, acreditar una ocupación con fines de explotación económica, por un término no menor a cinco años con anterioridad a la adjudicación.

En el presente caso, se podría concluir que las veinticinco (25) adjudicaciones efectuadas en el año 1992, se hicieron bajo la consideración de que los predios, según el literal a) del artículo 30 de la Ley 135 de 1961, estaban en zonas muy alejadas de los centros de actividad económica y de difícil acceso, puesto que no se adjudicó sobre el límite de las 450 has. que, como regla general, estaba establecido en el Artículo 29 de la Ley 135 de 1961, modificado por el Artículo 10 de la Ley 30 de 1988.

[17]Para Eudoro González Gómez, la presunción de derecho dispuesta en el artículo 6 de la Ley 97 de 1946 presuponía que el Estado garantizaba que la naturaleza del terreno que se adjudicaba tenía la condición original de baldío y no de propiedad privada. (*González Gómez, Eudoro. "Legislación sobre baldíos" en "Estudios de Derecho"*, Medellín. – 2. época, vol. 15, no. 44 (Mayo 1954); pag 232).

Como a continuación se relaciona, dichas adjudicaciones se hicieron sobre el límite máximo de las mil (1000) hectáreas, aplicable a aquellas extensiones adjudicables, según el literal a), del artículo 30, de la Ley 135 de 1961, en regiones muy alejadas de los centros de actividad económica y que sean de difícil acceso, mientras esta última circunstancia subsista.

RESOLUCION	PREDIO	FOLIO	BENEFICIARIO	AREA Ha
21 Del 15 01-1992	La Laguna	234-8006	Juan Agustín Herrera	972 ha 2.000 m2
28 Del 15 01-1992	La Honda	234-8013	Jaime Ramón Lozada Neira	985 ha 8.500 m2
30 Del 15 01-1992	El Pedregal	234-8015	Eduardo Villarraga	991 ha 1.000 m2
45 Del 16 01-1992	El Estero	234-8021	Edilson Horacio Fajardo Vega	983 ha 8.500 m2
50 Del 16 01-1992	La perla	234-13197	Roberto Alvarado	985 ha 3.000 m2
23 Del 15 01-1992	Pajonal	234-8008	José Del Carmen León Gaitán	984 ha 2.000 m2
22 Del 15 01-1992	Mi Llanura	234-8007	Hugo Armando Bustos Bernal	997 ha 5.000 m2
24 Del 15 01-1992	San José	234-8009	Armando Bernal	977 ha 4.000 m2
44 Del 16 01-1992	Casuarito	234-8020	Hugo Efraín Bustos Silva	1000 ha
40 Del 16 01-1992	La Sabana	234-8017	Jesús Anundo Aranda Silva	999 ha 7.580 m2
41 Del 16 01-1992	Las Corocoras	234-8018	Esteban Vásquez	994 ha 9.000 m2
47 Del 16 01-1992	La Palmita	234-13195	Edgar Hernando Prieto	999 ha 9.768 m2
48 Del 15 01-1992	El Caminito	234-13196	Graciela Ramírez	994 ha 5.000 m2
52 Del 16 01-1992	Mata de Monte	234-8024	Daniel Vásquez	994 ha 1.000 m2
26 Del 15 01-1992	El Rincón	234-8011	Guillermo Cadena	883 ha 8500 m2
42 Del 16 01-1992	Palo Alto	234-8019	Juan Manuel Sarmiento	998 ha 7500 m2
49 Del 16 01-1992	Matejey	234-8022	José Vicente Salinas	868 ha 1000 m2
53 Del 16 01-1992	La Gran Laguna	234-8025	Ana Paulina Sánchez	1000 ha
43 Del 16 01-1992	Cascabeles	234-13193	Juan Moya	979 ha 6000 m2
25 Del 15 01-1992	El espejo	234-8010	Jorge Monsalde Vergara	995 ha 6000 m2
27 Del 15 01-1992	El Morichal	234-8012	Jesús Antonio Bustos	998 ha 1500 m2
29 Del 15 01-1992	Cumare	234-8014	Carlos Castillo Laverde	984 ha 1000 m2
31 Del 15 01-1992	Campo Hermoso	234-8016	Joaquín Silva	999 ha 1000 m2
46 Del 16 01-1992	Tafurito	234-13194	Jairo Rodríguez Niño	994 ha 500 m2
51 Del 16 01-1992	Caracolí	234-8023	Alberto Vega	998 ha 5000 m2

En estos casos, dado que conforme a la normatividad aplicable, eventualmente no se trataba de adjudicaciones en zonas de pastos naturales delimitadas por el Instituto, sino de predios ubicados en regiones muy alejadas de los centros de actividad económica y de difícil acceso, los solicitantes conforme al inciso 5° del artículo 30 de la Ley 135 de 1961, en ese caso, debían demostrar que habían puesto bajo explotación no menos de las dos terceras partes de la superficie cuya adjudicación solicita, y si esta ocupación era ganadera, como es lo corriente en dicha zona -de acuerdo con el informe técnico realizado con motivo de la inspección ocular realizada a los predios objeto del procedimiento de revocatoria durante el presente trámite-, según el Artículo 29 de la Ley 135 de 1961, modificado por el Artículo 10 de la Ley 30 de 1988, dicha ocupación ganadera sólo daría derecho a la "(...) ***adjudicación cuando la superficie respectiva se haya sembrado con pastos artificiales, de cuya existencia, extensión y especie se dejará clara constancia en la respectiva inspección ocular (...)"***

Sin embargo, las resoluciones de adjudicación no especifican bajo cuál régimen de extensión adjudicable se emitieron las titulaciones que son materia del presente trámite de revocatoria, lo cual llevaría a concluir que se realizaron teniendo en cuenta que los predios adjudicados estarían ubicados en las zonas de sabanas de pastos naturales definidas por el INCORA, donde la naturaleza de los suelos, el régimen meteorológico o las inundaciones periódicas no hacen económicamente factible la siembra de pastos artificiales. En este caso, los solicitantes, conforme lo disponen el inciso 6° del artículo 30 de la Ley 135 de 1961, y sus numerales 1°

y 2°, para que procediera la adjudicación, debían demostrar que el predio estaba **i)** en sabanas de pastos naturales donde la naturaleza de los suelos, el régimen meteorológico o las inundaciones periódicas no hacen económicamente factible la siembra de pastos artificiales; **ii)** que han hecho en la respectiva extensión mejoras tales como cercas, casas de habitación, regulación de corrientes hidráulicas, obras de desecación, etc.; y **iii)** que se han ocupado con ganado regularmente conforme, a las circunstancias propias de tales tierras. Adicionalmente, **iv)** el mantenimiento de ganados deberá probarse por medio de las declaraciones de renta y patrimonio correspondiente al período para el cual se invoca la ocupación.

6.5.3.2. Requisitos materiales o sustantivos de la adjudicación de baldíos establecidos en la Ley 160 de 1994.

Por su parte, la Ley 160 de 1994, que subrogó las normas de la Ley 135 de 1961 y de la Ley 30 de 1988, entre otras, dispuso que habría lugar a la adjudicación de baldíos en las extensiones y condiciones que para cada municipio o región del país señale la Junta Directiva, a favor de **personas naturales**, empresas comunitarias y cooperativas **campesinas,** que no sean propietarias o poseedoras, a cualquier título, de otros predios rurales en el territorio nacional, siempre y cuando demuestren, además, ocupación previa de por lo menos cinco años con explotación que corresponda a la aptitud del suelo establecida por el INCORA en la inspección ocular, sobre mínimo las dos terceras partes de la respectiva superficie, y no posean un patrimonio neto superior a los mil salarios mínimos legales mensuales (Artículos 65, 69, 71 y 72, ibídem).

Los anteriores requisitos son aplicables a las titulaciones que son materia del presente trámite, efectuadas en el año 1996, según se detalla en el siguiente cuadro:

RESOLUCION	PREDIO	FOLIO	BENEFICIARIO	AREA Ha
973 Del 25 09-1996	La Chicharra	234-13203	Julio Enrique Alvarez Sarmiento	699 ha 9.500 m2
891 Del 23-09-1996	Lagunazo	234-13202	William Velasco	697 ha 9.757 m2

En conclusión, para que proceda la revocatoria directa de las mencionadas Resoluciones de Adjudicación, se debe verificar si en la titulación se violaron las anteriores normas legales y reglamentarias, que constituyen los correspondientes requisitos materiales o sustantivos para adjudicar baldíos.

6.5.4. El caso en concreto.

Tanto la Ley 30 de 1988 modificatoria de la Ley 135 de 1961, como la Ley 160 de 1994, que subrogó aquellas, establecen que la ocupación previa por cinco años y la explotación de una porción del predio baldío, son esenciales para proceder a adjudicar bienes baldíos, obviamente a los destinatarios legítimos de la titulación, esto es, sujetos de reforma agraria, trabajadores agrarios, con quienes el Estado debe garantizar el cumplimiento de la función social de la propiedad y el acceso progresivo a la tierra rural.

En consecuencia, se debe decidir si las siguientes adjudicaciones cumplieron los requisitos sustantivos vigentes, o lo que es lo mismo, si no violaron la normatividad legal y reglamentaria vigente al momento de la expedición del título sobre baldíos:

RESOLUCION	PREDIO	FOLIO	BENEFICIARIO	AREA Ha
21 Del 15 01-1992	La Laguna	234-8006	Juan Agustin Herrera	972 ha 2.000 m2
28 Del 15 01-1992	La Honda	234-8013	Jaime Ramón Lozada Neira	985 ha 8.500 m2
30 Del 15 01-1992	El Pedregal	234-8015	Eduardo Villarraga	991 ha 1.000 m2
45 Del 16 01-1992	El Estero	234-8021	Edilson Horacio Fajardo Vega	983 ha 8.500 m2
50 Del 16 01-1992	La perla	234-13197	Roberto Alvarado	985 ha 3.000 m2
23 Del 15 01-1992	Pajonal	234-8008	José Del Carmen León Gaitán	984 ha 2.000 m2
22 Del 15 01-1992	Mi Llanura	234-8007	Hugo Armando Bustos Bernal	997 ha 5.000 m2
24 Del 15 01-1992	San José	234-8009	Armando Bernal	977 ha 4.000 m2
44 Del 16 01-1992	Casuarito	234-8020	Hugo Efrain Bustos Silva	1000 ha
973 Del 25 09-1996	La Chicharra	234-13203	Julio Enrique Álvarez Sarmiento	699 ha 9.500 m2
40 Del 16 01-1992	La Sabana	234-8017	Jesús Anundo Aranda Silva	999 ha 7.580 m2
41 Del 16 01-1992	Las Corocoras	234-8018	Esteban Vásquez	994 ha 9.000 m2
47 Del 16 01-1992	La Palmita	234-13195	Edgar Hernando Prieto	999 ha 9.768 m2
48 Del 15 01-1992	El Caminito	234-13196	Graciela Ramírez	994 ha 5.000 m2
52 Del 16 01-1992	Mata de Monte	234-8024	Daniel Vásquez	994 ha 1.000 m2
891 Del 23-09-1996	Lagunazo	234-13202	William Velasco	697 ha 9.757 m2
26 Del 15 01-1992	El Rincón	234-8011	Guillermo Cadena	883 ha 8500 m2
42 Del 16 01-1992	Palo Alto	234-8019	Juan Manuel Sarmiento	998 ha 7500 m2
49 Del 16 01-1992	Matejey	234-8022	José Vicente Salinas	868 ha 1000 m2
53 Del 16 01-1992	La Gran Laguna	234-8025	Ana Paulina Sánchez	1000 ha
43 Del 16 01-1992	Cascabeles	234-13193	Juan Moya	979 ha 6000 m2
25 Del 15 01-1992	El espejo	234-8010	Jorge Monsaide Vergara	995 ha 6000 m2
27 Del 15 01-1992	El Morichal	234-8012	Jesús Antonio Bustos	998 ha 1500 m2
29 Del 15 01-1992	Cumare	234-8014	Carlos Castillo Laverde	984 ha 1000 m2
31 Del 15 01-1992	Campo Hermoso	234-8016	Joaquín Silva	999 ha 1000 m2
46 Del 16 01-1992	Tafurito	234-13194	Jairo Rodríguez Niño	994 ha 500 m2
51 Del 16 01-1992	Caracolí	234-8023	Alberto Vega	998 ha 5000 m2

Conforme con lo dicho, está probado en el presente caso, que la totalidad de las anteriores adjudicaciones a favor de los beneficiarios señalados en el cuadro, se emitieron con violación de las condiciones materiales para la adjudicación de baldíos, referidas a la ocupación previa con explotación de las dos terceras partes, por el término de cinco años.

En efecto, en los autos de inicio de la revocatoria, se señaló que teniendo en cuenta que la totalidad de las diligencias de inspección ocular efectuadas dentro de los respectivos trámites de titulación, en ningún caso, dichas diligencias fueron atendidas por los solicitantes -y posteriores adjudicatarios-, sino que fueron atendidas solamente por personas *"encargadas del predio"*, las cuales, como se observa en los expedientes, no tenían ninguna conexión directa o indirecta con el proceso administrativo de titulación de baldíos.

De acuerdo con lo anterior, se pone de manifiesto que los solicitantes y, finalmente, la totalidad de los beneficiarios de la adjudicación, no ocupaban, ni explotaban los predios para la época en que estos fueron adjudicados, situación con la cual, se desconocieron los requisitos esenciales de ocupación previa y explotación por el término de cinco (5) años, previstos en la Ley 30 de 1988, la Ley 97 de 1946 y la Ley 160 de 1994, en el caso de aquellas adjudicaciones emitidas bajo vigencia de esta última norma.

De la situación según la cual los beneficiarios de la adjudicación no eran ocupantes, ni explotaban los predios en la forma exigida en la normatividad aplicable, no solamente dan cuenta de ello las respectivas actas de diligencia de inspección ocular, a cuya realización no concurrió ninguno de los adjudicatarios, sino los testimonios de los miembros de la comunidad de El Porvenir, pues todos concluyen,

que pese a vivir allí desde hace más de quince años, no conocen los predios adjudicados por sus linderos y ubicación exacta, ni conocen a varias de las personas que al momento de la adjudicación dijeron ser las ocupantes de los predios, con base en lo cual se les otorgó el título.

Adicionalmente, el administrador de los Hatos Cabiona y Portuguesa de propiedad de la compañía Ganadería La Cristalina, que pastorea el ganado que integra dichos hatos sobre las 27000 o 28000 hectáreas destinadas para dicho fin en El Porvenir, en su declaración testimonial manifestó que ni cuando laboró para dicha compañía hace quince años, ni en la actualidad cuando obra como administrador, conoce o conoció de la existencia de los predios adjudicados en que está dividida dicha extensión, por sus áreas o linderos, ni conoce a los adjudicatarios, salvo i) en dos casos en los que beneficiarios de la adjudicación trabajan para la compañía Ganadería Brisas de Agualinda S.C.A. NIT: 860403863, como son el Médico Veterinario (Hugo Armando Bustos -adjudicatario del Predio denominado Mi Llanura, englobado en el predio Mi Llanura, y propietario del predio englobado resultante, llamado El Rincón) y el Contador (Guillermo Cadena, adjudicatario del Predio El Rincón); sociedad que según el Registro Único Empresarial y Social - Cámaras de Comercio (www.rues.org.co)[18] está representada legalmente por la socia gestora, señora Maria Blanca Carranza de Carranza y por el gerente, señor Victor Ernesto Carranza Carranza; y ii) en el caso del señor Joaquín Silva, adjudicatario del predio Campo Hermoso, porque este señor "andaba" con don Victor Carranza.

Por otra parte, como ya se ha dicho, en vigencia del Artículo 10, de la Ley 30 de 1988, que modificó el Artículo 29 de la Ley 135 de 1961, la adjudicación de baldíos sólo podía hacerse por una extensión no mayor a 450 has.. Sin embargo, dicho límite de área adjudicable, conforme lo disponía el Artículo 30 de la Ley 135 de 1961, podría subir i) hasta mil (1000) has. en el caso de aquellos predios baldíos ubicados en regiones muy alejadas de los centros de actividad económica y que sean de difícil acceso, mientras esta última circunstancia subsista, y ii) hasta 3000 has., en el caso de tierras de zonas de sabanas de pastos naturales donde la naturaleza de los suelos, el régimen meteorológico o las inundaciones periódicas no hacen económicamente factible la siembra de pastos artificiales.

A este respecto debe señalarse que en todos los expedientes de adjudicación el Tramitador de Baldíos de Incora, de la Zona de Desarrollo de Puerto Gaitán, señaló que con el fin de constatar si las tierras a adjudicar "se encuentran cobijadas por lo dispuesto en el Artículo 30 de la Ley 135 de 1961 en su inciso 6°, se verificó que efectivamente son terrenos de los que corresponde a la norma citada, es decir, se hallan en el caso del literal b), del citado artículo, o sea: Las sabanas de pastos naturales donde la naturaleza de los suelos, el régimen meteorológico o las inundaciones periódicas no hacen económicamente factible la siembra de pastos artificiales. Por lo consiguiente el interesado no debe acreditar con declaraciones de renta ni pruebas supletorias la explotación de esos terrenos".

Así, es evidente que la adjudicación de los predios baldíos efectuada en el año 1992, con base en lo dispuesto en el Artículo 30 de la Ley 135 de 1961, se hizo bajo causal de ampliación del área adjudicable. Como fácilmente se puede confirmar,

[18] La consulta en internet tiene pleno valor probatorio, conforme lo dispone la Ley 527 de 1999, en especial sus artículos 6 y 10, entre otros.

ninguna adjudicación efectuada en el año 1992, a las que se refiere el presente procedimiento, se hizo por la regla general de titulación de área adjudicable vigente para ese momento (450 has.) sino por áreas que superiores que no superon las mil (1000) hectáreas.

Teniendo en cuenta esto último, debe señalarse que dependiendo de la causal por la cual se superó el límite general de las 450 has. como área adjudicable, conforme a los Artículos 29 y 30 de la Ley 135 de 1961, el primero de los cuales fue modificado por el Artículo 10, de la Ley 30 de 1998, el solicitante debía demostrar su ocupación y su explotación sobre la respectiva porción de distinta manera.

Según el Artículo 29 de la Ley 135 de 1961, modificado por el Artículo 10, de la Ley 30 de 1988, quien pretendiera la adjudicación por ocupación previa, debía demostrar que explotaba las dos terceras partes de la superficie solicitada en adjudicación. Adicionalmente, salvo en el caso de la adjudicación de baldíos en zonas de sabanas de pastos naturales reglada en el Artículo 30 de la Ley 135 de 1961, la ocupación con ganados daba derecho a la adjudicación sólo si la superficie respectiva había sido sembrada con pastos artificiales, de cuya existencia, extensión y especie se debía **dejar clara constancia en la respectiva inspección ocular**. (Artículos 7 y 29 del Decreto 2275 de 1988, reglamentario de la Ley 135 de 1961)

Ahora, si la adjudicación se daba en zonas de sabanas de pastos naturales, como en efecto lo certificó el Tramitador de Baldíos del Incora, Zona de Desarrollo de Puerto Gaitán, el área adjudicable podía subir hasta las tres mil (3000) hectáreas. En este caso, debía tratarse de terrenos definidos por el INCORA, donde la naturaleza de los suelos, el régimen meteorológico o las inundaciones periódicas no hacen económicamente factible la siembra de pastos artificiales. Para tal efecto, el solicitante debía demostrar, entonces, que en dicho terrenos se han hecho *"mejoras tales como cercas, casas de habitación, regulación de corrientes hidráulicas, obras de desecación, etc., y que se han ocupado con ganado regularmente conforme, a las circunstancias propias de tales tierras. **El mantenimiento de ganados deberá probarse por medio de las declaraciones de renta y patrimonio correspondiente al periodo para el cual se invoca la ocupación**" (Énfasis añadido)*

Al respecto debemos manifestar que de acuerdo con las actas de la inspección ocular realizadas dentro del trámite de adjudicación, sobre todos los predios adjudicados en el año 1992 existía explotación en ganadería extensiva, en cuyo caso, la adjudicación procedía sólo si la superficie respectiva había sido sembrada con pastos artificiales, de cuya existencia, extensión y especie se debía dejar **clara constancia en la respectiva inspección ocular**. Sin embargo, quienes hicieron y presidieron las diligencias de inspección ocular al momento de las adjudicaciones, en todas las actas correspondientes, manifestaron que **no** había pastos mejorados en los predios cuya titulación se solicitaba. En consecuencia, las adjudicaciones que se analizan efectuadas en el año 1992, si la mismas estuvieran sustentadas en la causal de ocupación con explotación ganadera, no debieron proceder, por violación de lo dispuesto en los Artículos 29 y 30 de la Ley 135 de 1961, el primero de los cuales fue modificado por el Artículo 10 de la Ley 30 de 1988.

Por otra parte, de conformidad con la documentación reseñada que obra en los

respectivos expedientes, como las adjudicaciones de 1992, se hicieron de acuerdo con lo previsto en el inciso 6° y los numerales 1°y 2° del Artículo 30 de Ley 135 de 1961 y teniendo en cuenta que la explotación que se dijo acreditar en dicho momento consistía en ganadería extensiva, se advierte que en ninguno de los expedientes de las adjudicaciones realizadas en el año de 1992, obran las declaraciones de renta y patrimonio a través de las cuales los adjudicatarios debían probar el mantenimiento del ganado durante el tiempo que se invoca como lapso de ocupación. Por el contrario, en dicho momento el Instituto señaló, pese a que se estaba haciendo la adjudicación conforme al inciso 6 del Artículo 30 de la Ley 135 de 1961, que el interesado no tenía el deber de "acreditar con declaraciones de rentas ni pruebas supletorias la explotación de esos terrenos" lo cual es contrario a lo que disponía el mencionado inciso 6°. Así, es evidente la clara violación de las normas sobre baldíos.

En conclusión, se tiene que la titulación efectuada no recayó en destinatarios legítimos de la reforma agraria, en la medida en que se probó que en ningún caso de los analizados en la presente providencia, los favorecidos con el título ocupaban y explotaban los predios adjudicados en la forma exigida por la normatividad vigente al momento de la adjudicación. Por su parte, en caso de que ello hubiera sido así, tampoco se acreditó la existencia de pastos mejorados única forma de obtener la adjudicación cuando la ocupación se hiciera con ganado. Asi mismo, como las adjudicaciones se hicieron conforme con lo dispuesto en el inciso 6°y los numerales 1 y 2 del Artículo 30 de la Ley 135 de 1961, no se cumplió con dicha norma pues no se allegó la necesaria prueba del mantenimiento de los ganados por medio de las declaraciones de renta y patrimonio correspondientes al período para el cual se invoca la ocupación.

Por lo anterior, el Despacho ordenará la revocatoria directa de las siguientes Resoluciones de Adjudicación:

RESOLUCION	PREDIO	FOLIO	BENEFICIARIO	AREA Ha
21 Del 15 01-1992	La Laguna	234-8006	Juan Agustín Herrera	972 ha 2.000 m2
28 Del 15 01-1992	La Honda	234-8013	Jaime Ramón Lozada Neira	985 ha 8.500 m2
30 Del 15 01-1992	El Pedregal	234-8015	Eduardo Villarraga	991 ha 1.000 m2
45 Del 16 01-1992	El Estero	234-8021	Edilson Horacio Fajardo Vega	983 ha 8.500 m2
50 Del 16 01-1992	La perla	234-13197	Roberto Alvarado	985 ha 3.000 m2
23 Del 15 01-1992	Pajonal	234-8008	José Del Carmen León Gaitán	984 ha 2.000 m2
22 Del 15 01-1992	Mi Llanura	234-8007	Hugo Armando Bustos Bernal	997 ha 5.000 m2
24 Del 15 01-1992	San José	234-8009	Armando Bernal	977 ha 4.000 m2
44 Del 16 01-1992	Casuarito	234-8020	Hugo Efraín Bustos Silva	1000 ha
973 Del 25 09-1996	La Chicharra	234-13203	Julio Enrique Álvarez Sarmiento	699 ha 9.500 m2
40 Del 16 01-1992	La Sabana	234-8017	Jesús Anundo Aranda Silva	999 ha 7.580 m2
41 Del 16 01-1992	Las Corocoras	234-8018	Esteban Vásquez	994 ha 9.000 m2
47 Del 16 01-1992	La Palmita	234-13195	Edgar Hernando Prieto	999 ha 9.768 m2
48 Del 15 01-1992	El Caminito	234-13196	Graciela Ramírez	994 ha 5.000 m2
52 Del 16 01-1992	Mata de Monte	234-8024	Daniel Vásquez	994 ha 1.000 m2
891 Del 23-09-1996	Lagunazo	234-13202	William Velasco	697 ha 9.757 m2
26 Del 15 01-1992	El Rincón	234-8011	Guillermo Cadena	883 ha 8500 m2
42 Del 16 01-1992	Palo Alto	234-8019	Juan Manuel Sarmiento	998 ha 7500 m2
49 Del 16 01-1992	Matejey	234-8022	José Vicente Salinas	868 ha 1000 m2
53 Del 16 01-1992	La Gran Laguna	234-8025	Ana Paulina Sánchez	1000 ha
43 Del 16 01-1992	Cascabeles	234-13193	Juan Moya	979 ha 6000 m2
25 Del 15 01-1992	El espejo	234-8010	Jorge Monsalde Vergara	995 ha 6000 m2
27 Del 15 01-1992	El Morichal	234-8012	Jesús Antonio Bustos	998 ha 1500 m2
29 Del 15 01-1992	Cumare	234-8014	Carlos Castillo Laverde	984 ha 1000 m2
31 Del 15 01-1992	Campo Hermoso	234-8016	Joaquín Silva	999 ha 1000 m2
46 Del 16 01-1992	Tafurito	234-13194	Jairo Rodríguez Niño	994 ha 500 m2

RESOLUCION	PREDIO	FOLIO	BENEFICIARIO	AREA Ha
31 Del 15 01-1992	Campo Hermoso	234-8016	Joaquin Silva	999 ha 1000 m2
46 Del 16 01-1992	Tafurito	234-13194	Jairo Rodriguez Niño	994 ha 500 m2
51 Del 16 01-1992	Caracoli	234-8023	Alberto Vega	998 ha 5000 m2

Así las cosas, los anteriores inmuebles, por virtud de la revocatoria directa, vuelven al dominio de la Nación-Incoder, con el carácter de baldíos, razón por la cual debe procederse a su restitución jurídica y material en los términos de lo dispuesto en el Artículo 46 del Decreto 1465 de 2013, reglamentario de la Ley 160 de 1994.

Por lo anterior, el presente acto administrativo que decide revocar las mencionadas Resoluciones de Adjudicación, retira del ordenamiento jurídico los referidos actos administrativos de titulación, los cuales dejan de tener vigencia y no producen, ni han producido, por tanto, efecto alguno.

Por último, frente a la petición de revocatoria directa de la Resolución No. 1667 del 10 de junio de 2010, el despacho debe manifestar y reiterar que la competencia delegada por la Gerencia del Instituto a la Subgerencia de Tierras para decidir el presente asunto por medio de la Resolución No. 2282 del nueve (9) de noviembre de 2012 sólo se contrae al análisis y decisión del procedimiento de revocatoria directa sobre las referidas veintisiete (27) Resoluciones de Adjudicación. Ahora, de acuerdo con la información que obra el expediente según memorando 20143131965 de la Dirección Técnica de Procesos Agrarios, la Resolución No. 1667 del 10 de junio de 2010, no está ejecutoriada razón por la cual actualmente es improcedente que se adelante la revocatoria directa de la misma, en el entendido de que dicha decisión no produce efectos jurídicos.

En mérito de lo expuesto, la Subgerencia de Tierras Rurales,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: Acumúlense en un solo expediente, los procesos de la revocatoria directa adelantada sobre los predios englobados denominados El Pedregal (F.M.I. 234-15745), Mi Llanura (F.M.I. 234-15741), Campo Hermoso (F.M.I. 234-15744), El Rincón (F.M.I. 234-15742) y Las Corocoras (F.M.I. 234-15743), ubicados en la Vereda El Porvenir, Municipio de Puerto Gaitán, Departamento del Meta, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

ARTÍCULO 2°: Deniéguese, por impertinente, la prueba solicitada por la abogada MARIA PATRICA GIL CORREDOR, en el sentido de que se solicite la información sobre la residencia electoral de uno de los testigos, por las razones expuestas en la parte motiva de la providencia.

ARTÍCULO 3°: Deniéguense las solicitudes de nulidad presentadas por la abogada MARIA PATRICIA GIL CORREDOR y ANA MARÍA GARCÍA QUIÑONES, por las razones expuestas en precedencia.

ARTÍCULO 4°: Revóquense en todas sus partes las siguientes Resoluciones de Adjudicación de baldíos:

1. Resolución No. 21 del quince (15) de enero de 1992, mediante el cual se adjudicó el predio denominado "LA LAGUNA" a favor de JUAN AGUSTIN HERRERA, ubicado en la vereda El Porvenir del Municipio de Puerto Gaitán en el departamento del Meta, inscrita en el Folio de Matrícula Inmobiliaria, cerrado, 234-8006.

2. Resolución No. 28 del quince (15) de enero de 1992, mediante el cual se adjudicó el predio denominado "LA HONDA" a favor de JAIME RAMÓN LOZANO NEIRA, ubicado en la vereda El Porvenir del Municipio de Puerto Gaitán en el departamento del Meta, inscrita en el Folio de Matrícula Inmobiliaria, cerrado, 234-8013.

3. Resolución No. 30 del quince (15) de enero de 1992, mediante el cual se adjudicó el predio denominado "EL PEDREGAL" a favor de EDUARDO VILLARRAGA, ubicado en la vereda El Porvenir del Municipio de Puerto Gaitán en el departamento del Meta, inscrita en el Folio de Matrícula Inmobiliaria, cerrado, 234-8015.

4. Resolución No. 45 del dieciséis (16) de enero de 1992, mediante el cual se adjudicó el predio denominado "EL ESTERO" a favor de EDILSON HORACIO FAJARDO VEGA, ubicado en la vereda El Porvenir del Municipio de Puerto Gaitán en el departamento del Meta, inscrita en el Folio de Matrícula Inmobiliaria, cerrado, 234-8021.

5. Resolución No. 50 del dieciséis (16) de enero de 1992, mediante el cual se adjudicó el predio denominado "LA PERLA" a favor de ROBERTO ALVARADO, ubicado en la vereda El Porvenir del Municipio de Puerto Gaitán en el departamento del Meta, inscrita en el Folio de Matrícula Inmobiliaria, cerrado, 234-13197.

Parágrafo 1°: Los anteriores predios están ubicados en la Inspección de Policía de El Porvenir, Municipio de Puerto Gaitán en el Departamento del Meta, con Matrículas Inmobiliarias de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Puerto López. Dichos predios fueron englobados según el folio **234-15745**, dando origen al predio denominado **"EL PEDREGAL"**, de propiedad de los mencionados adjudicatarios.

6. Resolución No. 22 del quince (15) de enero de 1992, mediante el cual se adjudicó el predio denominado "MI LLANURA" a favor de HUGO ARMANDO BUSTOS BERNAL, ubicado en la vereda El Porvenir del Municipio de Puerto Gaitán en el departamento del Meta, inscrita en el Folio de Matrícula Inmobiliaria, cerrado, 234-8008

7. Resolución No. 23 del quince (15) de enero de 1992, mediante el cual se adjudicó el predio denominado "PAJONAL" a favor de JOSE DEL CARMEN LEON GAITÁN, ubicado en la vereda El Porvenir del Municipio de Puerto Gaitán en el departamento del Meta, inscrita en el Folio de Matrícula Inmobiliaria, cerrado, 234-8007.

8. Resolución No. 24 del quince (15) de enero de 1992, mediante el cual se adjudicó el predio denominado "SAN JOSÉ" a favor de ARMANDO BERNAL,

ubicado en la vereda El Porvenir del Municipio de Puerto Gaitán en el departamento del Meta, inscrita en el Folio de Matrícula Inmobiliaria, cerrado, 234-8009.

9. Resolución No. 44 del dieciséis (16) de enero de 1992, mediante el cual se adjudicó el predio denominado "CASUARITO" a favor de HUGO EFRAÍN BUSTOS SILVA, ubicado en la vereda El Porvenir del Municipio de Puerto Gaitán en el departamento del Meta, inscrita en el Folio de Matrícula Inmobiliaria, cerrado, 234-8020.

10. Resolución No. 973 del veinticinco (25) de septiembre de 1996, mediante el cual se adjudicó el predio denominado "LA CHICHARRA" a favor de JULIO ENRIQUE ALVAREZ SARMIENTO, ubicado en la vereda El Porvenir del Municipio de Puerto Gaitán en el departamento del Meta, inscrita en el Folio de Matrícula Inmobiliaria, cerrado, 234-13203.

Parágrafo 2°: Los anteriores predios están ubicados en la Inspección de Policía de El Porvenir, Municipio de Puerto Gaitán en el Departamento del Meta, con Matrículas Inmobiliarias de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Puerto López. Dichos predios englobados según el folio **234-15741**, dando origen al predio denominado **"MI LLANURA"**, de propiedad de los mencionados adjudicatarios.

11. Resolución No. 25 del quince (15) de enero de 1992, mediante el cual se adjudicó el predio denominado "EL ESPEJO" a favor de JORGE MONSAIDE VERGARA, ubicado en la vereda El Porvenir del Municipio de Puerto Gaitán en el departamento del Meta, inscrita en el Folio de Matrícula Inmobiliaria, cerrado, 234-8010.

12. Resolución No. 27 del quince (15) de enero de 1992, mediante el cual se adjudicó el predio denominado "EL MORICHAL" a favor de JESUS ANTONIO BUSTOS, ubicado en la vereda El Porvenir del Municipio de Puerto Gaitán en el departamento del Meta, inscrita en el Folio de Matrícula Inmobiliaria, cerrado, 234-8012.

13. Resolución No. 29 del quince (15) de enero de 1992, mediante el cual se adjudicó el predio denominado "CUMARE" a favor de CARLOS CASTILLO LAVERDE, ubicado en la vereda El Porvenir del Municipio de Puerto Gaitán en el departamento del Meta, inscrita en el Folio de Matrícula Inmobiliaria, cerrado, 234-8014.

14. Resolución No. 31 del dieciséis (15) de enero de 1992, mediante el cual se adjudicó el predio denominado "CAMPO HERMOSO" a favor de JOAQUIN SILVA, ubicado en la vereda El Porvenir del Municipio de Puerto Gaitán en el departamento del Meta, inscrita en el Folio de Matrícula Inmobiliaria, cerrado, 234-8016.

15. Resolución No. 46 del dieciséis (16) de enero de 1992, mediante el cual se adjudicó el predio denominado "TAFURITO" a favor de JAIRO RODRIGUEZ NIÑO, ubicado en la vereda El Porvenir del Municipio de Puerto Gaitán en el

departamento del Meta, inscrita en el Folio de Matrícula Inmobiliaria, cerrado, 234-13194.

16. Resolución No. 51 del dieciséis (16) de enero de 1992, mediante el cual se adjudicó el predio denominado "EL CARACOLÍ" a favor de ALBERTO VEGA, ubicado en la vereda El Porvenir del Municipio de Puerto Gaitán en el departamento del Meta, inscrita en el Folio de Matrícula Inmobiliaria, cerrado, 234-8023.

Parágrafo 3°: Los anteriores predios están ubicados en la Inspección de Policía de El Porvenir, Municipio de Puerto Gaitán en el Departamento del Meta, con Matrículas Inmobiliarias de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Puerto López. Dichos predios fueron englobados según el folio **234-15744**, dando origen al predio denominado **"CAMPO HERMOSO"**, de propiedad de los mencionados adjudicatarios.

17. Resolución No. 26 del quince (15) de enero de 1992, mediante el cual se adjudicó el predio denominado "EL RINCÓN" a favor de GUILLERMO CADENA, ubicado en la vereda El Porvenir del Municipio de Puerto Gaitán en el departamento del Meta, inscrita en el Folio de Matrícula Inmobiliaria, cerrado, 234-8011.

18. Resolución No. 42 del dieciséis (16) de enero de 1992, mediante el cual se adjudicó el predio denominado "PALO ALTO" a favor de JUAN MANUEL SARMIENTO, ubicado en la vereda El Porvenir del Municipio de Puerto Gaitán en el departamento del Meta, inscrita en el Folio de Matrícula Inmobiliaria, cerrado, 234-8019.

19. Resolución No. 43 del dieciséis (16) de enero de 1992, mediante el cual se adjudicó el predio denominado "CASCABELES" a favor de JUAN MOYA, ubicado en la vereda El Porvenir del Municipio de Puerto Gaitán en el departamento del Meta, inscrita en el Folio de Matrícula Inmobiliaria, cerrado, 234-13193.

20. Resolución No. 49 del dieciséis (16) de enero de 1992, mediante el cual se adjudicó el predio denominado "MATEJEY" a favor de JOSE VICENTE SALINA, ubicado en la vereda El Porvenir del Municipio de Puerto Gaitán en el departamento del Meta, inscrita en el Folio de Matrícula Inmobiliaria, cerrado, 234-8022.

21. Resolución No. 53 del dieciséis (16) de enero de 1992, mediante el cual se adjudicó el predio denominado "LA GRAN LAGUNA" a favor de ANA PAULINA SANCHEZ, ubicado en la vereda El Porvenir del Municipio de Puerto Gaitán en el departamento del Meta, inscrita en el Folio de Matrícula Inmobiliaria, cerrado, 234-8025.

Parágrafo 4°: Los anteriores predios están ubicados en la Inspección de Policía de El Porvenir, Municipio de Puerto Gaitán, en el Departamento del Meta, con Matrículas Inmobiliarias de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Puerto López. Dichos predios fueron englobados según el folio **234-15742**, dando origen al predio denominado **"EL RINCÓN"**, de propiedad de los mencionados adjudicatarios.

22. Resolución No. 40 del dieciséis (16) de enero de 1992, mediante el cual se adjudicó el predio denominado "LA SABANA" a favor de JOSÉ ANUNDO ARANDA SILVA, ubicado en la vereda El Porvenir del Municipio de Puerto Gaitán en el departamento del Meta, inscrita en el Folio de Matrícula Inmobiliaria, cerrado, 234-8017.

23. Resolución No. 41 del dieciséis (16) de enero de 1992, mediante el cual se adjudicó el predio denominado "LAS COROCORAS" a favor de ESTEBAN VÁSQUEZ, ubicado en la vereda El Porvenir del Municipio de Puerto Gaitán en el departamento del Meta, inscrita en el Folio de Matrícula Inmobiliaria, cerrado, 234-8018.

24. Resolución No. 47 del dieciséis (16) de enero de 1992, mediante el cual se adjudicó el predio denominado "LA PALMITA" a favor de EDGAR HERNANDO PRIETO, ubicado en la vereda El Porvenir del Municipio de Puerto Gaitán en el departamento del Meta, inscrita en el Folio de Matrícula Inmobiliaria, cerrado, 234-13195.

25. Resolución No. 48 del dieciséis (16) de enero de 1992, mediante el cual se adjudicó el predio denominado "EL CAMINITO" a favor de GRACIELA RAMIREZ, ubicado en la vereda El Porvenir del Municipio de Puerto Gaitán en el departamento del Meta, inscrita en el Folio de Matrícula Inmobiliaria, cerrado, 234-13196.

26. Resolución No. 52 del dieciséis (16) de enero de 1992, mediante el cual se adjudicó el predio denominado "MATA DE MONTE" a favor de DANIEL VASQUEZ, ubicado en la vereda El Porvenir del Municipio de Puerto Gaitán en el departamento del Meta, inscrita en el Folio de Matrícula Inmobiliaria, cerrado, 234-8024.

27. Resolución No. 891 del veintitrés (23) de septiembre de 1996, mediante el cual se adjudicó el predio denominado "LAGUNAZO" a favor de WILLIAM VELASCO, ubicado en la vereda El Porvenir del Municipio de Puerto Gaitán en el departamento del Meta, inscrita en el Folio de Matrícula Inmobiliaria, cerrado, 234-13202.

Parágrafo 5°: Los anteriores predios están ubicados en la Inspección de Policía de El Porvenir, Municipio de Puerto Gaitán, en el Departamento del Meta, con Matrícula Inmobiliaria de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Puerto López. Dichos predios fueron englobados según el folio **234-15743**, dando origen al predio denominado **"LAS COROCORAS"**, de propiedad de los mencionados adjudicatarios.

Parágrafo 6°: La presente providencia que decide revocar las anteriores resoluciones de adjudicación, retira del ordenamiento jurídico los referidos actos administrativos, los cuales dejan de tener vigencia y no producen, ni han producido, por tanto, efecto alguno.

ARTÍCULO 5°: Notifíquese personalmente la presente providencia a la Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria, a los titulares del derecho de dominio, a los adjudicatarios, y a los peticionarios de la Revocatoria Directa, de

conformidad con lo establecido en el Artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo y siguientes, advirtiéndoles que contra la misma no procede recurso alguno por la vía gubernativa.

ARTÍCULO 6°: Ejecutoriada la presente providencia que revoca los actos administrativos de adjudicación de los inmuebles objeto de la misma, estos vuelven al dominio de la Nación-Incoder, en su calidad de baldíos.

PARÁGRAFO: Dar traslado de la presente a la Dirección Técnica de Procesos Agrarios de esta Subgerencia para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO 7°: Ordénese la restitución de los respectivos bienes dentro del término de diez (10) días siguientes a la ejecutoria; vencido este término se procederá al desalojo, para lo cual se podrá requerir del apoyo de las autoridades de Policía, sin que para ello se haga necesario la recuperación de su posesión a través de una acción posesoria, así como tampoco del desarrollo de un proceso de recuperación de baldío indebidamente ocupado.

ARTÍCULO 8°: Ordénese, mediante la inscripción en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Puerto López, la CANCELACIÓN de los folios de matrícula inmobiliaria No. 234-15741, 234-15742, 234-15743, 234-15744 y 234-15745, correspondiente a los predios Mi Llanura, El Rincón, Las Corocoras, Campo Hermoso y el Pedregal, respectivamente, que resultaron del englobe de los veintisiete (27) predios adjudicados, tal como se indicó en la parte motiva de la presente providencia.

ARTÍCULO 9°: Como consecuencia de lo anterior y en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 57 de la Ley 1579 de 2012 y demás normatividad concordante, ordénese, mediante la Inscripción de la presente providencia en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Puerto López, la reactivación de los siguientes folios de matrícula inmobiliaria de los predios inicialmente adjudicados, a nombre de la Nación-Incoder:

FOLIO	PREDIO	RESOLUCION	BENEFICIARIO	AREA Ha
234-8006	La Laguna	21 Del 15 01-1992	Juan Agustín Herrera	972 ha 2.000 m2
234-8013	La Honda	28 Del 15 01-1992	Jaime Ramón Lozada Neira	985 ha 8.500 m2
234-8015	El Pedregal	30 Del 15 01-1992	Eduardo Villarraga	991 ha 1.000 m2
234-8021	El Estero	45 Del 16 01-1992	Edilson Horacio Fajardo Vega	983 ha 8.500 m2
234-13197	La perla	50 Del 16 01-1992	Roberto Alvarado	985 ha 3.000 m2
234-8008	Pajonal	23 Del 15 01-1992	José Del Carmen León Gaitán	984 ha 2.000 m2
234-8007	Mi Llanura	22 Del 15 01-1992	Hugo Armando Bustos Bernal	997 ha 5.000 m2
234-8009	San José	24 Del 15 01-1992	Armando Bernal	977 ha 4.000 m2
234-8020	Casuarito	44 Del 16 01-1992	Hugo Efraín Bustos Silva	1000 ha
234-13203	La Chicharra	973 Del 25 09-1996	Julio Enrique Alvarez Sarmiento	699 ha 9.500 m2
234-8017	La Sabana	40 Del 16 01-1992	Jesús Anundo Aranda Silva	999 ha 7.580 m2
234-8018	Las Corocoras	41 Del 16 01-1992	Esteban Vásquez	994 ha 9.000 m2
234-13195	La Palmita	47 Del 16 01-1992	Edgar Hernando Prieto	999 ha 9.768 m2
234-13196	El Caminito	48 Del 15 01-1992	Graciela Ramirez	994 ha 5.000 m2
234-8024	Mata de Monte	52 Del 16 01-1992	Daniel Vásquez	994 ha 1.000 m2
234-13202	Lagunazo	891 Del 23-09-1996	William Velasco	697 ha 9.757 m2
234-8011	El Rincón	26 Del 15 01-1992	Guillermo Cadena	883 ha 8500 m2
234-8019	Palo Alto	42 Del 16 01-1992	Juan Manuel Sarmiento	998 ha 7500 m2
234-8022	Matejey	49 Del 16 01-1992	José Vicente Salinas	868 ha 1000 m2
234-8025	La Gran Laguna	53 Del 16 01-1992	Ana Paulina Sánchez	1000 ha
234-13193	Cascabeles	43 Del 16 01-1992	Juan Moya	979 ha 6000 m2
234-8010	El espejo	25 Del 15 01-1992	Jorge Monsalde Vergara	995 ha 6000 m2

FOLIO	PREDIO	RESOLUCION	BENEFICIARIO	AREA Ha
234-8012	El Morichal	27 Del 15 01-1992	Jesús Antonio Bustos	998 ha 1500 m2
234-8014	Cumare	29 Del 15 01-1992	Carlos Castillo Laverde	984 ha 1000 m2
234-8016	Campo Hermoso	31 Del 15 01-1992	Joaquín Silva	999 ha 1000 m2
234-13194	Tafurito	46 Del 16 01-1992	Jairo Rodríguez Niño	994 ha 500 m2
234-8023	Caracoli	51 Del 16 01-1992	Alberto Vega	998 ha 5000 m2

Las anteriores matrículas, fueron cerradas en virtud de los englobes a los que se refiere la presente providencia, inscritos en los folios 234-15741, 234-15742, 234-15743, 234-15744 y 234-15745.

ARTÍCULO 10°: Contra la presente providencia no procede recurso alguno.

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, REGÍSTRESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá, D.C,

30 JUL 2014

RAÚL GONZALO GÓMEZ GÓMEZ
SUBGERENTE DE TIERRAS RURALES.

Proyectó: Convenio OIM INCODER 552 de 2013 L. Rodríguez - Abogada - Contratadora.
Revisó: Ruth Mireya Núñez - Directora, Dirección Técnica de Tierras.

Sentencia SU426/16

DERECHO DE ACCESO A LA TIERRA DE POBLACION CAMPESINA-Procedencia de tutela para evaluar presunta negligencia estatal en relación con la situación del predio declarado baldío y ocupado por campesinos víctimas del conflicto armado

La relevancia constitucional del caso, y la necesidad de un pronunciamiento del juez constitucional, se confirma por la aparente victimización que han enfrentado los ocupantes históricos del lugar, que configuran una compleja situación local de Derechos Humanos, derivada del conflicto armado, que presuntamente compromete de forma masiva el ejercicio de garantías constitucionales, tales como el acceso efectivo a la tierra en favor de los trabajadores rurales, la vida en condiciones dignas, trabajo, integridad personal, entre otros. En tal sentido, los peticionarios, que se identifican como campesinos de la vereda El Porvenir, municipio de Puerto Gaitán, han manifestado que han sido víctimas de distintos hechos de violencia por parte de estructuras criminales al margen de la ley, que a su vez se vinculan con la situación del conflicto armado interno extendido en el departamento del Meta; lo cual ha tenido como consecuencias, entre otras, el homicidio de varios pobladores.

PREDIOS BALDIOS COMO MEDIO PARA GARANTIZAR EL ACCESO PROGRESIVO A LA PROPIEDAD RURAL POR PARTE DE LA POBLACION CAMPESINA

REFORMA AGRARIA-Establece un régimen especial de clarificación, recuperación y adjudicación de baldíos, disponiendo expresamente que éstos tienen una destinación exclusiva para las “familias pobres”

SUJETOS DE REFORMA AGRARIA O ADJUDICATARIOS- Requisitos

Los requisitos generales para ser sujeto de reforma agraria o adjudicatario: (i) demostrar la explotación de más de dos terceras partes del predio que se pretende adjudicar, el cual, en todo caso, (ii) no podrá ser mayor a una UAF; adicionalmente (iii) se exige acreditar la explotación económica de más de dos terceras partes del predio y atendiendo a la aptitud productiva del terreno definida por el Incora (Incoder); (iv) se exige que el adjudicatario no tenga un patrimonio neto superior a los 1000 salarios mínimos mensuales vigentes; y (v) se advierte que no podrán ser adjudicatarios quienes ya se hayan beneficiado de otro predio rural, ya sea porque son sus propietarios o tienen derecho de posesión.

SISTEMA DE LEGALIZACION DE BALDIOS-Objetivo es garantizar el acceso a la tierra a quienes carecen de ésta

ADJUDICACION Y RECUPERACION DE TIERRAS BALDIAS- Campesinos como titulares del derecho a acceder progresivamente a la propiedad rural

DERECHO A LA PROPIEDAD RURAL EN BENEFICIO DE LA POBLACION CAMPESINA

La Corte Constitucional ha señalado que los atributos del derecho a la propiedad rural en beneficio del sector campesino son, por lo menos, los mismos que se derivan en el caso del régimen común de propiedad privada y, en consecuencia, ha establecido, sin carácter exhaustivo, cuatro extensiones del derecho en referencia: (i) el derecho a no ser despojado de su propiedad o forzado a deshacerse de la misma, bajo el argumento de ser improductiva, sin que antes se le otorguen alternativas para mejorar la producción o de desarrollo agrícola, como lo es el establecimiento de zonas de reserva campesina habilitadas para tal fin; (ii) el derecho a disfrutar de la propiedad sin intromisiones injustificadas; (iii) el derecho a que el Estado adopte medidas progresivas destinadas a efectivizar el acceso a la propiedad rural y el mejoramiento de su calidad de vida, en términos de dignidad humana; y (iv) el derecho a que se garantice su seguridad alimentaria.

DERECHO DE ACCESO A LA TIERRA DE POBLACION CAMPESINA-Acceso progresivo de trabajadores agrarios y garantía de una serie de bienes y servicios básicos

DERECHO DE ACCESO A LA TIERRA DE POBLACION CAMPESINA-Necesidad de un enfoque diferencial que atienda adecuadamente la situación de la "mujer rural"

La discriminación estructural contra la mujer es un problema que no sólo ha sido reconocido a nivel nacional, sino también en el escenario global, por lo que ha surgido la necesidad de adoptar distintas estrategias e instrumentos para suprimir este inadmisible fenómeno.

PROTECCION A LA MUJER RURAL-Instrumentos internacionales/**PROTECCION A LA MUJER RURAL-**Garantía constitucional

DEBER DEL ESTADO DE PROMOVER EL ACCESO PROGRESIVO A LA PROPIEDAD DE LA TIERRA DE TRABAJADORES AGRARIOS-Debe garantizar el derecho al territorio, bienes y servicios complementarios para mejoramiento de calidad de vida social, económico y cultural

DEBER DEL ESTADO DE PROMOVER EL ACCESO PROGRESIVO A LA PROPIEDAD DE LA TIERRA DE TRABAJADORES AGRARIOS-Contenido

Los contenidos de la obligación estatal de garantizar el acceso progresivo a la tierra y el territorio en beneficio de los trabajadores rurales se relacionan, por lo menos, con cuatro aspectos, así: (i) el acceso formal y material, cuya efectividad se da, fundamentalmente, a través de la titulación en favor de la población campesina; (ii) su participación en las estrategias institucionales que propendan no sólo por el desarrollo del agro colombiano, sino también de los proyectos de vida de los trabajadores del campo; (iii) la garantía de seguridad jurídica sobre las distintas formas de acceder a la propiedad de la tierra, tales como la ocupación, la posesión y la tenencia, lo cual implica disponer de mecanismos efectivos para su defensa y protección de actos arbitrarios como desalojos injustificados o desplazamientos forzados; y (iv) el reconocimiento de la discriminación histórica y estructural de la mujer, así como de su especial vulnerabilidad en contextos rurales y del conflicto, exige la adopción de medidas en su beneficio, en pos de garantizar acciones afirmativas tendientes a superar el estatus discriminatorio.

PROBLEMATICA DE LOS PREDIOS BALDIOS-No se circunscribe únicamente a la clarificación e identificación de los mismos, sino también a la efectiva adjudicación

DERECHO DE ACCESO A LA TIERRA DE POBLACION CAMPESINA-Vulneración de derechos de población campesina, desplazada por la violencia, que habita hace varios años la vereda El Porvenir y solicitan la adjudicación de los predios

DERECHO DE ACCESO A LA TIERRA DE POBLACION CAMPESINA-Órdenes para llevar a cabo un plan estratégico para aclarar la situación de campesinos en relación con los predios baldíos ocupados y adelantar los procesos correspondientes por las autoridades y órganos competentes

Referencia: Expediente T-5353319

Acción de tutela instaurada por Sulay Martínez y otros, contra el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural — Incoder— y otros.

Magistrada Ponente:
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA

Bogotá, D. C., once (11) de Agosto de dos mil dieciséis (2016).

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, ha proferido la siguiente

SENTENCIA

En el proceso de revisión de los fallos proferidos, en primera instancia, por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, el ocho (8) de octubre de dos mil quince (2015); y en segunda instancia, por la Sala de Decisión de Tutelas No. 2 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el veintiséis (26) de noviembre de dos mil quince (2015); dentro de la acción de tutela promovida por Sulay Martínez y otros, contra el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural —Incoder— y otros.

El proceso de la referencia fue seleccionado para su revisión por la Sala de Selección Número Dos de la Corte Constitucional, mediante Auto del doce (12) de febrero de dos mil dieciséis (2016). Por la relevancia social del caso, se presentó a la Sala Plena el informe de que trata el artículo 61 del Reglamento Interno de la Corte Constitucional. A través de auto de mayo 19 del año en curso, la Corporación decidió asumir la competencia para dictar una decisión de unificación.

I. ANTECEDENTES

El nueve (9) de septiembre de dos mil quince (2015), 73 ciudadanos[1] (37 mujeres y 36 hombres) instauraron acción de tutela contra el Incoder, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Gobernación del

[1] Sulay Martínez, Martha Lucía Horopa Colina, Sandra Del Pilar Tacha Turriago, Mercedes Arenas, Luz Marina Arteaga Henao, Nelsi Anail Cordero, Flor Elvira Sarmiento Silva, Ramiro Chaparro Cárdenas, Elvira Beltrán de Salgado, Carolina Vásquez Cruz, Mery González, Elvidina Velandia Naranjo, Luz Derli Toro Mahecha, Mireya Córdoba Pérez, Johan Camilo Gómez Córdoba, Martha Tello Briceño, Flor Ángela Briceño, Ingrid Maryuri Parales, Yolley Patricia Cardozo Castillo, Edelmira Sáenz Pinzón, Doris Sunilda Castro Montenegro, Pastora Montenegro González, Ana Rovira Gaitán Chipiaje, Belarmina Rivas, Luz Welmina González Rivas, Yidy Yasmina Rivas, Carmen Amelia Cisneros, Yuleinis Hoyos Martínez, Fulvia Manfara Yepes, Rosalba Unda, Gladys Rosalba Castillo, Yeini Alejandra Cardozo Castillo, Adelaida Cardozo Castillo, Luz Dary García Unda, Angélica Rocío Coba Tumay, Ana Bertilde Tumay, Luz Marina Bonilla Ponare, Nadia Córdoba Pérez, María Eugenia Parales, Bayron García Unda, Luifer Mario González Rivas, José Antonio García Romero, Esgar Ramírez Velásquez, Argemiro Torres Pérez, Alfonso Guabave, Luis Eduardo Cardoso Castillo, Orlando Ramón Cardozo Castillo, José Eliecer García Romero, Freddi Duván García Unda, Luis Carlos García Silva, Roberto Coba Pidiache, Ferdinando Tejada Bolívar, Gabriel Gutiérrez Rodríguez, Damaso Cedeño Estrada, Rafael Riveros Rodríguez, Wilson Riveros Inocencio, Omar Elkin Salgado Beltrán, Evelio Conde, Aníbal Riveros, José Rodrigo Pulido, Nelson Salgado, Melesio Gaitán, Nicolás Vanegas Rodríguez, Lázaro González Caicedo, (fe de erratas: el nombre ubicado en la casilla No. 65 no es legible), Luis Eduardo Cisneros Infante, Luis Hermes Rojas Malpica, Manuel Isaac Cujar Ávila, Rigoberto Castro Montenegro, Alfonso Guabave, Alfonso Unda, Emiliano Beltrán Sabogal y Miguel Briceño.

Departamento del Meta, el Ministerio de Defensa Nacional (Policía Nacional y Ejército Nacional), la Alcaldía del Municipio de Puerto Gaitán (Meta), y la Unidad Nacional de Protección –UNP–, en defensa de sus derechos fundamentales a la vida digna, mínimo vital, acceso a la administración de justicia, debido proceso, igualdad, vivienda digna, trabajo, paz, y *"a la tierra para los trabajadores agrarios y de la población campesina que [se] encuen[tra] en inminente riesgo de desplazamiento"*;[2] los cuales estiman vulnerados por (i) no adjudicarles los predios baldíos que, según afirman, han venido ocupando desde hace más de 40 años; y (ii) no garantizarles condiciones de seguridad que respondan adecuadamente a las circunstancias de violencia, de las que han sido víctimas.

Con el fin de desarrollar de forma precisa los antecedentes, a continuación la Sala presentará los hechos en los que se sustenta la acción de tutela y las decisiones de instancia objeto de revisión.

1. Hechos

1.1. Los accionantes manifiestan pertenecer a la comunidad campesina de "El Porvenir" —inspección del municipio de Puerto Gaitán (Departamento del Meta) y población porteña del Río Meta—, desde hace más de 45 años. Indican que en el año 1970, el señor Víctor Machado —empresario asentado en la zona— reclamó y adquirió la propiedad de *"El Porvenir"*,[3] pero en 1979 y tras su fallecimiento, la viuda del titular del predio vendió una extensión de veintisiete mil (27.000) hectáreas al señor Víctor Carranza Niño (F), a quien los actores identifican como *"comerciante de esmeraldas"*.

1.2. Exponen los demandantes que los campesinos ocupantes de *"El Porvenir"* nunca tuvieron conocimiento del título adquirido por el señor Machado, por lo que *"utilizaron colectivamente la tierra"* hasta el momento en que ésta pasó a manos del señor Carranza Niño (F), y empezaron a ser víctimas de diversos actos de violencia por parte de *"grupos paramilitares"*, al punto de resultar asesinados 10 pobladores en el año 1987, además de procesos de desplazamiento forzado.

1.3. Según los actores, el 15 de enero de 1992 el ahora extinto Instituto Colombiano de la Reforma Agraria —Incora— adjudicó a 27 personas los títulos de propiedad respecto de las 27.000 hectáreas que hasta entonces estaban a nombre del señor Carranza (F), pese a que, de conformidad con lo narrado por los accionantes, los beneficiarios de la adjudicación no tenían relación alguna con los predios, pues nunca habían sido miembros de la comunidad *"El Porvenir"*; aunado a ello, con posterioridad estos adjudicatarios decidieron englobar los 27 terrenos en 5 grandes inmuebles (conocidos como las haciendas *"Mi Llanura"*, *"El Pedregal"*, *"El Rincón"*, *"Campo Hermoso"*, y *"Las Corocoras"*). No obstante, manifiestan los

[2] Folio 8 del cuaderno principal.
[3] No precisan de qué modo adquirió el señor Machado la titularidad del inmueble.

peticionarios que el dominio real de los bienes ha estado en cabeza de una empresa familiar del señor Víctor Carranza (F), conocida como *"Ganadería La Cristalina"*.

1.4. Narran los demandantes que en el año 2012, un miembro del Congreso de la República, junto con una organización de defensa de Derechos Humanos, solicitaron al Incoder la revocatoria de las adjudicaciones descritas y adelantadas por el Incora, poniendo de presente que las mismas habían sido irregulares. En tal virtud, el 30 julio de 2014 se profirió la Resolución No. 6423, en la que se dejaron sin efectos las 27 titulaciones que fueron calificadas como ilegales, y el Estado se constituyó en titular de los bienes en cuestión. Con ocasión de esos hechos, el 13 de junio de 2015 el representante legal de la empresa *"Ganadería La Cristalina"*, señor Holman Carranza, hizo entrega voluntaria de los predios al Subgerente de Tierras Rurales del Incoder y el 18 de abril del mismo año el Presidente de la República sobrevoló el lugar para hacer reconocimiento físico de estos terrenos, ahora reconstituidos en baldíos de la Nación.

1.5. Sin embargo, exponen los accionantes que transcurrido más de un año desde que se expidió la Resolución 6423 del 30 de julio de 2014, se efectuó su inscripción en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Puerto López (Meta) y se realizó el evento de entrega voluntaria por parte del señor Holman Carranza, no se ha adelantado ningún trámite para lograr la recuperación real del lugar, ni *"se han iniciado las gestiones para adjudicar las tierras del Porvenir a las familias que lleva[n] aproximadamente más de medio siglo en posesión y explotación del predio, junto con [sus] hijos e hijas"*.[4]

1.6. En ese sentido, indican que actualmente la empresa *"Ganadería La Cristalina"* sigue explotando económicamente el baldío y los representantes de la misma han seguido hostigando, de forma permanente, a los campesinos que ocupan el territorio. A tales acciones atribuyen el desplazamiento forzado y el envío de amenazas al Presidente de la Junta de Acción Comunal (en adelante JAL), señor Miguel Briceño. Además, narran que algunos de los empleados de la mencionada empresa vienen alinderando parcelas al interior de El Porvenir, bajo el argumento de que sus empleadores les han transferido la propiedad de las mismas.

1.7. De acuerdo con lo manifestado por los accionantes, la situación de inseguridad los ha llevado a promover distintos mecanismos judiciales y administrativos tendientes a garantizar su tranquilidad, sin obtener respuesta efectiva:

(i) El 21 de abril de 2015, el señor Miguel Briceño –presidente de la JAL de la inspección de El Porvenir– y otros pobladores solicitaron al comandante de

[4] Folio 4 del cuaderno principal.

la Regional de Policía No. 7 ejercer acción policiva con el fin de proteger los bienes de que trata la Resolución No. 6453 de 2013 del Incoder y adoptar medidas urgentes de seguridad para evitar atentados contra la vida e integridad de los campesinos ocupantes de los predios baldíos en mención.

(ii) El 8 de mayo de 2015 se desarrolló una reunión con el entonces Subcomandante de la Policía del Meta (Coronel Mauricio Báez) y dos oficiales más, en la que se reiteró la solicitud de intervención policial y acompañamiento a las familias ocupantes de El Porvenir. Además, se presentó una petición cuyo objeto para la realización de un consejo de seguridad y la conformación de un comité de verificación dentro del predio. Al respecto, indican que el coronel Báez les manifestó que iba a tramitar la solicitud y que, para el desarrollo del consejo de seguridad, se comprometía a garantizar la seguridad del señor Miguel Briceño (Presidente de la JAL).

(iii) Señalan que también le pidieron a la Gobernación del Meta convocar a un consejo extraordinario de seguridad, con el fin de dar a conocer y estudiar la situación de riesgo que atraviesa la comunidad de El Porvenir; adicionalmente, pidieron a la Gobernación que requiriera a las autoridades del orden local y nacional acerca de la conformación de una comisión de verificación cuyo objeto fuese el mapeo de la seguridad de la zona y la identificación de la situación de derechos humanos dentro de la misma, para la ulterior adopción de medidas de protección en favor de los pobladores.

(iv) Exponen que el 22 de mayo de 2015 se llevó a cabo un consejo de seguridad en el casco urbano del municipio de Puerto Gaitán (Meta), sin contar con la presencia de quienes habían solicitado su convocatoria, debido a que, en primer lugar, les fue notificada la celebración del este evento únicamente con 10 horas de antelación y, en segundo lugar, no se otorgaron las medidas de seguridad o acompañamiento necesarias para garantizar la integridad de los campesinos que debían trasladarse desde la zona rural de El Porvenir hasta el lugar de la reunión.

(v) En el referido consejo de seguridad se realizaría una visita a El Porvenir, el 2 de junio de 2015, con el fin de verificar las denuncias, pero –señalan– fue cancelada por la falta de disponibilidad de un helicóptero que transportara a las autoridades hasta el lugar.

(vi) Dado que los demandantes habían solicitado insistentemente al Incoder adelantar la aprehensión del inmueble y posterior adjudicación,[5] sin obtener

[5] En los folios 300 a 311 del cuaderno de revisión obra copia de una solicitud suscrita por alrededor de 100 personas, el 23 de abril de 2015, quienes solicitan directamente al Incoder: *"Se inicien los trámites de ley correspondientes a la adjudicación de los predios que componen "El Porvenir" ubicado en Puerto Gaitán, meta, a las familias campesinas que componen la Junta de Acción Comunal de El Porvenir, lista que se adjunta a esta petición"*. Así mismo, en los folios 312 a 343 del cuaderno de revisión obra una nueva solicitud elevada por 153 ciudadanos adicionales, quienes piden: "*1. Se sirva reconocer los derechos que tenemos las familias del Porvenir quienes cumplimos y sobrepasamos el tiempo de permanencia u ocupación en el predio y el porcentaje de*

respuesta alguna, el 5 de junio de 2015 se llevó a cabo una audiencia pública ante el Congreso de la República, en donde se denunciaron *"las irregularidades, la falta de acción y la omisión del Incoder en la recuperación material del predio, dentro de la que el Sub Gerente de Tierras asumió unos compromisos con los campesinos, sin que se hayan cumplido"*;[6] también informaron sobre la situación de riesgo contra su vida, integridad física y desplazamiento forzado, teniendo en cuenta las diversas hostilidades que habían venido atravesando, por lo que solicitaron la adopción de medidas de protección.

Sin embargo, ante la ausencia de respuesta efectiva, el 7 de junio de 2015 *"se perpetró una masacre en el predio ubicado en la inspección de El Porvenir, y en ella fueron asesinadas tres personas".*[7]

(vii) Los actores aclaran que se han realizado cerca de 4 acciones urgentes, 3 denuncias penales, 2 solicitudes de realización de consejos de seguridad y verificación de riesgo, entre otras actuaciones, sin que ninguna institución atienda sus requerimientos.

1.8. En síntesis, los demandantes indican que (i) no se han adelantado las gestiones pertinentes para que el Estado recupere materialmente los predios baldíos de que de que trata la Resolución No. 6423 del 30 de julio de 2014, expedida por el Incoder, (ii) no se iniciado el trámite de adjudicación de los inmuebles a los ocupantes con derecho sobre los predios que conforman El Porvenir, y (iii) no se han adoptado medidas adecuadas para contrarrestar las

---

explotación establecido en la ley, y que hemos habitado este lugar desde hace más de 40 años, que hemos sido poseedoras antes de las declaratorias de nulidad decretadas y que en la actualidad podemos demostrar con un mejor derecho sobre la tierra (para este efecto, enviamos adjunta a la presente solicitud un listado de las familias que hacen parte de la Comunidad del porvenir, y a su vez pertenecen a la Junta de Acción Comunal con Personería Jurídica No. 916 del 15 de octubre de 1974).|| 2. Se sirva iniciar formalmente el proceso de adjudicación en favor nuestro de las parcelas que fueron englobadas en los predios El Rincón Las Corocoras, El Pedregal, Comare y Campo Hermoso".|| 3. Se sirva realizar la adjudicación del predio El Porvenir en cabeza de nuestras familias, de acuerdo a las pruebas aportadas y a la información geográfica suministrada en esta solicitud, en la cual se describen los linderos e información espacial del predio solicitado.|| 4. Acumule y tramite las solicitudes de adjudicación de baldíos (23 de abril y la presente) que fueron realizadas por núcleo familiar y que se adjuntan a la presente solicitud. Así mismo, se adjuntan al presente documento los formatos que fueron entregados a los funcionarios del INCODER el día miércoles 7 de octubre de 2015 que aquí se señalan". Así mismo, en folio 476 del cuaderno de revisión obra copia de una solicitud que a manera de urgencia la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello solicitan: "*Al señor Presidente Dr. Juan Manuel Santos, al señor Gerente del INCODER Dr. Ariel Borbón, Ministro de Agricultura Dr. Aurelio Iragorri a cumplir la Constitución Nacional y la Ley 160 y a hacer efectiva la recuperación de los predios de 28 mil hectáreas y a adjudicarlas a los campesinos pobres, víctimas de la violencia que han soportado la tragedia y están en el territorio desde hace más de 45 años*"; dicha solicitud fue allegada directamente al INCODER el 27 de abril de 2015, y de ello obra prueba en el folio 428 del cuaderno de revisión. Asimismo, en el folio 125 obra copia de la respuesta dada por el Incoder al requerimiento realizado en sede de revisión, en la que manifestó que tras la entrega por parte del señor Holman Carranza, han recibido 421 solicitudes de adjudicación, las cuales se encuentran "en trámite".

[6] Folio 4 del cuaderno principal No. 1.

[7] Folio 5 del cuaderno principal No. 1.

hostilidades en su contra y los distintos riesgos denunciados ante diversas autoridades. Ello implica una vulneración de sus derechos fundamentales a la vida digna, mínimo vital, acceso a la administración de justicia, debido proceso, igualdad, vivienda digna, trabajo, paz y acceso a la tierra de los campesinos, lo que motiva la presentación de la acción de tutela objeto de estudio.

2. Respuesta de las entidades accionadas y de los vinculados en el trámite de las instancias

2.1. De los accionados

2.1.1. Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –Incoder–

Mediante comunicación del 18 de septiembre de 2015, el Coordinador de Representación Judicial de la Oficina de Asesoría Jurídica de la entidad dio respuesta a la acción de tutela y solicitó declarar la improcedencia de la misma, con base en las siguientes razones:

(i) En relación con la situación de inseguridad mencionada por los actores, afirma que el Incoder no tiene funciones de mantenimiento, preservación y restablecimiento del orden público, por lo que no le es atribuible responsabilidad alguna por hechos de desplazamiento forzado o violencia dentro del predio o los predios de El Porvenir.

(ii) En cuanto a los inmuebles en torno a los cuales gira la controversia planteada en la tutela, de conformidad con informe suministrado por la Subgerencia de Tierras Rurales del Instituto, se pudo establecer que:

a) Se inició proceso de revocatoria directa de 27 resoluciones de adjudicación de un número igual de predios ubicados en la vereda El Porvenir, en el Municipio de Puerto Gaitán. El objeto de este procedimiento administrativo era el de *"determinar si al momento de la adjudicación y durante su trámite correspondiente se cumplieron las disposiciones legales aplicables a la adjudicación de baldíos. Es decir, se debía decidir si el trámite y la adjudicación eran legales o no"*.[8]

b) Con posterioridad, los 27 predios fueron englobados por los adjudicatarios en 5 inmuebles, los cuales fueron vendidos así:[9]

Predio	Folio (FMI)	Cédula catastral	Área (Ha)	Escritura y fecha de venta	Notaría	Propietario adquirente del predio englobado

[8] Folio 275 del cuaderno principal No. 2.
[9] Folio 277 del cuaderno principal No. 2.

“Mi Llanura”	234-15741	00-01-0001-0756-000	4.641Ha 500m2	2979 del 28-12-07	4º de Villavicencio	Pedro Libardo Ortegón Ortegón
“El Rincón”	234-15742	00-01-0001-0742-000	4.730Ha 3.000m2	2980 del 28-12-07	4º de Villavicencio	Hugo Armando Bustos Bernal
“Las Corocoras”	234-15743	00-01-0001-0745-000	5.681Ha 2.105m2	2981 del 28-12-07	4º de Villavicencio	Jaime Rojas García
“Campo Hermoso”	234-15744	00-01-0001-0087-000	5.969Ha 5.000m2	2982 del 28-12-07	4º de Villavicencio	Cristóbal Ramos Sacristán
“Pedregal”	234-15745	00-001-0001-0052-000	4.918Ha 3.000m2	2983 del 28-12-07	4º de Villavicencio	Daniel Gómez Cañón

c) A través de Resolución No. 6423 del 30 de julio de 2014, la Subgerencia de Tierras Rurales del Incoder decidió revocar directamente las adjudicaciones de los 27 predios que fueron englobados, como se describió con precedencia. De acuerdo con este acto administrativo:

> *“(…) la titulación efectuada no recayó en destinatarios legítimos de la reforma agraria, en la medida en que se probó que en ningún caso de los analizados en la presente providencia, los favorecidos con el título ocupaban y explotaban los predios adjudicados en la forma exigida por la normatividad vigente al momento de la adjudicación. Por su parte, en caso de que ello hubiera sido así, tampoco se acreditó la existencia de pastos mejorados, única forma de obtener la adjudicación cuando la ocupación se hiciera con ganado. Así mismo, como las adjudicaciones se hicieron conforme a lo dispuesto en el inciso 6º y los numerales 1 y 2 del Artículo 30 de la Ley 135 de 1961, no se cumplió con dicha norma, pues no se allegó la necesaria prueba del mantenimiento de los ganados por medio de las declaraciones de renta y patrimonio correspondientes al periodo para el cual se invoca la ocupación”.*[10]

d) Esta resolución quedó ejecutoriada luego de surtirse su notificación personal al Ministerio Público, el 28 de agosto de 2014, y por aviso a los interesados los días 4, 5, 6, 8, 12, 15 y 28 del mismo mes.

[10] Folio 278 del cuaderno principal No. 2.

Adicionalmente, el acto administrativo fue inscrito en la Oficina de Instrumentos Públicos del municipio de Puerto López (Meta), con constancia del 9 de marzo de 2015.

e) Luego de corroborarse que los predios declarados baldíos estaban siendo explotados económicamente por la empresa *"Ganadería La Cristalina"*, se solicitó al representante legal de la misma realizar la entrega voluntaria de los 27 inmuebles. Fue así como el Subgerente de Tierras Rurales del Incoder, mediante acta del 13 de junio de 2015, recibió del señor Holman Carranza los bienes en referencia.

f) Luego de que la Nación formalmente recuperara el dominio de los predios, circunstancia que se dejó consignada en el acta ya citada, *"se evidencia la usurpación de terceros invasores. Razón por la cual el Incoder, a través de la Oficina Asesora Jurídica, interpuso querella ante la Inspección de Policía de Puerto Gaitán contra los invasores indeterminados del predio denominado El Porvenir*";[11] pues para el Instituto esta situación es constitutiva de actos perturbadores de la posesión, con lo cual se impide la ejecución de políticas agropecuarias y de desarrollo rural y se frustra la función social de la propiedad.

g) El 10 de septiembre de 2015, el Subgerente de Tierras Rurales se reunió en las instalaciones del Incoder con las comunidades de El Porvenir y la vereda Matarratón. En esa oportunidad, los líderes de las JAL denunciaron invasiones en los predios, así como riesgos en su seguridad y un eventual desplazamiento forzado causado por el señor Elbert Abril Santamaría –presidente de la Asociación de Desplazados y Campesinos Productores Agropecuarios de la Altillanura (ASDEPAGRAL)–, quien desde el 20 de agosto de 2015 solicitó a la entidad la adjudicación de estos terrenos. El Subgerente de Tierras Rurales comunicó a las comunidades que la petición elevada por el señor Abril Santamaría no le daba ningún derecho de ocupación, invasión, negociación con terceros o usufructo de El Porvenir, por tratarse de un predio baldío.

(iii) El Incoder argumenta que la acción de tutela no puede constituirse en un medio para pretermitir los procedimientos legales establecidos para obtener la adjudicación de un bien baldío, pues el Incoder debe *"verificar previamente que el solicitante cumpla la condición de SER SUJETO DE REFORMA AGRARIA, así como la explotación del predio por un periodo no inferior a CINCO (5) AÑOS, requisitos que los solicitantes no pueden acreditar si según su propio dicho, no ocupan materialmente el predio y a sabiendas que la adjudicación anterior fue revocada en el mes de julio de 2014 a quienes aparecían como titulares de los predios, es decir, tan solo hace poco más de un (1) año" (sic).*[12] Además, el recurrente pone de presente que los

[11] Folio 280 del cuaderno principal No. 2.
[12] Folio 281 del cuaderno principal No. 2.

accionantes *"ni siquiera"* han elevado solicitud de adjudicación de los bienes objeto de controversia.

2.1.2. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

A través de comunicación del 18 de septiembre de 2015, la cartera ministerial solicitó su desvinculación de la acción de tutela, argumentando falta de legitimación por pasiva, debido a que los hechos objeto de estudio se relacionan directamente con actuaciones del Incoder, entidad que cuenta con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, y además de patrimonio independiente.

2.1.3. Gobernación del Departamento del Meta

En escrito del 29 de septiembre del 2015, el Secretario de Vivienda del Departamento del Meta solicitó declarar improcedente la acción de tutela, pues desde su perspectiva no existe un perjuicio irremediable que haga del mecanismo constitucional una alternativa judicial viable para resolver la petición de los accionantes.

2.1.4. Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

Mediante comunicación del 16 de septiembre de 2015, el Subcomandante del Departamento de Policía del Meta solicitó declarar improcedente la acción de amparo o, en su defecto, desvincular a la entidad por no existir vulneración alguna de los derechos fundamentales invocados por los accionantes. Al respecto, indica que:

(i) El Departamento de Policía del Meta ha garantizado la seguridad del señor Miguel Briceño, pues cada vez que él ha solicitado acompañamientos, la institución ha accedido, pese a que *"a veces han sido extremados sin necesidad (sic), más aún cuando su nivel de riesgo (…) es ordinario, de acuerdo al análisis realizado por la Unidad Nacional de Protección"* [13]; en igual sentido, cuando se ha tenido que desplazar hasta El Porvenir siempre se le ha garantizado su seguridad.

(ii) Respecto del centro poblado de El Porvenir, se ha desplegado personal policial de los Escuadrones Móviles de Carabineros, del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), de la Policía de Vigilancia del poblado de San Pedro de Arimena (Meta), de la Policía de Infancia y Adolescencia de la Seccional de Protección y Servicios Especiales, así como del grupo de acompañamiento que accede a las solicitudes elevadas por el señor Miguel Briceño.

---

[13] Folio 204 del cuaderno principal No. 1.

(iii) El Departamento de Policía del Meta, por conducto del Grupo de Prevención y Convivencia Ciudadana, ha adelantado campañas en el sector, para prevenir situaciones de inseguridad. Además, se ha mantenido una presencia activa en todas las zonas rurales del Meta y siempre se han atendido los llamados que la ciudadanía o el señor Briceño han realizado.

2.1.5. Alcaldía Municipal de Puerto Gaitán (Meta)

Por medio de escrito de 17 de septiembre de 2015, el alcalde del Municipio de Puerto Gaitán solicitó negar el amparo pretendido por los accionantes, por considerar que no es competencia de la entidad territorial realizar gestiones para la recuperación material del predio baldío objeto de discusión. Como sustento de esa afirmación, expuso que el cumplimiento de la Resolución 6423 del 2014 es competencia del Incoder; indicó que si bien los gobernadores y alcaldes tienen la función local de mantener el orden público, lo cierto es que *"de acuerdo con la Constitución y la Ley en Colombia, tienen como comandante supremo al Presidente de la República, de maniera inmediata y preferente"*;[14] y, por último, señaló que la tutela no cumple el requisito de inmediatez, pues en la demanda *"no se determinó la fecha de ocurrencia de los hechos"*.[15]

2.1.6. Unidad Nacional de Protección (UNP)

La jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la UNP dio respuesta a la acción de tutela mediante escrito del 18 de septiembre de 2015, en el que planteó que, en primer lugar, respecto de la seguridad del señor Miguel Briceño, el 19 de septiembre de 2014 se identificó su riesgo como *"extraordinario"*, lo cual fue reiterado el 4 de noviembre del mismo año por parte del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas; en tal virtud, a través de Resolución del 9 de diciembre de 2014 se decidió implementar *"apoyo de transporte en cuantía de dos (2) SMMLV"*, y asignar *"un (1) chaleco antibalas y un (1) medio de comunicación"*.[16] Esta valoración fue ratificada el 25 de mayo de 2015.

En segundo lugar, expone que, en lo que toca a los demás accionantes, no existen registros de que hayan dado a conocer algún riesgo a la Unidad, por lo que estima necesario que se realicen las respectivas solicitudes de protección, para agotar el estudio correspondiente.

Con base en lo expuesto, solicitó declarar improcedente el amparo solicitado, pues la valoración de riesgo es un procedimiento estrictamente técnico, que no puede ser suplido con mecanismos judiciales como la acción de tutela.

2.2. De los vinculados

---

[14] Folio 240 del cuaderno principal No. 2.
[15] Folio 242 del cuaderno principal No. 2.
[16] Folio 247 del cuaderno principal No. 2.

En un primer momento, a través de auto del 9 de septiembre de 2015, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, al conocer en primera instancia de la acción de tutela objeto de revisión, decidió admitir el mecanismo constitucional y vincular a la Fiscalía General de la Nación, luego de observar que sus actuaciones podrían verse afectadas con el trámite judicial.
Con posterioridad, mediante auto del 22 de septiembre de 2015, el *a quo* decidió declarar la nulidad de lo actuado en el asunto desde el auto admisorio de la demanda, debido a que no se realizó la vinculación de *"todas las autoridades que estarían involucradas en los hechos presuntamente vulneradores de los derechos alegados por los actores"*.[17] En consecuencia, resolvió vincular a la Comandancia General de las Fuerzas Militares, la Comandancia de la Regional No. 7 de la Policía Nacional, la Procuraduría General de la Nación, la Procuraduría 14 Judicial II Ambiental y Agraria del Mera, la Presidencia de la República, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, la Inspección de Policía de Puerto Gaitán (Meta), el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo del Meta, y al señor Holman Carranza, en su calidad de representante legal de la empresa *"Ganadería la Cristalina"*.

A continuación se sintetizan las respuestas dadas por los vinculados respecto de la acción de tutela en referencia.

2.2.1. Fiscalía General de la Nación

El 17 de septiembre de 2015, la Directora Jurídica de la Fiscalía General de la Nación manifestó que la entidad no está legitimada por pasiva, pues el cumplimiento de la Resolución No. 6423 de 2014 es competencia exclusiva del el Incoder. No obstante, al considerar que en la solicitud de amparo se *"aduce la comisión de algunos delitos"*, señaló que remitirá copia del expediente a la Dirección Seccional de Fiscalía del Meta, con el fin de que se adelante la investigación respectiva.

2.2.2. Regional No. 7 de la Policía Nacional

Por medio de escrito del 29 de septiembre de 2015, el comandante de la Región de Policía No. 7 allegó al Despacho del *a quo* copia de una comunicación suscrita por el Comandante del Departamento de Policía del Meta, en la que se indica que la institución siempre ha atendido las solicitudes de acompañamiento del señor Miguel Briceño. Por lo anterior, solicita negar el amparo solicitado, pues considera que no existe vulneración alguna de los derechos fundamentales de los actores.

2.2.3. Procuraduría Regional del Meta

[17] Folios 345 y siguientes del cuaderno principal No. 2.

En escrito del 1 de octubre de 2015, la Procuradora Regional del Meta solicitó declarar improcedente la acción de tutela, por considerar que la entidad no tiene legitimación en la causa por pasiva, lo cual se evidencia en que los actores nunca hacer referencia a una vulneración de sus derechos fundamentales de la cual ésta haya sido la responsable.

2.2.4. Departamento Administrativo de la Presidencia de la República

El 2 de octubre de 2015, la apoderada de la Presidencia de la República indicó que la entidad carece de legitimación en la causa por pasiva, pues esta nunca ha desarrollado actividades relacionadas con las materias objeto de discusión en la acción de tutela en estudio; no tiene competencia para intervenir en los procedimientos administrativos mencionados, los cuales estuvieron a cargo de las instituciones que cuentan con facultades para ello. Con base en ello, solicitó la desvinculación del trámite y, subsidiariamente, que se niegue el amparo, al no existir vulneración constitucional alguna por parte de su poderdante.

2.2.5. Comando General de las Fuerzas Militares

Mediante comunicación del 2 de octubre de 2015, solicitó su desvinculación de la acción de tutela, tras indicar que la contestación de la misma debe ser tramitada a través de la Dirección de Negocios Generales de la Jefatura Jurídica Integral, pues el Comando General de las Fuerzas Militares no tiene competencia para dar respuesta. Sin embargo, aclaró que hizo la remisión a la dependencia respectiva.

2.2.6. Defensoría del Pueblo, Regional Meta

El 5 de octubre de 2015, el Defensor Regional del Meta expuso que respecto del caso concreto la Defensoría inició un proceso de acompañamiento a las familias campesinas que están asentados en El Porvenir y la vereda Matarratón, en virtud de lo cual se han desarrollado las siguientes actividades:

(i) Se realizaron requerimientos al Incoder, a la Corporación para el Manejo Ambiental de la Macarena –Cormacarena–, a la UNP, a la Gobernación del Meta, a la Personería Municipal de Puerto Gaitán, a la Alcaldía e Inspección de Policía de Puerto Gaitán, y a la Policía Departamental del Meta, solicitándoles información sobre las actuaciones llevadas a cabo para responder a las denuncias de los campesinos de la región y se les instó a adoptar las medidas que conduzcan a la protección de la integridad de los pobladores de El Porvenir.

(ii) El 10 de septiembre de 2015, junto con la Defensoría Delegada para Asuntos Agrarios y Tierras, se convocó a una reunión interinstitucional con los representantes de las familias denunciantes, con el fin de observar el

progreso en la solución de la problemática. Al respecto, indica el recurrente que en dicho encuentro el Incoder se comprometió, en primer lugar, a visitar a las comunidades con el fin de verificar las condiciones en que se encuentra el predio objeto de controversia; en segundo lugar, a atender con celeridad todas las solicitudes de adjudicación realizadas por los campesinos ocupantes de los inmuebles; y en tercer lugar, a realizar las gestiones necesarias para garantizar la protección individual y colectiva de los predios en controversia.

En ese momento, la Subdirección de Tierras Rurales del Incoder no brindó ninguna información sobre *"la realización de una diligencia previa o simultánea a la suscripción del acta de entrega voluntaria, tendiente a verificar la restitución efectiva de los predios que ocupaba y exploraba directamente la empresa GANADERÍA LA CRISTALINA LTDA"*[18], no dio a conocer las actuaciones adelantadas para sustentar el acta de entrega voluntaria por parte de la empresa en mención, ni sobre las condiciones materiales en las que se dio la devolución del mismo.

(iii) De igual manera, señala que el Incoder no se ha pronunciado sobre *"las solicitudes de adjudicación de baldíos presentadas por las familias campesinas que por más de cincuenta años se han asentado en la Inspección del Porvenir y en la vereda Matarratón".*[19]

Planteadas así las actuaciones desplegadas por la institución, el Defensor solicitó al *a quo* abstenerse de atribuirle cualquier responsabilidad derivada de los hechos de la tutela, pues desde su perspectiva la entidad no ha incurrido en acción u omisión vulneradora de los derechos fundamentales de los accionantes.

2.2.7. Inspección de Policía de Puerto Gaitán (Meta)

En su escrito, el Inspector Municipal de Policía indicó que en relación con los hechos planteados por los accionantes, el 24 de junio de 2015 el señor Miguel Briceño, en su calidad de presidente de la JAL de la vereda El Porvenir, elevó querella policiva por perturbación a la posesión que ostenta la comunidad campesina sobre los predios en controversia. Al respecto, la institución encontró que *"de conformidad con lo manifestado en el libelo ya había caducado la acción civil de policía para impetrar el escrito en mención"*,[20] y por ello se decidió rechazar de plano la querella impetrada, frente a lo cual los accionantes no efectuaron pronunciamiento alguno.

Adicionalmente, el 30 de septiembre de 2015, los señores Miguel Briceño y Remberto Cano presentaron subsanación de las querellas radicadas

[18] Folio 301 del cuaderno principal No. 3.
[19] Ibídem.
[20] Folio 298 del cuaderno principal No. 3.

previamente, *"las cuales van a ser admitidas y fijadas las fechas para las diligencias de inspección ocular a que ella (sic) lugar"*.[21]

En consecuencia, solicitó al juez constitucional abstenerse de declarar que la Inspección de Policía vulneró algún derecho fundamental de los actores.

2.2.8. Procuraduría 14 Judicial II Ambiental y Agraria del Meta, Guaviare y Guainía

El 5 de octubre de 2014, la representante de la entidad dio respuesta a la acción de tutela, en la que indicó que:

(i) La Procuradora Judicial Agraria y Ambiental de Bogotá informó que el 13 de junio de 2015 se conoció un acta de entrega de los predios recuperados por el Estado en la vereda El Porvenir, pero no se hizo un reconocimiento físico de los mismos.

(ii) Por conducto de la Subgerencia de Tierras Rurales del Incoder, el 19 de mayo de 2015, la Procuraduría 14 en alusión conoció de una serie de denuncias elevadas por parte del senador Iván Cepeda Castro, con las que se pone en conocimiento del Instituto que *"la Familia Carranza está promoviendo la invasión de tierras por parte de personas que no son de la comunidad del Porvenir y solicita (…) la recuperación material de los 27 predios"*.[22]

(iii) El 28 de mayo de 2015, la entidad vinculada comunicó al alcalde municipal de Puerto Gaitán (Meta) y al comandante departamental de la Policía del Meta las denuncias dadas a conocer por el congresista Cepeda Castro, y les solicitó: *"coordinar con la policía local o departamental y de los funcionarios de la alcaldía realizar visita y vigilancia a El Porvenir y que en el evento de encontrar personas realizando actos de invasión recoger las pruebas para iniciar las querellas policivas y establecer un statu quo sobre el predio"* (Se mantiene la redacción del original).[23]

(iv) Luego de recibir un informe de patrullaje por parte de la Policía Departamental del Meta, en la zona de El Porvenir, la Procuraduría 14 Judicial II Ambiental y Agraria del Meta, Guaviare y Guainía concluye respecto de la situación expuesta en la acción de tutela que:

> *"(…) al parecer la invasión de los terrenos del predio El Porvenir siguieron y a pesar del acta de recibido del predio por parte del Incoder (acta que no se envió al Procurador Judicial Agrario y Ambiental en Bogotá ni a este despacho) el predio se encuentra en*

---

[21] Ibídem.
[22] Folio 305 del cuaderno principal No. 3.
[23] Folio 306 del cuaderno principal No. 3.

manos de personas extrañas a las personas que dicen estar desde hace mucho tiempo en el predio".[24]

(v) Los accionantes pueden solicitar la propiedad de los predios en referencia ante la Unidad de Restitución de Tierras, para que se inicie el procedimiento administrativo respectivo y en el seno del mismo se reúnan todas las pruebas de despojo, con el fin de que sea un juez de restitución de tierras quien ordene al Incoder adjudicar los terrenos que sean identificadas dentro del trámite judicial.

(vi) Si bien la vigilancia de un predio baldío corresponde al Estado, a través de la Policía Nacional, en el presente caso se encuentra probado que no sólo los particulares han contrariado el ordenamiento jurídico, sino también instituciones del Estado como el extinto Incora, por lo que es el Incoder el llamado a recibir realmente los predios por parte de la empresa *"Ganadería La Cristalina"*, además de adelantar un censo de las personas que se encuentran en el interior del inmueble, determinar el tiempo de su ocupación y establecer si las mismas han sido víctimas de desplazamiento forzado, lo cual debería contribuir a la formalización de los terrenos, en coordinación con la Unidad de Restitución de Tierras.

El representante del Ministerio Público considera que *"omitir por parte del Incoder un acta completa de quienes están en el predio El Porvenir y omitir su vigilancia después de terminar un proceso agrario que ha durado más de tres años y dejarlo al arbitrio quizás de las mismas personas a quienes se recuperó el predio, sería una burla al mismo Estado y a las personas que tendrían derecho a su restitución" (sic).*[25]

3. Decisiones de tutela objeto de revisión

3.1. Sentencia de primera instancia

La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, mediante fallo del 8 de octubre de 2015, decidió *"declarar improcedente"* la acción de tutela objeto de estudio, por considerar que, en lo que tiene que ver con la pretensión de adjudicación que anima a los actores, éstos cuentan al menos con dos mecanismos de defensa en el ordenamiento jurídico, los cuales hacen que no se cumpla con el requisito de subsidiariedad de la tutela: (i) el procedimiento administrativo de adjudicación de baldíos contenido en la Ley 160 de 1994 y, (ii) en caso de reunirse las condiciones correspondientes, la posibilidad de acudir a la Unidad de Restitución de Tierras e iniciar el respectivo proceso ante un Juzgado Especializado en Restitución de Tierras.

Además, decidió no amparar el derecho fundamental a la vida e integridad física del señor Miguel Briceño, por encontrar que la UNP había acreditado

[24] Folio 307 del cuaderno principal No. 3.
[25] Folio 308 del cuaderno principal No. 3.

que el ciudadano goza de medidas de protección, brindadas por dicha institución.

Sin embargo, para no desconocer la gestión activa de los peticionarios, respecto de las circunstancias fácticas puestas de presente en la tutela, así como "la difícil situación que puedan estar presentando los accionantes, debido al presunto flagelo del que son víctimas y por ende, bajo un manto garante de derechos fundamentales",[26] adoptó las siguientes medidas:

> "***TERCERO:*** *REQUERIR al PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN, a fin de que dentro de la órbita de sus competencias, proceda a realizar sus buenos oficios para acompañar a los demandantes en la procura de sus pretensiones de adjudicación de las tierras, así como de ser el caso, iniciar las investigaciones disciplinarios (sic) que considere que haya lugar por la omisión denunciada.*
>
> ***CUARTO:*** *REQUERIR al COMANDANTE DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA DEL META –DEMET- y al DIRECTOR DE LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN a fin de que impartan instrucciones a quien corresponda, para que continúen prestando una atención diligente a los llamados de los accionantes, habitantes del sector El Porvenir, en jurisdicción del municipio de puerto (sic) Gaitán.*
>
> ***QUINTO:*** *REQUERIR al GOBERNADOR DEL META, al ALCALDE MUNICIPAL DE PUERTO GAITÁN, al MINISTERIO DE AGRICULTURA y al GERENTE GENERAL del INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL –Incoder-, para que dentro del ámbito de sus competencias y de ser necesario por medio de sus dependencias, secretarías y entidades adscritas, procedan a suministrar información suficiente y pertinente a los accionantes sobre los programas que coordinan y ofertan, con el fin de que puedan participar en la asistencia o asistencias que requieran en los ramos de educación, salud, vivienda, estabilización socioeconómica y sostenibilidad*"[27].

3.2. Impugnación

A través de escrito del 21 de octubre de 2015, los accionantes impugnaron el fallo de primera instancia, señalando que:

(i) El fallador de primer grado direccionó el estudio de la acción de tutela únicamente a la solicitud de adjudicación y situación de seguridad del señor Miguel Briceño, desconociendo que en realidad el recurso de amparo plantea

[26] Folio 351 del cuaderno principal No. 3
[27] Folios 353 y 354 del cuaderno principal No. 3.

diversas problemáticas, tales como: *(i')* la protección de las mujeres campesinas que se encuentran en riesgo de desplazamiento junto con sus respectivos familiares, lo cual exige garantizar su supervivencia, salubridad pública y saneamiento ambiental, vivienda digna y trabajo; *(ii')* el desconocimiento por parte del Estado del deber de respetar y garantizar efectivamente los derechos de los actores *"no solo como ocupantes de un predio, sino como campesinos colombianos"*;[28] y *(iii')* el respeto por el derecho a la posesión digna de quienes han ocupado históricamente un inmueble, pues a los actores se les ha impedido el suministro de servicios públicos (agua potable y electricidad) y la generación de vías de acceso al territorio, lo cual ha significado una situación de confinamiento por parte de quienes se han venido apropiando de los predios.

(ii) La acción de tutela se torna procedente en el caso particular, pues se trata de una vulneración permanente y actual de los derechos fundamentales de los peticionarios. De ahí que sea necesario adoptar medidas relacionadas con el acceso a la tierra, vivienda digna, salud, educación para los hijos de los campesinos, vías de comunicación y prestación de servicios públicos.

Por lo anterior, solicitaron al *ad quem* amparar los derechos invocados en la acción de tutela y, como consecuencia de ello, emitir órdenes encaminadas a superar la situación de vulnerabilidad en que se encuentran los accionantes.

3.3. Sentencia de segunda instancia

La Sala de Decisión de Tutelas No. 2 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, a través de sentencia del 26 de noviembre de 2015, resolvió en segunda instancia el mecanismo constitucional bajo análisis; decidió *"revocar parcialmente el fallo impugnado"* y amparar el derecho fundamental a la vida digna de los demandantes, luego de establecer que la acción de tutela estudiada integra una serie de hechos que constituyen una vulneración *"inminente y cierta"* de los derechos fundamentales de los actores, lo cual encuentra respaldo en lo manifestado por la Defensoría del Pueblo, al acreditarse que las familias asentadas en El Porvenir han venido atravesando circunstancias precarias de habitabilidad y no cuentan con acceso a servicios públicos.

Aunado a ello, determinó el *ad quem* que *"es claro que la situación en que se hallan los miembros de la comunidad actora desde hace 50 años, obedece a la problemática de tierras que impera en la zona, así como a la presencia de terceros ocupantes y actores del conflicto armado"* [29], a lo cual se suma el hecho de que varias de las familias que se encuentran en los predios han sido víctimas de desplazamiento forzado, lo que los hace sujetos de especial protección constitucional, por encontrarse en situación de vulnerabilidad manifiesta.

---

[28] Folio 398 del cuaderno principal No. 3.
[29] Folio 47 del cuaderno principal No. 4.

En virtud de lo anterior, la autoridad judicial de segunda instancia adoptó las siguientes medidas:

> "*2. **ORDENAR** al Ministerio de Defensa Nacional – Ejército y Policía Nacional, al Ministerio de Agricultura, al Instituto de Desarrollo Rural, al Municipio de Puerto Gaitán (Alcaldía, Personería, Inspección de Policía, Secretarías de Salud y Educación, etc.), a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo y al Departamento del Meta (Gobernación, Secretaría de Educación, Salud, etc.), que dentro de los quince días siguientes a la notificación de la presente providencia, conformen un comité interinstitucional de verificación y acompañamiento de la situación de derechos fundamentales de las familias campesinas y desplazadas que habitan la inspección del Porvenir, quienes deberán verificar e identificar la dimensión de la amenaza de sus prerrogativas superiores y, desde el ámbito de sus competencias legales y constitucionales, diseñar e implementar un programa de acción para superarla.*
>
> *Deberán, además, rendir informes periódicos al juez de primera instancia, incluyendo una caracterización inicial de la población, enfatizando en su número, ubicación, condiciones y necesidades.*
>
> *El comité permanecerá hasta tanto se superen la puesta en riesgo de las garantías constitucionales de la comunidad.*
>
> *3. **CONFIRMAR** en todo lo demás la decisión impugnada*."[30]

4. Actuaciones adelantadas y documentos allegados en sede de revisión

4.1. Decreto de pruebas

Mediante auto del 30 de marzo de 2016, se decretaron pruebas dentro del expediente de la referencia, así:

En primer lugar, se solicitó al Incoder:

> *a) Allegar copia íntegra del proceso de revocatoria directa adelantado respecto de los predios englobados y denominados "El Pedregal" (F.M.I. 234-15745), "Mi Llanura" (F.M.I. 234-15741), "Campo Hermoso" (F.M.I. 234-15744), "El Rincón" (F.M.I. 234-15742) y "Las Corocoras" (F.M.I. 234-15743), ubicados en la Vereda El Porvenir, en el Municipio de Puerto Gaitán, Departamento del Meta; y que dio lugar a […] la Resolución No.*

[30] Folio 52 del cuaderno principal No. 4.

6423 del 30 de julio de 2014, por parte del Incoder, en virtud de la cual estos predios pasaron a manos del Estado.

b) Informar si ha adelantado algún procedimiento administrativo de clarificación de baldíos respecto de los predios antes referidos, de conformidad con lo dispuesto en el Título 19 de la Parte 14 del Libro 2 del Decreto Reglamentario 1071 de 2015.[31] *En caso afirmativo, remitir a este Despacho copia íntegra del expediente.*

c) Teniendo en cuenta que en la respuesta dada a la acción de tutela objeto de revisión, el Incoder manifestó tener conocimiento de la existencia de terceros ocupantes de los predios bajo referencia, se le solicit[ó]:

(i) Informar si, con posterioridad a la expedición de la Resolución No. 6423 de 2014 antes mencionada y de conformidad con lo dispuesto en el Título 10 de la Parte 14 del Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, se han adelantado (parcial o totalmente) ***procedimientos administrativos de adjudicación de baldíos*** *frente los predios aquí aludidos, y si los accionantes han sido destinatarios de los mismos. En caso afirmativo, allegar a este Despacho copia íntegra de los expedientes respectivos y aclarar en qué estado se encuentra cada trámite.*

(ii) Informar si con posterioridad a la expedición de la Resolución No. 6423 de 2014 se ha adelantado (parcial o totalmente) algún ***procedimiento administrativo de recuperación de baldíos indebidamente ocupados****, en relación con los predios en mención, de conformidad con lo establecido en el Título 19 de la Parte 14 del Libro 2 del Decreto Reglamentario 1071 de 2015. En caso afirmativo, allegar copia íntegra de los expedientes respectivos y aclarar en qué estado se encuentra el trámite de los mismos.*

En segundo lugar, a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las víctimas se les ordenó informar si los accionantes se encontraban registrados como víctimas.

En tercer lugar, se pidió a la Unidad de Restitución de Tierras informar si los predios baldíos en alusión se encontraban incluidos en sus registros y si se han adelantado procesos de macro y/o microfocalización.

---

[31] *"Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural".*

En cuarto lugar, se solicitó al Instituto Geográfico Agustín Codazzi allegar el registro histórico catastral de los predios baldíos referenciados en el expediente.

En quinto lugar, se solicitó a la Superintendencia de Notariado y Registro informar sobre las actuaciones adelantadas por esta institución respecto de los terrenos de que trata la Resolución No. 6423 del 30 de julio de 2014, expedida por el Incoder.

En sexto lugar, se solicitó a los accionantes narrar detalladamente su relación histórica con los predios en mención.

Finalmente, se invitó a emitir concepto técnico sobre el proceso de la referencia al Centro de Investigación y Educación Popular, al Centro de Estudios en Derecho, Justicia y Sociedad, a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en Colombia, al Consejo Noruego para Refugiados en Colombia y a la Oficina Colombiana de la Organización Internacional para las Migraciones, preguntándoles puntualmente sobre la situación de los derechos humanos y el contexto social del lugar en donde se desenvuelven los hechos, además de si conocen reportes de desplazamiento forzado o despojo ilegal de tierras en la vereda El Porvenir (municipio de Puerto Gaitán – Meta).

4.2. Respuesta dada a los requerimientos contenidos en el Auto del 30 de marzo de 2016

4.2.1. Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder)

A través de escrito allegado el 8 de abril de 2016, la entidad remitió copia de la totalidad del proceso de revocatoria directa que culminó con la Resolución No. 6423 del 30 de julio de 2014. Sin embargo, no dio respuesta directa a las preguntas formuladas en el auto de pruebas, aunque describió la labor administrativa adelantada respecto del caso concreto, aspecto al que se hará referencia en el acápite considerativo No. 10 de esta sentencia.

4.2.2. Unidad de Restitución de Tierras

Mediante comunicación del 7 de abril de 2016, la Unidad informó que los predios baldíos de que trata la Resolución No. 6423 del 30 de julio de 2014 se encuentran en una zona objeto de microfocalización.

4.2.3. Instituto Geográfico Agustín Codazzi

El 19 de abril de 2016, este Instituto remitió en medio magnético la información catastral de los predios baldíos en referencia, con registro desde el año 2000.

4.2.4. Superintendencia de Notariado y Registro

El 8 de abril de 2016, la entidad remitió una relación de las actuaciones administrativas agotadas en relación con los folios de matrícula inmobiliaria de los predios aludidos en la Resolución No. 6423 del 30 de julio de 2014, expedida por el Incoder.

4.2.5. Los accionantes

A través de comunicación del 1º de abril de 2016, se allegó una larga narración en la que se expone el vínculo histórico de 48 accionantes con los predios baldíos en mención.

4.2.6. Centro de Investigación y Educación Popular – CINEP

Atendiendo a la invitación de emitir concepto, la organización remitió un extenso y detallado informe acerca de la situación de derechos humanos del municipio de Puerto Gaitán (Meta) y algunos elementos de contexto de la vereda de El Porvenir. Al respecto, se advierte que dada la pertinencia de la información suministrada, la misma se integrará en la parte considerativa de esta providencia.[32]

4.3. Intervenciones y conceptos

Durante el trámite de revisión, distintas organizaciones de carácter público y privado allegaron su concepto a la Corte Constitucional, las cuales se relacionan a continuación.

4.3.1. Corporación Jurídica Yira Castro

Mediante escrito del 15 de marzo de 2016, la señora Blanca Irene López Garzón, en calidad de miembro de la Organización Jurídica Yira Castro, rindió concepto sobre las condiciones en que se encuentran los pobladores campesinos de El Porvenir y la vereda Matarratón. En la parte considerativa de la presente sentencia, la Sala integrará los aportes brindados por esta organización.

Adicionalmente, el 18 de abril de 2016 allegó copia de la denuncia penal formulada ante la Fiscalía General de la Nación, por la presunta agresión sexual ejercida en contra de dos menores de la comunidad de El Porvenir, el 13 de abril del mismo año, por parte de “un grupo de hombres” que ingresaron a las instalaciones escolares en donde se encontraban las dos jóvenes.

4.3.2. El senador Iván Cepeda Castro y los representantes a la cámara Alberto Castilla Salazar y Alirio Uribe Muñoz

[32] Ver acápite No. 8.22.

El 17 de marzo de 2016, los congresistas Cepeda Castro, Castilla Salazar y Uribe Muñoz allegaron a esta Corporación un escrito en el que se pronunciaron sobre las actuaciones adelantadas dentro del Congreso de la República en relación con los predios baldíos ubicados en El Porvenir (Puerto Gaitán – Meta), y expusieron la forma como, en su concepto, se han dado históricamente *"las fases de incursión paramilitar"* en los predios de la controversia, así como un conjunto de actuaciones ilegales. Los aportes otorgados por estos parlamentarios serán abordados a profundidad en la parte motiva de este fallo.

4.3.3. Corporación Claretiana "Norman Pérez Bello", y Corporación Social para la Asesoría y la Capacitación Comunitaria

Los representantes de las dos corporaciones suscribieron concepto sobre el caso bajo revisión, describiendo una serie de hechos violentos que históricamente han tenido que enfrentar los pobladores campesinos de El Porvenir, así como las condiciones de habitabilidad que actualmente atraviesan. Al igual que con las demás intervenciones, la Sala integrará los aportes en el acápite considerativo de la sentencia.

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS

1. Competencia

Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar los fallos de tutela proferidos dentro de los trámites de la referencia, con fundamento en lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 86 y el numeral 9º del artículo 241 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.[33]

2. Presentación del caso y planteamiento del problema jurídico

2.1. La Sala Plena de la Corte Constitucional estudia el caso de 73 ciudadanos (37 mujeres y 36 hombres), que manifiestan ser campesinos pobladores de la vereda El Porvenir –jurisdicción del municipio de Puerto Gaitán (Meta)–. Afirman que han mantenido un asentamiento generacional desde por lo menos el año 1960. Sin embargo, indican que su permanencia en el lugar se ha visto afectada por una serie de sucesos que los han afectado y que pueden sintetizarse así: en un primer momento, la propiedad de los predios de El Porvenir fue obtenida por un empresario de la zona; luego, en el año 1979, la titularidad de cerca 27.000 hectáreas fue traspasada al empresario de esmeraldas Víctor Carranza Niño (F), momento a partir del cual, según los accionantes, se empezó a notar la presencia de "grupos paramilitares" en la región, los cuales iniciaron procesos de hostigamiento contra los pobladores

[33] "*Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política"*.

que históricamente venían ocupando los terrenos adquiridos por el señor Carranza (F), soportando homicidios masivos y desplazamientos forzados internos. Adicionalmente, en 1992, mientras los campesinos de la zona seguían habitando los predios bajo referencia, el hoy extinto Incora adjudicó las 27.000 hectáreas antes aludidas a 27 personas que no tenían ninguna relación con estos bienes y, con posterioridad, dichos inmuebles fueron englobados en 5 grandes haciendas.

No obstante, el 30 de julio de 2014, el Incoder profirió un acto administrativo en virtud del cual se revocaron las adjudicaciones realizadas por el Incora, luego de encontrar que las mismas habían sido irregulares; en ese sentido, los bienes fueron constituidos como baldíos y, en consecuencia, su propiedad pasó a manos de la Nación. Bajo ese contexto, señalan los actores que: *(i)* actualmente el dominio material del lugar sigue estando en manos de una empresa ganadera perteneciente a la familia del señor Víctor Carranza (F), cuyos propietarios han venido ejercido actos violentos contra los campesinos ocupantes; *(ii)* pese a su relación con estos terrenos, hasta la fecha no se ha adelantado ninguna gestión encaminada a adjudicarle a los ocupantes históricos la propiedad de los mismos; *(iii)* aun cuando los pobladores de El Porvenir han denunciado permanentemente el riesgo en el que se encuentran –materializado en las constantes amenazas dirigidas por parte de los representantes de la empresa ya referida y los grupos armados ilegales que hacen presencia en la zona–, no han recibido un apoyo institucional efectivo para contrarrestar las condiciones de inseguridad y la alerta de desplazamiento masivo; por último, *(iii)* los pobladores han tenido que permanecer en El Porvenir sin acceso a servicios públicos, vías de comunicación o asistencia estatal para desarrollar proyectos productivos que propendan por su digna supervivencia.

En este punto resulta importante tener en cuenta que, tal como lo ha advertido esta Corporación, el juez constitucional cuenta con amplias facultades para interpretar la acción de tutela, en tratándose de la autoridad judicial garante de los derechos fundamentales por excelencia. De ahí entonces que su papel al momento de conocer una solicitud de amparo no deba estar restringido exclusivamente a decidir las peticiones elevadas en el escrito de tutela, sino que, en virtud del principio de oficiosidad, se encuentra en el deber de estudiar en su integridad el caso objeto de análisis con el fin de esclarecer los hechos de la demanda y, en tal virtud, identificar los problemas constitucionalmente relevantes que se deriven del mismo, para su consecuente solución.[34]

De esta forma, en el asunto de la referencia, más allá de resolver si los predios baldíos ubicados en la vereda El Porvenir, Puerto Gaitán (Meta), deben o no

[34] Al respecto ver, entre otras, las sentencias T-463 de 1996, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; T-205 de 2010, T-425 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez; T-755 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio; T-484 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-1081 de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-389 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-521 de 2015, M.P. Myriam Ávila Roldán; entre otras.

adjudicarse en beneficio de los actores, esta Sala debe ocuparse de resolver los siguientes problemas jurídicos:

¿El Incoder ha vulnerado el derecho fundamental a la tierra y el territorio de los accionantes, al no adelantar la identificación de los ocupantes que se encuentran en predios baldíos ubicados en El Porvenir —municipio de Puerto Gaitán, Meta—, ni la titulación de estos inmuebles, en los términos de la Ley 160 de 1994, pese a que desde el 14 de julio de 2014 se declaró la revocatoria directa de las 27 adjudicaciones que desde el 15 de enero de 1992 realizó el extinto Incora sobre los terrenos mencionados y que como consecuencia de ello la Nación recuperó documentalmente el dominio de los mismos?

¿El Estado colombiano ha vulnerado los derechos fundamentales a la vida digna y seguridad colectiva de la comunidad campesina de El Porvenir, al no garantizar medidas de protección ciertas y suficientes, destinadas a contrarrestar las circunstancias de inseguridad derivadas del conflicto armado del que han sido víctimas, pese a que no sólo los pobladores han denunciado ante distintas instituciones y en reiteradas ocasiones su situación de riesgo, sino también autoridades públicas como la Defensoría del Pueblo y miembros del Congreso de la República?

Con el fin de dar respuesta a los interrogantes formulados, la Sala utilizará a la siguiente metodología: primero, se estudiará la procedencia de la acción de tutela objeto de revisión; segundo, teniendo en cuenta que los elementos fácticos del caso se relacionan con el acceso a la propiedad rural por parte de la población campesina, se hará un breve recuento histórico del papel que ésta ha tenido en las propuestas legislativas y constituyentes que han procurado normativizar la distribución de la tierra; tercero, se hará alusión a la importancia constitucional que reviste la existencia de predios baldíos, en tanto medios para hacer efectivo el mandato constitucional de acceso progresivo a la propiedad rural; cuarto, se indicarán las razones que dan cuenta de la naturaleza iusfundamental del derecho a la tierra y el territorio en favor de la población campesina; quinto, se reiterará la problemática puesta de presente por esta Corporación en la sentencia T-488 de 2014,[35] sobre la gestión institucional de los bienes baldíos en Colombia, y allí se advertirá que no sólo puede partirse de la importancia de la clarificación y recuperación de los mismos, sino principalmente de su efectiva adjudicación; finalmente, se abordará el análisis del caso concreto.

3. La acción de tutela promovida por Sulay Martínez y otros, contra el Incoder y otros, es procedente por no existir otro medio de defensa judicial materialmente idóneo para estudiar la protección de los derechos fundamentales de los actores y resolver los problemas jurídicos constitucionalmente relevantes, planteados con ocasión del caso concreto

[35] M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

3.1. La Constitución Política, en su artículo 86, incorpora la acción de tutela[36], como un mecanismo judicial de carácter preferente y sumario, diseñado para proteger de forma inmediata los derechos fundamentales, cuando éstos se vean amenazados o vulnerados por parte de cualquier autoridad pública y excepcionalmente por particulares.[37]

La acción de tutela procede cuando (i) no existan otros medios de defensa judiciales para la protección del derecho amenazado o desconocido; cuando (ii) existiendo esos mecanismos no sean *eficaces* o *idóneos* para salvaguardar los derechos fundamentales en el marco del caso concreto, evento en que la tutela desplaza el medio ordinario de defensa; o cuando (iii) sea imprescindible la intervención del juez constitucional para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable (art. 86, C.P.), hipótesis en la cual el amparo opera en principio como mecanismo transitorio de protección.

3.2. Ahora bien, en lo que tiene que ver con la existencia, eficacia e idoneidad de los medios de defensa ordinarios, esta Corporación ha sostenido que cuando el solicitante cuenta con otros medios de defensa, es deber del juez de tutela evaluar si estos son idóneos o eficaces en el caso particular, en procura de una protección cierta y suficiente de las garantías contenidas en la Carta Política.

En ese sentido, al analizar estos aspectos el juez debe enmarcar su análisis en las particularidades de cada caso, pues al relacionarse el carácter idóneo del mecanismo con su aptitud material para producir el efecto protector de los derechos fundamentales,[38] y la eficacia con la posibilidad de brindar un

---

[36] Artículo 86 constitucional: *"Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. || La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión. || Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. || En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución. || La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión."*

[37] De manera reiterada y de conformidad con lo establecido en el artículo 42 del Decreto 2591 ("*Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política"*), la Corte ha desarrollado la procedencia de la acción de tutela contra particulares en los siguientes casos: (i) cuando está a cargo de la prestación de un servicio público, (ii) cuando su conducta afecta grave y directamente el interés colectivo o (iii) respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión. Ver, por ejemplo, las sentencias T-389 de 2008, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-129 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez; T-117 de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-419 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-634 de 2013 y T-276 de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.

[38] Esta definición ha sido adoptada por las distintas Salas de Revisión a través de, entre otras, las sentencias T-211 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas; T-470 de 2009, M.P. Jorge Iván Palacio; T-1054 de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; T-480 de 2011, T-662 de 2013, M.P. Luis

amparo eficaz, oportuno e integral, resulta clara la imposibilidad de establecer criterios abstractos y generales para su valoración.[39]

De igual manera, la Corte debe tener en cuenta circunstancias especiales de los accionantes, tales como su avanzada edad, estado de salud, condición de vulnerabilidad derivada de su situación económica, o si se trata de un sujeto de especial protección constitucional pues, en virtud del artículo 13 superior, y el mandato de igualdad material, el juez de tutela debe efectuar un análisis más amplio para estas personas porque, como lo ha señalado este Tribunal, la cláusula de igualdad constitucional, contenida en el artículo 13 superior, incorpora la obligación asignada al Estado de adoptar medidas en favor de grupos históricamente discriminados o marginados, como ocurre con las víctimas del conflicto armado y, especialmente, de desplazamiento forzado.[40]

3.3. Así, esta Corporación ha reconocido en las víctimas del conflicto armado interno a uno de los sectores poblacionales más susceptibles a enfrentar diversas situaciones de extrema vulnerabilidad, relacionadas generalmente con violaciones masivas de sus derechos fundamentales;[41] lo cual se hace aún más evidente en el caso de aquellas personas obligadas a desplazarse involuntariamente por parte de grupos armados ilegales, pues se ha entendido que en tales circunstancias el hecho victimizante no está constituido únicamente por el desarraigo violento, sino también por las consecuencias derivadas del mismo, que claramente impactan de forma negativa y permanente el ejercicio pleno de las garantías contenidas en la Constitución Política. De ahí que el desplazamiento forzado sea considerado como un fenómeno absolutamente incompatible con el régimen constitucional colombiano, tal como se ha venido sosteniendo a partir de la sentencia T-025 de 2004,[42] en donde la Sala Tercera de Revisión resolvió declarar la existencia de un estado de cosas inconstitucional en la materia.

Bajo esta perspectiva, la Corte ha establecido que la acción de tutela es por regla general el mecanismo idóneo para atender la vulneración de los derechos fundamentales de este sector poblacional, al tratarse, en efecto, de sujetos titulares del estatus de especial protección constitucional.[43]

Ernesto Vargas Silva; SU-772 de 2014, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-393 de 2015, M.P. Myriam Ávila Roldán; y T-040 de 2016, M.P. Alejandro Linares Cantillo.

[39] En ese sentido, ver, entre otras, la sentencia T-315 de 2015, M.P. María Victoria Calle Correa.

[40] Ver sentencia T-045 de 2010, M.P. María Victoria Calle Correa.

[41] Sentencia C-609 de 2012, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

[42] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

[43] Al respecto ver, entre otras, las sentencias T-1094 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-821 de 2007, M.P. Catalina Botero Marino; T-218 de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa. Al respecto, en sentencia T-192 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, la Sala Quinta de Revisión sintetizó la imposibilidad de aplicar las reglas ordinarias de procedencia de la acción de tutela para los casos de población en situación de desplazamiento, así: *"(i) Aunque existen otros medios de defensa judicial ante la jurisdicción ordinaria que garantizan la protección de los derechos de este grupo de personas, éstos no son idóneos ni eficaces debido a la situación de gravedad extrema y urgencia en la que se encuentran. || (ii) No es viable exigir el previo agotamiento de los recursos ordinarios como requisito de procedibilidad de la acción, pues, debido a la necesidad de un amparo inmediato, no es posible imponer cargas adicionales a la población desplazada. || (iii) Por*

3.4. Sin embargo, en el escenario jurídico en que se enmarca el caso objeto de estudio es importante realizar dos precisiones.

La primera es que las decisiones sobre adjudicación de tierras están en cabeza del Incoder, y que estas pueden ser objeto de control judicial ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En ese marco, la Sala debe evaluar si es necesaria la intervención del juez constitucional tomando en cuenta la carga que representa para los tutelantes, en el contexto de sus condiciones personales y en atención a la complejidad fáctica del trámite.

La segunda es que la Ley 1448 de 2011 estableció el proceso administrativo y judicial de restitución de tierras, un trámite especialmente diseñado para revertir el despojo ocasionado por el conflicto armado interno, y cubierto de aparente legalidad mediante un conjunto de estrategias legales e ilegales, destinadas a ocultar la posesión, propiedad y tenencia de los predios por parte de la población campesina. Ese mecanismo es, en principio, idóneo y eficaz incluso para la población desplazada[44].
No obstante, ello no implica que decisiones irrazonables y desproporcionadas de los órganos que componen el sistema de restitución, especialmente la unidad de tierras y los jueces de tierras, puedan ser objeto de control por vía de la acción de tutela. Así, por ejemplo, en la sentencia T-679 de 2015[45], la Corte consideró que la Unidad de Tierras violó los derechos de una ciudadana de 70 años, víctima del conflicto, al negarse a no microfocalizar un predio, sin establecer claramente las razones de esa decisión y prever un cronograma de trabajo razonable, para avanzar en el trámite.

3.5. En relación con el caso particular, para la Sala la situación formulada en la solicitud de amparo va más allá de decidir si se adjudica o no los predios objeto de controversia a los 73 actores. Lo anterior porque, si bien es claro que

---

ser sujetos de especial protección, dada la condición particular de desamparo, vulnerabilidad e indefensión en que se encuentran, requieren de una defensa constitucional, por lo que el juez de tutela debe evaluar con particular atención las circunstancias de debilidad manifiesta". Este criterio jurisprudencial ha sido reiterado permanentemente por esta Corporación, pudiéndose observar la reciente sentencia T-573 de 2015, M.P. María Victoria Calle Correa.

[44] Así, por ejemplo, en la sentencia T-415 de 2013 (MP Mauricio González Cuervo. AV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), la Corte consideró que una solicitud de amparo era improcedente, precisamente por la existencia del proceso de restitución de tierras: ""Teniendo en cuenta de un lado, el concepto jurídico de la Unidad de Restitución de Tierras, y del otro, el estudio técnico aportado por la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico de la Sala Administrativa del CSJ, esta Sala considera que la protección de los derechos invocados por los accionantes, eventualmente conculcados por las presuntas irregularidades que se cometieron en el trámite de la adjudicación del predio, pueden plantearse y solucionarse de manera eficaz a través del proceso de restitución previsto en la Ley 1448 de 2011, pues como quedó demostrado, los términos previstos para este proceso en la ley son cortos y por regla general, salvo imprevistos, finalizan dentro del término. Así, el mecanismo judicial para la restitución de tierras es idóneo para conceder la pretensión que el actor plantea en sede de tutela, debido a su especificidad y a que a pesar de las complejidades que implica la restitución, queda demostrado que los jueces dan trámite al proceso, dentro del término prudente y razonable, que establece la ley"

[45] MP Luis Ernesto Vargas Silva.

al juez de tutela no le asisten facultades para agotar las actuaciones que son competencia exclusiva de las autoridades legalmente constituidas para definir la asignación de títulos de un bien baldío, éste sí tiene la facultad de analizar si tales actuaciones han sido compatibles con la Constitución Política, con ocasión de la posible vulneración de derechos fundamentales alegada a través de una acción de amparo; sin perjuicio del examen de procedibilidad, en los términos ya descritos.

En ese sentido, nuestro ordenamiento jurídico dispone de mecanismos administrativos para adelantar los trámites de adjudicación y definición de titulación de predios baldíos, principalmente dispuestos en la Ley 160 de 1994,[46] y para ello han sido asignadas las respectivas funciones legales a entidades como el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder),[47] constituido como la autoridad pública encargada de "ejecutar la política agropecuaria y de desarrollo rural, facilitar el acceso a los factores productivos, fortalecer a las entidades territoriales y sus comunidades y propiciar la articulación de las acciones institucionales en el medio rural (…) para contribuir a mejorar la calidad de vida de los pobladores rurales y al desarrollo socioeconómico del país";[48] en virtud de lo cual se ha dispuesto su competencia exclusiva para adjudicar los bienes baldíos de la Nación, en el marco de lo establecido por el ordenamiento jurídico.

Sin embargo, en este caso los accionantes plantean que el Instituto no ha proferido decisión alguna acerca de sus solicitudes de adjudicación, a pesar de que desde el 2014 se efectuó (según el mismo Incoder) la recuperación material de El Porvenir. Resulta claro entonces que la petición obedece a que, en concepto de los actores, la vía administrativa no ha llegado a respuesta alguna acerca de su situación, hecho que, de ser cierto, podría significar la violación de sus derechos, y la acción de tutela podría ser el mecanismo adecuado para asegurar el avance de las actuaciones administrativas.

De igual manera, la Unidad de Restitución de Tierras informó a la Corte Constitucional que, según los folios de matrícula mencionados en este trámite, y correspondientes a los cinco predios en que se hallaba divido el Incoder en el año 2007, es posible confirmar que estos se encuentran en una zona micro focalizada. Esta respuesta indica que se ha iniciado el trámite de restitución de tierras, pero no es claro en qué etapa se encuentra. Para la Sala este es un

---

[46] "Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se establece un subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y se dictan otras disposiciones"

[47] Debe tenerse presente que el Incoder fue suprimido por el Decreto 2365 de 2015 y con ocasión de ello fue creada, para el año 2016, la actual Agencia Nacional de Tierras, que tendrá dentro de sus funciones asumir los trámites adelantados por el extinto Instituto. No obstante, teniendo en cuenta que la acción de tutela se dirige estrictamente a las actuaciones del Incoder (hoy en liquidación), en esta acción de tutela se mantendrá su referencia.

[48] Artículo 2 del Decreto 3759 de 2009, "Por el cual se aprueba la modificación de la estructura del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – Incoder, y se dictan otras disposiciones". Derogado tácitamente por el Decreto 2365 de 2015, que entre otros asuntos, suprimió el Instituto.

hecho relevante, a tomar en cuenta, al momento de abordar el análisis de fondo, pero no afecta la competencia del juez de tutela, precisamente porque confirma la incertidumbre jurídica que denuncian los accionantes en torno a los predios de El Porvenir.

La situación descrita es, además, confirmada por autoridades públicas, como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, órganos que han solicitado una respuesta del juez de tutela, precisamente, a efectos de que los trámites pertinentes lleven a una respuesta adecuada, pronta y efectiva para los peticionarios.[49]

Con todo, es importante señalar que la Corte Constitucional no definirá si cada uno de los accionantes es titular del derecho al acceso a la tierra, sino que analizará las razones por las cuales los procedimientos que prevé el ordenamiento jurídico no han llevado a una respuesta definitiva acerca de sus expectativas de acceso a la tierra.[50]

Esta orientación ya ha sido adoptada por la Corte Constitucional en un proceso reciente, fallado en sentencia SU-235 de 2016[51], en el que se asumió el estudio de fondo de un conjunto de actuaciones relacionadas con el manejo del predio Bellacruz por parte del Estado, en las que se evidenció el favorecimiento de intereses económicos particulares, en desmedro de los derechos de familias campesinas, interesadas en su adjudicación por vía de reforma agraria.

3.6. Además, la relevancia constitucional del caso, y la necesidad de un pronunciamiento del juez constitucional, se confirma por la aparente victimización que han enfrentado los ocupantes históricos del lugar, que configuran una compleja situación local de Derechos Humanos, derivada del conflicto armado, que presuntamente compromete de forma masiva el ejercicio de garantías constitucionales, tales como el acceso efectivo a la tierra en favor de los trabajadores rurales, la vida en condiciones dignas, trabajo, integridad personal, entre otros.

En tal sentido, los peticionarios, que se identifican como campesinos de la vereda El Porvenir, municipio de Puerto Gaitán, han manifestado que han sido víctimas de distintos hechos de violencia por parte de estructuras criminales al margen de la ley, que a su vez se vinculan con la situación del conflicto armado interno extendido en el departamento del Meta; lo cual ha tenido como consecuencias, entre otras, el homicidio de varios pobladores.

---

[49] Así lo puso de presente el Defensor del Pueblo tanto en su informe allegado al dar contestación a la acción de tutela, como en el informe de seguimiento al cumplimiento del fallo de segunda instancia de la misma, este último allegado a la Sala de Revisión el 22 de abril de 2016 (folios 614 a 619 del cuaderno de revisión).
[50] En estricto cumplimiento de la Ley 160 de 1994 y sus disposiciones reglamentarias.
[51] MP Gloria Stella Ortiz Delgado. SV Luis Guillermo Guerrero Pérez.

A lo anterior se suma una serie de supuestos fácticos que demuestran la vulnerabilidad de los actores, tales como la imposibilidad de desarrollar actividades agrarias de forma pacífica, dadas las condiciones de inseguridad de la zona, así como la ausencia de vías de comunicación y de servicios públicos domiciliarios, lo que no sólo dificulta la supervivencia de los pobladores de El Porvenir, sino también el desarrollo de derechos tales como la educación de los menores de edad, al no tener garantizadas las condiciones adecuadas en las que puedan adelantar jornadas escolares[52].

3.7. Así las cosas, la Sala concluye que la acción es procedente, tanto para evaluar la presunta negligencia estatal en relación con la situación del predio El Porvenir, como para analizar si se presenta un desconocimiento del derecho a la integridad personal, seguridad y vida de los miembros de la comunidad.

4. Los predios baldíos como medio para garantizar el acceso progresivo a la propiedad rural por parte de la población campesina (artículo 64 de la Constitución Política)

4.1. La Constitución Política de 1991, siguiendo el histórico propósito de desarrollar una reforma rural integral, destinada a disminuir la inequidad en el campo y evitar la concentración de la tierra en pocas manos, adoptó diversas medidas para el cumplimiento de tales fines.

4.2. En esa dirección, reprodujo la función social de la propiedad, dispuesta en la reforma constitucional de 1936, quedando plasmada en el artículo 58 de la nueva Carta Política, e introdujo los artículos 64 y 65, que establecen la obligación estatal de asegurar "el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios" y de proteger especialmente la producción de alimentos, dando prioridad —entre otras— a las actividades agrícolas.

4.3. Al respecto, resulta importante tener en cuenta que en la exposición de motivos de la ponencia presentada para primer debate sobre derechos agrarios, los constituyentes Angelino Garzón, Mariano Ospina Hernández, Marco Chalitas, Carlos Ossa Escobar e Iván Marulanda manifestaron ante la plenaria lo siguiente:

> *"El sector agrario y la economía campesina ha cumplido un importante papel en el proceso económico del país, contribuyendo con su trabajo a la producción de alimentos y al fomento de las*

[52] 3.8. Respecto de los anteriores postulados, en respuesta a la acción de tutela, la Defensoría del Pueblo, Regional Meta, confirmó los hechos de los cuales se desprende la vulnerabilidad de los accionantes, con ocasión de las misiones que ha adelantado en la vereda El Porvenir. Así, puso de presente en su informe que luego de realizar una visita a la zona, es claro el *"riesgo latente"* de la comunidad, por habitar un lugar en el que hacen presencia grupos armados ilegales sin identificar, y advirtió que efectivamente hay situaciones que exigen una atención prioritaria, como lo son "el programa de alimentación escolar (entrega de alimentos incompletos y periodos sin alimentación), servicio de luz (deterioro de la planta eléctrica) y acueducto veredal (a pesar de la infraestructura construida, la falta de energía no permite el bombeo al tanque elevado para la distribución).

exportaciones, garantizando una estabilidad relativa en los suministros y precios. El aporte a la capitalización de otros sectores ha sido significativo, sin guardar una equitativa proporcionalidad en el nivel de inversiones, modernización y capacitación tecnológica del sector. (...) || *La tierra como bien productivo se sustrae en alto grado del racional aprovechamiento social, originado por una inadecuada apropiación territorial, que se expresa en concentración latifundista, dispersión minifundista y colonización periférica depredadora. Esta concurrencia de factores negativos hace que las necesidades de la población se hallen insatisfechas ante la ausencia de un desarrollo integral equitativo, sostenido y armónico, que permita el pleno empleo de los recursos productivos desde el punto de vista estratégico, económico y social. (...)* || *La propuesta contiene una ampliación del sector agrario, en el sentido de que integra sectores de la producción pesquera, forestal y agroindustrial, como elementos complementarios al desarrollo armónico, apuntando a un plan de seguridad alimentaria y suministro de materias primas básicas. En este mismo horizonte se plantea la necesidad de impulsar la asistencia técnica, el crédito de fomento, el desarrollo de obras de infraestructura y de servicios, el mercado, acopio, ventajas fiscales y demás variables que contribuyan al desenvolvimiento pleno de los factores productivos y de la dignificación del trabajo campesino. (...)* || ***Se busca, por lo tanto, una democratización de la propiedad, entendida como el derecho al acceso productivo****, incorporando diversas formas de tenencia y organización privada, familiar y asociativa de la economía solidaria, articulando este proceso como parte integral de la asistencia técnica, la educación y la formación de los trabajadores del campo, la participación comunitaria, el respeto a las formas de resguardos y culturas indígenas, dentro del marco y criterios de productividad y eficiencia, en concurrencia con el desarrollo empresarial del sector agrario"* (negrilla fuera del texto original).

4.4. Como se puede evidenciar, la constitucionalización de la propiedad agraria de 1991 estuvo precedida de una fuerte atención a la situación problemática del acceso a la tierra rural en beneficio de la población agricultora, por lo que incluso se dispuso como finalidad del acceso progresivo la necesidad de mejorar las condiciones de vida de estos integrantes de la sociedad.

4.5. Así, aparece la actual Reforma Agraria, en la Ley 160 de 1994, en virtud de la cual se establece, entre otros asuntos, un régimen especial de clarificación, recuperación y adjudicación de baldíos, disponiendo

expresamente que éstos tienen una destinación exclusiva para "las familias pobres".[53]

Además, esta nueva Ley incorporó como requisitos generales para ser sujeto de reforma agraria o adjudicatario: (i) demostrar la explotación de más de dos terceras partes del predio que se pretende adjudicar, el cual, en todo caso, (ii) no podrá ser mayor a una UAF;[54] adicionalmente (iii) se exige acreditar la explotación económica de más de dos terceras partes del predio y atendiendo a la aptitud productiva del terreno definida por el Incora (Incoder); (iv) se exige que el adjudicatario no tenga un patrimonio neto superior a los 1000 salarios mínimos mensuales vigentes; y (v) se advierte que no podrán ser adjudicatarios quienes ya se hayan beneficiado de otro predio rural, ya sea porque son sus propietarios o tienen derecho de posesión.

4.6. Así las cosas, en este punto se torna importante reiterar las conclusiones a las que la Sala Plena de esta Corte ha llegado frente a la inclusión constitucional y legal de disposiciones orientadas hacia una distribución equitativa de la tierra en favor de la población campesina económicamente menos favorecida, en el sentido de señalar que pese a los esfuerzos legislativos, los resultados estadísticos son muy negativos, no sólo por deficiencias de los modelos de reforma agraria, sino también por el contexto de violencia que atraviesa. Por eso, se ha dicho que:

> "*Sin entrar a distinguir la incidencia de unos y otros factores, baste con señalar que la concentración de la tierra en Colombia no ha cesado de crecer y la población campesina, en todo caso, sigue siendo la población más pobre del país y la que vive en condiciones de mayor vulnerabilidad. || De hecho, su situación ha empeorado durante los años de vigencia de la Constitución, con lo cual la deuda del Estado colombiano para con esta población, no puede ser ignorada por los poderes públicos ni desconocida por el juez constitucional en ejercicio de sus competencias. Así lo determina el mandato de supremacía constitucional, desde el cual no pueden ser sólo criterios de validez formal sino además criterios de eficacia y justicia, los que deben ilustrar la comprensión del orden legal y de los problemas jurídicos formulados en el presente asunto*".[55]

---

[53] Parágrafo 2 del artículo 67 de la Ley 160 de 1994.

[54] La constitucionalidad del sistema UAF ha sido estudiada por esta Corporación, y ha definido que "consulta la función social de la propiedad que comporta el ejercicio de ésta conforme al interés público social y constituye una manifestación concreta del deber del Estado de `promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios (…) con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos` (art. 64 C.P.) || Es evidente que si se limita la posibilidad de adquirir la propiedad de los baldíos, o la que se deriva de un título de adjudicación de baldíos a una UAF, como lo prevé el acápite normativo acusado, más posibilidades tendrá el Estado de beneficiar con dicha propiedad a un mayor número de campesinos, aparte de que se logrará el efecto benéfico de impedir la concentración de la propiedad o su fraccionamiento antieconómico".

[55] Sentencia C-644 de 2012, Óp. Cit.

4.7. De acuerdo con lo establecido en el artículo 102 de la Constitución,[56] pertenecen a la Nación los bienes públicos que forman parte del territorio; los cuales, a su vez, han sido clasificados tradicionalmente en fiscales, de uso público; o adjudicables, siendo en esta última categoría en la que se ubican los predios baldíos, tal como desde sus inicios lo ha reconocido este Tribunal.[57] Así, la relación del Estado con este tipo de bienes se explica por el concepto de "dominio eminente", relativo, por un lado, al poder genérico ejercido sobre el territorio nacional y que se vincula íntimamente con el principio de soberanía nacional, pero por otro a la disposición estatal de la *"res publicae"*.[58]

4.8. La mención anterior resulta importante para aclarar que más que en estricto sentido tener la propiedad de los bienes baldíos, la Nación es titular de un derecho especial de conservación sobre los mismos, en virtud del cual se encuentra facultada para transferir su dominio a los particulares, a través de la titulación por vía de, en principio, la ocupación como modo genérico de adquisición de estos inmuebles, con arreglo a los requisitos exigidos por la ley. Esto sin dejar de tener en cuenta que el Constituyente de 1991, al definir las funciones asignadas al Congreso de la República, dispuso expresamente en el numeral 18 del artículo 150 superior que corresponde a dicha institución "[d]ictar las normas sobre apropiación o adjudicación y recuperación de tierras baldías".

4.9. Diferenciar el régimen de propiedad de los bienes baldíos respecto de los comunes (estos últimos sometidos, por regla general, a lo dispuesto en el Código Civil) responde no sólo al carácter público de los primeros, respectivamente, sino también a que, como se pudo evidenciar en el capítulo precedente, establecer un estatuto de titulación de estos inmuebles trae consigo el necesario desafío de regular la redistribución de la propiedad para enfrentar la concentración de la tierra y los beneficios derivados de ella, en atención al principio constitucional de función social de la propiedad, a que se refiere el artículo 58 de la Carta Política.[59] De ahí que históricamente la

---

[56] Artículo 102: "El territorio, con los bienes públicos que de él forman parte, pertenece a la nación".

[57] Desde la sentencia C-060 de 1993, M.P. Fabio Morón Díaz, al estudiar la constitucionalidad del Decreto 1942 de 1992 ("Por el cual se dictan normas sobre reservas y adjudicación de terrenos baldíos"), la Corte aclaró que: "es bien claro que la Carta de 1991 reiteró la tradicional concepción según la cual pertenecen a la Nación los bienes públicos que forman parte del territorio dentro de los cuales se encuentran las tierras baldías; por tanto, bien puede la Nación reservárselas en cuanto inicial titular de los mismos, u ordenar por medio de la Ley a las entidades administrativas que se desprenden de ella, lo pertinente en cuanto al ejercicio del atributo de la personalidad de derecho público que la caracteriza, sea patrocinando o limitando el acceso de los particulares a dichos bienes".

[58] En el derecho romano con "res publicae" se hacía referencia a las cosas (bienes) pertenecientes al pueblo romano, clasificadas en "res in commercio" o de posible negociación, y "res in uso publico sunt" o bienes de uso público. (Ver. Ortega Castillo de Albornoz, Antonio. "Derecho privado romano". España: Ediciones del Genal. 2007. Pp. 99 y 100).

[59] Artículo 58: "Se garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultare en

regulación interna sobre esta materia haya dado lugar a cuerpos normativos contentivos de sendas "reformas agrarias".[60]

Lo anterior porque –como ha sentenciado esta Corte– el objetivo primordial de un sistema de legalización de baldíos es garantizar el acceso a la tierra a quienes carecen de ésta.[61]Al respecto, resulta pertinente recordar que el artículo 64 de la Constitución Política incorporó el deber asignado al Estado de promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los

---

conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social. || **La propiedad es una función social que implica obligaciones**. Como tal, le es inherente una función ecológica. || El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad. || Por motivos de utilidad pública o interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa-administrativa, incluso respecto del precio" (negrilla fuera del texto original).

[60] En el año 2013 el Centro Nacional de Memoria Histórica publicó una juiciosa investigación sobre, entre otros asuntos, el tratamiento semántico del concepto "reforma agraria", centrándose en los sentidos dados por los académicos que, desde su perspectiva, habían sido referentes obligatorios en los procesos de redistribución en la tierra en América Latina. De esta manera, acude, por ejemplo, a la definición de Doreen Warriner, según la cual "en el uso corriente, reforma agraria generalmente significa redistribución de la propiedad de la tierra en beneficio de los pequeños agricultores y trabajadores agrícolas". Por su parte, Thomas Carrol indicó que "el sistema de propiedad rural es el problema central de la reforma agraria". Pero de acuerdo con la investigación desarrollada por este centro de pensamiento, la concepción prevaleciente durante los procesos reformatorios de los años 50's en el continente fue la suministrada por Peter Dorner, quien expresa que "toda reforma agraria consiste fundamentalmente en una serie de cambios sustanciales y deliberados en el régimen de tenencia de la tierra, o sea, en la propiedad y control social de los recursos de la tierra y agua". Al respecto, el reconocido estudioso de la historia agraria de Latinoamérica, Antonio García Nossa, relacionó la reforma agraria con "una estrategia de modificación y sustitución de la estructura agraria tradicional, por medio de un repertorio de factores: la redistribución de la tierra, los ingresos y el poder político; la formación de un nuevo sistema de empresa, racional e intensivo, diseñado de acuerdo al marco real de los recursos y de los objetivos estratégicos del desarrollo; la apertura a una estructura social fluida, móvil, dinámica y de clases abiertas; la integración cultural y política de las masas campesinas y la articulación de este gigantesco proceso de cambio a la estrategia general de desarrollo de la sociedad latinoamericana". Con base en tal información, concluye el Centro de Memoria que "reforma agraria en la acción de los poderes públicos dirigida a lograr la redistribución de los recursos productivos; lo anterior conlleva a la redistribución del ingreso y del poder político, además del mejoramiento del status social en beneficio de la población rural. Estas metas se alcanzan en algún grado a través de la ejecución de un conjunto de medidas dirigidas a lograr: || a) la apertura rápida y masiva de la accesibilidad a los recursos productivos (tierra, agua, capital) para una parte significativa de la población agrícola activa, y || b) la abolición drástica de la servidumbre en las relaciones laborales, lo que requiere ser garantizado mediante controles efectivos. Como un corolario, debería obtenerse una mayor remuneración de la fuerza de trabajo bajo formas de salario, junto con el establecimiento o mejoramiento de los servicios de seguridad social campesina". (Ver. Centro Nacional de Memoria Histórica. "La política de reforma agraria y tierras en Colombia". Bogotá: CNMH. 2013. Pp. 13-17).

[61] En la sentencia C-595 de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz, la Sala Plena de esta Corporación estudió una demanda formulada contra algunos acápites de las Leyes 48 de 1882, 110 de 1912 y 160 de 1994, relativos a la prescripción de los bienes baldíos. Desde esa oportunidad se definió que "la adjudicación de baldíos tiene como objetivo primordial satisfacer, en el caso de personas naturales, las necesidades del ocupante y posterior adjudicatario, permitir el acceso a la propiedad a quienes carecen de ella y contribuir a mejorar las condiciones económicas y sociales de los adjudicatarios".

trabajadores rurales, a través de distintas medidas tendientes a *"mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos"*[62], lo que demuestra un claro interés del constituyente primario por incorporar en el texto superior la necesidad de atender la vulnerabilidad de la población campesina[63], derivada de sus circunstancias socioeconómicas, sin apartarse por ello del fortalecimiento de la producción agraria. Una de las formas de materializar este mandato constitucional es la adjudicación de tierras baldías.[64]

4.10. En ese contexto, el contenido y alcance del mencionado artículo 64 ha sido un tema del que se ha ocupado esta Corporación desde sus primeras decisiones, como en adelante se sintetiza:

En sentencia C-590 de 1992,[65] al estudiar una demanda de inconstitucionalidad formulada contra el inciso 3 del artículo 3 de la Ley 7 de 1991,[66] la Corte señaló que cuando en el artículo 64 de la Carta Política se habla de un deber del Estado de promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra por parte de los trabajadores rurales, se está aludiendo a una auténtica obligación estatal que implica el compromiso de adelantar políticas

---

[62] Artículo 64: "Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar los ingresos y calidad de vida de los campesinos".

[63] Una de las aproximaciones semánticas al concepto de "campesino" está dada en el proyecto de "Declaración sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales", presentado por el Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales en el primer periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (15 a 19 de julio), en el que se propone disponer en el artículo 1: "Definición de campesino. || 1. Un campesino es un hombre o una mujer de la tierra, que tiene una relación directa y especial con la tierra y la naturaleza a través de la producción de alimentos u otros productos agrícolas. Los campesinos trabajan la tierra por sí mismos y dependen sobre todo del trabajo en familia y otras formas en pequeña escala de organización del trabajo. Los campesinos están tradicionalmente integrados en sus comunidades locales y cuidan el entorno natural y local y los sistemas agroecológicos. || 2. El término campesino puede aplicarse a cualquier persona que se ocupe de la agricultura, la ganadería, la trashumancia, las artesanías relacionadas con la agricultura u otras ocupaciones similares en una zona rural. El término abarca a las personas indígenas que trabajan la tierra. || 3. El término campesino también se aplica a las personas sin tierra. De acuerdo con la definición de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, se consideran personas sin tierra las siguientes categorías de personas, que probablemente se enfrenten a dificultades para asegurar sus medios de vida: || a) Familias de trabajadores agrícolas con poca tierra o sin tierra; || b) Familias no agrícolas en zonas rurales, con poca tierra o sin tierra, cuyos miembros se dedican a diversas actividades como la pesca, la artesanía para el mercado local o la prestación de servicios; || c) Otras familias rurales de trashumantes, nómadas, campesinos que practican la agricultura migratoria, cazadores y recolectores y personas con medios de subsistencia parecidos".

[64] Sentencia C-595 de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

[65] M.P. Simón Rodríguez Rodríguez. A.V. José Gregorio Hernández Galindo.

[66] "Por la cual se dictan normas generales a las cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular el comercio exterior del país, se crea el Ministerio de Comercio Exterior, se determina la composición y funciones del Consejo Superior de Comercio Exterior, se crean el Banco de Comercio Exterior y el Fondo de Modernización Económica, se confieren unas autorizaciones y se dictan otras disposiciones".

especiales en favor de la población campesina, con especial atención en la efectiva comercialización de los productos agrícolas.

Luego, en sentencia T-537 de 1992,[67] la Sala de Revisión conoció de una acción de tutela interpuesta contra el gerente del Banco Central Hipotecario, en la que la accionante solicitaba el amparo de su "derecho patrimonial", afectado por la decisión de la parte demandada de sacar de circulación una cédula hipotecaria que había sido negociada con un tercero, el cual pretendió pagar dicho título valor a través de cheques carentes de fondos. La Corte decidió conceder el amparo con base en el contenido fundamental del derecho a la propiedad en Colombia, para lo cual la Sala estableció que "todas las formas de propiedad están protegidas constitucionalmente". Para el caso objeto de estudio resulta de especial interés lo afirmado por la Corte acerca del artículo 64 de la Constitución Política:

> "*El precepto dedica su contenido a los trabajadores agrarios y señala que éstos tendrán acceso en forma progresiva, no solo a la explotación de la tierra sino que habrá para ellos la oportunidad de hacerse propietarios de la tierra, bien en forma individual o colectiva. || Le asegura la norma una serie de servicios públicos a la clase trabajadora colombiana y especialmente a los campesinos, como la educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comercialización de los productos asistencia técnica y empresarial entre otros servicios, de los cuales adolecen los trabajadores agrarios. || Se entiende que ésta es una de las clases más marginadas, más subdesarrolladas y por ende, más propensas a toda clase de contingencias. De ahí que constitucionalmente hoy se tenga una norma que enuncia toda una serie de reivindicaciones sociales para el campesino colombiano, la cual reafirma el criterio que los servicios señalados se le brindarán al trabajador con el fin de mejorar el ingreso y la calidad de vida de los campesinos*".

Con posterioridad, en sentencia C-021 de 1994,[68] al resolver una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 3 de la Ley 34 de 1993,[69] la Corte Constitucional indicó que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 64, la Carta Política reconoce la necesidad de un tratamiento diferenciado entre la relación del trabajador campesino con el desarrollo agropecuario y el vínculo entre los demás sectores socioeconómicos con las formas de producción agraria. Así pues, se impone la necesidad de garantizar una igualdad material respecto de la población rural "tradicionalmente condenada a la miseria y la marginación social".

---

[67] M.P. Simón Rodríguez Rodríguez.
[68] M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[69] "Para la refinanciación de la deuda de los cafeteros, algodoneros, arroceros y demás sector agrario se dictan las nomas y criterios para su regulación y aplicación".

No obstante, en esa oportunidad la Corte aclaró que la disposición constitucional en referencia contiene el fundamento de las medidas que el Estado debe adoptar para garantizar las condiciones que permitan a los trabajadores rurales acceder a la propiedad de la tierra, educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación y beneficios crediticios para el desarrollo de la producción agrícola. En ese sentido, indicó que "el contenido normativo en cuestión entraña el diseño de una estrategia global del desarrollo rural, que el Constituyente configuró como un cometido estatal destinado a lograr el crecimiento del sector campesino y consecuencialmente, un mejoramiento sustancial de la calidad de vida de la población rural".

A su vez, al estudiar la constitucionalidad del inciso 9 del artículo 72 de la Ley 160 de 1994, relativo a la nulidad sobre la propiedad por vía de adjudicación de terrenos baldíos que superen la Unidad Agrícola Familiar, a través de la sentencia C-536 de 1997[70] esta Corporación determinó que, en concordancia con lo establecido en el artículo 64 de la Constitución, el límite frente a la extensión de predios adjudicables no sólo se torna importante por impedir la concentración de la propiedad, sino también porque, en últimas, redunda en la garantía de mayores posibilidades para beneficiar a más campesinos colombianos con el acceso a la tierra.

Aunado a lo expuesto, en la providencia C-006 de 2002[71] este Tribunal definió que las excepciones a la prohibición de fraccionar los predios rurales por debajo de la Unidad Agrícola Familiar —contenidas en el artículo 45 de la Ley 160 de 1994— no desconocían la competencia autónoma de los concejos municipales para reglamentar el uso del suelo y controlar la enajenación de viviendas. Con ocasión de dicho análisis, se aclaró que el principio constitucional de función social de la propiedad, especialmente de la rural, tiene como objetivo principal adelantar su tenencia y productividad en pos del bienestar de la comunidad. Bajo esta perspectiva, la adquisición de la tierra trae consigo la necesidad de privilegiar a los trabajadores campesinos, buscando facilitarles el acceso material a esta y, alrededor suyo, las condiciones necesarias para mejorar su nivel de vida, a través de alternativas de política pública, como la estimulación del desarrollo agropecuario[72].

4.11. Ahora bien, en un período más reciente, un referente primordial sobre el alcance del artículo 64 en alusión es la sentencia C-644 de 2012.[73] En esta

---

[70] M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[71] M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[72] La sentencia mantuvo además la posición doctrinal introducida en la decisión C-536 de 1997 respecto del contenido y alcance de la norma constitucional bajo referencia, estableciendo que "los artículos 64, 65 y 66 de la Constitución Política, constituyen el fundamento de la acción del Estado para crear las condiciones necesarias que permitan el acceso progresivo de los trabajadores agrarios a la propiedad de la tierra, y a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación y crédito, e igualmente para darle prioridad, apoyo y especial protección al desarrollo de las actividades agropecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, y a la construcción de obras de infraestructura física en el campo".
[73] M.P. Adriana María Guillén Arango, S.V. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, S.V. Mauricio González Cuervo, S.V. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, S.V. Humberto Sierra Porto.

providencia la Corte declaró la inexequibilidad de los artículos 60 a 62 del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014,[74] en los que se incorporaban los *"proyectos especiales agropecuarios"*, al concluir que los preceptos acusados no superaban el *test de no regresividad* de las facetas prestacionales de los derechos consagrados en los artículos 64,65 y 66 de la Constitución, ni existía un principio de razón suficiente para la configuración normativa a partir de lo establecido en el numeral 18 del artículo 150 superior, pues las normas demandadas suprimían las garantías de aseguramiento de la titularidad de la propiedad en favor de los campesinos a que se refieren los artículos 25,[75] 72[76] y 83[77] de la Ley 160 de 1994.

---

[74] Ley 1450 de 2011 ("Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014").

[75] Artículo 25: "Los beneficiarios de los programas de reforma agraria deberán restituir al Incora el subsidio, reajustado a su valor presente, en los casos en que enajene o arriende el terreno adquirido con el subsidio dentro de los doce (12) años siguientes a su otorgamiento sin la autorización expresa e indelegable de la Junta Directiva del Incora, o si se estableciere que el predio no está siendo explotado adecuadamente por el campesino a juicio del Instituto, o se comprobare que incurrió en falsedades para acreditar los requisitos como beneficiario de la reforma agraria. La autorización para la enajenación solo podrá comprender a quienes tengan la condición de sujetos de reforma agraria y en ningún caso se permitirá el arrendamiento de la unidad agrícola familiar. || En las escrituras de adquisición de predios subsidiados por parte del Estado se anotará esta circunstancia, así como la obligación del propietario de adelantar directamente su explotación, y deberá establecerse una condición resolutoria del subsidio en favor del Incora por el término de 12 años, cuando ocurran los eventos previstos en el inciso anterior. La Junta Directiva reglamentará lo relativo a la recuperación de la cuantía entregada a título de subsidio bajo condición resolutoria. || Quien transfiera la propiedad, posesión o tenencia de la parcela adquirida mediante subsidio, no podrá ser nuevamente beneficiario de los programas de Reforma Agraria. El nuevo adquirente o cesionario será considerado poseedor de mala fe y en consecuencia no habrá reconocimiento de las mejoras que hubiere introducido en el predio. || El subsidio de tierras previsto en este Capítulo no es incompatible con otra clase de subsidios que en favor de los campesinos de escasos recursos se establezcan".

[76] Artículo 72: "No se podrán efectuar titulaciones de terrenos baldíos en favor de personas naturales o jurídicas que sean propietarias o poseedoras, a cualquier título, de otros predios rurales en el territorio nacional. || Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso anterior, en el momento de presentar la solicitud de titulación el peticionario deberá manifestar, bajo la gravedad del juramento, si es o no propietario o poseedor de otros inmuebles rurales en el territorio nacional.|| Serán absolutamente nulas las adjudicaciones que se efectúen con violación de la prohibición establecida en este artículo. || La acción de nulidad contra las resoluciones de adjudicación de baldíos podrá intentarse por el Incora, por los Procuradores Agrarios o cualquier persona ante el correspondiente Tribunal Administrativo, dentro de los dos (2) años siguientes a su ejecutoria o desde su publicación en el "Diario Oficial", según el caso. || La procedencia de esta acción se hará constar en todas las resoluciones de titulación de baldíos que expida el Incora. || Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, el Incora podrá revocar directamente, en cualquier tiempo, las resoluciones de adjudicación de tierras baldías proferidas con violación a lo establecido en las normas legales o reglamentarias vigentes sobre baldíos. || En este caso no se exigirá el consentimiento expreso y escrito del respectivo titular. En lo demás, el procedimiento de revocación se surtirá con arreglo a las prescripciones del Código de lo Contencioso Administrativo. || Para la aplicación de las prohibiciones previstas en el presente artículo, se tendrán en cuenta, además, las adjudicaciones de terrenos baldíos efectuadas a sociedades de las que los interesados formen parte, lo mismo que las que figuren en cabeza de su cónyuge, compañero permanente e hijos menores que no hayan obtenido habilitación de edad. || Ninguna persona podrá adquirir la propiedad sobre terrenos inicialmente adjudicados como baldíos, si las extensiones exceden los límites máximos para la titulación señalados por la Junta Directiva para las Unidades Agrícolas Familiares en el respectivo municipio o región. También serán nulos los actos o contratos en virtud de los cuales una persona aporte a sociedades o comunidades de cualquier índole, la propiedad de tierras que le hubieren sido adjudicadas como baldíos, si con ellas dichas sociedades o comunidades consolidan la propiedad sobre tales terrenos en superficies que excedan a la fijada por el Instituto para la Unidad Agrícola Familiar. || Quien siendo adjudicatario de tierras baldías las hubiere enajenado, no podrá obtener una nueva adjudicación antes de transcurridos quince (15) años desde la fecha de la titulación anterior. || Los terrenos baldíos adjudicados no podrán fraccionarse en extensión inferior a la señalada por el Incora como Unidad Agrícola Familiar para la respectiva zona o municipio, salvo las excepciones previstas en esta Ley. || Los Registradores de Instrumentos Públicos se abstendrán de registrar actos o contratos de tradición de inmuebles, cuyo dominio inicial provenga de adjudicaciones de baldíos nacionales, en los que no se protocolice la autorización del Incora cuando con tales actos o contratos se fraccionen dichos inmuebles. || La declaratoria de caducidad de los contratos relacionados con baldíos y la reversión al dominio de la Nación se harán sin perjuicio de los

La Corte Constitucional, además, enfatizó en la protección que la Constitución prodiga a la propiedad agraria, y expresó que el artículo 64 Superior incorpora la exigencia imperativa de adoptar medidas estructurales, de forma progresiva, para facilitar el acceso a la tierra rural por parte de los trabajadores agrarios.

La Corporación también llamó la atención acerca de cómo los indicadores económicos y sociales demuestran que los fundamentos fácticos del artículo 64 Superior se mantienen aún después de dos décadas de la entrada en vigencia de la Carta de 1991, a pesar de las iniciativas legislativas para superarlos:

> "[L]as estadísticas recogidas tanto por instituciones públicas como por centros de investigación, muestran cómo el resultado de estos esfuerzos ha sido negativo. Sin duda, no sólo a causa de deficiencias en los modelos propuestos, sino como producto de la violencia también sostenida a que se ha visto enfrentado el Estado colombiano durante más de la mitad del siglo XX, la cual ha tenido como epicentro las zonas rurales y como principales víctimas a los trabajadores campesinos. Sin entrar a distinguir la incidencia de unos y otros factores, baste con señalar que la concentración de la tierra en Colombia no ha cesado de crecer[78] y la población

---

derechos de terceros. || Las prohibiciones y limitaciones señaladas en los incisos anteriores, deberán consignarse en los títulos de adjudicación que se expidan".

[77] Artículo 83: "Las sociedades de cualquier índole que sean reconocidas por el Ministerio de Agricultura como empresas especializadas del sector agropecuario, en los términos del inciso 2o. del artículo 157 del Decreto Extraordinario 0624 de 1989 (Estatuto Tributario), o que se dediquen a la explotación de cultivos agrícolas o a la ganadería, podrán solicitar la adjudicación de terrenos baldíos en las Zonas de Desarrollo Empresarial establecidas en el artículo anterior, en las extensiones que al efecto determine la Junta Directiva del Incora, de conformidad con lo previsto en el artículo 66 de la presente Ley. || Tal adjudicación sólo será procedente cuando la explotación del baldío se haya llevado a efecto en virtud de un contrato celebrado con el Instituto, mediante el cual la sociedad se comprometa a explotar una superficie no menor de las dos terceras partes de la extensión solicitada, en los cultivos o actividad ganadera convenida, dentro de los cinco (5) años siguientes a la fecha del contrato respectivo. || Cuando la sociedad adjudicataria requiera para su explotación una extensión adicional a la inicialmente adjudicada, podrá permitirse por una sola vez la elaboración de un nuevo contrato de explotación en favor de la sociedad, hasta por una extensión igual, por un término de dos (2) años, al vencimiento del cual, si hubiere dado cumplimiento a las obligaciones contraídas, se autorizará la venta del terreno baldío conforme al precio que señale la Junta Directiva. || En todo caso, el incumplimiento de las obligaciones durante la vigencia del contrato dará lugar a la declaratoria de caducidad y a la recuperación de los terrenos baldíos".

[78] "Las cifras sobre distribución de la tierra rural en Colombia son dramáticas: Las 98.3 millones de hectáreas rurales que están escrituradas se distribuyen así: 52% son de propiedad privada, 32% de indígenas y negritudes, y el resto, 16%, del Estado. El análisis realizado cubre 32.7 millones de hectáreas en 1985 y 51.3 millones en 1996, lo que equivale al 45% de la superficie continental total (114 millones de hectáreas). (FAJARDO, 2002). En 2001, de acuerdo con las cifras que reporta Fajardo (2002), los predios menores de 3 hectáreas, cubrían el 1.7% de la superficie del país reportada en el registro nacional y estaban en manos del 57,3% de los propietarios. Mientras tanto, los predios mayores de 500 hectáreas, que cubrían el 61.2% del territorio nacional registrado, estaban en manos del 0.4% de los propietarios. Por su parte los predios entre 100 y 500 hectáreas en el año 2000, cubrían el 14.6% del territorio y estaban en manos del 2.6% de los propietarios. Es muy probable que la concentración de la propiedad se haya agravado en el último decenio, si se considera el escalamiento del conflicto armado que generó la expropiación forzada de tierra a los pequeños propietarios, y la persistencia del narcotráfico como generador de capitales especulativos,

> campesina, en todo caso, sigue siendo de las más pobres del país y la que vive en condiciones de mayor vulnerabilidad[79]"."[80]

4.12. De ahí el reconocimiento de los campesinos como titulares del derecho a acceder progresivamente a la propiedad y la obligación de las autoridades públicas de implementar estrategias efectivas para lograr un desarrollo concreto del mencionado derecho y, por esta vía, garantizar el vínculo entre el trabajador rural y la tierra, propendiendo por su permanencia en ella.[81] En ese

---

que se concentran en la compra de tierras como mecanismo de lavado de activos ilícitos. Vid. FAJARDO M. D. Para sembrar la paz hay que aflojar la tierra. Bogotá: Instituto de Estudios Ambientales – Universidad Nacional de Colombia, 2002. IGAC - Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Atlas de Colombia. 5ª Edición. Bogotá: IGAC, 2002. Citado por Luis Carlos Agudelo Patiño. "Campesinos sin tierra, tierra sin campesinos: territorio, conflicto y resistencia campesina en Colombia". En *Revista Nera, año* 13, Nº. 16 – JANEIRO/JUNHO DE 2010 – ISSN: 1806-6755, pp. 81-95. Absalón Machado C. *La Reforma Rural. Una deuda social y política.* Bogotá, Universidad Nacional de Colombia. Centro de Investigaciones para el Desarrollo, 2009, pp. 120- 123, 135-139.

[79] Dice al respecto Albán: "Según estimaciones oficiales y privadas, en Colombia hay 114 millones de hectáreas, 68 millones correspondientes a predios rurales. En 2003, el 62,6% estaba en manos del 0,4% de los propietarios y el 8,8% en manos del 86,3%. De modo que la situación empeoró entre 1984 y 2003. Y vale la pena mencionar que la estimación de las tierras aptas para ganadería es del 10,2%, y hoy se dedica a esta actividad el 41,7%. Por su parte, en 2010 el índice de Gini rural llegó a 0,89, y aumentó en un 1% desde 2002. En el cuadro 1 se compara la concentración de la propiedad entre 1984 y 2003". Lo precisa con los siguientes datos: **Concentración propiedad de la tierra, 1984-2003:** Grandes propietarios (> 500 ha) 11.136 16.352; Porcentaje del total de propietarios 0,55 0,4; Propiedad de la tierra (%) 32,7 62,6; Pequeños propietarios (0-20 ha) 2.074.247 3.223.738; Porcentaje del total de propietarios 85,1 86,3; Propiedad de la tierra (%) 14,9 8,8 (Fuentes: Planeta Paz, basado en IGAC-CEGA, e Ibáñez (2010). Vid. Álvaro Albán *"Reforma y Contrarreforma Agraria"* En. *Revista de Economía Institucional, vol. 13, n.º 24,* primer semestre/2011, pp. 327-356.

[80] Sentencia C-644 de 2012, M.P. Adriana Guillén Arango (Óp. Cit.).

[81] Sobre el derecho a permanecer en el campo, en sentencia T-227 de 1997 la Sala Séptima de Revisión se pronunció de forma explícita, así: "Por supuesto que, en principio, los campesinos de la hacienda Bellacruz, tienen derecho a su permanencia en la parcela que poseían, por eso el Incora inició el proceso de adjudicación de tierras, por ello su primer lugar de refugio fue la casa campesina en el municipio de Pelaya. Era un derecho de esas personas a permanecer en paz en su propio hogar, en su propia tierra, algo que ha sido reconocido por las Naciones Unidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 12: || *Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente por él y a escoger libremente en él su residencia… Los derechos antes mencionados no podrán ser objeto de restricciones salvo cuando éstas se hallen previstas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros, y sean compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente Pacto.* || Norma que tiene su extensión, en cuanto a los desplazados, en el pronunciamiento contenido en la Resolución 1994/24 de las mismas Naciones Unidas, que incluye el traslado en el caso de ser difícil mantener la permanencia, y de todas maneras permanece el derecho a regresar con seguridad y dignidad al lugar de origen. || Y, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 22, no solamente repite lo dicho por las Naciones Unidas sino que establece como única restricción: || *El ejercicio de los derechos anteriores no puede ser restringido sino en virtud de una ley, en la medida indispensable en una sociedad democrática, para prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden públicos, la moral o la salud públicas o los derechos y libertades de los demás.* || Como se aprecia, sólo el legislador puede restringir ese derecho de las personas a permanecer o a circular y la restricción sólo puede tener los objetivos allí señalados, es decir, que la ley restrictiva no puede alejarse de los parámetros fijados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. || Esta doble faz, PERMANECER Y CIRCULAR, y la única posibilidad restrictiva: LIMITACION ESTABLECIDA POR LA LEY, está también recogida en nuestra Constitución Política en el artículo 24: || *Libertad de locomoción y domicilio. Todo colombiano, con las limitaciones que*

contexto, puntualizó este Tribunal: *"en la medida en que el Estado sólo concentre su propósito y actividad en la producción de la tierra, olvidando su deber constitucional de vincular al campesino en dicho proceso, su actuar se tornará inconstitucional"*.[82]

En dirección similar la Corporación ha planteado la necesidad de propender por la realización del principio de democratización de la propiedad rural en favor de los trabajadores agrarios,[83] para evitar el acaparamiento de los predios —fuente de profundas desigualdades sociales— y garantizar a la población campesina más vulnerable ser titular de alguna extensión del territorio, en armonía con los mandatos superiores de acceso progresivo a la tierra y convivencia pacífica.

Con base en lo expuesto, la Corte Constitucional ha señalado que los atributos del derecho a la propiedad rural en beneficio del sector campesino son, por lo menos, los mismos que se derivan en el caso del régimen común de propiedad privada y, en consecuencia, ha establecido, sin carácter exhaustivo, cuatro extensiones del derecho en referencia: *(i)* el derecho a no ser despojado de su propiedad o forzado a deshacerse de la misma, bajo el argumento de ser improductiva, sin que antes se le otorguen alternativas para mejorar la producción o de desarrollo agrícola, como lo es el establecimiento de zonas de reserva campesina habilitadas para tal fin; *(ii)* el derecho a disfrutar de la propiedad sin intromisiones injustificadas; *(iii)* el derecho a que el Estado adopte medidas progresivas destinadas a efectivizar el acceso a la propiedad rural y el mejoramiento de su calidad de vida, en términos de dignidad humana; y *(iv)* el derecho a que se garantice su seguridad alimentaria.[84]

4.13. El Estado, entonces, se encuentra en la obligación constitucional de dirigir su actividad hacia la gradual realización del derecho al acceso a la tierra en favor de la población campesina hasta el más alto nivel de materialización que le sea posible asumir, lo cual le impone la consecuente prohibición de regresividad. Esto porque, de conformidad con lo dispuesto en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante PIDESC), el principio de progresividad integra los deberes de *(i)* adopción de medidas efectivas, *(ii)* hasta el máximo de los recursos disponibles, *(iii)* respondiendo siempre a la necesidad de avanzar o ampliar cada vez más el

---

establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en Colombia. || Es finalidad del Estado garantizar la efectividad de esos derechos (art. 2 C.P.), luego, tratándose de desplazados, a quienes se les afecta su derecho primario a residir en el lugar que deseen dentro de la República, es inhumano a todas luces afectarles también la posibilidad de circular para salvar sus vidas propias y las de sus familiares. Inclusive, el artículo 95 de nuestra Constitución establece como DEBERES de todas las personas: || *"Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas*".

[82] Ibídem.

[83] Ver principalmente las sentencias C-536 de 1997, M.P. Antonio Barrera Carbonell; y C-644 de 2012, M.P. Adriana Guillén Arango, S.V. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, S.V. Mauricio González Cuervo, S.V. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, S.V. Humberto Sierra Porto.

[84] Ibídem.

ámbito de realización del derecho, e *(iv)* impidiendo la disminución del nivel de satisfacción ya logrado.[85]

4.14. En síntesis, es claro que el dominio estatal sobre los predios baldíos, y por tanto la disposición institucional de los mismos para gestionar la respectiva adjudicación, está enmarcado por el mandato superior de función social de la propiedad, sustentado en la necesidad de evitar la concentración de la tierra en Colombia y con ello el rezago histórico de los pequeños agricultores que, no obstante otorgar su fuerza de trabajo para contribuir en el mantenimiento de la economía nacional, se han visto enfrentados a la ausencia de medidas efectivas orientadas a adquirir la titularidad de la propiedad rural.

Siendo consecuente con la realidad agraria de nuestro país, el Constituyente de 1991 incorporó en el artículo 64 de la Carta Política la obligación estatal de asegurar un acceso progresivo a la tierra. En ese marco, la expedición de normas adecuadas sobre titulación de baldíos es una de las medidas más importantes para asegurar la efectividad de los mandatos constitucionales en referencia; una vez la Nación adquiere el dominio de estos inmuebles también adopta el compromiso de diseñar políticas de desarrollo agrario en las que debe vincularse a la población campesina y, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley, adelantar la respectiva adjudicación[86]. Sólo de esta forma es posible entender que los bienes baldíos son la alternativa más valiosa para la realización del principio de democratización de la propiedad.

4.15. Ahora bien, la insistente referencia al papel protagónico de los trabajadores rurales que aquí se ha sostenido no sólo pasa por reconocer la importancia de garantizar el acceso a la tierra en los términos descritos, sino

---

[85] El numeral 1 del artículo 2 de la Parte II del PIDESC establece: "Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos". Además, esta Corte ha indicado que "la evolución de la jurisprudencia sobre el [principio de progresividad] ha determinado ciertas reglas generales, a saber: i) las medidas que constituyan un retroceso en la protección de los derechos sociales, económicos y culturales son *prima facie* inconstitucionales; ii) la libre configuración del Legislador se reduce en materia de estos derechos, en tanto que cuando éste adopte una medida que produzca una disminución en el nivel de protección alcanzado, tiene un deber de justificación conforme al principio de proporcionalidad, aun cuando exista un amplio margen de configuración; iii) la prohibición de regresividad también es aplicable a la Administración; iv) en virtud de este principio no es posible avalar la inactividad del Estado en su tarea de implementar acciones para lograr la protección integral de los derechos; y (v) en relación con las facetas prestacionales de los derechos que no son exigibles de forma inmediata, es posible solicitar judicialmente '*(1) la existencia de una política pública, (2) orientada a garantizar el goce efectivo del derecho y (3) que contemple mecanismos de participación de los interesados"*" (Ver. Sentencia C-754 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado, A.V. Luis Guillermo Guerrero Pérez y A.V. Alejandro Linares Cantillo).

[86] Esta Corporación ha dejado claro que el acceso progresivo de los campesinos a la propiedad de la tierra no tendría razón de ser si esa propiedad fuera improductiva o inútil para quien accede a ella y para la colectividad. (Sentencia C-223 de 1994, M.P. José Gregorio Hernández Galindo, S.V. Eduardo Cifuentes Muñoz).

también por el hecho de que de tal garantía depende indudablemente el ejercicio de diversos derechos fundamentales, como a continuación se explica.

5. El acceso progresivo a la propiedad de la tierra y su inescindible relación con garantías fundamentales en el caso de la población campesina

5.1. La Corte Constitucional se ha referido a la naturaleza del derecho a la tierra de la población campesina señalando, en primer lugar, que éste posee un carácter subjetivo de acuerdo con lo dispuesto en el precitado artículo 64 superior, cuyo alcance ha sido desarrollado por esta Corporación al establecer que de su realización depende la mejora de los ingresos y la calidad de vida de la población rural.[87]

En segundo lugar, ha explicado que la obligación constitucional de permitir el acceso progresivo a la propiedad rural va acompañada de la garantía de una serie de bienes y servicios básicos, de donde resulta claro que, al hacerse efectivo este derecho se satisface la dignidad humana, al hacer posible el desenvolviendo del plan de vida y el fortalecimiento de las condiciones de existencia de quienes conforman el campesinado colombiano, máxime si se tienen en cuenta las circunstancias generalizadas de vulnerabilidad a las que históricamente se ha tenido que enfrentar este sector de la sociedad y que este Tribunal ha reconocido en un amplio número de decisiones.

En tercer lugar, porque entre el campesino y la tierra se genera una relación de producción agrícola, de manera que existe un nexo directo entre el acceso a la propiedad agraria y el derecho al trabajo. Resulta imprescindible entonces no perder de vista que la adquisición de la propiedad rural por parte de los trabajadores del campo no se reduce a la mera legalización de los títulos, sino que además es fundamento del deber estatal de orientar la política pública de tierras hacia la vinculación de los campesinos, como titulares del derecho en comento, a los procesos de desarrollo agroeconómico, y rechazar la consolidación de grandes propiedades improductivas.

En cuarto lugar, el acceso progresivo a la tierra por parte de los trabajadores agrarios guarda una relación intrínseca con el derecho a la vivienda digna, en razón a la interdependencia de la población campesina con el entorno rural en el que se enmarca tradicionalmente su domicilio y lugar de residencia. Este punto adquiere una importancia adicional para las personas que han sido víctimas de desplazamiento forzado. En ese sentido, la Corporación ha dejado en claro que el Estado colombiano tiene la obligación de *"diseñar una serie de planes y políticas sociales y económicas para garantizar la satisfacción en materia de vivienda digna a dicha población, obligación que también supone*

[87] Sentencia C-623 de 2015, M.P. Alberto Rojas Ríos, en la que se reitera en gran medida lo desarrollado por la Sala Séptima de Revisión en la precitada sentencia T-763 de 2012.

un acompañamiento informativo que les permita tener claridad sobre los trámites y requisitos para acceder a las soluciones de vivienda".[88]

5.2. En la Observación General No. 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (en adelante Comité DESC) se hizo referencia a la "vivienda adecuada", en función de siete elementos que por su definición además representan un importante parámetro de protección de la propiedad rural en beneficio de los campesinos: (i) la seguridad jurídica de la tenencia, (ii) la disponibilidad de servicios, facilidades e infraestructura, (iii) el principio de gastos soportables, (iv) habitabilidad, (v) asequibilidad, (vi) lugar y (vii) adecuación cultural.

5.3. Adicionalmente, el acceso progresivo a la tierra por los trabajadores agrarios guarda un vínculo inescindible con los derechos a la alimentación adecuada y la seguridad alimentaria, cuyo referente constitucional se encuentra en el artículo 65 de la Carta Política[89] y en diversos instrumentos internacionales de protección de los Derechos Humanos.

Así, el artículo 11 del PIDESC reconoce el derecho humano a no tener hambre; el artículo 12, numeral 2º del Protocolo de San Salvador de 1988 habla sobre el derecho a la alimentación, y ambas normas establecen los deberes del estado para mejorar las formas de producción. En la Observación General No 12 del Comité DESC, intérprete autorizado del PIDESC se caracterizó el contenido del derecho a través de cuatro componentes, (i) la disponibilidad, (ii) la accesibilidad, (iii) la estabilidad, y (iv) la utilización de los alimentos. En ese sentido, se dijo que el primero de estos elementos implica no sólo la posibilidad para los individuos de alimentarse directamente, sino también la de explotar "la tierra productiva u otras formas naturales de alimentos o mediante sistemas de distribución y de comercialización que funcionen adecuadamente y que puedan trasladar los alimentos desde el lugar de producción a donde sea necesario según la demanda", en tanto que el párrafo 15 definió las obligaciones estatales para su satisfacción.

De especial relevancia resultan las palabras del Relator Especial para el Derecho a la Alimentación, al señalar que *"el acceso a la tierra es con frecuencia indispensable para asegurar el acceso a alimentos y a medios de vida, y por tanto, para garantizar que las personas estén a salvo de hambre".*[90] En efecto, es posible constatar que la disponibilidad de alimentos

---

[88] Ver, entre otras, la sentencia T-159 de 2011, M.P. Humberto Sierra Porto.

[89] Artículo 65: "La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de tierras. || De igual manera, el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incrementar la productividad".

[90] Asamblea General de la ONU. "El derecho a la alimentación: informe preparado por el Sr. Jean Ziegler, Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos, de conformidad con la resolución 56/155 de la Asamblea General del 15 de febrero de 2002". U.N. Doc. A/57/356. Párr. 30.

encuentra una manifestación directa en la cultivación de la tierra o, en otros términos, que el acceso a la segunda es fundamental para materializar la primera.

5.4. A nivel interno, es oportuno traer a colación, una vez más, a la sentencia C-644 de 2012[91], en la que la Corte se refirió al artículo 65 de la Carta en estos términos:

> "*Se trata sin duda de una disposición destinada a la salvaguarda de la producción que asegure la seguridad alimentaria interna. Al mismo tiempo, reconoce como prioridad el desarrollo integral del sector, es decir que por mandato constitucional,* ***la cuestión agraria debe ingresar a la agenda pública de las autoridades del Estado, según sus competencias y facultades****. Este apoyo estatal debe tener una visión de conjunto, como quiera que* ***ese tipo de desarrollo se alcanza con la mejora del proceso productivo y la eficiente explotación de la tierra, sin descuidar la reducción de las extremas desigualdades y consiguiente mejora de las condiciones de vida de la población campesina****.* || *La anterior descripción del precepto constitucional, cobra aún mayor sentido cuando se analiza la protección de la producción alimentaria como fundamento de dos derechos: el derecho social individual a la alimentación adecuada y a no tener hambre, y el derecho colectivo de la seguridad alimentaria, los cuales se pueden reconocer en la Constitución en diversos preceptos que ingresan con toda nitidez desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos*" (Negrilla fuera del texto original).

5.5. Sin embargo, esta Corporación ha reconocido que fenómenos como el desplazamiento forzado sobre poblaciones vulnerables —como ocurre con el sector campesino— devienen no sólo en perdida de la tierra y la vivienda, desempleo, marginación, problemas de salud física y mental y descomposición del tejido social, sino también en inseguridad alimenticia. De ahí que se haya definido la titularidad del derecho a la soberanía alimentaria en favor de aquellas personas que, al pertenecer a las comunidades rurales, dependen de la producción de alimentos en pequeña escala o de forma artesanal, atendiendo a los distintos modos de campesinado tradicional; sobre lo cual el Estado se encuentra en el deber de respetar la libre determinación de los procesos de producción.[92]

---

[91] M.P. Adriana Guillén Arango, Óp. Cit.

[92] Ver, principalmente, la sentencia T-348 de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Adicionalmente, sobre el contenido y alcance del artículo 65 constitucional pueden observarse con detenimiento las sentencias T-506 de 1992, M.P. Ciro Angarita Barón; C-262 de 1996, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-602 de 2003, M.P. Jaime Araujo Rentería; y C-864 de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil;

6. La necesidad de un enfoque diferencial, que atienda adecuadamente la situación de la 'mujer rural' en el ámbito del acceso a la tierra.

6.1. En la impugnación al fallo de primera instancia, los peticionarios y las peticionarias de este trámite señalaron que uno de los problemas que pasó por alto el juez de primera instancia es la situación especial del conjunto de mujeres que acudieron a la acción de tutela, cuya situación de afectación es diferencial en este, como en otros ámbitos.

La discriminación estructural contra la mujer es un problema que no sólo ha sido reconocido a nivel nacional, sino también en el escenario global, por lo que ha surgido la necesidad de adoptar distintas estrategias e instrumentos para suprimir este inadmisible fenómeno, tales como la *"Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer"* (y su Protocolo Facultativo) y la *"Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer"*, también conocida como *"Convención de Belém do Pará".*

Este Tribunal no es ajeno a la agenda internacional en derechos humanos y, especialmente, de los derechos de las mujeres. Resulta entonces imprescindible recordar que durante la reciente Sesión No. 63 (marzo de 2016) del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (en adelante Comité "CEDAW") adoptó la Recomendación General No. 34 *"sobre los derechos de la mujer campesina"*[93], en la que se advierte que *"varias conferencias de la ONU han reconocido el papel de la mujer rural en la agricultura, el desarrollo rural, la alimentación y la nutrición, y la reducción de la pobreza"*[94] y se reconoce la necesidad de brindar una atención específica a las mujeres rurales, tal como se indica en los Propósitos de Desarrollo Sostenible (originalmente "UN's Sustainable Development Goals").

El Comité CEDAW señala que las mujeres han enfrentado de forma sistemática y permanente diversos obstáculos para el ejercicio de sus derechos y que, en muchos casos, su situación en lugar de mejorar se deteriora. Ha considerado, además, que los Estados, en muchas oportunidades, han atendido la situación de precariedad que enfrentan las mujeres campesinas de forma insuficiente, cuando no la han ignorado abiertamente en las políticas de inversión y la legislación interna. Para terminar, cuando el ordenamiento

---

[93] Actualmente este instrumento internacional no ha sido traducido oficialmente al español, por lo que las referencias que acá se hagan se derivan de su lectura en inglés. Por ello, se aclara que el título original del documento es "General recommendation No. 34 on the rights of rural women".

[94] El 15 de octubre ha sido designado como el Día Internacional de la Mujer Rural. La 56ª reunión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU también ha tenido como tema prioritario "La potenciación de las zonas rurales las mujeres y su papel en la pobreza y la erradicación del hambre, el desarrollo y los desafíos actuales".

jurídico correspondiente incluye medidas a favor de este sector de la población, estas no se implementan de manera efectiva[95].

Desde esa óptica, el Comité afirmó que las mujeres rurales tienden a ser excluidas de procesos de liderazgo y toma de decisiones por la estructura social, situación que se agrava *"desproporcionadamente"* por fenómenos de violencia, dificultades para acceder a la justicia y ausencia de recursos judiciales efectivos.

Este primer instrumento internacional de protección de la mujer rural reconoce explícitamente los derechos a: (i) la alimentación y la nutrición, en el marco de la soberanía alimentaria; (ii) acceder, controlar, gestionar y poseer todos los recursos naturales y productivos de los cuales las mujeres agrarias dependen; (iii) un trabajo decente, incluyendo los componentes de seguridad social; (iv) las *"subjetividades interrelacionadas"* de la mujer y de sus hijas e hijos durante el embarazo, el parto y la lactancia, y en general a un servicio médico adecuado durante toda su existencia; y (v) la protección en el rol que desempeñen en la producción, procesamiento, el acceso al mercado, comercio e inversión.

6.2. En Colombia, la Ley 731 de 2002 constituye un cuerpo normativo autónomo de protección directa y preferente de la mujer rural, destinado a mejorar su calidad de vida y disponer de *"medidas específicas encaminadas a acelerar la equidad"* entre hombres y mujeres.

De igual manera, la Defensoría del Pueblo se ha encargado de advertir que el conflicto armado representa un riesgo especial para la mujer rural, pues *"la exacerbación de diversos factores asociados al conflicto ha traído como resultado nuevos escenarios de violencia, dentro de los cuales las mujeres rurales son una población especialmente afectada en sus derechos fundamentales. El castigo para garantizar obediencia es una estrategia utilizada para imponer la voluntad del actor armado a una persona o a un grupo social. En las mujeres, esta violencia para garantizar y reproducir la dominación, se presenta bajo las formas de violencia física, sexual y psicológica".*[96]

Así mismo, la Corte Constitucional ha verificado la compleja situación de los derechos humanos de las mujeres en el marco del conflicto armado que, como

---

[95] El texto original señala: "The Committee recognizes that rural women continue to face systematic and persistent barriers to the full enjoyment of their human rights and that, in many cases, conditions have deteriorated. In many States, rural women's rights and needs remain insufficiently addressed or ignored in laws, national and local policies, budgets, and investment strategies at all levels. Even where laws and policies consider rural women's situation and foresee special measures to address them, they are often not implemented".

[96] Así lo señala la Defensoría del Pueblo en su extenso e importante informe titulado "El conflicto armado y el riesgo para la mujer rural" del año 2012, en el que a partir de estudio de caso en los departamentos del Chocó, Córdoba, Santander y Caquetá, logra evidenciar los escenarios de riesgo para la mujer rural, derivados precisamente del conflicto armado.

se ha establecido en precedencia, ha generado un impacto directo principalmente en las zonas rurales de la Nación. De esta manera, en el Auto 092 de 2008 —uno de los pronunciamientos estructurales en materia de protección de la mujer en el contexto de la violencia sociopolítica—,[97] la Sala Segunda de Revisión caracterizó la agresión sexual contra las mujeres como un problema con profundas implicaciones en el orden constitucional, considerando que se ha consolidado como una práctica *"habitual, extendida, sistemática e invisible*". Con fundamento en ello, la Sala dispuso un conjunto de medidas para enfrentar y superar la impunidad frente a la victimización de la mujer, ordenando su inclusión *"dentro del más alto nivel de prioridad en la agenda oficial de la nación".*

Luego, la Sala de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004[98] profirió el Auto 009 del 27 de enero de 2015,[99] en el cual "constat[ó] la continuidad de los hechos y riesgos constitutivos de violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado y el desplazamiento forzado, que representan una situación fáctica alarmante que lesiona de manera grave los Derechos Humanos y los principios fundamentales del Derecho Internacional Humanitario". En el mismo Auto, la Sala consideró necesario incorporar la *"presunción razonable"* de conexidad entre violencia sexual contra la mujer y el conflicto interno, en aquellos lugares en donde hay presencia de actores armados con control territorial:

> "*para la Sala resulta decisivo dar relieve al factor de riesgo contextual de presencia de los actores armados en los territorios, bajo la modalidad de un control territorial y social significativo; toda vez que este permite* ***presumir de manera razonable*** *que los actos de violencia sexual allí perpetrados, se encuentran directamente vinculados con el conflicto armado y que, por ende, son un factor de nuevos desplazamientos, o un factor de revictimización para las mujeres que allí se han asentado tras haber sido desplazadas. En tal sentido,* ***las autoridades competentes deberán emplear esta presunción a fin de prevenir, atender, registrar, investigar, enjuiciar y reparar los actos de violencia sexual contra las mujeres allí ocurridas****, teniendo en cuenta esta correlación conflicto armado, presencia de actores armados, desplazamiento y violencia sexual*" (negrilla fuera del texto original).

Como puede evidenciarse, la atención que esta Corporación ha destinado a la grave problemática de los derechos humanos de las mujeres en razón del conflicto no se reduce al establecimiento de diagnósticos situacionales, sino también a la definición de estrategias institucionales que vinculan a todo el

---

[97] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[98] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. En la que se declara el estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado en Colombia.
[99] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

aparato estatal; y es por ello que se presenta la urgencia de contrarrestar las complejas condiciones de vulnerabilidad que enfrentan las mujeres campesinas, relacionadas con la potencialidad victimizante del conflicto y con las condiciones de marginalidad histórica de la población rural en general.

6.3. Para terminar, debe reiterarse lo ya concluido en distintas oportunidades por esta Corporación, al definir que los contenidos de la obligación estatal de garantizar el acceso progresivo a la tierra y el territorio en beneficio de los trabajadores rurales se relacionan, por lo menos, con cuatro aspectos, así: *(i)* el acceso formal y material, cuya efectividad se da, fundamentalmente, a través de la titulación en favor de la población campesina; *(ii)* su participación en las estrategias institucionales que propendan no sólo por el desarrollo del agro colombiano, sino también de los proyectos de vida de los trabajadores del campo; *(iii)* la garantía de seguridad jurídica sobre las distintas formas de acceder a la propiedad de la tierra, tales como la ocupación, la posesión y la tenencia, lo cual implica disponer de mecanismos efectivos para su defensa y protección de actos arbitrarios como desalojos injustificados o desplazamientos forzados;[100] y *(iv)* el reconocimiento de la discriminación histórica y estructural de la mujer, así como de su especial vulnerabilidad en contextos rurales y del conflicto, exige la adopción de medidas en su beneficio, en pos de garantizar acciones afirmativas tendientes a superar el estatus discriminatorio.

7. La problemática de los predios baldíos en Colombia no se circunscribe únicamente a la clarificación e identificación de los mismos, sino también a la efectiva adjudicación

7.1. A través de la sentencia T-488 de 2012,[101] la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional resolvió la acción de tutela interpuesta por un ciudadano que cuestionaba la actuación de una Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, que se negó a inscribir en el folio de matrícula inmobiliaria la propiedad de un bien baldío adquirido a través de una sentencia de pertenencia, dictada en un proceso civil, fundando su negativa en que los terrenos baldíos adjudicables sólo puede adquirirse mediante título otorgado por el Incoder.

En sede de revisión se encontró que la argumentación de la institución demandada era acorde con la Constitución y el ordenamiento jurídico, por lo que no sólo negó el amparo solicitado, sino que también se dejó sin efectos la sentencia que le reconoció la propiedad al accionante dentro del proceso de pertenencia adelantado.

7.2. La Sala advirtió, en esa oportunidad, acerca de la *"problemática institucional y social en torno a las tierras baldías, por falta de información y concentración de la propiedad"*, luego de observar que tras dos décadas de

[100] Sentencia T-763 de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[101] M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, S.P.V. Gloria Stella Ortiz Delgado.

vigencia de la Ley 160 de 1994, los resultados en materia de desarrollo rural y acceso a la propiedad por parte de la población campesina *"son precarios"*, pese a que el diseño de dicho cuerpo normativo –un ambicioso programa de distribución de tierras y de productividad agraria– estaba proyectado para un término máximo de 16 años.[102]

7.3. El primer problema identificado por la Sala (la falta de información) se deriva de la ausencia de estadísticas suficientes que den cuenta de la situación rural, lo que redunda un obstáculo para entender el contexto campesino en nuestro país, situación agravada por la inexistencia de un inventario de bienes baldíos de la Nación y que, a su vez, *"amenaza con desconocer los objetivos constitucionales trazados tanto por la Constitución como por la Ley 160 de 1994, en la medida que si el Incoder, como entidad responsable de la administración de los bienes baldíos, no posee un registro fidedigno sobre aspectos esenciales de los predios de la nación, es altamente probable que numerosas hectáreas de tierra estén siendo apropiadas por sujetos no beneficiarios del sistema de reforma agraria y lo peor, que no haya cómo ejercer una auditoría efectiva ante esta falta de datos confiables*".[103]

7.4. Enlazado a la anterior situación se identificó un segundo problema, relacionado con *"la concentración inequitativa de tierras de propiedad de la nación"*, que se robustece y facilita, precisamente, por la falta de datos sobre los predios baldíos existentes, la calidad real de quienes resultan ser beneficiarios de la reforma agraria y la extensión de terreno adjudicado. Dicha concentración se acreditó al observar que *"los predios con áreas adjudicadas menores a 1 hectárea representan 34.5% del total de predios y el 0.15% del área, con 35.834 Ha. Por otro lado, los predios con más de 500 hectáreas representan casi el 40% del área adjudicada y el 1.11% de los predios, impulsando un sistema de minifundio y latifundio que distorsiona el concepto de Unidad Agrícola Familiar (UAF) propuesto desde la Ley 160 de 1994".*[104]

7.5. Ante ese panorama, la Sala decidió adoptar medidas estructurales para enfrentar las situaciones problemáticas en materia de baldíos, las cuales se circunscribieron en 3 estándares jurisprudenciales, así:

(i) La clarificación e identificación de los baldíos: teniendo en cuenta la competencia del Incoder de administrar en nombre del Estado las tierras bajo dominio de la Nación y de clarificar si han salido o no del dominio estatal, se ordenó la adopción de *"un plan real y concreto, en el cual se identifiquen las circunstancias de tiempo, modo y lugar, en las cuales habrá de desarrollarse*

---

[102] Artículo 17 de la Ley 160 de 1994: "El Gobierno Nacional asignará y apropiará los recursos suficientes, tanto en el Plan Nacional de Desarrollo, en el Plan Nacional de Inversiones Públicas y en las leyes anuales de presupuesto, para adelantar los programas cuatrienales de reforma agraria elaborados por el Incora (Incoder), **a efectos de que la reforma agraria culmine en un período no mayor de 16 años**" (negrilla fuera del texto original).
[103] Sentencia T-488 de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, S.P.V. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[104] Ibídem.

un proceso nacional de clarificación de todos los bienes baldíos de la nación dispuestos a lo largo y ancho del país".

(ii) Recuperación de las tierras baldías irregularmente adjudicadas mediante procesos de pertenencia: en razón a las funciones otorgadas en el ordenamiento jurídico a la Superintendencia de Notariado y Registro, la Sala ordenó adoptar una directriz general dirigida a todas las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos y Notarías, con el fin de explicar la imprescriptibilidad de los predios baldíos, identificar supuestos de hecho que puedan dar cuenta de la presencia de un bien baldío y definir un protocolo de conducta para los casos en que los jueces de la República declaran la pertenencia sobre este tipo de bienes.

(iii) Seguimiento y control: en la providencia bajo comento se ordenó al Ministerio de Agricultura brindar acompañamiento al INCODER para el acatamiento de la sentencia y se asignó a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República vigilar el cumplimiento de la misma.

7.6. Frente a lo anterior, esta Sala de Revisión estima necesario poner de presente que si bien es la sentencia T-488 de 2014 se dictó en el marco de un caso concreto, de acceso a baldíos mediante una sentencia civil de pertenencia, la relevancia constitucional de la recuperación de los predios baldíos tiene un alcance general, pues, al estar definida como el procedimiento a través del cual se *"recuper[a] o restitu[ye] al patrimonio del Estado las tierras baldías adjudicables, las inadjudicables y las demás de propiedad de la Nación, que se encuentren indebidamente ocupadas por los particulares"*[105] y tener la finalidad de establecer si sobre los terrenos baldíos previamente clarificados existe ocupación indebida para proceder con su recuperación, se constituye en una etapa esencial para que el Estado ejerza un verdadero derecho especial de conservación, que le permita disponer de los predios para su consecuente adjudicación.

Para la Sala es claro que la situación advertida en la sentencia T-488 de 2014 no puede ser reducida al agotamiento de etapas procedimentales de clarificación y recuperación, sino que dicha problemática impone ser considerada desde la perspectiva de la función social que constitucionalmente enmarca a los bienes en mención. Ello exige que la perspectiva desde la que se analiza la importancia de los predios baldíos no se restrinja a una óptica meramente institucional, sino que adopte un enfoque social, basado en la protección especial del campesinado y la urgente materialización de su derecho a la tierra y el territorio que, en últimas, encuentra su materialización en el procedimiento de adjudicación.

Estudio del caso concreto

---

[105] Artículo 36 del Decreto Reglamentario de la Ley 160 de 1994 No. 1465 de 2013.

La Sala Plena debe resolver dos problemas jurídicos independientes, pero relacionados entre sí. El primero se refiere a la supuesta inacción del Incoder en lo que tiene que ver con la recuperación material de los predios baldíos de que trata la Resolución No. 6423 del 30 de julio de 2014 (que componen El Porvenir) y la adjudicación y titulación de los mismos a favor de la comunidad campesina de El Porvenir. El segundo tiene que ver con los problemas de seguridad que enfrenta esta comunidad y su líder, el señor Miguel Briceño por reclamar derechos territoriales sobre tales bienes.

Dado que los hechos que delimitan el segundo problema dan cuenta de factores sociales, económicos e históricos que permiten una mejor comprensión del primer problema a analizar, la Sala invertirá el orden de estudio. Resolverá primero el segundo cuestionamiento y utilizará las conclusiones que obtenga como contexto para el análisis del primero.

8. Solución del segundo problema jurídico. La situación de seguridad de los pobladores de El Porvenir

8.1. Los problemas de seguridad denunciados por la población campesina de El Porvenir se encuentran presentes en las circunstancias fácticas narradas en la acción de tutela: los actores indican que durante su permanencia en El Porvenir (Puerto Gaitán, Meta) han sido víctimas de distintos hechos violentos que, según ellos, comenzaron a ocurrir algún tiempo después de que el señor Víctor Carranza Niño (F) adquiriera la propiedad de estos terrenos en el año de 1979 y, especialmente, a raíz de la incursión de grupos armados ilegales en la zona, en la década siguiente. Estos hechos llevaron a situaciones de desplazamiento forzado interno, numerosos casos de homicidio y amenazas constantes contra la vida de los pobladores.

La narración de los peticionarios se encuentra confirmada por los conceptos e intervenciones allegados al trámite, tanto por instituciones públicas como por organizaciones de defensa de derechos humanos o de naturaleza privada. Estas últimas resultan relevantes para caracterizar el contexto histórico y la dimensión de la problemática de seguridad que se cierne sobre la inspección de El Porvenir.

Al responder la acción de tutela, la Defensoría del Pueblo (Regional Meta) dio a conocer un informe titulado *"Situación de derechos humanos de la comunidad campesina asentada en la inspección El Porvenir, Municipio de Puerto Gaitán, Meta"*, el cual surgió con ocasión de una *misión institucional de observación*, desarrollada por el órgano de control entre 19 y el 21 de agosto de 2015.

El objetivo de la incursión fue descrito en estos términos por la Defensoría: *"hacer seguimiento al tema de vulneración de Derechos Humanos y contextualización de la problemática social por conflictos territoriales que*

permita proyectar directrices y acciones institucionales. De la misma manera, hacer gestión defensorial ante la población campesina con el propósito de efectuar diversos análisis de la realidad local necesarios para la realización y goce efectivo de sus derechos como ciudadanos y ciudadanos".[106]

Según la Institución citada, la misión se desarrolló en dos momentos: (i) contacto con la personería municipal para adquirir información sobre la situación social de la vereda El Porvenir y las actuaciones desplegadas frente a los conflictos territoriales de la zona, y (ii) interacción con los residentes del lugar, con el fin de documentar las dinámicas sociales y determinar si ha habido vulneración de derechos a los pobladores y si persisten los riesgos y amenazas a su seguridad.

Los resultados presentados en el informe se relacionan principalmente con la segunda fase de la misión, que será la que tomará en consideración la Corte Constitucional. La Defensoría del Pueblo logró constatar la existencia de una extensión rural conocida como *"sabanas comunes",* en la que se ha evidenciado la existencia de cercas o linderos impuestos por personas ajenas al inmueble de El Porvenir, durante los últimos 8 meses. Para la institución

> *"[Vulnera] los derechos de las familias que históricamente han permanecido en la zona a la libre movilidad, al desarrollo de sus trabajos de cría y cuidado de bovinos, a la recolección de leña para la cocción de alimentos y de otros productos de las matas de monte o bosques, los cuales también fueron cercados.* || *Se afectó además la dinámica de los trabajadores con el ganado vacuno de al menos 25 familias ya que las cercas impiden el paso hacia los sitios de pastoreo y bebederos por el cierre de los corredores por los cuales se han movilizado de manera tradicional. Además de la tala indiscriminada de árboles para sacar los postes de las mencionadas cercas".*[107]

Así mismo, indica que constató el desarrollo de acciones pacíficas por parte de los habitantes de la vereda para la protección de los terrenos, tales como la colocación de vallas de información, para impedir el asentamiento de particulares. Además, los integrantes de la comunidad informaron a la Defensoría que se sienten atemorizados por estos hechos pues, pese a haber acudido a distintas instituciones para advertir el riesgo de desplazamiento en que se encuentran inmersos, ninguna ha hecho presencia en el lugar. En el mismo sentido, comunicaron que el líder de la junta de acción comunal de El Porvenir fue desplazado forzadamente y enfrenta amenazas contra su vida.

A partir de esta situación, la Defensoría del Pueblo concluye que *"el riesgo para la comunidad de El Porvenir y particularmente sobre la vida del señor Miguel Briceño, en su condición de líder comunitario y ciudadano de especial*

---

[106] Folio 215 del cuaderno principal No. 3.
[107] Folio 216 del cuaderno principal No. 3.

protección, es latente debido a la presencia en la zona de grupos armados sin identificar y al margen de la ley, además del resquebrajamiento del tejido social, situaciones que vienen alterando la dinámica comunitaria y que se evidenciaron en la visita de la Defensoría del Pueblo"[108], y advierte que existen hechos que agravan la situación, entre los que considera *"de atención prioritaria"* los siguientes: el programa de alimentación escolar presenta períodos en los que no hubo entrega de alimentos, o esta se dio de manera incompleta; el servicio de luz se ve interrumpido por el deterioro de la planta eléctrica; y el acueducto verbal no puede bombear el líquido vital hasta el tanque elevado, debido a la falta de energía.[109]

Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo presentó una serie de directrices a las distintas instituciones concernidas con la situación de El Porvenir: (i) requirió al Incoder efectuar una visita para conocer el contexto de derechos, escuchar a las familias residentes con permanencia histórica en la vereda, y adoptar medidas contundentes y definitivas para la recuperación de los terrenos baldíos hoy conocidos como sabana comunal; (ii) solicitó a Cormacarena tomar acciones para mitigar los daños ocasionados por la tala indiscriminada de especies maderables; (iii) instó a la Secretaría de Gobierno Departamental y al Alcalde Municipal de Puerto Gaitán para que informen sobre las medidas adoptadas para proteger la vida de los miembros del a comunidad campesina, especialmente, la del señor Miguel Briceño; (iv) requirió a las secretarías municipal y departamental de educación a hacer seguimiento y adoptar medidas para el suministro de alimentos, de manera completa y continua. La Institución señaló también que buscará la creación de un espacio para reunirse con el gobernador departamental y hacer seguimiento al plan de inversiones en obras.[110]

La Defensoría añadió que el 10 de septiembre de 2015 se llevó a cabo una reunión interinstitucional, en la que participó el Incoder y se comprometió a visitar el predio denominado El Porvenir en un término máximo de 30 días, con el objetivo de *"ejercer actos de recuperación material del mismo"* —refiriéndose a los bienes de que trata la Resolución No. 6423 de 2014—, pero aclara que, cumplido el plazo, el Incoder no brindó información de los resultados obtenidos respecto de ese compromiso, a pesar de su deber de *"revestir de fuerza ejecutoria"* la resolución 6423 de 2014 (o de revocatoria directa de las 27 adjudicaciones).[111]

8.2. En respuesta a la invitación que la Sala adelantara a distintas instituciones conocedoras de la situación de El Porvenir, en auto de 30 de marzo de 2016, el Centro de Investigación y Educación Popular —CINEP— presentó concepto técnico acerca del caso. Señaló que, con base en la información existente en su *"Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política",* la situación de

---

[108] Folio 218 del cuaderno principal No. 3.
[109] Ibídem.
[110] Folio 219 del cuaderno precitado.
[111] Folio 223 del cuaderno principal No. 3.

ejercicio de los derechos en el municipio de Puerto Gaitán se caracteriza por una grave crisis histórica, derivada de la presencia de grupos armados al margen de la ley, que se han encargado de hostigar a los habitantes de la comunidad.[112]

Manifiesta el Cinep que en el municipio de Puerto Gaitán (Meta) y sus veredas se han presentado por lo menos 67 hechos violatorios de derechos humanos desde 1987, perpetrados tanto por estructuras paramilitares, como por miembros de las guerrillas. Señaló que, de conformidad con la información contenida en el Registro Único de Víctimas, a 1º de abril de 2016 se han documentado 6528 casos de desplazamiento forzado en el municipio de Puerto Gaitán.

8.3. Un grupo de congresistas[113] presentó *amicus curiae* en el presente caso, en el que narran el seguimiento que, como miembros del órgano legislativo, han realizado a la situación de derechos humanos de los pobladores de El Porvenir.[114]

Indican que el 29 de mayo de 2012, en la Plenaria del Senado de la República, el entonces Representante a la Cámara Iván Cepeda Castro y el Senador Jorge Enrique Robledo realizaron un debate de control político al Ministro de Agricultura y a la entonces directora del Incoder, con el fin de abordar *"la problemática de tierras en Colombia".* Con ocasión de dicho evento, presentaron un informe titulado *"Las tierras del Patrón"*, en el que se dieron a conocer una serie de irregularidades alrededor de *"predios que controlaba el esmeraldero Víctor Carranza".*[115]

Añaden que, de acuerdo con los testimonios que sirvieron de insumo al informe mencionado, el despojo ilegal de tierras en el lugar se inició con la "expansión del paramilitarismo" en Puerto Gaitán y el posterior "control paramilitar de El Porvenir", originado en el año 1986, tras la llegada del grupo ilegal de "Los Masetos". Señalan que los campesinos que permanecieron en el predio afirman que "aunque la violencia y la intimidación siguió siendo una constante desde 1986, nunca tuvieron problemas con Carranza por utilizar las tierras del Hato Cabiona para criar el ganado"[116], y hacen alusión a un extenso informe de prensa publicado por la Revista Semana, donde se hablaba del crecimiento de los grupos paramilitares y su relación con el Hato Cabiona.[117]

---

[112] El informe se encuentra contenido en los folios 526 a 632
[113] Los congresistas Alberto Castilla Salazar, Alirio Uribe Muñoz e Iván Cepeda Castro.
[114] Folios 40 a 68 del cuaderno de revisión.
[115] Folio 40 del cuaderno de revisión.
[116] Folio 41 del cuaderno de revisión.
[117] "*"El Hato [Cabiona] fue mencionado en un informe especial publicado por la revista Semana en 1989, llamado El dossier paramilitar. En él se publicaron apartes de un informe de inteligencia del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en los que se mostraba el crecimiento de los grupos paramilitares en el país. Según el texto, 30 hombres armados al mando de Juan de Dios Toro alias 'Martín' delinquían en Vista Hermosa, Puerto López, Acacias y* ***Cabiona***". Ibídem.

En su intervención, los congresistas hablan también de adjudicaciones irregulares en la zona y advierten que han elevado reiteradas solicitudes de recuperación material de los predios baldíos de El Porvenir, para que se adelante el trámite de adjudicación a los beneficiarios con derecho. Sin embargo, señalan que sus solicitudes no han sido atendidas por el Incoder. De igual manera, anexaron al trámite (i) copia de una solicitud de investigación penal elevada contra el Gerente General del Incoder, por sus *"conductas y omisiones"* alrededor de los terrenos en referencia y (ii) copia de una queja disciplinaria promovida ante la Procuraduría General de la Nación por los mismos hechos[118].

8.4. La Corporación Claretiana Norman Pérez Bello presentó intervención ciudadana. Luego de hacer un recuento histórico acerca de El Porvenir y hacer referencia a la revocatoria directa adelantada a través de la Resolución No. 6423 de 2014, expresó: *"la pobreza, la miseria y el abandono reina[n] y los vestigios de corrupción aparecen por todo lado. Una institución educativa inútil dotada con 80 portátiles, pero sin luz eléctrica. Los postes destinados a la conducción eléctrica están colapsando por el paso del tiempo pero nunca fueron usados porque allí no ha llegado este servicio, un infraestructura física para el centro de salud, internado para los jóvenes y colegio pero no hay maestros, menos aún médicos o enfermeros y medicamentos, no hay posibilidades de agua potable, han permanecido condenados a la vulneración sistemática, masiva e integral de sus derechos"* (Se conserva la redacción original).[119]

8.5. La Corporación Jurídica Yira Castro allegó copia de una denuncia penal formulada ante la Fiscalía General de la Nación, por la presunta comisión de delitos contra la libertad sexual y reproductiva de los que habrían sido víctimas dos menores integrantes de la comunidad bajo referencia. Relatan, en esa dirección, que el 13 de abril de 2016, *"alrededor de la media noche varios hombres, ingresaron a las instalaciones del internado de la Inspección del Porvenir -, dirigiéndose al dormitorio de los estudiantes que utilizan el internado y al parecer intentaron abusar de las niñas, una joven de 16 años fue herida en el hecho, al parecer con un elemento corto punzante",*[120] hecho que se sumaría a el conjunto de eventos victimizantes que demuestran la desprotección en la que se encuentra la población campesina tutelante.

8.6. La información allegada al trámite, las denuncias de los peticionarios y la información de contexto incorporada por los intervinientes llevan a la Sala a considerar que existen suficientes elementos de juicio para concluir que:

(i) En la zona rural integrada por los predios baldíos a que se refiere la Resolución No. 6423 de 2014 y el centro poblado de El Porvenir se ha

---

[118] Folio 48 del cuaderno de revisión.
[119] Folio 74 del cuaderno de revisión.
[120] Folios 519 a 525 del cuaderno de revisión.

materializado un contexto de violencia con profundas raíces históricas, iniciado en el último tercio del siglo pasado.

(ii) Esta situación es un reflejo del conflicto armado interno que ha atravesado nuestro país y de la persistente relación entre este y las disputas por el dominio material de la tierra, el acaparamiento desmedido de la misma y la incursión de grupos armados al margen de la ley, en perjuicio de las poblaciones campesina, indígena y afrocolombiana.

(iii) Este contexto ha tenido consecuencias directas en el ejercicio de los derechos fundamentales de los pobladores de la zona de El Porvenir, en Puerto Gaitán, pues en el área se han presentado distintos hechos violentos, cuya perdurabilidad lleva a advertir la persistencia de riesgo a la seguridad, integridad y vida de los miembros de la comunidad campesina.

(iv) La situación descrita se agrava por la ausencia de una respuesta institucional efectiva a sus requerimientos para la protección de las tierras (aspecto en el que se profundizará en el siguiente acápite) y en la negligencia de las autoridades locales y regionales en lo que tiene que ver con la garantía de condiciones de habitabilidad dignas, como se constata en la narración de los problemas para el acceso a servicios públicos, de educación y salud de la Defensoría del Pueblo.

8.7. Para la Sala, entonces, no cabe duda de que la comunidad campesina históricamente asentada en la zona de El Porvenir (donde se encuentran los predios referidos en la Resolución No. 6423 de 2014 expedida por el Incoder), ha atravesado las consecuencias victimizantes de un contexto violento, propio del conflicto armado interno, sin que las autoridades públicas atiendan las advertencias de riesgo puestas de presente no sólo por parte de los campesinos habitantes, sino también por distintos organismos gubernamentales y particulares. Esta situación de inseguridad y ausencia de condiciones de habitabilidad adecuadas deviene en una violación del derecho fundamental a la vida digna de esta población.

Es imprescindible resaltar que el líder comunitario Miguel Briceño es uno de los objetivos centrales de estas amenazas y que su protección es un imperativo estatal inmediato, y un presupuesto para el éxito de cualquier política que pretenda recuperar la paz en las zonas rurales, y asegurar el acceso a la tierra de la población campesina. Ninguna política será efectiva, si no hay garantías adecuadas a la vida e integridad de los líderes campesinos.

8.8. Ante semejante situación, la Sala comparte lo dicho por la Sala Segunda de Decisión de Tutelas de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, al actuar como juez de segunda instancia dentro de este trámite:

> *"[R]esulta evidente que la Defensoría del Pueblo encontró amenazados algunos derechos fundamentales de la comunidad*

> *accionante, en tanto estableció que las familias allí asentadas viven en circunstancias precarias, sin acceso a servicios públicos o a condiciones dignas y óptimas de subsistencia, agudizadas por la insalubridad que implica la falta de agua potable, acueducto y un debido manejo de residuos orgánicos. […] [E]s claro que la situación en que se hallan los miembros de la comunidad actora desde hace 50 años, obedece a la problemática de tierras que impera en la zona, así como a la presencia de terceros ocupantes y actores del conflicto armado. || Sumado a lo anterior, debe tenerse en consideración que varias de las familias asentadas en El Porvenir son víctimas de desplazamiento forzado y, por tanto, son sujetos de especial protección con la sentencia de tutela T-025 de 2004, encontrándose ante la posibilidad de revictimización […]".*

La Sala confirmará entonces, en lo pertinente, la decisión de la Corte Suprema de Justicia, y las órdenes de Protección a la seguridad de la población de El Porvenir.

Como se explicó al iniciar el estudio del caso concreto, las conclusiones acerca de los problemas de seguridad de El Porvenir como contexto para solucionar el primer problema jurídico, es decir, aquel que se relaciona con el acceso a la tierra, o la restitución de la misma, a continuación la Sala abordará el análisis del mismo.

9. Estudio del primer problema jurídico. Acerca de la presunta violación al derecho al acceso a la tierra o a la restitución de tierras de la población de El Porvenir.

9.1. De acuerdo con los hechos narrados en la acción de tutela y las conclusiones presentadas en el acápite anterior, los peticionarios hacen parte de la comunidad campesina de El Porvenir, personas que hace más de cuarenta años comenzaron a hacer presencia en la zona y a ocupar los predios en disputa y a explotarlos económicamente.

Indican que por esa época (es decir, a comienzos de los años 70) el Señor Víctor Machado asumió la propiedad de las 27.000 hectáreas que componen El Porvenir[121] y que a la muerte de éste, su esposa vendió el predio al Señor Víctor Carranza (F). Añaden que, en un principio, no conocieron de estos negocios y que posteriormente no tuvieron inconvenientes con ninguna de las personas mencionadas para mantener su ganado dentro del predio.

Sin embargo, a mediados de los años 80 del siglo pasado, la aparición de grupos paramilitares cambió las cosas. Los pobladores de El Porvenir comenzaron a ser víctimas de amenazas y violaciones a sus derechos

[121] Vale la pena señalar que todos los intervinientes asumen este hecho, sin indicar cuál fue el modo de adquisición de dominio esgrimido por el Señor Machado, y sin que haya sido posible al momento encontrar pruebas documentales que permitan esclarecer este punto.

fundamentales, como homicidios y desplazamientos. En 1992, el predio se dividió en 27 lotes, de aproximadamente mil hectáreas cada uno, los cuales fueron adjudicados por el Incora a personas ajenas a la comunidad campesina.

En 2007, los predios fueron '*englobados'* en cinco grandes propiedades (El Pedregal, El Rincón, Campo Hermoso, Las Corocoras y Mi Llanura), a través de actos jurídicos protocolizados en la Notaría 4ª de Villavicencio e inscritos en el folio de matrícula. Los accionantes explican, sin embargo, que estos cinco "*nuevos*" predios —cada uno con extensión aproximada de 5.500 hectáreas— constituyen en realidad el mismo predio de El Porvenir, y que los actos jurídicos a los que se hace referencia fueron, en realidad, una estrategia de la familia Carranza para mantener el dominio material sobre esta enorme extensión, y para explotarla a través de la empresa de Ganadería La Cristalina.

Los peticionarios sostienen que nunca dejaron de ocupar y explotar los predios, en la medida en que la violencia lo permitía, ni claudicaron en la defensa jurídica de los derechos hasta que, con el acompañamiento de organizaciones de derechos humanos, lograron que el Incoder iniciara un trámite de clarificación de la propiedad de los predios que, en el año 2014, llevó a la revocatoria directa de las 27 adjudicaciones llevadas a cabo en año 1992, tras constatar que estas fueron irregulares, pues los beneficiarios eran personas ajenas al lugar, que no cumplían las condiciones de asentamiento y explotación económica necesarias para ser sujetos de reforma agraria.

Aclaran, empero, que a la revocatoria directa de esas concesiones no siguió la entrega física del predio, ni la decisión de adjudicación a su favor, como esperaban. El Incoder, afirman, se limitó a suscribir un acta de entrega voluntaria con el Señor Holman Carranza (Representante Legal de la empresa de ganadería La Cristalina).

9.2. Por su parte, el Incoder explica que con la revocatoria directa de las 27 adjudicaciones, en 2014, los predios de El Porvenir volvieron a la titularidad de la Nación; añade que, tras la inscripción de este acto en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Puerto López pudo constatar que la Ganadería La Cristalina continuaba haciendo presencia en el lugar, de manera que solicitó la devolución voluntaria de las tierras. Indica que la empresa accedió, por lo que se suscribió un acta de entrega voluntaria con su Representante, el señor Holman Carranza, el 13 de junio de 2015 y, al momento de la entrega, se efectuaron sobrevuelos para verificar el compromiso, razón por la cual no es necesario realizar ninguna gestión adicional relacionada con la entrega de El Porvenir.

Afirma que después de estos hechos se verificó la presencia de *'terceros invasores'* en el lugar, por lo que inició una querella en su contra ante la Inspección de Policía, y gestiones ínter institucionales para la protección efectiva del predio ante la Personería Municipal de Puerto Gaitán, la

Gobernación del Meta, el Inspector de Policía del Municipio de Puerto Gaitán y el Procurador General de la Nación.

Manifiesta que el 10 de septiembre de 2015 celebró una reunión con las comunidades de El Porvenir y la vereda Matarratón y recibió sus denuncias acerca de la invasión de las tierras y la existencia de estafas, amenazas y confinamientos "*que ponen en riesgo de desplazamiento forzado a los pobladores*", hechos de los cuales responsabilizan al Presidente de la asociación Asdepagral, quien, por su parte, solicitó al Instituto la adjudicación de uno de los bienes en controversia. Además, el 15 de octubre de 2015 realizó una visita al lugar, donde recibió información sobre la presencia de nuevos ocupantes y declaraciones destinadas a identificar cada grupo familiar, su época de asentamiento y la causa de su llegada al mismo.[122]

El Incoder sostiene que ha respondido un amplio número de peticiones, ha adelantado la caracterización de quienes han solicitado adjudicaciones y que, analizadas las solicitudes de adjudicación presentadas hasta el momento, ha caracterizado 421 familias, incluidas 24 indígenas que llegaron hace menos de tres meses a la zona.[123]

Afirma que en la última reunión realizada con las distintas organizaciones se establecieron los siguientes compromisos entre los interesados: (vi.1) adelantar el censo de la comunidad en la escuela de El Porvenir; (vi.2) no incurrir en agresiones físicas entre los habitantes; (vi.3) no hacer cercamientos, construcciones, cultivos ni inversiones en el predio; (vi.4) controlar y vigilar el ganado; (vi.5) no tumbar los cercamientos, ni las casas ya construidas y (vi.6) no convocar más ocupantes. Estas gestiones, precisa, tienen como propósito proteger el predio y **"*evitar conflictos sociales con los ocupantes de buena fe que puedan estar ubicados en el mismo a sabiendas que el proceso de adjudicación de baldíos obliga a su explotación continua por cinco años (5) años contados a partir de la ejecutoria de la Resolución".*[124]** (Destaca la Sala).

En su última intervención ante la Corte, el Instituto resaltó que los predios de El Porvenir son prioridad en la política de desarrollo agrario del Gobierno Nacional y puntualizó: "*el pasado 29 de enero, el Presidente de la República Dr. Juan Manuel Santos Calderón, sancionó en el Municipio de Orocué, jurisdicción del departamento de Casanare, la Ley de Zonas de Interés de*

---

[122] Folio 124 del cuaderno de revisión.

[123] En respuesta al requerimiento realizado por la magistrada sustanciadora, el INCODER manifestó que "el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER ha recibido a la fecha y con posterioridad a la recuperación material del predio, cuatrocientas catorce (414) formularios de solicitudes de adjudicación de las personas que dicen pertenecer a la Vereda El Porvenir, Vereda Matarratón Asdepagral y Asoyoposanjose. Sin embargo, dicha información se ha analizado y hoy contamos con una caracterización de cuatrocientos veintiún (421) familias incluidas las veinticuatro (24) indígenas que llegaron hace menos de tres meses a la zona". (Folio 125 del cuaderno de revisión).

[124] Folio 125 del cuaderno de revisión.

Desarrollo Rural y aprovechó la oportunidad para anunciar que 'La Finca El Porvenir' con una extensión de 42.000 hectáreas aproximadamente, 27.000 de ellas aprovechables, ubicadas en Puerto Gaitán (Meta) […] se destinarán a una iniciativa que favorecerá a más de 1000 familias campesinas de la zona", con lo cual se busca construir un *"condominio agropecuario con Junta Directiva de Gobierno, empresarios y campesinos, para desarrollar proyectos productivos"*".[125]

9.3. Como puede verse, los accionantes y el Incoder presentan una versión coincidente en lo que tiene que ver con la historia jurídica de El Porvenir, aunque exponen diferencias puntuales, inherentes al conflicto que debe resolver la Corte, y acerca de las cuales es preciso adelantar algunas conclusiones, con base en los demás elementos probatorios incorporados al expediente.

Es claro que un particular (Víctor Machado) se apoderó de un inmenso baldío de la Nación hacia el año 1970 y que, al momento de su muerte, quien fuera su esposa realizó un negocio de compraventa con otro particular, conocido en la región como comerciante de esmeraldas (Víctor Carranza (F)). También existe información suficiente acerca de que la comunidad campesina de El Porvenir se encontraba en este territorio desde la época, y explotaba el predio, mediante actividades de pequeña ganadería. La comunidad explica que, en un principio no supo de las pretensiones de dominio de Machado, ni de los negocios celebrados con Víctor Carranza (F) y que durante un tiempo fue posible mantener una relación tranquila con uno y otro.

Al expediente se ha incorporado un cuerpo amplio de documentos que describen la llegada de fuerzas paramilitares a la zona desde mediados de los años 80 del siglo pasado, y el comienzo de actos de violencia contra los pobladores de El Porvenir (ver acápite anterior); está demostrado que en 1992 el Incora entregó el predio a particulares, a través de 27 adjudicaciones individuales y que, 15 años después estas propiedades fueron englobadas en cinco grandes terrenos, mediante actos jurídicos protocolizados en la Notaría 4 de Villavicencio y registrados en el folio de matrícula. El Incoder, en el año 2014 revocó las resoluciones del año 1992 y, al hacerlo, obtuvo el consentimiento de los cinco propietarios del año 2007.

Así las cosas, esta breve recomposición de la historia jurídica demuestra que El Porvenir fue, primero, un predio apropiado por particulares, explotado por campesinos, calificado como baldío por el Estado, fragmentado estratégicamente en 27 fracciones para ser adjudicado en el marco de la reforma agraria y posteriormente, convertido en cinco grandes propiedades, en el marco de los protocolos notariales y la inscripción en el registro, ya sin ánimo de aparentar validez legal alguna (dado que la extensión de los predios hacía evidente la ilegalidad de los negocios).

---

[125] Folio 128 del cuaderno de revisión.

Las diferencias en las versiones (accionantes e Incoder) tienen que ver con el ‘antes’ y el ‘después’ de que se desplegaron, se consolidaron y se desenmascararon esas estrategias jurídicas de consolidación de un derecho de propiedad espurio. Primero, en torno a la entrega material del predio; segundo, acerca de quiénes son sus ocupantes y cuándo se asentaron en el lugar; tercero, acerca de si existen o no solicitudes de adjudicación por parte de los campesinos de El Porvenir. Entra la Sala a analizar cada uno de esos puntos en controversia.

9.3.1. Acerca de la entrega material del predio.

Como se explicó, el Incoder afirma que recibió los predios a través de la suscripción de un acta por parte del señor Holman Carranza, a nombre de La Cristalina, y que confirmó la entrega mediante un sobrevuelo al lugar, y añade que sólo con posterioridad a esa decisión ha percibido la presencia de terceros a los que denomina invasores en el lugar. La comunidad plantea que La Cristalina nunca se ha retirado de El Porvenir y que actualmente existen nuevos ocupantes, al parecer, llevados por la empresa mencionada.

Es claro para la Sala que la suscripción de un acta no puede considerarse equivalente a la entrega material del predio, especialmente, cuando el propio Instituto encargado de verificar su eficacia aclara que no ha adelantado gestión distinta a un sobrevuelo inicial. En ese sentido, además de los hechos ampliamente descritos, resultan contundentes las afirmaciones de los órganos de control que, para la Sala, merecen absoluta credibilidad. Veamos,

La Defensoría del Pueblo (Regional Meta) afirma que el Incoder no dio a conocer las actuaciones que demostrarían la entrega voluntaria de El Porvenir, ni explicó las condiciones materiales en las que se habría producido su devolución.

La Procuraduría 14 Judicial II Ambiental y Agraria del Meta, Guaviare y Guainía (en adelante, la Procuraduría 14), presenta un diagnóstico mucho más detallado y preocupante para la Corte: manifiesta que, al momento de suscripción del acta de entrega voluntaria, el Incoder no hizo un reconocimiento de los predios; explica que estos podrían hallarse invadidos y *“en manos de personas extrañas a las personas que dicen estar desde mucho tiempo en el predio”;* sostiene que, tanto particulares como el extinto Incora, desconocieron el ordenamiento jurídico en este trámite y añade que, aun conociendo tales irregularidades, el Instituto incumplió sus obligaciones de recibir físicamente los predios, adelantar un censo de las personas que se encontraban en el inmueble, determinar el tiempo de ocupación y establecer circunstancias de desplazamiento forzado, con miras a formalizar los terrenos, en coordinación con la Unidad de Restitución de Tierras.

Con base en lo expuesto, el órgano de control califica como inaceptable que el Incoder haya omitido una verificación acerca de la estabilidad de la entrega de El Porvenir después de un proceso agrario de más de tres años y haya preferido dejar el asunto en manos de las mismas personas a quienes se les ha requerido la entrega de las tierras, lo que considera una burla al Estado y a quienes tendrían derecho a la restitución de estas.

Así las cosas, en lo que tiene que ver con la entrega del predio, la Sala comparte en lo sustancial las observaciones de la Procuraduría Regional citada: la entrega material de El Porvenir no se ha verificado, y no resulta admisible ni desde la Constitución ni desde el respeto a la Ley que el Incoder cifre sus afirmaciones y conclusiones en la supuesta buena voluntad de los empresarios de La Cristalina, e intente atribuir toda la responsabilidad por los problemas (históricos y actuales) del predio a otras autoridades.

La negligencia demostrada por la Institución en lo que tiene que ver con la materialización de la entrega del predio constituye un hecho de especial gravedad, pues esta etapa es indispensable para que el Estado ejerza un verdadero derecho especial de conservación sobre sus predios; más allá de ser una mera ficción jurídico-legal, susceptible de ser demostrada por la suscripción de un compromiso de un particular, la recuperación material del bien es un hecho que requiere verificación física y un seguimiento adecuado, que permita constatar su efectividad.

9.3.2. De la supuesta inexistencia de peticiones administrativas de adjudicación.

El Incoder afirma que la comunidad de El Porvenir nunca elevó una petición formal de adjudicación, mientras que los peticionarios y las peticionarias señalan que sí han puesto su situación en conocimiento de la entidad y que siguen en espera de una respuesta determinada, clara y definitiva.

La Sala comienza por indicar que, ciertamente, las actuaciones administrativas deben iniciarse a través de una petición concreta de los ciudadanos por lo que, en principio, parecería comprensible que el Incoder afirme que no toda queja es equivalente al ejercicio del derecho de elevar peticiones respetuosas. Sin embargo, en el contexto del caso concreto y la situación histórica de El Porvenir, la posición del Instituto desconoce el principio de prevalencia del derecho sustancial, pues (i) las comunicaciones de los peticionarios dan cuenta de su pretensión de adjudicación,[126] (ii) la Defensoría del Pueblo y la

[126] En los folios 300 a 311 del cuaderno de revisión obra copia de una solicitud suscrita por alrededor de 100 personas, el 23 de abril de 2015, quienes solicitan directamente al Incoder: *"Se inicien los trámites de ley correspondientes a la adjudicación de los predios que componen "El Porvenir" ubicado en Puerto Gaitán, meta, a las familias campesinas que componen la Junta de Acción Comunal de El Porvenir, lista que se adjunta a esta petición"*. Así mismo, en los folios 312 a 343 del cuaderno de revisión obra una nueva solicitud elevada por 153 ciudadanos adicionales, quienes piden: "*1. Se sirva reconocer los derechos que tenemos las familias del Porvenir quienes cumplimos y sobrepasamos el tiempo de permanencia u ocupación en el predio y el porcentaje de*

Procuraduría General de la Nación han instado al Instituto para que dé respuesta sobre la procedencia de adjudicarles los predios, e incluso (iii) se ha llevado a cabo una audiencia en el Congreso de la República con el mismo propósito.

No cabe duda de que, en semejante escenario, las comunicaciones de los peticionarios deben interpretarse como una petición formal en los términos del artículo 23 Superior, y dar lugar a una respuesta de fondo por parte de la Institución, ya sea para iniciar el estudio de las solicitudes de adjudicación o para guiar el inicio de los trámites respectivos.

Asimismo, no puede perderse de vista que, de acuerdo con lo informado con el Incoder en sede de revisión, luego de haberse levantado el acta de entrega documental del baldío por parte del señor Holman Carranza, el Instituto ha recibido 421 formularios de solicitudes de adjudicación, que actualmente se encuentran en trámite de estudio. De esta manera, no es cierto, entonces, que no existan solicitudes directas por parte de un elevado número de aspirantes a la titulación del inmueble.[127]

9.3.3. Sobre los ocupantes de El Porvenir.

En lo que hace a la ocupación del predio, los peticionarios señalan que se encuentran en la zona que ocupa El Porvenir desde hace 45 años, mientras que el Incoder ha efectuado dos afirmaciones sobre el punto, en las que se omite cualquier mención a esta comunidad. Primero, indicó que en el marco del trámite de revocatoria directa de las 27 adjudicaciones del año 1992, encontró que sólo la empresa La Cristalina explotaba el predio (visita técnica del año

---

explotación establecido en la ley, y que hemos habitado este lugar desde hace más de 40 años, que hemos sido poseedoras antes de las declaratorias de nulidad decretadas y que en la actualidad podemos demostrar con un mejor derecho sobre la tierra (para este efecto, enviamos adjunta a la presente solicitud un listado de las familias que hacen parte de la Comunidad del porvenir, y a su vez pertenecen a la Junta de Acción Comunal con Personería Jurídica No. 916 del 15 de octubre de 1974).|| 2. Se sirva iniciar formalmente el proceso de adjudicación en favor nuestro de las parcelas que fueron englobadas en los predios El Rincón Las Corocoras, El Pedregal, Comare y Campo Hermoso".|| 3. Se sirva realizar la adjudicación del predio El Porvenir en cabeza de nuestras familias, de acuerdo a las pruebas aportadas y a la información geográfica suministrada en esta solicitud, en la cual se describen los linderos e información espacial del predio solicitado.|| 4. Acumule y tramite las solicitudes de adjudicación de baldíos (23 de abril y la presente) que fueron realizadas por núcleo familiar y que se adjuntan a la presente solicitud. Así mismo, se adjuntan al presente documento los formatos que fueron entregados a los funcionarios del INCODER el día miércoles 7 de octubre de 2015 que aquí se señalan". Así mismo, en folio 476 del cuaderno de revisión obra copia de una solicitud que a manera de urgencia la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello solicitan: "*Al señor Presidente Dr. Juan Manuel Santos, al señor Gerente del INCODER Dr. Ariel Borbón, Ministro de Agricultura Dr. Aurelio Iragorri a cumplir la Constitución Nacional y la Ley 160 y a hacer efectiva la recuperación de los predios de 28 mil hectáreas y a adjudicarlas a los campesinos pobres, víctimas de la violencia que han soportado la tragedia y están en el territorio desde hace más de 45 años*"; dicha solicitud fue allegada directamente al INCODER el 27 de abril de 2015, y de ello obra prueba en el folio 428 del cuaderno de revisión.

[127] Ver respuesta del Incoder y relación de los solicitantes en los folios 125 y siguientes del cuaderno de revisión.

2013); y, después, en respuesta a un requerimiento de la Corte Constitucional señaló que sólo después de la revocatoria comenzó a percibir la presencia de 'invasores'.

La Sala considera que la respuesta del Incoder no es aceptable, si se analiza dentro del contexto histórico y el conjunto de intervenciones, informes y conceptos técnicos incorporados al trámite. Todos estos confirman la versión de los accionantes y, especialmente, así lo hacen la Defensoría del Pueblo[128] y la Procuraduría General de la Nación[129]. Este conjunto de intervenciones presentan una narración coherente y consistente, en la que se parte de la presencia de la población campesina de El Porvenir desde los años 70 del Siglo pasado[130].

---

[128] En la respuesta dada a la tutela, el Defensor del Pueblo – Regional Meta allegó al juez de primera instancia un informe de intervención realizado en El Porvenir por dicha institución, en el que se detallan los resultados de la interacción con los pobladores, así: "*La Inspección El Porvenir de Puerto Gaitán se encuentra ubicada sobre la rivera del Río Meta, aproximadamente a 80 kilómetros al oriente del casco urbano de este municipio; se llega por vía carreteable, transitable en época de verano pero con grandes dificultades durante el invierno. Así mismo se accede a través de transporte fluvial el cual se ofrece todos los días durante la época lluviosa (meses de abril a noviembre). El centro poblado cuenta con aproximadamente 80 familias, representados por una Junta de Acción Comunal cuyo presidente es don Miguel Briceño. No cuenta con servicios de agua ni luz en el poblado a pesar que las redes y postería de la luz ya han llegado hasta allá; así mismo, hay toda una infraestructura para el acueducto comunal que tampoco está prestando el servicio porque no hay energía para las plantas de tratamiento ni para bombear el agua al tanque elevado de distribución.|| Las historias que refieren sus habitantes aluden hechos violentos a los cuales han estado sometidos históricamente, desde 1987 cuando llegó don Víctor Carranza a la región y posteriormente los grupos paramilitares; incluso han muerto violentamente varios integrantes de la comunidad, entre ellos, dos presidentes de la Junta de Acción Comunal.|| Durante el último año han estado muy visitados por "los Derechos Humanos", se refiere así la población a organizaciones que han venido verificando la situación por el problema de las tierras o lo que ellos llaman las "sabanas comunales", las cuales fueron tituladas al señor Víctor Carranza, títulos que fueron revocados por haberse comprobado la ilegalidad con que fueron adelantados los procesos. Después que INCODER emitió la Resolución 6423 de 2014 y de que el doctor Juan Manuel Santos anunciara la devolución de los predios mencionados, se han dado una serie de ocupaciones de hecho que preocupan a las familias que históricamente han estado en la zona"*. (Informe completo en los folios 214 a 223 del cuaderno principal No. 3).

[129] En la respuesta dada a la acción te tutela, la Procuradora 14 Judicial II Agraria y Ambiental del Meta, Guaviare y Guainía manifestó ante la primera instancia que con ocasión de las denuncias conocidas a nivel nacional respecto de la situación del predio El Porvenir, se acordó con la Policía regional adelantar una visita a la zona, luego de lo cual el cuerpo policial comunicó que en efecto en la zona se encuentra asentada una comunidad que dicen ser los pobladores históricos de los terrenos, pero también se observó la presencia de "*personas realizando cercados en los terrenos comunales*", así mismo, la Procuradora señala que "*al parecer la invasión de los terrenos del predio El Porvenir siguieron (sic) y a pesar del acta de recibido del predio por parte del Incoder el predio se encuentra en manos de personas extrañas a las personas que dicen estar desde hace mucho tiempo en el predio*"; en tal virtud, el representante del Ministerio Público indicó que "*el Incoder debe tener las herramientas necesarias para una vez que se haya recuperado los bienes baldíos en este caso del predio El Porvenir, realice la vigilancia de los mismos y deje las constancias de quienes se encuentran en los mismos, para asegurar a las personas que se hallen en estos terrenos su derecho bien sea de adjudicación o de restitución de tierras*". (La respuesta completa obra en los folios 302 a 308 del cuaderno principal No. 3).

[130] Folios 189 a 502 del cuaderno de revisión. Allí se encuentran una serie de "fichas de visitas domiciliarias" realizadas por la Corporación Claretiana "Norman Pérez Bello", en donde se registra la descripción de las viviendas ubicadas en El Porvenir y sus ocupantes. Además, obra un derecho de petición en el que solicita al Incoder adelantar el trámite de adjudicación en favor de las familias campesinas beneficiarias, al que se anexó la relación de los grupos familiares que aparentemente

La Sala destaca, además, que la Unidad de Tierras, en respuesta al requerimiento de la Corte da cuenta de un hecho que contribuye a confirmar las denuncias descritas. La Unidad afirma, de forma sucinta, que a partir de los folios de matrícula referidos por la Corte en el auto de pruebas (los de los cinco predios, producto del 'englobe' del año 2007) resultó posible establecer que estos hacen parte de una zona *microfocalizada.* Ello indica, primero, que estos predios también se encuentran dentro del proceso de restitución de tierras previsto en la Ley 1448 de 2011. Segundo, que hubo hechos de violencia entre el año 1985 y el día de hoy, tal como lo indican las denunciadas relatadas.[131]

Por supuesto, también los accionantes y los órganos de control han informado acerca de la aparición reciente de nuevos ocupantes, tal como lo hace el Incoder. Pero es claro que estos últimos no pueden confundirse con quienes llevan medio siglo viendo afectados sus derechos y (al menos) dos décadas asumiendo una compleja disputa legal y jurídica por su titularidad. Si esta confusión se produce, ello obedece precisamente a las actuaciones y especialmente las omisiones del Incoder frente a la situación de El Porvenir.

No corresponde a la Corte evaluar la situación específica de cada una de las 421 familias que actualmente esperan una decisión del Incoder. Esta actividad deben adelantarla dicho Instituto y la Unidad de Tierras, en el marco de sus competencias. Pero es irrazonable que se ignore la presencia histórica de la población de El Porvenir o que se asimile a la de posibles ocupantes actuales (de hace tres meses, según las palabras del Incoder) como lo hace el Incoder, al afirmar que ninguna de las familias que pueden hallarse hoy en día en El Porvenir podría acreditar una explotación pacífica del mismo por más de cinco años, dado que el baldío regresó a la Nación hace apenas algo más de un año.

Para la Corte, sin lugar a dudas, está comprobada la existencia de una situación de violación de derechos de una población campesina, tanto por la ausencia de una respuesta a su aspiración de obtener la adjudicación de los predios, como a raíz del conflicto armado interno.

Una vez establecidas las conclusiones fácticas, la Sala hará referencia a lo que implican estos hechos desde el punto de vista de los principios constitucionales y la vigencia de los derechos fundamentales de las y los peticionarios.

10. De la calificación constitucional de los hechos probados

---

tendrían derecho de titulación sobre los bienes baldíos. Igualmente, se allegó copia de un documento en el que se advierte al Procurador General de la Nación la invasión de estos inmuebles por parte de supuestas personas sin derecho sobre los mismos, quienes aparentemente vendrían imponiendo linderos en el lugar. Finalmente, obran distintas quejas y denuncias interpuestas con ocasión de presuntos hechos victimizantes ocurridos en contra de los pobladores.

[131] Folios 131 a 134 del cuaderno de revisión.

10.1. El Porvenir es un caso emblemático en lo que tiene que ver con los problemas históricos del acceso a la tierra para la población campesina, el despojo por vías legales e ilegales, y la restitución de predios a las víctimas del conflicto armado interno reciente.

La extensión del predio, el número de familias interesadas, el conjunto de negocios irregulares, la protocolización de los mismos, el uso del registro para la inscripción de la propiedad y las adjudicaciones efectuadas por el Incora, por una parte; y las presiones de hecho ejercidas sobre los campesinos de El Porvenir, por otra, dan cuenta de la dimensión social del asunto.
La decisión inequívoca de las autoridades públicas de enfrentar la ilegalidad de sus propias actuaciones, representada por la revocatoria directa de las 27 adjudicaciones del año 1992 no ha cambiado de forma notoria la situación de los campesinos. Actualmente, su destino se decide por dos caminos distintos, incomunicados entre sí y con desenlace incierto. Por una vía, el Incoder omite responder a su aspiración de adjudicación, aunque deja en claro que no pretende reconocer derecho alguno sobre el predio, pues considera que nadie puede cumplir los requisitos para ser titular del predio recién recuperado, y añade que este posee un valor estratégico para futuros proyectos productivos. Por otro sendero, la información allegada por la Unidad de Restitución de Tierras indica que los predios se hallan en un trámite de restitución de tierras, que, en principio, debe llevar a una decisión de la justicia de tierras.

Pero desde el punto de vista del goce efectivo de los derechos de los pobladores de El Porvenir, ambos trámites podrían resultar inocuos, pues el Estado no ha asegurado la tenencia física y material de los predios, ni su protección frente a quienes históricamente los ocuparon indebidamente. Es así como, mientras pasa el tiempo sin una respuesta para la comunidad de El Porvenir, nuevos ocupantes aparecen día tras día, lo que agrava la situación social en la zona y cierne nuevas amenazas sobre los derechos territoriales de quienes por cerca de cincuenta años persiguen la formalización de sus derechos sobre la tierra.

10.2. La Corte debe advertir que la apropiación de un bien ‘baldío’ de casi 30.000 hectáreas por parte de un particular es un hecho que refleja claramente la inequidad en el acceso, distribución y uso de la tierra que caracteriza la historia colombiana. Esta actitud no equivale a la colonización campesina que ha defendido el Estado, sino a una conducta abusiva y lesiva de los derechos de quienes ya se hallaban explotando el lugar y que, por ausencia de ciertos conocimientos, no impidieron la consumación del hecho. Se trata de un bien que debe satisfacer los derechos de muchos, utilizado en beneficio de una sola persona, como consecuencia de la ineficiencia estatal para la adecuada conservación y administración de los baldíos.

10.3. La celebración de negocios sobre esos predios, primero a través de una compra venta entre privados, y después con las solemnidades propias de la

escritura pública y el registro, evidencian la participación de notarios y oficinas de registro en los espacios en que las formalidades legales chocan con la informalidad (jurídica) de la vida rural, siempre en detrimento del más débil. La estrategia del 'englobe' constituye una maniobra más para la constitución o conservación de grandes propiedades, en las que se ahogan las expectativas de reforma agraria intentadas en tres momentos de la historia reciente.

10.4. La intervención de la entidad que el Estado diseñó para llevar a cabo la reforma agraria muestra la última faceta de esta historia de despojo: la adjudicación de predios a personas que no los explotan, en grandes extensiones, y ajenas a los propósitos de democratización del acceso a la tierra, a través de un modelo de desarrollo rural, basado en el campesino propietario. Así, el Incora, en su momento, privilegió intereses poderosos sobre los de la población campesina tutelante, y su decisión permaneció incólume por más de dos décadas, hasta que, a raíz de una enorme presión social y una política pública decidida a asumir seriamente los problemas rurales, hizo insostenible la situación jurídica creada en 1992 en El Porvenir.

10.5. La comunidad campesina afectada muestra otra dimensión de los problemas esenciales asociados a la inequidad en las áreas rurales. La dificultad de los trámites jurídicos, la carencia de dinero y la ausencia de una asesoría legal adecuada, llevaron a que durante años se conformaran con explotar pacíficamente una tierra, con la supuesta aquiescencia de un gran propietario. La violencia, luego, le impidió mantener ese arreglo precario, pues tornó prioritaria la supervivencia. Y, actualmente, enfrenta la posición asumida por el Incoder en este trámite: nadie puede haber ocupado ni explotado *tranquilamente* esos predios, salvo el gran propietario.

Esta última respuesta resulta inadmisible, pues el Instituto no sólo ignora que los peticionarios son víctimas del conflicto, sino que le atribuye consecuencias negativas a los hechos de violencia padecida, como la imposibilidad de demostrar una explotación *pacífica* de los predios.

Pero, al mismo tiempo que el Incoder omite responder las solicitudes de los peticionarios, como le corresponde en el marco de sus funciones legales y su misión institucional, deja entrever una respuesta definitiva, al advertir que el predio es estratégico para planes de desarrollo del Gobierno Nacional. La Sala debe ser enfática en rechazar este proceder. El Incoder tiene la obligación legal de definir las solicitudes de adjudicación a través de actos administrativos motivados y no mediante afirmaciones ambiguas, que no le permiten al ciudadano el ejercicio de los recursos y el control judicial de los actos de la administración.

10.6. En este sentido, la respuesta dada por el Incoder a la acción de tutela y a los requerimientos de información de la Corte demuestra una confusión en torno al objetivo de la recuperación de baldíos, los derechos fundamentales de

la población rural en el marco de la reforma agraria, y de las víctimas del conflicto, en el contexto de las medidas de transición.

El Instituto no es el administrador de un predio de propiedad privada, sino el órgano encargada por la Ley de cumplir misiones trascendentales en nuestro Estado social de derecho: asegurar el acceso a la tierra a los campesinos y contribuir a revertir el despojo asociado al conflicto armado interno. Resulta entonces imprescindible que la Corte recuerde una vez más que la finalidad de la recuperación de baldíos no se agota en la restitución del patrimonio estatal, sino que persigue la eficacia de los artículos 64 y 65 de la Constitución: los baldíos son el principal instrumento para propiciar el acceso a la tierra y la equidad en el campo (al, respecto, ver sentencias C-595 de 1995 y C-644 de 2012, previamente citadas).
10.7. Como se explicó en la sentencia C-644 de 2012 no corresponde a la Corte definir la política de desarrollo agrario del país, pero sí es su obligación advertir acerca de los límites que la Constitución le impone, y adoptar las decisiones normativas pertinentes cuando estos sean desconocidos.

En ese contexto, preocupa a la Sala que el Incoder niegue la existencia de derechos de los campesinos en El Porvenir en sus respuestas a la acción de tutela y al mismo tiempo anuncie la vinculación de miles de familias a grandes proyectos productivos. Ese aviso, en un escenario en el que una población campesina, víctima de graves violaciones de derechos humanos, ha luchado durante medio siglo por el acceso a la tierra, constituye una nueva violación de sus derechos. Ninguna política de este tipo puede crearse, implementarse o adelantarse hasta que no se defina la concerniente a los derechos de la población campesina tutelante.

10.8. Algo similar ocurre con la afirmación según la cual ninguno de los peticionarios podrá demostrar que ha explotado de forma continua y pacífica el predio por un tiempo de cinco años, pues sólo hasta 2014 El Porvenir fue recuperado por el Estado. Esa idea, plausible en situaciones ordinarias, se torna irrazonable en un contexto en el que las autoridades públicas permitieron y legitimaron distintas formas de apropiación indebida del bien, y descuidaron por completo la seguridad de la tenencia para los campesinos del lugar.

Ciertamente, la Ley 160 de 1994 exige una explotación continua para lograr la adjudicación de un baldío, bajo el lema histórico de que la tierra es de quien la trabaja. Pero el Estado no puede utilizar ese principio para extinguir o violar derechos de la población rural, cuando la posibilidad de cumplir esa exigencia se ve frustrada por su incapacidad para mantener el orden público y su complacencia con los sujetos causantes del despojo.

10.9. En conclusión, los hechos analizados en este trámite comprometen, de una parte, los principios de reforma agraria incorporados en la Constitución (acceso para los campesinos a la tierra y el territorio, función social y ecológica de la propiedad, seguridad alimentaria y fomento al agro) y, de otra,

los derechos de las víctimas del conflicto armado. En consecuencia, la Sala considera que el juez constitucional de segundo grado si bien abordó con suficiencia el análisis de estos últimos, no ocurrió así con los primeros, respectivamente.

En virtud de lo expuesto, la Sala modificará la decisión de segunda instancia en lo que tiene que ver con el derecho de los peticionarios a que se defina su situación de acceso a la tierra. En consecuencia, ordenará al Incoder que adelante gestiones para la entrega material del bien, con verificación y control administrativo y policial. Requerirá a la Unidad de Tierras y al Incoder para que definan una ruta de acción conjunta en torno a la población de El Porvenir, y ordenará a todas las autoridades públicas concernidas en este trámite que se abstengan de tomar decisiones que afecten la naturaleza jurídica del predio.

Ante un terreno como El Porvenir debe surgir una articulación institucional destinada a garantizar un correcto y eficaz proceso de titulación (o de restitución) en beneficio de la población campesina —previo cumplimiento de los requisitos legales—, en atención al principio de moralidad administrativa.[132]

11. Órdenes a impartir por parte de la Sala Plena de la Corte Constitucional, en relación con cada uno de los problemas jurídicos resueltos

i) Frente al primer problema jurídico

11.1. A partir de las conclusiones expuestas, la Sala concederá el amparo a los derechos fundamentales al acceso progresivo a la tierra y el territorio en favor de los campesinos que, cumpliendo con los requisitos dispuestos en la Ley 160 de 1994, sean sujetos de reforma agraria, y de quienes tengan derecho a la restitución de tierras, de acuerdo con la Ley 1448 de 2011.

En atención al deber constitucional de articulación e integración institucional al que se ha hecho alusión en esta providencia, se ordenará consolidar una mesa de trabajo interinstitucional de la que harán parte el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, la Agencia Nacional de Tierras, la Unidad de Restitución de Tierras, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la Superintendencia de Notariado y Registro, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, y la Policía Nacional para que, de forma conjunta, y en el marco de

[132] En la sentencia C-046 de 1994, la Sala Plena de la Corte Constitucional se refirió a la moralidad administrativa en los siguientes términos: "abarca toda la gama del comportamiento que la sociedad en un momento dado espera de quienes manejan los recursos de la comunidad y que no puede ser otro que el de la absoluta pulcritud y honestidad".

sus competencias legales, adopten un plan estratégico destinado a que en el término máximo de un año se logre:

- Establecer si en los predios baldíos de que trata la Resolución No. 6423 del 2014 continúa haciendo presencia la empresa ganadera “La Cristalina”, ya sea de forma directa o a través de terceros. En caso de así corroborarse, adelantar la recuperación material de dichos bienes. Esta deberá incluir visitas inter institucionales a las distintas áreas de El Porvenir e informes periódicos que permitan corroborar la eficacia y estabilidad de la entrega.

- Censar a la población ocupante de los terrenos baldíos consignados en la Resolución No. 6423 del 2014 y definir quiénes serían sujetos de reforma agraria, de acuerdo con lo dispuesto en le Ley 160 de 1994.

- Realizar un intercambio de información entre el Incoder y la Unidad de Tierras, de manera que sea posible establecer qué parte de El Porvenir se encuentra en el trámite de restitución, cuál debe ingresar a ese proceso, y cuál seguirá el cauce del trámite administrativo de adjudicación.

- Advertir al Incoder acerca de su obligación de evaluar los requisitos de reforma agraria, de manera que no se imponga a los peticionarios una carga que no pueden cumplir por negligencia y corrupción estatal. Es decir, debido a la permisión del Estado a la apropiación de El Porvenir por parte de un actor privado poderoso, en perjuicio de un amplio número de familias campesinas, según los hechos descritos en esta providencia. Bajo esa perspectiva, el Instituto deberá adelantar e impulsar hasta su culminación el proceso de adjudicación de bienes baldíos, de que trata la Ley 160 de 1994 y sus respectivas normas reglamentarias.

- De acuerdo con las consideraciones vertidas en la parte motiva de esta providencia acerca de la situación de la ‘mujer rural’, el Incoder y la Unidad de Tierras deberán definir, adoptar e implementar medidas afirmativas para la población femenina en el marco de sus competencias legales; por ejemplo, que al momento de realizar la titulación, esta se suscriba a nombre de la mujer, o de los dos cónyuges o compañeros permanentes. Para el efecto, deberán tomar en consideración el marco legal definido por la Ley 731 de 2002.

- Solicitar a la Unidad de Restitución de Tierras continuar el procedimiento de microfocalización iniciado en torno a los predios de El Porvenir, con el fin de determinar quiénes son los miembros de la población campesina que poseen derechos en el marco específico de la Ley de víctimas y restitución de tierras e impulsar hasta su culminación los procesos judiciales a que haya lugar, para lo cual se solicitará a los órganos de control prestar apoyo inmediato a la Unidad.

11.2. El estricto cumplimiento de estas órdenes será objeto de seguimiento judicial por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Villavicencio, en su calidad de juez de primera instancia dentro la acción de tutela de la referencia, al cual las instituciones que integran la mesa de trabajo aquí consolidada deberán remitir, en el término máximo de 2 meses y con copia a la Corte Constitucional, el plan estratégico adoptado; momento a partir del cual comunicarán informes trimestrales de progreso.

ii) Frente al segundo problema jurídico

11.3. Sobre la resolución del segundo problema jurídico formulado (seguridad de la población de El Porvenir), la Sala confirmará la sentencia de segunda instancia, proferida el veintiséis (26) de noviembre de dos mil quince (2015) por la Sala No. 2 de Tutelas de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que resolvió amparar el derecho fundamental a la vida en condiciones de dignidad y ordenar la conformación de un comité de seguimiento y planteamiento de soluciones a la problemática de inseguridad registrada en los predios de El Porvenir (haciendo referencia tanto al centro poblado de la vereda como a los bienes baldíos de que trata la Resolución No. 6423 del 2014 del Incoder).

Sin embargo, la Sala requerirá a las autoridades vinculadas al comité de verificación creado por el Juez constitucional de segunda instancia, para que asegure la integridad y la vida del señor Miguel Briceño, incluso, mediante nuevas medidas, adecuadas y efectivas para su situación de líder campesino.

Además, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos contenidos en la acción de tutela, relacionados no sólo con violaciones de derechos humanos, sino también con supuestos actos de corrupción y negligencia institucional, esta Sala considera necesario remitir copias del expediente de tutela a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, para que, en el marco de sus competencias constitucionales y legales, adelanten las investigaciones que estimen pertinentes. Igualmente, en relación con las denuncias y quejas que ya se encuentran en trámite, se instará a las instituciones en mención a fortalecer sus esfuerzos en el conocimiento de dichos asuntos.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución

RESUELVE

Primero.- Levantar la suspensión de términos decretada mediante Auto del diecinueve (19) de mayo de dos mil dieciséis (2016).

Segundo.- CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia de segunda instancia, proferida el veintiséis (26) de noviembre de dos mil quince (2015) por parte de la Sala Segunda de Decisión de Tutelas de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la cual se resolvió revocar parcialmente el fallo de primer grado, proferido el ocho (8) de octubre de dos mil quince (2015) por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Villavicencio y conceder el amparo al derecho a la seguridad personal de los peticionarios; **REVOCAR** la decisión de negar el amparo del derecho al acceso a la tierra y, en consecuencia, **CONCEDER** la tutela del derecho fundamental a la tierra y el territorio en favor de la población campesina que cumpla con los requisitos para ser sujetos de reforma agraria, en relación con los predios baldíos de que trata la Resolución No. 6423 del 30 de julio de 2014, expedida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural.

Tercero.- ORDENAR al Comité creado en el numeral dos (2) de la parte resolutiva del fallo de segunda instancia que, en el término de diez (10) días, remita a esta Corporación un informe detallado en el que se exponga el nivel de cumplimiento y los resultados de gestión alcanzados, y a partir de ese momento comunicar avances cuatrimestrales a la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Villavicencio, con copia a la Corte Constitucional.

Cuarto.- ORDENAR la constitución de una nueva mesa de trabajo interinstitucional para solucionar la situación del derecho a la tierra y el territorio de la comunidad campesina de El Porvenir, e incorporar los siguientes parámetros para lograr ese cometido.

La Mesa de trabajo estará integrada por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, la Agencia Nacional de Tierras, la Unidad de Restitución de Tierras, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la Superintendencia de Notariado y Registro, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, y la Policía Nacional, con el fin de que, conjuntamente y en el marco de sus competencias legales, adopten un plan estratégico destinado a que en el término máximo de un (1) año, contado a partir del día siguiente a la notificación de esta providencia, se logre:

(i) Establecer si en los predios baldíos de que trata la Resolución No. 6423 del 2014 continúa haciendo presencia la empresa ganadera “La Cristalina”, ya sea de forma directa o a través de terceros. En caso de así corroborarse, adelantar la recuperación material de dichos bienes. Esta deberá incluir visitas interinstitucionales a las distintas áreas de El Porvenir e informes periódicos que permitan corroborar la eficacia y estabilidad de la entrega.

(ii) Censar a la población ocupante de los terrenos baldíos consignados en la Resolución No. 6423 del 2014 y definir quiénes serían sujetos de reforma agraria, de acuerdo con lo dispuesto en le Ley 160 de 1994.

(iii) Realizar un intercambio de información entre el Incoder y la Unidad de Tierras, de manera que sea posible establecer qué parte de El Porvenir se encuentra en el trámite de restitución, cuál debe ingresar a ese proceso, y cuál seguirá el cauce del trámite administrativo de adjudicación.

(iv) Advertir al Incoder o a quien haga sus veces, acerca de su obligación de evaluar los requisitos de reforma agraria, de manera que no se imponga a los peticionarios una carga que no pueden cumplir por negligencia y corrupción estatal. Es decir, debido a la permisión del Estado a la apropiación de El Porvenir por parte de un actor privado poderoso, en perjuicio de un amplio número de familias campesinas, según los hechos descritos en esta providencia. Bajo esa perspectiva, el Instituto deberá adelantar e impulsar hasta su culminación el proceso de adjudicación de bienes baldíos, de que trata la Ley 160 de 1994 y sus respectivas normas reglamentarias.

(v) De acuerdo con las consideraciones vertidas en la parte motiva de esta providencia acerca de la situación de la 'mujer rural', el Incoder y la Unidad de Tierras deberán definir, adoptar e implementar medidas afirmativas para la población femenina en el marco de sus competencias legales; por ejemplo, que al momento de realizar la titulación, esta se suscriba a nombre de la mujer, o de los dos cónyuges o compañeros permanentes. Para el efecto, deberán tomar en consideración el marco legal definido por la Ley 731 de 2002.

(vi) Que la Unidad de Restitución de Tierras continúe el procedimiento de microfocalización iniciado en torno a los predios de El Porvenir, con el fin de determinar quiénes son los miembros de la población campesina que poseen derechos en el marco específico de la Ley de víctimas y restitución de tierras e impulsar hasta su culminación los procesos judiciales a que haya lugar, para lo cual se solicitará a los órganos de control prestar apoyo inmediato a la Unidad.

(vii) Una vez se hayan cumplido con las labores de identificación, verificación de requisitos y proceso de adjudicación, la Superintendencia de Notariado y Registro deberá velar por la formalización efectiva de las titulaciones.

El cumplimiento de estas órdenes será objeto de seguimiento judicial por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Villavicencio, en su calidad de juez de primera instancia dentro la acción de tutela de la referencia, a la que las instituciones que integran la mesa de trabajo aquí consolidada deberán remitir, en el término máximo de dos (2) meses y con copia a la Corte

Constitucional, el plan estratégico adoptado; momento a partir del cual deberán comunicar informes trimestrales de progreso.

Quinto.- REMITIR COPIAS de este proceso a la Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación y Contraloría General de la República, para que en el marco de sus competencias constitucionales y legales adelanten las investigaciones que estimen pertinentes. Además, se les insta a redoblar sus esfuerzos institucionales frente al conocimiento de las denuncias y quejas que ya se encuentran en trámite, con ocasión de los hechos contenidos en la acción de tutela estudiada en esta providencia.

Sexto.- LÍBRESE por Secretaría de esta Corporación la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Presidenta

LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado

ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada

JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
Ausente con incapacidad

JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
Impedimento aceptado

ALBERTO ROJAS RIOS
Magistrado

LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
Ausente con permiso

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Dr Alberto Ramos Romero

126

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL
DISTRITO JUDICIAL VILLAVICENCIO

JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA
Puerto López - Meta

PROCESO	*ACCIÓN DE TUTELA*
ACCIONANTE	*MARTHA YANETH HERNANDEZ MEDINA y OTROS*
ACCIONADO	*AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS*
RADICADO	*505733184001-2018-00024-00*

Veinticuatro (24) de abril de dos mil dieciocho (2018).

ASUNTO:

Se decide la ***Acción de Tutela*** promovida a través de apoderado por los señores, *Martha Yaneth Hernández Medina, Barney Sorza Guzmán, José Orlando Carabalí Rivera, Alba Georgina Salgado Rojas, Libia Barahona Riveros, Nohora Benítez, Alberto Fernando Zornosa Manrique, María Concepción Poveda, Fredy Rodríguez Triana, María Ninfa Montenegro Mora, Camilo Andrés Prieto Rocha, Julio Humberto Prieto Briñez, Luis Ilvar Pulido Pinilla, Pedro Pablo Lesmes Novoa y Bernardo Figueroa Castrillón*, en contra de la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS (ANT) representada legalmente por el Dr. MIGUEL SAMPER STROUSS, al considerar vulnerados su derechos fundamentales a la vida digna, a la tierra y el territorio, por lo que solicitan "*... **1. RECONOCER Y DECLARAR** a los aquí tutelantes como legítimos ocupantes de los predios baldíos ubicados en la vereda el PORVENIR, Municipio de Puerto Gaitán... **2. TUTELAR Y AMPARAR** los derechos fundamentales a la tierra y la vida digna... **3. ORDENAR** a la Agencia Nacional de Tierras **SALVAGUARDAR Y PROTEGER** los derechos de los tutelantes a ocupar y explotar legalmente los predios baldíos que cada uno tiene y ocupa. **4.** Se **ORDENE** a la Agencia Nacional de Tierras, que en el término perentorio de **CINCO (5) DÍAS**, proceda a proferir la resolución de adjudicación de los predios ocupados y explotados económicamente a cada uno de los tutelantes..."*

ANTECEDENTES:

1.- Los accionantes ocupan y explotan económicamente predios que se encuentran ubicados en la vereda el porvenir, municipio de Puerto Gaitán y que detallan en un listado de 16 predios, vistos en el numeral 1 del acápite Hechos del escrito de tutela.

127

2.- Los ocupantes de cada uno de los predios vienen ejecutando los actos propios de ocupación y radicaron solicitud de adjudicación ante el antiguo INCODER en fechas señaladas en listado de 16 personas, visto en el numeral 2 del acápite Hechos del escrito de tutela.

3.- A la presente fecha la Hoy Agencia Nacional de Tierras no ha dado una respuesta a las solicitudes de adjudicación radicadas.

4.- La administración pública tiene la obligación de responder oportunamente y en un tiempo razonable, las solicitudes que presentan los ciudadanos.

5.- Los predios aquí ocupados tiene la calidad de baldíos de la Nación, de acuerdo a la Resolución No. 6423 del 30 de julio de 2014 expedida por el INCODER.

6.- Los predios baldíos ocupados no tienen ninguna protección especial, ni restricción registrada en los folios de matrícula inmobiliaria que impida o restrinja la ocupación.

7.- El artículo 4 de la Resolución No. 6423 del 30 de julio de 2014, revoca las anteriores resoluciones de adjudicación, retira del ordenamiento jurídico los actos administrativos, los que dejan de tener vigencia y no producen efecto alguno.

8.- Lo anterior confirma que los predios ocupados tienen jurídicamente la calidad de baldíos desde hace más de 25 años.

9.- El artículo 7 de la Resolución No. 6423 del 30 de julio de 2014, ordena la restitución de los bienes dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria y posterior a ello, ordena desalojo, sin que determine a favor de quien es la restitución.

10.- Ni el INCODER, ni la Agencia Nacional de Tierras ha tomado posesión, ni ocupado, ni administrado los predios del PORVENIR de que trata la Resolución No. 6423 de 2014. Se hizo una reunión en el centro poblado EL PORVENIR que llamaron *Toma de Posesión Simbólica* del Porvenir, donde la Agencia Nacional de Tierras a través de su director, manifestó públicamente que se respetarían los derechos de todos los ocupantes de los predios.

11.- Cada uno de los predios ocupados no supera la Unidad Agrícola Familiar (UAF), de acuerdo con los lineamientos de la ley 160 de 1994, y sus decretos reglamentarios 2664 de 1994 y 1071 del 2015.

12.- Mediante Resolución No. 041 de 1996 se determinaron las extensiones de la UAF en la regional Meta y para el Porvenir corresponde una cabida máxima de 920 hectáreas.

128

13.- Ninguno de los predios ocupados se enmarca en las excepciones previstas en la ley que permita aplicar una cabida inferior a la UAF.

14.- Ninguno de los predios ocupados supera la UAF establecida por la Ley.

15.- La Corte Constitucional estudió el tema de los predios Baldíos de la Nación ubicados en la vereda del porvenir del municipio de Puerto Gaitán-Meta, sentencia SU 426 del 2016.

16.- Ninguna de las órdenes emitidas en la sentencia citada han sido cumplidas por la Agencia Nacional de Tierras.

17.- Los funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras, bajo la dirección de la Dra. Marcela Orduz han visitado los predios y realizado reuniones con la comunidad y les han dicho a los ocupantes que los aquí tutelantes no tienen derecho a los predios ocupados y van a ser desalojados; que la tierra es para entregarla a las personas que presentaron la tutela que terminó con la sentencia SU 426 del 2016; han emitido órdenes escritas de suspensión de trabajos a los ocupantes de los predios. Abogados que integran el equipo de la Agencia Nacional de Tierras han sindicado a los ocupantes de delitos como invasión de tierras, concierto para delinquir; han amenazado que van a denunciar y meter a la cárcel a los ocupantes y han exigido documentos de las inversiones y origen de esos dineros.

18.- Los actos anteriores han generado zozobra, inseguridad y miedo.

19.- La mayoría de tutelantes el 7 de diciembre de 2017, radicaron derecho de petición a la Agencia Nacional de Tierras en su sede Bogotá, con radicación No. 20176200994592, en la que solicitaban la resolución de adjudicación del predio que ocupan, de acuerdo con la solicitud presentada ante INCODER META.

20.- El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Villavicencio, el 2 de febrero de 2018, ordenó a la Agencia Nacional de Tierras, dar respuesta al derecho de petición.

21.- Por correo electrónico el 20 de febrero la ANT contestó el derecho de petición indicando que han realizado actividades en cumplimiento del plan estratégico como visitas institucionales para la recuperación de los predios, realización de actos de señor y dueño en los predios, promover acciones policivas en contra de las personas que busquen apropiarse indebidamente de los predios, están ejecutando acciones como caracterización de los ocupantes, caracterización predial y determinación de áreas, caracterización agronómica de los predios e identificación de posibles traslapes.

22.- Continúan con la respuesta dada al derecho de petición señalando que se les dijo que está por determinar quiénes son sujetos de acceso a tierras conforme a la UAF correspondiente y una vez se concluya, la ANT

procederá a expedir los actos administrativos de adjudicación de cada uno de los beneficiarios, dentro de los términos de ley.

23.- Que no se entiende como la ANT pretende modificar la UAF.

24.- Muchas actividades que se reseñan en el citado oficio no se ajustan a la verdad.

25.- Los tutelantes reclaman el titulo de propiedad de los predios ocupados.

26.- Estas ocupaciones han sido y son respetadas por toda la comunidad del Porvenir y no han sido objeto de controversias a nivel policivo o judicial.

27.- Todos los ocupantes han actuado conforme a la ley.

28.- La Honorable Corte Constitucional se ha pronunciado sobre la adjudicación de baldíos y referencian la sentencia C-595 de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz

Aporta como sustento probatorio:

.- Fotocopia de FORMATO SOLICITUD ADJUDICACIÓN BALDÍOS – personas naturales del INCODER, presentado por **Martha Yaneth Hernández Medina**, con sello de recibido 18/02/2016 (folio 40).
.- Fotocopia de plano predio TRANQUILANDIA (folio 41).
.- Fotocopia de documento de identidad del accionante señor **Martha Yaneth Hernández Medina**, C.C. 40.417.851 (folio 42)
.- Fotocopia de FORMATO SOLICITUD ADJUDICACIÓN BALDÍOS – personas naturales del INCODER, presentado por **Barney Sorza Guzmán**, con sello de recibido 26/11/2015 (folio 43).
.- Fotocopia de documento de identidad del accionante señor **Barney Sorza Guzmán**, C.C. 17.335.228 (folio 44).
.- Fotocopia de documento de identidad de la señora **Olga Bonilla González**, C.C. 40.396.480 (folio 45).
.- Fotocopia de escrito presentado por el señor **Barney Sorza Guzmán** al Incoder Meta, de fecha 22 de enero de 2016, asunto: Inclusión en la titulación predio finca ojo de agua; sin sello de recibido (Folios 46 al 48).
.- Fotocopia de plano predio OJO DE AGUA (folio 49).
.- Fotocopia de FORMATO SOLICITUD ADJUDICACIÓN BALDÍOS – personas naturales del INCODER, presentado por **José Orlando Carabalí Rivera**, sin sello de recibido (folio 50).
.- Fotocopia de documento de identidad del accionante señor **José Orlando Carabalí Rivera**, C.C. 17.385.776 (folio 51).
.- Fotocopia de plano predio VILLA CAMILA (folio 52).
.- Fotocopia de FORMATO SOLICITUD ADJUDICACIÓN BALDÍOS – personas naturales del INCODER, presentado por **Alba Georgina Salgado Rojas**, con sello de recibido por el INCODER de fecha 26/11/2015 (folio 53).

.- Fotocopia de documento de identidad de la accionante, señora **Alba Georgina Salgado Rojas**, C.C. 1.120.866.882 (folio 54).
.- Formato consulta en base de datos del predio "El Gaván" con anotación "solicitud en estudio" (folio 55).
.- Fotocopia de plano predio EL GAVAN (folio 56).
.- Fotocopia de FORMATO SOLICITUD ADJUDICACIÓN BALDÍOS – personas naturales del INCODER, presentado por **Álvaro Ropero**, con sello de recibido por el INCODER con fecha 26/11/2015 (folio 57).
.- Fotocopia de documento de identidad del accionante, señor **Álvaro Ropero**, C.C. 86.035.508 (folio 58).
.- Fotocopia de plano predio LOS CUATRO (folio 59).
.- Fotocopia de FORMATO SOLICITUD ADJUDICACIÓN BALDÍOS – personas naturales del INCODER, presentado por **Libia Barahona Riveros**, con sello de recibido por el INCODER, con fecha 26/11/2015 (folio 60).
.- Fotocopia de documento de identidad de la accionante, señora **Libia Barahona Riveros**, C.C. 40.398.267 (folio 61).
.- Fotocopia de plano predio LA POLVOROSA (folio 62).
.- Fotocopia de FORMATO SOLICITUD ADJUDICACIÓN BALDÍOS – personas naturales del INCODER, presentado por **Nora Benítez**, sin sello de recibido (folio 63, 64).
.- Fotocopia de documento de identidad de la accionante, señora **Nora Benítez**, C.C. 40.382.147 (folio 65).
.- Fotocopia de plano predio MORICHAL (folio 66).
.- Fotocopia de FORMATO SOLICITUD ADJUDICACIÓN BALDÍOS – personas naturales del INCODER, presentado por **Alberto Fernando Zornosa Manrique**, con sello de recibido por el INCODER, con fecha 26/11/2015 (folio 67).
.- Fotocopia de documento de identidad del accionante, señor **Alberto Fernando Zornosa Manrique**, C.C. 1.121.857.587 (folio 68).
.- Fotocopia de plano predio COROCORAS (folio 69).
.- Fotocopia de FORMATO SOLICITUD ADJUDICACIÓN BALDÍOS – personas naturales del INCODER, presentado por **María Concepción Poveda Murcia**, con sello de recibido por el INCODER, con fecha 18/02/2016 (folio 70).
.- Fotocopia de documento de identidad de la accionante, señora **María Concepción Poveda Murcia**, C.C. 21.180.404 (folio 71).
.- Fotocopia de plano predio EL MILAGRO (folio 72).
.- Fotocopia de FORMATO SOLICITUD ADJUDICACIÓN BALDÍOS – personas naturales del INCODER, presentado por **Fredy Rodríguez Triana**, con sello de recibido por el INCODER, con fecha 18/02/2016 (folio 73).
.- Fotocopia de documento de identidad del accionante, señor **Fredy Rodríguez Triana**, C.C. 86.053.881 (folio 74 y 75).
.- Fotocopia de plano predio EL PORVENIR (folio 76).
.- Fotocopia de FORMATO SOLICITUD ADJUDICACIÓN BALDÍOS – personas naturales del INCODER, presentado por **María Ninfa Montenegro Mora**, sin sello de recibido por el INCODER (folio 77).
.- Fotocopia de documento de identidad de la accionante, señora **María Ninfa Montenegro Mora**, C.C. 40.411.497 (folio 78).
.- Fotocopia de plano predio CABIONA (folio 79).

.- Fotocopia de FORMATO SOLICITUD ADJUDICACIÓN BALDÍOS – personas naturales del INCODER, presentado por **Camilo Andrés Prieto Rocha**, sin sello de recibido por el INCODER. (folio 80).
.- Fotocopia de documento de identidad del accionante, señor **Camilo Andrés Prieto Rocha**, C.C. 1.122.650.489 (folio 81).
.- Fotocopia de plano predio LA BENDICION (folio 82).
.- Fotocopia de FORMATO SOLICITUD ADJUDICACIÓN BALDÍOS – personas naturales del INCODER, presentado por **Julio Humberto Prieto Briñez**, sin sello de recibido por el INCODER. (folio 83).
.- Fotocopia de documento de identidad del accionante, señor **Julio Humberto Prieto Briñez**, C.C. 17.322.702 (folio 84).
.- Fotocopia de plano predio LA CALAVERA (folio 85).
.- Fotocopia de FORMATO SOLICITUD ADJUDICACIÓN BALDÍOS – personas naturales del INCODER, presentado por **Luis Ilvar Pulido Pinilla**, sin sello de recibido por el INCODER (folio 86).
.- Fotocopia de documento de identidad del accionante, señor **Luis Ilvar Pulido Pinilla**, C.C. 79.523.930 (folio 87).
.- Fotocopia de plano predio SAN FELIPE (folio 88).
.- Fotocopia de FORMATO SOLICITUD ADJUDICACIÓN BALDÍOS – personas naturales del INCODER, presentado por **Pedro Pablo Lesmes Novoa**, sin sello de recibido por el INCODER (folio 89).
.- Fotocopia de documento de identidad del accionante, señor **Pedro Pablo Lesmes Novoa**, C.C. 40.077.146 (folio 90).
.- Fotocopia de plano predio LOS PATOS (folio 91).
.- Fotocopia de FORMATO SOLICITUD ADJUDICACIÓN BALDÍOS – personas naturales del INCODER, presentado por **Bernardo Figueroa Castrillón**, con sello de recibido por el INCODER, con fecha 26/11/2015 (folio 92).
.- Fotocopia de documento de identidad del accionante, señor **Bernardo Figueroa Castrillón**, C.C. 10.552.303 (folio 93).
.- Fotocopia de plano predio LA TRINIDAD (folio 94).
.- Formato de **Actas Internas y Externas** de fecha 01/02/2017, previa reunión del Administrador Javier Cortes Rico con la señora MARIA CONCEPCION POVEDA (Accionante) en la cual le prohíbe la explotación del predio sobre el que ejerce posesión hasta tanto acredite ante la ANT la propiedad mediante certificado de tradición y libertad, escritura u otro documento. (folio 95).

ACTUACIÓN JUDICIAL:

La solicitud de amparo constitucional fue admitida en auto del 10 de abril de 2018, el que se le notificó a la accionada AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS al correo electrónico institucional juridica.ant@agenciadetierras.gov.co, y se le requirió vía telefónica, siendo atendidos por la Doctora LEIDY STERLING en el número 5185858 ext. 1212, sin que dieran contestación, guardando completo silencio.

Igualmente se vinculó a la PROCURADURIA AGRARIA y AMBIENTAL DEL META, quien dio contestación señalando que en efecto se presenta una vulneración al debido proceso, el cual conlleva la obligación de evitar dilaciones injustificadas, agregando que dentro de los alcances de la

132

sentencia SU 426 de 2016, concedió el amparo del derecho fundamental a la tierra, en favor de la población campesina que cumpla con los requisitos para ser sujeto de reforma agraria en relación con los predios baldíos de que trata la Resolución No. 6423 del 30 de julio de 2014. Agrega que el juez constitucional no tiene elementos de juicio para declarar a los accionantes como legítimos ocupantes de los predios, ni comparte la petición de impartir la orden para que en el término de cinco (5) días proceda a proferir las resoluciones de adjudicación de baldíos, ese plazo, en caso que se acceda debe ser perentorio para tal fin teniendo en cuenta la complejidad del mismo.

CONSIDERACIONES.-

En primer lugar, cabe señalar que en el presente asunto, si bien es cierto, respecto del predio El Porvenir de que trata la presente acción constitucional se profirió por parte de la Honorable Corte Constitucional la Sentencia SU-426 de 2016, en la que se emitieron órdenes respecto de la adjudicación de los predios baldíos de que trata la Resolución No. 6423 del 30 de julio de 2014, podría pensarse que se estaría frente a una acción constitucional temeraria[1], también lo es, que se confrontaron los nombres, estableciéndose que NO existen coincidencias entre unos y otros accionantes.

Para desarrollar el caso puesto en consideración del Juez Constitucional se debe señalar que el problema jurídico planteado es:

1.- ¿La AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS (ANT), vulnera los derechos fundamentales constitucionales de los aquí accionantes al no permitirles que ocupen y exploten legalmente los predios baldíos que cada uno tiene y ocupa?

2.- ¿La ANT vulnera los derechos fundamentales constitucionales de los aquí accionantes al no resolver las solicitudes de adjudicación de los predios ocupados y explotados económicamente, previa verificación del cumplimiento de los requisitos legales?

Frente al **primer problema jurídico**, debe precisarse que los **predios baldíos** son bienes públicos de la Nación catalogados dentro de la categoría de bienes fiscales adjudicables, en razón de que la Nación los conserva para adjudicarlos a quienes reúnan la totalidad de las exigencias establecidas en la ley.

Así mismo la Ley 160 de 1994, señala en su artículo 65: *"La propiedad de los terrenos baldíos adjudicables, sólo puede adquirirse mediante título traslaticio de dominio otorgado por el Estado a través del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, o por las entidades públicas en las que se delegue esta facultad... Los ocupantes de tierras baldías, por ese solo hecho, no tienen la calidad de poseedores conforme al Código Civil, y*

[1] Art. 38 del Decreto 2591 de 1991.

frente a la adjudicación por el Estado sólo existe una mera expectativa". (Lo subrayado para destacar).

A su vez el inciso 2o. del artículo 69 de la misma norma señala que: "En todo caso, deberá acreditarse una ocupación y explotación previa no inferior a cinco (5) años para tener derecho a la adjudicación. La ocupación anterior de persona distinta del peticionario, no es transferible a terceros, para los efectos contemplados en este inciso.".

Las normas antes citadas, están encaminadas a garantizar que los ocupantes efectivamente cultiven la tierra de manera adecuada, y que protejan las áreas de reserva que estén ubicadas a su interior. Con ello se garantiza el cumplimiento de las funciones económica y ecológica de la propiedad. Otros requisitos están encaminados a garantizar que los predios ocupados sean aptos para la agricultura, lo cual se deduce mediante una fórmula que tiene en cuenta tanto la extensión del predio como su capacidad agrológica. Este requisito está dirigido a proteger los intereses económicos de los ocupantes y la sostenibilidad en el uso de la tierra, garantizando que efectivamente puedan derivar su sustento de la propiedad rural, a la vez que se previene la subutilización y sobreexplotación de la tierra.

De tal manera, sólo pueden acceder a los baldíos las personas que no sean propietarias de otros bienes rurales[2], y cuyo patrimonio se encuentre por debajo de determinado tope máximo. Así mismo, es posible que el Gobierno les dé prioridad en el acceso a los baldíos a ciertos sectores especialmente vulnerables de la sociedad, a través de programas específicos. Es así como el Gobierno ha diseñado programas dirigidos especialmente a las víctimas del conflicto armado, o de desastres naturales, y a las mujeres cabeza de hogar, según la facultad establecida en la misma Ley 160 de 1994.

Ahora bien, conforme a las pruebas acompañadas, se establece que en efecto, los accionantes radicaron ante el INCODER hoy AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS (ANT), las solicitudes de adjudicación de los predios que ocupan y que hacen parte de los terrenos baldíos de que trata la Resolución No. 6423 del 2014, luego entonces, no hay duda alguna que se tratan de legítimos ocupantes, más sin embargo, esa ocupación no les da derechos reales sobre los predios ocupados, hasta tanto no le sean titulados, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley.

Así mismo, corresponde al Estado en cabeza de sus entidades y órganos de control, proteger a las personas en estado de debilidad manifiesta, víctimas del desplazamiento forzado, en este caso, de campesinos que han sido azotados por el conflicto armado, pues como es de público conocimiento, el territorio ocupado por los aquí accionantes ha sido zona azotada durante muchos años por integrantes al margen de la ley, en

[2] El artículo 72 de la Ley 160 de 1994 señala: "**ARTÍCULO 72.** *No se podrán efectuar titulaciones de terrenos baldíos en favor de personas naturales o jurídicas que sean propietarias o poseedoras, a cualquier título, de otros predios rurales en el territorio nacional*".

especial paramilitarismo, tal como se reseña en la sentencia SU 426 DE 2016, en la que se describe de manera clara como fue la ocupación de la Vereda El Porvenir del Municipio de Puerto Gaitán - Meta, por parte de integrantes de grupos armados al margen de la ley, siendo victimizadas todas las familias moradoras de la región.

Igualmente, es deber del Estado a través de sus entidades (en el presente caso la ANT) acompañar a los campesinos para que puedan explotar económicamente los predios, y así iniciar el proceso de adjudicación. Es decir, la obligación que adquirió el gobierno, una vez restituido el predio, era la de seguir el trámite legal necesario para adjudicarles los predios baldíos a quienes cumplieran los requisitos legales para ello y no iniciar acciones para impedir que quienes se encuentra ocupándolos se abstengan de explotarlos, tal como se aprecia en el documento a folio 95, en el que le indican a la señora MARIA CONCEPCION POVEDA la prohibición de realizar trabajos de encerramiento y de cultivar el predio ocupado por ella y del cual, está solicitando la adjudicación ante el INCODER, conforme se desprende del documento visto a folio 70, que contiene el sello de recibido por esa entidad desde el 18 de febrero de 2016, pues esta no es la esencia o finalidad que persigue la ANT, sino la de verificar el cumplimiento de los requisitos subjetivos y objetivos para reclamar la adjudicación por parte de los ocupantes.

Finalmente, puede afirmarse que al tratarse de población víctima de desplazamiento forzado son sujetos de especial protección constitucional y acreedores de un tratamiento diferencial por parte del Estado. Así lo ha reconocido la jurisprudencia Constitucional[3]. Al respecto, la Sentencia T-025 de 2004 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), sostuvo:

> *"También ha resaltado esta Corporación que, por las circunstancias que rodean el desplazamiento interno, las personas –en su mayor parte mujeres cabeza de familia, niños y personas de la tercera edad - que se ven obligadas 'a abandonar intempestivamente su lugar de residencia y sus actividades económicas habituales, debiendo migrar a otro lugar dentro de las fronteras del territorio nacional' para huir de la violencia generada por el conflicto armado interno y por el desconocimiento sistemático de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario, quedan expuestas a un nivel mucho mayor de vulnerabilidad, que implica una violación grave, masiva y sistemática de sus derechos fundamentales y, por lo mismo,* ***amerita el otorgamiento de una especial atención por las autoridades:*** *'Las personas desplazadas por la violencia se encuentran en un estado de debilidad que los hace merecedores de un tratamiento especial por parte del Estado'."* (resaltado fuera de texto)

En ese orden de ideas, si bien es cierto, no es deber del juez constitucional declarar o reconocer la calidad de ocupantes de predio baldíos a los aquí accionantes, no lo exime de amparar los derechos fundamentales constitucionales a la vida en condiciones dignas, al trabajo y a la vivienda de los accionantes, víctimas del conflicto armado, para que se les respete su derecho a la explotación de los predios ocupados y se les brinde el acompañamiento por parte de la AGENCIA NACIONAL DE

[3] Ver también las sentencias T-419 de 2003 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra), SU-1150 de 2000 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) y T-076 de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva)

TIERRAS, mientras ésta realiza los trámites legales para la adjudicación a quienes cumplan con los requisitos objetivos y subjetivos previstos en la Ley 160 de 1994 y demás normas que lo regulen.

En cuanto al **segundo problema jurídico**, se debe necesariamente acudir a la sentencia SU 426 DE 2016, en el entendido que fue, ésta sentencia la que unificó el criterio de la Corte Constitucional frente al problema que se viene presentando en la vereda El Porvenir del Municipio de Puerto Gaitán - Meta, donde se encuentran los predios ocupados por los accionantes, en la que se determinó:

1.- en primer lugar, la Alta Corporación señaló la procedencia de la acción de tutela ***"...por no existir otro medio de defensa judicial materialmente idóneo para estudiar la protección de los derechos fundamentales de los actores y resolver los problemas jurídicos constitucionalmente relevantes..."***, acotando que, *"...En relación con el caso particular, para la Sala la situación formulada en la solicitud de amparo va más allá de decidir si se adjudica o no los predios objeto de controversia a los 73 actores. Lo anterior porque, si bien es claro que al juez de tutela no le asisten facultades para agotar las actuaciones que son competencia exclusiva de las autoridades legalmente constituidas para definir la asignación de títulos de un bien baldío, éste sí tiene la facultad de analizar si tales actuaciones han sido compatibles con la Constitución Política, con ocasión de la posible vulneración de derechos fundamentales alegada a través de una acción de amparo; sin perjuicio del examen de procedibilidad, en los términos ya descritos... Sin embargo, en este caso los accionantes plantean que el Instituto no ha proferido decisión alguna acerca de sus solicitudes de adjudicación, a pesar de que desde el 2014 se efectuó (según el mismo Incoder) la recuperación material de El Porvenir. Resulta claro entonces que la petición obedece a que, en concepto de los actores, la vía administrativa no ha llegado a respuesta alguna acerca de su situación, hecho que, de ser cierto, podría significar la violación de sus derechos, y la acción de tutela podría ser el mecanismo adecuado para asegurar el avance de las actuaciones administrativas... De igual manera, la Unidad de Restitución de Tierras informó a la Corte Constitucional que, según los folios de matrícula mencionados en este trámite, y correspondientes a los cinco predios en que se hallaba dividó el Incoder en el año 2007, es posible confirmar que estos se encuentran en una zona micro localizada. Esta respuesta indica que se ha iniciado el trámite de restitución de tierras, pero no es claro en qué etapa se encuentra. Para la Sala este es un hecho relevante, a tomar en cuenta, al momento de abordar el análisis de fondo, pero no afecta la competencia del juez de tutela, precisamente porque confirma la incertidumbre jurídica que denuncian los accionantes en torno a los predios de El Porvenir... Además, la relevancia constitucional del caso, y la necesidad de un pronunciamiento del juez constitucional, se confirma por la aparente victimización que han enfrentado los ocupantes históricos del lugar, que configuran una compleja situación local de Derechos Humanos, derivada del conflicto armado, que presuntamente compromete de forma masiva el ejercicio de garantías constitucionales, tales como el acceso efectivo a la tierra en favor de los trabajadores rurales, la vida en condiciones dignas, trabajo, integridad personal, entre otros.*

En tal sentido, los peticionarios, que se identifican como campesinos de la vereda El Porvenir, municipio de Puerto Gaitán, han manifestado que han sido víctimas de distintos hechos de violencia por parte de estructuras criminales al margen de la ley, que a su vez se vinculan con la situación del conflicto armado interno extendido en el departamento del Meta; lo cual ha tenido como consecuencias, entre otras, el homicidio de varios pobladores.

A lo anterior se suma una serie de supuestos fácticos que demuestran la vulnerabilidad de los actores, tales como la imposibilidad de desarrollar actividades agrarias de forma pacífica, dadas las condiciones de inseguridad de la zona, así como la ausencia de vías de comunicación y de servicios públicos domiciliarios, lo que no sólo dificulta la supervivencia

de los pobladores de El Porvenir, sino también el desarrollo de derechos tales como la educación de los menores de edad, al no tener garantizadas las condiciones adecuadas en las que puedan adelantar jornadas escolares[4]. ".

2.- Como segunda medida, la Corte Constitucional hizo un análisis frente a **"Los predios baldíos como medio para garantizar el acceso progresivo a la propiedad rural por parte de la población campesina (artículo 64 de la Constitución Política),** haciendo una reseña histórica respecto de la reforma rural integrada, a partir de la reforma constitucional de 1936 y converger en la reforma vigente (ley 160 de 1994), en la cual se establece, entre otros asuntos, un régimen especial de clarificación, recuperación y adjudicación de baldíos, disponiendo expresamente que éstos tienen una destinación exclusiva para "las familias pobres"[5], e incorporó como requisitos generales para ser sujeto de reforma agraria o adjudicatario: "*...(i) demostrar la explotación de más de dos terceras partes del predio que se pretende adjudicar, el cual, en todo caso, (ii) no podrá ser mayor a una UAF;*[6] *adicionalmente (iii) se exige acreditar la explotación económica de más de dos terceras partes del predio y atendiendo a la aptitud productiva del terreno definida por el Incora (Incoder); (iv) se exige que el adjudicatario no tenga un patrimonio neto superior a los 1000 salarios mínimos mensuales vigentes; y (v) se advierte que no podrán ser adjudicatarios quienes ya se hayan beneficiado de otro predio rural, ya sea porque son sus propietarios o tienen derecho de posesión...*". Igualmente puntualizó que "*... el objetivo primordial de un sistema de legalización de baldíos es garantizar el acceso a la tierra a quienes carecen de ésta.*[7] *Al respecto, resulta pertinente recordar que el artículo 64 de la Constitución Política incorporó el deber asignado al Estado de promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores rurales, a través de distintas medidas tendientes a "mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos"*[8], *lo que demuestra un*

---

[4] 3.8. Respecto de los anteriores postulados, en respuesta a la acción de tutela, la Defensoría del Pueblo, Regional Meta, confirmó los hechos de los cuales se desprende la vulnerabilidad de los accionantes, con ocasión de las misiones que ha adelantado en la vereda El Porvenir. Así, puso de presente en su informe que luego de realizar una visita a la zona, es claro el "*riesgo latente*" de la comunidad, por habitar un lugar en el que hacen presencia grupos armados ilegales sin identificar, y advirtió que efectivamente hay situaciones que exigen una atención prioritaria, como lo son "el programa de alimentación escolar (entrega de alimentos incompletos y periodos sin alimentación), servicio de luz (deterioro de la planta eléctrica) y acueducto veredal (a pesar de la infraestructura construida, la falta de energía no permite el bombeo al tanque elevado para la distribución).

[5] Parágrafo 2 del artículo 67 de la Ley 160 de 1994.

[6] La constitucionalidad del sistema UAF ha sido estudiada por esta Corporación, y ha definido que "consulta la función social de la propiedad que comporta el ejercicio de ésta conforme al interés público social y constituye una manifestación concreta del deber del Estado de `promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios (...) con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos` (art. 64 C.P.) || Es evidente que si se limita la posibilidad de adquirir la propiedad de los baldíos, o la que se deriva de un título de adjudicación de baldíos a una UAF, como lo prevé el acápite normativo acusado, más posibilidades tendrá el Estado de beneficiar con dicha propiedad a un mayor número de campesinos, aparte de que se logrará el efecto benéfico de impedir la concentración de la propiedad o su fraccionamiento antieconómico".

[7] En la sentencia C-595 de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díez, la Sala Plena de esta Corporación estudió una demanda formulada contra algunos acápites de las Leyes 48 de 1882, 110 de 1912 y 160 de 1994, relativos a la prescripción de los bienes baldíos. Desde esa oportunidad se definió que "la adjudicación de baldíos tiene como objetivo primordial satisfacer, en el caso de personas naturales, las necesidades del ocupante y posterior adjudicatario, permitir el acceso a la propiedad a quienes carecen de ella y contribuir a mejorar las condiciones económicas y sociales de los adjudicatarios".

[8] Artículo 64: "Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios de educación, salud,

claro interés del constituyente primario por incorporar en el texto superior la necesidad de atender la vulnerabilidad de la población campesina[9], derivada de sus circunstancias socioeconómicas, sin apartarse por ello del fortalecimiento de la producción agraria. Una de las formas de materializar este mandato constitucional es la adjudicación de tierras baldías.[10]

Así mismo, como garante de los derechos de la población campesina vulnerable, dijo la Corte Constitucional en la mencionada sentencia de unificación que:

> *"4.13. El Estado, entonces, se encuentra en la obligación constitucional de dirigir su actividad hacia la gradual realización del derecho al acceso a la tierra en favor de la población campesina hasta el más alto nivel de materialización que le sea posible asumir, lo cual le impone la consecuente prohibición de regresividad. Esto porque, de conformidad con lo dispuesto en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante PIDESC), el principio de progresividad integra los deberes de (i) adopción de medidas efectivas, (ii) hasta el máximo de los recursos disponibles, (iii) respondiendo siempre a la necesidad de avanzar o ampliar cada vez más el ámbito de realización del derecho, e (iv) impidiendo la disminución del nivel de satisfacción ya logrado.[11]*

---

vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar los ingresos y calidad de vida de los campesinos".

[9] Una de las aproximaciones semánticas al concepto de "campesino" está dada en el proyecto de "Declaración sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales", presentado por el Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales en el primer periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (15 a 19 de julio), en el que se propone disponer en el artículo 1: "Definición de campesino. || 1. Un campesino es un hombre o una mujer de la tierra, que tiene una relación directa y especial con la tierra y la naturaleza a través de la producción de alimentos u otros productos agrícolas. Los campesinos trabajan la tierra por sí mismos y dependen sobre todo del trabajo en familia y otras formas en pequeña escala de organización del trabajo. Los campesinos están tradicionalmente integrados en sus comunidades locales y cuidan el entorno natural y local y los sistemas agroecológicos. || 2. El término campesino puede aplicarse a cualquier persona que se ocupe de la agricultura, la ganadería, la trashumancia, las artesanías relacionadas con la agricultura u otras ocupaciones similares en una zona rural. El término abarca a las personas indígenas que trabajan la tierra. || 3. El término campesino también se aplica a las personas sin tierra. De acuerdo con la definición de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, se consideran personas sin tierra las siguientes categorías de personas, que probablemente se enfrenten a dificultades para asegurar sus medios de vida: || a) Familias de trabajadores agrícolas con poca tierra o sin tierra; || b) Familias no agrícolas en zonas rurales, con poca tierra o sin tierra, cuyos miembros se dedican a diversas actividades como la pesca, la artesanía para el mercado local o la prestación de servicios; || c) Otras familias rurales de trashumantes, nómadas, campesinos que practican la agricultura migratoria, cazadores y recolectores y personas con medios de subsistencia parecidos".

[10] Sentencia C-595 de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

[11] El numeral 1 del artículo 2 de la Parte II del PIDESC establece: "Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos". Además, esta Corte ha indicado que "la evolución de la jurisprudencia sobre el [principio de progresividad] ha determinado ciertas reglas generales, a saber: i) las medidas que constituyan un retroceso en la protección de los derechos sociales, económicos y culturales son *prima facie* inconstitucionales; ii) la libre configuración del Legislador se reduce en materia de estos derechos, en tanto que cuando éste adopte una medida que produzca una disminución en el nivel de protección alcanzado, tiene un deber de justificación conforme al principio de proporcionalidad, aun cuando exista un amplio margen de configuración; iii) la prohibición de regresividad también es aplicable a la Administración; iv) en virtud de este principio no es posible avalar la inactividad del Estado en su tarea de implementar acciones para lograr la protección integral de los derechos; y (v) en relación con las facetas prestacionales de los derechos que no son exigibles de forma inmediata, es posible solicitar judicialmente *'(i) la existencia de una política*

Siguiendo las políticas sobre la protección de los derechos de los campesinos y el papel protagónico de los trabajadores rurales, la Corte Constitucional, en la misma sentencia unificadora, determinó sobre "**El acceso progresivo a la propiedad de la tierra y su inescindible relación con garantías fundamentales en el caso de la población campesina**", explicando que *"... la obligación constitucional de permitir el acceso progresivo a la propiedad rural va acompañada de la garantía de una serie de bienes y servicios básicos, de donde resulta claro que, al hacerse efectivo este derecho se satisface la dignidad humana, al hacer posible el desenvolviendo del plan de vida y el fortalecimiento de las condiciones de existencia de quienes conforman el campesinado colombiano, máxime si se tienen en cuenta las circunstancias generalizadas de vulnerabilidad a las que históricamente se ha tenido que enfrentar este sector de la sociedad y que este Tribunal ha reconocido en un amplio número de decisiones."*. La existencia de un nexo directo *"...entre el acceso a la propiedad agraria y el derecho al trabajo. Resulta imprescindible entonces no perder de vista que la adquisición de la propiedad rural por parte de los trabajadores del campo no se reduce a la mera legalización de los títulos, sino que además es fundamento del deber estatal de orientar la política pública de tierras hacia la vinculación de los campesinos, como titulares del derecho en comento, a los procesos de desarrollo agroeconómico, y rechazar la consolidación de grandes propiedades improductivas..."*, Refiriendo por último que *"...el acceso progresivo a la tierra por parte de los trabajadores agrarios guarda una relación intrínseca con el derecho a la vivienda digna, en razón a la interdependencia de la población campesina con el entorno rural en el que se enmarca tradicionalmente su domicilio y lugar de residencia."*.

Por último, frente a la adjudicación de los predios baldíos, la Alta Corporación fue contundente al expresar que "**La problemática de los predios baldíos en Colombia no se circunscribe únicamente a la clarificación e identificación de los mismos, sino también a la efectiva adjudicación.**", apoyándose en la sentencia T-488 de 2012, artículo 17 de la Ley 160 de 1994, Sentencia T-488 de 2014, para concurrir en la sentencia SU 426 de 2016, que en el caso concreto, sobre los predios que componen el porvenir se debían resolver dos problemas jurídicos, señalando el primero como la inanición del INCODER en lo que tiene que ver con la recuperación de los predios baldíos de que trata la Resolución No. 6423 del 30 de julio de 2014 y el segundo, frente a la seguridad de un líder, que para el presente asunto no es del caso analizar.

En la aludida sentencia unificadora se pudo concluir aspectos trascendentales: **1.- *Acerca de la entrega material del predio***: **a)** El Porvenir fue, primero, un predio apropiado por particulares, explotado por campesinos, calificado como baldío por el Estado, fragmentado estratégicamente en 27 fracciones para ser adjudicado en el marco de la reforma agraria y posteriormente, convertido en cinco grandes propiedades, en el marco de los protocolos notariales y la inscripción en el registro, ya sin ánimo de aparentar validez legal alguna (dado que la extensión de los predios hacía evidente la ilegalidad de los negocios); **b)** La entrega material de El Porvenir no se ha verificado; **c)** La negligencia

---

pública, (2) orientada a garantizar el goce efectivo del derecho y (3) que contemple mecanismos de participación de los interesados" (Ver. Sentencia C-754 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado, A.V. Luis Guillermo Guerrero Pérez y A.V. Alejandro Linares Cantillo).

1994, sean sujetos de reforma agraria, y de quienes tengan derecho a la restitución de tierras, de acuerdo con la Ley 1448 de 2011.

En la misma se concedió un término de un (1) año, contado a partir del día siguiente a la notificación de esta providencia, se logre:

directa o a través de terceros. En caso de así corroborarse, adelantar la recuperación material de dichos bienes. Esta deberá incluir visitas interinstitucionales a las distintas áreas de El Porvenir e informes periódicos que permitan corroborar la eficacia y estabilidad de la entrega.

(ii) Censar a la población ocupante de los terrenos baldíos consignados en la Resolución No. 6423 del 2014 y definir quiénes serían sujetos de reforma agraria, de acuerdo con lo dispuesto en le Ley 160 de 1994.

(iii) Realizar un intercambio de información entre el Incoder y la Unidad de Tierras, de manera que sea posible establecer qué parte de El Porvenir se encuentra en el trámite de restitución, cuál debe ingresar a ese proceso, y cuál seguirá el cauce del trámite administrativo de adjudicación.

(iv) Advertir al Incoder o a quien haga sus veces, acerca de su obligación de evaluar los requisitos de reforma agraria, de manera que no se imponga a los peticionarios una carga que no pueden cumplir por negligencia y corrupción estatal. Es decir, debido a la permisión del Estado a la apropiación de El Porvenir por parte de un actor privado poderoso, en perjuicio de un amplio número de familias campesinas, según los hechos descritos en esta providencia. Bajo esa perspectiva, el Instituto deberá adelantar e impulsar hasta su culminación el proceso de adjudicación de bienes baldíos, de que trata la Ley 160 de 1994 y sus respectivas normas reglamentarias.

(v) De acuerdo con las consideraciones vertidas en la parte motiva de esta providencia acerca de la situación de la 'mujer rural', el Incoder y la Unidad de Tierras deberán definir, adoptar e implementar medidas afirmativas para la población femenina en el marco de sus competencias legales; por ejemplo, que al momento de realizar la titulación, esta se suscriba a nombre de la mujer, o de los dos cónyuges o compañeros permanentes. Para el efecto, deberán tomar en consideración el marco legal definido por la Ley 731 de 2002.

(vi) Que la Unidad de Restitución de Tierras continúe el procedimiento de microfocalización iniciado en torno a los predios de El Porvenir, con el fin de determinar quiénes son los miembros de la población campesina que poseen derechos en el marco específico de la Ley de víctimas y restitución de tierras e impulsar hasta su culminación los procesos judiciales a que haya lugar, para lo cual se solicitará a los órganos de control prestar apoyo inmediato a la Unidad.

(vii) Una vez se hayan cumplido con las labores de identificación, verificación de requisitos y proceso de adjudicación, la Superintendencia de Notariado y Registro deberá velar por la formalización efectiva de las titulaciones.

El cumplimiento de estas órdenes será objeto de seguimiento judicial por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Villavicencio, en su calidad de juez de primera instancia dentro la acción de tutela de la referencia, a la que las instituciones que integran la mesa de trabajo aquí consolidada deberán remitir, en el término máximo de dos (2) meses y con copia a la Corte Constitucional, el plan estratégico adoptado; momento a partir del cual deberán comunicar informes trimestrales de progreso.".

Para concluir, debe precisarse que, en el mismo sentido se aprecia por parte de este fallador constitucional, tal como lo reseña la Procuraduría Agraria, una vulneración al debido proceso administrativo, el cual conlleva inmersa la obligación de la autoridad administrativa de evitar dilaciones injustificadas[12], el cual es susceptible de protección en sede de tutela, y es clara la vulneración de este derecho fundamental constitucional porque

[12] Sentencia T-030 de 2005, T-577 de 1998, T-190 de 1995, T-546 de 1995, T-450 de 1998 y T-366 de 2005.

pese a que en la sentencia SU 426 de 2016, se concedió un término de un (1) año, este término ha sido superado ostensiblemente, e igualmente la solicitudes de adjudicación de baldíos radicadas por los aquí accionantes ante el INCODER, en el año 2015 y 2016, ningún trámite se les ha realizado, pues como se puede apreciar en el sistema de consulta de solicitudes de adjudicación de baldíos de la página web de la Agencia Nacional de Tierras, muchos de los accionantes que acreditaron haber radicado su solicitud las mismas ni siquiera se encuentran radicadas, lo cual constituye una flagrante vulneración del debido proceso administrativo.

También debe acotarse que tal como lo ha señalado la Honorable Corte Constitucional en infinidad de sentencias constitucionales, la negligencia o desidia de la autoridad administrativa en el cumplimiento de sus funciones, no se les debe trasladar a los usuarios, que en estos casos se constituyen en la parte débil o vulnerable.

Caso objeto de estudio.-

Descendiendo al caso objeto de estudio, debe tenerse en cuenta que los aquí accionantes, argumentan ser ocupantes de los predios que con la solicitud de amparo constitucional relacionaron y las cuales radicaron ante el INCODER en su oportunidad, muchas de las cuales conforme se pudo establecer por parte de este despacho al ingresar a la página de la AGENCIA NACIONAL DE TIERRA que unos se encuentran registrados pero sin ningún trámite, como es el caso del señor BARNEY SORZA GUZMAN, ALBA GEORGINA SALGADO ROJAS, LIBIA BARAHONA RIVEROS, ALBERTO FERNANDO ZORNOSA MANRIQUE y BERNARDO FIGUEROA CASTRILLON y en otros como es el caso de los señores MARTHA YANETH HERNANDEZ MEDINA, ALVARO ROPERO, MARIA CONCEPCION POVEDA MURCIA y FREDY RODRIGUEZ TRIANA, quienes acreditaron haber radicado solicitud ante el INCODER, ninguna actuación registran ante la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS.

Cabe destacar que en el presente asunto, la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS, pese a que fue notificada, y se requirió vía telefónica por este despacho judicial, no dio contestación a la presente solicitud de amparo constitucional, ni controvirtió los hechos que sirven de fundamento expuestos por los aquí accionantes.

Siguiendo ese derrotero y el precedente jurisprudencial citado por la Máxima Corporación Constitucional, frente a situaciones idénticas, se deberá acceder a las pretensiones de la demanda concediendo el amparo constitucional y ordenar a la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS, que en un término máximo de dos (2) meses, adelante los actos administrativos en el marco de sus competencias, conforme lo estableció la sentencia SU 426 de 2016, a fin de que se cumplan las ordenes allí dadas respecto de los ocupantes de los terrenos baldíos consignados en la Resolución No. 6423 del 2014, relacionados con la adjudicación a quienes cumplan con los

requisitos objetivos y subjetivos previstos en la Ley 160 de 1994 y demás normas que lo regulen.

En el mismo sentido se deberá remitir copias de este proceso, reiterándoles a la Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación y Contraloría General de la República, para que en el marco de sus competencias constitucionales y legales adelanten las investigaciones que estimen pertinentes, tal como lo dispuso la Corte Constitucional en la sentencia SU 426 de 2016 y oficiar a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio - Meta, quien es la autoridad judicial encargada de realizar el seguimiento a la sentencia SU 426 de 2016.

Por lo expuesto, el **JUEZ PROMISCUO DE FAMILIA** de Puerto López (Meta), administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

R E S U E L V E:

PRIMERO: Conceder el amparo constitucional de los derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, al trabajo, a la vivienda y el debido proceso reclamados por los accionantes, conforme a las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Ordenar, a la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS, que se abstenga de impedir la explotación agropecuaria de los predios de que trata la resolución No. 6423 del 2014, ocupados por los accionantes y se les brinde el acompañamiento mientras realiza los trámites legales para la adjudicación a quienes cumplan con los requisitos objetivos y subjetivos previstos en la Ley 160 de 1994 y demás normas que lo regulen.

TERCERO: Ordenar, a la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS, que en un término máximo de dos (2) meses, adelante los actos administrativos en el marco de sus competencias, conforme lo estableció la sentencia SU 426 de 2016, a fin de que se cumplan las ordenes allí dadas respecto de los ocupantes de los terrenos baldíos consignados en la Resolución No. 6423 del 2014, y que se relaciona con la adjudicación a quienes cumplan con los requisitos objetivos y subjetivos previstos en la Ley 160 de 1994 y demás normas que lo regulen.

CUARTO: Remitir copias de este proceso, reiterándoles a la Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación y Contraloría General de la República, para que en el marco de sus competencias constitucionales y legales adelanten las investigaciones que estimen pertinentes, tal como lo dispuso la Corte Constitucional en la sentencia SU 426 de 2016.

QUINTO: Comunicar esta decisión, a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio - Meta, quien es la autoridad judicial encargada de realizar el seguimiento a la sentencia SU 426 de 2016.

143

SEXTO: Notificar por secretaría a las partes por el medio más expedito de conformidad con lo señalado en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

SEPTIMO: ***Enviar*** lo actuado a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión, conforme lo señala el inciso 2 del artículo 31 del mismo Decreto, si no se impugnare el presente fallo.

NOTIFÍQUESE.

CESAR HUMBERTO ACEVEDO BUITRAGO
Juez

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
SALA CIVIL-FAMILIA- LABORAL

Magistrado Ponente: **ALBERTO ROMERO ROMERO.**
(Discutido y aprobado en Sala de decisión del 06 de junio de 2018, Acta No. 064)

Villavicencio, siete (07) de junio de dos mil dieciocho (2018).

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la entidad accionada contra la sentencia del 24 de abril de 2018, proferida por el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Puerto López (M), dentro de la acción de tutela interpuesta por Carlos Daniel Vargas Bacci en calidad de apoderado de los señores Martha Hernández Medina, Barney Sorza Guzmán, Jose Carabalí Rivera, Alba Salgado Rojas, Álvaro Ropero, Libia Barahona Riveros, Nohora Benítez, Alberto Zornosa Manrique, María Concepción Poveda, Fredy Rodríguez Triana, María Montenegro Mora, Camilo Prieto Rocha, Julio Prieto Briñez, Luis Pulido Pinilla, Pedro Lesmes Novoa, Bernardo Figueroa Castrillón, contra la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS- ANT, trámite al que se vinculó a la Procuraduría Agraria y Ambiental del Meta.

I. ANTECEDENTES

I.1. Los accionantes a través de apoderado judicial, solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales a la vida digna, a la tierra y el territorio, al debido proceso, a la igualdad, a la vivienda digna y al trabajo, los que estimó vulnerados con ocasión de los hechos que la Sala resume así:

I.2. Relató que sus poderdantes, a la fecha ocupan y explotan económicamente con ánimo de señores y dueños, 16 predios ubicados en la vereda el porvenir, municipio de Puerto Gaitán (M); quienes vienen ejecutando actos propios de ocupación en forma pública, quieta

y pacífica y así mismo radicaron formalmente solicitud de adjudicación ante el antiguo Incoder desde el año 2010, anexando el correspondiente levantamiento topográfico.

I.3. Refirió que a la fecha y a pesar del tiempo transcurrido a través de la sentencia SU 426 de 2016 emitida por la Honorable Corte Constitucional, la ANT no ha dado una respuesta a las solicitudes de adjudicación.

I.4. Indicó que los predios ocupados por los accionantes, tienen calidad de baldíos de la nación desde hace más de 25 años, de acuerdo a la resolución No. 6423 del 2014 emitida por el Incoder, los cuales no tienen ninguna protección especial o restricción registrada en los folios de matricula inmobiliaria que impida la ocupación, explotación y adjudicación a los ciudadanos; ni el Incoder, ni la ANT, han tomado posesión, ni ocupado o administrado los predios del porvenir, entidades que solo realizaron una reunión que llamaron "*Toma de posesión simbólica del porvenir*", manifestando que se respetarían los derechos de todos los ocupantes de los predios.

I.5. Manifestó que cada predio ocupado, no supera la Unidad Agrícola Familiar (UAF), que a través de resolución No. 041 de 1996, se determinaron las extensiones de la UAF Regional Meta y para el caso concreto en la zona del Porvenir donde se encuentran los predios ocupados por los tutelantes, de los cuales ninguno se enmarca en las excepciones previstas en la ley, que permitan aplicar para efectos de adjudicación una cabida inferior a la UAF y tampoco la supera (920 ha).

I.6. Señaló que la Honorable Corte Constitucional, estudió el tema de los predios baldíos mencionados, a través de la sentencia SU 426 del 2016, donde ninguna de las ordenes allí emitidas, han sido cumplidas por la ANT, que por medio de sus funcionarios han realizado reuniones con la comunidad, brindando información que ha generado zozobra, inseguridad y miedo en la comunidad, por lo cual los aquí accionantes radicaron un derecho de petición el día 07 de diciembre de 2017, solicitando la expedición de la resolución de adjudicación, petición que por orden del Juzgado 5 Civil del Circuito de Villavicencio fue resuelta indicando las acciones efectuadas a la fecha y que una vez concluidos todos los componentes, la ANT procederá a expedir los respectivos actos administrativos.

I.7. Arguyó que las actividades citadas en el oficio de contestación, no se ajustan a la verdad, por lo cual pretende con esta acción que se reconozca y declare a los aquí

tutelantes como legítimos ocupantes de los predios baldíos ubicados en la vereda el porvenir, se ordene a la entidad accionada que salvaguarde y proteja los derechos a ocupar y explotar legalmente los predios baldíos que cada uno tiene, y como consecuencia de lo anterior, en un término no mayor a cinco (05) días, se expida la resolución de adjudicación de los predios ocupados y explotados económicamente a cada uno de los accionantes.

II. Respuesta de la parte accionada.

II.1. La **Procuraduría 6 Judicial II Agraria y Ambiental del Meta- Vaupés- Vichada- Guainía y Guaviare,** manifestó que si bien la Agencia Nacional de Tierras, ha adelantado una actuación seria y diligente encaminada al cumplimiento de la sentencia SU 426 del 2016, no desvirtúa la existencia de argumentos válidos para que las peticiones de adjudicación presentadas por los actores sean resueltas en un término perentorio, después de tantos años de indefinición; no obstante, debido a la complejidad de la tarea y la existencia de población distinta a los aquí accionantes, esta se vería afectada con el resultado que esta acción demanda, pues en el marco del seguimiento realizado a lo ordenado en la sentencia SU 426 del 2016, la ANT estimo que a mediados del mes de junio hogaño, expediría las respectivas resoluciones de adjudicación, término que se considera razonable para tal efecto.

II.2. La Agencia Nacional de Tierras guardó silencio.

III. Decisión de primera instancia.

III.1. La acción constitucional fue decidida por el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Puerto López (M), en sentencia del 18 de diciembre de 2017, que concedió el amparo constitucional al encontrar vulnerados los derechos fundamentales elevados por los aquí accionantes y en consecuencia ordenó a la Agencia Nacional de Tierras (i) abstenerse de impedir la explotación agropecuaria de los predios que trata la resolución No. 6423 del 2014, ocupados por los accionantes y se les brinde acompañamiento mientras se realizan los trámites legales para su adjudicación y (ii) que en un término no mayor a 2 meses, adelante los actos administrativos en el marco de sus competencias, conforme lo estableció la sentencia SU 426 del 2016, a fin de que se cumplan las ordenes allí dadas.

deben surtir, en cumplimiento de unos términos establecidos en las normas mencionadas, por lo tanto existe imposibilidad de cumplir en el plazo de dos (02) meses como lo ordenó el juez de instancia, además que las personas amparadas mediante este fallo, ya fueron sujetos de caracterización dentro del marco de la sentencia SU 426 del 2016, situación que es objeto de estudio y debe ser resuelta dentro del término otorgado por la Honorable Corte Constitucional, el cual a la fecha está vigente.

V.4. Sin embargo, la Sala considera que no es acertada la interpretación dada por la entidad recurrente a las ordenes proferidas, pues lo dispuesto en el fallo de primer grado, especificó que no era su deber declarar o reconocer la calidad de ocupantes a los aquí accionantes, pero no la eximía de amparar los derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, al trabajo, a la vivienda, y el derecho a la explotación de los predios ocupados; situación que debe tener el respectivo acompañamiento por parte de la ANT, mientras ésta realiza los trámites de adjudicación a quienes cumplan los requisitos previstos en la ley 160 de 1994 y demás normas reguladoras, aquellas tareas debían desarrollarse en un término máximo de (02) meses, "***dentro del marco de sus competencias***"[1], conforme lo estableció la sentencia SU 426 de 2016, en el mismo sentido dispuso remitir copias del presente proceso, ante las autoridades encargadas de realizar el seguimiento de dicha sentencia, tal como lo ordenó la Honorable Corte Constitucional.

V.5. Del mismo modo, esta Colegiatura, observa que la orden emitida en la sentencia recurrida y relacionada con la Agencia Nacional de Tierras se contrae a garantizar a los accionantes el goce efectivo de la explotación agropecuaria de los predios ocupados por los actores y que se les brinde acompañamiento por parte de la ANT, mientras se realizan los trámites para la adjudicación de quienes cumplan lo establecido en la ley 160 de 1994 y demás normas reguladoras, mandatos que no resultan irrazonables, ni apartados o excedidos de las facultades que tiene el Ente, principalmente cuando la Agencia Nacional de Tierras en su escrito de impugnación informó haber adelantado la caracterización poblacional de la comunidad que habita cada uno de los predios que conforman "EL POVENIR", mediante *Censo y Definición de sujetos de reforma agraria*, en cumplimiento del fallo de tutela SU 426 de 2016[2].

---

[1] Folio 141 C.1 Acción de tutela.
[2] Folios 163 y 164 C.1 Acción de tutela.

IV. La impugnación.

IV.1. La accionada inconforme con la decisión, impugnó el fallo de primera instancia, señalando que la orden dada es improcedente pues se violaría el principio de cosa juzgada, informando que se adelantó un plan estratégico en conjunto con las demás entidades que conforman la mesa interinstitucional con el fin de garantizar el acceso efectivo a la tierra de los ocupantes, quienes fueron censados, por lo que su situación es objeto de estudio y debe ser resuelta dentro del término otorgado por la H. Corte Constitucional en la sentencia SU 426 del 2016, el cual a la fecha se encuentra vigente.

V. CONSIDERACIONES

V.1. La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Nacional, fue creada como un mecanismo inmediato para garantizar la protección de los derechos constitucionales fundamentales, cuando resulten vulnerados por acción u omisión de las autoridades públicas o por los particulares, para lo cual se puede concurrir, en cualquier momento y lugar, ante los jueces de la República para que mediante un proceso preferente y sumario se decida sobre la protección inmediata a través de una orden que se emitirá para que el funcionario o el particular actúe o se abstenga de hacerlo.

V.2. En el presente asunto los accionantes a través de su apoderado judicial pretenden se emita orden constitucional en contra de la Agencia Nacional de Tierras, para que ésta de cumplimiento a las ordenes emitidas por la Honorable Corte Constitucional en sentencia SU 426 del 2016 y se declare a los aquí tutelantes como legítimos ocupantes de los predios baldíos ubicados en la vereda el porvenir del municipio de Puerto Gaitán (M) y así mismo salvaguarde y proteja los derechos a ocupar y explotar legalmente los predios baldíos que cada uno tiene, expidiéndose en un término no mayor a cinco (05) días, la resolución de adjudicación de los predios ocupados y explotados económicamente por cada uno de los accionantes.

V.3. De otra parte se advierte que la entidad impugnante se encuentra inconforme con la orden emitida por el *A quo*, pues considera que la Agencia nacional de Tierras, viene ejecutando su plan de acción, dándole continuidad a las diversas solicitudes de adjudicación que hay en curso, por lo cual, conforme lo establece el decreto 1071 de 2015 y el decreto 902 de 2017, el trámite de adjudicación de baldíos tiene unas etapas que se

V.6. Finalmente es de precisar que lo dispuesto por el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Puerto López (M) se encuentra en consonancia con la Sentencia proferida por nuestro máximo Tribunal Constitucional S 426 de 2016, en la que estudió la situación general que atraviesa la población ocupante de la vereda el Porvenir del municipio de puerto Gaitán (M), en condición de víctimas de hechos violentos por parte de grupos al margen de la ley en el Departamento del Meta.

V.7. Por lo expuesto, la impugnación formulada no está llamada a prosperar y en consecuencia se impone confirmar la decisión de primera instancia.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto la Sala de Decisión Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, administrando Justicia en nombre de la República Colombia y por autoridad de la Constitución,

RESUELVE

PRIMERO: Confirmar la sentencia proferida el 19 de diciembre de 2017 por el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Puerto López (M), dentro de la acción de tutela promovida por CARLOS DANIEL VARGAS BACCI en calidad de apoderado judicial de MARHA YANETH HERNÁNDEZ MEDINA y OTROS, por lo indicado en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Notifíquese este fallo a las partes por el medio más expedito.

TERCERO: Envíese las diligencias a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión

CÚMPLASE.

Última hoja de folio de segunda instancia dentro de la acción de tutela de CARLOS DANIEL VARGAS BACCI en calidad de apoderado judicial de MARTHA YANETH HERNANDEZ MEDINA y OTROS contra la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS-ANT, que confirmó la sentencia proferida el 24 de abril de 2018 por el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Puerto López (M).

ALBERTO ROMERO ROMERO
Magistrado

HOOVER RAMOS SALAS
Magistrado

EN USO DE PERMISO

RAFAEL ALBEIRO CHAVARRO POVEDA
Magistrado

DISTRITO JUDICIAL VILLAVICENCIO
CIRCUITO DE PUERTO LÓPEZ - META
JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA

Puerto López (Meta), once (11) de agosto de dos mil veinte (2020).

OBJETO DE DECISIÓN:

Se procede a resolver el Incidente de Desacato, dentro de la Tutela No. 2018-00024-00, promovida por medio de apoderado judicial por los señores, *Martha Yaneth Hernández Medina, Barney Sorza Guzmán, José Orlando Caraballí Rivera, Alba Georgina Salgado Rojas, Libia Barahona Riveros, Nohora Benítez, Alberto Fernando Zornosa Manrique, María Concepción Poveda, Fredy Rodríguez Triana, María Ninfa Montenegro Mora, Camilo Andrés Prieto Rocha, Julio Humberto Prieto Briñez, Luis Ilvar Pulido Pinilla, Pedro Pablo Lesmes Novoa y Bernardo Figueroa Castrillón*, en contra del Director de Acceso a Tierras, Doctor JUAN MANUEL NOGUERA MARTINEZ y la Subdirectora de Acceso a Tierras Focalizadas, Doctora JULIA ELENA VENEGAS GOMEZ, de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

ANTECEDENTES

Mediante escrito de fecha 5 de mayo de 2020, el apoderado judicial de los accionantes, pone en conocimiento de este despacho los siguientes,

HECHOS

Que ante este Juzgado el 10 de abril de 2018 se radico una tutela en contra de la accionada AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS, en la que luego de surtidos los trámites y en la cual hizo parte activamente la accionada, en fallo proferido el 24 de abril de 2018, en fallo de primera instancia se ampararon los derechos fundamentales de los accionantes y se ordenó a la ANT "... que en un término máximo de dos (2) meses, adelantara todos los actos administrativos en el marco de sus competencias, conforme a lo establecido en la sentencia SU 426 de 2016, a fin de que se cumplan las ordenes allí dadas respecto de los ocupantes de los territorios baldíos consignados en la Resolución No. 6423 del 2014 y que se relacionan con la adjudicación a quienes cumplan con los requisitos objetivos y subjetivos previstos en la ley 160 de 1994 y demás normas que lo regulan.". Fallo que fue confirmado de manera integral por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, en sentencia del 6 de junio de 2018, siendo remitido a la Corte Constitucional para su eventual revisión, el cual fue excluido de dicho acto, quedando debidamente ejecutoriado.

Que el término concedido por el Juzgado Constitucional otorgado a la ANT para cumplir las órdenes emitidas, es decir, resolver de fondo las peticiones de adjudicación radicadas ante el INCODER por los accionantes,

previa la verificación del cumplimiento de los requisitos legales, se encuentran vencidas.

Que los accionantes a través de su apoderado y del presidente de la asociación "ASOYOPOS" a la cual pertenecen, han requerido reiteradamente a la ANT para que se les brinde información sobre el cumplimiento del fallo obteniendo respuestas evasivas y dilatorias.

Que se buscó llevar a cabo una audiencia con la Directora de la ANT, conforme a solicitud escrita pero nunca fue posible y como respuesta se obtuvo que "*... respecto de los términos de cumplimiento al fallo judicial en comento, los accionantes de la tutela pueden hacer uso de los mecanismos legales consagrados en su favor para que ante las autoridades judiciales correspondientes se exija el cumplimiento de las sentencias emitidas por los jueces de la república.*".

Que en otra comunicación dirigida como "derecho de petición" se observa con claridad que la ANT adelanta diligencias tendientes a evadir el cumplimiento del fallo de tutela, pues no se acepta que dos años después del fallo, digan que "*... de los dieciséis (16) tutelantes amparados por el juzgado, inicialmente solo se encontraron registros documentales oficiales de seis (6) solicitudes debidamente radicadas ante el INCODER...*", cuando todos los documentos que fueron radicados ante la ANT fueron aportados como soporte probatorio en la tutela y que además conoció la accionada cuando al contestar la tutela reconoció a los accionantes como ocupantes censados de esa entidad.

Además enfatiza en que los ciúdadanos no tienen por qué asumir y soportar consecuencias jurídicas y fácticas del desorden administrativo de la entidad, ni menos de la negligencia del Estado frente a la eventual vulneración de derechos fundamentales amparados por un fallo de tutela derivado de ese desorden, desidia y negligencia.

Concluye señalando que los accionante cumplen a cabalidad los requisitos de la Ley 160 de 1994, norma aplicable desde la fecha de la ocupación y de la radicación de las solicitudes de adjudicación y lo previsto en el artículo 81 del Decreto 902 de 2017, decreto que pretende aplicar la agencia de manera ilegal y arbitraria.

Como PRETENSIONES solicita se imponga la sanción de arresto por el término de un (1) mes y el pago de la suma equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes y se le ordene responder de fondo y de manera definitiva en el término de cuarenta y ocho (48) horas, mediante acto administrativo las solicitudes de adjudicación de los accionantes, de manera positiva o negativa y se compulsen copias a la fiscalía para que se inicie y lleve a su terminación la correspondiente investigación penal por fraude a resolución judicial.

Con el escrito quejoso, allega los siguientes documentos:

.- Oficio dirigido a la ANT requiriendo información sobre el cumplimiento de a sentencia.
.- Respuesta emitida por la ANT a la solicitud antes referida.
.- Petición dirigida a la ANT solicitando audiencia para concertar cumplimiento del fallo.
.- Respuesta emitida por la ANT a la petición antes referida.
.- Respuesta de la ANT a derecho de petición presentado por el presidente de "ASOYOPOS" y el asesor jurídico.
.- Copia del procedimiento establecido por la ANT para legalización de predios ocupados ante la vigencia del Decreto 902 de 2017.

ACTUACIÓN JUDICIAL

Recibida la petición el 5 de mayo de 2020, en aplicación del artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, en providencia de la misma fecha, se ordena requerir a la señora MYRIAM CAROLINA MARTINEZ CARDENAS en calidad de Directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), para que en el término máximo de cuarenta y ocho (48) informara a este despacho sobre el cumplimiento del fallo de tutela proferido el 24 de abril de 2018.

La anterior decisión se comunicó por correo electrónico, y por medio de la Oficina Jurídica de la Agencia Nacional de Tierras, se recibió repuesta por parte de la Oficina Jurídica, en el que indican todas las actuaciones adelantadas en cumplimiento de la sentencia SU-426 de 2016 y el fallo proferido por este despacho, acompañando copia de la documentación que soporta su dicho, como son: caracterizaciones, reuniones interinstitucionales plasmadas en actas, sin que se informe las razones por las cuales no se ha resuelto de fondo, de manera positiva o negativa las solicitudes de adjudicación de los accionantes, pese a que el término concedido en el fallo de tutela se encuentra más que vencido.

Ante el informe dado, se abre incidente contra la Doctora MYRIAM CAROLINA MARTINEZ CARDENAS en su calidad de Directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en auto del 11 de mayo del presente año.

Se comunica a la incidentada, al correo institucional: jurídica.ant@agenciadetierras.gov.co.

Igualmente se recibe respuesta de la Agencia Nacional de Tierras, por medio de la Oficina Jurídica, fechado 13 de mayo de 2020, en la que reiteran que en cumplimiento a la sentencia SU-426 DE 2016 y el fallo proferido por éste despacho judicial, se creó una mesa de trabajo interinstitucional el 26 de noviembre de 2016, la cual a la fecha ha sesionado en veinte (20) ocasiones, presentando par el efecto un cuadro que relaciona, fecha, lugar y número de acta; refieren haber levantado 41 actas de verificación en campo realizadas durante los años 2016, 2017 y 2018; se realizó censo de ocupantes presentando un cuadro en el cual se resalta "ocupantes vinculados a la asociación ASOYOPO 30"; mesa de trabajo para identificar áreas en proceso de restitución realizadas durante los años 2016 y 2017; que se lleva un importante avance y en un grado de cumplimiento alto respecto de la sentencia SU-426 de 2016 y se ordenó la

apertura del procedimiento de adjudicación en favor del grupo de accionantes amparados por la Corte Constitucional donde no se encuentran incluidos los ocupantes amparados en la sentencia de tutela proferida por el juzgado promiscuo de familia, pero que dentro de la ruta de actuación dispuesta por la sentencia unificadora, relaciona los expedientes administrativos entregados por el INCODER, solo se encontraron los de seis (6) solicitudes debidamente radicadas, presentando un cuadro en el que se relacionan a ocho (8) de los accionantes (Martha Yaneth Hernández Medina, Barney Sorza Guzmán, José Orlando Caraballí Rivera, Alba Georgina Salgado Rojas, Libia Barahona Riveros, Nora Benítez, Alberto Fernando Zornosa Manrique y María Concepción Poveda). Frente a la implementación del FISO (Formulario de Sujetos de Ordenamiento), estos fueron tomados en campo a los accionantes, observándose que la única que aparece sin formulario es la señora Alba Georgina Salgado Rojas, quien según afirma ha sido requerida por varios medios por parte de la ANT, señalando que el estado de calificación del FISO solamente ha sido efectiva respecto de seis (6) accionantes, en cuanto a la señora Georgina Salgado se encuentra pendiente del FISO, estando pendiente de información sobre antecedentes judiciales, sin respuesta por parte de los señores Julio Humberto Prieto Briñez, Luis Ilvar Pulido Pinilla y Álvaro Ropero; que se solicitó información a la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) encontrándose a la espera de la respuesta, lo cual es definitivo para proceder al estudio de las solicitudes y expedición de los actos definitivos que permitan resolver las solicitudes de adjudicación de acuerdo con las extensiones de la UAF. Concluye señalando que se hizo indispensable recabar la información necesaria través del FISO, verificación de extensiones de UAF, los cuales son necesarios para adelantar los actos administrativos que resuelvan de fondo las solicitudes de los peticionarios, por lo que una vez en firme el informe de UAF y recibida la información y documentos por parte de los accionantes requeridos la ANT procederá con la expedición inmediata de los actos administrativos a través de los cuales se resuelva de fondo las solicitudes de adjudicación presentadas.

Mediante auto de fecha 14 de mayo del presente año, se abrió a prueba el incidente por el término de diez (10), en el que se dispuso tener como pruebas las aportadas por los accionantes y la agencia accionada, así mismo se dispuso decretar como pruebas solicitadas el de requerir a la AGENCIA DE DESARROLLO RURAL para que se pronunciara sobre el informe agronómico remitido por la ANT, para poder expedir los actos administrativos que permitan resolver de manera gradual todas las solicitudes de adjudicación de acuerdo con las extensiones de la UAF. Oficiar al Municipio de Puerto Gaitán (Meta) para que se pronuncie sobre el informe agronómico remitido por la ANT, para el predio EL PORVENIR, a fin de poder expedir los actos definitivos que permitan resolver de manera gradual todas las solicitudes de adjudicación de acuerdo con las extensiones de la UAF y se requirió a los señores JULIO HUMBERTO PRIETO BRIÑEZ, LUIS ILVAR PULIDO PINILLA, ALVARO ROPERO y ALBA GEORGINA SALGADO ROJAS para que completen los trámites relacionados con el FISO-RESO en los términos indicados.

En cumplimiento al requerimiento hecho dentro de la etapa probatoria el apoderado judicial de los accionantes requeridos señala que los señores JULIO HUMBERTO PRIETO BRIÑEZ, LUIS ILVAR PULIDO PINILLA, ALVARO ROPERO y ALBA GEORGINA SALGADO ROJAS, al unísono le informaron que habían tramitado el registro FISO con funcionarios de la ANT, y consultada la página de la ANT se confirmó que el registro FISO –RESO aparece debidamente tramitado y registrado en la base de datos de la entidad accionada. Que en cuanto a la señora GEORGINA SALGADO ROJAS, consultada la misma página no reportó ninguna información pese a haberse realizado el trámite, no obstante lo anterior, se hizo la consulta a través del chat de la ANT manifestándose que la atención al público para realizar estos trámites no estaba disponible, reiterando que este trámite ya se realizó pero no aparece en la base de datos.

La AGENCIA DE DESARROLLO RURAL (ADR), señaló que el 21 de mayo de 2020 dio respuesta a la ANT, informándole que "(...) la ruta de procesos de los proyectos integrales de la ADR, exige un diagnóstico territorial previo, que incluye la acreditación legal respecto de la titularidad de los predios en los cuales se pretende adelantar las iniciativas productivas, por lo tanto, para el caso concreto, sólo hasta que se culmine por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), el proceso de adjudicación del predio "El Porvenir", la Vicepresidenta de Integración Productiva de la ADR analizará lo correspondiente a la viabilidad de una estructuración de los proyectos productivos propuestos, ya que se debe dar pleno cumplimiento a todos los requisitos técnicos, ambientales, financieros y jurídicos, que serán evaluados en la etapa subsiguiente, lo que permitirá brindar el acompañamiento y asesoría integral solicitados.

El 16 de junio del año en curso, se resuelve el incidente de desacato por parte de este despacho imponiendo sanción por desacato a la Doctora MYRIAM CAROLINA MARTINEZ CARDENAS, en su calidad de directora de la ANT, consistente en 10 días de arresto y multa equivalente a 3 smlmv.

La anterior decisión fue remitida al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, Sala Civil Familia Laboral, quien mediante auto de fecha 25 de junio de 2020, declara la nulidad de lo actuado por este despacho a partir del auto de fecha 5 de mayo de 2020, bajo el argumento que, "... *el señor Juez a quo inobservó el trámite previsto en las normas anteriormente trascritas... como el incidente de desacato se adelantó en contra de la Directora de la Agencia Nacional de Tierras – ANT, cuando lo procedente era dirigir el mismo en contra del Director de Acceso a Tierras y del Subdirector de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas de dicha entidad...*".

En cumplimiento a lo dispuesto por el superior, este despacho reanudó el trámite previsto y mediante auto de fecha 8 de julio de 2020, requirió al Director de Acceso a Tierras, Dr. JUAN MANUEL NOGUERA MARTINEZ, para que en el término de 48 horas hiciera cumplir el fallo de tutela proferido por este despacho el 24 de abril de 2018 e iniciara el correspondiente proceso disciplinario en contra de la Dra. JULIA ELENA VEBEGAS GOMEZ

en su calidad de Subdirectora de Acceso a Tierras Focalizadas de la ANT, encargada del cumplimiento del fallo de tutela.

Mediante auto de fecha 16 de julio de 2020, se dispuso la apertura del incidente de desacato en contra de los Doctores JUAN MANUEL NOGUERA MARTINEZ, Director de Acceso a Tierras de la ANT y JULIA ELENA VENEGAS GOMEZ, Subdirectora de Acceso a Tierras Focalizadas de la ANT.

Contra la anterior providencia el apoderado judicial de los incidentantes interpone recurso de reposición solicitando que se vincule al incidente a la Doctora MYRIAM CAROLINA MARTINEZ CARDENAS en su condición de Directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

El anterior recurso fue decidido en auto de fecha 27 de julio de 2020, en el que se dispuso no reponer la providencia atacada.

En la contestación del incidente, los incidentados se apoyaron bajo los mismos argumentos esbozados en las contestaciones anteriores, exponiendo las mismas razones por las que según ellos no se ha podido dar cumplimiento a la orden dada en la sentencia judicial que amparó los derechos de los accionantes y que es objeto del presente incidente, lo cual no se hace necesario volver a reproducir.

Surtido el trámite legal, no observándose nulidad que invalide lo actuado se procede a resolver lo que en derecho corresponda previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Se procede a realizar el estudio del presente incidente de desacato, para lo cual se deben hacer las siguientes precisiones de orden legal y jurisprudencial.

El artículo 27 del decreto 2591 de 1991 prescribe:

> *"Proferido el fallo que conceda la tutela, la autoridad responsable del agravio deberá cumplirla sin demora. (...)"*

El artículo 52 del citado Decreto señala:

> *"La persona que incumpliere una orden de un juez proferida con base en el presente Decreto incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales salvo que en este Decreto ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar.*
> *La sanción será impuesta por el mismo juez mediante tramite incidental y será consultada al superior jerárquico.".*

Conforme a la norma anterior el desacato a lo resuelto en el fallo de tutela y la imposición de la sanción le corresponderá conocer el Juez de Primera Instancia que tramitó la acción de tutela, por lo que este despacho es el

competente para conocer, tramitar y de ser el caso imponer la sanción que haya de corresponder.

Sobre el particular, la Honorable Corte Constitucional, en sentencia T-482 de 2013, con Ponencia del H. Magistrado ALBERTO ROJAS RIOS, indicó:

> *"...el **incidente de desacato** es un mecanismo de creación legal, que procede a petición de la parte interesada, a fin de que el juez constitucional, a través de un incidente y en ejercicio de sus potestades disciplinarias, sancione con arresto o multa a quien con responsabilidad subjetiva desatienda las órdenes proferidas en sentencias de tutela[1]. Lo anterior, con el único fin de "lograr la eficacia de las órdenes impartidas por el juez de amparo para la efectiva protección de los derechos fundamentales reclamados por los tutelantes"[2], por lo cual se diferencia de las sanciones penales que pudieran ser impuestas. Es decir, el propósito del incidente será lograr que el obligado obedezca la orden allí impuesta y no la imposición de una sanción en sí misma[3].".*
>
> *Esta facultad de imponer sanciones que tiene el juez constitucional, se encuentra perfectamente justificada en que "el incumplimiento de las sentencias judiciales constituye una trasgresión del derecho fundamental de acceso a la justicia"[4], el cual incluye, el derecho a obtener el cumplimiento de las decisiones consagradas en las sentencias de tutela.".*

Siguiendo ese derrotero, ha señalado la Jurisprudencia que:

> *"El desacato consiste en una conducta que, mirada objetivamente por el juez, implica que el fallo o providencia de tutela no ha sido cumplido. Desde el punto de vista subjetivo, la responsabilidad de quien ha dado lugar a ese incumplimiento debe ser deducida en concreto, en cabeza de las personas a quienes está dirigido el mandato judicial, lo que significa que estas deben gozar de la oportunidad de defenderse dentro del incidente y estar rodeadas de todas las garantías procesales."[5]*

Frente al deber de cumplimiento de las decisiones judiciales como componente del derecho fundamental al acceso a la administración judicial y al debido proceso, la Honorable Corte Constitucional ha sido clara y contundente al precisar en la sentencia SU-038 de 2018, que:

> "El artículo 229 de la Constitución Política establece que el derecho de acceso a la justicia es la facultad que tiene toda persona de acudir, en igualdad de condiciones, a los jueces y tribunales y, en este sentido, poner en marcha la actividad jurisdiccional del Estado, con el fin de obtener la protección de sus derechos sustanciales, con estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garantías previstas en las leyes –debido proceso–[6].

---

[1] Sentencia T-171 de 2009.
[2] Sentencias C-243 de 1996, C-092/97. Respecto de la finalidad de la sanción que se impone por desacato a una orden del juez de tutela cabe resaltar lo señalado por la Corte en sentencia T- 421 de 2003: *"Del texto subrayado se puede deducir que la finalidad del incidente de desacato no es la imposición de la sanción en sí misma, sino la sanción como una de las forma de búsqueda del cumplimiento de la sentencia. Al ser así, el accionante que inicia el incidente de desacato se ve afectado con las resultas del incidente puesto que éste es un medio para que se cumpla el fallo que lo favoreció".*
[3] Sentencias T-171 de 2009, T-652 de 2010, T-421 de 2003 y T-368 de 2005.
[4] Sentencia T-096-08 M.P. Humberto Sierra Porto
[5] Sentencia T-766 de 1998. Corte Constitucional. M. P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo.
[6] Cfr. sentencia C-426 de 2002, M.P.: Rodrigo Escobar Gil

De conformidad con el mandato constitucional referido, la Corte Constitucional ha señalado que el Estado tiene tres obligaciones para que el acceso a la administración de justicia sea real y efectivo[7]:

> *Obligación de respetar* el derecho a la administración de justicia, que se traduce en que el Estado debe abstenerse de adoptar medidas que impidan o dificulten el acceso a la justicia, o que resulten discriminatorias respecto de ciertos grupos.
>
> *Obligación de proteger*, que consiste en que el Estado adopte medidas orientadas a que terceros no puedan interferir u obstaculizar el acceso el acceso a la administración de justicia.
>
> *Obligación de realizar*, que conlleva que el Estado debe facilitar las condiciones para el disfrute del derecho al acceso a la administración de justicia y hacer efectivo el goce del mismo.

En cuanto a las obligaciones del Estado en materia de acceso a la administración de justicia, el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que *"toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención (...)* y, en consecuencia, corresponde al Estado *"garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso."*

En la misma dirección, el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prescribe que *"Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a garantizar que: (...) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso."*.

De igual manera, el cumplimiento de las providencias judiciales se erige como un componente del derecho fundamental al debido proceso, y así lo ha reconocido este Tribunal desde su jurisprudencia más temprana:

> *"La ejecución de las sentencias es una de las más importantes garantías de la existencia y funcionamiento del Estado social y democrático de Derecho (CP art. 1) que se traduce en la final sujeción de los ciudadanos y los poderes públicos a la Constitución. El incumplimiento de esta garantía por parte de uno de los órganos del poder público constituye un grave atentado al Estado de Derecho.*
>
> *"El sistema jurídico tiene previstos diversos mecanismos (CP arts. 86 a 89) para impedir su autodestrucción. Uno de ellos es el derecho fundamental al cumplimiento de las sentencias comprendido en el núcleo esencial del derecho a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas consagrado en el artículo 29 de la Constitución (CP. Preámbulo, arts. 1, 2, 6, 29 y 86)."*[8] (se subraya)

En efecto, acudir a las autoridades jurisdiccional quedaría desprovisto de sentido si, luego de agotadas las etapas previstas para cada trámite y emitida la decisión que desata el litigio, la parte vencida pudiera deliberadamente hacer tabla rasa de lo resuelto o cumplirlo de forma tardía o defectuosa, comprometiendo el derecho al debido proceso de la parte vencedora y perpetuando indefinidamente la afectación a sus bienes jurídicos. La jurisprudencia constitucional ha sostenido sobre el particular que *"incumplir la orden dada por el juez constitucional en un fallo de tutela es una conducta de suma gravedad, porque (i) prolonga la vulneración o amenaza de un derecho fundamental tutelado y (ii) constituye un nuevo agravio*

[7] Sentencia T-443 de 2013, M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
[8] Sentencia T-554 de 1992, M.P.: Eduardo Cifuentes Muñoz

frente a los derechos fundamentales a un debido proceso y de acceso a la justicia."[9].

Visto el Incidente de Desacato como mecanismo de carácter judicial para hacer cumplir los fallos de tutela, nuestro máximo Tribunal Constitucional, en la misma sentencia[10], ha señalado que a partir de la creación de la acción de tutela, mediante el Decreto reglamentario 2591 de 1991, fijó los mecanismos de coacción para que la sentencias que en el marco de dichas acciones constitucionales se profieran no resulten inocuas y obligar a la autoridad pública o al particular a su cumplimiento[11], bajo la óptica de unos aspectos.

Conforme a lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha precisado que:

> "...al momento de llevar a cabo el control abstracto de constitucionalidad sobre este precepto[12], este Tribunal se refirió a la situación jurídica así regulada y advirtió que se trataba de un trámite incidental especial –al cual no le resultaban aplicables las disposiciones adjetivas civiles sobre apelación de autos–, en el cual el grado jurisdiccional de consulta no se equiparaba a un medio de impugnación, sino que estaba encaminado a la verificación por parte del superior funcional del funcionario de conocimiento que, en caso de haberse impuesto sanciones, las mismas estuvieran correctamente impuestas.
>
> En la misma oportunidad, la Corte sostuvo que "[l]*a facultad del juez de imponer la sanción por el incumplimiento de tal orden* [dictada dentro del trámite de la acción de tutela], *debe entenderse inmersa dentro del contexto de sus poderes disciplinarios, asimilables a los que le concede al juez civil el numeral 2o. del artículo 39 del Código de Procedimiento Civil*"; poderes correccionales justificados por el deber del juez de dirigir el desarrollo del proceso y por razones de interés público que van más allá del conflicto entre las partes. Concluyó, así, que "*los poderes disciplinarios del juez, revisten un carácter correccional o punitivo, asimilable a la sanción de tipo penal*", según una interpretación armónica de los artículos 27 y 53 del mismo Decreto 2591 de 1991, al tenor del cual el incumplimiento al fallo de tutela podría llegar a tipificarse como el delito de fraude a resolución judicial, independientemente de la responsabilidad derivada del desacato.
>
> Pues bien: cuando el sujeto o autoridad responsable del agravio no da cumplimiento a lo resuelto dentro del término estipulado, el juez que obró como autoridad de primera instancia[13] está llamado a hacer acatar la orden con el fin de garantizar la efectividad del derecho protegido, para lo cual puede, además de adoptar las medidas para propiciar el cumplimiento –conforme a lo previsto en el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991–[14], tramitar el incidente de desacato contra el obligado que

[9] Sentencia SU-034 de 2018, M.P.: Mauricio González Cuervo
[10] Cfr. sentencia C-426 de 2002, M.P.: Rodrigo Escobar Gil
[11] Cfr. sentencia T-554 de 1996, M.P.: Antonio Barrera Carbonell
[12] Sentencia C-243 de 1996, M.P.: Vladimiro Naranjo Mesa
[13] La jurisprudencia constitucional ha sido enfática en resaltar que la competencia para hacer cumplir los fallos de tutela radica, prima facie, en cabeza de los jueces de primera instancia, pues son estos los encargados de hacer cumplir las órdenes impartidas, así provengan de un fallo de segunda instancia o de una sentencia de revisión emanada de la Corte Constitucional que haya resuelto revocar lo inicialmente dispuesto. De esta manera, en Auto 136A de 2002, esta Corporación destacó que la competencia principal del juez de primera instancia para asegurar el cumplimiento de las distintas sentencias de tutela: "*(i) Obedece a una interpretación sistemática del Decreto 2591 de 1991, (ii) genera claridad en términos de seguridad jurídica, al desarrollar el principio de igualdad en los procedimientos judiciales, (iii) está (sic) en armonía con el principio de inmediación del trámite de tutela y, (iv) protege la eficacia de la garantía procesal en que consiste el grado jurisdiccional de consulta*". Cfr. Sentencias SU-1158 de 2003, T-421 de 2003, T-368 de 2005 T-271 de 2015 y T-225 de 2016.
[14] Sobre los riesgos que diferencia el trámite del cumplimiento del incidente de desacato, se ha dicho: "[L]*a facultad para sancionar por desacato es una opción que tiene el juez frente al*

se muestre renuente a la observancia del fallo, tal como, desde muy temprano, lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional:

> *"El sistema jurídico tiene previsto una oportunidad y una vía procesal específica para obtener que los fallos de tutela se cumplan y para provocar que, en caso de no ser obedecidos, se apliquen sanciones a los responsables, las que pueden ser pecuniarias o privativas de la libertad, según lo contemplan los artículos 52 y 53 del Decreto 2591 de 1991. El incidente respectivo, al que se ha referido esta Corporación en varios fallos, tiene lugar precisamente sobre la base de que alguien alegue ante el juez competente que lo ordenado por la autoridad judicial con miras al amparo de los derechos fundamentales no se ha ejecutado, o se ha ejecutado de manera incompleta o tergiversando la decisión del fallador."*[15]

La tarea del juez que instruye un incidente de desacato consiste, entonces, en examinar si la orden proferida para la protección de un derecho fundamental fue cumplida, o no, por su destinatario, en la forma prevista en la respectiva decisión judicial[16]. Esto excluye que en el trámite del desacato puedan hacerse valoraciones o juicios que hayan sido objeto de debate en el respectivo proceso de tutela, pues ello implicaría reabrir una controversia que ya ha concluido, en detrimento de la seguridad jurídica y el principio de cosa juzgada[17].

Descendiendo al caso bajo estudio, tenemos que los hechos que informan del desacato, se concretan a que, en fallo de fecha 24 de abril de 2018, se concedió el amparo constitucional a los accionantes y se ordenó: *"... a. la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS, que en un término máximo de dos (2) meses, adelante los actos administrativos en el marco de sus competencias, conforme lo estableció la sentencia SU 426 de 2016, a fin de que se cumplan las ordenes allí dadas respecto de los ocupantes de los terrenos baldíos consignados en la Resolución No. 6423 del 2014, y que se relaciona con la adjudicación a quienes cumplan con los requisitos objetivos y subjetivos previstos en la Ley 160 de 1994 y demás normas que lo regulen."*, que a la fecha de presentación de la queja, la accionada ha venido incumpliendo lo ordenado en tutela, porque han transcurrido más de dos (2) años, y no se concibe que como respuestas exprese que *"...Es menester señalar que de los dieciséis (16) tutelantes amparados por el juzgado, inicialmente solo se encontraron registros documentales oficiales de seis (6) solicitudes debidamente radicadas ante el incoder..."*, justificando su respuesta cuando menciona que *"... en la actualidad se han encontrado registros documentales de otras solicitudes de personas de este grupo dentro de carpetas entregadas por el extinto Incoder, sin embargo, muchas de las mismas carecen de número de radicado, ni número de expediente por lo que están siendo evaluadas con el fin de resolver el trámite a imponer."*, y culmina dando como respuesta a una solicitud que hacen los accionantes para que se cite a una audiencia para concertar y colaborar en el cumplimiento del fallo, les diga que *"... respecto*

---

incumplimiento pero no puede confundirse en manera alguna con la potestad que tiene para hacer efectiva la orden de tutela. Es decir, el juez puede adelantar el incidente de desacato y sancionar a o los responsables y simultáneamente puede adelantar las diligencias tendentes a obtener el cumplimiento de la orden. Un trámite no excluye el otro y de igual manera la competencia para hacer efectivo el cumplimiento de la orden no es requisito necesario ni previo para poder imponer la sanción." Sentencia T-459 de 2003, M.P.: Jaime Córdoba Triviño

[15] Sentencia T-088 de 1999, M.P.: José Gregorio Hernández Galindo

[16] Sentencia T-014 de 2009, M.P.: Nilson Pinilla Pinilla

[17] Sentencias T-188 de 2002, M.P.: Alfredo Beltrán Sierra, T-421 de 2003, M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra y T-512 de 2011, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio

de los términos de cumplimiento al fallo judicial en comento, los accionantes de la tutela pueden hacer uso de los mecanismos legales consagrados en su favor para que ante las autoridades judiciales correspondientes se exija el cumplimiento de las sentencias emitidas por los jueces de la república.".

Analizados todos los documentos que obran en el expediente y que fueron acompañados por la parte incidentante como por los incidentados, se deben hacer las siguientes precisiones:

Respecto del desarrollo de las acciones ordenadas por la Corte Constitucional en la sentencia SU-426 de 2016, es cierto, que la ANT dispuso la creación de una mesa de trabajo interinstitucional para solucionar la situación del derecho a la tierra y el territorio de la comunidad campesina de El Porvenir; que la mesa de trabajo sesionó, de acuerdo con la tabla inserta en el escrito de contestación, que durante el año 2016 lo hizo en una (1) oportunidad; en el año 2017, lo hizo en siete (7) oportunidades; en el año 2018, se llevaron a cabo once (11) sesiones; en el año 2019, tan sólo se realizaron tres (3) sesiones y en el presente año 2020, solo se llevó a cabo una (1) sesión, presentando para el caso 20 actas, sin que se acompañara copia de las mismas, es decir, no aparece probado que el objeto en cada una de las sesiones realizadas por la mesa de trabajo se cumpliera y su avance en el cumplimiento de los objetivos para la cual fue creada en garantía de los derechos de los poseedores del predio El Porvenir.

Igualmente, se tiene, conforme a lo expresado por la ANT, se llevó a cabo el censo de los ocupantes del predio El Porvenir, obteniéndose como resultado especialmente frente al fallo proferido por este despacho en la acción de tutela y que corresponde a los ocupantes vinculados a la asociación ASOYOPO a la cual pertenecen los accionantes, que se censaron a 30 ocupantes.

Se estableció una mesa de trabajo con el fin de identificar áreas en proceso de restitución, llevándose a cabo ocho (8) sesiones en el año 2017, solicitándose el 22 de enero de 2018 una información a la URT quien dio respuesta el 19 de febrero del mismo año ratificando que fueron recibidas 27 solicitudes de restitución, encontrándose en proceso preliminar dos (2).

Plasma en su escrito de contestación una tabla que describe como "TABLA 5. Estado de cumplimiento de las ordenes de competencia de la SANT. y en la que se consigna que la Orden Cuarta fue cumplida en noviembre de 2016; Orden Cuarta, literal (i) cumplida en el mes de mayo de 2018; Orden Cuarta, literal (ii), fue cumplida en junio de 2018 y Orden Cuarta, literal (iii) fue cumplida en el mes de julio de 2018.

Acciones que se han venido desarrollando a lo largo de cuatro (4) años, sin que a la fecha se haya obtenido el resultado final que corresponde a la expedición del acto administrativo que decida las solicitudes de adjudicación, por lo que no se concibe que haya un desgaste de logística y.

de inversión económica por parte de la ANT durante tanto tiempo sin que arroje resultados positivos y sin que se divise que quienes reclaman dichas adjudicaciones en un corto tiempo obtengan un resultado frente a la cesación de la vulneración o amenaza de sus derechos fundamentales constitucionales amparados en sentencia de tutela constitucional.

Frente a la orden dada en la sentencia de tutela proferida por este despacho el 24 de abril de 2018 y que hace relación a los dieciséis (16) accionantes, tenemos que:

En primer lugar, se alega que la competencia recae en la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas de la Agencia Nacional de Tierras y no en la Directora de la Agencia Nacional de Tierras, sobre este punto, cabe destacar que conforme a lo expuesto ampliamente por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, Sala Civil Familia Laboral, en su providencia del 25 de junio de la presente anualidad, mediante el cual declaró la nulidad de lo actuado en primera instancia, al haberse adelantado el incidente de desacato en contra de la Directora de la Agencia Nacional de Tierras – ANT, cuando lo correcto ha debido ser, que se promoviera en contra del Director de Acceso a Tierras y el Subdirector de Acceso a Tierras Focalizadas; se redireccionó el trámite incidental en contra de las personas naturales encargadas del cumplimiento del fallo, en su orden, el Doctor JUAN MANUEL NOGUERA MARTINEZ, Director de Acceso a Tierras y Doctora JULIA ELENA VENEGAS GOMEZ, Subdirectora de Acceso a Tierras Focalizadas de la ANT.

Así las cosas, el cumplimiento del fallo, como quedó establecido y así lo señaló la Agencia Nacional de Tierras, la cabeza visible de la ANT, encargada del cumplimiento del fallo de tutela es la Subdirectora de Acceso a Tierras Focalizadas, Doctora JULIA ELENA VENEGAS GOMEZ y su inmediato superior, encargado de hacer cumplir el fallo es, el Doctor JUAN MANUEL NOGUERA MARTINEZ, en su calidad de Director de Acceso a Tierras de la ANT, luego entonces, la competencia legal está radicada en cabeza de los antes mencionados, y que de acuerdo con las facultades que les fueron conferidas al momento de tomar posesión del cargo, velar por el cumplimiento de los objetivos de la agencia, razón por la cual el presente incidente de desacato se encausó en contra de ellos.

En segundo lugar, se argumenta el incumplimiento por que respecto de los expedientes administrativos que le fueron entregados por el Incoder, inicialmente sólo se encontraron registros documentales de seis (6) accionantes, y luego de un proceso de búsqueda se logró hallar registros de solicitudes de personas de este grupo de personas dentro de algunas carpetas, las cuales carecen de número de expediente, número de radicado o constancia de haber sido presentada, no obstante lo anterior se inició el trámite de estudio de las solicitudes aportadas, sin especificar cuando se inició este estudio y cuando culmina, presentándose una irregularidad frente a la expectativa de los accionantes, quienes no pueden quedar a la espera de una solución de manera indefinida, pues ello atenta contra el debido proceso administrativo y constituye un desacato frente a

a orden dada por el juez constitucional en el fallo de tutela, respecto del término perentorio concedido.

No puede aceptarse, como lo aduce los incidentados que, la documentación que fue presentada por los accionantes ante el extinto Incoder no le fue entregado a ellos y que por ello, no aparecen las carpetas, ni número de radicación, ni número de expediente y que por lo tanto, palabras más, palabras menos, los usuarios deben volver otra vez a presentar la solicitud de adjudicación para poder abrir un expediente y darle el trámite respectivo, lo que conllevaría a que pasen otros dos, tres y hasta cuatro años sin que la ANT les resuelva sobre la adjudicación que están reclamando y que fue la misma agencia, cuando al contestar la tutela no desconoció que los aquí accionantes hacen parte del grueso grupo de ocupantes del predio de mayor extensión denominado El Porvenir, luego entonces, no se concibe que, dicha carga administrativa le sea trasladada a los usuarios y mucho menos en esta época de epidemia, cuando se han emitido decretos por parte del Estado que contienen los protocolos de seguridad para la ciudadanía y en donde no se exige que los usuarios asistan de manera presencial a las entidades del Estado, sino que lo pueden hacer a través de los correos electrónicos, se le informe a los usuarios que deben acercarse a los puntos de atención y unidades de la ANT a llenar los formularios FISO, pero que conforme a la directriz de la entidad, por la emergencia sanitaria, las jornadas de diligenciamiento de los formularios están suspendidas, lo cual es violatorio, desde todo punto de vista de los derechos de las personas al acceso de tierras, el debido proceso, pues estas barreras administrativas no pueden ser trasladadas a los usuarios y menos servir como excusa para el no cumplimiento de un sentencia de orden constitucional que está amparando derechos fundamentales.

En efecto, dichas barreras administrativas van en detrimento de la efectiva prestación del servicio, pues los usuarios no pueden acceder a los servicios de las entidades estatales porque, los obligan a presentar una cantidad de documentos que en la mayoría de los casos, se convierten en documentos imposibles de ser conseguidos por los usuarios, otras veces, por la falta de estudio, que, en casos como el presente, muchos son campesinos, personas dedicadas al agro, qúe no tienen un conocimiento amplio de los sistemas informáticos ni del funcionamiento de las diferentes entidades del gobierno, acuden a las oficinas o llaman a las mismas en busca de una solución a su problema y se encuentran con funcionarios que no le brindan una solución o entidades que no utilizan políticas públicas al servicio de la comunidad o que en plena revolución informática, les exigen a los usuarios, como en el caso de la señora ALBA GEORGINA SALGADO ROJAS, a quien en búsqueda de darle solución al requerimiento que le hizo la ANT, pese a que ella afirma ya haber diligenciado dicho formulario, le informó el AGENTE 2 que "*...la persona deberá acercarse a los puntos de atención y unidades de gestión territorial de la Agencia Nacional de Tierras. En estos momentos por la cuarentena decretada por el Gobierno Nacional, no hay atención al público en dichas oficinas... las jornadas de diligenciamiento en territorio para el diligenciamiento de formularios de inscripción de sujetos de ordenamiento FISO quedarán suspendidas...*", respuestas que atentan

contra la dignidad de las personas, va en contravía de los protocolos de seguridad implementados por el Estado a través de sus decretos para el confinamiento de las personas por la epidemia y desenmarca por completo el contexto de la acción de tutela en garantía de la protección de los derechos fundamentales de las personas, más cuando se utiliza como medio argumentativo para el no cumplimiento de un fallo judicial que ampara derechos fundamentales.

En tercer lugar, se señala que debido a que la señora ALBA GEORGINA SALGADO ROJAS no ha realizado el diligenciamiento del formulario FISO, por lo que no es posible llevar a cabo el estudio de los requisitos subjetivos de la solicitud de adjudicación y que respecto de los señores JULIO HUMBERTO PRIETO BRIÑEZ, LUIS ILVAR PULIDO PINILLA y ALVARO ROPERO, se encuentra pendiente de calificación acompañando para el efecto un cuadro en el que refiere como asunto, cabe destacar que conforme al requerimiento que este despacho les hizo a los anteriormente mencionados, argumentan que dicho formulario FISO, ya fue diligenciado como lo acreditan con los pantallazos que fueron allegados en cumplimiento a dicho requerimiento por parte del despacho, luego entonces, esto no corresponde a un hecho que sirva como excusa para el no cumplimiento del fallo de tutela, el cual supera los dos (2) años, cuando en el mismo se le impuso un término perentorio de dos (2) meses, encontrándose en flagrante desacato, pues reitérese, los argumentos que se exponen no tienen ningún asidero jurídico, pues no corresponden a hechos que sean imposibles de cumplir, máxime que en tratándose de antecedentes judiciales, las mismas incidentadas, en el curso del proceso administrativo los pueden obtener a través de las páginas web de la policía judicial e implementar el programa o permitir que el diligenciamiento del formulario FISO se haga a través de una plataforma o sea recibido en documento PDF a través del correo institucional que los mismos incidentados poseen en la agencia.

Por último, cabe señalar que frente al acompañamiento por parte de la Agencia a los accionantes "*...mientras realiza los trámites legales para la adjudicación...*", tampoco observa este despacho que los mismos se hayan cumplido en el entendido que, como se evidenció anteriormente, los incidentados, no les ha brindado el acompañamiento que consiste concretamente en la recolección y conformación de los expedientes que contienen las solicitudes de adjudicación y todos sus anexos, tan cierto es ello, que obra prueba en la cual, es la misma agencia la que les hace el requerimiento a los accionantes y aduce frente al trámite incidental que el acto administrativo final que resuelva sobre las peticiones de adjudicación no se han cumplido por la falta de unos antecedentes y del diligenciamiento del formulario FISO, todo lo cual hace parte de los actos diligentes de acompañamiento por parte de la agencia en búsqueda del lleno de los requisitos exigidos, acceso al trámite administrativo y debido proceso.

De todo lo anterior, es evidente que los incidentados JUAN MANUEL NOGUERA MARTINEZ y JULIA ELENA VENEGAS GOMEZ, en su calidad de Director de Acceso a Tierras y Subdirectora de Acceso a Tierras

Focalizadas de la Agencia Nacional de Tierras- (ANT) no han dado cumplimiento a la sentencia de fecha 24 de abril de 218, porque han transcurrido más de dos (2) años, en la que se le ordenó que en el término máximo de dos (2) meses, adelantara los actos administrativos en el marco de sus competencias, conforme lo estableció la sentencia SU 426 de 2016, a fin de que se cumplieran las ordenes allí dadas "***... y que se relacionan con la adjudicación a quienes cumplan con los requisitos objetivos y subjetivos previstos en la ley 160 de 1994 y las demás normas que lo regulen...***"; solicitadas por los ocupantes del predio de mayor extensión denominado El Porvenir, sin que a la fecha, lo haya hecho y contrario a ello, traslada la culpa a los accionantes, sin que se vislumbre por lado alguno en que ha consistido el acompañamiento que conforme a la sentencia ha debido brindarles en el trámite legal de sus solicitudes. En el mismo sentido en respuesta a una petición de audiencia para concertar y colaborar con el cumplimiento del fallo, la Agencia incidentada les respondió: *"Cabe señalar que respecto de los términos de cumplimiento al fallo judicial en comento, los accionantes de la tutela pueden hacer uso de los mecanismos legales consagrados en su favor para que ante las autoridades judiciales correspondientes se exija el cumplimiento de las sentencias emitidas por los jueces de la república"* [10], lo cual constituye una afrenta o desafío a las personas que acuden a esa agencia en busca de una solución a sus problemas y que desdibuja la misión que la misma persigue, lo cual significa que objetivamente se dan los hechos que configuran desacato.

Subjetivamente frente a esa conducta, puede verse que no se ha prestado todo el ánimo de atender la orden judicial, pese a que ya han transcurrido más de dos (2) años, la entidad accionada traslada en principio la culpa al extinto Incoder, bajo la premisa de no haberle entregado las carpetas de todos y cada uno de los peticionarios y luego, a los accionantes argumentando que no se han registrado mediante el formulario FISO ni les han hecho llegar los antecedentes judiciales, lo cual fue desvirtuado, además de que agrega que para el diligenciamiento del formulario FISO dicha atención se encuentra suspendida por orden de la agencia, lo cual le impide a los usuarios cumplir con los requerimientos que la misma agencia hace y constituye una obstrucción al debido proceso administrativo que se adelanta y perjudica ostensiblemente a los poseedores que pretenden la legalización de sus tierras y por último, se aprecia una actitud reacia a querer hacer concertaciones o acercamiento con los accionantes en aras de culminar con el proceso administrativo invitándolos a que acudan a las autoridades judiciales para el cumplimiento de las sentencias que profieran los jueces de la república.

Igualmente, otro argumento que refleja el desinterés de la Subdirectora de Acceso a Tierras Focalizadas de la ANT en dar cumplimiento a la sentencia de tutela, es el hecho que los procesos administrativos de solicitud de adjudicación elevado por los aquí accionantes son individuales, por lo que bien ha podido, en la medida que, cada uno de los ocupantes de los predios ha cumplido con todos y cada uno de los requisitos, ir resolviendo

[10] Oficio del 30 de noviembre de 2018, que contiene respuesta al Radicado ANT No. 20186201361782; Memorando No. 20181030197113.

uno a uno, los procesos administrativos, pues si bien es cierto la tutela fue presentada en conjunto, ello no implica que los procesos administrativos se tengan que resolver de igual forma, porque recuérdese que aducen que solamente cuatro (4) personas de un grupo de dieciséis (16) no han cumplido con los requisitos, luego entonces, se pregunta este fallador, que motivos hace que no se resuelva favorable o desfavorablemente las peticiones de éstos últimos si ya han cumplido con los requisitos que la ANT les ha exigido?. No resolverle a cada uno de los poseedores las solicitudes de adjudicación y dejando que pase el tiempo de manera inexorable, constituye una dilación injustificada de cada uno de los procesos administrativos de adjudicación solicitados y de contera en el incumplimiento injustificado de la sentencia de tutela al transcurrir el tiempo concedido de manera excesiva sin que se avizore que dichas peticiones le vayan a ser resueltas prontamente conforme a lo que se puede deducir de la respuesta dada por los incidentados y contrario a ello, aspiran a que se les conceda un nuevo plazo, desconociendo el carácter perentorio e improrrogable de los términos judiciales y/o administrativos.

También denota desidia y desinterés por culminar el proceso administrativo, al argumentar que para poder tomar la decisión se requiere la verificación de las extensiones de la UAF por lo que solicitaron a la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) pronunciamiento sobre el informe agronómico remitido por la ANT para el predio El Porvenir y poder expedir los actos administrativos que permitan resolver de manera gradual las solicitudes de adjudicación, lo cual fue desvirtuado al hacerse el requerimiento a la ADR por parte de este despacho dentro del presente incidente y quienes refirieron en su respuesta que "*... para el caso concreto, sólo hasta que se culmine por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), el proceso de adjudicación del predio "El Porvenir", la Vicepresidenta de Integración Productiva de la ADR analizará lo correspondiente a la viabilidad de una estructuración de los proyectos productivos propuestos...*" , excusas que van en contra de una pronta y cumplida solución a las solicitudes hechas por los accionantes, máxime cuando transcurre el paso del tiempo de manera indefinida sin que se tenga la certeza de un pronto cumplimiento al fallo de tutela. (subraya el despacho).

Cabe destacar que los representantes legales (directores, gerentes), no solo de la agencia accionada sino en general, todas las entidades del sector público, han optado por no utilizar correos personales, por lo que toda la correspondencia se realiza a través de los correos institucionales de las entidades públicas, no obstante lo anterior, este fallador judicial envió las correspondientes notificaciones a los incidentados vía correo electrónico institucional de la Agencia nacional de Tierras, con las respectivas constancias de haber sido entregados, luego entonces se cumplió con los parámetros señalados en el Código General del Proceso en cuanto a la forma de surtirse las notificaciones personales a quienes están llamados al cumplimiento del fallo de tutela.

Por otro lado, causa extrañeza a este fallador que, si las solicitudes de adjudicación de los predios fueron radicadas ante el extinto INCODER el

cual ha debido trasladar todas las carpetas a la ANT, entre el 2014 y 2015, el fallo constitucional unificador SU-426 de 2016 y el proferido por este despacho judicial lo fue el 24 de abril de 2018, en la que expresamente se señaló un término de dos (2) meses para que resolvieran dichas peticiones de adjudicación a quienes cumplieran los requisitos objetivos y subjetivos previstos en la Ley 160 de 1994, ahora se pretende bajo el amparo de una nueva ley (Decreto 902 de 2017), exponer las razones o los motivos que le han impedido tomar la decisión de fondo, por no haberse cumplido por parte de los incidentantes unos requisitos no previstos en la ley 160 de 1994, así como que se está a la espera de una certificación mediante la cual se va a modificar la UAF para poder legalizar los predios, que reitero, su solicitud de adjudicación data de los años 2014 y 2015, y que por lo mismo han debido ser decididas bajo el amparo de la ley vigente al momento en que se elevaron las solicitudes de adjudicación, lo cual, conduce necesariamente a establecer que los accionados, aquí incidentados, no han tenido la más mínima voluntad de resolver de fondo dichas solicitudes de adjudicación manteniendo en un estado de adormecimiento, tanto la sentencia unificadora SU 426 de 2016 como la emitida por éste despacho judicial y sin que los afectados tengan certeza de una fecha cierta en la que se emita el acto administrativo definitivo que resuelva sus peticiones de adjudicación, desconociendo por completo lo señalado en el artículo 27[19] y parágrafo 1 del artículo 81[20] de la Ley 902 de 2017, esto es que, al proceso administrativo de adjudicación se le debe aplicar la ley más favorable por haber sido presentadas sus solicitudes antes de entrar en vigencia el Decreto 902 de 2017 e igualmente, continuar con el procedimiento vigente antes de la expedición de lanueva ley.

En tales circunstancias, los funcionarios incidentados, ha incumplido una orden proferida dentro de una acción de tutela, incurriendo con ello en desacato en la forma como quedó analizado y tal como lo establece el inciso segundo del art. 27 del Decreto 2591 de 1991, al señalar: *"(...) El juez podrá sancionar por desacato al responsable y al superior hasta que cumplan su sentencia. (...)"*; conducta que los hace acreedores a la sanción establecida por el Decreto 2591 de 1991 en su artículo 52; que para el caso será: Para el Dr. JUAN MANUEL NOGUERA MARTINEZ, Director de Acceso a Tierras de la ANT, arresto de 10 días, que deberá cumplir en las instalaciones de la Policía Metropolitana en Bogotá y multa a favor del Consejo Superior de la Judicatura, equivalente a tres (3) smlmv; para la Dra. JULIA ELENA VENEGAS GOMEZ, Subdirectora de Acceso a Tierras Focalizadas de la ANT, arresto de 10 días, que deberá cumplir en las instalaciones de la policía Metropolitana en Bogotá, debiéndose comunicar

---

[19] **Artículo 27. Solicitudes en proceso**. En los casos en que el ocupante haya elevado su solicitud de adjudicación con anterioridad a la entrada en vigencia del presente decreto ley **se aplicará en su integridad el régimen más favorable para lograr la adjudicación**. (subrayado y negrilla por el Juzgado)

[20] **Parágrafo 1.** Los procedimientos y actuaciones administrativas que hayan sido iniciados antes de la expedición del presente decreto ley y/o que se encuentren en zonas distintas a aquellas en las que se inicie la formulación del respectivo plan de ordenamiento social de la propiedad rural de conformidad con los artículos 40 y subsiguientes del presente decreto ley, **continuarán su trámite hasta su culminación mediante el procedimiento vigente antes de la expedición del presente decreto ley**. (subrayado y negrilla por el juzgado()

al respectivo Comandante de Policía, para lo pertinente y multa a favor del Consejo Superior de la Judicatura, en el equivalente a tres (3) smlmv.

Las sumas se deberán consignar en la cuenta denominada "Multas y cauciones efectivas del Consejo Superior de la Judicatura" No. 3-0070-000030-4 del Banco Agrario de Colombia, dentro de los 5 días siguientes a partir de la notificación de este proveído.

Las sanciones aquí impuestas no eximen a los Doctores JUAN MANUEL NOGUERA MARTINEZ y JULIA ELENA VENEGAS GOMEZ para que cumplan o hagan cumplir la sentencia de tutela de fecha 24 de abril de 2018.

Para hacer efectiva la multa, se enviará fotocopia auténtica de esta providencia con su respectiva constancia de ejecutoria y que es primera copia y presta mérito ejecutivo a la oficina de Jurisdicción Coactiva de la Dirección Seccional de este Distrito Judicial.

Por lo expuesto y sin más consideraciones, el Juzgado Promiscuo de Familia de Puerto López Meta,

RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar que los Doctores JUAN MANUEL NOGUERA MARTINEZ, en calidad de Director de Acceso a Tierras y JULIA ELENA VENEGAS GOMEZ, en su calidad de Subdirectora de Acceso a Tierras Focalizadas de la ANT, incurrieron con su actuar frente a la decisión tomada por este Despacho Judicial, en decisión de fecha 24 de abril de 2018, en DESACATO, conforme a lo reseñado en la motivación.

SEGUNDO. - Sancionar por Desacato al Doctor JUAN MANUEL NOGUERA MARTINEZ, en calidad de Director de Acceso a Tierras de la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS, con arresto de 10 días, que deberá cumplir en las instalaciones de la Policía Metropolitana en Bogotá y multa a favor del Consejo Superior de la Judicatura, equivalente a tres (3) smlmv.

TERCERO. - Sancionar por Desacato a la Doctora JULIA ELENA VENEGAS GOMEZ, en calidad de Subdirectora de Acceso a Tierras Focalizadas de la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS, con arresto de 10 días, que deberá cumplir en las instalaciones de la Policía Metropolitana en Bogotá y multa a favor del Consejo Superior de la Judicatura, equivalente a tres (3) smlmv.

CUARTO. - Las multas aquí impuestas deberán ser consignadas en la cuenta denominada "Multas y Cauciones Efectivas del Consejo Superior de la Judicatura" N° 3-0070-000030-4 del Banco Agrario de Colombia, dentro de los 5 días siguientes, a partir de la notificación de este proveído.

PARÁGRAFO 1.- Para hacer efectiva la multa, se enviará fotocopia auténtica de esta providencia, con su respectiva constancia de ejecutoria y que es primera copia y presta mérito ejecutivo, a la oficina de Jurisdicción

Coactiva de la Dirección Seccional de Administración Judicial de este Distrito Judicial.

PARÁGRAFO 2.- Para hacer efectiva la sanción de arresto se deberá comunicar al respectivo Comandante de Policía de la policía Metropolitana de Bogotá, para lo pertinente.

QUINTO. - Las sanciones aquí impuestas no eximen a los Doctores JUAN MANUEL NOGUERA MARTINEZ y JULIA ELENA VENEGAS GOMEZ para que cumpla o haga cumplir la sentencia de tutela de fecha 24 de abril de 2018.

SEXTO. - En cumplimiento del artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, envíese lo actuado para que surta el grado de consulta, ante el Honorable Tribunal Superior de Villavicencio.

NOTIFÍQUESE

CESAR HUMBERTO ACEVEDO BUITRAGO
JUEZ

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE PUERTO LOPEZ
CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 201103287135763395 **Nro Matrícula: 234-8015**

Impreso el 3 de Noviembre de 2020 a las 11:59:55 AM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

CIRCULO REGISTRAL: 234 - PUERTO LOPEZ DEPTO: META MUNICIPIO: PUERTO GAITAN VEREDA: PORVENIR
FECHA APERTURA: 28-05-1993 RADICACIÓN: 93-00683 CON: RESOLUCION DE: 15-01-1992
CODIGO CATASTRAL: COD CATASTRAL ANT: SIN INFORMACION
ESTADO DEL FOLIO: **ACTIVO**

= =

DESCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS
PREDIO RURAL CON CABIDA DE: NOVECIENTAS NOVENTA Y UNA HECTAREAS- UN MIL METROS CUADRADOS (991 HAS- 1.000 M2) APROXIMADAMENTE. LINDEROS INDICADOS EN LA RESOLUCION N. 0030, DE ENERO 15 DE 1992, INCORA VILLAVICENCIO. (DECRETO 1711, DE JULIO 6 DE 1.984).
COMPLEMENTACION:

DIRECCION DEL INMUEBLE
Tipo Predio: RURAL
1) EL PEDREGAL

MATRICULA ABIERTA CON BASE EN LA(s) SIGUIENTE(s) (En caso de integración y otros)

ANOTACION: Nro 001 Fecha: 25-05-1993 Radicación: 00683
Doc: RESOLUCION 0030 DEL 15-01-1992 INCORA DE VILLAVICENCIO VALOR ACTO: $
ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION: 170 ADJUDICACION BALDIOS MODO DE ADQUISICION
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)
DE: INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA
A: VILLARRAGA EDUARDO CC# 19383344 X

ANOTACION: Nro 002 Fecha: 18-12-2003 Radicación: 01504
Doc: OFICIO S/N DEL 05-11-2003 SECRETARIA DE HACIENDA DE PUERTO GAITAN VALOR ACTO: $
ESPECIFICACION: MEDIDA CAUTELAR: 0444 EMBARGO POR JURISDICCION COACTIVA MEDIDA CAUTELAR
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)
DE: MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN
A: VILLARRAGA EDUARDO

ANOTACION: Nro 003 Fecha: 21-12-2007 Radicación: 2298
Doc: ESCRITURA 2922 DEL 20-12-2007 NOTARIA CUARTA DE VILLAVICENCIO VALOR ACTO: $
ESPECIFICACION: OTRO: 0919 ENGLOBE
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)
DE: ALVARADO ROBERTO CC# 119218 X
DE: FAJARDO VEGA EDILSON HORACIO CC# 7818580 X
DE: HERRERA JUAN AGUSTIN CC# 4125831 X
DE: LOZANO NEIRA JAIME RAMON CC# 80267899 X

La validez de este documento podrá verificarse en la página www.snrbotondepago.gov.co/certificado/

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE PUERTO LOPEZ

CERTIFICADO DE TRADICION

MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 201103287135763395 **Nro Matrícula: 234-8015**

Impreso el 3 de Noviembre de 2020 a las 11:59:55 AM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

DE: VILLARRAGA EDUARDO CC# 19383344 X

ANOTACION: Nro 004 Fecha: 06-03-2008 Radicación: 0400

Doc: OFICIO S/N DEL 28-02-2008 TESORERIA MUNICIPAL DE PUERTO GAITAN VALOR ACTO: $

ESPECIFICACION: CANCELACION: 0842 CANCELACION EMBARGO POR IMPUESTOS MUNICIPALES

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: MUNCIPIO DE PUERTO GAITAN

A: VILLARRAGA EDUARDO

ANOTACION: Nro 005 Fecha: 27-02-2015 Radicación: 2015-234-6-409

Doc: RESOLUCION 6423 DEL 30-07-2014 INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL DE BOGOTA D.C.

VALOR ACTO: $0

ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION: 0158 REVOCATORIA ADMINISTRATIVA DIRECTA DE LA RESOLUCION 0030 DEL 15/1/1992 INCORA DE VILLAVICENCIO

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL INCODER **NIT# 8301223980**

A: VILLARRAGA EDUARDO **CC# 19383344**

ANOTACION: Nro 006 Fecha: 27-02-2015 Radicación: 2015-234-6-409

Doc: RESOLUCION 6423 DEL 30-07-2014 INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL DE BOGOTA D.C.

VALOR ACTO: $0

ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION: 0156 REVERSION DEL BALDIO

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

A: LA NACION - INCODER **X**

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: *6*

CON BASE EN LA PRESENTE SE ABRIERON LAS SIGUIENTES MATRICULAS

3 -> 15745

SALVEDADES: (Información Anterior o Corregida)

Anotación Nro: 1 Nro corrección: 1 Radicación: 2013-234-3-258 Fecha: 10-09-2013

SE CORRIGE ERROR MECANOGRAFICO DE TRASCRIPCIÓN EN EL NOMBRE DEL ADQUIRENTE AL REALIZAR LA DIGITALIZACION DEL FOLIO CARTULINA AL SIR. ART. 59 LEY 1579/2012.

Anotación Nro: 0 Nro corrección: 1 Radicación: 2013-234-3-258 Fecha: 10-09-2013

SE DEJA CERRADO EL PRESENTE FOLIO POR ENGLOBE AL REALIZARCE CORRECION POR ERROR MECANOGRAFICO DE TRASCRIPCIÓN EN EL NOMBRE DEL ADQUIRENTE AL REALIZAR LA DIGITALIZACION DEL FOLIO CARTULINA AL SIR. ART. 59 LEY 1579/2012.

* * *

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE PUERTO LOPEZ
CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 201103287135763395 **Nro Matrícula: 234-8015**

Impreso el 3 de Noviembre de 2020 a las 11:59:55 AM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

= =

FIN DE ESTE DOCUMENTO

El interesado debe comunicar al registrador cualquier falla o error en el registro de los documentos

USUARIO: Realtech

TURNO: 2020-234-1-12787 **FECHA: 03-11-2020**

EXPEDIDO EN: BOGOTA

El Registrador: DIRNEY YOLIMA VELASQUEZ ALVAREZ

La validez de este documento podrá verificarse en la página www.snrbotondepago.gov.co/certificado/

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE PUERTO LOPEZ
CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 201112782036132399 **Nro Matrícula: 234-8007**

Impreso el 12 de Noviembre de 2020 a las 10:53:42 AM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

CIRCULO REGISTRAL: 234 - PUERTO LOPEZ DEPTO: META MUNICIPIO: PUERTO GAITAN VEREDA: PORVENIR
FECHA APERTURA: 26-05-1993 RADICACIÓN: 93-00675 CON: RESOLUCION DE: 15-01-1992
CODIGO CATASTRAL: COD CATASTRAL ANT: SIN INFORMACION
ESTADO DEL FOLIO: **ACTIVO**

= =

DESCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS
LOTE DE TERRENO CON CABIDA DE : NOVECIENTAS SETENTA Y NUEVE HECTERAS -CINCO METROS CUADRADOS . (979 HAS - 5000 M2) Y CON LINDEROS INDICADOS EN LA RESOLUICON 002 DE FECHA ENERO 15 DE 1.992,INCORA -VILLAVICENCIO .(DECRETO 1711 DE JULIO 6 DE 1.984)
COMPLEMENTACION:

DIRECCION DEL INMUEBLE
Tipo Predio: RURAL
1) MI LLANURA

MATRICULA ABIERTA CON BASE EN LA(s) SIGUIENTE(s) (En caso de integración y otros)

ANOTACION: Nro 001 Fecha: 25-05-1993 Radicación: 00675
Doc: RESOLUCION 0022 DEL 15-01-1992 INCORA DE VILLAVICENCIO VALOR ACTO: $
ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION: 170 ADJUDICACION BALDIOS MODO DE ADQUISICION
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)
DE: INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA
A: BUSTOS BERNAL HUGO ARMANDO CC# 74280416 X

ANOTACION: Nro 002 Fecha: 18-12-2003 Radicación: S/N
Doc: OFICIO S/N DEL 05-11-2003 SECRETARIA DE HACIENDA DE PUERTO GAITAN VALOR ACTO: $
ESPECIFICACION: MEDIDA CAUTELAR: 0444 EMBARGO POR JURISDICCION COACTIVA
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)
DE: MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN
A: BUSTOS BERNAL HUGO ARMANDO

ANOTACION: Nro 003 Fecha: 21-12-2007 Radicación: 2294
Doc: ESCRITURA 2918 DEL 20-12-2007 NOTARIA CUARTA DE VILLAVICENCIO VALOR ACTO: $
ESPECIFICACION: OTRO: 0919 ENGLOBE
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)
A: ALVAREZ SARMIENTO JULIO ENRIQUE CC# 8699637 X
A: BERNAL ARMANDO CC# 1063290 X
A: BUSTOS BERNAL HUGO ARMANDO CC# 74280416 X
A: BUSTOS SILVA HUGO EFRAIN CC# 19312544 X
A: LEON GAITAN JOSE DEL CARMEN CC# 7275986 X

La validez de este documento podrá verificarse en la página www.snrbotondepago.gov.co/certificado/

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE PUERTO LOPEZ

CERTIFICADO DE TRADICION

MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 201112782036132399 **Nro Matrícula: 234-8007**

Impreso el 12 de Noviembre de 2020 a las 10:53:42 AM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

ANOTACION: Nro 004 Fecha: 06-03-2008 Radicación: 0392

Doc: OFICIO S/N DEL 28-02-2008 TESORERIA MUNICIPAL DE PUERTO GAITAN VALOR ACTO: $

Se cancela anotación No: 2

ESPECIFICACION: CANCELACION: 0842 CANCELACION EMBARGO POR IMPUESTOS MUNICIPALES

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN

A: BUSTOS BERNAL HUGO ARMANDO

ANOTACION: Nro 005 Fecha: 27-02-2015 Radicación: 2015-234-6-409

Doc: RESOLUCION 6423 DEL 30-07-2014 INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL DE BOGOTA D.C.

VALOR ACTO: $0

ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION: 0158 REVOCATORIA ADMINISTRATIVA DIRECTA DE LA RESOLUCION 0022 DEL 15/1/1992 INCORA DE VILLAVICENCIO.

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL INCODER **NIT# 8301223980**

A: BUSTOS BERNAL HUGO ARMANDO **CC# 74280416**

ANOTACION: Nro 006 Fecha: 27-02-2015 Radicación: 2015-234-6-409

Doc: RESOLUCION 6423 DEL 30-07-2014 INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL DE BOGOTA D.C.

VALOR ACTO: $0

ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION: 0156 REVERSION DEL BALDIO

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

A: LA NACION - INCODER **X**

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: *6*

CON BASE EN LA PRESENTE SE ABRIERON LAS SIGUIENTES MATRICULAS

3 -> 15741

SALVEDADES: (Información Anterior o Corregida)

* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *

La validez de este documento podrá verificarse en la página www.snrbotondepago.gov.co/certificado/

= =

FIN DE ESTE DOCUMENTO

El interesado debe comunicar al registrador cualquier falla o error en el registro de los documentos

USUARIO: Realtech

TURNO: 2020-234-1-13233 **FECHA: 12-11-2020**

EXPEDIDO EN: BOGOTA

El Registrador: DIRNEY YOLIMA VELASQUEZ ALVAREZ

Gmail

carlos emilio romero gomez <carloseromerog6@gmail.com>

RECURSO DE APELACIÓN DE LUIS ILVAR PULIDO PINILLA CONTRA LA RESOLUCIÓN No. 6925 DEL 13 DE AGOSTO DE 2020

1 mensaje

carlos emilio romero gomez <carloseromerog6@gmail.com> 27 de agosto de 2020, 12:35
Para: juridica.ant@agenciadetierras.gov.co

RECURSO DE APELACION - LUIS ILVAR PULIDO PINILLA.pdf
706K

Gmail

carlos emilio romero gomez <carloseromerog6@gmail.com>

RECURSO DE APELACIÓN DE LUIS ILVAR PULIDO PINILLA CONTRA LA RESOLUCIÓN No. 6925 DEL 13 DE AGOSTO DE 2020

1 mensaje

carlos emilio romero gomez <carloseromerog6@gmail.com> 27 de agosto de 2020, 12:34
Para: atencionalciudadano@agenciadetierras.gov.co

RECURSO DE APELACION - LUIS ILVAR PULIDO PINILLA.pdf
706K

Gmail

carlos emilio romero gomez <carloseromerog6@gmail.com>

RECURSO DE APELACIÓN DE LUIS ILVAR PULIDO PINILLA CONTRA LA RESOLUCIÓN No. 6925 DEL 13 DE AGOSTO DE 2020

1 mensaje

carlos emilio romero gomez <carloseromerog6@gmail.com> 27 de agosto de 2020, 12:33
Para: info@agenciadetierras.gov.co

RECURSO DE APELACION - LUIS ILVAR PULIDO PINILLA.pdf
706K

Documento Firmado Digitalmente
El presente documento contiene una firma digital válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la ley 527 de 1999.

Al responder cite este Nro.
20204100783131

14 de Agosto de 2020

Señor
LUIS ILVAR PULIDO PINILLA
luchopulido20@gmail.com
luispulido3542@hotmail.com

Asunto: Notificación electrónica de la Resolución No. 6925 del 13 de agosto de 2020 *"POR LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE ADJUDICACIÓN DE BALDÍOS DENTRO DEL PREDIO DE MAYOR EXTENSIÓN DENOMINADO EL PORVENIR, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META Y SE ORDENAN OTRAS ACTUACIONES".*

Respetado Señor Pulido Pinilla,

Mediante la presente, respetuosamente le informo que la Agencia Nacional de Tierras –ANT- a través de la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas, expidió la Resolución No. 6925 del 13 de agosto de 2020 "*POR LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE ADJUDICACIÓN DE BALDÍOS DENTRO DEL PREDIO DE MAYOR EXTENSIÓN DENOMINADO EL PORVENIR, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META Y SE ORDENAN OTRAS ACTUACIONES",* respecto del predio denominado "San Felipe" el cual se encuentra ubicado dentro del predio de mayor extensión conocido actualmente como ***"El Porvenir"***, jurisdicción del municipio de Puerto Gaitán, Meta.

En el mismo sentido, le manifestamos que la información de su dirección de correo electrónico fue conocida por esta Subdirección a través del aplicativo Sistema Integrado de Tierras "SIT", donde se evidencia autorización para recibir notificaciones por medio electrónico suscrita por usted, indicando el correo luchopulido20@gmail.com, el mismo correo fue suministrado por el Doctor Carlos Daniel Vargas Bacci, mediante radicado ANT 20206200391202 del 24 de junio de 2020, al cual se notifica el acto administrativo señalado en el asunto.

Lo anterior resulta relevante teniendo en cuenta que mediante Decreto 491 del 28 de marzo de 2020[1], proferido por el Ministerio de Justicia y del Derecho, se dispuso en el artículo 4 lo siguiente:

> *"Artículo 4. Notificación o comunicación de actos administrativos. Hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, la notificación o comunicación de los actos administrativos se hará por medios electrónicos. Para el efecto en todo trámite, proceso o procedimiento que se inicie será obligatorio indicar la dirección electrónica para recibir notificaciones, y con la sola radicación se entenderá que se ha dado la autorización.*
>
> *En relación con las actuaciones administrativas que se encuentren en curso a la expedición del presente Decreto, los administrados deberán indicar a la autoridad competente la dirección electrónica en la cual recibirán notificaciones o comunicaciones. Las autoridades, dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la expedición del presente Decreto, deberán habilitar un buzón de correo electrónico exclusivamente para efectuar las notificaciones o comunicaciones a que se*

[1] *"Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica".*

refiere el presente artículo.

El mensaje que se envíe al administrado deberá indicar el acto administrativo que se notifica o comunica, contener copia electrónica del acto administrativo, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse y los plazos para hacerlo. La notificación o comunicación quedará surtida a partir de la fecha y hora en que el administrado acceda al acto administrativo, fecha y hora que deberá certificar la administración.

En el evento en que la notificación o comunicación no pueda hacerse de forma electrónica, se seguirá el procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Parágrafo. La presente disposición no aplica para notificación de los actos de inscripción o registro regulada en el artículo 70 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo".

De igual manera, es de señalar que, mediante Formulario de Inscripción de Sujetos de Ordenamiento – FISO No. 85152, usted, autorizo a la ANT para recibir notificaciones por medios electrónicos indicando el correo luispulido3542@hotmail.com. Por lo expuesto, se procede también con la notificación electrónica a este correo.

Conforme a lo anterior, mediante el presente se efectúa la notificación electrónica del siguiente acto administrativo:

Resolución No. 6925 del 13 de agosto de 2020 "*POR LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE ADJUDICACIÓN DE BALDÍOS DENTRO DEL PREDIO DE MAYOR EXTENSIÓN DENOMINADO EL PORVENIR, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META Y SE ORDENAN OTRAS ACTUACIONES",* respecto del predio denominado "San Felipe" el cual se encuentra ubicado dentro del predio de mayor extensión conocido actualmente como **"*El Porvenir*"**, jurisdicción del municipio de Puerto Gaitán, Meta.

Se remite anexo copia digital de la Resolución No. 6925 del 13 de agosto de 2020.

Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo Sexto de la Resolución No. 6925 del 13 de agosto de 2020, se informa que contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante esta Subdirección y en subsidio el de apelación ante el Director de Acceso a Tierras de la ANT dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de la misma. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con el artículo 22 y 23 del Decreto 2363 de 2015.

Atentamente,

JULIA ELENA VENEGAS GÓMEZ
Subdirectora de Acceso a Tierras de Zonas Focalizadas

Anexos: Resolución No. 6925 del 13 de agosto de 2020
Proyectó: Marcela Cuervo - Abogada Contratista convenio FAO - ANT.
Proyectó: Luisa Gómez - Abogada Contratista convenio FAO - ANT
Revisó: Jhonattan Acevedo – Abogado Contratista Subdirección

Documento Firmado Digitalmente
El presente documento contiene una firma digital válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la ley 527 de 1999.

CARLOS DANIEL VARGAS BACCI
ABOGADO ESPECIALIZADO

Doctor
JUAN MANUEL NOGUERA MARTÍNEZ
DIRECTOR DE ACCESO A TIERRAS
AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS
Bogotá.

REF: RECURSO DE APELACIÓN QUE PRESENTA LUIS ILVAR PULIDO PINILLA, CONTRA LA RESOLUCIÓN NUMERO 6925 DEL 13 DE AGOSTO DEL 2020; POR LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE ADJUDICACIÓN DE BALDÍOS UBICADO EN LA VEREDA EL PORVENIR UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, Y SE ORDENAN OTRAS ACTUACIONES.

LUIS ILVAR PULIDO PINILLA mayor de edad, vecino del municipio de Puerto Gaitán, identificado como aparece al píe de mi correspondiente firma, coadyuvado por abogado, estando dentro de los términos legales, procedo a presentar ante su despacho **RECURSO DE APELACIÓN** contra la resolución citada en la referencia; número 6925 del 13 de Agosto del 2020, emitida por la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas y rubricada por la **Dra. JULIA ELENA VENEGAS GOMEZ**, que fuera notificada vía correo electrónico el día 14 de agosto de la misma anualidad, para que sea **REVOCADA** en su integridad, y en su lugar se ordene la **ADJUDICACIÓN** del predio denominado San Felipe, identificado y alinderado dentro de la misma resolución, el cual vengo ocupando y explotando económicamente, por reunirse los requisitos legales para estos efectos, de acuerdo con los argumentos jurídicos y situación fáctica que a continuación se exponen.

DE LA RESOLUCIÓN APELADA

En este capítulo se presentarán; de manera resumida; las consideraciones jurídicas que plantea la Agencia Nacional de Tierras; (ANT); a través de la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas, como fundamento y sustento de la decisión de:

Carrera 33 Numero 36 – 29 Oficina 201 Edificio Pasadena Plaza
Telefax: 0986 633768 Cel: 350 – 2713973 Email: cadavabacci@hotmail.com
Villavicencio – Meta.

"Ordenar el NO INICIO de la segunda fase de la parte administrativa del Procedimiento único de Ordenamiento Social de la Propiedad para el reconocimiento de derechos de propiedad rural y en consecuencia, negar la solicitud de adjudicación presentada por el señor LUIS ILVAR PULIDO PINILLA, identificado con la cedula de ciudadanía número 79.523.930, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo."

Y demás ordenes impartidas en los diez (10) numerales de la referida resolución, que serán objeto de controversia jurídica y que dan soporte al recurso de alzada que se interpone para demostrar que carecen de respaldo y sustento; tanto jurídico como factico.

En lo que corresponde al marco jurídico, se expone una serie de normas (decretos, resoluciones, circulares, acuerdos, etc.) que serán analizadas y controvertidas en el momento que corresponda, de acuerdo con la temática de cada uno de los temas a tratar y a analizar.

Se dice respecto de la **"Competencia"**, que corresponde; de acuerdo con el artículo 40 del decreto Ley 902; a la subdirección de acceso a tierras en zonas focalizadas; se expone igualmente que mediante un memorando se ordenó entregar a esa dependencia el predio denominado "El Porvenir"

En lo que corresponde a los ***"Antecedentes"*** se citan:

- La Sentencia SU – 426 del 2016 de la cual se dice:

  "… amparando entre otros, el derecho fundamental a la tierra y el territorio en favor de la población histórica que cumpla con los requisitos para ser sujetos de reforma agraria, en relación con los predios baldíos de que trata la resolución No. 6423 del 30 julio del 2014."

  Y se trascriben textualmente algunas de las ordenes emitidas en la referida sentencia.

- Se cita igualmente el fallo de tutela número T – 00024 de 2018

- Y finalmente se refiere la solicitud de adjudicación radicado por el suscrito **LUIS ILVAR PULIDO PINILLA** ante el INCODER sobre el predio "…San Felipe, ubicado dentro del predio de

mayor extensión conocido actualmente como “El Porvenir”, jurisdicción del municipio de Puerto Gaitán.”

Bajo el título de **“Identificación del predio de mayor extensión”** se hace un recuento cronológico e histórico la tradición del referido predio El Porvenir.

Terminando este capítulo se dice:

> *“Que mediante Resolución No. 6423 del 30 de Julio de 2014, el Subgerente de Tierras Rurales del extinto Incoder, dispuso la revocatoria en todas sus partes de los actos de adjudicación de los fundos relacionados, y los retiró del ordenamiento jurídico, de suerte que “(…) dejan de tener vigencia y no producen, ni han producido, por tanto, efecto alguno.*
>
> *Que el artículo 6 de la resolución en mención, indica que, revocados los actos administrativos de adjudicación de los inmuebles descritos, estos pasan al dominio de la Nación en calidad de baldíos.”*

Luego se hacen unas “consideraciones preliminares sobre la situación jurídica del inmueble objeto de ocupación” y concretamente en lo que corresponde al régimen de la ocupación previa se expresa el régimen jurídico de los predios baldíos al amparo de la ley 160 de 1.994 y se señalan puntualmente los requisitos objetivos y subjetivos para la adjudicación.

Tratando el tema de las excepciones a la ocupación previa como modo de acceder a la propiedad de tierras baldías en el régimen de la ley 160 de 1.994 se analiza la figura de los “BALDÍOS RESERVADOS” que están sustraídos del régimen general de la ocupación como medio idóneo de adjudicación y concreta que son reservados por mandato de la misma ley los predios de propiedad privada que revierten al dominio de la nación en virtud de la declaratoria de la extinción administrativa del dominio y deben ser destinados a procesos de adjudicación especial; según lo previsto en el artículo 56 de la ley 160 de 1.994.

Así mismo se mencionan como baldíos reservados, de acuerdo con el artículo 48, numeral 3 de la misma ley los predios que se obtengan de la aplicación de los procedimientos de recuperación de baldíos indebidamente ocupados.

En otro de los varios puntos expuestos por la A N T que pretenden sustentar la decisión que hoy es objeto de apelación contenida en la resolución 6423 del 2014 y bajo el título de "Régimen de Transición del Decreto Ley 902 de 2017" se dice que:

> *"Resulta especialmente problemático determinar las condiciones en las que dicho transito modifico los procedimientos de acceso a tierras que se hubieran encontrado en curso al momento de la expedición del decreto ley, así como los procedimientos que se deben adelantar actualmente, cuyos supuestos de hecho hacen referencia a la ley 160 de 1.994 previas las modificaciones del decreto ley 902"*

Se hace discernimientos sobre los momentos en que deben entrar a regir las normas del decreto 902 y se plantean varias situaciones alimentadas doctrinariamente sobre los efectos en el tiempo de las normas y además se trata el tema de favorabilidad de las normas, destacándose que esta situación la determina el operador administrativo, vale decir la A N T.

Sobre el tema de la procedencia de las solitudes de adjudicación se reconoce y acepta que la solicitud fue presentada antes de la vigencia del decreto 902 del 2017, por lo que, según la ANT, en principio debían resolverse bajo las prerrogativas de la ley 160 de 1994.

Y dice la ANT a través de la Subdirección de Tierras Focalizadas:

> *"Ahora bien, como se mostró, el efecto inmediato de la resolución que declaro la revocatoria de las adjudicaciones implico que las áreas hoy ocupadas tengan la condición de terrenos baldíos, no obstante, tales terrenos no podían ser objeto de ocupaciones por particulares, y por ende, las hoy ejercidas no son, por sí mismas, suficientes para alegar el derecho de adjudicación. Esta conclusión se extrae del análisis de las disposiciones normativas contenidas en la ley 160 de 1994. Es decir, el resultado de la aplicación del régimen de la ley 160 de 1.994 por efecto de la ultraactividad prevista en el decreto Ley 902 de 2107, permite afirmar que en principio no resultan procedente las titulaciones."*

En lo que corresponde al tema de "Reserva de Baldíos: Áreas que superen la UAF" se cita el artículo 67 de la ley 160 de 1994 destacándose el hecho que el predio el porvenir tiene una cabida de más de 25 mil hectáreas y al superar la cabida de la AUF se tiene la calidad de baldío reservado y por lo mismo tiene un tratamiento especial situación que conlleva a que todas las ocupaciones ejercidas no otorgan derecho a la adjudicación y se tornan indebidas debiéndose recuperar.

Bajo el título “Efectos de la Revocatoria Directa: reserva especial de baldíos” la ANT a través de la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas que producto de la resolución 6423 del 2014 los predios que fueron objeto de revocatoria adquirieron nuevamente la calidad de predios baldíos de la Nación y textualmente expone:

> *“En tal consecuencia, otro efecto de la resolución 6423 de 2014 consistió en otorgar el carácter de baldíos a los predios objeto de solicitud. Dicha condición tiene como particularidad que sustrae los predios de aquéllos que pueden ser ocupados libremente con el objetivo de obtener su titulación, en tanto, su aprovechamiento y titulación deber ser siempre direccionados por el respectivo administrador, para este caso, la ANT”*

Expone que el Estado una vez corregidas las irregularidades de las adjudicaciones su intervención va más allá, condicionando la titulación a un proceso de selección objetiva que garantice como beneficiarios a los de mayores condiciones de vulnerabilidad.

Finalmente trata el tema de la improcedencia de las solicitudes de adjudicación de baldíos concentrados y reservados argumentándose no puede invocarse la adjudicación de un terreno baldío cuando el peticionario deriva su ocupación del fraccionamiento de terrenos baldíos que se hayan tenido de manera indebida. Plantea dos hipótesis del siguiente tenor literal.

> *“Como se señaló el peticionario afirma que su ocupación inicio antes del 29 de mayo de 2017, bajo el régimen de la ley 160 de 1994, lo que pudo ocurrir solo en dos hipótesis: (i) las ocupaciones iniciaron con posterioridad a la expedición de las Resolución No. 6423 de 2014 y son indebidas, en tanto, su objeto era un baldío reservado que se encuentra fuera del régimen de ocupación y adjudicación ordinario, (ii) lo hicieron con anterioridad, es decir, cuando se encontraban concentrados por efecto de la titulación indebida, y posterior englobe, lo cual devino en la revocación de dichas adjudicaciones.*

En un segundo capítulo y con fundamento en todos los parámetros expuestos se estudia **EL CASO EN CONCRETO** para determinar si es dable dar apertura a la segunda fase administrativas del Procedimiento Único de Ordenamiento Social de la Propiedad, en los términos del artículo 60 de Decreto Ley 902 de 2017.

De la solicitud de adjudicación se dice que fue radicada sobre el predio Villa Alexandra ante el extinto INCODER y anota la ANT que se

encuentra dentro del predio de mayor extensión conocido actualmente como El Porvenir y que la solicitante señaló que ocupa el predio desde el 13 de Julio del 2010. Igualmente se dice que a través del formulario de Inscripción de Sujetos de ordenamiento FISO No. 85152 del 30 de julio del 2018 el suscrito radicó solicitud de acceso a tierras bajo la ruta de reconocimiento de derechos respecto del predo San Felipe.

De la ocupación se dice que el predio, de acuerdo con los documentos, describe un área de 829 ha + 1.402 metros cuadrados y se identifica vectorialmente y presenta la imagen de esta reconstrucción, así mismo se redactan los linderos y se concluye del análisis geográfico:

> *"… que es encuentra ubicada en un predio de mayor extensión denominado "El Porvenir" jurisdicción del municipio de Puerto Gaitán, meta, específicamente, el predio "San Felipe" se encuentra inmerso en dos (2) predios denominados "El Pedregal" y "Mi Llanura" los cuales hacen parte de un total de cinco (5) grandes extensiones que se generaron en el año 2007, a partir del englobe de veintisiete (27) predios que inicialmente fueron adjudicados en la década del 1990 y posteriormente, mediante Resolución 6423 de Julio 30 de 2014, fueron revocados y cancelados junto con los folios de matrícula inmobiliaria de los cinco (5) predios." (Lo subrayado es de quien escribe).*

Del análisis probatorio expone la resolución objeto de apelación que existe la solicitud radicada ante el INCODER el sobre el predio denominado San Felipe, con un área de 828 Ha + 6901 M2 y ocupa y explota el predio desde el 13 de Julio del 2010.

De igual manera se plasman los detalles de la solicitud FISO No. 85152, señalando que fue tramitada el día 30 de Julio del 2018 y que refiere al mismo predio.

Se reseña el certificado de la junta de Acción Comunal de la Inspección del Porvenir, donde se reseña como miembro activo y habitante del poblado del porvenir.

Se dice en la resolución que resulta importante mencionar que en el documento de "Censo – Formato Cumplimiento Orden Judicial" se encuentra como observación que:

El señor Dice que tiene medida que le hizo Incoder.

Dice que es predio para verano – son bajos.

No es beneficiario de la Sentencia

No se hace caracterización agronómica (SIC) por que esta (SIC) inundado y no pudo llegar.

Se concluye que con base en los documentos revisados:

> *"….. se observa claramente que no existe congruencia en la información aportada por el señor LUIS ILVAR PULIDO PINILLA relacionada con la fecha desde la cual ocupa o habita el predio objeto de solicitud, ni el área del mismo."*

Igualmente reseña como medio probatorio la resolución 6423 del 2014, expedida por el INCODER de la cual dicen:

> *"… a través de la resolución 6423 de 2014 el predio ocupado el cual hace parte del predio de mayor extensión conocido hoy como El Porvenir, ubicado en el Municipio de Puerto Gaitán, departamento del Meta, volvió al dominio de la Nación, es decir, que ostenta la condición de baldío para ser Administrado por la máxima autoridad de tierras, hoy en día, la Agencia Nacional de Tierras" (Lo subrayado es de quien escribe)*

También dentro del tema probatorio se relaciona un Informe Técnico Jurídico que tiene tres conclusiones, a saber:

1. Que la ocupación de los predios comenzó desde cuando los predios se encontraban bajo el dominio privado.

2. Que la ocupación alegada se ejerce sin autorización de la ANT sobre predios que se encuentran por fuera del régimen de ocupación y adjudicación ordinario, a partir de la revocatoria de que trata la resolución 6423 del 2014.

3. Que el área ocupada por la suscrita solicitante excede por mucho la UAF definida por la autoridad de tierras para el Predio El Porvenir.

Por último, en el informe agronómico UAF predio El Porvenir se determinan unas extensiones para las U A F que ninguna supera las 100 hectáreas.

En capitulo que titulan "Análisis de la situación particular." Se hacen las siguientes consideraciones:

- De las ocupaciones iniciadas con anterioridad a la resolución 6423 de 2014 se afirma que el hecho de las adjudicaciones que fueron realizadas en los 27 predios en los años 1992 a 1996 a personas naturales hace concluir que la ocupación alegada con anterioridad a la referida resolución resulta inexistente a efectos de acreditar requisitos para una eventual adjudicación, toda vez que esas ocupaciones recaían sobre predios privados y no sobre baldíos lo que jurídicamente es calificada como posesión.

- Se afirma que estas ocupaciones se gestaron con el patrocinio de la familia Carranza dueña de la empresa ganadera la Cristalina y esto se concluye de las afirmaciones que la ocupación en el predio comenzó desde el año 2010.

- Se afirma que esta situación se enmarca en lo previsto en el parágrafo 2 del artículo 74 de la ley 160 de 994.

- Se dice que los titulares de los 27 predios ejercían una tenencia indebida de la tierra, aunado a las maniobras de acumulación indebida de la tierra.

- Se concluye en este punto que:

> *"Así las cosas, dado que la solicitud de adjudicación bajo estudio se fundamenta en una posesión que se deriva a su vez de la tenencia de estas áreas bajo las circunstancias indicadas, no está llamada a prosperar."*

En lo que corresponde a las ocupaciones iniciadas a partir de la resolución 6423 de 2014 se expone:

- Que después de la revocatoria de las adjudicaciones, las ocupaciones ejercidas tampoco dan lugar a una eventual adjudicación, por ser baldíos reservados.

- Por tanto, el tiempo de ocupación que se ha ejercido a partir de la resolución No. 6423 tampoco da lugar a la adjudicación por ser consideradas ocupaciones indebidas.

- Finalmente se expresa que se debe recordar que, de acuerdo con el artículo 25 del decreto ley 902 del 2017, se estableció la reserva especial de todos los baldíos de la Nación a partir del 29 de mayo de 2017.

CONCLUSIONES DE LA RESOLUCIÓN APELADA

1. Que la ocupación ejercida por mi sobre el predio Villa Alexandra NO es de aquellas que permitan el reconocimiento de derechos de propiedad rural, es decir, posible titulación.

2. Se afirma que si se concibe de otra manera a como se ha planteado y argumentado es abrir la puerta para que se entregue el dominio de la tierra a personas que derivan su pretensión agraria de situaciones irregulares como la tenencia indebida de las áreas reclamadas, lo cual atentaría contra los postulados esenciales de un Estado Social de Derecho.

3. Se insiste en que la ocupación se ejerce sobre predio reservados y no contarse con el consentimiento de la autoridad de tierras.

4. Se expresa que se deben recuperar las tierras con destino a los programas de acceso a tierras dispuesto por el Gobierno Nacional en concordancia con las consideraciones establecidas en la sentencia SU – 426 de 2016 proferida por la Corte Constitucional.

5. Finalmente se desestima la solicitud de adjudicación y por consiguiente se abstiene de continuar con el presente procedimiento único de ordenamiento social de la propiedad.

Bajo el título de “El Procedimiento Aplicable” se hacen unas breves consideraciones en relación con las normas procedimentales aplicables, comenzando por el análisis del artículo 27 del Decreto Ley 902 de 2017 concluyendo que no es aplicable el régimen de transición por ser indebidas las ocupaciones en el marco de la ley 160 de 1.964 y por consiguiente debe aplicarse el decreto 902 del 2017. Se esgrimen otros preceptos legales, todos en el marco del decreto 902 del 2017, como los artículos 40, 58, 33 B, así como una serie de resoluciones administrativas internas expedidas por ANT que en términos generales sustentan todo el resumen jurídico que precede y sustenta la resolución objeto de recurso de alzada ante la Dirección de Acceso a Tierras de la A N T.

Se expone y sustenta que como consecuencia de todo lo planteado se debe proceder a la recuperación de las áreas baldías ocupadas en forma indebida para cumplir así con la sentencia SU 426 de 2016.

En otro capítulo adicional que se considera de gran importancia para el futuro jurídico del presente asunto bajo el título “DE LA BUENA FE EL RECONOCIMIENTO DE MEJORAS” se expone:

- Se parte del principio atrás expuesto que se trata de una ocupación indebida en donde corresponde determinar si procede el reconocimiento de las mejoras coladas en el predio y con fundamento en una sentencia de la Corte Constitucional se plantea que la buena fe se presume en el ocupante y que la mala fe se deberá “probar plenamente”.

- Se dice que a partir de la revocatoria directa de las veintisiete titulaciones realizadas por el INCORA (sic) cuando la Nación retomo el dominio de esos predios, con la calidad de baldíos, toda ocupación ejercida sin autorización de la autoridad de tierras se torna indebida.

- Se expone los efectos de la publicidad a través de la inscripción en el registro de instrumentos públicos de la resolución 6423 del 2014 que revoco los títulos inicialmente otorgados y las causas legales para calificar los terrenos como baldíos reservados de la Nación.

- Se concluye por parte de la ANT en la mentada resolución que es objeto de apelación que la suscrita solicitante tenía pleno conocimiento de la condición que adquirieron los predios a partir de la revocatoria directa y no cuenta con autorización expresa por parte de la autoridad de tierras para ocupar el predio, ni mucho menos para ejecutar mejoras, lo que lo constituye en un ocupante de mala fe que no tiene derecho alguno para el reconocimiento de las mejoras construidas en el territorio.

MOTIVOS DE INCONFORMIDAD Y SUSTENTO DE LA APELACIÓN

Señor Director de Acceso a Tierras Dr. **JUAN MANUEL NOGUERA MARTÍNEZ,** sorprenden los errores jurídicos y sesgadas interpretaciones, así como las contradicciones que hace la A N T en la resolución que aquí es objeto de apelación y que Usted debe revisar, por lo que; con mucho escepticismo; debo exigir de Usted, como funcionario público, en el marco de sus competencias, corrija los graves errores que serán puestos de presente, que vulneran derechos

fundamentales ya amparados y en firme, en aras de hacer efectivos los derechos que se derivan del Estado Social de Derecho que al final de la resolución se exponen como fin último misional de la actividad de la Agencia Nacional de Tierras.

Se advierte que para sustentar el recurso de apelación se respetara y atenderá el orden temático que fue desarrollado dentro de la resolución número 6925 del 13 de agosto del 2020, que corresponde también al orden del resumen que antecede en este escrito, poniendo de presente los errores de la resolución cuando se estime conveniente y conducente hacerlo.

El primero error grave que debe corregirse es que el predio EL PORVENIR, tantas veces nombrado, al cual se le atribuyen características propias de un (1) predio baldío, con una cabida de más 25.000 hectáreas, **NO EXISTE JURÍDICAMENTE**, es una ficción jurídica que no tiene cabida en el análisis que se debe de hacer para resolver la petición por mi formulada; más cuando de esta cabida y sobre este imaginario predio se hacen elucubraciones jurídicas con sus correspondientes efectos, necesariamente también inexistentes e inconducentes. Y si esta afirmación mía no corresponde con la verdad jurídica, lo invito para que me sea citado el número de matrícula inmobiliaria con el que se identifica y el acto administrativo con el cual fueron englobados los veintisiete (27) predios que quedaron vigentes, producto de la revocatoria directa que se decretó a través de la resolución 6423 de 2014.

En el tema de competencia, para hacerla radicar en cabeza de la Subdirección de Acceso a Tierras Focalizadas se invoca el artículo 40 del decreto Ley 902 del 2017, transcribiéndolo en su integridad y aquí debo exponerle Señor Director, que la Subdirección de Acceso a Tierras Focalizadas **NO ES COMPETENTE** pues la A N T no ha cumplido con la exigencia que le impone el parágrafo del citado artículo 40, es decir, que no se ha identificado el predio como ubicado en zona focalizada, no se ha señalado el número de la matrícula, y menos se ha inscrito esta medida en la oficina de registro de instrumentos públicos correspondiente (Puerto Lopez – Meta), condición o calidad o requisito para que sea oponible a terceros, incluyendo a la suscrita y para radicar la competencia en la subdirección que emitió la resolución. **CONCLUSIÓN: EL PREDIO, A**

LA FECHA PRESENTE, NO HACE PARTE DE NINGUNA ZONA FOCALIZADA, PARA LOS EFECTOS DE ADJUDICACIÓN.

En este orden de ideas y recogiendo la misma información que da cuenta la resolución objeto de apelación, el predio "San Felipe" solicitado en adjudicación está inmerso y afecta los predios baldíos denominados "El Pedregal" y "Mi Llanura" que se identifican con los números de matrícula inmobiliaria 234 – 8015 y 234 .- 8007, respectivamente, con una cabida de 991 Ha + 1000 m2 y 979 Ha + 5000 m2. Esta situación debe quedar clara para el análisis que procede a continuación sobre este tema. *(Se anexan los certificados de tradición y libertad de los predios).*

Sobre el contenido y los efectos jurídicos de la sentencia SU 426 del 2016 **NO ES CIERTO** que allí se hayan amparado derechos fundamentales a favor de la *"población histórica"* que cumpla con los requisitos para ser sujetos de reforma agraria, en relación con los predios baldíos de que trata la resolución 6423 del 2014. Sorprende esta afirmación o interpretación cuando en el texto de la resolución se transcribe la orden a que se hace referencia y lo que allí dijo la Corte Constitucional fue que se debe **"censar a la población ocupante de los terrenos baldíos …"** por eso la afirmación categórica que aquí se está negando o mejor tergiversado un hecho evidente; privilegiando a unos y rechazando de plano a otros, resultando por demás sospechosa esta actitud.

A más de lo anterior, quien aquí coadyuva, ha revisado detenidamente **TODA** la sentencia **SU 426 del 2016**, párrafo a párrafo y línea a línea y en ningún momento la Corte en sus consideraciones hizo las afirmaciones que la Subdirección pone en sus palabras.

Aquí se debe decir sobre el fallo de tutela **No. T – 00024 del 2016**; citado como antecedente en la resolución; que es tan cierto lo expuesto atrás, sobre los derechos que tiene la suscrita solicitante de adjudicación, que existe con plena vigencia en sus efectos un fallo de Tutela en donde nos fueron reconocidos esos derechos y se emitió la orden de hacer un pronunciamiento de fondo sobre las solicitudes radicadas ante el INCODER, en un término perentorio de dos meses que hoy se encuentra vencido y con un fallo adicional donde se reconoce al desacato a las órdenes de tutela. Y es por eso que esas circunstancias constituyen la causa eficiente de todas las resoluciones

que fueron emitidas por la A N T, después de notificado el fallo del incidente de desacato, porque lejos de analizar en derecho, con objetividad e imparcialidad las ordenes emitidas, buscan en el trámite de consulta acreditar el cumplimiento afanado de las ordenes de tutela, para esquivar las sanciones ya impuestas tanto a la funcionaria que emitió las resoluciones que hoy son objeto de recurso de aparición; como medio idóneo de agotamiento de vía gubernativa; como al funcionario que hoy tiene la obligación funcional de fallar el recurso de apelación; olvidando de paso que el cumplimiento de las referidas ordenes implica que sean emitidas conforme a derecho y no como el acto propio de retaliación humana frente al accionar de gente humilde y campesina que defiende sus derechos fundamentales amparados, que es como se está percibiendo, dados los graves errores y falacias de los actos administrativos emitidos **NEGANDO LAS ADJUDICACIONES.**

Siguiendo el orden temático que plantea la resolución objeto de apelación y en lo que corresponde a la mal llamada **"IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO DE MAYOR EXTENSIÓN"** se debe repetir como atrás se dejó claro que ***NO EXISTE PREDIO DE MAYOR EXTENSIÓN DENOMINADO "EL PORVENIR".***

Dentro de este capítulo y volviendo sobre los efectos jurídicos de la referida resolución 6423 de 2014, está claro el hecho que destaca la ANT; tomado de ese acto administrativo; y es que producto de la REVOCATORIA DIRECTA que fue decretada sobre la titulación realizada para los 27 predios a personas naturales, dichos actos fueron retiradas del ordenamiento jurídico los cuales **"DEJARON DE TENER VIGENCIA, Y NO PRODUCEN, NI HAN PRODUCIDO, POR TANTO EFECTO ALGUNO"** situación que nos permite afirmar sin lugar a equívocos ni interpretaciones que los predios; cada uno por separado; se considera que en el tiempo, siempre han sido baldíos de la Nación y jurídicamente nunca han salido de su patrimonio.

Corresponde ahora detenernos en el estudio; tal vez; del punto más álgido y determinante y es el análisis si en verdad como lo pretende hacer ver la ANT, producto de la REVOCATORIA DIRECTA, de que trata la resolución 6423 del 2014 los predios además de volver al patrimonio de la nación, sin solución de continuidad en el tiempo en su calidad jurídica de baldío, adquirieron la calidad de **BALDÍOS RESERVADOS DE LA NACIÓN**.

Aquí voy a comenzar por el final, al revés, al contrario de lo que manda la lógica jurídica; Señor Director; comenzando por la conclusión, afirmando con plena certeza jurídica, que los veintisiete (27) predios que volvieron al patrimonio de la Nación, en virtud de la resolución 6423 de 2014, ***NO SON BALDÍOS RESERVADOS.***

La ANT cuando aborda el tema de la ocupación previa, su régimen y las excepciones plantea los eventos en que la ley 160 considera y califica a los predios baldíos de nación como reservados, y a continuación se analizaran cada uno de esos casos.

- Artículo 56 de la ley 160 de 1.994, que tipifica esta calificación con el siguiente tenor literal:

> *"ARTÍCULO 56. Las tierras aptas para explotación económica que reviertan al dominio de la Nación en virtud de la declaratoria de extinción del derecho de dominio, ingresarán con el carácter de baldíos reservados y se adjudicarán de conformidad con el reglamento que para el efecto expida la Junta Directiva; las no aptas para los programas de que trata esta Ley serán transferidas al municipio en que se hallen ubicadas o a otras entidades del Estado que deban cumplir en ellas actividades específicas señaladas en normas vigentes.*
>
> *El recibo de estas tierras y su utilización por parte de las entidades indicadas en el inciso precedente serán de obligatorio cumplimiento." (Lo subrayado es de quien escribe).*

Para evitar equívocos en el análisis e interpretación de esta causal, que es la que la ANT considera aplicable al caso de ***TODAS LAS SOLICITUDES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA TUTELA No. T – 00024 DE 2018*****,** entre ellas la mía, como expresamente se consigna en la resolución que es objeto de apelación, comencemos por determinar el contexto en que esta circunstancia fue enmarcada por el legislador dentro de la ley 160 de 1.994.

Lo primero la ley 160 de 1994 está organizada por capítulos, cada uno ellos con unidad de materia, es decir abordando un tema particular. El capítulo XI aborda el tema de la "**EXTINCIÓN DEL DOMINIO SOBRE TIERRAS INCULTAS"** y comprende los artículos del 52 al 64 y en el primero (Art. 52) se establen con claridad gramatical las causales para el procedimiento de extinción del dominio de que trata ese capítulo, situación que impide per se, hacer interpretaciones

diferentes a las que expresa la literalidad gramatical de la norma y en ninguna de ellas se concibe como causal la REVOCATORIA DIRECTA.

Ahora bien, puedo decir con plena certeza y con la convicción de haber revisado también, párrafo a párrafo y línea a línea la resolución 6423 del 2014 que en ninguna parte se habla de extinguir el dominio de los predios a través de la revocatoria directa y menos aún pretender como consecuencia de la misma revocación dar la calificación a los veintisiete (27) predios revocados de "Baldíos Reservados de la Nación" y tampoco se encuentra por parte alguna de la resolución 6423 como sustento o referente jurídico el artículo 56 de la ley 160 de 1.994; es más siempre se habla que los predios vuelven al patrimonio de la Nación como **BALDÍOS**. A más de lo anterior el aludido tramite de extinción de dominio previsto en el artículo 56 tiene prevista como obligatoria una inspección ocular al predio que permita calificar y acreditar las tierras como incultas para hacer procedente la extinción del dominio, situación que nunca fue prevista dentro del trámite de revocatoria que abordó la resolución 6423 del 2014; permitiendo entonces ratificar la conclusión inicial de que **NO ES CIERTO** como lo plantea la ANT a través de la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas; cuando afirma que los 27 predios ubicados en la vereda del Porvenir sean reservados de la Nación.

- Artículos 67, 75 y 76 de la ley 160 de 1.994 causales que no aborda la ANT por no corresponder con la situación fáctica que es objeto de estudio y análisis.

- Sobre la calidad de reservados de las islas tampoco es procedente el análisis por sustracción de materia

- Pero si merece comentario la última de las causales expuestas por la ANT a través de la Subdirección, que textualmente plantea así:

  "V. Son baldíos reservados los que se obtengan producto de la aplicación de los procedimientos de recuperación de baldíos indebidamente ocupados (Articulo 48 numeral 3)."

Aquí, buscando la mayor trasparencia en las apreciaciones que se hacen, considero pertinente transcribir todo el artículo 48 de la referida

ley 160 de 1994, que si bien es cierto está incorporado dentro del capítulo X que trata de la "CLARIFICACIÓN DE LA PROPIEDAD, DESLINDE Y RECUPERACIÓN DE BALDÍOS" nada dice o trata de la RESERVA DE BALDÍOS, situación trascendental y grave pues constituye ni más ni menos que una Falsedad Ideológica.

> *ARTÍCULO 48. De conformidad y para efectos de lo establecido en los numerales 14, 15 y 16 del artículo 12 de la presente Ley, el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, previa obtención de la información necesaria adelantará los procedimientos tendientes a:*
>
> *1. Clarificar la situación de las tierras desde el punto de vista de la propiedad, con el fin de determinar si han salido o no del dominio del Estado.*
>
> *A partir de la vigencia de la presente Ley, para acreditar propiedad privada sobre la respectiva extensión territorial, se requiere como prueba el título originario expedido por el Estado que no haya perdido su eficacia legal, o los títulos debidamente inscritos otorgados con anterioridad a la vigencia de esta Ley, en que consten tradiciones de dominio por un lapso no menor del término que señalan las leyes para la prescripción extraordinaria.*
>
> *Lo dispuesto en el inciso anterior sobre prueba de la propiedad privada por medio de títulos debidamente inscritos con anterioridad a la presente Ley, no es aplicable respecto de terrenos no adjudicables, o que estén reservados, o destinados para cualquier servicio o uso público.*
>
> *2. Delimitar las tierras de propiedad de la Nación de las de los particulares.*
>
> *3. Determinar cuándo hay indebida ocupación de terrenos baldíos.*
>
> *PARÁGRAFO. Para asegurar la protección de los bienes y derechos conforme al artículo 63 de la Constitución Política y la Ley 70 de 1993, el INCORA podrá adelantar procedimientos de delimitación de las tierras de resguardo, o las adjudicadas a las comunidades negras, de las que pertenecieren a los particulares.*

Dentro del texto del artículo invocado como soporte **NO ES CIERTO** que el numeral 3 establezca que son baldíos reservados de la Nación los bienes que se obtengan producto de la aplicación de los procedimientos de recuperación de baldíos indebidamente ocupados, es otro invento y error grave que afecta de manera sustancial mis derechos fundamentales que han sido amparados.

Otro punto trascendental y equivocado que presenta la Resolución objeto de recurso de apelación es en lo que corresponde al tránsito de legislación de la ley 160 de 1994 al Decreto 902 de 1.994, que para la ANT ***"Resulta especialmente problemático …"***

Se comparte la problemática expuesta por la ANT producto de la actitud evidente de esquivar el estudio, análisis y aplicabilidad del artículo 27 e incluso el 81 del Decreto 902 del 2017 que reglamenta de manera clara el tránsito de legislación, artículo que me permito trascribir para la correcta comprensión.

> *ARTÍCULO 27. SOLICITUDES EN PROCESO. En los casos en que el ocupante haya elevado su solicitud de adjudicación con anterioridad a la entrada en vigencia del presente decreto ley se aplicará en su integridad el régimen más favorable para lograr la adjudicación.*
>
> *Cuando como consecuencia de lo dispuesto en el inciso anterior se opte por el régimen establecido en la Ley 160 de 1994, no se aplicará lo dispuesto en los numerales 2 y 3 del artículo 92 de la misma, y en su lugar se aplicará lo dispuesto en el artículo 48 sobre participación procesal de los Procuradores Ambientales y Agrarios.*
>
> *A quienes demuestren una ocupación iniciada con anterioridad a la expedición del presente decreto ley y no hubieren efectuado la solicitud de adjudicación, se les podrá titular de acuerdo con el régimen que más les favorezca, siempre y cuando hubieren probado dicha ocupación con anterioridad al presente decreto ley, para lo cual, a efectos de facilitar su acreditación, los particulares podrán dar aviso a la Agencia Nacional de Tierras dentro de un plazo de un año a partir de la expedición del presente decreto ley.*
>
> *PARÁGRAFO. Para los casos de los territorios de los pueblos y comunidades étnicas se aplicará lo establecido en las Leyes 21 de 1991, 160 de 1994 y 70 de 1993, así como sus normas reglamentarias. (Lo subrayado es de quien escribe)*

El Decreto en cita es muy claro y le **ORDENA** a la ANT tramitar mi solicitud bajo el amparo de la ley 160 de 1.994, pues no existe ninguna discusión sobre la fecha de radicación de la solicitud de adjudicación ante el INCODER, por lo que no proceden ni son conducentes todos los argumentos que se exponen para buscar la aplicación del decreto 902 en una actitud abiertamente contraria a lo previsto en el Articulo atrás transcrito.

Ahora bien, este previsión jurídica, de obligatorio acatamiento; so pena de incurrir en un **PREVARICATO**; de aplicar el procedimiento previsto en la ley 160 de 1994, se reitera tanto en la sentencia SU 426 de 2016 como en el fallo de tutela No. 00024 del Juzgado de Familia de Puerto López, que fue confirmado por el Tribunal Superior de Villavicencio y además también se ratifica en el fallo que resolvió el desacato, (Después de la Nulidad) donde de manera particular analiza

esta situación y se confirma que las normas aplicables a las solicitudes de la los tutelantes es el previsto en la ley 160 de 1.994. (Se aporta copia del fallo)

Sobre el argumento expuesto por ANT de que se debe aplicar el procedimiento único previsto en el decreto 902 del 2017, por principio de favorabilidad, y aquí es procedente hacer dos preguntas:

¿Conveniente para quien, para la ANT o para el solicitante?

¿Y quién escoge el procedimiento; la ANT en nombre del beneficiario o el mismo beneficiario?

Lo primero es que la norma objeto de análisis claramente ordena que para las peticiones de adjudicación radicadas antes de la vigencia del decreto 902 **SE DEBE** aplicar la ley anterior, es decir la ley 160 de 1994 y sobre la posibilidad de escoger cual régimen quiere que se aplique es un derecho del solicitante y así lo tiene claro la ANT, pues se han diseñado formatos que envían a través de correo electrónico para estos efecto, (Se aporta un formulario), pero para este caso en particular y de todas las personas amparadas por el fallo de tutela No. 00024, se hace una excepción y se presentan consideraciones especiales que pretenden justificar la no aplicabilidad del artículo 21 del decreto 902 del 2017 en incluso se argumenta la favorabilidad en favor del beneficiario solicitante; situación **QUE NO ES JURÍDICA NI PROCEDENTE.**

En otro de los muchos temas expuestos, que ya empiezan a ser repetitivos y/o que se sustentan en consideraciones que ya fueron **ANALIZADAS y DESVIRTUADAS** en el tema de la procedencia de las solitudes de adjudicación; primero se reconoce y afirma; como en verdad lo dice la resolución 6423 del 2014; que los predios objeto de revocatoria fueron declarados baldíos de la Nación, **NO BALDÍOS RESERVADOS,** pero a reglón seguido se contradice cuando se argumenta que no pueden ser objeto de ocupación por lo establecido en la ley 160 de 1994, cuando esta afirmación raya con lo ilegal, con una falsedad ideológica, pues como se explicó atrás, los bienes que fueron objeto de revocatoria NO se enmarcan dentro de ninguna de las causales legales de reserva, ni menos aún, en la resolución 6423 que se estudió y analizó se determinó esta condición o calidad jurídica de “BALDÍOS RESERVADOS” que además necesariamente debía ser objeto de registro en los correspondientes folios de matrícula

inmobiliaria de cada uno de los 27 predios revocados; situación que no tiene evidencia en los folios de matrícula correspondientes.

Y de otro lado el tema de ultraactividad de la ley no es procedente por cuanto la situación fue prevista y reglamentada en el mismo decreto ley 902 de 2017, que obliga a la ANT a aplicar el procedimiento previsto en la ley 160 de 1.994.

En lo que toca con el tema de la "Reserva de Baldíos: Áreas que superen la UAF" donde se cita como sustento jurídico el artículo 67 de la ley 160 de 1994 se debe decir que es uno más de los intentos fallidos, por su carencia de respaldo jurídico que hace la ANT por calificar el predio objeto de solicitud de adjudicación como "Baldío Reservado" pues se toma como referencia el predio "EL Porvenir", que como quedo claro atrás **NO EXISTE JURÍDICAMENTE** y se le atribuye a este predio creado en la ficción por la ANT una cabida de más de 25.000 hectáreas para presentar que sobre pasa la UAF vigente al momento de la ocupación, cuando los predios que afecta la ocupación son el denominado El Pedregal y Mi Llanura, con una cabida que nunca supero la UAF prevista en la resolución número 041 de 1996 expedida por el INCODER y que corresponde a la **Zona Relativamente Homogénea No. 7 -Sabanas 2,** modificado por el acuerdo 140 del 2008.

En la línea contradictoria que caracteriza esta particular resolución, que es objeto de apelación y bajo el título "Efectos de la revocatoria directa: reserva especial de baldíos" expone la ANT que con la resolución 6423 los predios adquirieron nuevamente la calidad de baldíos, **ESO ES CIERTO** y que por ese solo hecho de haber vuelto al patrimonio de la Nación, por vía de la revocatoria directa, se sustraen de los predios que pueden ser ocupados libremente con el objetivo de obtener su titulación **ESO NO ES CIERTO**, y fue un tema ya tratado, analizado y concluido atrás.

Es oportuno y valido aquí comentar sobre las competencias del Estado después de surtida la Revocatoria Directa en el sentido que nunca pierde las competencias, siempre que se desarrollen dentro del marco legal que rige y circunscribe la actividad pública, y para este caso concreto la ley 164 de 1.994 ha determinado una serie de requisitos subjetivos y objetivos para hacer viable las adjudicaciones, las cuales necesariamente dentro de la competencia de ese mismo Estado, a través de la A N T, debe verificarlas, corroborarlas y este

ejercicio lo hace a través de los trámites administrativos previsto para las adjudicaciones, teniendo siempre el marco de referencia y de acción las normas jurídicas que los regulan, debiendo necesaria y obligatoriamente interprétalas como corresponde y no de manera equivocada y amañada como aquí se evidencia.

Sobre el tema de que la suscrita haya participado del fraccionamiento de tierras, de manera directa o indirecta debo volver a repetir lo ya expresado en múltiples ocasiones, de que la ANT a través de la Subdirección que emite la resolución objeto de apelación que se hace una INDEBIDA INTERPRETACIÓN DE LA NORMA pues esta refiere a cuando al solicitante ha participado y derivado su ocupación del fraccionamiento ilegal de baldíos y no es el caso, es más constituye una sindicación calumniosa, que tiene ningún soporte probatorio pues nunca tuve un nexo ni con los titulares de los 27 predios revocados ni menos aun con los titulares de los 5 predios englobados que también fueron revocados. Se interpreta esta situación como otro más de los intentos, contra derecho, de la ANT de encasillar los predios ocupados por los tutelantes (T No. 00024) como reservados de la Nación, para negar las adjudicaciones solicitadas, a través de un procedimiento que no corresponde, como lo es el previsto en el decreto 902 del 2017.

SOBRE EL CASO EN CONCRETO

Aquí debemos decir que no puede llegarse a conclusiones coherentes y jurídicas cuando los supuestos y fundamentos tanto facticos como jurídicos son equivocados y errados como es el caso de la presente resolución número 6913 del 2020 que es objeto de apelación.

Lo primero es que se parte de un supuesto legal improcedente y que no corresponde a la normatividad sobre la cual se debe desarrollar el proceso administrativo de adjudicación y es el decreto ley 902 del 2017 cuando corresponde a la ley 160 de 1994 tal y como quedo analizado atrás.
De otro lado **NO ES CIERTO** que el predio “San Felipe” solicitado en adjudicación; haga parte de uno de mayor extensión denominado “El Porvenir”, pues como ya se demostró este **NO EXISTE**. El predio solicitado en adjudicación denominado San Felipe hace parte y corresponde al predio El Pedregal y Mi Llanura, que se identifican con los números de matrícula inmobiliaria 234 – 8015 y 234 – 8007.

En lo que toca con la solicitud que se dice fue radicada a través del formulario denominado FISO (Tramite que corresponde al decreto 902 del 2017) se debe decir que este formulario fue obtenido dentro de las visitas a campo y reuniones convocadas por la ANT, donde **ACTUANDO DE MA LA FE**, y con la dirección de la funcionaria **MARCELA ORDUZ QUIJANO** se llenaron los formularios FISO; con el argumento expuesto públicamente; que ese documento era obligatorio diligenciarlo para seguir con el trámite administrativo de adjudicación de las solicitudes radicadas ante el INCODER. (Existe el soporte documental)

Bajo el título de la OCUPACIÓN se hace la identificación vectorial, del predio objeto de ocupación confirmándose la cabida de (828 Hc.) y linderos del plano que fue levantado por el INCODER el, para efectos del trámite de adjudicación y se deja claro que está inmerso en los predios denominados El Pedregal y Mi llanura que está legalmente identificado con el certificado de tradición y libertad que se anexa, destacando nuevamente que **NO EXISTE** el predio **EL PORVENIR**

Se hace conducente y procedente hacer un comentario sobre el documentos reseñado dentro del tema probatorio denominado “Censo – Formato Cumplimiento Orden Judicial” donde se marca y se resalta **“NO BENEFICIARIA DE LA SENTENCIA”** puesta afirmación **NO ES CIERTA** y no corresponde con la verdad, pues como atrás se analizó y demostró la sentencia SU 426 del 2016 determina como beneficiarios a los ocupantes que cumplan con los requisitos de que trata la ley 160 de 1.994 para la adjudicación de los predios baldíos que se ocupan y explotan; **DEBE REVISARSE.**

Sobre el “Informe Técnico Jurídico” y sus conclusiones se debe decir se comparte y acepta que la posesión inicio antes de la resolución 6423 del 2014, y que para esa época los predios El Pedregal y Mi Llanura eran propiedad privada, es decir que se ejercía una posesión, pero también es cierto que esta posesión se trasformó en ocupación; ***con efectos retroactivos;*** de acuerdo con los efectos previstos en la resolución 6423 del 2014, como atrás se analizó y que se fijaron los efectos en el sentido que los actos administrativos revocados se debían tener como si nunca hubieran existido en el tiempo, es decir que ese predio jurídicamente para todos sus efectos siempre ha sido un baldío de la Nación.

NO ES CIERTO que el predio afectado con mi ocupación y que corresponde al predio baldío Campo Hermoso, este por fuera del régimen común de baldíos, pues como está ya claro este predio NO ES RESERVADO como se demostró atrás y finalmente la UAF desde cuando se inició la ocupación que luego fuera avalada por el INCODER, es de hasta 920 hectáreas, según la resolución número 041 de 1996 expedida por el INCODER y que corresponde a la **Zona Relativamente Homogénea No. 7 -Sabanas 2** y el acuerdo 140 del 2008.

Seguidamente y sobre el tema de la cabida de la UAF se menciona la existencia de un informe agronómico que reduce las cabidas en zonas focalizadas, **que como ya se analizó y demostró no corresponde al predio Campo Hermoso por no estar en zona focalizada,** pero no se cita el soporte jurídico que permita predicar que la UAF para el municipio de Puerto Gaitán ha cambiado para el correspondiente análisis; pero aquí se insiste que cualquier modificación reciente sobre el tema UAF no tiene aplicación ni procedencia por para las solicitudes radicadas antes de la expedición del decreto 902 del 2017 pues se deben tramitar de acuerdo con la ley 160 de 1.995, el decreto 041 de 1,966 y el acuerdo 140 del 2008.

Sobre el "Análisis de la situación particular" que hace la resolución aquí se debe repetir lo ya expuesto sobre los efectos retroactivos de la resolución 6423 en el sentido que se ordena además de retirar del ordenamiento jurídico las resoluciones revocadas, quitar todos los efectos jurídicos derivadas de ellas en el tiempo y que los predios regresen al patrimonio del estado como si nunca hubieran existido dichas adjudicaciones, ni reconocer efecto jurídico alguno en el tiempo que estuvieron vigentes, situación que presume la calidad de BALDÍOS COMUNES Y ORDINARIOS de la Nación desde el momento en que se aperturó el folio de matrícula inmobiliaria pues nunca salieron del patrimonio del Estado, es decir, en este orden de ideas, que siempre se ha ejercido jurídicamente ocupación sobre los predios EL PEDREGAL y MI LLANURA y NO como lo pretende hacer ver la ANT de ser una posesión.

Sobre la afirmación que se hace que las ocupaciones se gestaron con el patrocinio de la familia Carranza, para pretender dar aplicación al parágrafo 2 del Artículo 64 de la ley 164 de 1994, es una afirmación además de grave, tendenciosa, contraria a la cronología de los

hechos que la misma ANT expone y que están acreditados fácticamente.

Dice el referido parágrafo 2 del artículo 74 de la ley 64 de 1994:

> *"PARÁGRAFO 2o. No podrá alegarse derecho para la adjudicación de un baldío, cuando se demuestre que el peticionario deriva su ocupación, del fraccionamiento de los terrenos u otro medio semejante, efectuado por personas que los hayan tenido indebidamente, o cuando se tratare de tierras que tuvieren la calidad de inadjudicables."*

Aquí se debe decir en primer lugar que la suscrita NUNCA ocupe los predios con la complacencia y consentimiento de los titulares del derecho de dominio, no conocía los propietarios de los predios EL PEDREGAL y MI LLANURA, NUNCA fraccione predios pues nunca los he tenido, ni tampoco he ocupado indebidamente los predios que hoy reclamo administrativamente en adjudicación. De otro lado, revisando la cronología de los hechos, los predios fueron adjudicados en el año 1992, englobados en el año 2007, y yo ocupe el predio que reclamo en adjudicación comenzando el año 2010, cuando todos los títulos estaban vigentes, sin ninguna intervención del estado, para esa época del INCODER, entonces ¿Cómo se puede "suponer" que mi ocupación fue consentida por las personas que eran sus propietarios? Y de otro lado aquí no hubo fraccionamientos como lo considera la norma, hubo englobes y nunca participe de esos actos y prueba de ello es que mi nombre para nada aparece en ninguno de todos esos trámites, situación fáctica y jurídica que permite concluir que mi situación no se enmarca en lo previsto en el parágrafo 2 del artículo 64 de 1994 y por lo mismo mi petición de adjudicación NO PUEDE ser descalificada como se pretende.

Y siguiendo con la misma línea interpretativa desafortunada y contraria a derecho sobre la ocupación posterior a la resolución 6423 del 2014 debo REPETIR que NO son indebidas pues como está demostrado NO esta ejercida sobre bienes reservados; luego en un hábil juego de palabras se dice lo contrario; que el tiempo de ocupación ejercido por mí sobre el predio solicitado en adjudicación No da lugar a adjudicación por ser indebida y está demostrado atrás que NO ES INDEBIDA LA OCUPACIÓN.

Y para no perder la costumbre, se incurre en una indebida interpretación del artículo 25 del Decreto Ley 902 del 2017, el cual

transcribo; en la parte que corresponde; para mayor claridad y mejor percepción de los errores que se ponen de presente:

> *"ARTICULO 25: ADJUDICACIÓN DIRECTA: … …*
>
> *Los bienes baldíos adjudicables que a la fecha de la expedición del presente decreto no se encuentren ocupados debidamente en los términos de la Ley 160 de 1994, y los que se identificarán a partir de la aplicación de los procedimientos administrativos y judiciales en este Decreto señalados como fuentes del Fondo, se declaran reservados, y su destinación a los programas de acceso acá establecidos se realizará conforme a las reglas de adjudicación del RESO, según la competencia establecida por el artículo 76 de la Ley 160 de 1994, modificado por el artículo 102 de la Ley 1753 de 2015."*

El predio Baldío sobre el cual ejerzo ocupación, como ya esta analizado atrás, está siendo ocupado conforme a las normas vigentes y a las que corresponden para el caso en particular, es decir, de acuerdo con los parámetros que fija la ley 160 de 1994, por lo que NO ES PROCEDENTE NI JURÍDICO decir en la resolución que están ocupados indebidamente, de acuerdo con lo expuesto como sustentación del presente recurso de apelación.

Sobre las CONCLUSIONES solo puedo decir que todas carecen de fundamento, de soporte jurídico y que riñen con la situación fáctica que es interpretada de manera inadecuada para tratar de subsumirla dentro de los preceptos legales que se invocan como sustento jurídico, y que no se aceptan y contradicen con fundamento en las razones expuestas en esta apelación, REITERANDO que se solicita sea REVOCADA la resolución 6925 del 13 de agosto del 2020, en su integridad, para que se emita el acto administrativo de adjudicación a mi favor del predio solicitado de nombre San Felipe, por reunirse todos los requisitos legales para adoptar esta decisión de fondo.

Como corolario de la resolución objeto de recurso, la ANT hace un análisis del artículo 27 del decreto 902 del 2017 que regula el tránsito de legislación y que ordena tramitar los procedimientos administrativos ya iniciados con la ley 160 e 2994 y en orden a la temática expuesta, de ninguna manera se comparte pues como se analizó y demostró la ocupación NO ES INDEBIDA como se pretende mostrar para poder aplicar el nuevo decreto 902 de 1.994.

Finalmente, y en lo que corresponde al eventual reconocimiento de las mejoras en el predio, solo se hacen las siguientes precisiones sobre el

tema puntual, dejando claro que todas las mejoras plantadas en el predio constituyen la prueba idónea de la explotación económica del predio durante los últimos diez (10) años, las cuales siempre se ejecutaron con la convicción plena de poder reclamar el derecho de dominio sobre el predio legal y legítimamente ocupado.

Las justificaciones que la ANT hace a través de la subdirección que suscribe la resolución objeto de apelación, tendientes a sustentar o probar la MALA FE como ocupante del predio; como se lo exige la misma Constitución Política; no tienen ninguna procedencia ni conducencia, pues se ha demostrado que la ocupación ejercida por mi NO ES INDEBIDA, que legalmente no requería de ninguna autorización por parte del INCODER para ocupar el predio teniendo en cuenta la calidad de predios baldíos comunes de la Nación, tal y como lo dice y expone la misma resolución 6423 del 2014. Da la Razón la ANT al hecho de la buena fe que acompaña la ocupación, que producto de la lectura de la citada resolución en ninguna parte dice o expresa que los predios objeto de revocatoria tendrán la calidad de BALDÍOS RESERVADOS, no tampoco existe ninguna otra anotación posterior a la inscripción de esa resolución que me permitiera suponer, si quiera, que había una restricción para la ocupación, lo que refuerza la buena fe de la ocupación.

Dejo claro que bajo el convencimiento de lo expuesto se debe revocar la resolución objeto de apelación y por consiguiente no hay lugar a valorar las mejoras por constituir ellas la prueba idónea y material de la explotación económica y en el evento que no sea revocada la resolución en la instancia jurisdiccional se procederá a determinar cada una de las mejoras y determinar la cuantía de estas.

Por todo lo anterior debo reiterar mi solicitud inicial para que al momento de resolver **“EN DERECHO”** el recurso de apelación interpuesto **SE REVOQUE** en su integridad la resolución número 6925 del 13 de agosto de 2020 y en su lugar se proceda a adjudicar el predio solicitado por mí, que se encuentra legal y debidamente identificado, por reunirse los requisitos legales para esta declaratoria, de acuerdo con lo previsto en la ley 160 de 1.994.

DIRECCIÓN NOTIFICACIONES

Teniendo en cuenta que la ANT a través de sus diferentes oficinas ha enviado comunicaciones a correos no autorizados, como cuando se

notificó la Inscripción en el Registro de Sujetos de Ordenamiento RESO ratifico que mi dirección electrónica para notificaciones es luchopulido20@gmanil.com y la dirección de correo electrónico de mi abogado que aparece en el pie de página.

Cordialmente;



LUIS ILVAR PULIDO PINILLA
C. C. No. 79.523.930

Coadyuvo;



CARLOS DANIEL VARGAS BACCI
C. C. No. 17.321.780 de V/cio.
T. P. No. 84.436 del C S J.

Libertad y Orden

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT

RESOLUCIÓN No. 6925 **DE 2020**

(13 AGO 2020 **)**

"POR LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE ADJUDICACIÓN DE BALDÍOS DENTRO DEL PREDIO DE MAYOR EXTENSIÓN DENOMINADO EL PORVENIR, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META Y SE ORDENAN OTRAS ACTUACIONES"

LA SUBDIRECCIÓN DE ACCESO A TIERRAS EN ZONAS FOCALIZADAS DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS

En ejercicio de las funciones y facultades conferidas por medio del Decreto Ley 2363 de 2015, y en aplicación de lo dispuesto en la Ley 160 de 1994; los artículos 58, 60, 65 y concordantes del Decreto Ley 902 de 2017, el Decreto 1071 de 2015, la Resolución ANT No. 740 de 2017, la Resolución ANT No. 1384 de 2017, la Resolución ANT No. 3234 de 2018, la Resolución ANT No. 6162 de 2018, la Resolución ANT No. 5776 de 2018, la Resolución ANT No. 12096 de 2019, la Resolución ANT No. 915 de 2020 y, de acuerdo con las siguientes:

1. CONSIDERACIONES

Que los artículos 64 y 65 de la Constitución Política de Colombia establecen como deber del Estado, promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos, como también dar prioridad al desarrollo de actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales encaminadas a la producción de alimentos.

Que el artículo 65 de la Ley 160 de 1994 establece que la propiedad de los terrenos baldíos adjudicables sólo puede adquirirse mediante título traslaticio de dominio otorgado por el Estado a través de la hoy Agencia Nacional de Tierras.

Que mediante el Decreto 1292 del 21 de mayo del 2003, se ordenó la supresión y liquidación del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria–Incora-, y mediante el Decreto Ley 1300 del 21 de mayo de 2003, se creó el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -Incoder, que asumió las funciones misionales que en materia de dotación de tierras venía cumpliendo el Incora.

Que mediante el Decreto Ley 2365 del 7 de diciembre de 2015, se dispuso la supresión y liquidación del Incoder, en desarrollo de la facultad prevista en el literal a) del artículo 107 de la Ley 1753 de 2015.

Que igualmente, a través del Decreto Ley 2363 de 2015 se dispuso la Agencia Nacional de Tierras, en adelante ANT, como máxima autoridad de tierras de la Nación, entregándole, entre otras, la función de hacer el seguimiento a los procesos de acceso a tierras adelantados por la Agencia, en cualquiera de sus modalidades y aquellos que fueron ejecutados por el Incoder o por el Incora, en los casos en los que haya lugar.

Que la ANT tiene por objeto la ejecución de la política de ordenamiento social de la propiedad rural para gestionar el acceso a la tierra como factor productivo, lograr la seguridad jurídica sobre esta, promover su uso en cumplimiento de la función social de la propiedad y administrar y disponer de los predios rurales de propiedad de la Nación.

Que el artículo 38 del Decreto Ley 2363 de 2015, dispuso que, a partir de la entrada en vigencia de este cuerpo normativo, todas las referencias normativas hechas al Incora o al Incoder en relación con los temas de ordenamiento social de la propiedad rural deben entenderse referidas a la ANT. Además, el parágrafo establece que las referencias normativas consignadas en la Ley 160 de 1994, y demás normas vigentes, a la Junta Directiva del Incora, o al Consejo Directivo del Incoder, relacionadas con las políticas de ordenamiento social de la propiedad, deben entenderse referidas al Consejo Directivo de la ANT.

"Por la cual se resuelve una solicitud de adjudicación de baldíos dentro del predio de mayor extensión denominado *El Porvenir*, ubicado en el municipio de Puerto Gaitán, Meta y se ordenan otras actuaciones"

Que, en desarrollo de las facultades extraordinarias para la Paz, el Gobierno Nacional expidió el Decreto Ley 902 de 2017, por el cual se adoptan medidas para facilitar la implementación de la Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo Final en materia de Tierras, específicamente, el procedimiento para el acceso y formalización y el fondo de tierras.

Que a través del Decreto Ley 902 del 29 de mayo de 2017 se ratificó lo dispuesto en el Decreto Ley 2363 de 2015 y se ordenó a la ANT la implementación de Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad y ejecución del Proceso Único de Ordenamiento Social de la Propiedad, con el fin de intervenir el territorio rural para gestionar y solucionar los conflictos y situaciones indeseadas frente al acceso, uso y tenencia de la tierra aprovechando los barridos prediales para identificar y solucionar tales situaciones.

Que conforme a los Decretos Ley 902 de 2017 y 2363 de 2015, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural deberá focalizar las zonas para ejecutar la política de ordenamiento social de la propiedad rural, aunado a la obligación de ejecutar dicha política en el marco del barrido predial realizado con ocasión de la construcción del catastro multipropósito.

Que en el Título II de este Decreto Ley regula los aspectos relacionados con el Registro de Sujetos de Ordenamiento, RESO, como una herramienta técnica necesaria para inscribir a los sujetos beneficiarios previstos en el Acuerdo y un instrumento de apoyo para el desarrollo de las actividades de acceso y formalización previstas en el Acuerdo. Así, el articulado de este título hace referencia a aspectos como la creación del registro de sujetos de ordenamiento; la relación de este registro con el Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral; los criterios para la asignación de puntos para el RESO; la forma de ingreso y clasificación en él, y la promoción de la inscripción en el RESO.

En el Título VI del Decreto Ley 902 de 29 de mayo de 2017 se regulan los aspectos esenciales del Procedimiento Único. En el capítulo 1 se establecen las generalidades del procedimiento único. El inicio del procedimiento en zonas focalizadas (artículo 39). En este capítulo también establece los asuntos que va a conocer a través del procedimiento único (artículo 56); las fases del procedimiento único en zonas focalizadas (artículo 57); el procedimiento único en zonas no focalizadas (artículo 58), entro otros aspectos.

Que mediante Resolución 740 de 2017, adicionada por la Resolución No. 3234 de 2018, y modificada por la Resolución No. 12096 del 06 de agosto de 2019, se expidió el reglamento operativo de los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad y el Procedimiento Único de Ordenamiento Social de la Propiedad, que determina los instrumentos, mecanismos, secuencias y metodologías para desarrollar las funciones asignadas a la ANT en dichos asuntos.

Que la citada Resolución ANT No. 12096 de 2019 en su artículo 22, establece el acto administrativo de archivo para aquellos asuntos en los que se determine que no es procedente el inicio de rutas de asignación o reconocimiento de derechos de propiedad rural, cuando no se reúnan los presupuestos para dar apertura o continuar con el señalado procedimiento único.

Que mediante Resolución No. 4375 del 06 de agosto de 2018, la Dirección General de la ANT dispuso la aprobación del Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural del Municipio de Puerto Gaitán que contiene los aspectos enumerados en el artículo 44 del Decreto Ley 902 de 2017.

Que mediante Resolución No. 6060 del 14 de septiembre de 2018, la Dirección General de la ANT ordenó la suspensión de manera provisional, de la fase de implementación de los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural en los municipios de Cáceres, Ituango y San Carlos (Antioquia), Guaranda (Sucre), Puerto Gaitán (Meta), Lebrija (Santander) y Topaipí (Cundinamarca) dado que "*(…) los municipios de Ituango y Cáceres (Antioquia), no satisfacen las condiciones mínimas de seguridad"* y en lo demás *"(…)la Agencia Nacional de Tierras no dispone de estos recursos en su presupuesto".*

Que a través de la Resolución No. 6162 del 20 de septiembre de 2018 "*Por la cual se aclaran algunos apartes de la Resolución No. 6060 del 14 de septiembre de 2018 (…)",* el Director General de la ANT dispuso aclarar el artículo 17 de la precitada resolución "*(…) en el sentido de indicar que las actuaciones de impulso a procesos en curso que se podrán seguir adelantando, se refieren tanto a los asuntos iniciados por el Incoder bajo el régimen dispuesto en la Ley 160 de 1994, así como las actividades de impulso del*

Procedimiento Único de Ordenamiento Social de la Propiedad en su Fase Administrativa (Numeral 1 del artículo 60 del Decreto Ley 902 de 2017), para los casos en los que no se contempla adelantar actividades de barrido predial masivo(…)", esto atendiendo "*(…) la necesidad de atender algunos asuntos de especial importancia, entre otros, bajo los siguientes criterios: cumplimiento de sentencias judiciales, vigilancia especial designada por el Ministerio Público o afectación de los derechos de poblaciones en caso de no resolución oportuna(…)* respecto del cual "*(…) la Agencia dispuso del personal y recursos necesarios para la atención de los casos que se denominaron como prioritarios(…)".*

De lo anterior, la Resolución No. 6162 del 20 de septiembre de 2018 indica que "*(…) las circunstancias sobre las que se fundamental la citada Resolución No. 6060 de 2018, es decir la falta de situación de fondos requerida para la implementación de los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad o de seguridad, no es aplicable a las actividades de impulso procesal del Procedimiento único de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural de que trata el artículo 60 del Decreto 902 de 2017 respecto de los casos de especial importancia antes mencionados. Esto debido a que su impulso no se desprende de la fase de implementación del Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad del respectivo municipio, en lo que guarda relación con el barrido predial masivo".*

De otra parte, a la fecha de expedición del presente acto administrativo, la Agencia Nacional de Tierras, ante el estado de emergencia sanitaria para la contención del COVID-19 decretado por el Gobierno nacional, con el objetivo de proteger la salud y la vida de los colombianos y en especial de la población rural campesina, de conformidad a lo establecido en el Decreto 491 de 2020 "*Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica*", los actos administrativos que se expidan en el periodo determinado para la contención, se suscribirán de forma digital, firma autógrafa mecánica, digitalizada o escaneada (artículo 11), y se notificarán por medios electrónicos y en el evento en que la notificación no pueda hacerse de forma electrónica, se seguirá el procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (artículo 4); esto dadas las condiciones que impone la mitigación de la pandemia.

1.1. Competencia.

Que el procedimiento único para la implementación del ordenamiento social de la propiedad, el cual, en virtud del artículo 40 del Decreto Ley 902, le es aplicable a las zonas focalizadas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en los siguientes términos:

> **«Artículo 40. Procedencia del procedimiento único en zonas focalizadas.** El Procedimiento Único para implementar los Planes de Ordenamiento Social de la· Propiedad Rural, operará de oficio por barrido predial masivo en las zonas focalizadas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y de conformidad con los criterios adoptados por la Agencia Nacional de Tierras para la intervención en el territorio en los términos del Decreto 2363 de 2015, dando prioridad a los territorios destinados para la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), por el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) y las áreas donde existan Zonas de Reserva Campesina, atendiendo los planes de desarrollo sostenible que se hayan formulado. La gestión de la Agencia Nacional de Tierras atenderá en todo momento los propósitos de la Reforma Rural Integral en materia de acceso y formalización de tierras. **En las zonas focalizadas se aplicará el Procedimiento Único de que trata el presente decreto ley de acuerdo al Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural formulado participativamente en los términos del artículo 45.**
>
> **Parágrafo**. La Agencia Nacional de Tierras identificará cada uno de los predios ubicados en el área focalizada, señalando su número de matrícula inmobiliaria y remitirá a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos competente el acto administrativo que ordena la apertura del Procedimiento Único de ordenamiento social de la propiedad rural en el respectivo municipio para su inscripción.» (Negrilla fuera del original)

Que el citado Decreto Ley 2363 de 2015, en el artículo 23, establece las funciones de la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas de la Dirección de Acceso a Tierras de la ANT, así:

> "1. (…)
>
> 3. Analizar y proponer las rutas jurídicas para dotar tierras a los potenciales beneficiarios de identificadas en el proceso de barrido predial.
>
> 4. (…)

5. Resolver en primera instancia, los procedimientos de acceso a tierras que se en zonas focalizadas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

6. (…)

7. Las demás funciones señaladas en la ley, aquellas que le sean asignadas y las que por su naturaleza le correspondan".

Que, en virtud de lo anterior, el Director General de la ANT profirió la Resolución No. 1384 del 5 de octubre de 2017, *"Por medio de la cual se imparten orientaciones para la elaboración de planes de ordenamiento social de la propiedad rural en los municipios en los cuales se hayan realizado intervenciones catastrales bajo la metodología de levantamiento predial del catastro multipropósito y se dictan otras disposiciones".*

Que, en tal sentido, y de acuerdo con el artículo 3 de la Resolución antes mencionada, se ordenó a la Subdirección de Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión de la ANT, lo siguiente:

"En virtud de lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 24 del Decreto-Ley 2363/2015, a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente resolución, ordénese a la Subdirección de Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión remitir a la Dirección de Acceso a Tierras los expedientes de titulación de baldíos iniciados por demanda que se encuentren en los siguientes ocho municipios, en los cuales se están realizando intervenciones catastrales bajo la metodología de levantamiento predial del catastro multipropósito de que trata el artículo 104 de la Ley 1753 de 2015, y en los que se han adelantado las actividades propias de la fase de formulación de planes de ordenamiento social de la propiedad rural: Topaipí (Cundinamarca), Dibulla (Guajira), **Puerto Gaitán (Meta),** Lebrija (Santander), Puerto Leguízamo (Putumayo), Santa Marta (Magdalena), San Carlos (Antioquia) y Ovejas (Sucre).

La Dirección de Acceso a Tierras distribuirá los expedientes remitidos entre sus Subdirecciones o, entre las Unidades de Gestión Territorial por delegación del Director General, según corresponda a la naturaleza de cada caso". (Negrillas fuera del original)

Que, en atención esto, la Dirección de Acceso a Tierras de la ANT, a través de memorando con radicado No. **20184200005571** de fecha 15 de enero de 2018, ordenó entregar a la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas el expediente administrativo del predio denominado "*El Porvenir"*, ubicado dentro de la jurisdicción del municipio de Puerto Gaitán, departamento del Meta, para que dentro de sus competencias legales adelante las actuaciones administrativas que correspondan.

Que, en consecuencia, la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas es competente para conocer de las solicitudes de adjudicación de predios baldíos ubicados en los municipios focalizados, dentro de ellos, el de Puerto Gaitán, Meta, y, en especial, de las pertenecientes al predio conocido actualmente como *El Porvenir.*

Que igualmente, en virtud de lo establecido en el señalado artículo 27 de la Resolución 12096 de 2019 y la Resolución 915 de 2020, la Subdirección de Sistemas de Información de Tierras es competente para decidir sobre el ingreso al Registro de Sujetos de Ordenamiento- RESO de que trata el Título II del Decreto Ley 902 de 2017, para aquellas solicitudes radicadas hasta el 4 de septiembre del año 2019, y, partir de dicho momento, será la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas, para aquellas solicitudes comprendidas en municipios focalizados en los términos referidos.

1.2. Antecedentes.

1.2.1. La Sentencia SU-426 de 2016.

Que con ocasión de una acción de tutela instaurada por la señora Sulay Martínez y otros accionantes contra el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural —Incoder— y otras entidades de derecho público, resuelta en primera instancia por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, el ocho (8) de octubre de dos mil quince (2015); y en segunda instancia, por la Sala de Decisión de Tutelas No. 2 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el veintiséis (26) de noviembre de dos mil quince (2015); la Corte Constitucional seleccionó y asumió competencia para la revisión del proceso en referencia.

Que por lo anterior, el día once (11) de agosto de 2016, el alto Tribunal Constitucional profirió la Sentencia de unificación **SU-426 de 2016**, mediante la cual confirmó parcialmente la decisión de

segunda instancia proferida por la Sala Segunda de Decisión de Tutelas de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia; amparando entre otros, el derecho fundamental a la tierra y el territorio en favor de la población histórica que cumpla con los requisitos para ser sujetos de reforma agraria, en relación con los predios baldíos de que trata la Resolución No. 6423 del 30 de julio de 2014[1], expedida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural.

Que dentro de las órdenes contenidas en la Sentencia **SU-426 de 2016,** se establece puntualmente:

> "**(ii)** Censar a la población ocupante de los terrenos baldíos consignados en la Resolución No. 6423 del 2014 y definir quiénes serían sujetos de reforma agraria, de acuerdo con lo dispuesto en lo Ley 160 de 1994.
>
> (...)
>
> **(iv)** Advertir al Incoder o a quien haga sus veces, acerca de su obligación de evaluar los requisitos de reforma agraria, de manera que no se imponga a los peticionarios una carga que no pueden cumplir por negligencia y corrupción estatal. Es decir, debido a la permisión del Estado a la apropiación de El Porvenir por parte de un actor privado poderoso, en perjuicio de un amplio número de familias campesinas, según los hechos descritos en esta providencia. Bajo esa perspectiva, el Instituto deberá adelantar e impulsar hasta su culminación el proceso de adjudicación de bienes baldíos, de que trata la Ley 160 de 1994 y sus respectivas normas reglamentarias.
>
> **(v)** De acuerdo con las consideraciones vertidas en la parte motiva de esta providencia acerca de la situación de la 'mujer rural', el Incoder y la Unidad de Tierras deberán definir, adoptar e implementar medidas afirmativas para la población femenina en el marco de sus competencias legales; por ejemplo, que, al momento de realizar la titulación, esta se suscriba a nombre de la mujer, o de los dos cónyuges o compañeros permanentes. Para el efecto, deberán tomar en consideración el marco legal definido por la Ley 731 de 2002.

Que las órdenes proferidas por la Corte Constitucional encuentran asidero en el estudio abordado al resolver el problema jurídico que cuestiona, i) la vulneración del derecho fundamental a la tierra y el territorio de los accionantes al no adelantar la identificación y posterior titulación de los fundos pese a los efectos de la revocatoria declarada desde el 14 de julio de 2014, y ii) si la Nación recuperó documentalmente el dominio de estos.

Que en el mismo sentido, las órdenes proferidas se enmarcaron en la relevancia constitucional del caso que *"(...) se confirma por la aparente victimización que han enfrentado los ocupantes históricos del lugar, que configuran una compleja situación local de Derechos Humanos, derivada del conflicto armado, que presuntamente compromete de forma masiva el ejercicio de garantías constitucionales, tales como el acceso efectivo a la tierra en favor de los trabajadores rurales, la vida en condiciones dignas, trabajo, integridad personal, entre otros. En tal sentido, los peticionarios, que se identifican como campesinos de la vereda El Porvenir, municipio de Puerto Gaitán, han manifestado que han sido víctimas de distintos hechos de violencia por parte de estructuras criminales al margen de la ley, que a su vez se vinculan con la situación del conflicto armado interno extendido en el departamento del Meta; lo cual ha tenido como consecuencias, entre otras, el homicidio de varios pobladores".*

De allí que, en el asunto, la Alta Corporación tuvieran en cuenta el conjunto de supuestos fácticos narrados en el trámite, que demuestra la condición de vulnerabilidad de los actores, y que devino en la categorización de estos como **ocupantes históricos** (se resalta) teniendo en cuenta su asentamiento data 45 años atrás, y el padecimiento sufrido por estos "(...) *debido a la permisión del Estado a la apropiación de El Porvenir por parte de un actor privado poderoso".*

Que, por lo anterior, la Subdirección de Acceso a Tierras den Zonas Focalizadas de la Agencia Nacional de Tierras expidió la resolución No. 5776 de 2018 *"Por la cual se abre actuación administrativa de asignación de derechos en el marco del procedimiento único de ordenamiento social de la propiedad, dentro de los predios baldíos que conforman el de mayor extensión denominado "El Porvenir", ubicado en el municipio de Puerto Gaitán, Meta, en cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia de unificación SU -426 de 2016 de la Corte Constitucional y se ordenan otras actuaciones"*

[1] A través de la cual el Incoder dispuso la revocatoria de veintisiete actos de adjudicación de predios proferidos por el Incora, y ordenó que volvieran al dominio de la nación con carácter de baldíos.

Que en dicho acto administrativo se indicó, entre otras cosas, la ruta jurídica de actuación para el estudio de las solicitudes de adjudicación que recaen sobre el predio denominado "*El Porvenir",* ubicado en el municipio de Puerto Gaitán, Meta.

1.2.2. La Acción de Tutela expediente radicado No. T-00024 de 2018

Que mediante apoderado – Doctor CARLOS DANIEL VARGAS BACCI, el señor **LUIS ILVAR PULIDO PINILLA** identificado con cédula de ciudadanía No. 79.523.930 y otros, interpusieron acción de tutela en contra de la Agencia Nacional de Tierras, en la cual, los accionantes manifiestan que ocupan y explotan económicamente algunos predios que se encuentran ubicados en la vereda "EL PORVENIR" del Municipio de Puerto Gaitán, Meta, que vienen ejecutando actos propios de ocupación y que radicaron ante el antiguo INCODER solicitud de adjudicación y no se ha dado respuesta.

Que el JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA DE PUERTO LÓPEZ (META) mediante fallo del 24 de abril de 2018 concedió el amparo constitucional de los derechos fundamentales reclamados por los accionantes, ordenando a la Agencia Nacional de tierras abstenerse de impedir explotación agropecuaria de los predios ocupados por los accionantes y adelantar los actos administrativos en el marco de las competencias de la Agencia Nacional de Tierras, conforme a lo establecido por la Sentencia SU -426 de 2016, a fin de que se cumplan las ordenes allí dadas relacionadas con los ocupantes de los terrenos baldíos consignados en la Resolución No. 6423 del 2014, y que se relaciona con la adjudicación a quienes cumplan con los requisitos objetivos y subjetivos previstos en la Ley 160 de 1994 y demás normas que lo regulen.

Que la Sala de Decisión Civil Familia Laboral de Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio el día 07 de junio de 2018 procedió a decidir impugnación presentada por esta entidad (Agencia Nacional de Tierras) como accionada, en la cual, resolvió confirmar la decisión adoptada por el *a quo*. Decisión que fue notificada mediante correo electrónico el día 08 de agosto de 2018, según comunicación de entrada radicado No. 20181030732041.

1.2.3. La solicitud.

Que el señor **LUIS ILVAR PULIDO PINILLA** identificado con cédula de ciudadanía No. 79.523.930, presentó con la acción de tutela, formato de solicitud de adjudicación ante el extinto Instituto Colombiano de Desarrollo Rural- Incoder, respecto del predio denominado ***"San Felipe"***, ubicado dentro del predio de mayor extensión conocido actualmente como ***"El Porvenir"***, jurisdicción del municipio de Puerto Gaitán, Meta.

Que la solicitud en cuestión no cuenta con número de expediente o fecha de radicación dentro de los registros documentales en poder de la ANT; no obstante, en virtud de la orden impartida por el JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA DE PUERTO LÓPEZ (META), en consonancia con la orden cuarta literal (ii) de la Sentencia SU- 426 de 2016 de la Corte Constitucional, esta Subdirección procede a resolver la solicitud de adjudicación allegada con la acción judicial.

Que, así las cosas, para resolver el presente asunto, es necesario hacer unas consideraciones previas en relación a la situación jurídica del predio de mayor extensión donde recae la pretensión de adjudicación; para de esta manera continuar con el estudio del caso particular y, finalmente, establecer la procedencia o improcedencia de la titulación reclamada.

1.3. Identificación del predio de mayor extensión.

Que de acuerdo con la información consagrada en el Informe Técnico Jurídico Preliminar- ITJP y demás documentos recabados durante la fase preliminar de la actuación administrativa, es posible establecer las características del predio de mayor extensión conocido actualmente como ***"El Porvenir"***, dentro del cual, como se verá, se encuentra la ocupación sobre la cual recae la presente solicitud de adjudicación.

Que durante los años 1992 a 1996 el extinto INCORA, adjudicó veintisiete (27) predios ubicados en el predio de mayor extensión denominado "*El Porvenir"*, ubicado en inmediaciones del Centro Poblado *"El Porvenir"*, perteneciente al municipio de Puerto Gaitán, departamento del Meta.

"Por la cual se resuelve una solicitud de adjudicación de baldíos dentro del predio de mayor extensión denominado *El Porvenir*, ubicado en el municipio de Puerto Gaitán, Meta y se ordenan otras actuaciones"

Que la sumatoria identificada del área titulada se estima aproximadamente en **25940 ha + 3605 m2**, discriminados como se muestra a continuación, y, donde se determinan las adjudicaciones de los veintisiete (27) predios ubicados en el predio de mayor extensión denominado "*El Porvenir"* así:

ID	PREDIO	FMI	AREA	DOC.	FECHA
1	**El Caracolí**	234-8023	998,5000	Res. 051	16/01/1992
2	**El Morichal**	234-8012	998,1500	Res. 027	15/01/1992
3	**Cumare**	234-8014	984,1000	Res. 029	15/01/1992
4	**El Espejo**	234-8010	995,6000	Res. 025	15/01/1992
5	**Tafurito**	234-13194	994,0500	Res. 046	16/01/1992
6	**Campo Hermoso**	234-8016	999,1000	Res. 031	15/01/1992
7	**Mata de Monte**	234-8024	994,1000	Res. 052	16/01/1992
8	**Las Corocoras**	234-8018	994,9000	Res. 041	16/01/1992
9	**La Sabana**	234-8017	999,7580	Res. 040	16/01/1992
10	**La Palmita**	234-13195	999,9768	Res. 047	16/01/1992
11	**Lagunazo**	234-13202	697,9757	Res. 891	23/09/1996
12	**El Caminito**	234-13196	994,5000	Res. 048	16/01/1992
13	**San José**	234-8009	977,4000	Res. 024	15/01/1992
14	**Casuarito**	234-8020	1000,0000	Res. 044	16/01/1992
15	**Chicharra**	234-13203	699,9500	Res. 973	25/09/1996
16	**Mi llanura**	234-8007	979,5000	Res. 022	15/01/1992
17	**Pajonal**	234-8008	984,2000	Res. 023	15/01/1992
18	**El Rincón**	234-8011	883,8500	Res. 026	15/01/1992
19	**La Gran laguna**	234-8025	1000,0000	Res. 053	16/01/1992
20	**Matejey**	234-8022	868,1000	Res. 049	16/01/1992
21	**Cascabeles**	234-13193	979,6000	Res. 043	16/01/1992
22	**Palo Alto**	234-8019	998,7500	Res. 042	16/01/1992
23	**La Perla**	234-13197	985,3000	Res. 050	16/01/1992
24	**La Honda**	234-8013	985,8500	Res. 028	15/01/1992
25	**La Laguna**	234-8006	972,2000	Res. 021	15/01/1992

ID	PREDIO	FMI	AREA	DOC.	FECHA
26	**El Estero**	234-8021	983,8500	Res. 045	16/01/1992
27	**El Pedregal**	234-8015	991,1000	Res. 030	15/01/1992

En el año 2007, sobre los veintisiete (27) predios adjudicados se realizó un englobe en cinco (5) grandes predios denominados "*El Rincón", "Las Villa Alexandra", "Campo Hermoso", "El Pedregal"* y "*Mi Llanura*" cuya información se especifica a continuación:

PREDIO	FMI	CÉDULA CATASTRAL	ESCRITURA PÚBLICA	AREA (Ha)
El Rincón	234-15742	00-01-0001-0742-000	EP 2919 de 20/12/2007 Notaria 4 de Villavicencio	4730 ha + 3.000 m^2
Las Corocoras	234-15743	00-01-0001-0745-000	EP 2920 de 20/12/2007 Notaria 4 de Villavicencio	5681 ha + 2105 m^2
Campo Hermoso	234-15744	00-01-0001-0087-000	EP 2921 de 20/12/2007 Notaria 4 de Villavicencio	5969 ha + 5000 m^2
El Pedregal	234-15745	00-01-0001-0052-000	EP 2922 de 20/12/2007 Notaria 4 de Villavicencio	4918 ha + 3000 m^2
Mi Llanura	234-15741	00-01-0001-0756-000	EP 2918 de 20/12/2007 Notaria 4 de Villavicencio	4641 ha + 0500 m^2
AREA TOTAL				25940 ha + 3605 m^2

Que mediante **Resolución No. 6423 del 30 de julio de 2014**, el Subgerente de Tierras Rurales del extinto Incoder, dispuso la revocatoria en todas sus partes de los actos de adjudicación de los fundos antes relacionados, y los retiró del ordenamiento jurídico, de suerte que *"(...) dejan de tener vigencia y no producen, ni han producido, por tanto, efecto alguno".*

Que el artículo 6 de la Resolución en mención, indica que, revocados los actos administrativos de adjudicación de los inmuebles descritos, estos pasan al dominio de la Nación en calidad de baldíos.[2]

1.4. Consideraciones preliminares sobre la situación jurídica del inmueble objeto de ocupación.

La característica tradicional de los derechos de propiedad inmobiliaria como un tipo de derecho real, supone que estos representan facultades que ejerce un determinado sujeto de manera inmediata sobre un bien del que afirma es propietario: "*El Derecho real es que ejercitamos de forma inmediata sobre una cosa*"[3]. Pese a ello, el derecho de propiedad no supone, en rigor, relaciones exclusivamente entre un sujeto y el objeto apropiado: Las relaciones reguladas en los derechos de propiedad, suponen otros sujetos, que tiene el deber correlativo de acatar las prerrogativas propias de quienes fungen como dueños: La pertenencia como relación jurídica obliga en tal orden, la regulación de relaciones entre diversos sujetos que reconocen facultades

2 CÓDIGO CIVIL ARTÍCULO 675. BIENES BALDÍOS. Son bienes de la Unión todas las tierras que estando situadas dentro de los límites territoriales carecen de otro dueño.

3 BAUDRY-LACANTINERIE Gabriel. Précis de droit civil Tomo II. Pag 33. Tomado de GARCÍA MAYNEZ Eduardo. Introducción al Estudio del Derecho. Editorial Porrua. Página 206.

para que se ejecuten acciones que involucran los objetos apropiados. Los obligados fungen como parte esencial dentro de la definición y caracterización del dominio, pese a que por razones metodológicas si acostumbre a hacer abstracción de ellos[4].

Los sistemas de derecho de propiedad inmobiliaria han recurrido históricamente a la aplicación de dos tipos de criterios para definir el origen de la propiedad: De un lado, apelando a la figura del denominado título, perfeccionado el cumplimiento de solemnidades expresadas en la ley, y en cuya virtud se establece una relación entre un conjunto de personas, por un lado, un sujeto denominado propietario ejerce de manera exclusiva facultades sobre un determinado objeto, y de otro lado, un conjunto de personas que aceptan, o se obligan a hacerlo. El fundamento del dominio reside, en tal orden, en la declaración ejecutada dentro del respectivo título. En segundo lugar, los sistemas acuden al reconocimiento de cierto tipo de acciones connotativas de derechos de propiedad, y que generalmente se relacionan con el efecto de aprovechar económicamente el objeto que apropian. La apropiación es caracterizada como el efecto inmediato de la ejecución de determinadas acciones que fueron fijadas como el supuesto de hecho para la configuración de la propiedad.

El régimen colombiano sobre el derecho de propiedad inmobiliaria se ha estructurado a través de la combinación de los dos criterios referidos: De un lado impone la necesidad de contar con títulos de propiedad y de su respectiva inscripción en los registros de propiedad, como condición necesaria para afirmar que se es propietario, pero a su vez prevé como supuestos de hecho el aprovechamiento económico, a través de las figuras de la posesión y ocupación con importantes efectos relacionados con la institución del dominio.[5]

En tal orden, y dada la hoy indiscutible condición de terrenos baldíos de los predios sobre los que se dirige las solicitudes de adjudicación bajo estudio, se analizarán en las líneas siguientes el régimen de apropiación y configuración de los derechos de propiedad sobre tal tipo de terrenos. Para tales efectos se analizará: **(i)** el denominado régimen de la ocupación previa tal como fue estructurado en la Ley 160 de 1994, **(ii)** se establecerán las afectaciones de dicha institución con la expedición del Decreto Ley 902 de 2017, y **(iii)** finalmente, definir según dicho régimen la procedencia de las solicitudes de adjudicación formuladas.

1.4.1. Régimen de la ocupación previa.

Con un claro antecedente colonial, para el acceso a las tierras públicas se postuló, como regla general, que los particulares interesados en adquirir derechos de propiedad sobre tierras baldías debían por su iniciativa ocuparlas, y ejercer sobre ellas actividades de aprovechamiento económico.

---

[4] *"Nadie tendrá la ocurrencia de inscribir dicha obligación en el pasivo de su patrimonio: el valor positivo que figura en el activo del titular del derecho real, no corresponde un valor negativo en el patrimonio de otra persona. Por esto es que en la noción del derecho real se hace abstracción de los obligados" Ibidem. La tesis de abstracción de los sujetos pasivos también es criticada al señalar que es un buen recurso para explicar el ejercicio del derecho de propiedad sin necesidad de recurrir a la intermediación de otros. Sin embargo, se califica como falsa pues: "Entre una persona y una cosa no puede existir un vínculo jurídico; semejante relación carecería de sentido. Por definición, todo derecho es un vínculo entre personas" PLANIOL Marcelo y RIPERT Jorge. Tratado Práctico de Derecho Civil Francés Tomo II. Lo Bienes. Traducción Española DÍAZ CRUZ Mario. Cultural, S.A. Habana 1940.*

[5] La ocupación es calificada como un hecho que da lugar a determinadas situaciones jurídicas. Tratándose de bienes inmuebles está solo puede configurarse cuando se trata de terrenos baldíos, y siempre que esta hubiere iniciado antes del 29 de mayo de 2017, fecha de entrada en vigencia del Decreto Ley 902 de 2017. La ocupación se materializa mediante la apropiación material de un área a través de hechos de aprovechamiento económico incluidas las efectuadas por mujeres bajo la denominación de economía del cuidado. La posesión es un fenómeno jurídico que se concreta a través del hecho de ejercer el aprovechamiento económico de un predio de propiedad privada. A diferencia de la ocupación, esta no se realiza sobre terrenos baldíos, y no exige que las acciones se realicen de manera directa, es decir, que se puede ser poseedor a través de un tercero. La posesión puede ser regular si fue adquirida con justo título (venta, permuta, donación, sentencia) y de buena fe, cuando hay conciencia que el acto jurídico no está viciado, o que no se cometió algún fraude (Artículo 764 del Código Civil) La posesión es irregular cuando se carece o de justo título o de buena fe. (Artículo 764 del Código Civil).

Dentro de la Ley 160 de 1994 el régimen de baldíos conservó sus rasgos fundamentales a saber: señaló que la propiedad de las tierras baldías sólo podía adquirirse en virtud del título expedido por el Estado (artículo 65); condicionó la titulación al ejercicio de la ocupación de los particulares en extensiones no superiores a la Unidad Agrícola Familiar por Zonas Relativamente Homogéneas (artículos 38 y 67)[6], en adelante UAF, por un término no inferior a los 5 años, y a la explotación económica en una proporción no inferior a las 2/3 partes del área solicitada (incisos 1 y 2 del artículo 69 de la Ley 160 de 1994)[7]. Estas exigencias, en general, son analizadas bajo la denominación de condiciones objetivas, en tanto, definen atributos que deben revestir los terrenos baldíos para que puedan ser objeto de la adjudicación.

A su vez dentro de la Ley 160 se definieron condiciones subjetivas, que son los atributos personales que deben reunir los postulantes para la adjudicación. En ellas se afirma, como regla general, que las personas solicitantes no deben ostentar derechos de propiedad sobre otros predios rurales, no deben tener la condición de adjudicatarios dentro de los 15 años anteriores, no deben poseer patrimonios superiores a los 1000 salarios mínimos legales, entre otras, (capítulo XII).

Analizado así la procedencia de una adjudicación de baldíos exige la concurrencia de los requisitos objetivos y subjetivos.

1.4.1.1. Excepciones a la ocupación previa como modo de acceder a la propiedad de tierras baldías en el régimen de la Ley 160 de 1994.

Como se indicó, la figura de la ocupación previa se postuló como la regla general para definir el acceso a los derechos de propiedad sobre tierras baldías, empero, este prevé múltiples excepciones que identifican ciertos atributos de algunos terrenos baldíos que los hacen inadjudicables, o en otros eventos, **no adjudicables por la vía de la ocupación previa**.

Dentro de tales excepciones podemos identificar la figura de la reserva de baldíos, que implica que el Estado sustrae del régimen general de la ocupación determinadas áreas de baldíos.

Las reservas de baldíos, a su vez, contemplan múltiples hipótesis: i. Son baldíos reservados los predios de propiedad privada que revierten al dominio de la nación en virtud de la declaratoria de la extinción administrativa del dominio y deben ser destinados a procesos de adjudicación especiales, conforme al reglamento que expida la Junta Directiva del Incora (hoy Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras) (artículo 56 ley 160 de 1994); ii. Son baldíos reservados los delimitados conforme a las reglas de los artículos 67, 75 y 76 de la Ley 160 de 1994, para su destinación a actividades de utilidad pública e interés social, o para el establecimiento de regímenes especiales de ocupación, aprovechamiento y adjudicación; iii. Son baldíos reservados las islas de uno y otro mar que no hayan sido apropiados por particulares en virtud de título traslaticio del Estado; iv. Son baldíos reservados los delimitados para la constitución de títulos étnicos expedidos en vigencia de la Ley 135 de 1961; v. Son baldíos reservados los que se obtengan producto de la aplicación de los procedimientos de recuperación de baldíos indebidamente ocupados (artículo 48 numeral 3).

La multiplicidad de reservas que se presenta en el régimen agrario colombiano comparte un punto en común: en todas ellas no se aplican las reglas generales de apropiación y titulación de baldíos. Visto así, la constitución o identificación de reservas no son otra cosa que la abstracción de terrenos del conjunto de tierras baldíos sobre los que los particulares por su iniciativa pueden iniciar ejercicios de ocupación con la pretensión de obtener su titulación.

La constitución o identificación de una reserva de baldíos no conduce a afirmar que sobre los terrenos delimitados con dicha calidad no se puede adelantar actividades de aprovechamiento. Es

---

[6] Resolución No. 041 de 1996 "por la cual se determinan las extensiones de las unidades agrícolas familiares, por zonas relativamente homogéneas, en los municipios situados en las áreas de influencia de las respectivas gerencias regionales", expedida por la Junta Directiva del Incora.

[7] Los referidos incisos fueron derogados por el artículo 82 del Decreto Ley 902 de 2017, no obstante, como se mostrará, dichas reglas pueden ser aplicadas en virtud del régimen de transición previsto por el mismo decreto.

decir, la reserva no se adscribe como propiedad definitoria, la de imputar su imposibilidad de adelantar actividades de aprovechamiento, pues, su rasgo característico es la abstracción del régimen general de titulación. Así, por ejemplo, los baldíos reservados producto de la aplicación de la extinción administrativa, los de la recuperación de baldíos indebidamente ocupados, los reservados según el artículo 76 ibídem, se deben destinar a procesos de adjudicación conforme al régimen especial que expida el gobierno nacional.

1.4.1.2. Ocupaciones indebidas en el marco de la Ley 160 de 1994.

Como se ha señalado en varias ocasiones dentro del presente documento, el régimen que planteaba la Ley 160 de 1994 permitía que los particulares por su iniciativa ejercieran la ocupación sobre terrenos baldíos como una condición para solicitar su titulación. También se mostró que dicha regla presentaba multiplicidad de excepciones en las que se postulaba formas distintas a la ocupación espontánea como supuestos de hecho para lograr la adjudicación.

Con ello, es claro que, en el régimen de ocupación previsto por la Ley 160 de 1994, no todas las formas de ocupaciones de baldíos estaban permitidas. Dos aspectos resultaban cruciales para definir si las ocupaciones podían ser consideradas como regulares, es decir, aquellas que dan lugar a la titulación, o, las indebidas y, por tanto, de aquellas que debían corregirse a través de la recuperación del inmueble.

El primero tiene que ver con las condiciones personales del sujeto que ejecuta la ocupación, pues como se mostró, la titulación está restringida a personas que reúnan delimitadas condiciones económicas y patrimoniales. Este aspecto, en general, configura las causales subjetivas de la ocupación indebida, pues, orbitan frente a las condiciones que reúnen los sujetos que ejercen la ocupación.

El segundo aspecto se relaciona con la calidad del inmueble, pues el baldío sobre el que se ejerce la ocupación debe ser de aquellos adjudicables y que se encuentren dentro del conjunto de baldíos que pueden ser apropiados mediante ocupación. Este tipo de condiciones son denominadas como causales objetivas, en tanto, gravitan sobre las calidades que debe tener el inmueble objeto de la ocupación.

En ambos casos, es decir, la ocupación ejercida por una persona que no cumpla con las condiciones de sujeto de reforma agraria, o bien la ocupación adelantada por personas, independiente de sus condiciones personales, sobre terreno no adjudicable, o excluidos del régimen general de ocupación, se califican como indebidas y su tratamiento debe ser, en consecuencia, la recuperación de baldíos.

1.4.1.3. La ocupación previa con posterioridad al Decreto Ley 902 de 2017.

Con la expedición del Decreto Ley 902 de 2017 se incorporaron algunas modificaciones al régimen de tierras previsto por la Ley 160 de 1994, ajustando, entre otras, los programas de acceso a la propiedad, con la pretensión de garantizar que su ejecución se realice con mejores criterios de equidad, privilegiando a la población con mayores condiciones de vulnerabilidad, y otorgando prerrogativas a sujetos que históricamente han sido marginados del acceso a la propiedad rural.

Para tales efectos, se dispuso en primera medida unificar los programas de acceso a tierras dada la alta dispersión con el que se estructuraron al interior de la Ley 160 de 1994.[8] Frente a dicho

[8] Es posible identificar dentro de la Ley 160 de 1994, por lo menos tres tipos de programas inspirados en los mismos propósitos de dotar de tierras a los campesinos y superar los fenómenos de concentración y fraccionamiento de la propiedad (ordinal 2do artículo 1ero Ibidem). El primero de ellos se consignó en el capítulo IV, bajo la denominación de Subsidio y Crédito y consistía en la asignación de un aporte estatal, por regla general no reembolsable, que se asignaba al campesino para que adelantara el proceso de compra del predio y pagará con ello hasta el 70% de su valor. Este programa fue objeto de cuatro modificaciones dispuestas por los planes de desarrollo expedidos entre 2003 y 2015. El segundo programa es conocido bajo la denominación de adjudicación de predios del Fondo Nacional Agrario, en adelante FNA, o adjudicación de bienes fiscales patrimoniales, en el que el Incora-Incoder-ANT adquirían predios, los incorporan a su patrimonio y posteriormente los adjudicaban. El tercer programa es el de titulación de baldíos en el que se identificaban sujetos que desarrollan ocupaciones con una duración igual o mayor cinco años y una explotación de por lo menos 2/3 partes del predio procediendo a realizar su titulación. Ciertamente es distinto

panorama heterogéneo, el Decreto Ley 902 buscó establecer reglas más claras sobre la determinación de los sujetos aspirantes, el procedimiento para su adjudicación y las limitaciones al ejercicio de la propiedad derivadas del acto de titulación.

Dar mayor claridad sobre dichos aspectos no solo facilita la ejecución institucional de tales programas, sino que, además, asegura que la oferta institucional sea conocida con mayor precisión.

Aparejado a ello, se estructuró un sistema de adjudicación con mayor equidad en su operación. Esto debido a que la expedición de la mayoría de los estatutos agrarios partió de la identificación de dos fenómenos relacionados con la tenencia de la tierra. De un lado, la constitución de propiedades de grandes extensiones en cabeza de pocos titulares y la alta presencia de minifundios y de sujetos sin acceso a tierras. Pese a ello, se mantuvo como una figura válida para la apropiación y titulación de los terrenos baldíos la ocupación por iniciativa de los mismos particulares. La figura de la ocupación previa como prerrogativa para lograr la titulación de baldíos surgió en un contexto histórico abiertamente distinto al que hoy vivimos. Dichas condiciones son hoy distintas, por cuanto, los objetivos que deben condicionar los programas de dotación de tierras deben ser también distintos. Ello explica porque el decreto establece tres tipos de sujetos: de un lado los que su acceso a tierras debe realizarse a título completamente gratuito, porque sus condiciones de vulnerabilidad económica representa mayores dificultades; los sujetos que reciben adjudicaciones a títulos parcialmente gratuito, en tanto, se ubican en segmentos cuyas condiciones de vulnerabilidad económica les permite asumir proporcionalmente a su patrimonio el pago de ciertas sumas de dinero que deben destinarse a nuevos programas de adjudicación y, los que solo pueden acceder a los programas de formalización de la propiedad.

La derogatoria de la ocupación previa como modo para acceder a los terrenos baldíos, y la unificación de las condiciones de selección para la adjudicación de predios o subsidios, implica concebir un proceso de selección objetiva que permita identificar a los potenciales beneficiarios merecedores de los programas de acceso a tierra.

Para tales efectos, se dispuso la creación del registro de sujetos de ordenamiento social de la propiedad, en adelante **RESO**, estructurado principalmente para el cumplimiento de dos objetivos: De una parte, a relacionar y ordenar a todos los sujetos que son beneficiarios de las políticas de ordenamiento social de la propiedad, y de otro, a servir como un insumo para el direccionamiento de la política de ordenamiento social.

El primero de tales objetivos resulta útil, especialmente, para resolver los distintos programas de acceso a tierras: Las personas interesadas en participar realizan su inscripción a través de un formulario diseñado para tales propósitos denominado **FISO** (Formulario de Ingreso de Sujetos de Ordenamiento). Su diligenciamiento equivale a la petición formal de ingreso al registro, con lo cual, la ANT valora si dicha persona cumple con los requisitos de elegibilidad. A su vez, se valoran las condiciones de vulnerabilidad económica, capacidad para la ejecución del proyecto productivo, y de otras situaciones de vulnerabilidad a través de la asignación de puntaje, determinantes en los procesos de selección objetiva.

La selección objetiva, por su parte, señala que los programas de acceso operan por demanda, y, dado que los recursos asignados no son suficientes para atender a la totalidad de aspirantes, se fijan reglas objetivas que determinan los órdenes en los que deben priorizarse la asignación de

---

asignar un subsidio para la compra de tierras que adjudicar un inmueble, incluso la adjudicación difiere dependiendo de su naturaleza. Empero los tres procesos guardaban algunas similitudes en tanto, estaban fundados en los mismos derroteros. Pese a ello las diferencias resultaban radicales, para el FNA se exigía que los aspirantes no tuvieran patrimonios superiores a 200 salarios mínimos, para subsidio no mayores a 200 y para baldíos hasta 1000. Los procedimientos para la determinación de sus beneficiarios también resultaban bastante diferentes. Así mismo, efectuadas las adjudicaciones, los regímenes de limitaciones a la propiedad también resultaban bastante distintos: para FNA se prohibía su enajenación por un término de 15 años sancionable con caducidad administrativa, para el subsidio la prohibición era de 12 años sancionable con la condición resolutoria, y para baldíos no había prohibición de enajenación, pero sí la de constitución de gravámenes.

estos recursos. En dichos procesos se valoran las condiciones de vulnerabilidad económica, otorgando puntuaciones más altas a quienes tienen menores patrimonios, acciones afirmativas para corregir situaciones de discriminación negativa, como dar puntos a personas víctimas o a las mujeres rurales. También se asignan puntos a quienes llevan periodos de qué más largos dentro de los registros, otorgando un (1) punto por cada mes de permanencia en el registro, por dar algunos ejemplos.

Frente a la condición de la mujer rural, el RESO prevé varias medidas dirigidas a establecer situaciones en las que pueden obtener mayores puntuaciones y por ende en mejor posición para ser beneficiarias de los programas de dotación de tierras: se establece en la valoración de la experiencia que las actividades de la economía de cuidado deben ser tenidas también como generadoras de puntos por los lapsos en los que se hayan adelantado, en las mismas condiciones en las que se puntúan las otras actividades económicas. Así mismo, al establecer incentivos para que los beneficiarios se asocien, contempla que las mujeres que acrediten pertenecer a una asociación campesina reciben el doble de puntos, y el triple si ocupan cargos directivos dentro de la respectiva organización. Dicho tratamiento fue previsto también para todas las mujeres que pertenezcan a organizaciones de mujeres cuyo objetivo sea el de sensibilizar y empoderar las pretensiones femeninas de acceso a la propiedad[9].

1.5. Régimen de transición del Decreto Ley 902 de 2017.

Como se indicó, el tránsito normativo dispuesto con la expedición del Decreto Ley 902 de 2017 implicó múltiples transformaciones a los procesos de dotación de tierras que misionalmente ejecuta la ANT. Resulta especialmente problemático determinar las condiciones en las que dicho tránsito modificó los procedimientos de acceso a tierras que se hubieran encontrado en curso al momento de la expedición del Decreto Ley, así como los procedimientos que se deben adelantar actualmente, pero, cuyos supuestos de hecho hacen referencia a la Ley 160 de 1994 previas las modificaciones del Decreto Ley 902.

La aplicación de las normas en el tiempo supone considerar a la norma jurídica como un precepto con aptitud para regular situaciones jurídicas en determinados lapsos temporales, por cuanto, es necesario establecer claramente el momento en el que comienza a producir efectos y aquel en el que concluyen. En tal sentido, es posible considerar tres situaciones posibles: (i) la norma regula sólo situaciones posteriores a su existencia, sin que pueda admitirse su aplicación a hechos anteriores (irretroactividad de la ley) (ii) la norma regula incluso hechos sucedidos con anterioridad a su existencia (retroactividad de la Ley) y (iii) la norma pese a haber dejado de existir, continua regulando situaciones que fueron acaecidas dentro del periodo de su subsistencia, pero su aplicación se examina en un momento en el que ya no tiene efectos (ultraactividad de la Ley).

De los fenómenos de aplicación de la ley en el tiempo, la irretroactividad se formula como la regla general, justificada en la imposibilidad de que a sus destinatarios les es imposible sujetarse al cumplimiento de normas que no existen, de modo que se asegure que las situaciones consumadas bajo el imperio de una ley no puedan ser modificadas o alteradas por posteriores preceptos. Pese a ello, la retroactividad aplica para aquellos casos en los que expresamente se señale que identificándose una norma posterior como más favorable esta puede primar sobre la norma vigente para el momento en el que se despliega la conducta.

Paralela a esta excepción, la ultraactividad desarrolla la aplicación de normas anteriores ya derogadas, que resultan de mayor favorabilidad que las actuales, siempre que pueda mostrarse que los hechos iniciaron en su vigencia.

Dichos fenómenos son distinguibles en el tránsito normativo examinado: El Decreto Ley 902 postula que rige a partir de su expedición, derogando las disposiciones que le resulten contrarias (artículo 82). Con ello, por ejemplo, la adjudicación mediante cualquier proceso de selección objetiva que se hubiese establecido dentro de la Ley 160 de 1994 y sus normas reglamentarias quedan plenamente sustituidas por las reglas del RESO. De la misma manera, se entienden derogados aquellos supuestos de hecho que en vigencia de la Ley 160, sin las modificaciones del

[9]Vid. Resolución 740 de 2017 del Director General de la ANT.

Decreto Ley, daban lugar a prerrogativas que otorgaban derecho a la adjudicación directa. Así, por ejemplo, la ocupación previa daba lugar, cumplidas las condiciones objetivas y subjetivas, a la adjudicación de los terrenos baldíos. Todas estas posibles hipótesis ya no se encuentran consignadas como prerrogativas que dan derecho a la adjudicación, en tanto, se establece que los procesos de selección de beneficiarios se rigen por las reglas del RESO. Esta condición constituye la regla general y materializa lo que hasta acá hemos denominado irretroactividad de ley.

En rigor, la irretroactividad señala que, a partir del 29 de mayo de 2017, los particulares no pueden iniciar ejercicios de ocupación previa, sino solo cuando estas hayan sido autorizadas por la ANT y su adjudicación se regule con el nuevo proceso de selección de beneficiarios.

Y en virtud de la ultraactividad, supone que las ocupaciones iniciadas con anterioridad al 29 de mayo de 2017 pueden alternativamente ser resueltas con las normas de la Ley 160 de 1994, o con las del Decreto Ley 902 según se identifique cuál de ellas resulta más favorable al ocupante. No obstante, esta última regla exigirá que la ocupación se realice de manera regular, es decir, no puede pretenderse la aplicación del régimen de transición cuando las ocupaciones en el marco de la Ley 160 de 1994 estuvieren llamadas a ser calificadas como indebidas.

1.6. Procedencia de las solicitudes de adjudicación.

Como un elemento común a las diferentes solicitudes de adjudicación de los aspirantes de tierra dentro del predio denominado hoy *"El Porvenir"*, encontramos que las ocupaciones se iniciaron con anterioridad a la expedición del Decreto Ley 902 de 2017 (29 de mayo de 2017)[10], por cuanto, en principio, se deben resolver sustancialmente bajo las prerrogativas de la Ley 160 de 1994.

Ahora bien, como se mostró, el efecto inmediato de la resolución que declaró la revocatoria de las adjudicaciones implicó que las áreas hoy ocupadas tengan la condición de terrenos baldíos, no obstante, tales terrenos no podían ser objeto de ocupaciones por particulares, y, por ende, las hoy ejercidas no son, por sí mismas, suficientes para alegar el derecho a la adjudicación. Esta conclusión, se extrae del análisis de las disposiciones normativas contenidas en la Ley 160 de 1994. Es decir, el resultado de la aplicación del régimen de la Ley 160 de 1994 por efecto de la ultraactividad prevista por el Decreto Ley 902 de 2017, permite afirmar que, en principio, no resultan procedentes las titulaciones solicitadas.

1.6.1. Reserva de baldíos: áreas que superen la UAF.

La primera disposición aludida se encuentra contenida en el inciso segundo del artículo **67 de la Ley 160 de 1994**, **modificado por el artículo 1 de la Ley 1728 de 2014,** que establece: "(…) *En caso de existir áreas que excedan el tamaño de la Unidad Agrícola Familiar establecidas para las tierras en el municipio o zona a estas áreas se les dará el carácter de baldío reservados, susceptibles de ser adjudicados a otros campesinos.* (…)" (Subrayas fuera del texto original).

Lo anterior quiere decir que todas las áreas que excedan la UAF que sea definida por la Autoridad de Tierras para un municipio o zona determinada, en virtud de la ley se encuentran reservadas automáticamente para el desarrollo de los programas de acceso a tierra en favor de la población campesina.

Así pues, todas las áreas que excedan la Unidad Agrícola Familiar definida para el predio de mayor extensión denominado *El Porvenir,* el cual, como se dijo, tiene una extensión aproximada de 25 mil hectáreas, se les debe impartir el tratamiento de baldíos reservado, y, por tanto, su régimen de ocupación, aprovechamiento y adjudicación no corresponde al ordinario.

Esto, como se dijo, implica que tales áreas no puedan ser objeto de ocupación libre por particulares con el objeto de que sean tituladas en su favor; toda vez que, al estar reservadas, su régimen de ocupación y adjudicación debe ser el que defina la hoy Agencia Nacional de Tierras.

En consecuencia, todas las ocupaciones ejercidas sobre dichas áreas no solo no otorgan derecho a la adjudicación, sino que, en principio, se tornan indebidas, debiendo ser recuperadas por la autoridad de tierras para el desarrollo de los programas en favor de la población campesina.

[10] Informe técnico jurídico preliminar-ITJP

Al respecto se debe señalar que la Resolución ANT No. 740 de 2017 (Plan Operativo del Procedimiento Único de Ordenamiento Social de la Propiedad), adicionada por el artículo 10 de la Resolución ANT No. 108 de 2018, en lo relacionado con el cálculo de la Unidad Agrícola Familiar, dispuso que cuando en desarrollo del Procedimiento Único de Ordenamiento Social de la Propiedad de qué trata el Decreto Ley 902 de 2017, quien opte por la adjudicación de un predio baldío conforme a lo señalado en el Decreto Ley 902 de 2017, la Unidad Agrícola Familiar – UAF- será calculada para cada caso individual bajo la metodología de UAF predial.

Que, en este sentido, y dado que la presente solicitud debe ser ventilada bajo las reglas del Procedimiento Único, por las razones que más adelante se expondrán, la ANT realizó el cálculo de las UAF predial tipo para el predio de mayor extensión conocido actualmente como El Porvenir, labor que se llevó a cabo haciendo uso de la metodología adoptada a través de la Resolución ANT No. 2533 de 2018.[11]

El resultado del cálculo de UAF se encuentra definido en el correspondiente informe agronómico que obra dentro del presente expediente principal del procedimiento de asignación de derechos del predio EL Porvenir.

1.6.2. Efectos de la revocatoria directa: reserva especial de baldíos.

La revocatoria sobre actos administrativos de titulación de baldíos constituye un trámite de carácter especial, en cuya virtud, es posible revisar la legalidad de los actos de adjudicación. Su efecto, frente a la naturaleza de los predios puede darse en dos posibles vías: la primera, si se cuestiona la legalidad de la adjudicación al identificar que operó sobre predios que no tenían la condición de baldíos, su resultado al declarar la revocatoria será la de reconocer que se trataba de bienes que acreditaban dominio ajeno, bien sea propiedad privada, bienes fiscales patrimoniales, o bien de propiedad étnica. La segunda vía, como resultado posible, es que el bien objeto de la revocatoria adquiera nuevamente la condición de baldío, en tanto, lo que se reprochó fueron las condiciones personales del adjudicatario, que la configuración de la ocupación no era apropiada, o bien, que el baldío era inadjudicable o tenía el carácter de reservado.

De modo concreto, la Resolución No. 6423 de 2014 expedida por el entonces Incoder, implicó que las áreas hoy ocupadas adquirieron la condición de terrenos baldíos, en tanto, demostró que los adjudicatarios no cumplían con los requisitos para acceder a las titulaciones; señalando, entre otras cosas, que la totalidad de los títulos de adjudicación se expidieron en violación a las condiciones materiales para la adjudicación de baldíos, por cuanto, los solicitantes no adelantaron la ocupación por el término de los 5 años y la explotación de las 2/3 partes de lo adjudicado, de acuerdo con las normas vigentes al momento de las titulaciones.[12]

La citada resolución también mostró que las adjudicaciones reprochadas obedecieron a la maniobra de particulares que ocupaban baldíos más allá de los límites permitidos, y dar a tales ocupaciones la apariencia de legalidad a través de la titulación en favor de una pluralidad de personas que no ejercieron la ocupación y explotación de los predios.

En tal consecuencia, otro efecto de la Resolución No. 6423 de 2014 consistió en otorgar el carácter de baldíos a los predios objeto de solicitud. Dicha condición tiene como particularidad que sustrae los predios de aquellos que pueden ser ocupados libremente con el objetivo de obtener su titulación, en tanto, su aprovechamiento y titulación deben ser siempre direccionados por el respectivo administrador, para este caso, la ANT.

Quiere decir ello, que, pese a haber adquirido nuevamente la condición de terrenos baldíos, los predios no podían ser objeto de la ocupación espontánea y libre, esto es, por iniciativa de los particulares, ya que debía ser la autoridad de tierras, quien, a través de un proceso de selección objetiva, determinara las personas que podían ser adjudicatarias de dichos fundos.

---

[11] Por la cual se adopta la Guía Operativa de cálculo de UAF Predial y se desarrollan las excepciones contempladas en el artículo 26 del Decreto Ley 902 de 2017, que permite la adjudicación de extensiones inferiores a la UAF Predial.

[12] Vid Numeral 6.5.4 de la Resolución 6423 de 2014 de Incoder.

Contemplarlo de una manera distinta, implica aceptar que la intervención del Estado, desplegada para corregir las irregularidades en las adjudicaciones y el fenómeno de concentración de dichos terrenos baldíos, se suspendía una vez terminada los trámites de revocatoria, y, sometido a la contingencia de los particulares; al no condicionarse la titulación a un proceso de selección objetiva no existe garantía que los beneficiarios sean aquellos que revisten mayores condiciones de vulnerabilidad. Por el contrario, es altamente probable que, por efecto de la ocupación, se prefiera en la adjudicación a quienes poseen mejores condiciones para ejecutar el señorío y el aprovechamiento económico. Por otra parte, no puede garantizarse equidad en las áreas a distribuir, pues, estas dependen de la manera en la que los particulares hubieran delimitado sus ocupaciones. En suma, negar los efectos de la reserva, implica abstraer al Estado de las decisiones de apropiación, y aprovechamiento económico, dificultando que el proceso de acceso se oriente por criterios de equidad que privilegien a las personas con mayor vulnerabilidad económica y social.

1.6.3. Improcedencia de las solicitudes de adjudicación de baldíos concentrados y reservados.

De conformidad con lo expuesto, y en consonancia con el inciso segundo del artículo 74 de la Ley 160 de 1994**,** no puede invocarse la adjudicación de un terreno baldío cuando el peticionario deriva su ocupación del fraccionamiento de terrenos baldíos que se hayan tenido de manera indebida. Como se señaló el peticionario afirma que su ocupación inició antes del 29 de mayo de 2017, bajo el régimen de la Ley 160 de 1994, lo que pudo ocurrir solo en dos hipótesis: **(i)** las ocupaciones iniciaron con posterioridad a la expedición de las Resolución No. 6423 de 2014 y son indebidas, en tanto, su objeto era un baldío reservado que se encuentra fuera del régimen de ocupación y adjudicación ordinario, **(ii)** lo hicieron con anterioridad, es decir, cuando se encontraban concentrados por efecto de la titulación indebida, y posterior englobe, lo cual devino en la revocación de dichas adjudicaciones.

En esta última situación implica, por tanto, que estas ocupaciones tampoco dan derecho a la adjudicación.

2. EL CASO CONCRETO.

De conformidad con las consideraciones expuestas, esta Subdirección procederá a estudiar la solicitud presentada por el señor **LUIS ILVAR PULIDO PINILLA** identificado con cédula de ciudadanía No. 79.523.930, con la finalidad de establecer si es dable dar apertura a la segunda fase administrativa del Procedimiento Único de Ordenamiento Social de la Propiedad en los términos del artículo 60 del Decreto Ley 902 de 2017 para el reconocimiento de derechos, o si, por el contrario, la Agencia Nacional de Tierras debe abstenerse de ordenar dicha apertura y, por tanto, dar por terminado el presente trámite de acuerdo con el procedimiento aplicable.

2.1. La solicitud de adjudicación.

Tal como se indicó líneas arriba, el señor **LUIS ILVAR PULIDO PINILLA** identificado con cédula de ciudadanía No. 79.523.930 presentó con la acción de tutela, formato de solicitud de adjudicación ante el extinto Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - INCODER, respecto del predio denominado "**San Felipe",** jurisdicción del municipio de Puerto Gaitán, Meta; predio que se encuentra dentro del de mayor extensión conocido actualmente como El Porvenir. Que el solicitante manifestó ocupar el predio señalado desde el día 13 de julio de 2010.

Que igualmente, a través del Formulario de Inscripción de Sujetos de Ordenamiento FISO No. 85152 del 30 de julio de 2018, el señor **LUIS ILVAR PULIDO PINILLA** elevó solicitud de acceso a tierras bajo la ruta de reconocimiento de derechos respecto del predio antes señalado.

2.1.2. La ocupación.

De acuerdo con los documentos contentivos de la solicitud de adjudicación y demás información recabada, se observa que el predio ocupado y reclamado en adjudicación presenta las siguientes características:

Descripción del área solicitada.

"Por la cual se resuelve una solicitud de adjudicación de baldíos dentro del predio de mayor extensión denominado *El Porvenir*, ubicado en el municipio de Puerto Gaitán, Meta y se ordenan otras actuaciones"

Para realizar el presente análisis, se tuvieron en cuenta, entre otras, las siguientes fuentes de información:

- Solicitud de adjudicación de baldío persona natural formato Incoder y anexos.
- Formulario de Inscripción de Sujetos de Ordenamiento FISO 85152 del 30 de julio de 2018.

De acuerdo a los documentos analizados, se identifica que la solicitud de adjudicación es realizada por el señor **LUIS ILVAR PULIDO PINILLA** identificado con cédula de ciudadanía No. 79.523.930, y que dicha solicitud se realizó sobre el predio denominado ***"San Felipe",*** según plano planimétrico adjunto a formulario de solicitud de adjudicación, y describe un área general de **829 ha + 1402 m2**. cómo se observa en la imagen 1

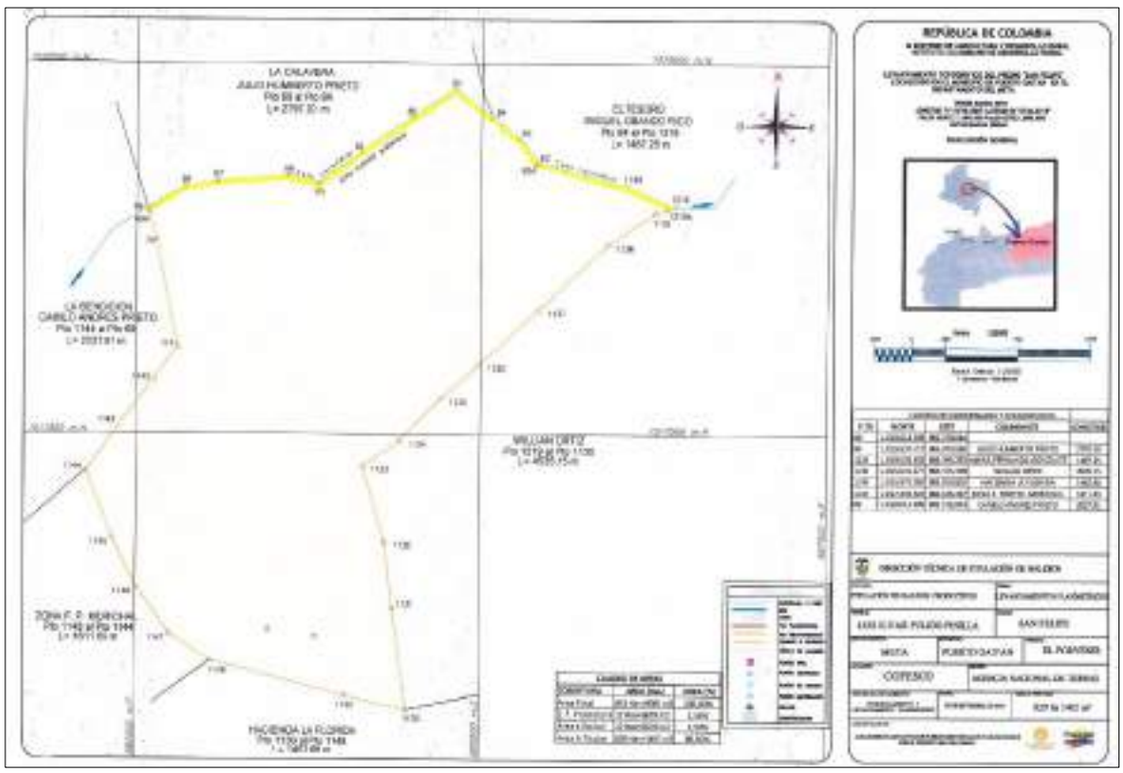


Imagen 1. Plano planimétrico anexo formulario de solicitud de adjudicación con fecha 17 de marzo de 2016.
Fuente: INCODER

- Reconstrucción vectorial de la ocupación.

En aras de verificar la información aportada por el plano topográfico incluido en la Solicitud de Adjudicación de baldío (imagen 1), se realizaron procesos tales como la digitalización y reconstrucción vectorial a partir de información geográfica que fue posible extraer de repositorios relacionados con el predio Porvenir, los cuales permitieron realizar un aproximamiento del área, ubicación y colindancias de la ocupación (imagen 2).

Tabla 1. Coordenadas según la reconstrucción vectorial.

ID	Coordenadas (m)		Punto		Distancia (m) Reconstrucción	Fuente Vértice
	Este	Norte	Inicial	Final		
01	982588,26	1018985,88	01	02	2758,02	Reconstrucción Vectorial
02	985051,41	1019615,84	02	03	1467,56	Reconstrucción Vectorial
03	986350,99	1019019,18	03	04	4495,02	Reconstrucción Vectorial
04	984475,38	1015641,68	04	05	1462,73	Reconstrucción Vectorial
05	983050,60	1015972,09	05	06	1609,57	Reconstrucción Vectorial

06	982136,44	1017245,52	06	01	1998,24	Reconstrucción Vectorial

(ESPACIO EN BLANCO)

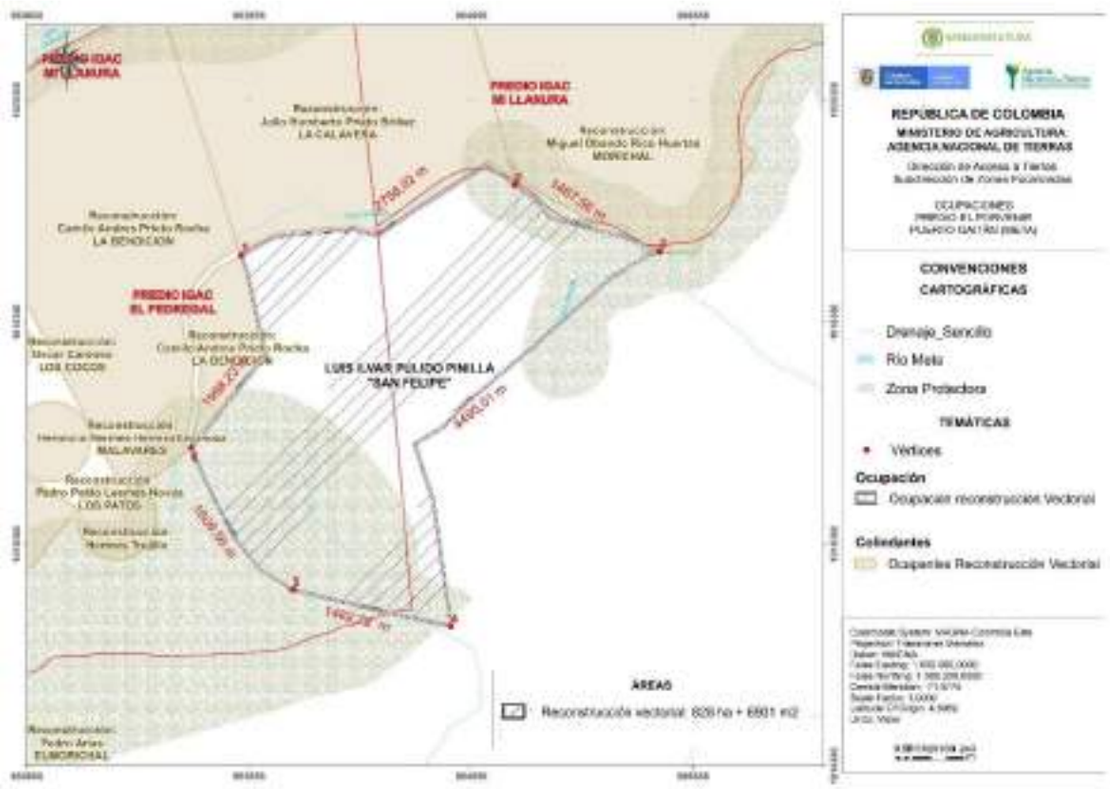


Imagen 2. Reconstrucción vectorial del predio*. Fuente: SATZF-ANT*

Atendiendo lo anterior y para efectos de validar la información reconstruida, se comparó la reconstrucción vectorial con las diferentes fuentes de información y visitas de verificación realizadas en campo, con la cual se logró encontrar correlación entre las mismas en términos de áreas y colindancias, como se observa en la Imagen 2 y en las tablas 2 (áreas) y 3 (colindancias).

Tabla 2. Áreas según las fuentes.

Fuente	Área
Formulario Solicitud	841 ha + 0000 m^2
Plano anexo	829 ha + 1402 m^2
Censo de ocupantes	846 ha + 0000 m^2
Acción de Tutela	829 ha + 0000 m^2
Formulario FISO	840 ha + 0000 m^2
Reconstrucción vectorial	**828 ha + 6901 m2**

Tabla 3. Colindantes según las fuentes.

	Formulario Solicitud	Formulario FISO	Plano Topográfico Anexo	Reconstrucción vectorial
NORTE	Julio Humberto Prieto	Miguel Obando Rico	Julio Humberto Prieto ocupación "LA CALAVERA"	Julio Humberto Prieto ocupación LA CALAVERA
ESTE	William Ortiz	Julio Humberto Prieto	Miguel Ovando Rico ocupación "EL TESORO"	Miguel Obando Rico Huertas ocupación MORICHAL
			William Ortiz	William Ortiz Ocupación SIN NOMBRE
SUR	Miguel Ovando Rico Huertas	Armando Pineda	HACIENDA LA FLORIDA	Zona Protectora de Morichal
OESTE	Zona Forestal Protectora Camilo Andrés Prieto	William Ortiz	Camilo Andrés Prieto ocupación LA BENDICION	Camilo Andrés Prieto ocupación LA BENDICION
			Zona Forestal Protectora de Morichal	

Redacción técnica de linderos

A partir de la información recaba y de los análisis efectuados, la *Agencia Nacional de Tierras* construyó la redacción técnica de linderos que corresponde a la ocupación ejercida en la actualidad con un área de **828 ha + 6901 m2**, la cual se describe a continuación:

PUNTO DE PARTIDA: Se toma como punto de partida el punto 01 de coordenadas planas E: 982588,260 m y N: 1018985,880 m, ubicado en la esquina noroeste de la ocupación, sitio donde concurren las colindancias de los posibles ocupantes CAMILO ANDRES PRIETO ROCHA ocupación "LA BENDICIÓN" (según reconstrucción vectorial) y JULIO HUMBERTO PRIETO BRIÑEZ ocupación "LA CALAVERA" (según reconstrucción vectorial). **NORTE:** Del punto de partida 01 se continúa en dirección noreste en línea quebrada en una distancia de 2758,02 m, hasta encontrar el punto 02 de coordenadas planas E: 985051,410 m y N: 1019615,840 m colindando con el posible ocupante JULIO HUMBERTO PRIETO BRIÑEZ ocupación "LA CALAVERA" (según reconstrucción vectorial). **ESTE:** Del punto 02 se continúa en dirección sureste en línea quebrada, en una distancia de 1467,56 m, hasta encontrar el punto 03 de coordenadas E: 986350,99 m y N: 1019019,18 m el posible ocupante MIGUEL OVANDO RICO ocupación "EL TESORO" (según reconstrucción vectorial). Se continúa en dirección suroeste en línea quebrada, en una distancia de 4495,01 m, hasta encontrar el punto 04 de coordenadas planas E: 984475,380 m y N: 1015641,680 m colindando con el posible ocupante WILLIAM ORTIZ ocupación "SIN NOMBRE" (según plano topográfico). **SUR:** Del punto 04 se continúa en dirección noroeste en línea quebrada, en una distancia de 1462,72 m, hasta encontrar el punto 05 de coordenadas planas E: 983050,600 m y N: 1015972,090 m colindando con ZONA PROTECTORA DE MORICHAL. **OESTE:** Del Punto 05 se continúa en dirección noroeste en línea quebrada, en una distancia de 1609,56 m, hasta encontrar el punto 06 de coordenadas planas E: 982136,440 m y N: 1017245,520 m colindando con la ZONA PROTECTORA DE MORICHAL. Se continua en dirección noreste en línea quebrada en una distancia de 1998,23 m, hasta encontrar el punto 01, colindando con el posible ocupante CAMILO ANDRES PRIETO ROCHA ocupación "LA BENDICIÓN" (según reconstrucción vectorial), y cierra

Conclusiones del análisis geográfico.

Luego del análisis del área solicitada y de su verificación a partir de la reconstrucción vectorial, se define que:

El predio denominado como *"**San Felipe",*** sobre el cual, el señor **Luis Ilvar Pulido Pinilla**, con cédula de ciudadanía **79.523.930**, ejerce ocupación, tiene un área reconstruida de **828 ha + 6901 m2**, se encuentra ubicada en un predio de mayor extensión denominado "El Porvenir", jurisdicción del municipio de Puerto Gaitán, Meta, específicamente, el predio *"**San Felipe",*** se encuentra inmerso en dos (2) predios denominados "El Pedregal" y "Mi Llanura", los cuales hacen parte de un total de cinco (5) grandes extensiones que se generaron en el año 2007, a partir del englobe de veintisiete (27) predios que inicialmente fueron adjudicados en la década de 1990 y posteriormente, mediante Resolución 6423 de julio 30 de 2014, fueron revocados y cancelados junto con los folios de matrícula inmobiliaria de los cinco (5) predios.

El predio denominado *"**San Felipe",*** sobre el cual ejerce ocupación el señor ***Luis Ilvar Pulido Pinilla**, con cédula de ciudadanía **79.523.930**, la cual ocupa un área* reconstruida *de **828 ha + 6901 m2**, queda plenamente identificada bajo los aspectos técnicos descritos en el presente documento.*

2.2. Análisis probatorio.

Dentro de los documentos valorados para resolver el presente asunto, se encuentran:

2.2.1. La solicitud de adjudicación.

La solicitud que aportó el señor **LUIS ILVAR PULIDO PINILLA** con la acción de tutela como radicada ante el extinto INCODER, no contiene radicado, fecha, ni número de solicitud, por lo que se procedió a consultar las bases de datos y archivos que reposan en la entidad. Luego de un proceso lago de búsqueda se logró encontrar un registro de la solicitud en cuestión dentro del expediente administrativo perteneciente a la también solicitante MARTHA YANETH HERNANDEZ; sin embargo, el formato de solicitud hallado tampoco cuenta con número de expediente, numero radicado o constancia de haber sido presentada ante el extinto INCODER. No obstante, se procederá con el estudio de la solicitud allegada con la acción de tutela.

Que, de acuerdo con lo afirmado en la solicitud mencionada, se encuentra presentada a título individual, el predio objeto de solicitud es denominado *"**San Felipe**"*, con extensión aproximada de 841 hectáreas y ocupa y explota el predio desde el 13 de julio de 2010.

2.2.2. El Formulario de Ingreso de Sujetos de Ordenamiento-FISO.

La Agencia Nacional de Tierras establece el Formulario de Inscripción de Sujetos de Ordenamiento – FISO, en el marco de la implementación del Decreto Ley 902 del 29 de mayo de 2017 y la Resolución 740 de 2017, como instrumento para la inscripción de las personas y comunidades aspirantes y/o solicitantes de los programas de acceso y formalización de tierras; esto con la finalidad de registrar públicamente a los sujetos de ordenamiento social de la propiedad en el Registro de Sujetos de Ordenamiento – RESO.

Que el día 30 de julio del año 2018 se realizó el diligenciamiento del Formulario de Sujetos de ordenamiento- FISO No. 85152 a nombre del señor **LUIS ILVAR PULIDO PINILLA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.523.930.

Que, de acuerdo a la solicitud establecida en dicho formulario, el señor **LUIS ILVAR PULIDO PINILLA**, indicó que el nombre del predio es ***"San Felipe"***, que el predio ocupado tiene una extensión aproximada de 840 has ha, que habita y explota el predio desde el 05 de mayo de 2016 y no registra información en el campo de tiempo de ocupación.

2.2.3. El Certificado de la Junta de Acción Comunal Inspección El Porvenir.

Documento de fecha 20 de julio de 2018 a solicitud del interesado, en el cual se certifica que el señor **LUIS ILVAR PULIDO PINILLA** es miembro activo y habitante del centro Poblado de la inspección el Porvenir, desde 05 de mayo de 2016, marcando como tiempo de ocupación hasta la fecha "2 años y 5 meses" y cantidad aproximado en hectáreas de 840 Ha.

2.2.1. La Carta Venta de Finca

Documento que contiene fecha de 29 de mayo de 2016 y se encuentra suscrito por HERMOGENES GALINDO como vendedor y por **LUIS ILVAR PULIDO PINILLA** como comprador.

En este documento se realizan las siguientes declaraciones: *"(...) Segundo. El predio de que se trata fue adquirido, por posesión desde hace 2 años (…) **Cuarto.** El **comprador** declara que en la fecha recibe del **vendedor** el inmueble materia de esta venta del cual ya se encuentra ya en posesión. **Quinto**. El **vendedor** declara que el inmueble de que se trata es de su exclusiva propiedad y no lo ha vendido, ni enajenado antes a persona alguna, se halla libre de todo gravamen, censo, hipoteca, arrendamiento por escritura pública, embargo, pleito pendiente, limitaciones o condiciones resolutorias del dominio y no ha sido constituido en patrimonio de familia, también se encuentra a paz y salvo por toda clase de impuestos. (...)"*

2.2.2. Censo – Formato Cumplimiento Orden Judicial.

Censo que se realizó a los habitantes del PORVENIR, Puerto Gaitán, Meta, en cumplimiento de la Sentencia SU 426/2016.

Formulario No. 236 de fecha 18 de octubre de 2017, documento que contiene campo "como encontró y/o recibió el predio" y se indica como respuesta "2015 – 2 años", nombre del predio "La Portuguesa – San Felipe", 846 Has y no indica en este documento fecha desde la cual ocupa y explota el predio.

Resulta importante mencionar, que en el documento se encuentra como OBSERVACIÓN que:

"- *El señor dice que tiene medida que le hizo Incoder*
- *Dice que es predio para verano – son bajos*
- *No es beneficiario de la Sentencia*
- *No se hace caracterización agronómica (SIC) porque esta (SIC) inundado y no pudo llegar.* "

En atención a la información que contienen los documentos revisados y que obran en la Agencia Nacional de Tierras, se observa claramente que no existe congruencia en la información aportada por el señor **LUIS ILVAR PULIDO PINILLA** relacionada con la fecha desde la cual ocupa o habita el predio objeto de solicitud, ni el área del mismo.

2.2.3. Resolución No. 6423 de 2014 expedida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural- Incoder.

Con base en dicho acto administrativo se puede concluir que, en virtud de la revocatoria directa de los actos de adjudicación efectuados por el extinto Incoder, a través de la resolución 6423 de 2014, el predio ocupado el cual hace parte del predio de mayor extensión conocido hoy como *El Porvenir*, ubicado en el municipio de Puerto Gaitán, departamento del Meta, volvió al dominio de la Nación, es decir, que ostenta la condición de baldío para ser administrado por la máxima autoridad de tierras, hoy en día, La Agencia Nacional de Tierras.

Igualmente, de la resolución se evidencia la situación de tenencia indebida de la tierra producto de las veintisiete (27) adjudicaciones efectuadas con violación de las normas aplicables a la adjudicación de baldíos, la cual, al quedar plenamente demostrada, devino en la revocatoria de la totalidad de las titulaciones.

2.2.4. Informe Técnico Jurídico -ITJ.

Dentro de este documento preliminar se encuentra consagrada la información catastral y registral (FMI) de los predios objeto de solicitud. Igualmente, contiene una descripción y análisis de la situación de ocupación y naturaleza jurídica del fundo.

A partir de allí, y especialmente de los antecedentes registrales, queda demostrada la naturaleza privada que revestía los predios objeto de solicitud a partir de las resoluciones de adjudicación expedidas el extinto Incora durante los años 1992 a 1996 y hasta su revocatoria en el año 2014, a través de la señalada resolución No. 6423.

Igualmente, se puede establecer que en razón a la existencia de un título de dominio y su correspondiente inscripción en el Folio de Matricula Inmobiliaria de cada uno de los predios en cuestión, es un hecho aparente y, por tanto, conocido públicamente, que los mismos revestían la naturaleza de privados a partir de su titulación y registro. De allí se establece que la ocupación inicio en el momento en que los predios se encontraban bajo el dominio privado, producto de las titulaciones que hiciera el entonces Incora, y, que posteriormente fueron revocadas por el Incoder.

Así mismo, quedó establecido que la ocupación alegada se ejerce sin autorización de la ANT, sobre predios que se encuentra por fuera del régimen de ocupación y adjudicación ordinario a partir de la revocatoria de que trata la resolución No. 6423 de 2014.

Sumado a lo anterior, se tiene que el área ocupada por el solicitante excede por mucho la UAF definida por la Autoridad de Tierras para el predio El Provenir, circunstancia que, igualmente, pone de presente la ocupación indebida de conformidad con las disposiciones y consideraciones indicadas.

2.2.5. Documento preliminar de análisis predial-DPAP.

En dicho documento se encuentra consagrada la información catastral y registral, así como la situación jurídica del predio de que trata el numeral 1.3 del presente documento.

2.2.6. Informe Agronómico UAF predio *El Porvenir.*

Este informe consagra principalmente el resultado del cálculo de la UAF predial definida para el predio de mayor extensión en cuestión. De acuerdo a esto, se realizaron 4 cálculos de UAF predial tipo, esto es, dos UAFs para el área útil del predio, que corresponde al uso de suelo Agropecuario y que a su vez se divide en dos según las Unidades Cartográficas de *suelos; y por otro lado, una UAF para el uso de suelo Forestal Protector-Productor y otra UAF para el uso del suelo Forestal Protector, las cuales se detallan en el Informe Agronómico sobre Determinación Unidad Agrícola Familiar Predial, Predio El Porvenir, Puerto Gaitán, Meta.* Así, las condiciones especiales de manejo para los suelos, en combinación con la ubicación del predio, las vías de acceso, las vías de comercialización de los productos, el transporte fluvial y los costos de mano de obra, convergen en el cálculo de la UAF predial para el predio El Porvenir, razón por la cual, como se dijo anteriormente, resultaron 4 áreas de UAF, que comprenden: cincuenta y cinco hectáreas más cinco mil novecientos ochenta y cuatro metros cuadrados (55 ha + 5984 m2) para el uso de suelo Agropecuario y Unidad Cartográfica AVD; ochenta y siete hectáreas más siete mil quinientos setenta y siete metros cuadrados (87 ha + 7577 m2) para el uso de suelo Agropecuario y Unidad Cartográfica RVK y VVC; cincuenta y cinco hectáreas más dos mil quinientos ochenta y ocho metros cuadrados (55 ha + 2588 m2) para el uso de suelo Forestal Protector-Productor y; cuarenta y cuatro hectáreas más dos mil setecientos veintidós metros cuadrados (44 ha + 2722 m2) para el uso de suelo Forestal Protector.

2.3. Análisis de la situación particular.

De conformidad con el análisis de los documentos y pruebas que hacen parte de la presente actuación, esta Subdirección procede a valorar la solicitud de adjudicación elevada por el peticionario, a fin de establecer si ésta tiene o no la vocación de prosperar, y así determinar el trámite que debe ser impartido de acuerdo con el procedimiento aplicable.

2.3.1. Ocupaciones iniciadas con anterioridad a la resolución No. 6423 de 2014.

Teniendo en cuenta la naturaleza privada que ostentaban los predios objeto de revocatoria directa con anterioridad a la expedición de la resolución Incoder No. 6423 de 2014 soportada en un total de veintisiete (27) actos administrativos de adjudicación de baldíos a persona natural expedidos entre los años 1992 a 1996, se colige que toda ocupación alegada con anterioridad a dicho intervalo resulta inexistente a efectos de acreditar requisitos para lograr una eventual adjudicación; toda vez que tales "ocupaciones", inicialmente recaían sobre lo que entonces se encontraba dentro del dominio privado, y no sobre fundos que tuvieran la naturaleza de baldíos, lo cual implica que su tratamiento jurídico debe ser en principio el de la posesión[13] y no el de la ocupación.[14]

Por consiguiente, todas las "*ocupaciones"* respecto de las cuales se alegue que se produjeron en el período de tiempo señalado, esto es, durante la vigencia de los veintisiete (27) títulos, hasta su revocatoria, deben ser consideradas como posesiones y, por tanto, no es posible que sean

---

[13]Código Civil. artículo 762. Definición de **posesión**. La **posesión** es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal, tenga la cosa por sí mismo, o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él. El poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no justifique serlo.

14ARTICULO 685. <CONCEPTO DE OCUPACIÓN>. Por la ocupación se adquiere el dominio de las cosas que no pertenecen a nadie, y cuya adquisición no es prohibida por las leyes o por el derecho internacional.

reconocidas por la autoridad de tierras al momento de valorar las solicitudes de adjudicación de baldíos que de allí se deriven.

Adicionalmente, esto permite concluir que tales posesiones se gestaron y/o mantuvieron bajo el conocimiento o permisión de los titulares del derecho real de dominio de los fundos cuyos actos irregulares de adjudicación fueron revocados por el extinto Incoder; o bien, lo hicieron bajo la aquiescencia de terceros que en su momento ejercían explotación sobre los mismos, como es el caso de la empresa ganadera *La Cristalina*, de propiedad de la familia del fallecido Víctor Carranza.

Ello se extrae de las afirmaciones hechas por el solicitante, quien asevera que su ocupación inició en el año 2010, cuando es claro que los predios de que trata la solicitud se encontraban en manos de particulares.

Dicho escenario se adecua a uno de los presupuestos normativos contenidos en el ya mencionado parágrafo segundo del artículo 74 de la Ley 160 de 1994, el cual establece:

> **«PARÁGRAFO 2o.** No podrá alegarse derecho para la adjudicación de un baldío, cuando se demuestre que el peticionario deriva su ocupación, del fraccionamiento de los terrenos u otro medio semejante, efectuado por personas que los hayan tenido indebidamente, o cuando se tratare de tierras que tuvieren la calidad de inadjudicables.**»** (Se subraya)

Lo anterior obedece a que como quedó demostrado, los beneficiarios de las (27) resoluciones de adjudicación revocadas por el Incoder no tenían derecho a las titulaciones, por cuanto no cumplían con los requisitos de ocupación y explotación que exigía la ley para dicho momento, es decir, se produjeron con violación de las normas que regulaban la adjudicación de baldíos, conllevando, por tanto, una tenencia indebida de la tierra.

Esto sumado a las maniobras de acumulación indebida de tierra encubiertas a través de los cinco (5) englobes de los terrenos que agruparon la totalidad de los predios adjudicados, situaciones que quedaron suficientemente acreditadas en la resolución de revocatoria directa proferida por el extinto Incoder.

Así las cosas, dado que la solicitud de adjudicación bajo estudio se fundamenta en una posesión que se deriva a su vez de la tenencia de estas áreas bajo las circunstancias indicadas, no está llamada a prosperar.

2.3.2. Ocupaciones iniciadas a partir de la resolución No. 6423 de 2014.

Ahora bien, en relación con el tiempo de ocupación ejercido a partir de la resolución de revocatoria directa No. 6423 de 2014; momento a partir del cual los predios objeto de revocatoria retornaron al dominio de la nación con carácter de baldíos, se debe recordar que tales ocupaciones tampoco dan lugar a una eventual adjudicación, pues, dichos predios no son susceptibles de ser ocupados libremente en virtud de su carácter de reservados, tal como se indicó líneas arriba.

Esto, como se expuso, tiene asidero en que uno de los efectos de la revocatoria directa, fue el de otorgar a los predios de *El Porvenir* la naturaleza de baldíos sustraídos de la posibilidad de ser ocupados libremente con la finalidad de pretender su adjudicación, pues, tales predios se encuentran exceptuados del régimen de ocupación ordinario, por constituirse en predios reservados producto de los efectos especiales otorgados por la revocatoria directa, y en todo caso en virtud de lo establecido en el señalado artículo 67 de la Ley 160 de 1994, modificado por la Ley 1728 de 2014.

Por tanto, el tiempo de ocupación ejercido por el (la) solicitante a partir de la mencionada Resolución No. 6423, tampoco da lugar a la adjudicación invocada, toda vez, que se encuadra dentro de las ocupaciones consideradas como indebidas por ejercerse sobre baldíos que hoy en día se encuentran bajo el dominio y administración de la Agencia Nacional de Tierras, reservados para los programas de acceso a tierra en favor de una población específica, en los términos establecidos en las normas indicadas, en concordancia, con los considerandos establecidos en la sentencia **SU-426 de 2016** de la Corte Constitucional.

Adicionalmente, se debe recordar que, de acuerdo las disposiciones legales citadas, el artículo 25 del Decreto Ley 902 de 2017, se estableció la reserva especial de todos los baldíos de la Nación a partir del 29 de mayo de 2017.

2.3.3. Conclusiones.

En síntesis, luego de las consideraciones expuestas y del análisis realizado, se colige que la ocupación ejercida por el peticionario **LUIS ILVAR PULIDO PINILLA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.523.930, no es de aquellas que permitan o den lugar al reconocimiento de derechos de propiedad rural, es decir, posible de titulación; toda vez que como se analizó, la misma tuvo inicio en el momento que los predios objeto de estudio se encontraban bajo el dominio privado producto de títulos expedidos en forma irregular (año 2010), lo cual conlleva que la *ocupación* alegada se derive de una tenencia indebida de la tierra ejercida por particulares, materializando de esta forma el postulado normativo establecido en el parágrafo artículo 74 Ley 160 de 1994.

En tal virtud, toda solicitud de adjudicación que tenga origen o se derive de la titulación irregular de las áreas de qué trata la señalada resolución de revocatoria 6423 de 2014, debe ser desestimada, en tanto que uno de los Principios Generales del Derecho establece que "*Lo accesorio sigue la suerte de lo principal.*"

Concebirlo de otra manera significaría abrir la puerta para que se entregue el dominio de la tierra a personas que derivan su pretensión agraria de situaciones irregulares como la tenencia indebida de las áreas reclamadas, lo cual atentaría contra los postulados esenciales de un Estado Social de Derecho.

En consecuencia, se tiene que la *ocupación* alegada no permite el reconocimiento de derechos (adjudicación), por cuanto, como se indicó, esta se originó como una posesión ejercida sobre predios que se encontraban irregularmente bajo el dominio privado; escenario que a la luz de ordenamiento jurídico colombiano no tiene la capacidad de producir efectos para adquirir el dominio de bienes baldíos.

Sumado a esto, se debe reiterar que debido a que la ocupación aludida se ejerce actualmente sobre predios que ostentan la condición de reservados y, al no contar con el consentimiento de la autoridad de tierras, dicha ocupación es a todas luces indebida[15], susceptible de ser recuperada con destino a los programas de acceso a tierra dispuesto por el Gobierno Nacional en los términos establecidos en artículo 76 de la Ley 160 de 1994, modificado por el artículo 102 de la Ley 1753 de 2015, en concordancia con las consideraciones establecidas en la sentencia **SU-426 de 2016** proferida por la Corte Constitucional.

Adicionalmente, se encuentra plenamente probado que las áreas ocupadas por el solicitante exceden ostensiblemente la UAF definida para el predio EL Provenir.

Así las cosas, al no encontrase acreditadas las condiciones y presupuestos que permitan llevar a cabo una eventual titulación del área reclamada, la Agencia Nacional de Tierras en cabeza de la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas, debe desestimar la solicitud de adjudicación y, por ende, abstener de continuar con el presente procedimiento único de ordenamiento social de la propiedad, con ocasión de la solicitud presentada por el señor **LUIS ILVAR PULIDO PINILLA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.523.930.

2.4. El procedimiento aplicable.

Dicho lo anterior, es momento de hacer unas breves consideraciones en relación con las normas procedimentales aplicables a la presente actuación.

---

15 El artículo 48 de la Ley 160 de 1994, el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (hoy Agencia Nacional de Tierras, según lo establece el artículo 38 del Decreto Ley 2363 de 2015), previa obtención de la información necesaria adelantará entre otros, los procedimientos tendientes a determinar cuándo hay indebida ocupación de terrenos baldíos.

El Decreto Ley 902 de 2017 señala que, a partir de su vigencia, toda solicitud de acceso a tierra debe ser tramitada bajo las reglas allí contenidas; no obstante, en el artículo 27 se establece la regla para el tratamiento de las solicitudes que se encontraban en trámite al momento de su entrada en vigencia (29 de mayo de 2017), de la siguiente manera:

> **«Artículo 27.** Solicitudes en proceso. En los casos en que el ocupante haya elevado su solicitud de adjudicación con anterioridad a la entrada en vigencia del presente decreto ley se aplicará en su integridad el régimen más favorable para lograr la adjudicación.**»**

Este artículo consagra la posibilidad de aplicación de la ultraactividad de la norma, la cual supone que las ocupaciones iniciadas con anterioridad al 29 de mayo de 2017 pueden alternativamente ser resueltas con las normas de la Ley 160 de 1994, o con las del Decreto Ley 902 según se identifique cuál de ellas resulta más favorable al ocupante. No obstante, esta última regla exigirá que la ocupación se realice de manera regular, es decir, no pueden pretenderse la aplicación del régimen de transición cuando las ocupaciones en el marco de la Ley 160 de 1994 estuvieren llamadas a ser calificadas como indebidas.

Lo anterior implica que la presente solicitud no pueda ser tramitada bajo las reglas procedimentales vigentes al momento en que inicio la ocupación deprecada, esto es, la Ley 160 de 1994, toda vez que para la aplicación a la figura de transición de que trata el artículo 27 del Decreto Ley 902 de 2017, es necesario que la ocupación demostrada sea de aquellas que pueden dar lugar a una posible adjudicación, situación que como se advirtió, no ocurre en el caso bajo estudio.

Así las cosas, aun cuando la ocupación alegada tuvo inicio en vigencia del procedimiento de adjudicación contenido en la Ley 160 de 1994 y sus normas reglamentarias; debido a que la ocupación ejercida por el (la) solicitante es de las consideradas como indebidas, no es posible aplicar las disposiciones contenidas en la Ley 160 de 1994 para la adjudicación de este tipo de bienes, sino que, por el contrario, se debe hacer uso del Procedimiento Único contenido en el Decreto Ley 902 de 2017.

Esto se acompaña con los postulados establecidos en el señalado Decreto Ley 902 de 2017, los cuales, indican:

> **«Artículo 40. Procedencia del procedimiento único en zonas focalizadas.** El Procedimiento Único para implementar los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural, operará de oficio por barrido predial masivo en las zonas focalizadas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y de conformidad con los criterios adoptados por la Agencia Nacional de Tierras para la intervención en el territorio en los términos del Decreto 2363 de 2015, dando prioridad a los territorios destinados para la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), por el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) y las áreas donde existan Zonas de Reserva Campesina, atendiendo los planes de desarrollo sostenible que se hayan formulado.
>
> La gestión de la Agencia Nacional de Tierras atenderá en todo momento los propósitos de la Reforma Rural Integral en materia de acceso y formalización de tierras.
>
> (…)**»**

Y más adelante dispone:

> «**Artículo 58. Asuntos a tratar a través del Procedimiento Único**. A través del Procedimiento Único se adelantarán los siguientes asuntos:
>
> 1. Asignación y reconocimiento de derechos de propiedad sobre predios administrados o de la Agencia Nacional de Tierras.
>
> 2. (...)**»**

Lo anterior tiene plena aplicabilidad, indistintamente del régimen jurídico al que el solicitante se haya acogido voluntariamente.

En este orden de ideas, el procedimiento administrativo que rige la presente actuación es el señalado Procedimiento Único previsto para el reconocimiento de derechos de conformidad con el artículo 60 y siguientes del Decreto Ley 902 de 2017, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución ANT No. 740 de 2017, adicionada por la Resolución No. 3234 de 2018 y, modificada por la Resolución No.12096 del 06 de agosto de 2019 y la Resolución ANT No. 915 de 2020. En lo

no contemplado por estas disposiciones, se aplicarán las demás normas vigentes que regulan la materia, especialmente, en lo relacionado con la adjudicación de baldíos.

Igualmente, en lo no reglado para el desarrollo del procedimiento especial de que tratan las normas antes señaladas, le es aplicable la cláusula general establecida en el artículo **34** del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la cual señala que los procedimientos administrativos se sujetarán a las reglas contenidas en dicho Código, sin perjuicio de los procedimientos administrativos regulados en normas especiales y, en lo no previsto en ellos, se rige por la parte primera del mismo CPACA[16].

En consecuencia, con el fin de resolver el presente asunto, esta Agencia dará aplicación a la figura contenida en el artículo 22 de la Resolución No. 12096 del 06 de agosto de 2019, la cual, modificó el artículo primero de la Resolución No. 3234 de 2018, que, a su vez, adicionó el artículo 33B de la Resolución No. 740 de 2017, en los siguientes términos:

> «**Artículo 22.** Modifíquese el artículo 33B de la Resolución 740 de 2017, adicionado por el Artículo 1 de la resolución 3234 de 2018, el cual quedará así:
>
> **Artículo 33B. Acto administrativo de archivo.** Cuando el informe Técnico Jurídico Preliminar concluya la inexistencia de los supuestos de hecho o de derecho para dar inicio a alguna de las pretensiones agrarias señaladas en los numerales 3,4,5,6, 7, 8 y 9 del artículo 58 del Decreto Ley 902 de 2017, la Subdirección pertinente expedirá un acto administrativo que ordenará el no dar inicio a la segunda parte de la fase administrativa del Procedimiento único de Ordenamiento Social de la Propiedad para el respectivo inmueble o solicitud.
>
> En tal sentido, respecto de esos casos, no se proferirá el acto administrativo de apertura de que trata el literal c) del artículo 60 del Decreto- Ley 902 de 2017, y contra el acto que ordena el no inicio procederá el recurso de reposición y en subsidio el de apelación conforme a las reglas generales definidas en la Ley 1437 de 2011.
>
> **Cuando la solicitud verse sobre asignación o reconocimiento de derechos y el informe Técnico Jurídico concluya su improcedencia, también se expedirá un acto administrativo que ordenará el no inicio de la segunda parte de la fase administrativa, y contra el cual también procederá el recurso de reposición en subsidio el de apelación.** (…)» (Negrillas fuera del texto original)

2.5. De la recuperación de las áreas indebidamente ocupadas

Que de acuerdo con lo expuesto, ni el tiempo de las ocupaciones ejercidas con anterioridad a la expedición de la Resolución 6423 de 2014, ni el contabilizado a partir de allí, tienen la potencialidad de demostrar el requisito de ocupación debida exigido en la Ley, pues, atendiendo la presunción de legalidad de los actos administrativos, cualquiera de dichas *ocupaciones* se gestó sobre lo que entonces eran predios que se encontraban bajo el dominio privado, bajo el consentimiento y/o aquiescencia de los entonces adjudicatarios o de los terceros usufructuarios; o, bien, se produjeron sobre baldíos con la condición de reservados para los programas de acceso a tierra en favor de la población vulnerable. En ambos casos, la medida de corrección necesaria debe ser la recuperación del área ocupada en forma indebida.

Esto tiene como objetivo que la autoridad de tierras adelante los correspondientes procedimientos de ordenamiento social de la propiedad que permitan la adjudicación de los predios de manera ordenada y equitativa, evitando que se repita el fenómeno de concentración de tierra allí acaecido desde al siglo pasado. Esto además permitirá el cumplimiento integral de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional a través de la sentencia SU-426 de 2016.

En tal orden, la Agencia Nacional de Tierra debe disponer de los mecanismos legales otorgados para la recuperación material de aquellas áreas objeto de revocatoria directa a través de la resolución No. 6423 de 2014, expedida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Predio *El Porvenir)*, y que luego del análisis correspondiente, se concluya que se encuentran ocupadas de forma indebida. Circunstancia que es visible en el caso bajo estudio.

---

[16] Ver Ley 1437 de 2011 *"Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo"*

Así las cosas, esta Subdirección remitirá copia de la presente actuación a las dependencias encargadas, para que, en el marco de sus funciones, y, en aplicación de lo dispuesto en la Resolución No. 6423 de 2014 proferida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural- Incoder y las disposiciones legales aplicables, adelanten el procedimiento administrativo correspondiente que conduzca a la recuperación material de las áreas ocupadas indebidamente dentro del predio de mayor extensión conocido actualmente como *El Porvenir,* Puerto Gaitán, Meta.

2.6. e la buena fe y el reconocimiento de mejoras.

Como punto de partida, debe recordarse que el bien objeto de análisis es considerado baldío[17], lo que indica de forma indefectible que detenta las características propias de los mismos, siendo inembargable, imprescriptible e inalienable.[18]

Así, una vez establecida la condición de indebida que reviste la ocupación alegada por el solicitante, procede esta Subdirección a estudiar el tratamiento que debe darse a las mejoras efectuadas dentro del área objeto de recuperación material, frente al principio de buena fe constitucional.

Al tenor del postulado de buena fe contenido en el artículo 83 de la Constitución Política, el cual establece que "*las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas*."

De acuerdo con lo anterior, la H Corte Constitucional definió el principio de buena fe en materia de ocupación y adjudicación de terrenos baldíos, en los siguientes términos:

> «La buena fe podría definirse como la convicción plena que tiene el interesado de estar ocupando el bien legítimamente, esto es, de no estar obrando en contra de la Constitución ni de la ley. Entonces, si la buena fe se presume, el ocupante de un terreno baldío o quien se pretenda dueño bajo esa condición, no tiene por qué entrar a demostrar ésta; sin embargo, como tal presunción es de carácter legal, puede ser desvirtuada o impugnada por el Incora o cualquiera otra persona, en cuyo caso sólo a ellos corresponde probar plenamente lo contrario, es decir, que quien viene ocupando el baldío lo detenta de mala fe. »[19]

En este orden de ideas, la presunción de la buena fe es el eje central que debe ser tenido en cuenta por la autoridad al momento de estudiar el cumplimiento de los requisitos que acrediten los particulares para acceder a la titulación de baldíos; no obstante, como lo señala el máximo Tribunal Constitucional, dicha presunción, al no ser *iuris tantum*, admite prueba en contrario. De ahí que corresponda a la autoridad de tierras estudiar la calidad de la referida presunción en el presente caso.

En consonancia con lo anterior, el Código Civil Colombiano en su artículo 768 regula el postulado de buena fe en la posesión, de la siguiente manera:

> «**ARTICULO 768**. La buena fe es la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos exentos de fraudes y de todo otro vicio.
>
> Así, en los títulos traslaticios de dominio, la buena fe supone la persuasión de haberse recibido la cosa de quien tenía la facultad de enajenarla y de no haber habido fraude ni otro vicio en el acto o contrato.
>
> Un justo error en materia de hecho, no se opone a la buena fe.
>
> Pero el error, en materia de derecho, constituye una presunción de mala fe, que no admite prueba en contrario.»

Ciertamente, dentro del presente trámite se pudo establecer que la ocupación alegada y ejecutada por el peticionario no es de aquellas que permita acreditar el requisito para acceder a la titulación de baldíos. Esto se debe en parte a que la misma se originó en el momento que los predios

[17] Ibídem 2
[18] Ver entre otras, Sentencia T-580 y 18/09/17, Corte Constitucional.
[19] Sentencia C-097 de 1997. M.P. Carlos Gaviria Díaz. Expediente No. D-910

ocupados tenían la naturaleza de privados, lo cual implica que no se haya configurado la figura de la ocupación de baldíos, sino de la posesión, como se explicó líneas arriba.

Como es sabido, la ocupación es calificada como un hecho que da lugar a determinadas situaciones jurídicas. Tratándose de bienes inmuebles, está solo puede configurarse cuando se trata de terrenos baldíos. La ocupación se materializa mediante la apropiación material de un área a través de hechos de aprovechamiento económico incluidas las efectuadas por mujeres bajo la denominación de economía del cuidado.

Por su parte, la posesión es un fenómeno jurídico que se concreta a través del hecho de ejercer el aprovechamiento económico de un predio de propiedad privada. A diferencia de la ocupación, esta no se realiza sobre terrenos baldíos, y no exige que las acciones se realicen de manera directa, es decir, que se puede ser poseedor a través de un tercero. La posesión puede ser regular si fue adquirida con justo título (venta, permuta, donación, sentencia) y de buena fe, cuando hay conciencia que el acto jurídico no está viciado, o que no se cometió algún fraude (Artículo 764 del Código Civil) La posesión es irregular cuando se carece o de justo título o de buena fe. (Artículo 764 del Código Civil).

En tal virtud, y dado que el solicitante deriva su solicitud de adjudicación de la posesión ejercida sobre terrenos titulados irregularmente a particulares por el Incora en los años 90, no es del resorte de la Agencia Nacional de Tierras establecer si dicha posesión se ejecutó con justo título o de forma irregular; toda vez que al ser en su momento predios de naturaleza privada, escapa a la competencia de la ANT.

Al respecto, para referirse al reconocimiento y pago de mejoras realizadas por el poseedor , el inciso 5 del artículo 966 del Código Civil Colombiano, establece:

> «**ARTICULO 966. ABONO DE MEJORAS ÚTILES** El poseedor de buena fe, vencido, tiene asimismo derecho a que se le abonen las mejoras útiles, hechas antes de contestarse la demanda.
>
> (…)
>
> El poseedor de mala fe no tendrá derecho a que se le abonen las mejoras útiles de que habla este artículo.
>
> Pero podrá llevarse los materiales de dichas mejoras, siempre que pueda separarlos sin detrimento de la cosa reivindicada, y que el propietario rehúse pagarle el precio que tendrían dichos materiales después de separados.»

Por su parte, en relación con las mejoras voluptuarias, señala:

> «**ARTICULO 967. MEJORAS VOLUPTUARIAS.** En cuanto a las mejoras voluptuarias, el propietario no será obligado a pagarlas al poseedor de mala ni de buena fe, que sólo tendrán con respecto a ellas el derecho que por el artículo precedente se concede al poseedor de mala fe, respecto de las mejoras útiles.
>
> Se entienden por mejoras voluptuarias las que sólo consisten en objetos de lujo y recreo, como jardines, miradores, fuentes, cascadas artificiales y generalmente aquellas que no aumentan el valor venal de la cosa, en el mercado general, o sólo lo aumentan en una proporción insignificante.»

Y concretamente, respecto a la buena o mala fe del poseedor, indica:

> «**ARTICULO 969. BUENA O MALA FE DEL POSEEDOR**. La buena o mala fe del poseedor se refiere, relativamente a los frutos, al tiempo de la percepción, y relativamente a las expensas y mejoras, al tiempo en que fueron hechas»

Así las cosas, de conformidad con la legislación colombiana, el posible reconocimiento de las mejoras hechas por el poseedor (solicitante) sobre los que en su momento eran predios del dominio privado, debe ser reclamado ante los entonces titulares del derecho real de dominio[20], es decir, sobre los que tenían en su poder tales fundos. Esto deberá ser tramitado bajo las normas que regulen el título correspondiente a través del cual se originó tal posesión, en caso de existir.

[20] Artículo 739 y siguientes del Código Civil Colombiano

Ahora bien, a partir de la revocatoria directa de las veintisiete (27) titulaciones realizadas por el Incora, momento en que los terrenos retornaron al dominio de la nación con carácter de baldíos; toda ocupación ejercida sin autorización de la autoridad de tierras se torna indebida, tal como se indicó.

En este sentido, ya que cada una de las etapas propias de la actuación administrativa de revocatoria directa que concluyó con la expedición de la Resolución No. 6423 de 2014 fueron debidamente publicitadas e inscrita a través de la oficina de registro de instrumentos públicos dentro los folios de matrícula inmobiliaria de los predios en cuestión, no puede alegarse un desconocimiento de la actuación a través de la cual se llevó a cabo la revocatoria de los títulos expedidos en forma irregular, ni tampoco de las normas que les atribuyen la condición de reservados, susceptibles de ser destinados para los programas de acceso a tierra.

De allí que no puede predicarse la buena fe en la ocupación ejercida por el solicitante; toda vez que el mismo no puede alegar el desconocimiento de las actuaciones administrativas y de los actos administrativos debidamente publicitados e inscritos en el correspondiente registro público, ni mucho menos, argumentar un desconocimiento de la Ley para justificar una ocupación ejercida de manera indebida.

Lo anterior guarda consonancia con lo establecido en el artículo 679 del Código Civil, que señala:

> «**ARTÍCULO 679 PROHIBICIÓN DE CONSTRUIR EN BIENES DE USO PÚBLICO Y FISCALES.** Nadie podrá construir, sino por permiso especial de autoridad competente, obra alguna sobre las calles, plazas, puentes, playas, terrenos fiscales, y demás lugares de propiedad de la Unión.»

Se debe recordar que a la luz del artículo 675 del mismo Código Civil, los bienes baldíos se consideran de propiedad de la *Unión y bienes fiscales.*

Así las cosas, dado que el solicitante tenía pleno conocimiento de la condición que adquirieron los predios objeto de estudio a partir de la ejecutoria de la revocatoria directa, se hace evidente que incurrió en la prohibición legal citada, puesto que el mismo no cuenta con autorización expresa por parte de la Autoridad de Tierras para ocupar el predio, ni mucho menos, para efectuar obras o mejoras sobre los predios baldíos objeto de estudio. Por el contrario, desde que la ANT asumió la administración de estos baldíos, ha ejecutado permanentes actuaciones con el fin de advertir a los particulares sobre la condición de los predios, las limitaciones y posibles consecuencias e implicaciones de efectuar negocios jurídicos, mejoras e inversiones sobre los fundos baldíos del dominio de la nación.[21]

En consecuencia, la Agencia Nacional de Tierras no está en posibilidad legal de reconocer ningún tipo de mejoras efectuadas cuando los predios en comento ostentaban la calidad de privados, y, mucho menos, a partir de que estos retornaron al dominio de la Nación con carácter de baldíos al momento de ejecutoriarse las revocatorias directas, toda vez que como quedó establecido, la ocupación se ejerce, a partir de allí, de manera indebida.

2.7. El Registro de Sujetos de Ordenamiento- RESO.

Por último, se procede a realizar unas breves consideraciones sobre la solicitud de ingreso al Registro de Sujetos de Ordenamiento-RESO elevada por el peticionario a través del FISO.

De conformidad con el artículo 11 y siguientes del Decreto Ley 902 de 2017; los artículos 27 y 113 de la Resolución 12096 de 2019, en concordancia con el artículo 3 y siguientes de la Resolución ANT No. 915 de 2020, la Subdirección de Sistema de Información de Tierras es la dependencia competente para valorar los requisitos particulares del aspirante y resolver sobre su ingreso al Registro de Sujetos de Ordenamiento-RESO.

Conforme lo anterior, se evidencia a través del aplicativo del Sistema Integrado de Tierras "SIT" de la ANT, que la Subdirección de Sistemas de Información de Tierras realizo la valoración y calificación y, en consecuencia, profirió Resolución No. 4550 del 18 de junio de 2020, mediante la cual resuelve incluir al señor **LUIS ILVAR PULIDO PINILLA**, identificado con cédula de ciudadanía

[21] Dentro de los actos de administración se encuentran: visitas de campo, vallas informativas, comunicaciones, reuniones y mesas de trabajo con la comunidad ocupante.

No. 79.523.930 en el Registro de Sujetos De Ordenamiento – RESO, en la categoría de solicitante de acceso a tierras a TITULO GRATUITO, asignándole un puntaje de Setecientos Noventa y Siete Puntos con Setenta y Cuatro Centésimas (797,74). Dentro del expediente obra copia de la señalada resolución.

No obstante, aun cuando en principio se observa que el solicitante cumple con los requisitos personales que establece el Decreto Ley 902 de 2017; el numeral 5 del artículo 4º del mismo Decreto, indica que para ser sujeto de acceso a tierra y formalización, se requiere, entre otras cosas*: "No haber sido declarado como ocupante indebido de tierras baldías o fiscales patrimoniales o no estar incurso en un procedimiento de esta naturaleza. En este último caso se suspenderá el ingreso al RESO hasta que finalice el procedimiento no declarando la indebida ocupación."*

En consecuencia, y de conformidad con lo expuesto en el presente acto administrativo, esta Subdirección solicitara a la Subdirección de Sistemas de la Información, suspender el ingreso al **RESO** del aspirante, hasta tanto se resuelva sobre la condición indebida que recae sobre la ocupación ejercida o se suscriba el correspondiente acuerdo de regularización.

3. Síntesis de las medidas a adoptar.

Las decisiones a adoptar por parte de la Subdirección de Acceso a tierras en Zonas Focalizadas, se efectuaran de conformidad con las funciones y competencias otorgadas a la Agencia Nacional de Tierras a través del Decreto Ley 2363 de 2015, donde se ratificó lo dispuesto en el Decreto Ley 902 de 2017, es decir, la responsabilidad de implementar Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad y la Ejecución del Procedimiento Único de Ordenamiento Social de la Propiedad con el fin de intervenir el territorio rural para gestionar y solucionar los conflictos y situaciones indeseadas frente al acceso, uso y tenencia de la tierras.

3.1. En relación con las solicitudes de adjudicación.

Resulta importante traer a colación las disposiciones que ya se han mencionado anteriormente y que permiten establecer la decisión que se adoptara en el caso concreto.

Es así que la Agencia Nacional de Tierras expidió la Resolución No.12096 del 16 de agosto de 2019 "*Por la cual se modifican, adicionan o derogan algunas disposiciones de la Resolución 740 de 2017";* normatividad que en su artículo 22º, modifica el artículo 33B de la Resolución 740 de 2017, adicionado por el artículo 1 de la Resolución 3234 de 2018, disponiendo el mecanismo en los casos que no exista viabilidad para proceder con la ruta de asignación o reconocimiento de derechos de propiedad rural (adjudicación de baldíos), decisión, que, como es lógico, debe ser declarada mediante acto administrativo.

En tal virtud, de conformidad con las consideraciones expuestas, la ANT ordenará el no inicio (negación) de la ruta de asignación de derechos en los términos de la normatividad indicada, con lo cual se entienden resueltas las solicitudes de adjudicación bajo estudio.

3.2. En relación con la ocupación y la recuperación material de las áreas.

Adicionalmente debe tenerse en cuenta que como quedó establecido, sobre los predios objeto de solicitud recayó un procedimiento administrativo de revocatoria directa de titulaciones de baldíos indebidamente otorgados, por lo cual, los mismos retornaron al dominio de la Nación con carácter de baldíos; no obstante, en virtud de los efectos de la revocatoria, en con concordancia con la normatividad agraria ampliamente citada dentro de esta providencia, dichos predios se encuentran excluidos del régimen de ocupación y adjudicación ordinario. Esto debido a que, por menester de la ley, los mismos se encuentran reservados para los programas de acceso a tierra que destine la Autoridad correspondiente, para el caso, la Agencia Nacional de Tierras.

Igual importancia reviste el parágrafo 2º de este artículo, que indica la imposibilidad de alegar derecho para la adjudicación de un baldío al demostrarse que la ocupación es derivada del fraccionamiento de terrenos u otro medio semejante, efectuado por personas que los hayan tenido indebidamente.

Así las cosas, ya que se observa que la ocupación ejercida por el solicitante es de aquellas llamadas a ser calificadas como indebidas, la Agencia Nacional de Tierras está en la obligación legal de corregir esta situación y, por tanto, debe llevar a cabo la recuperación material de las áreas de acuerdo con las disposiciones aplicables.

3.3. En relación con el Ingreso al RESO.

Tal como se indicó, el ingreso al **Registro de Sujetos de Ordenamiento-RESO** del solicitante debe quedar suspendido en los términos establecidos en el numeral 5 del artículo 4 del Decreto Ley 902 de 2017, hasta tanto se resuelva sobre la condición de indebida o suscriba el correspondiente acuerdo de regularización.

De acuerdo con lo anterior, se ordenará remitir el presente acto administrativo a la Subdirección de Sistemas de Información de Tierras para que proceda en los términos de la norma citada, dejando en suspenso el ingreso al RESO del aspirante.

Que, en mérito de lo expuesto, la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas de la Agencia Nacional de Tierras, en ejercicio de sus funciones,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el **NO INICIO** de la segunda fase de la parte administrativa del Procedimiento Único de Ordenamiento Social de la Propiedad para el reconocimiento de derechos de propiedad rural y, en consecuencia, negar las solicitudes de adjudicación presentadas por el señor **LUIS ILVAR PULIDO PINILLA** identificado con cédula de ciudadanía No. 79.523.930, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir copia de la presente actuación con destino a la Subdirección de Procesos Agrarios, a La Subdirección de Administración de Tierras de la Nación y a las demás dependencias que correspondan, para que en marco de sus funciones adelanten los procedimientos administrativos para llevar a cabo la recuperación material del área ocupada indebidamente por parte del señor **LUIS ILVAR PULIDO PINILLA** identificado con cédula de ciudadanía No. 79.523.930 o quien funja como ocupante actual, sobre el terreno ubicado en el predio de mayor extensión conocido actualmente como ***El Porvenir***, municipio de Puerto Gaitán, Meta, de acuerdo con las características contenidas en el numeral **2.1.2.** del presente acto, y, en todo caso, sobre el área sobre la que actualmente se ejerza la ocupación en los términos señalados dentro del presente acto.

PARÁGRAFO PRIMERO: Solicitar al ocupante del área en cuestión para que, a partir de la fecha de ejecutoria de esta providencia, restituya voluntariamente el lote de terreno indebidamente ocupado a la Agencia Nacional de Tierras -ANT, en su condición de entidad administradora de las tierras baldías de la Nación, lo que posibilitaría la asignación del puntaje adicional en el RESO de acuerdo a la Resolución 740 de 2018 y las normas que la modifican, adicionan o sustituyan.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Si el ocupante se negara a realizar la entrega voluntaria de los terrenos baldíos indebidamente ocupados, la Agencia Nacional de Tierras – ANT continuará con el procedimiento administrativo para la recuperación material de baldíos, para lo cual podrá solicitar la intervención de la autoridad de policía en los casos que se requiera.

ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia del presente acto administrativo a la Subdirección de Sistemas de la Información para que **SUSPENDA** el ingreso al **Registro de Sujetos de Ordenamiento**- **RESO** del señor **LUIS ILVAR PULIDO PINILLA** identificado con cédula de ciudadanía No. 79.523.930, hasta tanto se resuelva la condición de indebida que recae sobre la ocupación ejercida, o se suscriba el acuerdo de regularización correspondiente, de conformidad con las razones expuestas en el presente acto administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de este acto administrativo al señor **LUIS ILVAR PULIDO PINILLA** de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, o de ser el caso, por medios electrónicos, de conformidad con lo establecido en Decreto 491 de 2020. En el evento en que la notificación no pueda llevarse a cabo a través de medios electrónicos, se seguirá el procedimiento previsto en los artículos 68 y 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en concordancia con el artículo 48 del Decreto Ley 902 de 2017.

"Por la cual se resuelve una solicitud de adjudicación de baldíos dentro del predio de mayor extensión denominado *El Porvenir*, ubicado en el municipio de Puerto Gaitán, Meta y se ordenan otras actuaciones"

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el contenido del presente acto administrativo al Agente del Ministerio Público Agrario, y a los demás interesados, si los hubiere, por medios electrónicos de conformidad con lo establecido en Decreto 491 de 2020. En el evento en que la notificación no pueda llevarse a cabo a través de medios electrónicos, se seguirá el procedimiento previsto en los artículos 68 y 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en concordancia con el artículo 48 del Decreto Ley 902 de 2017.

ARTÍCULO SEXTO: Informar que contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante esta Subdirección y en subsidio el de apelación ante el Director de Acceso a Tierras de la ANT dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de la presente resolución, en los términos establecidos en la Ley 1437 de 2011, en concordancia con el artículo 22 y 23 del Decreto 2363 de 2015.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Informar del contenido el presente acto a las entidades que hacen parte de la Mesa Interinstitucional de seguimiento al cumplimiento de la sentencia **SU-426 de 2016** proferida por la Corte Constitucional, y, en especial, a la Defensoría del Pueblo, a la Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras, al Ministerio de Defensa Nacional, al Municipio de Puerto Gaitán y demás autoridades que se considere pertinente, a fin de activar las actuaciones que permitan el normal desarrollo de los procedimientos de que trata el presente acto administrativo. Lo anterior con base en el mecanismo del Sistema de Alertas Tempranas.

ARTICULO OCTAVO: Librar los oficios que correspondan.

ARTÍCULO NOVENO: Una vez ejecutoriada, archivar las solicitudes de adjudicación de que trata el presente acto.

ARTÍCULO DÉCIMO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá, D.C., a los 13 días de agosto del 2020.

JULIA ELENA VENEGAS GÓMEZ
Subdirectora de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas

Proyectó: Jhonattan A. Acevedo F. – Abogado contratista ANT
Erika Marcela Cuervo Moreno- Abogada contratista convenio FAO - ANT
Luisa Gómez - Abogada contratista convenio FAO - ANT
Dayana Marín - Ingeniera catastral contratista convenio FAO - ANT
Julián Guerrero - Ingeniero Topógrafo contratista convenio FAO - ANT
Liliana Moreno – Ingeniera Agrónoma contratista convenio FAO - ANT
Revisó: Jhonattan A. Acevedo F.- Abogado contratista ANT
Jairo Ríos- Ingeniero catastral contratista ANT
Mayra Figueroa - Ingeniera Agrónoma contratista ANT

CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL
PROCURADURÍA 48 JUDICIAL II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

Radicación SIGDEA N° E-2021-376106 de 27 de enero de 2021

Convocantes: LUIS ILVAR PULIDO
Convocado: AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS
Medio de control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

En Villavicencio (Meta), hoy 18 de marzo de 2021, siendo las 09:40 de la mañana, procede el Despacho de la Procuraduría 48 Judicial II para Asuntos Administrativos a celebrar **AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL** de la referencia, por medios virtuales sin presencialidad.—— El Despacho deja constancia que, con fundamento en la declaración de emergencia sanitaria realizada a nivel nacional y acorde a las medidas adoptadas desde el nivel central de nuestra institución en relación con los últimos acontecimientos de salubridad pública, en especial conforme lo establecido en las Resoluciones Nos. 127, 232, 259, 293 y 312 de 16 de marzo, 4 de junio, 1 , 15 y 29 de julio de 2020, respectivamente, el Procurador General de la Nación autorizó de manera temporal a los agentes del Ministerio Público a realizar audiencias extrajudiciales de manera no presencial en asuntos de lo contencioso administrativo", y en el Decreto legislativo 491 del 28 de marzo de 2020, por exclusivas razones de salud pública, esta audiencia se realiza en la modalidad no presencial a través de comunicación simultánea o sucesiva, utilizando como medios tecnológicos el correo electrónico y el teléfono celular. En consecuencia, conforme a las reglas para llevar a cabo la audiencia no presencial, cuyo documento fue debidamente notificado a las partes con antelación a la realización de la presente audiencia, la parte convocante a través del doctor **CARLOS DANIEL VARGAS BACCI** indica que el número celular para atender la diligencia es 350 – 2713973 y correo electrónico carlos.vargas.bacci@gmail.com. La entidad convocada AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS envía los datos de la apoderada que asistirá a la diligencia VIVIANA CAROLINA GRANADOS SALAMANCA viviana.granados@agenciadetierras.gov.co Y celular 3012305555 Momentos previos a ésta, el Despacho se puso en contacto con las apoderadas de las partes convocante y convocada, a fin de constatar su presencia virtual y disponibilidad para la diligencia, por lo cual se deja constancia que fue realizada llamada telefónica desde el celular personal del Procurador (3507276500), Inicialmente al dr **CARLOS DANIEL VARGAS BACCI**, identificado con la cédula de ciudadanía N° 17.321.780 y portador de la Tarjeta Profesional N° 84.436 del Consejo Superior de la Judicatura, al abonado celular No 350 – 2713973. De igual manera a la Dra **VIVIANA CAROLINA GRANADOS SALAMANCA,** identificada con la cédula de ciudadanía N° 52.792.802 d y portadora de la Tarjeta Profesional N°

158.803 del Consejo Superior de la Judicatura, constatando su presencia y disponibilidad, quien ha solicitado se le reconozca como apoderada de la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS en los términos indicados en el poder otorgado.. ——— Acto seguido el Procurador con fundamento en lo establecido en el artículo 23 de la Ley 640 de 2001 en concordancia con lo señalado en el numeral 4 del artículo 44 del Decreto 262 de 2000, declara abierta la audiencia e instruye a las partes sobre los objetivos, alcance y límites de la conciliación extrajudicial en materia contenciosa administrativa como mecanismo alternativo para la solución de conflictos. --- En este estado de la diligencia se citan las pretensiones de la parte convocante, sobre las cuales de manera expresa manifiesta su ratificación integral, sobre la forma como quedaron consignadas en la solicitud y fueron trasladadas a la entidad convocada, así:

DECLARACIONES Y CONDENAS: 1. Que se declare la Nulidad de la Resolución número 6925 del 13 de Agosto del año 2020, expedida por la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas de la Agencia Nacional de Tierras; suscrita por la Dra. JULIANA ELENA VENEGAS GOMEZ, "Por la cual se resolvió una solicitud de adjudicación de baldíos dentro del predio de mayor extensión denominado El Porvenir, ubicado en el Municipio de Puerto Gaitán – Meta y se ordenan otras actuaciones" y concretamente SE NIEGA la solicitud de adjudicación del señor LUIS ILVAR PULIDO PINILLA, quien se identifica con la cedula de ciudadanía número 79.523.930, sobre el predio denominado SAN FELIPE, ubicado en la vereda El Porvenir, municipio de Puerto Gaitán. 2. Que se declare la Nulidad del acto ficto o presunto que se consolidó producto del silencio administrativo negativo de la parte demandada al no responder dentro de los términos legales el recurso de apelación interpuesto contra la resolución 6925 del 2020 y con el cual se agotó la vía gubernativa. 3. Que se declare que el Señor LUIS ILVAR PULIDO PINILLA, cumple con todos los requisitos legales para que se le adjudique el predio denominado SAN FELIPE, ubicado en la vereda del El Porvenir, del municipio de Puerto Gaitán, departamento del Meta. 4. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones se ADJUDIQUE el predio baldío denominado "SAN FELIPE" al señor LUIS ILVAR PULIDO PINILLA, quien se identifica con la cedula de ciudadanía número 79.523.930, cuyos linderos específicos están determinados en la referida resolución 6925 del 13 de Agosto del año 2020 en los siguientes términos: "Se toma como punto de partida el punto 01 de coordenadas planas E: 982588,260 m y N: 1018985,880 m, ubicado en la esquina noroeste de la ocupación, sitio donde concurren las colindancias de los posibles ocupantes CAMILO ANDRES PRIETO ROCHA ocupación "LA BENDICIÓN" (según reconstrucción vectorial) y JULIO HUMBERTO PRIETO BRIÑEZ ocupación "LA CALAVERA" (según reconstrucción vectorial). NORTE: Del punto de partida 01 se continúa en dirección noreste en línea quebrada en una distancia de 2758,02 m, hasta encontrar el punto 02 de coordenadas planas E:

985051,410 m y N: 1019615,840 m colindando con el posible ocupante JULIO HUMBERTO PRIETO BRIÑEZ ocupación "LA CALAVERA" (según reconstrucción vectorial). ESTE: Del punto 02 se continúa en dirección sureste en línea quebrada, en una distancia de 1467,56 m, hasta encontrar el punto 03 de coordenadas E: 986350,99 m y N: 1019019,18 m el posible ocupante MIGUEL OVANDO RICO ocupación "EL TESORO" (según reconstrucción vectorial). Se continúa en dirección suroeste en línea quebrada, en una distancia de 4495,01 m, hasta encontrar el punto 04 de coordenadas planas E: 984475,380 m y N: 1015641,680 m colindando con el posible ocupante WILLIAM ORTIZ ocupación "SIN NOMBRE" (según plano topográfico). SUR: Del punto 04 se continúa en dirección noroeste en línea quebrada, en una distancia de 1462,72 m, hasta encontrar el punto 05 de coordenadas planas E: 983050,600 m y N: 1015972,090 m colindando con ZONA PROTECTORA DE MORICHAL. OESTE: Del Punto 05 se continúa en dirección noroeste en línea quebrada, en una distancia de 1609,56 m, hasta encontrar el punto 06 de coordenadas planas E: 982136,440 m y N: 1017245,520 m colindando con la ZONA PROTECTORA DE MORICHAL. Se continua en dirección noreste en línea quebrada en una distancia de 1998,23 m, hasta encontrar el punto 01, colindando con el posible ocupante CAMILO ANDRES PRIETO ROCHA ocupación "LA BENDICIÓN" (según reconstrucción vectorial), y cierra." Que hace parte del predio denominado EL PEDREGAL Y MI LLANURA con números de matrícula inmobiliaria Nos. 234 – 8015 y 234 – 8007. 5. Que se ordene la inscripción de la sentencia que acceda a las pretensiones de la demanda en el folio de matrícula inmobiliaria No. 234 – 8015 y 234 – 8007 de la oficina de Registro de Instrumentos públicos de Puerto López.

"------ **DECISIÓN DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN:** Seguidamente, se le concede el uso de la palabra a la apoderada de la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS con el fin de que se sirva indicar la decisión tomada por el comité de conciliación y defensa judicial de la entidad, en relación con la solicitud incoada y en uso de ella manifestó, que: *Que el Comité de Conciliaciones de la Agencia Nacional de Tierras, en sesiones de fecha diez (10) y diecisiete (17) de marzo de dos mil veintiuno (2021), analizó el siguiente casoEl Comité recomienda NO CONCILIAR, considerando que los actos administrativos demandados, fueron expedidos con el cumplimiento de todos los procedimientos y las normas establecidas para tal fin y en consecuencia gozan de toda legitimidad y ejecutoriedad....*--Se le concede el uso de la palabra al apoderado de la parte convocante para que manifieste su posición frente a lo expuesto por la parte convocada y en uso de ella manifestó: *Solicito respetuosamente se declare fallida la presente audiencia y se expida la constancia de rigor.* **MANIFESTACIÓN DEL MINISTERIO PUBLICO:** El Procurador Judicial, en atención a la falta de ánimo conciliatorio expreso de la parte convocada, conforme ha quedado consignado en precedencia, al tratarse de un audiencia virtual de aquellas autorizadas en la

Resolución 127 de 2020 del Sr Procurador General, la Resolución N° 193 del 30 de abril de 2020, Resolución N° 0232 del 04 de junio de 2020 y en el Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020, declara fallida la presente audiencia de conciliación, da por surtida la etapa conciliatoria y por terminado el procedimiento extrajudicial. En consecuencia, se ordena la expedición de la constancia de ley. No siendo más el objeto de la presente diligencia, en constancia de lo anteriormente expuesto, se firma el acta por el suscrito Procurador siendo las 09:56 de la mañana, de la cual se remite copia a las partes vía correo electrónico, así como de la constancia de ley a la parte convocante.

VICTOR JANUARIO HOYOS CASTRO
Procurador 48 Judicial II para Asuntos Administrativos

CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL
PROCURADURÍA 48 JUDICIAL II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

Radicación SIGDEA N° E-2021-376106 de 27 de enero de 2021

Convocantes: LUIS ILVAR PULIDO
Convocado: AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS
Medio de control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

En los términos del articulo 2.° de la Ley 640 de 2001, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 6.° del articulo 2.2.4.3.1.1.9 del Decreto 1069 de 2015[1], las Resoluciones Nos. 127, 232, 259, 293 y 312 de 16 de marzo, 4 de junio, 1 , 15 y 29 de julio de 2020, respectivamente, el Procurador General de la Nación autorizó de manera temporal a los agentes del Ministerio Público a realizar audiencias extrajudiciales de manera no presencial en asuntos de lo contencioso administrativo" y el artículo 9 del Decreto Legislativo No. 491 del 28 de marzo de 2020, el Procurador 48 Judicial II para Asuntos Administrativos de Villavicencio expide la siguiente,

CONSTANCIA:

1. Mediante apoderado, la parte convocante LUIS ILVAR PULIDO, presentó solicitud de conciliación extrajudicial el día 27 de enero de 2021, convocando a la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS

2. Las pretensiones de la solicitud fueron las siguientes:

DECLARACIONES Y CONDENAS: 1. Que se declare la Nulidad de la Resolución número 6925 del 13 de Agosto del año 2020, expedida por la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas de la Agencia Nacional de Tierras; suscrita por la Dra. JULIANA ELENA VENEGAS GOMEZ, "Por la cual se resolvió una solicitud de adjudicación de baldíos dentro del predio de mayor extensión denominado El Porvenir, ubicado en el Municipio de Puerto Gaitán – Meta y se ordenan otras actuaciones" y concretamente SE NIEGA la solicitud de adjudicación del señor LUIS ILVAR PULIDO PINILLA, quien se identifica con la cedula de ciudadanía número 79.523.930, sobre el predio denominado SAN FELIPE, ubicado en la vereda El Porvenir, municipio de Puerto Gaitán. 2. Que se

[1] *Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho". Antiguo articulo 9° del Decreto 1716 de 2009.*

declare la Nulidad del acto ficto o presunto que se consolidó producto del silencio administrativo negativo de la parte demandada al no responder dentro de los términos legales el recurso de apelación interpuesto contra la resolución 6925 del 2020 y con el cual se agotó la vía gubernativa. 3. Que se declare que el Señor LUIS ILVAR PULIDO PINILLA, cumple con todos los requisitos legales para que se le adjudique el predio denominado SAN FELIPE, ubicado en la vereda del El Porvenir, del municipio de Puerto Gaitán, departamento del Meta. 4. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones se ADJUDIQUE el predio baldío denominado "SAN FELIPE" al señor LUIS ILVAR PULIDO PINILLA, quien se identifica con la cedula de ciudadanía número 79.523.930, cuyos linderos específicos están determinados en la referida resolución 6925 del 13 de Agosto del año 2020 en los siguientes términos: "Se toma como punto de partida el punto 01 de coordenadas planas E: 982588,260 m y N: 1018985,880 m, ubicado en la esquina noroeste de la ocupación, sitio donde concurren las colindancias de los posibles ocupantes CAMILO ANDRES PRIETO ROCHA ocupación "LA BENDICIÓN" (según reconstrucción vectorial) y JULIO HUMBERTO PRIETO BRIÑEZ ocupación "LA CALAVERA" (según reconstrucción vectorial). NORTE: Del punto de partida 01 se continúa en dirección noreste en línea quebrada en una distancia de 2758,02 m, hasta encontrar el punto 02 de coordenadas planas E: 985051,410 m y N: 1019615,840 m colindando con el posible ocupante JULIO HUMBERTO PRIETO BRIÑEZ ocupación "LA CALAVERA" (según reconstrucción vectorial). ESTE: Del punto 02 se continúa en dirección sureste en línea quebrada, en una distancia de 1467,56 m, hasta encontrar el punto 03 de coordenadas E: 986350,99 m y N: 1019019,18 m el posible ocupante MIGUEL OVANDO RICO ocupación "EL TESORO" (según reconstrucción vectorial). Se continúa en dirección suroeste en línea quebrada, en una distancia de 4495,01 m, hasta encontrar el punto 04 de coordenadas planas E: 984475,380 m y N: 1015641,680 m colindando con el posible ocupante WILLIAM ORTIZ ocupación "SIN NOMBRE" (según plano topográfico). SUR: Del punto 04 se continúa en dirección noroeste en línea quebrada, en una distancia de 1462,72 m, hasta encontrar el punto 05 de coordenadas planas E: 983050,600 m y N: 1015972,090 m colindando con ZONA PROTECTORA DE MORICHAL. OESTE: Del Punto 05 se continúa en dirección noroeste en línea quebrada, en una distancia de 1609,56 m, hasta encontrar el punto 06 de coordenadas planas E: 982136,440 m y N: 1017245,520 m colindando con la ZONA PROTECTORA DE MORICHAL. Se continua en dirección noreste en línea quebrada en una distancia de 1998,23 m, hasta encontrar el punto 01, colindando con el posible ocupante CAMILO ANDRES PRIETO ROCHA ocupación "LA BENDICIÓN" (según reconstrucción vectorial), y cierra." Que hace parte del predio denominado EL PEDREGAL Y MI LLANURA con números de matrícula inmobiliaria Nos. 234 – 8015 y 234 – 8007. 5. Que se ordene la inscripción de la sentencia que acceda a las pretensiones de la demanda en el folio de

matrícula inmobiliaria No. 234 – 8015 y 234 – 8007 de la oficina de Registro de Instrumentos públicos de Puerto López.

3. En audiencia cumplida por medios no presenciales, llevada a cabo el 18 de marzo de 2021, se declara fallida la conciliación ante la falta de ánimo conciliatorio expresado por la parte convocada, conforme fue consignado en el acta de audiencia suscrita por el Procurador.

4. De conformidad con lo anteriormente expuesto, se da por agotado el requisito de procedibilidad exigido para acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 35 y 37 de la Ley 640 de 2001, en concordancia con lo establecido en el artículo 161 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA.

5. En los términos de la Ley 640 de 2001, en concordancia con lo establecido en el Decreto 1069 de 2015, se devolverán a la parte convocante los documentos aportados con la conciliación, los cuales quedan a su disposición en la fecha, pero serán entregados una vez se superen las medidas sanitarias especiales de la pandemia del COVID 19 decretadas por el Gobierno Nacional, particularmente la de aislamiento, conforme a las reglas contenidas en el Decreto Legislativo 491 de marzo de 2020, la Resolución 127 de 2020 y la Resolución N° 193 del 30 de abril de 2020, Resolución N° 0232 del 04 de junio de 2020 expedida por el Señor Procurador General de la Nación.

Dada en Villavicencio, el dieciocho (18) de marzo del año dos mil veintiuno (2021).

VICTOR JANUARIO HOYOS CASTRO
Procurador 48 Judicial II Para Asuntos Administrativos

CARLOS DANIEL VARGAS BACCI
ABOGADO ESPECIALIZADO

Señores:
GOBERNACION DEL META – SECRETARIA DE AGRICULTURA
Carrera 33 # 38-45 El Centro – Plazoleta Los Libertadores
desarrolloagroeconomico@meta.gov.co
Villavicencio.

CARLOS DANIEL VARGAS BACCI, identificado con cédula de ciudadanía número 17.321.780 expedida en el municipio de Villavicencio y domiciliado en la Dirección Carrera 33 # 36 – 29 Oficina 201 Edificio Pasadena Plaza de la ciudad de Villavicencio, en ejercicio del derecho de petición que consagra el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia y las disposiciones pertinentes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso administrativo, respetuosamente solícito lo siguiente:

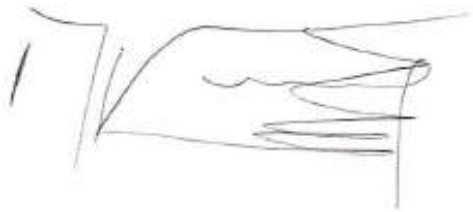
- Se certifique la suscripción y ejecución de los convenios suscritos por el INCODER para la legalización de predios rurales en el Meta.

- Señalen quien fue el operador de dichos convenios.

- Copia de la documentación de la relación de solicitudes radicadas y tramitadas en ejercicio de dichos convenidos.

Notificaciones: Carrera 33 # 36 – 29 Oficina 201 Edificio Pasadena Plaza de la ciudad de Villavicencio y al correo electrónico carlos.vargas.bacci@gmail.com

Cordialmente,



CARLOS DANIEL VARGAS BACCI
C. C. No. 17.321.780 de V/cio.
T. P. No. 84.436 del C S J.

Carrera 33 Numero 36 – 29 Oficina 201 Edificio Pasadena Plaza
Telefax : 0986 633768 Cel: 350 – 2713973 Email : carlos.vargas.bacci@gmail.com
Villavicencio – Meta.

Gmail **Carlos Daniel Vargas Bacci <carlos.vargas.bacci@gmail.com>**

DERECHO DE PETICION

1 mensaje

Carlos Daniel Vargas Bacci <carlos.vargas.bacci@gmail.com> 24 de noviembre de 2020, 12:27
Para: desarrolloagroeconomico@meta.gov.co

Cordialmente,

CARLOS DANIEL VARGAS BACCI
C. C. No. 17.321.780 de V/cio.
T. P. No. 84.436 del C S J.

oficio gobernacion del meta.pdf
240K

21 de Diciembre de 2020

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS – ANT
RESOLUCIÓN No. *20204000291776* **DEL** 2020-12-21 15:09

"Por la cual se resuelven los recursos de apelación interpuesto en contra de las Resoluciones No. 6913, 6914, 6915, 6916, 6917, 6918, 6919, 6920, 6921, 6922, 6923, 6924, 6925, 6926, 6927, 6928 del 13 de agosto de 2020 expedidas por la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas de la Agencia Nacional de Tierras."

EL DIRECTOR DE ACCESO A TIERRAS DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS-ANT

En uso de sus facultades legales previstas en el numeral 9º del artículo 22 del Decreto 2363 de 2015, en armonía con lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y

CONSIDERANDO

Que mediante el Decreto Ley 2363 de 2015, se creó la Agencia Nacional de Tierras –ANT-, entidad que asumió las funciones en relación con los temas de ordenamiento social de la propiedad rural que se hallaban a cargo del INCODER, y cuyo patrimonio estaría constituido, entre otros, por los bienes y recursos que le hubiera trasferido el INCODER en liquidación.

Que en el numeral 11 del artículo 4 del Decreto Ley 2363 de 2015, establece como función de la ANT la de "*Administrar las tierras baldías de la nación, adelantar los procesos generales y especiales de titulación y transferencias a las que haya lugar, delimitar y constituir reservas sobre éstas, celebrar contratos para autorizar su aprovechamiento y regular su ocupación sin perjuicio de lo establecido en los parágrafos 5 º y 6 º del artículo 85 de la Ley 160 de 1994*" y el numeral 12 ibídem señala el deber de "*Hacer el seguimiento a los procesos de acceso a tierras adelantados por la Agencia, en cualquiera de sus modalidades y aquellos que fueron ejecutados por el INCODER o por el INCORA, en los casos en los que haya lugar*".

Que el artículo 22 del Decreto 2363 de 2015 define las funciones de la Dirección de Acceso a Tierras – DAT, contemplando en el numeral noveno (9º) que le corresponde "*Resolver en segunda instancia los recursos que se formulen en contra de las decisiones que tomen las dependencias a su cargo, en materia de acceso y administración de tierras*."

Que el Director de Acceso a Tierras es el superior funcional y jerárquico de la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas, como se determina en la estructura de la Agencia Nacional de Tierras según se encuentra definido en el artículo 6 del Decreto Ley 2363 del 2015, razón por la cual le corresponde a esta Dirección conocer y resolver el recurso de apelación, así mismo suscribir el presente acto administrativo.

1. **ANTECEDENTES Y HECHOS RELEVANTES DE LA ACTUACIÓN**

Documento Firmado Digitalmente
El presente documento contiene una firma digital válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la ley 527 de 1999.
grC2f-BXRwyP-M4ql2-zeC7F-alxB

Mediante las resoluciones números Resoluciones No. 6913, 6914, 6915, 6916, 6917, 6918, 6919, 6920, 6921, 6922, 6923, 6924, 6925, 6926, 6927, 6928 del agosto 13 de 2020, la Agencia Nacional de tierras – ANT resuelve unas solicitudes de Adjudicación de baldíos dentro del predio de mayor extensión denominado "EL PORVENIR", ubicado en el Municipio de Puerto Gaitán Meta, entre otras actuaciones, destacando como Hechos relevantes, los que a continuación se exponen:

Recoge en la parte considerativa el compendio de normas de rango constitucional, Artículos 64 y 65, respecto del deber que tiene el Estado Colombiano en cuanto a promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra; Ley 160 de 1994, Artículo 65, que modula la propiedad de terrenos baldíos; los Decretos 1292 de 2003 y 2365 de 2015, suprimieron y liquidaron al INCORA y al INCODER, creando a través del Decreto Ley 2363 de 2015 la Agencia Nacional de Tierras.

La señora MARTHA YANETH HERNANDEZ MEDINA identificada con cédula de ciudadanía No. 40.417.851 y otros, mediante apoderado judicial presentaron acción de tutela en contra de la Agencia Nacional de Tierras bajo el radicado No. T-00024 de 2018, ante el JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA DE PUERTO LÓPEZ (META), en el cual, manifiestan que ocupan, explotan económicamente algunos predios que se encuentran ubicados en la vereda "EL PORVENIR" del Municipio de Puerto Gaitán, Meta, que vienen ejecutando actos propios de ocupación y que radicaron ante el antiguo INCODER solicitud de adjudicación y no se ha dado respuesta.

El JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA DE PUERTO LOPEZ (META) mediante fallo del 24 de abril de 2018 concedió amparo constitucional de los derechos fundamentales reclamados por los accionantes, ordenando a la Agencia Nacional de tierras abstenerse de impedir explotación agropecuaria de los predios ocupados por los accionantes y adelantar los actos administrativos en el marco de las competencias de la Agencia Nacional de Tierras, conforme a lo establecido por la Sentencia SU 426 de 2016, a fin de que se cumplan las ordenes allí dadas relacionadas con los ocupantes de los terrenos baldíos consignados en la Resolución No. 6423 del 2014, y que se relaciona con la adjudicación a quienes cumplan con los requisitos objetivos y subjetivos previstos en la Ley 160 de 1994 y demás normas que lo regulen.

La Sala de Decisión Civil Familia Laboral de Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio el día 07 de junio de 2018 procedió a decidir la impugnación presentada por esta entidad (Agencia Nacional de Tierras) como accionada, en la cual, resolvió confirmar la decisión adoptada por el *a quo.* Decisión que fue notificada mediante el correo electrónico el día 08 de agosto de 2018, según comunicación de entada con radicado No. 201810307322041.

2. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

En síntesis, los argumentos planteados por los recurrentes son los siguientes:

1. En primer lugar, los recurrentes manifiesta que el predio El Porvenir no existe jurídicamente, que se trata de una ficción jurídica, la cual no puede tenerse en cuenta en el análisis que debe realizarse, pues no tiene un número de matrícula inmobiliaria que lo identifique.

Documento Firmado Digitalmente
El presente documento contiene una firma digital válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la ley 527 de 1999.
grC2f-BXRwyP-M4ql2-zeC7F-alxB

2. Los recurrentes continúan con su argumento señalando, *"En el tema de competencia, para hacerla radicar en cabeza de la Subdirección de Acceso a Tierras Focalizadas se invoca el artículo 40 del decreto Ley 902 del 2017, transcribiéndolo en su integridad y aquí debo exponerle Señor Director, que la Subdirección de Acceso a Tierras Focalizadas* ***NO ES COMPETENTE*** *pues la A N T no ha cumplido con la exigencia que le impone el parágrafo del citado artículo 40, es decir, que no se ha identificado el predio como ubicado en zona focalizada, no se ha señalado el número de la matrícula, y menos se ha inscrito esta medida en la oficina de registro de instrumentos públicos correspondiente (Puerto López Meta), condición o calidad o requisito para que sea oponible a terceros, incluyendo a la suscrita y para radicar la competencia en la subdirección que emitió la resolución.* ***CONCLUSION: EL PREDIO, A LA FECHA PRESENTE, NO HACE PARTE DE NINGUNA ZONA FOCALIZADA, PARA LOS EFECTOS DE ADJUDICACION."***

3. Acerca de la sentencia SU 426 de 2016 proferida por la Honorable Corte Constitucional con relación al caso del predio El Porvenir -como lo denomina el alto tribunal-, señalan los recurrentes en sus escritos que "***NO ES CIERTO*** *que allí se hayan amparado derechos fundamentales a favor de la "población histórica" que cumpla con los requisitos para ser sujetos de reforma agraria, en relación con los predios baldíos de que trata la resolución 6423 del 2014. (…) por eso la afirmación categórica que aquí se está negando o mejor tergiversado un hecho evidente; privilegiando a unos y rechazando de plano a otros (…)";* es decir, los recurrentes consideran que la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas le está dando un alcance erróneo a los efectos de la mencionada sentencia.

4. En cuanto a lo que tiene que ver con la calidad y/o condición del predio objeto de estudio, se dice por parte de los recurrentes que; "*Corresponde ahora detenernos en el estudio; tal vez; del punto más álgido y determinante y es el análisis si en verdad como lo pretende hacer ver la ANT, producto de la REVOCATORIA DIRECTA, de que trata la Resolución 6423 de 2014 los predios además de volver al patrimonio de la nación, sin solución de continuidad en el tiempo en su calidad jurídica de baldío, adquirieron la calidad de* ***BALDÍOS RESERVADOS DE LA NACIÓN****".* De acuerdo a lo anterior, los recurrentes manifiesta que la ANT negó la solicitud de adjudicación en virtud de que dicha solicitud recayó sobre un predio que ostenta la condición de baldío reservado de la nación y por ello no es procedente.

5. Otro de los argumentos expuestos por todos los recurrentes, esgrime la necesaria aplicación de la Ley 160 de 1994 y no del Decreto Ley 902 de 2017, pues consideran que no hay duda de que su solicitud de adjudicación se presentó antes de la entrada en vigencia del Decreto Ley, razón por la cual se debe dar aplicación al artículo 27 del mismo, que regula lo relativo a las "solicitudes en proceso". En ese sentido, expone lo dispuesto en la sentencia SU 426 de 2016 de la Corte Constitucional, así como la decisión del Juzgado Promiscuo de Familia de Puerto López en el marco de la tutela No. 00024 de 2018.

Documento Firmado Digitalmente
El presente documento contiene una firma digital válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la ley 527 de 1999.
Agencia Nacional de Tierras

grC2f-BXRwyP-M4ql2-zeC7F-alxB

6. Finalmente los recurrentes exponen que bajo el título de "Efectos de la revocatoria directa: reserva especial de baldíos.", la primera instancia expuso, que con ocasión de la expedición de la Resolución No. 6423 de 2014 por parte del INCODER, los predios adquirieron la calidad de baldíos, y que no es cierto, que los mismos se sustraigan de los que pueden ser ocupados libremente, por haber vuelto al patrimonio de la Nación.

Así mismo, en párrafos posteriores, manifiestan que la posesión sobre los predios se inició antes de la expedición de la Resolución No. 6423 de 2014, cuando eran de propiedad privada, pero que dicha posesión se transformó en ocupación, como consecuencia de los efectos retroactivos de la resolución que resolvió la revocatoria directa (antes mencionada), es decir, que esos predios jurídicamente y para todos sus efectos, siempre han sido baldíos de la Nación. Además de que dichos predios no están fuera del régimen común de baldíos, y por lo tanto no pueden considerarse como baldíos reservados.

3. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO FRENTE AL CASO

La ANT recibió 16 recursos de apelación en contra de igual número de resoluciones individuales "*Por la cual se resuelve una solicitud de adjudicación de baldíos dentro del predio de mayor extensión denominado El Porvenir, ubicado en el municipio de Puerto Gaitán, Meta y se ordenan otras actuaciones*"; sin embargo, los argumentos que los 16 recurrentes presentan en contra de las respectivas resoluciones son idénticos y guardan uniformidad en las pretensiones. Sumado a esto se tiene que, el presente recurso de apelación se resuelve a la luz del análisis que la Honorable Corte Constitucional realizó del caso que ella misma denomina "El Porvenir", mediante la expedición de la sentencia SU 426 de 2016, y así mismo, se toman las pautas y lineamientos que el Alto Tribunal entrega a las entidades para actuar en el presente caso.

En virtud de lo anterior, y dando aplicación a lo estipulado en el artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), se procede a realizar la acumulación de procesos para resolver los 16 recursos de apelación interpuestos, pues los argumentos esgrimidos y desarrollados por los recurrentes, así como las pretensiones son las mismas. De igual forma la línea argumentativa que esta Dirección empleará para resolver dichos recursos se desarrollará siguiendo una misma metodología temática, por lo que se trata de una misma actuación y de este modo se evitan decisiones contradictorias por parte de la administración.

3.1 Oportunidad

Una vez surtido el trámite, de notificación de la decisión adoptada por la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas y con el que, se concede los recursos de reposición y apelación contra las resoluciones No. 6913, 6914, 6915, 6916, 6917, 6918, 6919, 6920, 6921, 6922, 6923, 6924, 6925, 6926, 6927, 6928 del 13 de agosto de 2020, se procederá al estudio y decisión de conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, en su artículo 74 dispone:

Documento Firmado Digitalmente
El presente documento contiene una firma digital válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la ley 527 de 1999.
Agencia Nacional de Tierras

grC2f-BXRwyP-M4ql2-zeC7F-alxB

> "Artículo 74. Recursos contra los actos administrativos. Por regla general, contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos:
>
> 1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revoque.
> 2. El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo o funcional con el mismo propósito (…)".

En este orden, el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011, en materia de oportunidad y presentación de los recursos, dispone lo siguiente:

> "Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez.
>
> Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el procurador regional o ante el personero municipal, para que ordene recibirlos y tramitarlos, e imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar.
>
> El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición y cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción. Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios".

Así como, el artículo 77 de la misma norma, establece los siguientes requisitos: (i) interponerse dentro del plazo legal; (ii) sustentarse con expresión concreta de la inconformidad; (iii) solicitar y aportar pruebas, e (iv) indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser notificado por este medio.

Respecto a los requisitos para interponer el recurso de apelación, es claro que se cumplieron en el tiempo y el modo que la ley lo exige, puesto que la notificación personal de las resoluciones No. 6913, 6914, 6915, 6916, 6917, 6918, 6919, 6920, 6921, 6922, 6923, 6924, 6925, 6926, 6927, 6928 del 13 de agosto de 2020, se realizó el 14 de agosto de 2020 y la presentación del recurso de apelación se hizo el día 27 de agosto de 2020, manifestando el recurso de apelación, ante el inmediato superior administrativo de la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas. Por consiguiente y de conformidad con el inciso 9º del artículo 22 del Decreto Ley 2363 de 2015, la Dirección de Acceso a Tierras tendrá como función:

> "9). Resolver en segunda instancia los recursos que se formulen en contra de las decisiones que tomen las dependencias a su cargo, en materia de acceso y administración de tierras"

Documento Firmado Digitalmente
El presente documento contiene una firma digital válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la ley 527 de 1999.
Agencia Nacional de Tierras

grC2f-BXRwyP-M4ql2-zeC7F-alxB

Por tanto, se procede al análisis del caso en los siguientes puntos:

3.2. Consideraciones en torno a la sentencia SU 426 de 2016 de la Honorable Corte Constitucional.

3.2.1 La sentencia SU 426 de 2016 en la decisión de primera instancia.

Las resoluciones No. 6913, 6914, 6915, 6916, 6917, 6918, 6919, 6920, 6921, 6922, 6923, 6924, 6925, 6926, 6927, 6928 del 13 de agosto de 2020 "*Por la cual se resuelve una solicitud de adjudicación de baldíos dentro del predio de mayor extensión denominado El Porvenir, ubicado en el municipio de Puerto Gaitán, Meta y se ordenan otras actuaciones*", en el acápite de Antecedentes, hace un recuento de las actuaciones judiciales que dieron lugar a que la Corte Constitucional emitiera la sentencia SU 426 del 11 de agosto de 2016, a través de la cual confirmó parcialmente la decisión de segunda instancia adoptada por la Corte Suprema de Justicia en la Sala de Decisión de Tutelas No. 2 de la Sala de Casación Penal; cada una de las resoluciones refiere que la variación de la decisión se dio "*… amparando entre otros, el derecho fundamental a la tierra y el territorio en favor de la población histórica que cumpla con los requisitos para ser sujetos de reforma agraria, en relación con los predios baldíos de que trata la Resolución No. 6423 del 30 de julio de 2014, expedida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural."*

Continuan las resoluciones No. 6913, 6914, 6915, 6916, 6917, 6918, 6919, 6920, 6921, 6922, 6923, 6924, 6925, 6926, 6927, 6928 del 13 de agosto de 2020 citando apartes del resuelve, concretamente de la orden Cuarta, y avanza indicando que "… *las órdenes proferidas por la Corte Constitucional encuentran asidero en el estudio abordado al resolver el problema jurídico que cuestiona, i) la vulneración del derecho fundamental a la tierra y el territorio de los accionantes al no adelantar la identificación y posterior titulación de los fundos pese a los efectos de la revocatoria declarada desde el 14 de julio de 2014, y ii) si la Nación recuperó documentalmente el dominio de estos.*

Que en el mismo sentido, las órdenes proferidas se enmarcaron en la relevancia constitucional del caso que "(...) se confirma por la aparente victimización que han enfrentado los ocupantes históricos del lugar, que configuran una compleja situación local de Derechos Humanos, derivada del conflicto armado, que presuntamente compromete de forma masiva el ejercicio de garantías constitucionales, tales como el acceso efectivo a la tierra en favor de los trabajadores rurales, la vida en condiciones dignas, trabajo, integridad personal, entre otros. En tal sentido, los peticionarios, que se identifican como campesinos de la vereda El Porvenir, municipio de Puerto Gaitán, han manifestado que han sido víctimas de distintos hechos de violencia por parte de estructuras criminales al margen de la ley, que a su vez se vinculan con la situación del conflicto armado interno extendido en el departamento del Meta; lo cual ha tenido como consecuencias, entre otras, el homicidio de varios pobladores".

De allí que, en el asunto, la Alta Corporación tuviera en cuenta el conjunto de supuestos fácticos narrados en el trámite, que demuestra la condición de vulnerabilidad de los actores, y que devino en la categorización de estos como ***ocupantes históricos*** *(se resalta) teniendo en cuenta su asentamiento data 45 años atrás, y el padecimiento sufrido por estos "(...) debido a la permisión del Estado a la apropiación de El Porvenir por parte de un actor privado poderoso".* (sic)

Documento Firmado Digitalmente
El presente documento contiene una firma digital válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la ley 527 de 1999.
Agencia Nacional de Tierras

grC2f-BXRwyP-M4ql2-zeC7F-alxB

Frente al tema continúa las resoluciones No. 6913, 6914, 6915, 6916, 6917, 6918, 6919, 6920, 6921, 6922, 6923, 6924, 6925, 6926, 6927, 6928 del 13 de agosto de 2020 indicando que como consecuencia la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas procedió a abrir la actuación administrativa mediante la expedición de la Resolución No. 5776 de 2018, en la cual se indica la ruta jurídica de actuación para el estudio de las solicitudes de adjudicación en el predio denominado "El Porvenir", que se encuentra ubicado en el municipio de Puerto Gaitán, Meta.

3.2.2 Órdenes de la sentencia SU 426 de 2016 en materia de acceso a tierras.

La sentencia SU 426 de 2016 al revisar la acción de tutela interpuesta por la señora Sulay Martínez y otros, resuelve "***CONCEDER*** *la tutela del derecho fundamental a la tierra y el territorio en favor* ***de la población campesina que cumpla con los requisitos para ser sujetos de reforma agraria, en relación con los predios baldíos de que trata la Resolución No. 6423 del 30 de julio de 2014****, expedida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural*" (énfasis propio), y en consecuencia emite seis órdenes orientadas a procurar que las entidades involucradas desplieguen acciones en aras de garantizar los derechos tutelados.

En ese sentido, la orden cuarta de la sentencia contiene siete aspectos que debe desarrollar la "*mesa de trabajo interinstitucional* ***para solucionar la situación del derecho a la tierra y el territorio de la comunidad campesina de El Porvenir***" (énfasis propio), siendo los que se enuncian a continuación, aquellos que guardan relación con la adjudicación de predios a población campesina:

> *"(ii) Censar a la población ocupante de los terrenos baldíos consignados en la Resolución No. 6423 del 2014 y definir quiénes serían sujetos de reforma agraria, de acuerdo con lo dispuesto en le Ley 160 de 1994.*
>
> *(…)*
>
> *(iv) Advertir al Incoder o a quien haga sus veces, acerca de su obligación de evaluar los requisitos de reforma agraria, de manera que no se imponga* ***a los peticionarios*** *una carga que no pueden cumplir por negligencia y corrupción estatal. Es decir, debido a la permisión del Estado a la apropiación de El Porvenir por parte de un actor privado poderoso, en perjuicio de un amplio número de familias campesinas, según los hechos descritos en esta providencia. Bajo esa perspectiva,* ***el Instituto deberá adelantar e impulsar hasta su culminación el proceso de adjudicación de bienes baldíos****, de que trata la Ley 160 de 1994 y sus respectivas normas reglamentarias. (…)"* (énfasis propio).

Para el entendimiento pleno de las órdenes dadas por la Corte Constitucional en el resuelve, se hace necesario acudir a las consideraciones de la sentencia y en particular, a aquellos apartes que se convierten en la "razón de la decisión", toda vez que la lectura sistemática del pronunciamiento suministra elementos de contexto para su adecuada interpretación y ejecución.

Documento Firmado Digitalmente
El presente documento contiene una firma digital válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la ley 527 de 1999.
Agencia Nacional de Tierras

grC2f-BXRwyP-M4ql2-zeC7F-alxB

En ese sentido, se debe partir de los problemas jurídicos propuestos y abordados por el Alto Tribunal en la decisión, en la medida que estos circunscriben y acotan el objeto de debate y por lo tanto del sentido del pronunciamiento; así la sentencia definió dos problemas jurídicos:

> *"La Sala Plena debe resolver dos problemas jurídicos independientes, pero relacionados entre sí. El primero se refiere a la supuesta inacción del Incoder en lo que tiene que ver con la recuperación material de los predios baldíos de que trata la Resolución No. 6423 del 30 de julio de 2014 (que componen El Porvenir) y la adjudicación y titulación de los mismos a favor de la comunidad campesina de El Porvenir. El segundo tiene que ver con los problemas de seguridad que enfrenta esta comunidad y su líder, el señor Miguel Briceño por reclamar derechos territoriales sobre tales bienes".*

Pasando al estudio de la orden cuarta del resuelve, concretamente en cuanto al citado numeral segundo, se puede evidenciar que éste implica la realización de dos actividades generales y dependientes entre sí, pues ordena que i) se realice un censo de los ocupantes de los veintisiete (27) predios objeto de revocatoria directa, que son los que integran el predio de mayor extensión denominado El Porvenir, y a su vez indica que, ii) se debe definir de estas personas censadas quienes reúnen los requisitos para ser considerados *sujetos de reforma agraria*, conforme lo dispuesto en la Ley 160 de 1994.

Con las pautas dadas en este numeral, el Alto Tribunal pretendía poner límite a nuevas ocupaciones en el predio, y por lo tanto, a nuevas pretensiones de adjudicación sobre el mismo, pues el censo permite contar con una fotografía o un reflejo del estado actual de las cosas al momento en el que se realiza, es decir, número de personas y su relación con la tierra en el momento de la toma de información en sitio.

En el mismo numeral se dispone que, a partir del insumo que proporciona el censo se debe proceder a establecer quiénes cumplen con los requisitos para ser sujetos de reforma agraria, lo cual se entiende respecto de los ocupantes que hicieron parte del mismo. Al respecto, vale la pena señalar que en este punto la Corte Constitucional nada dijo ni ordenó, respecto a la adjudicación de los predios a los posibles beneficiarios, sino que se limitó a la definición de si se es o no sujeto de reforma agraria.

Acerca de los requisitos para ser sujeto de reforma agraria conforme la Ley 160 de 1994, en el numeral 4.5 de las consideraciones y fundamentos, la sentencia señala:

> *"Además, esta nueva Ley incorporó como* ***requisitos generales para ser sujeto de reforma agraria o adjudicatario:*** *(i) demostrar la explotación de más de dos terceras partes del predio que se pretende adjudicar, el cual, en todo caso, (ii) no podrá ser mayor a una UAF; adicionalmente (iii) se exige acreditar la explotación económica de más de dos terceras partes del predio y atendiendo a la aptitud productiva del terreno definida por el Incora (Incoder); (iv) se exige que el adjudicatario no tenga un patrimonio neto superior a los 1000 salarios mínimos mensuales vigentes; y (v) se advierte que no podrán ser adjudicatarios quienes ya se hayan beneficiado de otro predio rural, ya sea porque son sus propietarios o tienen derecho de*

Documento Firmado Digitalmente
El presente documento contiene una firma digital válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la ley 527 de 1999.
Agencia Nacional de Tierras

grC2f-BXRwyP-M4ql2-zeC7F-alxB

posesión". (énfasis propio).

Ahora bien, pasando al numeral cuarto de la orden cuarta, la Corte Constitucional señala que no se debe imponer a los "peticionarios" una carga que no estén en capacidad de cumplir, respecto de los requisitos para ser sujeto de reforma agraria, y continúa indicando que bajo esa perspectiva se debe adelantar e impulsar el proceso de adjudicación de bienes baldíos definido en la Ley 160 de 1994.

Para un entendimiento pleno de la orden, vale la pena acudir de nuevo al acápite de consideraciones y fundamentos de la sentencia, pues ahí se observa que esta orden se encuentra motivada en el numeral 9.1., toda vez que al abordar el primer problema jurídico se puede advertir que al referirse a *"los peticionarios",* la Corte se está refiriendo a los accionantes de la tutela que dio lugar a la SU 426 de 2016, que a su vez, se podría entender como *"población histórica"*, en la medida que señala "*De acuerdo con los hechos narrados en la acción de tutela y las conclusiones presentadas en el acápite anterior,* ***los peticionarios hacen parte de la comunidad campesina de El Porvenir, personas que hace más de cuarenta años comenzaron a hacer presencia en la zona y a ocupar los predios en disputa y a explotarlos económicamente****."*

Así mismo, en el numeral 10.9. vuelve a referirse a *"los peticionarios"*, al indicar que "*En virtud de lo expuesto, la Sala modificará la decisión de segunda instancia en lo que tiene que ver con el derecho de los peticionarios a que se defina su situación de acceso a la tierra. En consecuencia, ordenará al Incoder que adelante gestiones para la entrega material del bien, con verificación y control administrativo y policial*".

Sumado a esto, en el numeral cuarto de la orden cuarta se indica la población a la que pretende beneficiar, señalando que busca mitigar el hecho de que El Porvenir haya sido apropiado por un privado "*… en perjuicio de un amplio número de familias campesinas, según los hechos descritos en esta providencia*", y al acudir a los hechos que el Alto Tribunal estudió, analizó y aceptó, encontramos a manera de resumen:

> *"Así las cosas, esta breve recomposición de la historia jurídica demuestra que El Porvenir fue, primero, un predio apropiado por particulares, explotado por campesinos, calificado como baldío por el Estado, fragmentado estratégicamente en 27 fracciones para ser adjudicado en el marco de la reforma agraria y posteriormente, convertido en cinco grandes propiedades, en el marco de los protocolos notariales y la inscripción en el registro, ya sin ánimo de aparentar validez legal alguna (dado que la extensión de los predios hacía evidente la ilegalidad de los negocios)."*

Adicionalmente en el numeral 8.6 de las consideraciones y fundamentos, al estudiar el segundo problema jurídico, es decir, lo relacionado con la situación de seguridad en El Porvenir, la Corte Constitucional realizó un análisis del contexto tomando información suministrada por los accionantes, también por la población campesina, por la institucionalidad y por organizaciones de derechos humanos que realizaban acompañamiento en la región, concluyendo que:

> *"(iii) Este contexto ha tenido consecuencias directas en el ejercicio de los derechos fundamentales de los pobladores de la zona de El Porvenir, en Puerto Gaitán, pues en el área se han presentado distintos hechos violentos,*

Documento Firmado Digitalmente
El presente documento contiene una firma digital válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la ley 527 de 1999.
Agencia Nacional de Tierras

grC2f-BXRwyP-M4ql2-zeC7F-alxB

> *cuya perdurabilidad lleva a advertir la persistencia de riesgo a la seguridad, integridad y vida de los miembros de la comunidad campesina.*
>
> *(iv) La situación descrita se agrava por la ausencia de una respuesta institucional efectiva a sus requerimientos para la protección de las tierras (aspecto en el que se profundizará en el siguiente acápite) y en la negligencia de las autoridades locales y regionales en lo que tiene que ver con la garantía de condiciones de habitabilidad dignas, como se constata en la narración de los problemas para el acceso a servicios públicos, de educación y salud de la Defensoría del Pueblo."*

En la misma línea argumentativa, en el numeral 8.7 la Corte Constitucional expresa claramente que los predios que fueron objeto de revocatoria directa mediante la Resolución No. 6423 de 2014 del INCODER, a su vez, se encontraban habitados por población campesina que históricamente ha estado asentada en ese lugar, y que han estado expuestos a un escenario de conflicto y a hechos victimizantes:

> *"Para la Sala, entonces, no cabe duda de que* ***la comunidad campesina históricamente asentada en la zona de El Porvenir*** *(donde se encuentran los predios referidos en la Resolución No. 6423 de 2014 expedida por el Incoder),* ***ha atravesado las consecuencias victimizantes de un contexto violento****, propio del conflicto armado interno, sin que las autoridades públicas atiendan las advertencias de riesgo puestas de presente no sólo por parte de los campesinos habitantes, sino también por distintos organismos gubernamentales y particulares. Esta situación de inseguridad y ausencia de condiciones de habitabilidad adecuadas deviene en una violación del derecho fundamental a la vida digna de esta población".*

En ese sentido el Alto Tribunal considera que, el escenario de violencia y conflicto presente en la región aunado a la falta de respuesta institucional, de cara a la garantía de derechos fundamentales y a derechos sociales y económicos, explica plenamente las situaciones de hecho que se presentaron respecto de la relación con la tierra, y en ese sentido se convierten en la razón por la cual la entidad -INCODER, ANT- y la institucionalidad en general, deben adecuar sus estándares (requisitos y rutas) para garantizar derechos a la población campesina que históricamente ha habitado en El Porvenir.

Las "razones de la decisión" que la Corte Constitucional expone en el acápite de consideraciones y fundamentos de la sentencia, permiten extraer elementos que se deben tener en cuenta al momento de definir lineamientos para establecer el contenido y cumplimiento de las órdenes, para el caso concreto, aquellas que se relacionan con la garantía de acceso a la tierra vía adjudicación por parte de la población campesina, como principal destinatario de los predios baldíos de la Nación.

Volviendo al texto del numeral cuarto de la orden cuarta del resuelve, se tiene que este señala que se debe *adelantar e impulsar hasta su culminación el proceso de adjudicación de baldíos,* es decir, que respecto de los "peticionarios" (accionantes, comunidad históricamente asentada en El Porvenir), la Corte Constitucional si dio la orden expresa de adelantar el proceso de adjudicación para quienes cumplan con los requisitos de sujetos de reforma agraria.

Documento Firmado Digitalmente
El presente documento contiene una firma digital válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la ley 527 de 1999.
Agencia Nacional de Tierras

grC2f-BXRwyP-M4ql2-zeC7F-alxB

La diferenciación en la intencionalidad de los citados numerales, también encuentra sustento en las consideraciones de la sentencia, así el Alto Tribunal en el numeral 9.3.3 sobre los ocupantes de El Porvenir, señaló:

> ***"Por supuesto, también los accionantes y los órganos de control han informado acerca de la aparición reciente de nuevos ocupantes, tal como lo hace el Incoder. Pero es claro que estos últimos no pueden confundirse con quienes llevan medio siglo viendo afectados sus derechos y (al menos) dos décadas asumiendo una compleja disputa legal y jurídica por su titularidad. Si esta confusión se produce, ello obedece precisamente a las actuaciones y especialmente las omisiones del Incoder frente a la situación de El Porvenir."***

Así las cosas, la referencia a *comunidad históricamente asentada* se entiende respecto de los accionantes de la tutela que dio lugar a la sentencia SU 426 de 2016 y serán los que tengan prioridad de cara a la adjudicación de predios que hacen parte del predio de mayor extensión conocido como El Porvenir, lo que de ninguna manera implica desconocer el derecho de acceso a la tierra por parte de los ocupantes que hacen parte del censo levantado por la ANT en cumplimiento del numeral segundo de la orden cuarta de la misma sentencia, como se expuso anteriormente.

Así mismo, se hace necesario atender, dar respuesta y orientar las comunicaciones remitidas por la población campesina en su intención de acceder a la tierra o conocer el procedimiento a través del cual pueden acceder a esta, pues en el análisis que la Corte Constitucional realizó del caso concreto, consideró que en atención al contexto descrito anteriormente resulta procedente dar prevalencia al derecho sustancial sobre las formas, de modo que las comunicaciones que en su momento fueron remitidas por los peticionarios en las que se refleje una pretensión de adjudicación, debe entenderse de esa forma más allá de la forma en la que se presente. Señaló la Corte en el numeral 9.3.2.

> *"No cabe duda de que, en semejante escenario, las comunicaciones de los peticionarios deben interpretarse como una petición formal en los términos del artículo 23 Superior, y dar lugar a una respuesta de fondo por parte de la Institución, ya sea para iniciar el estudio de las solicitudes de adjudicación o para guiar el inicio de los trámites respectivos."*

Finalmente, es preciso señalar que la posibilidad de atender las solicitudes de adjudicación y garantizar el acceso a la tierra tanto a los peticionarios, a quienes históricamente se han asentado en el predio y a quienes se encuentran en el censo de ocupantes, se supedita al hecho de lograr la recuperación material de los predios que ya fueron recuperados jurídicamente a través de la Resolución No. 6423 de 2014 del INCODER, es decir, que la Agencia Nacional de Tierras pueda ejercer su deber legal de administración de los predios baldíos de la Nación en aras de dar cumplimiento al fin constitucional y legal de los mismos.

Frente al tema y en su momento el Alto Tribunal señaló:

Documento Firmado Digitalmente
El presente documento contiene una firma digital válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la ley 527 de 1999.
Agencia Nacional de Tierras

grC2f-BXRwyP-M4ql2-zeC7F-alxB

> *"Pero desde el punto de vista del goce efectivo de los derechos de los pobladores de El Porvenir, ambos trámites podrían resultar inocuos, pues el Estado no ha asegurado la tenencia física y material de los predios, ni su protección frente a quienes históricamente los ocuparon indebidamente.*
>
> *… Resulta entonces imprescindible que la Corte recuerde una vez más que la finalidad de la recuperación de baldíos no se agota en la restitución del patrimonio estatal, sino que persigue la eficacia de los artículos 64 y 65 de la Constitución: los baldíos son el principal instrumento para propiciar el acceso a la tierra y la equidad en el campo (al, respecto, ver sentencias C-595 de 1995 y C-644 de 2012, previamente citadas).*

3.2.3. Sentencia SU 426 de 2016 como marco jurídico para resolver las solicitudes de adjudicación respecto de los predios baldíos que hacen parte de "El Porvenir".

Ahora bien, con fundamento en lo expuesto hasta el momento, podemos mencionar, que cada una de las solicitudes de adjudicación por parte de los peticionarios, de la comunidad históricamente asentada y demás interesados, sobre los predios que fueron objeto de la decisión de revocatoria directa proferida por el extinto INCODER, a través de la Resolución No. 6423 de 2014, se deberán entrar a estudiar teniendo como marco jurídico, lo indicado por la Honorable Corte Constitucional en la Sentencia SU 426 de 2016, así como la necesidad de realizar la recuperación material de las tierras, como factor determinante para que se lleve a cabo el cumplimiento efectivo del derecho de acceso a la tierra de los miembros que pertenecen a la comunidad campesina de El Porvenir.

Por ende, no es posible entrar a resolver solicitud alguna de adjudicación sobre terrenos que hacen parte de los 27 predios identificados como baldíos de la Nación en virtud de la citada resolución, hasta tanto, no se resuelvan aquellas peticiones o solicitudes de la comunidad campesina de El Porvenir que ha hecho presencia histórica en la zona, desde la época en que dicho predio fue apropiado por particulares y posteriormente, de manera irregular, adjudicado en 27 predios en el año 1992 por el INCORA, sin desconocer las posibles expectativas y demás situaciones, creadas a favor de los campesinos que han llegado o se han asentado posteriormente en la zona, con la finalidad de ejercer una explotación u ocupación sobre dichos predios.

Es así como corresponde, a la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas de la Agencia Nacional de Tierras, entrar a realizar de manera conjunta el procedimiento de adjudicación de tierras respecto de los 27 predios baldíos ubicados en la zona de El Porvenir, esto es, que se debe garantizar una respuesta frente a las solicitudes de acceso a tierra para cada uno de los peticionarios[1], en especial, de aquellos que históricamente se han asentado en el predio, así como de aquellos que se encuentren en el censo de ocupantes, y demás situaciones que se puedan advertir.

[1] Tal como lo señaló la Corte Constitucional y como se expuso en el numeral 3.2.2. del presente documento.

Documento Firmado Digitalmente
El presente documento contiene una firma digital válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la ley 527 de 1999.
Agencia Nacional de Tierras

grC2f-BXRwyP-M4ql2-zeC7F-alxB

La finalidad de lo anterior, radica en el hecho, de que cada una de las solicitudes de adjudicación se debe entrar a estudiar jurídicamente, con la finalidad de determinar si se reúnen o no los requisitos para ser sujeto de reformar agraria, tal y como lo señaló la Honorable Corte Constitucional en el punto ii) del numeral 4° del resuelve de la Sentencia SU 426 de 2016, para de esta manera entrar a determinar la forma de adjudicación entre todos los posibles beneficiarios, siempre y cuando el área o la cantidad de tierra lo permita, conforme a los estudios técnicos y agronómicos pertinentes.

Valga la oportunidad, para reiterar una vez, lo mencionado por el Alto Tribunal Constitucional en la sentencia de unificación, respecto a los ocupantes de El Porvenir:

> *"No corresponde a la Corte evaluar la situación específica de cada una de las 421 familias que actualmente esperan una decisión del Incoder. Esta actividad deben adelantarla dicho Instituto y la Unidad de Tierras, en el marco de sus competencias.* ***Pero es irrazonable que se ignore la presencia histórica de la población de El Porvenir o que se asimile a la de posibles ocupantes actuales*** *(de hace tres meses, según las palabras del Incoder) como lo hace el Incoder, al afirmar que ninguna de las familias que pueden hallarse hoy en día en El Porvenir podría acreditar una explotación pacífica del mismo por más de cinco años, dado que el baldío regresó a la Nación hace apenas algo más de un año."* (énfasis propio).

Por consiguiente, y teniendo en cuenta el enfoque especial fijado por la Corte en el aparte de la providencia judicial citada, no resulta pertinente que se resuelvan solicitudes de adjudicación de posibles ocupantes o personas que iniciaron una presunta explotación sobre los predios, en épocas o momentos posteriores, sin antes entrar a determinar los integrantes de la población histórica de El Porvenir que reúnen los requisitos pertinentes para ser sujetos de reforma agraria, y por lo tanto, virtuales beneficiarios de un proceso de titulación.

Por otra parte, en cuanto al contenido de la orden cuarta numeral cuarto, en el punto en donde el Alto Tribunal conmina a la autoridad de tierras, en su momento INCODER hoy la ANT, a "… *evaluar los requisitos de reforma agraria, de manera que no se imponga a los peticionarios una carga que no pueden cumplir por negligencia o corrupción estatal",* tal como lo identificó en el caso bajo estudio; se tiene que efectivamente no sólo la autoridad de tierras, sino el sector agrario en general atendió éste y otros llamados, como el del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto a través del punto No. 1. *Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral*, lo que dio lugar a la expedición del Decreto Ley 902 de 2017.

A través del Decreto Ley 902 de 2017, se busca disponer de aspectos procedimentales para facilitar la implementación de la Reforma Rural Integral, la cual establece que los sujetos beneficiarios deben ser "*trabajadores con vocación agraria, sin tierra suficiente y especialmente las mujeres y las personas desplazadas por la violencia…",* constituyéndose en la base de su funcionamiento, razón por la cual resulta fundamental su caracterización y clasificación, de ahí que el citado Decreto dedique el Título II al Registro de Sujetos de Ordenamiento - RESO como un sistema que permite la inmediata inscripción de los beneficiarios, mediante una herramienta de registro e identificación de quienes aspiran a programas de acceso a tierras y formalización de la

Documento Firmado Digitalmente
El presente documento contiene una firma digital válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la ley 527 de 1999.
Agencia Nacional de Tierras
grC2f-BXRwyP-M4ql2-zeC7F-alxB

propiedad.

El artículo 14 presenta los criterios para la asignación de puntaje en el RESO de acuerdo a variables de calificación, dentro de las cuales se encuentran aspectos mencionados por la Corte Constitucional en la sentencia bajo análisis, tales como el ser víctima del conflicto armado, ser mujer campesina, así como las condiciones socioeconómicas (condiciones de vulnerabilidad), residencia previa en la región, entre otros. Es decir, que toma en cuenta características de la realidad y dinámica de vida de los beneficiarios que anteriormente no se consideraban, con el fin de realizar una calificación objetiva que permita la ejecución gradual de la política pública, en aras de que el acceso y la formalización de tierras se adelanten de manera progresiva a los beneficiarios.

Lo descrito anteriormente responde a lo dispuesto por el Alto Tribunal en el acápite de consideraciones y fundamentos en el numeral 10.8, al señalar:

> *"Ciertamente, la Ley 160 de 1994 exige una explotación continua para lograr la adjudicación de un baldío, bajo el lema histórico de que la tierra es de quien la trabaja. Pero el Estado no puede utilizar ese principio para extinguir o violar derechos de la población rural, cuando la posibilidad de cumplir esa exigencia se ve frustrada por su incapacidad para mantener el orden público y su complacencia con los sujetos causantes del despojo."*

También se encuentra en consonancia con el numeral quinto de la orden cuarta, en la medida que el Decreto Ley 902 de 2017, en su articulado, contempla medidas afirmativas en favor de la mujer rural y de manera concreta la calificación que se realiza en RESO incluye variables que corresponden expresamente a dichas medidas afirmativas en favor de la población femenina, de modo que su aplicación frente al caso particular responde a la intencionalidad de hacer menos gravoso a los peticionarios el cumplimiento de los requisitos para ser beneficiarios de adjudicación de tierras.

La orden cuarta de la sentencia en el numeral quinto dispuso:

> *"(v) De acuerdo con las consideraciones vertidas en la parte motiva de esta providencia acerca de la situación de la 'mujer rural', el Incoder y la Unidad de Tierras deberán definir, adoptar e implementar medidas afirmativas para la población femenina en el marco de sus competencias legales; por ejemplo, que al momento de realizar la titulación, esta se suscriba a nombre de la mujer, o de los dos cónyuges o compañeros permanentes…"*

Para esta instancia resulta claro que, si bien el Alto Tribunal en la sentencia SU 426 de 2016, dispuso que se definieran quienes reúnen los requisitos para ser sujetos de reforma agraria según la Ley 160 de 1994, y bajo la misma norma se impulsaran los procesos de adjudicación de bienes baldíos, también señaló expresamente tanto en el resuelve como en las "razones de la decisión", que la autoridad de tierras y las entidades en general, deben evitar imponer a los peticionarios[2] cargas que no se puedan cumplir, tomando en cuenta las características que rodean el caso, llevando a que reciba la categoría de emblemático.

[2] Categoría ya analizada en el numeral anterior.

Documento Firmado Digitalmente
El presente documento contiene una firma digital válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la ley 527 de 1999.
Agencia Nacional de Tierras

grC2f-BXRwyP-M4ql2-zeC7F-alxB

En ese sentido y toda vez que para la fecha de la expedición de la sentencia no se contaba con el Decreto Ley 902 de 2017, la Corte Constitucional no podía hacer referencia a este instrumento normativo, sin embargo, en su exposición si se evidencia la intencionalidad por hacer menos gravoso el cumplimiento de requisitos para lograr el acceso a la tierra, de modo que al analizar el Decreto a la luz de las pautas dadas por el Alto Tribunal se puede advertir como éste responde plenamente a dicha intencionalidad y permite cumplir con las órdenes suministradas en mejor medida que si se diera aplicación a la Ley 160 de 1994.

A través de la implementación del Decreto Ley 902 de 2017, éste se torna en un instrumento pertinente a aplicar, dadas las condiciones de vulnerabilidad a las que se han enfrentado históricamente los campesinos pertenecientes a la comunidad de El Porvenir, teniendo en cuenta las graves circunstancias de orden público, que hacen casi imposible para algunos de los peticionarios, demostrar o acreditar la explotación económica de los predios, tal y como lo exige la Ley 160 de 1994.

3.3 Normativa aplicable, competencia de la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas y Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad.

3.3.1 Normativa aplicable que minimiza las cargas de requisitos a los aspirantes.

En aras de cumplir la orden de la Corte Constitucional emitida al INCODER o quien haga sus veces mediante la sentencia SU 426 de 2016, en este caso la Agencia Nacional de Tierras, se deberá evaluar los requisitos propios de la reforma agraria establecidos en la Ley 160 de 1994, con el fin de que no se imponga una carga a los ocupantes históricos que no puedan cumplir por negligencia y corrupción estatal, para lo cual, esta Agencia considera que con la expedición del Decreto Ley 902 de 2017, "*Por el cual se adoptan medidas para facilitar la implementación de la Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo Final en materia de tierras, específicamente el procedimiento para el acceso y formalización y el Fondo de Tierras*", este entraría a ser mucho más garantista para los ocupantes históricos al momento de establecer los requisitos para ser sujeto de acceso a tierras, los criterios para la asignación de puntos en el RESO, los cuales, tienen en cuenta variables de vulnerabilidad frente a los peticionarios y finalmente, referente al trámite de su solicitud, esta se realizaría mediante el Procedimiento Único de que trata este Decreto Ley.

Así las cosas, es menester recordar los requisitos exigidos por la Ley 160 de 1994 y sus normas reglamentarias, que en su momento estuvieron vigentes al momento de dictar las ordenes por parte de la Corte Constitucional, al respecto en el numeral 4.5 de las consideraciones y fundamentos de la sentencia SU 426 de 2016 señala lo siguiente:

> *"Además, esta nueva Ley incorporó como* ***requisitos generales para ser sujeto de reforma agraria o adjudicatario:*** *(i) demostrar la explotación de más de dos terceras partes del predio que se pretende adjudicar, el cual, en todo caso, (ii) no podrá ser mayor a una UAF; adicionalmente (iii) se exige acreditar la explotación económica de más de dos terceras partes del predio y atendiendo a la aptitud productiva del terreno definida por el Incora (Incoder); (iv) se exige que el adjudicatario no tenga un patrimonio neto*

Documento Firmado Digitalmente
El presente documento contiene una firma digital válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la ley 527 de 1999.
Agencia Nacional de Tierras

grC2f-BXRwyP-M4ql2-zeC7F-alxB

> *superior a los 1000 salarios mínimos mensuales vigentes; y (v) se advierte que no podrán ser adjudicatarios quienes ya se hayan beneficiado de otro predio rural, ya sea porque son sus propietarios o tienen derecho de posesión".* (énfasis propio).

Además de los requisitos enunciados por la Corte Constitucional en la Sentencia SU 426 de 2016, en la Ley 160 de 1994 también se requieren como requisitos adicionales ser mayor de 16 años de edad; haber ocupado el predio por un mínimo de 5 años; no ser propietario o poseedor a cualquier título de otros predios rurales; no haber enajenado predios adjudicados o si esto se hubiere hecho deben haber trascurrido al menos 15 años desde la primera adjudicación; no estar afectado por alguna prohibición, limitación o inhabilidad legal para ser sujeto de reforma agraria; que su ocupación en el predio baldío no se derive del fraccionamiento de terrenos efectuado por personas que lo hayan tenido indebidamente o que sean inadjudicables; y que los 5 años anteriores a la fecha de solicitud, no se haya tenido la condición de funcionarios, contratistas o miembros de las Juntas o Consejos Directivos de las entidades públicas que integran los diferentes subsistemas del Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino.

Contrario sensu, con la expedición del Decreto Ley 902 de 2017, a comparación de los requisitos anteriormente enunciados, se puede evidenciar la disminución en las exigencias para los Sujetos de Acceso a tierra, por lo que, en procura de darle cabal aplicación a lo ordenado en la sentencia SU 426 de 2016, estos son los que deberían cumplir los beneficiarios de la sentencia:

> *Artículo 4. Sujetos de acceso a tierra y formalización a título gratuito. Son sujetos de acceso a tierra y formalización a título gratuito los campesinos, campesinas, trabajadores, trabajadoras y las asociaciones con vocación agraria o las organizaciones cooperativas del sector solidario con vocación agraria y sin tierra o con tierra insuficiente, así como personas y comunidades que participen en programas de asentamiento y reasentamiento con el fin, entre otros, de proteger el medio ambiente, sustituir cultivos ilícitos y fortalecer la producción alimentaria, priorizando a la población rural victimizada, incluyendo sus asociaciones de víctimas, las mujeres rurales, mujeres cabeza de familia ya la población desplazada, que cumplan concurrentemente los siguientes requisitos:*
>
> *1. No poseer un patrimonio neto que supere los doscientos cincuenta (250) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de participar en el programa de acceso a tierras.*
>
> *2. No ser propietario de predios rurales y/o urbanos, excepto que se trate de predios destinados exclusivamente para vivienda rural o urbana, o que la propiedad que ostente no tenga condiciones físicas o jurídicas para la implementación de un proyecto productivo.*
>
> *3. No haber sido beneficiario de algún programa de tierras, salvo que se demuestre que las extensiones de tierra a las que accedió son inferiores a una UAF.*

Documento Firmado Digitalmente
El presente documento contiene una firma digital válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la ley 527 de 1999.
Agencia Nacional de Tierras

grC2f-BXRwyP-M4ql2-zeC7F-alxB

4. No ser requerido por las autoridades para el cumplimiento o estar cumpliendo una pena privativa intramural de la libertad impuesta mediante sentencia condenatoria en firme, sin perjuicio de los tratamientos penales diferenciados que extingan la acción penal o la ejecución de la pena.

5. No haber sido declarado como ocupante indebido de tierras baldías o fiscales patrimoniales o no estar incurso en un procedimiento de esta naturaleza. En este último caso se suspenderá el ingreso al RESO hasta que finalice el procedimiento no declarando la indebida ocupación.

También serán sujetos de acceso a tierra y formalización a título gratuito quienes además de lo anterior, sean propietarios, poseedores u ocupantes despojados de su predio, y no clasifiquen como sujetos de restitución de tierras de conformidad con el artículo 75 de la Ley 1448 de 2011.

Es así como, se logra evidenciar un aligeramiento en los requisitos exigidos a los ocupantes históricos aplicando el Decreto Ley 902 de 2017 en comparación de los requisitos subjetivos y objetivos exigidos por la Ley 160 de 1994. También es importante mencionar los criterios para la asignación de puntaje en el RESO, cuyo Registro de Sujetos de Ordenamiento, es el instrumento de planeación y ejecución gradual de la política pública de acceso y formalización de tierras de forma progresiva utilizado por la Agencia Nacional de Tierras, tal y como lo establece el artículo 14, los criterios serán los siguientes:

Artículo 14. Criterios para la asignación de puntos para el RESO. El Registro Único de Solicitantes de Tierras se organizará mediante un sistema de calificación que estará sometido a las siguientes variables:

a) Condiciones socioeconómicas y las necesidades básicas insatisfechas del solicitante y su núcleo familiar.
b) ***Cuando las solicitantes sean mujeres campesinas.***
c) Número de personas que dependen económicamente de los ingresos del núcleo familiar, la presencia de sujetos de especial protección y la condición de cabeza de familia.
d) ***Ser víctima del conflicto armado, en calidad de población resistente en el territorio o como víctimas de desplazamiento forzado que no hayan sido beneficiarias de las políticas de atención y reparación integral a víctimas o del proceso de restitución.***
e) Personas beneficiarias de la política de restitución, segundos ocupantes que hayan recibido compensación o alguna medida de atención o víctimas de desplazamiento que hayan recibido atención y reparación en forma de acceso a tierra.
f) Campesinos que se encuentren en predios al interior de resguardos o reservas constituidas por el INCORA que estén pendientes de conversión a resguardos y aquellos que en desarrollo de procesos de resolución amistosa de conflictos hayan llegado a acuerdos con las comunidades indígenas, según conste en actas debidamente suscritas por las partes.
g) Personas que hacen parte de programas de reubicación y reasentamiento con el fin de proteger el medio ambiente, sustituir cultivos de uso ilícito y fortalecer la producción alimentaria.
h) Experiencia en actividades productivas agropecuarias.

Documento Firmado Digitalmente
El presente documento contiene una firma digital válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la ley 527 de 1999.

grC2f-BXRwyP-M4ql2-zeC7F-alxB

> *i) Pertenencia a asociaciones campesinas cooperativas o de carácter solidario cuyo objeto sea la producción agropecuaria, la promoción de la economía campesina, o la defensa del ambiente, con presencia en el municipio o la región.*
> *j)* ***Residencia previa o actual en el municipio o región.***
> *k) Jóvenes con formación en ciencias o técnicas agropecuarias o ambientales."* (énfasis propio).

Por otra parte, es relevante también decir que para el cálculo de la Unidad Agrícola Familiar en la Ley 160 de 1994, se realiza mediante la metodología de las Zonas Relativamente Homogéneas establecidas en la Resolución 041 de 1994, mientras que, el cálculo de la Unidad Agrícola Familiar establecida en el Decreto Ley 902 de 2017, se hará mediante la metodología predial, permitiendo la obtención de ingresos a los beneficiarios de 2 a 2,5 salarios mínimos mensuales legales vigentes con la implementación de su proyecto productivo.

Adicionalmente, es necesario traer a colación el artículo 82 del Decreto Ley 902 de 2017, en el que expresamente se deroga los incisos 1 y 2 del artículo 69 de la Ley 160 de 1994, en el cual se establecen los requisitos de la ocupación previa en predio por 5 años y la explotación al menos de las 2/3 partes del predio, para darle paso a los requisitos de sujetos de acceso a tierra a título gratuito y parcialmente gratuito de que trata el Decreto Ley 902 de 2017.

> *"Articulo 82. Vigencias y derogatorias. El- presente decreto ley rige a partir de su expedición y deroga: el capítulo 4; el capítulo 5; el capítulo 8; el capítulo 10 artículos 49, 50 Y 51; el capítulo 11 artículo 53, artículo 57 incisos 2 y 3, parágrafo del artículo 63, artículo 64; capítulo 12 artículo 65 inciso 4, artículo 69 incisos 1 y 2, artículo 71, artículo 73, parágrafo 1 del artículo 74 de la ley 160 de 1994; y las demás normas procedimentales que contradigan el contenido del presente Decreto Ley."*

Si bien es cierto que, se evidenció por parte de esta Dirección la ruta a seguir, la cual, impusiera una menor carga frente a los requisitos para el acceso a la tierra a los sujetos de acceso mencionados en la sentencia SU 426 de 2016, también es cierto que, se debe entrar hacer una revisión del procedimiento aplicable para las zonas focalizadas y determinar conforme a las competencias propias establecidas en el Decreto Ley 2363 de 2015, el despacho que tiene la competencia para conocer y resolver de fondo las solicitudes que se realicen con ocasión en zonas previamente focalizadas por el Ministerio de Agricultura y de Desarrollo Rural, para el presente caso se encuentra en la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas.

3.3.2. Competencia de la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas y Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad en municipios focalizados.

Con el fin de esclarecer si la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas es competente para conocer de los municipios que se encuentren focalizados por parte de Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, lo primero que se debe revisar es el concepto del Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad y como este debe ser desarrollado por la Agencia Nacional de Tierras previa observancia de los lineamientos y metodología establecida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo

Documento Firmado Digitalmente
El presente documento contiene una firma digital válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la ley 527 de 1999.
grC2f-BXRwyP-M4ql2-zeC7F-alxB

Rural.

Así pues, el ordenamiento productivo y social de la propiedad rural es la política pública del Gobierno Nacional para transformar el campo colombiano, y debe ser el consecuencia de un proceso de planificación participativo y multisectorial de carácter técnico, administrativo y político, el cual, está encaminado a contribuir en la armonización de la gestión de los usos agropecuarios y la tenencia de la tierra rural, con el fin de que se mejore o mantenga un adecuado equilibrio entre la producción agropecuaria (agrícola, pecuaria, forestal, acuícola y pesquera), el uso eficiente del suelo, la distribución equitativa y seguridad jurídica de la tenencia de la tierra, la competitividad y la sostenibilidad social, ambiental y económica, de manera articulada con los instrumentos del ordenamiento territorial y desarrollo rural existentes en el territorio.

Que dentro de la política pública establecida, se encuentra un componente llamado Ordenamiento social de la propiedad, cuyo proceso versa en la planificación y gestión para ordenar la ocupación y el uso de las tierras en la ruralidad, así como, la administración de tierras de la Nación, promoviendo el acceso progresivo a la propiedad y a otras formas de tenencia, a la *distribución equitativa de la tierra*, a la *seguridad jurídica en la tenencia de la tierra*, a la planificación, gestión y financiación del suelo rural, a un mercado de tierras monitoreado y efectivamente trasparente, con miras de cumplir la función social y ecológica de la propiedad, así contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de la población rural.

Es así como, el ordenamiento social de la propiedad implica rediseñar la atención de necesidades de administración y gestión de tierras rurales por parte de la institucionalidad, pues ya no solamente se atenderá exclusivamente las solicitudes de los interesados por demanda, sino que la institucionalidad tendrá un enfoque proactivo dirigido a la oferta de servicios, teniendo como pilar la iniciativa gubernamental para la atención de solicitudes y requerimientos originados en la relación entre la población rural y la tierra.

Así las cosas, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural como promotor del desarrollo rural con enfoque territorial de conformidad con el numeral 4 del artículo 3 del Decreto 1985 de 2013, tendrá dentro de sus funciones la de "*Formular, coordinar, adoptar y hacer seguimiento a la política de desarrollo rural con enfoque territorial, en lo relacionado con el ordenamiento social de la propiedad rural y uso productivo del suelo, capacidades productivas y generación de ingresos, y gestión de bienes públicos rurales*".

Por otra parte, la Unidad de Planificación de Tierras Rurales adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, cuyo objetivo consagrado en el artículo 3 del Decreto 4145 de 2011, será la de "*Orientar la política de gestión del territorio para usos agropecuarios*", en concordancia con el numeral 4 del artículo 5 del mismo Decreto, que establecerá como una de sus funciones el "*Planificar el ordenamiento social de la propiedad de las tierras rurales, definir los criterios y crear los instrumentos requeridos para tal efecto"*, en consecuencia, la UPRA planificará, producirá lineamientos, indicadores y criterios técnicos para la toma de decisiones sobre el ordenamiento social de la propiedad de la tierra rural, el uso eficiente del suelo para fines agropecuarios, la adecuación de tierras, el mercado de tierras rurales, y el seguimiento

Documento Firmado Digitalmente
El presente documento contiene una firma digital válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la ley 527 de 1999.
Agencia Nacional de Tierras

grC2f-BXRwyP-M4ql2-zeC7F-alxB

y evaluación de las políticas públicas en estas materias.

Ahora bien, mediante el Decreto Ley 2363 de 2015 se creó la Agencia Nacional de Tierras, con el objeto de ejecutar la política de ordenamiento social de la propiedad rural formulada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, para lo cual debe gestionar el acceso a la tierra como factor productivo, lograr la seguridad jurídica sobre esta, promover su uso en cumplimiento de la función social de la propiedad, y administrar y disponer de los predios rurales de propiedad de la Nación.

Así pues, teniendo en cuenta lo anterior, como consecuencia de la funciones de cada una de las entidades enunciadas y en concordancia con el ámbito de sus competencias, se llevó a cabo un trabajo mancomunado entre la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios (UPRA) y la Agencia Nacional de Tierras (ANT), con la coordinación del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con el fin de acordar los lineamientos y la metodología para la operación de los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural, los cuales se materializaron mediante las Resolución No. 000129 del 26 de mayo de 2017 "*Por la cual se adoptan los lineamientos para la planificación y gestión territorial por barrido predial masivo de la Agencia Nacional de Tierras y se dictan otras disposiciones*" y la Resolución No. 000130 del 30 de mayo de 2017 "*Por medio de la cual se adopta la metodología de la focalización territorial para la planificación y gestión territorial por barrido predial masivo de la Agencia Nacional de Tierras y se dictan otras disposiciones*", ambas resoluciones expedidas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Por una parte, conforme a la Resolución No. 000129 del 26 de mayo de 2017, los planes de ordenamiento social de la propiedad rural se elaborarán y se ejecutarán en zonas focalizadas por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, así como, en las áreas focalizadas por el catastro multipropósito.

En ese orden, es importante mencionar los criterios para la focalización de municipios contemplados en el artículo 3 de la Resolución No. 000130 del 30 de mayo de 2017, lo cual establece lo siguiente:

> *"Artículo 3. Criterios para la focalización territorial. Para la aplicación de la focalización territorial de las zonas a intervenir aplicando la modalidad de barrido predial y para la focalización territorial para la asignación del SIRA, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:*
>
> *1-Predios que no tengan identificada la matricula inmobiliaria en la base catastral;*
> *2-Predios con falsa tradición identificada en el folio de matrícula inmobiliaria;*
> *3- Predios sin interrelación catastro-registro;*
> *4-Predios con mejoras inscritas en catastro;*
> *5-Predios reportados por la Superintendencia de Notaria y Registro a la Corte Constitucional en cumplimiento de la Sentencia T-488 de 2014;*
> *6-Predios nominados como baldíos en la base catastral;*
> *7-Zonas con potencial productivo; y*
> *8-Rezago institucional."*

Documento Firmado Digitalmente
El presente documento contiene una firma digital válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la ley 527 de 1999.
Agencia Nacional de Tierras

grC2f-BXRwyP-M4ql2-zeC7F-alxB

Así mismo, es menester tener en cuenta las variables para la focalización territorial de política pública, con el fin de poder instaurar el orden de priorización a las zonas focalizadas por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, las cuales tendrán que ser atendidas mediante la modalidad de barrido predial, por lo que se enuncian a continuación:

> *"Articulo 4. Variables para la focalización territorial de política pública. Para establecer el orden de prioridad de las zonas focalizadas que deberán ser atendidas mediante la modalidad de barrido predial, se deben considerar las siguientes variables:*
>
> *1-Porcentajes de mujeres rurales cabeza de hogar que habiten los municipios;*
> *2-Densidad de la población rural de cada municipio;*
> *3-Municipios priorizados por el Catastro Multipropósito;*
> *4-Municipios en los que se ejecuta el programa Colombia Siembra;*
> *5-Municipios en los que se ejecutan Proyectos Estratégicos de Interés Nacional-PINE*
> *6-Municipios en los que se ejecuta el programa de sustitución de cultivos ilícitos;*
> *7-Muncipios con operaciones de desminado humanitario;*
> *8-Zonas de influencia de los distritos de riego y drenaje;*
> *9-Municipios en los que haya Zonas veredales Transitorias de Normalización de que trata el numeral 3.1.4.1 del "Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera";*
> *10-Municipios priorizados para el posconflicto;*
> *11-Las demás que sugiera el Comité Técnico para la focalización territorial de política pública. (…)"*

En razón a lo dispuesto y de acuerdo con las competencias de la Agencia Nacional de Tierras en su artículo 3 del Decreto Ley 2363 de 2015, es propósito de esta Agencia ejecutar la política de ordenamiento social de la propiedad rural formulada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, para lo cual debe gestionar el acceso a la tierra como factor productivo, lograr la seguridad jurídica sobre esta, promover su uso en cumplimiento de la función social de la propiedad, y administrar y disponer de los predios rurales de propiedad de la Nación. Por lo tanto, teniendo en cuenta las Resoluciones 000129 y 000130 de 2017 por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Dirección de Gestión de Ordenamiento Social de la Propiedad de la Agencia Nacional de Tierras por mandato expreso del numeral 2 del artículo 16 del Decreto Ley 2363 de 2015 deberá "*impartir directrices para la elaboración de planes de ordenamiento social de la propiedad rural en zonas donde se hayan realizado intervenciones catastrales bajo la metodología de levantamiento predial del catastro multipropósito de que trata el artículo 104 de la Ley 1753 de 2015*".

Por consiguiente, la Agencia Nacional de Tierras en uso de sus facultades para el caso en concreto, dispuso mediante la Resolución 4375 de 2018 "*por medio de la cual se aprueba el Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural en el municipio de Puerto Gaitán (Meta) y se dictan otras disposiciones*", previa focalización de este municipio por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que se establecería el procedimiento para la formulación del plan de ordenamiento social de propiedad para

Documento Firmado Digitalmente
El presente documento contiene una firma digital válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la ley 527 de 1999.
Agencia Nacional de Tierras

grC2f-BXRwyP-M4ql2-zeC7F-alxB

el municipio de Puerto Gaitán en el departamento del Meta, el cual, también hace parte de los 11 municipios focalizados por parte del DNP y el IGAC para la implementación del proyecto piloto del Catastro Multipropósito establecido en el CONPES 3859 de 2016.

Es así como la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas entra a tener competencia en el municipio de Puerto Gaitán ubicado en el departamento del Meta, en virtud del artículo 23 del Decreto Ley 2363 de 2015, pues le corresponderá resolver los procedimientos de acceso a tierras que se adelanten en zonas de barrido predial focalizados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, por lo que, será la encargada de la adjudicación de bienes fiscales patrimoniales, adjudicación de baldíos a personas naturales, asignación del subsidio integral de reforma agraria y en general resolver de las formas alternativas de dotación de tierras que se formulen dentro de las zonas de barrido predial focalizadas.

Aunado a las competencias otorgadas por el Decreto Ley 2363 de 2015, la Resolución 1384 del 05 de octubre 2017 "*Por medio de la cual se imparten orientaciones para la elaboración de planes de ordenamiento social de la propiedad rural en los municipios en los cuales se hayan realizado intervenciones catastrales bajo la metodología de levantamiento predial del catastro multipropósito*", se establece en su artículo 2 que, la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas empezará a ejercer la función que le corresponde de resolver en primera instancia los procedimientos de acceso a tierras que se adelanten en los municipios objeto de las intervenciones catastrales bajo la metodología del levantamiento predial multipropósitos contemplada en el artículo 104 de la Ley 1753 de 2015, entre los cuales se encuentra incluido el municipio de Puerto Gaitán en el departamento del Meta.

No obstante, de conocer por competencia otorgada por la Ley y las resoluciones enunciadas para zonas focalizadas, la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas también tendrá como obligación conocer de los expedientes de titulación de baldíos iniciados por demanda que sean designados por la Dirección de Acceso a Tierras en virtud de que estos se encuentren en los municipios objeto de intervenciones catastrales bajo la metodología de levantamiento predial catastro multipropósito, por lo que la Resolución 1384 del 05 de octubre de 2017 en su artículo 3 dispone lo siguiente:

> *"En virtud de lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 24 del Decreto Ley 2363 de 2015, a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente resolución, ordénese a la Subdirección de Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión remitir a la Dirección de Acceso a Tierras los expedientes de titulación de baldíos iniciados por demanda que se encuentren en los siguientes ocho municipios, en los cuales se están realizando intervenciones catastrales bajo la metodología de levantamiento predial del catastro multipropósito de que trata el artículo 104 de la Ley 1753 de 2015, y en los que se han adelantado las actividades propias de la fase de formulación de planes de ordenamiento social de la propiedad rural: Topaipi (Cundinamarca), Dibulla (Guajira), Puerto Gaitán (Meta) Lebrija (Santander), Puerto Leguizamo (Putumayo), Santa Marta (Magdalena), San Carlos (Antioquia) y Ovejas (Sucre).*

Documento Firmado Digitalmente
El presente documento contiene una firma digital válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la ley 527 de 1999.
Agencia Nacional de Tierras

grC2f-BXRwyP-M4ql2-zeC7F-alxB

> *La Dirección de Acceso a Tierras distribuirá los expedientes remitidos entre sus Subdirecciones o, entre las Unidades de Gestión Territorial por delegación del Director General, según corresponda a la naturaleza de cada caso"*

En atención a lo dispuesto, la Dirección de Acceso a Tierras a través del memorando No. 2018200005571 del 15 de enero de 2018, ordenó que se le entregara a la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas el expediente administrativo relacionado con "El Porvenir", cuya ubicación se encuentra en el municipio de Puerto Gaitán en el departamento del Meta, para que, dentro de las competencias otorgadas por la ley, se adelantarán todas las actuaciones administrativas tendientes a la resolución del caso en concreto. En consecuencia, la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas tendrá plenas facultades para conocer de las solicitudes de adjudicación de predios baldíos ubicados en el municipio de Puerto Gaitán – Meta, por este encontrase focalizado.

Por lo anteriormente expuesto, se puede concluir que, el municipio de Puerto Gaitán en el departamento del Meta, se encuentra dentro de los municipios focalizados por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y que de acuerdo a esto, la Agencia Nacional de Tierras en su pleno uso de sus facultades, siguiendo los lineamientos y metodología del Ministerio, desarrolló el plan de Ordenamiento Social de la Propiedad para el municipio en mención, por lo que, conforme a la ley y la correspondiente delegación de su superior jerárquico, le corresponderá a la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas de conocer todos los procesos que en el ámbito de su competencia se encuentren ubicados en el municipio de Puerto Gaitán en el departamento del Meta, en especial los relacionados a la vereda "El Porvenir".

3.3.3. Aplicación del Procedimiento Único establecido en el Decreto Ley 902 de 2017 para el cumplimiento de las ordenes impartidas en la Sentencia SU 426 de 2016.

Es así, por consiguiente, si el municipio de Puerto Gaitán en el departamento del Meta, al ser un municipio focalizado como se expuso por esta Dirección, será entonces indiscutiblemente el Procedimiento Único que se debe aplicar para dar cumplimiento a las órdenes de la sentencia de la Corte Constitucional, no solo porque este procedimiento del Decreto Ley 902 de 2017 es menos rígido y con un menor tiempo previsto en su trámite para los ocupantes históricos, sino que también, de conformidad con este mismo Decreto Ley, se estableció en su artículo 40 la aplicación del Procedimiento Único en las zonas focalizadas, de la siguiente forma:

> *"Artículo 40. Procedencia del procedimiento único en zonas focalizadas. El Procedimiento Único para implementar los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural, operará de oficio por barrido predial masivo en las zonas focalizadas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y de conformidad con los criterios adoptados por la Agencia Nacional de Tierras para la intervención en el territorio en los términos del Decreto 2363 de 2015, dando prioridad a los territorios destinados para la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), por el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) y las áreas donde existan Zonas de Reserva Campesina, atendiendo los planes*

Documento Firmado Digitalmente
El presente documento contiene una firma digital válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la ley 527 de 1999.
Agencia Nacional de Tierras

grC2f-BXRwyP-M4ql2-zeC7F-alxB

de desarrollo sostenible que se hayan formulado.

La gestión de la Agencia Nacional de Tierras atenderá en todo momento los propósitos de la Reforma Rural Integral en materia de acceso y formalización de tierras. En las zonas focalizadas se aplicará el Procedimiento Único de que trata el presente decreto ley de acuerdo al Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural formulado participativamente en los términos del artículo 45.

Parágrafo. La Agencia Nacional de Tierras identificará cada uno de los predios ubicados en el área focalizada, señalando su número de matrícula inmobiliaria y remitirá a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos competente el acto administrativo que ordena la apertura del Procedimiento Único de ordenamiento social de la propiedad rural en el respectivo municipio para su inscripción."

Así mismo, como se enuncia para la asignación y el reconocimiento de derechos de propiedad, los cuales, se tramitarán conforme al Procedimiento Único, según lo establecido en el artículo 58 del Decreto Ley 902 de 2017:

"Artículo 58. Asuntos a tratar a través del Procedimiento Único. A través del Procedimiento Único se adelantarán los siguientes asuntos:

1. *Asignación y reconocimiento de derechos de propiedad sobre predios administrados o de la Agencia Nacional de Tierras. (…)"*

Es importante también mencionar en este punto, que se está hablando de 27 predios identificados con folios de matricula inmobiliaria los cuales se encuentran en nuestra base de datos de bienes baldios de la Nación. Cuando se hace referencia al conjunto de los predios como el predio denominado "El Porvenir", es a una alución coloquial que es por demás conocida por todos en la región (hecho notorio) y utilizada por los estrados judiciales, incluso por la Honorable Corte Constitucional en la Sentencia SU 426 de 2016, así como en la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, incluso por el Juzgado Promiscuo de Familia de Puerto Lopez (Meta) que concedió el amparo constitucional a los recurrentes.

Por otra parte, la orden cuarta de la Sentencia SU 426 de 2016, determinó la creación de una nueva Mesa de Trabajo Interinstitucional cuyo fin según lo expresa la Corte Constitucional es:

"(…) ***para solucionar la situación del derecho a la tierra y el territorio de la comunidad campesina de El Porvenir, e incorporar los siguientes parámetros para lograr ese cometido.***

La Mesa de trabajo estará integrada por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, la Agencia Nacional de Tierras, la Unidad de Restitución de Tierras, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la Superintendencia de Notariado y Registro, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, y la Policía Nacional, con el fin de que, conjuntamente y en el marco de sus

Documento Firmado Digitalmente
El presente documento contiene una firma digital válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la ley 527 de 1999.
grC2f-BXRwyP-M4ql2-zeC7F-alxB

competencias legales, ***adopten un plan estratégico*** *destinado a que en el término máximo de un (1) año, contado a partir del día siguiente a la notificación de esta providencia, se logre:*

(i) Establecer si en los predios baldíos de que trata la Resolución No. 6423 del 2014 continúa haciendo presencia la empresa ganadera "La Cristalina", ya sea de forma directa o a través de terceros. En caso de así corroborarse, adelantar la recuperación material de dichos bienes. Esta deberá incluir visitas interinstitucionales a las distintas áreas de El Porvenir e informes periódicos que permitan corroborar la eficacia y estabilidad de la entrega.

(ii) Censar a la población ocupante de los terrenos baldíos consignados en la Resolución No. 6423 del 2014 y definir quiénes serían sujetos de reforma agraria, de acuerdo con lo dispuesto en le Ley 160 de 1994.

(iii) Realizar un intercambio de información entre el Incoder y la Unidad de Tierras, de manera que sea posible establecer qué parte de El Porvenir se encuentra en el trámite de restitución, cuál debe ingresar a ese proceso, y cuál seguirá el cauce del trámite administrativo de adjudicación.
(iv) Advertir al Incoder o a quien haga sus veces, acerca de su obligación de evaluar los requisitos de reforma agraria, de manera que no se imponga a los peticionarios una carga que no pueden cumplir por negligencia y corrupción estatal. Es decir, debido a la permisión del Estado a la apropiación de El Porvenir por parte de un actor privado poderoso, en perjuicio de un amplio número de familias campesinas, según los hechos descritos en esta providencia. Bajo esa perspectiva, el Instituto deberá adelantar e impulsar hasta su culminación el proceso de adjudicación de bienes baldíos, de que trata la Ley 160 de 1994 y sus respectivas normas reglamentarias.

(v) De acuerdo con las consideraciones vertidas en la parte motiva de esta providencia acerca de la situación de la 'mujer rural', el Incoder y la Unidad de Tierras deberán definir, adoptar e implementar medidas afirmativas para la población femenina en el marco de sus competencias legales; por ejemplo, que al momento de realizar la titulación, esta se suscriba a nombre de la mujer, o de los dos cónyuges o compañeros permanentes. Para el efecto, deberán tomar en consideración el marco legal definido por la Ley 731 de 2002.

(vi) Que la Unidad de Restitución de Tierras continúe el procedimiento de microfocalización iniciado en torno a los predios de El Porvenir, con el fin de determinar quiénes son los miembros de la población campesina que poseen derechos en el marco específico de la Ley de víctimas y restitución de tierras e impulsar hasta su culminación los procesos judiciales a que haya lugar, para lo cual se solicitará a los órganos de control prestar apoyo inmediato a la Unidad.

(vii) Una vez se hayan cumplido con las labores de identificación, verificación de requisitos y proceso de adjudicación, la Superintendencia de Notariado y Registro deberá velar por la formalización efectiva de las titulaciones." (énfasis propio).

Documento Firmado Digitalmente
El presente documento contiene una firma digital válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la ley 527 de 1999.
Agencia Nacional de Tierras

grC2f-BXRwyP-M4ql2-zeC7F-alxB

En ese sentido la Mesa de Trabajo Interinstitucional realizada el día 15 de mayo de 2019, adoptó la ruta metodológica para el cumplimiento del acceso a tierras de los 27 predios que conforman el predio denominado "El Porvenir", en donde se establece que la ruta jurídica es la aplicación del Procedimiento Único establecido en el Decreto Ley 902 de 2017 y las normas que lo complementan, adicionan, sustituyen o deroguen. Así también se ha manifestado desde los primeros informes de cumplimiento que la ANT ha remitido al Tribunal Superior de Distrito Judicial del Meta en su calidad de despacho de seguimiento al cumplimiento de la sentencia, a la Corte Constitucional y al Procurador Judicial Ambiental y Agrario, en los cuales se presentó la ruta de actuación de acceso a tierra definida para la asignación de derechos y reglamentos de uso dentro del predio El Porvenir.

3.4 Cálculo de la UAF a través de la metodología de UAF predial definida en la Resolución ANT No. 740 de 2017 (Manual Operativo del Procedimiento Único del Decreto Ley 902 de 2017).

El Decreto Ley 902 de 2017, contempla nuevas reglas en materia de administración de baldíos de la Nación, en virtud a que estos son adjudicados con la obligación de establecer en ellos un proyecto productivo para la explotación de dichas extensiones territoriales. Ahora bien, se debe establecer que en virtud de la Resolución expedida por la ANT No. 740 de 2017 (Plan Operativo del Procedimiento Único de Ordenamiento Social de la Propiedad), adicionada por el artículo 10 de la Resolución ANT No. 108 de 2018, en lo que tiene que ver con el cálculo de la Unidad Agrícola Familiar, ésta dispuso que cuando en desarrollo del Procedimiento Único de Ordenamiento Social de la Propiedad contemplado en el Decreto Ley 902 de 2017, quien persiga la adjudicación de un predio baldío conforme lo señalado en dicha normatividad, la Unidad Agrícola Familiar – UAF, será calculada bajo la metodología de UAF predial y no por zona relativamente homogénea como pretenden los accionantes. Por tal motivo, fue la metodología de UAF predial la que se utilizó para el cálculo de la UAF para el predio denominado "El Porvenir".

De tal forma, se estableció que para cada caso puntual (solicitud de adjudicación) se debe establecer un tipo de proyecto productivo a implementarse y con base en ello decretar el cálculo de la UAF, y no por zona relativamente homogénea. Este último aspecto de cálculo de zona relativamente homogénea contenida en la Acuerdo No. 08 de 2016 del Consejo Directivo de la ANT, que a su vez remite a la Resolución No. 041 de 1996, obedecía a la lógica de la colonización no contralada por el Estado, en la cual el campesino llegaba al predio baldío a ejercer la ocupación, se le exigía la explotación directa del predio, y al cabo de unos años tramitaba ante la autoridad de tierras competente que le reconocieran los derechos por la ocupación. En razón a lo anterior, la Unidad Agrícola Familiar calculada a nivel predial, se calcula teniendo en cuenta el proyecto productivo, y se viene adelantando desde hace varios años por vía de autorización de la Ley 160 de 1994, en la cual se definen las extensiones de tierra para implementar allí los proyectos productivos autorizados y de igual forma someter al campesino a la explotación directa del predio, que es el mismo presupuesto consagrado por el Decreto Ley 902 de 2017.

Conforme a lo dicho en el acápite anterior, es dable que en virtud de la facultad conferida por el Decreto Ley 902 de 2017, se procedan a reglamentar aspectos

Documento Firmado Digitalmente
El presente documento contiene una firma digital válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la ley 527 de 1999.
Agencia Nacional de Tierras

grC2f-BXRwyP-M4ql2-zeC7F-alxB

fundamentales y operativos del Proceso Único de Ordenamiento Social de la Propiedad, en lo que respecta al reconocimiento, otorgamiento y asignación de derechos, así como dar aplicación al cálculo de la Unidad Agrícola Familiar bajo la metodología de UAF predial.

Así las cosas, y ya que el presente caso se debe atender bajo la reglamentación contenida en el Procedimiento Único del Decreto Ley 902 de 2017, para darle cumplimiento a la orden cuarta de la Sentencia SU 426 y lo adoptado por la Mesa Interinstitucional creada en la misma orden de la sentencia, la Agencia Nacional de Tierras – ANT, procedió a realizar el cálculo de la UAF predial para el predio de mayor extensión conocido como "El Porvenir" aplicando lo consagrado en la Resolución 2533 de 2018 "Por la cual se adopta la Guía Operativa de cálculo de UAF Predial y se desarrollan las excepciones contempladas en el artículo 26 del Decreto 902 de 2017, que permite la adjudicación de extensiones inferiores a la UAF predial".

En esta guía se hace mención a los conceptos y referencias básicas que se deben tener en cuenta por parte del equipo técnico a la hora de proceder con el cálculo de la UAF, además de promover que en dicho cálculo se respeten y conserven las características y/o condiciones tanto del terreno como de la familia campesina. Esto con el fin de registrar el uso sostenible del suelo, la actividad o el proyecto productivo que se desarrolla y de igual forma el sistema comercial que allí se empela, que al final será el sustento y remuneración para la familia. De esa forma se busca obtener un resultado integral, en donde converjan los aspectos principales del terreno, la actividad que desarrolla y por supuesto los aspectos sociales y del entorno del campesino.

En virtud de lo anterior, y dando aplicación a la guía operativa en comento, encontramos que la Unidad Agrícola Familiar – UAF, se define como;

> *La empresa básica de producción agrícola, pecuaria, acuícola o forestal cuya extensión, conforme a las condiciones agroecológicas de la zona y con tecnología adecuada, permite a la familia remunerar su trabajo y disponer de un excedente capitalizable que coadyuve a la formación de su patrimonio*[3].

En términos generales la UAF se entiende como un instrumento de política pública agropecuaria y de desarrollo rural mediante el cual una familia campesina puede alcanzar los ingresos necesarios para lograr su sostenimiento a través de la explotación de una porción de tierra, la cual es medida en hectáreas (ha). De igual forma, la guía tiene en cuenta que la UAF se utiliza como un instrumento de medición orientado a reconocer las características agrológicas y la capacidad productiva de cada predio, para lo cual se requiere realizar un análisis social, ambiental, técnico y económico frente a la perspectiva de la implementación o mejora de un sistema productivo en particular, que le permita a la familia campesina que explota el predio alcanzar sus ingresos necesarios para lograr su sostenimiento. En ese sentido se deben entender los criterios cualitativos que comprenden el concepto de la UAF, en primer lugar, se exige que los predios sean tan extensos como se requiera para que su

[3] Artículo 38 de la Ley 160 de 1994.

Documento Firmado Digitalmente
El presente documento contiene una firma digital válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la ley 527 de 1999.
Agencia Nacional de Tierras

grC2f-BXRwyP-M4ql2-zeC7F-alxB

beneficiario a través de su trabajo consigna la máxima remuneración posible, y de otro lado que el predio no se extienda más allá de lo que el beneficiario pueda, por regla general, aprovechar de manera directa.

En desarrollo del ejercicio del cálculo de la UAF para el predio "El Porvenir" adoptado por la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas, que es la dependencia que tiene bajo su cargo el presente caso, se procedió a realizar la visita agronómica de manera global sobre el predio de mayor extensión conocido como "El Porvenir", para lo cual se tuvo como resultado el cálculo de cuatro (4) UAF prediales, partiendo de las condiciones agroecológicas y ambientales del predio objeto de estudio. Igualmente, una vez recolectada la información se procedió a verificar las unidades cartográficas de suelos, la capacidad de las mismas, los usos actuales de suelos, los costos de sistemas agropecuarios de la zona y demás factores a tener en cuenta para el cálculo de la UAF (información toda que se encuentra en el informe agronómico respectivo dentro del expediente), no sin antes dejar de mencionar que se tuvo en cuenta la información reportada por la UPRA y las recomendaciones de uso compartidas por el IGAC para dicha zona.

Pues bien, para entrar en materia, y siguiendo los pasos de la guía operativa, hay varios aspectos y/o criterios que se tuvieron en cuenta para el cálculo de la UAF, que a saber son; i) la explotación agropecuaria para la seguridad alimentaria "EASA", ii) la económica del cuidado "EC", iii) infraestructura productiva "IP" y la formulación de un proyecto productivo, aspectos todos que se encuentran detallados en el contenido de la guía operativa[4]. En todo caso, el cálculo de la UAF Predial, se realizó teniendo en cuenta lo previsto en la Ley 160 de 1994, y aplicando los criterios consagrados en los Acuerdos 192 de noviembre 25 y diciembre 29 de 2009, además de las normas que la adicionen, modifiquen o sustituyan, así como el Decreto Ley 902 de 2017. Aun así, siempre se procuró garantizar que el o los proyectos productivos implementados por la familia campesina le reportaran ingresos netos que no sean inferiores a dos (2), ni superiores a dos puntos cinco (2.5) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV).

En tal sentido, y como bien se dijo anteriormente, para el predio "El Porvenir" se realizó el cálculo de cuatro (4) UAF predial tipo. El informe final de fecha agosto de 2020 dispone lo siguiente en cuanto al cálculo de dichas referencias:

> *" (…) De acuerdo a esto, se realizaron 4 cálculos de UAF predial tipo, esto es, dos UAFs para el área útil del predio, que corresponde al uso de suelo Agropecuario y que a su vez se divide en dos, según las Unidades Cartográficas de suelos presentes, así: una UAF para la Unidad Cartográfica AVD y otra UAF para las Unidades Cartográficas RVK y VVC; por otro lado, una UAF para el uso de suelo Forestal Protector-Productor y otra UAF para el uso del suelo Forestal Protector (…)"[5].*

En resumidas cuentas, factores tales como la ubicación del predio, las vías de acceso, el transporte fluvial y costos de mano de obra, así como las vías de comercialización

[4] Resolución 2533 de 2018 "Guía Operativa de cálculo de UAF Predial y otros".
[5] Informe final Predio "El Porvenir", agosto de 2020 por la DAT y SATZF.

Documento Firmado Digitalmente
El presente documento contiene una firma digital válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la ley 527 de 1999.
Agencia Nacional de Tierras

grC2f-BXRwyP-M4ql2-zeC7F-alxB

de los productos convergen entre sí para adoptar el cálculo de la UAF Predial. De tal forma que para el uso de Suelo Agropecuario y Unidad Cartográfica AVD arrojó un resultado de 55 ha + 5984 m2, y la UAF para el uso del Suelo Agropecuario y Unidades Cartográficas RVK y VVC dio como resultado un área de 87 ha + 7577 m2. Además para el uso de suelo Forestal Protector-Productor, la UAF resultó en 55,2588 ha, y para el uso de suelo Forestal Protector la UAF día como resultado un área de 44,2722 ha. Lo anterior teniendo en cuenta la totalidad de extensión del predio, que cuenta con un área aproximada de 25.000 ha, y un área adjudicable aproximada de 15.000 ha. Así las cosas, son esos cuatro los valores que se deben adoptar a la hora de asignar las UAF a los ocupantes, esto siempre y cuando de manera voluntaria entreguen a la Agencia Nacional de Tierras el excedente de área que se está ocupando indebidamente, tal cual lo consagra el artículo 72 de la Ley 160 de 1994.

En consonancia con lo anteriormente descrito, es preciso mencionar que esas dos unidades o referencias de UAF adoptadas a las cuales se hizo referencia en el párrafo precedente, son las que obedecen a los resultados obtenidos del estudio de los certificados de uso del suelo, ya que el predio como bien se sabe y debido a sus caracterisiticas revierte diferentes usos del suelo, además como consecuencia de su gran extensión. En virtud de lo anterior, se calculan ese tipo de UAF predial para las áreas que no tienen ningún tipo de restricción, (diferente a las áreas inadjudicables con restricción de bosque forestal por ejemplo), es decir las de libre disposición, como quiera que sobre esas extensiones de tierra es donde se van a adelantar los procesos de acceso a tierra que la Agencia tiene dispuestos.

De no proceder el recurrente a la entrega voluntaria de las áreas que excedan la UAF Predial asignada de acuerdo a los estudios técnicos realizados por la Agencia Nacional de Tierras, será esta misma autoridad quien en uso de sus facultades legales la que procederá a través de los mecanismos establecidos para ello, con la recuperación material inmediata de dichas áreas. Lo anterior dando aplicación a lo consagrado en el artículo 225 de la ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y de Convivenia) y el numeral 4° del artículo 58 del Decreto Ley 902 de 2107 en armonía con la Ley 160 de 1994 en cuanto a la recuperación material de baldíos indebidamente ocupados, con el propósito de ser destinadas a los programas en favor de la población campesina, para lo cual podrá solicitar el acompañamiento de las autoridades policivas en caso de ser necesario. Proceso que se adelanta a través del procedimiento único establecido en la precitada norma.

Adicionalmente, y en virtud de lo consagrado en la Resolución No. 740 de 2018, modificada por la Resolución No. 12096 de 2019, se prevé que, si el ocupante de manera voluntaria retorna las porciones de terreno indebidamente ocupadas, esto abre la posibilidad de que le sea reconocido un puntaje adicional en el RESO (artículo 26). Situación que se explicó en las variables que asignan puntaje conforme al artículo 14 del Decreto Ley 902 de 2017.

Como soporte de lo anterior, y según lo consagrado en la Sentencia SU 426 de 2016, ésta dispone que *"... al estudiar la constitucionalidad del inciso 9° del artículo 72 de la Ley 160 de 1994, relativo a la nulidad sobre la propiedad por vía de adjudicación de terrenos baldíos que superen la Unidad Agrícola Familiar, a través de la sentencia C-536 de 1997 esta Corporación determinó que, en concordancia con lo establecido en el artículo 64 de la Constitución, el límite frente a la extensión de predios adjudicables no*

Documento Firmado Digitalmente
El presente documento contiene una firma digital válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la ley 527 de 1999.
Agencia Nacional de Tierras

grC2f-BXRwyP-M4ql2-zeC7F-alxB

sólo se torna importante por impedir la concentración de la propiedad, sino también porque, en últimas, redunda en la garantía de mayores posibilidades para beneficiar a más campesinos colombianos con el acceso a la tierra". Aspecto éste que resulta de vital importancia, al encontrarse más que soportado por el máximo Órgano Constitucional que la autoridad de tierras competente, esto es la ANT, no puede entrar a adjudicar terrenos o áreas las cuales han sido producto de acumulación o concentración, sino todo lo contrario, promover las adjudicaciones en las extensiones que determinen las correspondientes autoridades en materia de tierra, es decir las UAF definidas para cada zona o predio.

Por otra parte, las áreas que exceden la Unidad Agricola Familar en los baldios de la Nación si adquieren la connotación de baldios reservados, es así como la Ley 160 de 1994 establece en el artículo 67 inciso 2º lo siguiente:

> "En caso de existir áreas que excedan el tamaño de la Unidad Agrícola Familiar establecidas para las tierras en el municipio o zona a estas áreas se les dará el carácter de baldío reservados, susceptibles de ser adjudicados a otros campesinos."

Ahora bien, la norma trascrita establece que la Unidad Unidad Agrícola Familiar establecidas para las tierras en el municipio o zona, esto es la UAF por Zona Relativamente Homogenea, pero se ha explicado en este apartado porqué para el caso del predio denominado "El Porvenir" la UAF aplicable es la Predial, en aplicación del Decreto Ley 902 de 2017 y el Manual Operativo establecido en la Resolución 740 de 2017 frente al procedimiento único esto por cuanto también se ha explicado *in extenso* que es la norma más beneficiosa y es la ruta jurídica adoptada por la Mesa Interinstitucional en cumplimiento de lo ordenado por la Corte Constitucional en la Sentencia SU 426 de 2016.

3.5 Sobre la recuperación y tenencia material de los predios baldíos que hacen parte del predio de mayor extensión denominado "El Porvenir".

Para el desarrollo del presente acápite, tomaremos como punto de partida, lo mencionado por la Honorable Corte Constitucional en el punto 9.3.1. de la sentencia de unificación tantas veces mencionada, en la que se señaló, respecto al acta de entrega suscrita entre el señor Holman Carranza, a nombre de la ganadería La Cristalina y el INCODER, que fue verificada posteriormente con un sobrevuelo al predio, lo siguiente:

> *"Es claro para la Sala que* ***la suscripción de un acta no puede considerarse equivalente a la entrega material del predio****, especialmente, cuando el propio Instituto encargado de verificar su eficacia aclara que no ha adelantado gestión distinta a un sobrevuelo inicial..."* (énfasis propio).

Es así como el Alto Tribunal, compartiendo el diagnóstico presentado por el Procurador 14 Judicial II Ambiental y Agrario del Meta, Guaviare y Guainía, concluye que:

Documento Firmado Digitalmente
El presente documento contiene una firma digital válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la ley 527 de 1999.
Agencia Nacional de Tierras

grC2f-BXRwyP-M4ql2-zeC7F-alxB

> *"Así las cosas, en lo que tiene que ver con la entrega del predio, la Sala comparte en lo sustancial las observaciones de la Procuraduría Regional citada:* ***la entrega material de El Porvenir no se ha verificado****, y no resulta admisible ni desde la Constitución ni desde el respeto a la Ley que el Incoder cifre sus afirmaciones y conclusiones en la supuesta buena voluntad de los empresarios de La Cristalina, e intente atribuir toda la responsabilidad por los problemas (históricos y actuales) del predio a otras autoridades"* (énfasis propio).

Y sostiene, que la entrega material se torna en una etapa indispensable para que el Estado ejerza un verdadero derecho especial de conservación sobre sus predios, que requiere de una verificación física y del seguimiento adecuado. Así lo señaló el Alto Tribunal acudiendo a un pronunciamiento previo.

> *"7.6. Frente a lo anterior, esta Sala de Revisión estima necesario poner de presente que si bien es la sentencia T-488 de 2014 se dictó en el marco de un caso concreto, de acceso a baldíos mediante una sentencia civil de pertenencia, la relevancia constitucional de la recuperación de los predios baldíos tiene un alcance general, pues, al estar definida como el procedimiento a través del cual se "recuper[a] o restitu[ye] al patrimonio del Estado las tierras baldías adjudicables, las inadjudicables y las demás de propiedad de la Nación, que se encuentren indebidamente ocupadas por los particulares" y tener la finalidad de establecer si sobre los terrenos baldíos previamente clarificados existe ocupación indebida para proceder con su recuperación,* ***se constituye en una etapa esencial para que el Estado ejerza un verdadero derecho especial de conservación, que le permita disponer de los predios para su consecuente adjudicación****.* (énfasis propio).

Así mismo, resalta ese Tribunal, en un aparte de la decisión que hemos citado previamente, que *"[R]esulta entonces imprescindible que la Corte recuerde una vez más que la finalidad de la recuperación de baldíos no se agota en la restitución del patrimonio estatal, sino que persigue la eficacia de los artículos 64 y 65 de la Constitución: los baldíos son el principal instrumento para propiciar el acceso a la tierra y la equidad en el campo (al, respecto, ver sentencias C-595 de 1995 y C-644 de 2012, previamente citadas)"*, teniendo en cuenta que la recuperación efectiva de la tierra por parte del Estado, va de la mano con el derecho efectivo de acceso progresivo a la tierra para la población campesina del país.

Es por esto, que la Agencia Nacional de Tierras – ANT, a través de la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación expidió el 15 de marzo del año 2018 el documento denominado "*Protocolo de Recuperación Material de Baldíos"*, el cual tiene por objeto establecer una ruta para la recuperación material de las tierras baldías de la Nación. De igual forma propende por establecer un procedimiento cuyo fin es recuperar y restituir al patrimonio del Estado las tierras baldías adjudicables, las inadjudicables y las demás de propiedad de la Nación, que se encuentren indebidamente ocupadas por los particulares.

Como sustento de lo anterior, y tal cual lo contempla el mencionado protocolo se tiene que *"mediante memorando del 28 de septiembre de 2016, el Director General de la*

Documento Firmado Digitalmente
El presente documento contiene una firma digital válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la ley 527 de 1999.
Agencia Nacional de Tierras

grC2f-BXRwyP-M4ql2-zeC7F-alxB

Agencia Nacional de Tierras estableció que corresponde a la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación "efectuar todos los actos tendientes a "ordenar, disponer u organizar" los bienes fiscales patrimoniales de la Agencia y ***las Tierras Baldías de la Nación****" de tal forma que, una vez agotado el proceso agrario de recuperación de baldíos por parte de la Subdirección de Gestión Jurídica de Tierras, esto es con la expedición de la constancia de ejecutoria de la Resolución que pone fin al proceso, en virtud del principio de legalidad, cesa su competencia, correspondiéndole la administración de baldíos a la Dirección de Acceso a Tierras y su respectiva Subdirección y dentro de los actos de administración de estos,* ***proceder a la "ejecución de los resuelto" en el proceso de recuperación que no es más que la recuperación material del predio****"* (énfasis propio). El procedimiento al cual se hace referencia puede ser adelantado de manera oficiosa, a solicitud de los procuradores agrarios, de cualquier entidad pública que manifieste tener interés o bien sea de las comunidades u organizaciones campesinas o de cualquier persona natural y jurídica, las cuales podrán radicar la solicitud en la ANT bajo cualquier medio (físico, verbal, digital).

Es importante hacer la claridad respecto de la directriz impartida por el entonces director (año 2018 en el cual se profirió el protocolo) de la ANT, en cuanto al procedimiento de recuperación material de baldíos. Al respecto se dijo que el procedimiento en comento se dividía en dos etapas, que a saber son: i) recuperación por la vía administrativa del baldío indebidamente ocupado a cargo de la Subdirección de Procesos Agrarios, y ii) la recuperación material del baldío indebidamente ocupado a cargo de la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación (en adelante SATN) de la Dirección de Acceso a Tierras, punto este que es precisamente el que nos ocupa.

Lo anterior se materializa al concluirse que *"el proceso de recuperación va dirigido a recuperar "predios baldíos de la nación, de tal forma que, una vez ordenada su recuperación en virtud de agotamiento del proceso administrativo agrario y encontrándose debidamente ejecutada la respectiva resolución (para el caso que nos compete la Resolución N° 6423 de 2014), es pertinente proceder a la "ejecución de los resuelto en los procedimientos agrarios"*. Así las cosas, se desprenden del proceso dos actividades que se complementan entre ellas, la del trámite del proceso agrario y la que tiene que ver con la recuperación material propiamente dicha del predio.

Ahora bien, el procedimiento como tal contempla y hace mención al carácter ejecutorio que tienen los actos de recuperación y deslinde, el cual se encuentra en el artículo 2.14.19.3.3 del Decreto Único del Sector Agropecuario No. 1071 de 2015. En esta normatividad, se consagra que una vez esté en firme una actuación administrativa de recuperación de baldío indebidamente ocupado y de desline o cuando se trata de una revocatoria directa de adjudicación de baldios que revierte al dominio de la nación nuevamente, como es el caso bajo estudio, se procederá por parte de la autoridad competente en materia de tierras (ANT), por sí mismo o con colaboración de las autoridades policivas a que se proceda con la actuación de recuperar materialemente el predio. En caso dado de que el ocupante se negare a restituir el inmueble ocupado, el Incoder hoy ANT, solicitará el apoyo de la Policía Nacional, y en un término no superior a diez (10) días se llevará a cabo la diligencia. Lo anterior actuación se complementa con lo estipulado en el Código Nacional de Policía y de Convivenia (Ley 1801 de 2016) en su artículo 225 que reza;

Documento Firmado Digitalmente
El presente documento contiene una firma digital válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la ley 527 de 1999.

grC2f-BXRwyP-M4ql2-zeC7F-alxB

> *"En los procesos administrativos que adelante la Agencia Nacional de Tierras, o quien haga sus veces, encaminados a la recuperación de bienes baldíos y bienes fiscales patrimoniales, así como en aquellos que concluyan con la orden de restitución administrativa de bienes a víctimas o beneficiarios de programas de la Agencia, la ejecución del acto administrativo correspondiente será efectuada por la autoridad de Policía dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la solicitud de la Agencia Nacional de Tierras, una vez el acto se encuentre ejecutoriado y en firme."*

Dicho lo anterior, se hará mención a las dos rutas que se identifican para proceder con la recuperación material de baldíos, proceso que adelanta como bien se dijo anteriormente la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación de la Dirección de Acceso a Tierras de la ANT. No se explicará el detalle de dichas actuaciones en vista de que las mismas se encuentran en el Protocolo de Recuperación Material de Baldíos anteriormente enunciado.

Ruta 1. Ejecución del acto de la administración que declaró la indebida ocupación del baldío.

Después de que el proceso agrario administrativo de recuperación haya culminado y la resolución que declaró la indebida ocupación esté en firme o para el caso en concreto bajo análisis la Revocatoria Directa mediante la Resolución N° 6423 de 2014, la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación, avoque conocimiento del caso y pueda; i) mediante oficio dirigido a los ocupantes establecer lugar, fecha y hora en la cual se definirá la actuación y/o diligencia de entrega voluntaria del predio. Y ii) igualmente mediante oficio dirigido a los ocupantes, informarles que toda vez que no han manifestado voluntad en entregar el predio a la ANT, esto es haciendo caso omiso a la orden proferida, se iniciarán las acciones tendientes a la recuperación material del predio.

Es preciso mencionar y aclarar en este punto, que con la Resolución de revocatoria mencioanda en el párrafo anterior, la cual ordenaba la recuperación material del baldío, no era necesario que se diera inicio a un nuevo procedimiento agrario de recuperación de baldío indebidamente ocupado. Mas aún cuando se contempla y es dable ejecutar directamente las ordenes impartidas en la revocatoria en conjunto con lo dispuesto en la resolución que niega la adjudicación del baldío. En consecuencia, se reitera que la ruta jurídica aplicable para proceder con la recuperación material del predio, es la orden impartida y consagrada en la resolución de revocatoria N° 6423 de 2014, y por tanto, no habría necesidad de iniciar un proceso agrarío de recuperación de baldío propiamente dicho.

Ruta 2. Ejercicio de las acciones de protección de bienes inmuebles contenidas en el Código de Policía.

En lo que tiene que ver con esta ruta para la recuperación material de un baldío, se deberá por parte de la SATN remitir un oficio al Inspector de Policía competente, para que se de aplicación a lo estipulado en el artículo 223 y 225 del Código Nacional de Policía y de Convivencia, a fin de que se detenga la perturbación por ocupación del predio baldío. Posteriormente, y ya ejecutoriada la decisión que contenga la orden de policía, será ésta misma autoridad quien en un término máximo de cinco (5) días

Documento Firmado Digitalmente
El presente documento contiene una firma digital válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la ley 527 de 1999.
Agencia Nacional de Tierras

grC2f-BXRwyP-M4ql2-zeC7F-alxB

deberá definir la fecha, hora y lugar para que se lleve a cabo la diligencia de restitución de bien baldío. Será deber de la SATN de la ANT, comunicar a todas las entidades sobre el procedimiento a llevarse a cabo, a fin de garantizar y salvaguardar el debido proceso y los derechos que le asisten a los ocupantes.

De acuerdo a lo anterior, se deja plasmada la posibilidad de que los ocupantes de manera voluntaria, restituyan el predio a la Agencia Nacional de Tierras, so pena de tener que interceder con el acompasamiento de las autoridades policivas. De igual forma, y en virtud de lo que se ha dicho referente a la asignación de la UAF para los ocupantes, cabe la posibilidad de que en virtud de un acuerdo o un compromiso de entrega volutaria se les pueda permitir suscribir un acuerdo de regularización, tal cual lo prevé el parágrafo primero del artículo 5° del Decreto Ley 902 de 2017, para que de conformidad con dicha prerrogativa se les permita seguir con la explotación del predio, pero únicamente en la extensión definida por la ANT en el marco de la metodología de UAF predial de la cual se habló en el acapité precedente, situación que será definida y abordada con posterioridad a la decisión que aquí se está adoptando, es decir, una vez los ocupantes realicen la entrega del excedente de tierra, de acuerdo a los valores determinados en virtud de la UAF Predial.

Por todas las consideraciones anteriormente expuestas en cada uno de los acápites, se procederá a confirmar la decisión de la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas en negar la solicitudes de adjudicación presentada por las siguientes personas: CAMILO ANDRÉS PRIETO ROCHA, FREDY RODRíGUEZ TRIANA, ALBERTO FERNANDO ZORNOSA MANRIQUE, MARIA NINFA MONTENEGRO MORA, JOSÉ ORLANDO CARAVALI RIVERA, ALVARO ROPERO, JULIO HUMBERTO PRIETO BRIÑEZ, PEDRO PABLO LESMES NOVOA, MARÍA CONCEPCIÓN POVEDA MURCIA, BERNARDO FIGUEROA CASTRILLÓN, BARNEY SORZA GUZMÁN, LIBIA BARAHONA RIVEROS, MARTHA YANETH HERNANDEZ MEDINA, NORA BENÍTEZ, LUIS ILVAR PULIDO PINILLA, ALBA GEORGINA SALGADO ROJAS, en virtud que el procedimiento aplicable para el acceso a tierras para el predio denominado "El Porvenir" es el establecido en el Decreto Ley 902 de 2017 y las normas que lo complementan, adicionan, sustituyen o deroguen, debido a que es más beneficioso para los sujetos de reforma agraria o sujetos de ordenamiento de la propiedad, asímismo, es la ruta jurídica adoptada por la Mesa Interinstitucional a la luz de lo ordenado por la Corte Constitucional en la Sentencia SU 426 de 2016.

En mérito de lo expuesto, la Dirección de Acceso a Tierras,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión tomada por la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas frente a las 16 solicitudes de adjudicación de predios baldíos de la nación presentada por: CAMILO ANDRÉS PRIETO ROCHA, FREDY RODRíGUEZ TRIANA, ALBERTO FERNANDO ZORNOSA MANRIQUE, MARIA NINFA MONTENEGRO MORA, JOSÉ ORLANDO CARAVALI RIVERA, ALVARO ROPERO, JULIO HUMBERTO PRIETO BRIÑEZ, PEDRO PABLO LESMES NOVOA, MARÍA CONCEPCIÓN POVEDA MURCIA, BERNARDO FIGUEROA CASTRILLÓN, BARNEY SORZA GUZMÁN, LIBIA BARAHONA RIVEROS, MARTHA YANETH HERNANDEZ MEDINA, NORA BENÍTEZ, LUIS ILVAR PULIDO PINILLA, ALBA GEORGINA SALGADO ROJAS, a través de las Resoluciones No. No. 6913, 6914, 6915, 6916, 6917, 6918, 6919, 6920, 6921, 6922,

Documento Firmado Digitalmente
El presente documento contiene una firma digital válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la ley 527 de 1999.
Agencia Nacional de Tierras

grC2f-BXRwyP-M4ql2-zeC7F-alxB

6923, 6924, 6925, 6926, 6927, 6928 del 13 de agosto de 2020, por las razones expuestas en la parte considerativa de este acto administrativo en cumplimiento de la Sentencia SU 426 de 2016 de la Corte Constitucional, en negar dichas solicitudes, se confirma la parte resolutiva de las resoluciones objeto de los recursos en lo que no sea contrario en lo aquí dispuesto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Los solicitantes podrán hacer parte del Procedimiento Único para el acceso a la tierra definido en el Decreto Ley 902 de 2017 y las normas que lo complementan, adicionan, sustituyen o deroguen conforme a la ruta adoptada el día 15 de mayo de 2019 por la Mesa Interinstitucional en cumplimiento de las ordenes impartidas por la Sentencia SU 426 de 2016 de la Corte Constitucional y definida en la Resolución No. 5776 de 2018.

PARAGRAFO: Para que su situación sea definida en el ingreso al RESO deberán hacer entrega voluntaria de las áreas de terreno baldios que ocupan que son superiores a la Unidad Agricola Familiar Predial definida para el predio denominado "El Porvenir", en cada caso concreto de los 16 recurrentes.

ARTÍCULO TERCERO: La Subdirección de Administración de Tierras de la Nación iniciará los procedimientos para realizar los acuerdos de entrega voluntaria por parte de los 16 solicitantes que excedan la Unidad Agricola Familiar Predial definida para el predio denominado "El Porvenir" en cada caso particular, que permita recuperar gradualmente las áreas de terreno las cuales se informarán a la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas para adelantar el procedimiento único de asignación de derechos conforme a la ruta jurídica del Decreto Ley 902 de 2017 y adoptada por la Mesa Interinstitucional el día 15 de mayo de 2019 en cumplimiento de las órdenes impartidas por la Sentencia SU 426 de 2016 de la Corte Constitucional.

En caso que las personas no accedan a la entrega voluntaria de las áreas de terrenos que exceden la Unidad Agricola Familiar Predial en cada caso particular, la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación iniciará los procedimientos de recuperación material conforme al protocolo de recuperación de baldios y remitirá la información a la oficina misional correspondiente dentro de la Agencia Nacional de Tierras de aquellos que no accedieron a la entrega de los baldios, para que incie los trámites de ocupación indebida de tierras baldías de la nación como trámite que sancionaría a los posibles infractores para que no puedan ser parte de los procesos de acceso a tierras, asímismo, desplegará todas las acciones tendientes a recuperar materialmente los terrenos baldios en virtud de la Resolución No. 6423 de 2014 para darle cumplimiento a las órdenes impartidas por la Sentencia SU 426 de 2016 de la Corte Constitucional.

ARTÍCULO CUARTO: La Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas, continuará con los trámites para el acceso a la tierra conforme a la ruta jurídica establecida en el Decreto Ley 902 de 2017 y adoptada por la Mesa Interinstitucional el día 15 de mayo de 2019 en cumplimiento de las ordenes impartidas por la Sentencia SU 426 de 2016 de la Corte Constitucional, en las áreas que la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación informe ya fueron recuperadas y dispuestas para el procedimiento de asignación de derechos.

Documento Firmado Digitalmente
El presente documento contiene una firma digital válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la ley 527 de 1999.
Agencia Nacional de Tierras

grC2f-BXRwyP-M4ql2-zeC7F-alxB

"Por la cual se resuelven los recursos de apelación interpuesto en contra de las Resoluciones No. 6913, 6914, 6915, 6916, 6917, 6918, 6919, 6920, 6921, 6922, 6923, 6924, 6925, 6926, 6927, 6928 del 13 de agosto de 2020 expedidas por la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas de la Agencia Nacional de Tierras."

ARTÍCULO QUINTO: Devuelvase a la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas los 16 expedientes correspondiente a las solicitudes resueltas en el presente recurso, para que hagan parte de los trámites correspondientes en el acceso a la tierra del predio denominado "El Porvenir" conforme a las consideraciones expuestas y la ruta adoptada por la Mesa Interinstitucional el día 15 de mayo de 2019 en cumplimiento de las ordenes impartidas por la Sentencia SU 426 de 2016 de la Corte Constitucional.

ARTÍCULO SEXTO: Comunicar el presente acto administrativo a la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación y a la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas para que cumplan lo dispuesto en este acto administrativo de acuerdo a sus competencias y funciones.

ARTÍCULO SEPTIMO: Informar de la decisión tomada en este acto administrativo a la Mesa Interinstitucional creada mediante la Sentencia SU 426 de 2016 de la Corte Constitucional, para su conocimiento.

ARTÍCULO OCTAVO: Notificar el presente acto administrativo a cada uno de los 16 recurrentes y al Procurador Ambiental y Agrario del Meta.

Dada en Bogotá, D. C., en la fecha 2020-12-21 15:09

COMUNIQUESE, NOTIFÍQUESE, INFORMESE Y CÚMPLASE

JUAN MANUEL NOGUERA MARTÍNEZ
DIRECTOR DE ACCESO A TIERRAS

Proyectó: Antonio Guerra
Felipe Rueda
Johanna Castro
Miguel Galindez
Revisó: Ernesto Miranda

Documento Firmado Digitalmente
El presente documento contiene una firma digital válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la ley 527 de 1999.
Agencia Nacional de Tierras

grC2f-BXRwyP-M4ql2-zeC7F-alxB